



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2020 DIC 15 PM 3 23

Asunto: Se promueve controversia constitucional
OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EDMUNDO JACOBO MOLINA, en mi carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral,¹ con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), en ejercicio de la facultad de representación del **Instituto Nacional Electoral**, prevista en el artículo 51, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promuevo controversia constitucional en contra de las autoridades y actos que señalo más adelante.

Con fundamento en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria, se designan como delegados **para intervenir de manera electrónica y tradicional** indistintamente en esta controversia a los Licenciados en Derecho: Gabriel Mendoza Elvira, Francisco Julián Castillo Guzmán, Luis Fernando Mancilla Salazar y Jesús Ángel Salazar Sánchez, con cédulas profesionales números 3042235, 5240682, 4593703 y 9915049, respectivamente. Asimismo, se autoriza solo para oír y recibir documentos, y consultar el expediente, a los Licenciados en Derecho Luis Alberto Villa Mejía, Luis Fernando Alvarado Ramírez, José Humberto López

¹ Lo que acredito con copia certificada del Acuerdo INE/CG40/2020 titulado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. EDMUNDO JACOBO MOLINA COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR UN NUEVO PERIODO DE SEIS AÑOS", aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del INE el 6 de febrero de 2020.


BOGOTÁ, D.C., 12 DE MARZO DE 2020

SEÑOR JUEFE DE SALA

Torres, Ailyn Ibarra Rodríguez, Brenda Leticia Díaz García, Alejandra Arenas Camacho, Cinthia Velázquez Santos y Oscar David Pérez Uribe.

En virtud de lo anterior, solicito se autorice en favor del suscrito y los delegados antes señalados lo siguiente:

a) Con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General Plenario 8/2020, **autorización para acceder y consultar el Expediente Electrónico** de la presente Controversia Constitucional, para lo cual se proporciona la Clave Única de Registro de Población de cada delegado incluyendo al que suscribe:

EDMUNDO JACOBO MOLINA	
GABRIEL MENDOZA ELVIRA	
FRANCISCO JULIÁN CASTILLO GUZMÁN	
LUIS FERNANDO MANCILLA SALAZAR	
JESÚS ÁNGEL SALAZAR SÁNCHEZ	

b) Con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo General Plenario 8/2020, **autorización para recibir notificaciones electrónicas**,² respecto a la presente Controversia Constitucional mientras dure la contingencia con motivo de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y hasta que se regularicen de forma ordinaria las labores en ese Alto Tribunal.

² Artículo 17. Las partes podrán en todo momento, por vía impresa o electrónica, manifestar expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas. El proveído que acuerde favorablemente dicha solicitud se notificará por lista o por oficio según corresponda legalmente; en la inteligencia de que las siguientes determinaciones jurisdiccionales se notificarán a la parte respectiva por vía electrónica en tanto no revoque la referida solicitud.

La referida solicitud únicamente podrá realizarse por las partes o por sus representantes legales, en términos de lo previsto en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

c) Con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo General Plenario 8/2020³, **autorización para acceder al Submódulo de Seguimiento Global** en el que sean visibles los datos de todos los asuntos radicados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que el Instituto Nacional Electoral se le haya reconocido el carácter de parte.

d) Con fundamento en los artículos 34⁴ y 38⁵ del Acuerdo General Plenario 8/2020, **autorización para que los delegados presenten promociones, recursos e incidentes por vía electrónica** con relación al presente sumario.

Cabe señalar que la Clave Única de Registro de Población que se relaciona con cada uno de los delegados y el firmante, se encuentra relacionada con la firma electrónica o e-Firma que proporciona el Sistema de Administración Tributaria, la

³ **Artículo 13.** En el módulo de Expediente electrónico del Sistema Electrónico de la SCJN, las partes podrán solicitar, por conducto de su representante legal, que se autorice a quien designen para acceder a un submódulo de seguimiento global en el que sean visibles los datos de todos los asuntos radicados en la SCJN en los que, a esa entidad, poder u órgano se le haya reconocido el carácter de parte, así como revocar dicha autorización. En el referido submódulo se identificarán los asuntos en los que se hubiere dictado un acuerdo notificado por lista en los cinco días hábiles anteriores. Por dicho submódulo se podrá acceder al módulo de promociones electrónicas del Sistema Electrónico de la SCJN.

⁴ **Artículo 34.** A través del módulo de promociones electrónicas del Sistema Electrónico de la SCJN mediante el uso de su FIREL o de certificado digital de los señalados en el artículo 5 de este Acuerdo General, las partes y los Órganos Auxiliares para el trámite de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad podrán remitir Documentos Electrónicos o digitalizados a los expedientes previamente formados.

En el supuesto de las pruebas documentales que por su formato de presentación no se puedan digitalizar, su versión impresa quedará a la vista de las partes en las instalaciones de la SCJN, lo cual se hará constar en el Expediente electrónico.

Si los datos del expediente al que se pretende remitir una promoción por el módulo de promociones electrónicas del Sistema Electrónico de la SCJN, consistentes en el número de aquél y en el nombre del actor, no coinciden con los registrados, la promoción de que se trate no podrá ser enviada por el módulo respectivo.

En este módulo también podrá solicitarse por el respectivo mecanismo automatizado, la recepción de notificaciones electrónicas o la revocación de dicha solicitud.

⁵ **Artículo 38.** A través del módulo de presentación de recursos del Sistema Electrónico de la SCJN, mediante el uso de su FIREL o certificado digital de los señalados en el artículo 5 de este Acuerdo General, las partes en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad podrán interponer los recursos de reclamación y de queja.

cual otorga los mismos efectos que la FIREL del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico.

No obstante lo anterior, **se señala como domicilio** para recibir notificaciones al ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, C. P. 14610.

I. PROMOCIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), el Instituto Nacional Electoral promueve controversia constitucional en los términos de este escrito. Para efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria, manifiesto lo siguiente:

- i. **La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente.** Ha quedado señalado en el proemio de este escrito.
- ii. **La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.** Demando a las siguientes autoridades:
 - a. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con domicilio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ubicado en avenida Congreso de la Unión 66,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Colonia El Parque, Venustiano Carranza, Código Postal 15960, en la Ciudad de México.

- b. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Palacio Nacional, ubicado en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Cuauhtémoc, Código Postal 06066, en la Ciudad de México.
- iii. **Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios.** En el caso no existe.
- iv. **La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:** El Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (Presupuesto de Egresos 2021), expedido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 27 de noviembre de 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 siguiente, así como su refrendo y promulgación, específicamente por lo que hace a:
 - a. EI ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos), en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por el monto que fija para el Instituto Nacional Electoral por \$26,819,801,594 (Veintiseis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N)
 - b. EI ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) y ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos).

- c. El ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos), en lo relativo a la reducción que consigna para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por un monto de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.);
- d. El ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos: ANEXO 23.8.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos) y ANEXO 23.8.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos); ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021; ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos) y ANEXO 23.8.3.D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021.

Al respecto, resultan aplicables la jurisprudencia y tesis aislada de rubros: **MATERIA ELECTORAL, DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL⁶ y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO A UNA AUTORIDAD, DEPENDENCIA U ÓRGANO DE CARÁCTER ELECTORAL.⁷**

⁶ Época: Novena Época, Registro: 170703, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 125/2007 (9a.), Página: 1280.

⁷ Época: Novena Época, Registro: 178214, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: Ia. 1.11/2005 (9a.), Página: 647.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

e. Artículo Transitorio Vigésimo Primero, en el cual se dispone lo siguiente:

Vigésimo Primero. Los ejecutores de gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.

- v. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados.** El Instituto Nacional Electoral, estima violados los artículos 1°, 5°, 35; 41, base V, apartado A; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. HECHOS O ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL ACTOR Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE

II.A. Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral

- 1 El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó su Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, mediante acuerdo INE/CG236/2020⁸.
- 2 El proyecto de presupuesto para el 2021 del Instituto Nacional Electoral, atendió a los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos; de transparencia y rendición de cuentas, y de disciplina presupuestaria, sin menoscabar el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de sus atribuciones.

⁸ INE/CG236/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

- 3 El proyecto de presupuesto, es producto de un ejercicio profundo en el que se analizaron las necesidades de gasto de los proyectos que ejecuta cada unidad administrativa. Las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral realizaron un análisis a fondo de todas las partidas de gasto de su presupuesto base, con la finalidad de optimizar recursos y canalizarlos de manera eficiente a sus prioridades.
- 4 El Instituto Nacional Electoral, propuso un presupuesto total de \$27,689,801,594 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$7,226,003,636 (siete mil doscientos veintiseis millones tres mil seiscientos treinta y seis pesos M.N.)⁹ representan el monto de financiamiento público federal para los Partidos Políticos Nacionales, así como para gastos de campaña del conjunto de Candidaturas Independientes en el ejercicio 2021, en tanto que \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)¹⁰, son el presupuesto previsto como gasto neto total. Esto es, de esos recursos, más de la tercera parte corresponde a los recursos que reciben los partidos políticos, a través del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus funciones.
- 5 Los \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que sí forman parte del gasto del Instituto Nacional Electoral y se integran de la siguiente manera:

⁹INE/CG190/2020 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2021, de 07 de agosto de 2020.

¹⁰ Acuerdo del Consejo General INE/CG236/2020, de 26 de agosto de 2020.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

	Total	%
Presupuesto base	10,992,906,338	53.71
Cartera Institucional de Proyectos	9,470,891,620	46.28
Organizar Procesos Electorales Locales	33,630,601	0.16
Organizar Proceso Electoral Federal	8,166,910,742	39.92
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión	136,334,235	0.67
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrativa y Cultura de Servicio Público	430,200,280	2.10
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales	259,086,893	1.27
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	33,449,330	0.16
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos	387,435,776	1.89
Coordinar el Sistema Nacional Electoral	21,843,763	0.11
Total	20,463,797,958	100.0

- 6 De esta tabla se desprende que, de los \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que corresponden al Instituto Nacional Electoral, más de 10 mil millones se destinan a gastos permanentes que no obedecen a las prioridades específicas del ejercicio fiscal que corresponde. Al ser gastos asociados a actividades permanentes, existe un mínimo grado de flexibilidad en los conceptos de gasto asociados a ese monto.
- 7 Los otros \$9,470.8 millones de pesos sí responden a proyectos especiales del ejercicio fiscal. La integración del Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal de 2021, considera los recursos para el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos y juntas municipales. Para dichos procesos se contempló un presupuesto de \$8,202,541,343 (ocho mil

doscientos dos mil millones quinientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100M.N.). De ahí que una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), como se describe en esta demanda, tenga un impacto extremadamente sustantivo en los procesos electorales referidos.

- 8 Cabe destacar que en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,¹¹ se señaló precisamente ese ejercicio de austeridad, entre otros argumentos, en los siguientes términos:

Consideraciones para el gasto presupuestal 2021

La integración del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal de 2021, considera los recursos para el Procesos Electoral Federal y Locales 2020-2021, el cual será, sin lugar a dudas, la elección más grande de la historia. Por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la Cámara de Diputados federal. De igual modo, en 2021 habrá 15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil 900 presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos por la vía democrática. De acuerdo con el crecimiento natural del Padrón Electoral, se prevé que en 2021 estén en condiciones de votar prácticamente 95 millones de ciudadanos, lo que implicará la instalación de más de 164,500 casillas así como la contratación de más de 48,000 capacitadores y supervisores electorales que serán los encargados de capacitar a los funcionarios de casilla, auxiliarlos en las tareas de la mesa de votación, entregar la documentación y material electoral a la ciudadanía, así como apoyar en el traslado de paquetes electorales, en el seguimiento de incidentes el día de la jornada electoral y en actividades esenciales para poder contar con resultados confiables.

(...)

Políticas de Gasto 2021

Las Unidades Responsables que integran el Instituto elaboraron el anteproyecto de presupuesto orientado a alcanzar los objetivos institucionales que le fueron encomendados con la Reforma de 2014 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Plan Estratégico 2016-2026 del Instituto, colaborando con ello a la consecución de los objetivos estratégicos, políticas generales, proyectos estratégicos y visión institucional.

El presupuesto del INE para 2021 se integra por tres apartados, el primero se refiere al gasto de operación del Instituto o presupuesto base, el segundo está relacionado a los proyectos específicos y finalmente el tercero relativo al financiamiento público a partidos políticos derivado de un mandato constitucional, el cual determina el cálculo del monto, con el padrón

¹¹ Política de gasto de los poderes legislativo y judicial y de los entes autónomos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

electoral con fecha de corte al 31 julio de 2020 así como la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Política de Gasto en materia de Proyectos Específicos

La Cartera Institucional de Proyectos, se ha adaptado a los requerimientos específicos del Instituto, para 2021, el INE adicional a la operación continua en las diferentes acciones democráticas y generación de la credencial para votar, destinará parte de los recursos que le sean asignados, a la organización y celebración de las elecciones federales y locales de 2021, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos y juntas municipales.

La operación de las casillas únicas en procesos electorales concurrentes ha provocado cambios significativos en la organización electoral, pues a partir de su creación se debe visitar a un 30% más de ciudadanos, así como designar un mayor número de funcionarios en las mesas de casilla (en lugar de cuatro propietarios se requieren siete ciudadanos el día de la jornada electoral). El que se trate de una elección intermedia federal no la hace más sencilla en términos de integración de casilla. Al contrario, es en las elecciones presidenciales cuando hay mayor interés de la ciudadanía, por lo que en 2021 las tareas de campo se deben reforzar.

De igual manera, la capacitación en elecciones concurrentes es más compleja. Se debe capacitar para dos elecciones distintas, tanto para llenado de actas como para el óptimo manejo de la documentación electoral. Las boletas y actas pueden ser diferentes debido a la presencia de partidos locales, candidaturas comunes y candidaturas independientes.

Asimismo, se están considerando los costos que surgieron debido a las nuevas prevenciones sanitarias que el Instituto debe ofrecer a la población que acuda a las urnas, a fin de garantizar condiciones para preservar su salud. Si bien no se sabe el impacto que tendrá la actual pandemia que obligó a establecer una situación de emergencia sanitaria, es probable que para mediados del siguiente año persistan algunas consecuencias y, por lo tanto, se presenta un escenario inédito hasta ahora en materia de salubridad de los recintos de votación.

En este sentido los proyectos estratégicos para el 2021 son:

1. Organizar procesos electorales
2. Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales
3. Fortalecer la equidad y legalidad en el Sistema de Partidos Políticos
4. Coordinar el Sistema Nacional Electoral
5. Fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión
6. Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público
7. Fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales

Política de Gasto en materia de Presupuesto Base de Operación

El presupuesto para el 2021 se elaboró atendiendo a los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos, transparencia, rendición de cuentas y disciplina presupuestal, en el manejo del gasto público, sin menoscabo del cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de las atribuciones encomendadas al Instituto.

La estrategia de presupuestación implicó un análisis del comportamiento histórico de gasto, de las Unidades Responsables de los años 2015 a 2019 y del presupuesto modificado al mes de julio del Ejercicio Fiscal 2020.

Por lo que se requirió que las Unidades Responsables realizaran un análisis a fondo de todas las partidas de gasto de su Presupuesto Base, con la finalidad de optimizar recursos y canalizarlos a sus prioridades.

El Presupuesto Base se integra por el pago de servicios personales, servicios básicos, arrendamientos y materiales y suministros necesarios para la operación diaria en el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Financiamiento Público a Partidos Políticos

Por mandato Constitucional para llevar a cabo las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le confieren, este órgano autónomo determina el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, el cual se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten.

- 9 El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en la información que le hizo llegar el Instituto Nacional Electoral, contenía los siguientes anexos:

- i. El ANEXO 1 GASTO NETO TOTAL, en el que incluyó el gasto neto total enviado por el Instituto Nacional Electoral, que sumado al financiamiento público de los partidos políticos ascendía a un monto de \$27,689,801,594 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)
- ii. El ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL desglosado de la siguiente manera:
 - ANEXO 23.8.1.A LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
 - ANEXO 23.8.1.B LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETO MENSUAL) (pesos)
 - ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)
- ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021
- ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)
- ANEXO 23.8.3.D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021

II.B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos realizadas por la Cámara de Diputados

- 10 El 11 de noviembre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
- 11 Dicho dictamen contempló una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), respecto del proyecto originalmente aprobado por este Instituto Nacional Electoral, el cual se considera que debe verse además con la perspectiva adecuada, ya que hay dos factores que permiten ponderar su impacto. El primero es que, de los más de 27.6 mil millones que el Instituto Nacional Electoral envió como gasto neto total de su presupuesto, \$7,226,003,636 (siete mil doscientos veintiseis millones tres mil seiscientos treinta y seis pesos M.N.) corresponden al financiamiento público de partidos políticos, que constitucionalmente es inmodificable, de acuerdo con el artículo 41, base II, de la Constitución Federal. El segundo es que de los más de 20.4 mil millones de pesos que sí son gasto del Instituto Nacional Electoral, más de 10.9 mil millones corresponden al gasto fijo de la institución.
- 12 Lo anterior implica que se asignaron poco más de 9.4 mil millones de pesos a proyectos especiales para el año 2021. Los proyectos especiales son actividades propias del ejercicio fiscal que corresponde. En el caso de 2021, dentro de los

proyectos especiales se encuentran el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos y juntas municipales que representan \$8,168,910,742 (ocho mil ciento sesenta y ocho millones novecientos diez mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100M.N.) de ese universo. De ahí que una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), como se describe en esta demanda, tenga un impacto extremadamente sustantivo en el proceso electoral referido.

- 13 El 30 de noviembre de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el Presupuesto de Egresos 2021, que entrará en vigor el 1º de enero de 2021, conforme al artículo primero transitorio del mismo, en el que prevalecieron las afectaciones mencionadas.
- 14 En ese orden, es posible comprobar la grave afectación que el PEF 2021 provoca a este Instituto Nacional Electoral, tomando en consideración que en su ANEXO 23 y subsecuentes, se establecieron montos mínimos y máximos de las percepciones ordinarias para quienes laboran en el INE, además de ser incongruentes al señalar puestos específicos dentro de la estructura ocupacional de este Instituto, sin observar ni analizar los niveles de los puestos como originalmente se establecieron en las Bases Generales del Anteproyecto de presupuesto 2021, enviadas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Consejero Presidente del INE¹², mediante oficio INE/PC/117/2019, el 27 de agosto del 2020, para su

¹² Acuerdo del Consejo General INE/CG236/2020

A C U E R D O

(...)

CUARTO. El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral remitirá el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto al titular del Poder Ejecutivo para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2021.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

integración al Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 y su posterior envío a la Cámara de Diputados para su aprobación, como a continuación se observa:

• Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto INE 2021

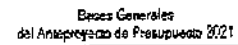


Bases Generales
del Anteproyecto de Presupuesto 2021

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2021							BROGADOR POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS					
CÓDIGO	NÚMERO DE FOLIOS	SUELDO CORRIENTE	COMPENSACIÓN GARANTADA	PERCEPCIONES			COTAS AL SESTE	FONTE	SEGURIDAD	SISTEMA DE ALICERÍA PARA EL SESTE	TOTAL	
				PRIMEIRAS PERCEPCIONES AL SESTE	GRATIFICACIÓN PA DE AÑO	DESPESA						
002	11	6,072,447	2,048,560	0	456,025	0	77,799	32,814	32,228	4,911,488	98,715	98,715
003	1	498,354	1,132,222	0	447,281	4,200	10,641	51,279	15,418	372,851	2,355	2,355
004	1	498,354	1,132,222	0	447,281	4,200	10,641	51,114	15,418	372,850	2,355	2,355
005	11	4,102,332	1,177,132	0	489,673	46,200	10,900	528,674	17,225	4,681,257	46,118	46,118
006	1	377,032	2,237,796	0	444,969	4,200	10,360	41,114	15,268	376,139	5,796	5,796
007	1	377,032	2,237,796	0	444,969	4,200	10,360	40,949	15,268	375,974	5,796	5,796
008	4	1,039,684	1,832,654	0	1,414,320	6,000	30,442	778,740	64,500	1,813,708	32,300	32,300
009	1	327,464	1,832,654	0	360,170	4,200	8,440	46,782	19,128	322,888	2,620	2,620
010	2	654,928	1,832,654	0	714,680	4,200	16,880	94,655	42,264	632,880	12,400	12,400
011	1	324,440	2,237,796	0	366,174	4,200	8,440	39,787	15,428	312,166	6,000	6,000
012	2	648,880	2,237,796	0	732,348	4,200	16,880	79,244	42,404	630,740	12,500	12,500
013	17	4,687,712	2,623,340	0	5,621,242	71,400	104,636	653,037	234,412	5,911,225	48,777	48,777
014	4	6,827,704	3,553,322	0	16,748,322	223,400	339,115	1,859,145	346,828	14,422,832	249,796	249,796
015	18	1,949,328	3,553,322	0	4,913,322	61,000	110,028	577,273	184,827	4,295,458	75,718	75,718
016	17	1,949,328	3,553,322	0	4,913,322	61,000	110,028	577,108	184,827	4,295,293	75,718	75,718
017	4	1,058,164	3,553,322	0	1,175,322	61,000	25,340	1,133,136	62,488	1,085,352	21,134	21,134
018	1	248,608	1,462,792	0	241,281	4,200	7,336	14,739	13,233	239,787	5,291	5,291
019	8	1,688,128	1,462,792	0	3,168,000	33,600	55,160	234,620	39,434	1,917,754	38,779	38,779
020	4	2,488,608	1,462,792	0	2,488,220	42,000	69,080	250,477	124,323	2,560,880	45,739	45,739
021	4	1,479,432	1,462,792	0	1,547,148	31,200	41,480	1,597,684	74,320	1,672,004	35,822	35,822
022	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	40,730	12,423	236,873	4,972	4,972
023	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	40,565	12,423	236,708	4,972	4,972
024	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	40,400	12,423	236,543	4,972	4,972
025	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	40,235	12,423	236,378	4,972	4,972
026	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	40,070	12,423	236,213	4,972	4,972
027	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,905	12,423	236,048	4,972	4,972
028	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,740	12,423	235,883	4,972	4,972
029	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,575	12,423	235,718	4,972	4,972
030	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,410	12,423	235,553	4,972	4,972
031	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,245	12,423	235,388	4,972	4,972
032	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	39,080	12,423	235,223	4,972	4,972
033	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,915	12,423	235,058	4,972	4,972
034	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,750	12,423	234,893	4,972	4,972
035	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,585	12,423	234,728	4,972	4,972
036	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,420	12,423	234,563	4,972	4,972
037	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,255	12,423	234,398	4,972	4,972
038	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	38,090	12,423	234,233	4,972	4,972
039	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,925	12,423	234,068	4,972	4,972
040	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,760	12,423	233,903	4,972	4,972
041	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,595	12,423	233,738	4,972	4,972
042	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,430	12,423	233,573	4,972	4,972
043	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,265	12,423	233,408	4,972	4,972
044	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	37,100	12,423	233,243	4,972	4,972
045	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,935	12,423	233,078	4,972	4,972
046	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,770	12,423	232,913	4,972	4,972
047	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,605	12,423	232,748	4,972	4,972
048	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,440	12,423	232,583	4,972	4,972
049	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,275	12,423	232,418	4,972	4,972
050	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	36,110	12,423	232,253	4,972	4,972
051	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,945	12,423	232,088	4,972	4,972
052	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,780	12,423	231,923	4,972	4,972
053	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,615	12,423	231,758	4,972	4,972
054	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,450	12,423	231,593	4,972	4,972
055	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,285	12,423	231,428	4,972	4,972
056	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	35,120	12,423	231,263	4,972	4,972
057	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,955	12,423	231,098	4,972	4,972
058	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,790	12,423	230,933	4,972	4,972
059	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,625	12,423	230,768	4,972	4,972
060	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,460	12,423	230,603	4,972	4,972
061	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,295	12,423	230,438	4,972	4,972
062	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	34,130	12,423	230,273	4,972	4,972
063	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,965	12,423	230,108	4,972	4,972
064	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,800	12,423	229,943	4,972	4,972
065	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,635	12,423	229,778	4,972	4,972
066	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,470	12,423	229,613	4,972	4,972
067	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,305	12,423	229,448	4,972	4,972
068	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	33,140	12,423	229,283	4,972	4,972
069	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,975	12,423	229,118	4,972	4,972
070	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,810	12,423	228,953	4,972	4,972
071	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,645	12,423	228,788	4,972	4,972
072	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,480	12,423	228,623	4,972	4,972
073	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,315	12,423	228,458	4,972	4,972
074	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	32,150	12,423	228,293	4,972	4,972
075	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,985	12,423	228,128	4,972	4,972
076	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,820	12,423	227,963	4,972	4,972
077	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,655	12,423	227,798	4,972	4,972
078	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,490	12,423	227,633	4,972	4,972
079	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,325	12,423	227,468	4,972	4,972
080	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	31,160	12,423	227,303	4,972	4,972
081	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	30,995	12,423	227,138	4,972	4,972
082	1	248,608	1,347,140	0	241,281	4,200	6,608	30,830	12,423	226,973	4,972	4,972
083	1	248										

ESTRUTURA OCUPACIONAL 2000

PERCEPCIONES								EROSIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y VOUCHERS				
ANEXO	NÚMERO DE PLAZAS	SUELDO CONTRACTADO	COMPENSACIÓN GRATUITA	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	ASIGNACIÓN DE ENTRENADO	RESPONSA	OTROS VOUCHERS	CUOTAS AL SESTE	FOUNSTE	RECURSOS	PORTAFOLIO DE INICIACIÓN AL TRABAJO	TOTAL
J02	5	416.000	1.007.600	0	384.716	10.400	11.000	67.400	20.700	288.414	8.200	2.077.000
J01	5	1.044.000	3.086.900	0	460.376	37.000	34.000	69.700	61.000	609.680	24.500	5.069.250
J06	5	940.000	1.630.700	0	382.800	31.000	15.000	80.100	34.500	430.140	4.000	3.060.150
J03	30	1.076.000	15.265.000	0	1.307.588	196.000	196.000	1.628.410	388.600	1.400.340	148.870	22.401.500
J04	1	100.000	201.800	0	67.076	4.200	3.000	14.100	1.000	34.300	2.000	69.300
J05	20	2.744.000	38.075.100	0	13.540.171	7.000.000	7.000.000	4.000.000	1.000.000	17.000.000	550.000	50.000.000
M02	15	2.025.000	4.250.400	75.000	900.000	60.000	60.000	380.000	104.000	1.100.000	40.000	7.500.000
M03	1	150.000	271.000	60.000	60.000	4.000	22.000	10.000	5.000	7.000	2.000	2.700.000
M04	1	100.000	201.800	60.000	67.076	4.200	3.000	14.100	1.000	34.300	2.000	69.300
M05	2	270.100	376.000	60.000	121.700	6.000	30.000	15.000	10.000	15.000	5.000	60.000
M06	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M07	1	100.000	201.800	60.000	67.076	4.200	3.000	14.100	1.000	34.300	2.000	69.300
M08	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M09	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M10	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M11	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M12	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M13	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M14	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M15	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M16	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M17	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M18	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M19	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
M20	10	1.000.000	20.000.000	100.000	1.000.000	100.000	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000	100.000	10.000.000
S01	200	20.040.700	6.775.000	1.100.000	4.000.000	200.000	200.000	4.073.000	1.000.000	700.000	570.000	30.000.000
S02	5	500.000	1.000.000	100.000	100.000	10.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	600.000
S03	50	5.000.000	10.000.000	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	2.000.000	500.000	1.000.000	100.000	15.000.000
S04	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S05	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S06	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S07	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S08	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S09	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S10	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S11	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S12	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S13	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S14	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S15	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S16	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S17	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S18	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S19	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S20	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S21	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S22	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S23	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S24	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S25	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S26	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S27	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S28	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S29	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S30	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S31	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S32	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S33	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S34	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S35	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S36	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S37	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S38	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S39	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S40	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S41	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S42	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S43	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S44	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S45	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S46	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S47	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S48	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S49	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S50	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S51	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S52	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S53	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S54	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000	200.000	20.000	200.000	20.000	3.000.000
S55	10	1.000.000	2.000.000	200.000	200.000	20.000	20.000					



PERSONAS								EROGACIONES POR CONCEPTO DE DESPESA SOCIAL Y SEGURAS				
NIVEL	NUMERO DE PERSONAS	CUANTO DE EQUIPAMIENTO	COMPENSACION GRATIFICADA	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	OTROS CONCEPTOS DE SUeldo	DESPESA	RENTA NACIONAL	CUENTAS A PAGAR	PRESTAMOS	RENTAS	RENTAS PARA EL RETIRO	TOTAL
2001	56	10,250.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2002	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2003	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2004	2	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2005	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2006	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2007	10	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2008	2	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2009	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2010	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2011	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2012	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2013	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2014	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2015	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2016	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2017	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2018	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2019	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2020	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2021	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2022	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2023	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2024	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2025	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00	40.00	500.00	60,010.00
2026	1	10,750.00	8,400.00	0	11,250.00	0	0	1,600.00	0.00			

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2021

ANAL	NUMERO DE PERSONA	PERCEPCIONES						PROYECCIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS				
		SUELDO COMPACTADO	COMPENSACION GARANTADA	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	SENIORIDAD DE PAGO	DESPESA	RENTA VINCULADA	CUOTAS AL ESTADO	FOUENTE	RENTAS	SISTEMAS DE PREVIDENCIA SOCIAL	TOTAL
2501	73	5178.376	2.055.000	0	1.403.216	0	0	267.000	75.716	41.107	30.000	62.344.000
2502	1	101.848	100.000	0	100.000	0	0	17.519	5.989	750	2.707	504.204
2503	2	218.800	200.000	0	100.000	0	0	35.990	10.978	1.000	4.000	1.102.750
2504	9	967.704	2.100.000	0	365.004	0	0	341.855	89.900	2.700	19.700	5.007.000
2505	3	300.000	1.000.000	0	200.000	0	0	80.000	18.700	2.700	7.300	1.070.000
2506	9	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2507	1	100.000	100.000	0	100.000	0	0	10.000	3.000	700	2.000	200.000
2508	10	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2509	1	100.000	100.000	0	100.000	0	0	10.000	3.000	700	2.000	200.000
2510	2	200.000	400.000	0	200.000	0	0	20.000	6.000	1.400	4.000	400.000
2511	6	600.000	1.200.000	0	600.000	0	0	60.000	18.000	4.200	11.000	1.200.000
2512	2	200.000	400.000	0	200.000	0	0	20.000	6.000	1.400	4.000	400.000
2513	5	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	50.000	15.000	3.500	9.000	1.000.000
2514	7	700.000	1.400.000	0	700.000	0	0	70.000	21.000	4.900	12.600	1.400.000
2515	3	300.000	600.000	0	300.000	0	0	30.000	9.000	2.100	5.400	600.000
2516	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2517	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2518	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2519	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2520	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2521	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2522	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2523	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2524	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2525	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2526	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2527	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2528	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2529	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2530	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2531	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2532	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2533	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2534	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2535	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2536	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2537	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2538	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2539	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2540	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2541	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2542	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2543	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2544	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2545	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2546	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2547	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2548	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2549	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2550	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2551	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2552	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2553	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2554	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2555	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2556	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2557	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2558	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2559	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2560	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2561	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2562	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2563	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2564	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2565	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2566	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2567	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2568	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2569	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2570	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2571	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2572	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2573	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2574	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2575	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2576	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2577	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2578	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	50.000	7.700	20.700	1.007.000
2579	1.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000							



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



Bases Generales
del Anteproyecto de Presupuesto 2021

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 2021

		PERCEPCIONES						PROGRAMAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO				
NIVEL	NÚMERO DE PLAZAS	SUeldo base	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	GRATIFICACIONES FISCAL	DESPENSA	PRIMA VINCULADA	CUOTAS DE SESTE	FONOVOTE	SEGUROS	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	TOTAL
2014	1	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2015	60	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2016	17	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2017	3	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2018	102	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2019	4	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2020	19	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2021	141	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2022	10	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2023	2	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2024	10	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2025	1	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2026	75	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2027	5,405	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2028	1	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2029	1	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2030	30	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
2031	3	104,100	70,000	0	20,000	0	0	10,000	1,000	700	2,000	200,000
TOTAL	73,084	3,545,977.00	1,815,820.00	0	55,875.00	0	0	100,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	4,775,865.00

CONCEPTO	MONTO	DESCRIPCIÓN
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,220,465.00	PRESTACIONES DE RETIRO, PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, OTROS PRESTACIONES, COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES Y LABORES EXTRAORDINARIAS DERIVADAS DEL PROCESO ELECTORAL
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,750.00	PRIMA CUENQUIENAL POR AÑOS DE SERVICIO
OTRAS PRESTACIONES CAPITULO 1000	416,355.00	PROVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES
SUMA	1,737,570.00	

* Precios de mercado actuales

Nota:

Los precios de mercado se incorporan en función de las necesidades y cambios en el calendario de los proyectos que se realicen.

- Presupuesto de Egresos 2021, publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020.¹³

ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANEXO 23.8.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO						

¹³ ANEXO 23.8 del PEF 2021 correspondiente al Instituto Nacional Electoral

CONSEJERO PRESIDENTE/CONSEJEROS ELECTORALES ^{1/}	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
SECRETARIO EJECUTIVO	91,502	101,669	36,516	40,573	128,018	142,242

1/ Miembros permanentes del Consejo General del Instituto de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

ANEXO 23.8.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
1 Consejero Presidente, Consejeros Electorales	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
Secretario Ejecutivo	91,502	101,669	36,516	40,573	128,018	142,242
2 Titular del Órgano Interno de Control, Directores Ejecutivos, Titulares de Unidad Técnica, Titulares de Unidad (OIC) y puestos homólogos	91,477	101,642	36,540	40,601	128,018	142,242
3 Coordinadores del Registro Federal de Electores, Titulares de Unidad Técnica, Vocales Ejecutivos Locales, Directores de Área y puestos homólogos	90,427	100,475	36,689	40,766	127,116	141,240
4 Directores de Área, Coordinadores y puestos homólogos	89,757	99,730	37,359	41,510	127,116	141,240
5 Vocales Secretarios en JL, Vocales Locales, Vocales Ejecutivos y Secretarios Distritales, Subdirectores de Área y puestos homólogos	45,656	69,571	13,952	29,955	59,609	99,526
6 Vocales Distritales, Jefes de Departamento y puestos homólogos	28,432	44,784	9,889	20,092	38,321	64,876
Personal operativo:						
7 Técnico Operativo	10,238	28,289	4,849	14,424	14,888	42,714



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos	7,142		
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL GA1 AL LA2	7,142		13,300

Corresponde a la prestación de vales de fin de año del ejercicio 2020 para el personal técnico operativo, en razón de que es la única que se tiene la absoluta certeza de que lo recibirá.

El resto de las prestaciones que se otorgan, es para el personal que se hace acreedor a las mismas o bien, que pueden ejercer el derecho a su obtención. Por ejemplo, el apoyo que da para la adquisición de lentes, que se otorga cada tres años o el apoyo (becas) para estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Acumular todos los posibles conceptos puede generar una lectura equivocada, ya que se podría interpretar que son percepciones extraordinarias que efectivamente recibe el personal, cuando no es así.

Derivado del punto anterior, la H. Cámara de Diputados, la sociedad en general y los propios funcionarios del Instituto, podrían tener una percepción que no corresponde con la realidad.

ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)

CONSEJERO PRESIDENTE / CONSEJEROS ELECTORALES

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido */	758,409
Percepción bruta anual	2,477,335
a) Sueldos y salarios:	2,008,446
i) Sueldo base	374,979
ii) Compensación garantizada	1,633,467
b) Prestaciones:	468,889
i) Aportaciones a seguridad social	40,153
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	12,956
iii) Prima vacacional	10,416
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	342,455
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,529
vi) Ayuda para despensa	0
vii) Seguro de vida institucional	37,959
viii) Seguro colectivo de retiro	101
ix) Seguro de gastos médicos mayores	23,319
x) Seguro de separación individualizado	0

*_/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de Enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	131,537
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	45,502
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	177,039
a) Sueldos y salarios:	167,371
i) Sueldo base	31,248
ii) Compensación garantizada	136,122
b) Prestaciones:	9,668
i) Aportaciones a seguridad social	3,346
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,080
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	127
iv) Ayuda para despesa	0
v) Seguro de vida institucional	3,163
vi) Seguro colectivo de retiro	8
vii) Seguro de gastos médicos mayores	1,943
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(pesos)

SECRETARIO EJECUTIVO

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,706,905
Impuesto sobre la renta retenido *_/	742,754
Percepción bruta anual	2,449,659
a) Sueldos y salarios:	1,981,159
i) Sueldo base	334,476
ii) Compensación garantizada	1,646,683
b) Prestaciones:	468,500
i) Aportaciones a seguridad social	42,296
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	13,647



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

iii) Prima vacacional	9,291
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	336,721
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,611
vi) Ayuda para despensa	2,819
vii) Seguro de vida institucional	37,444
viii) Seguro colectivo de retiro	107
ix) Seguro de gastos médicos mayores	24,564
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.D REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	130,859
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	44,644
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	175,304
a) Sueldos y salarios:	165,097
i) Sueldo base	27,873
ii) Compensación garantizada	137,224
b) Prestaciones:	10,207
i) Aportaciones a seguridad social	3,525
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,137
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	134
iv) Ayuda para despensa	235
v) Seguro de vida institucional	3,120
vi) Seguro colectivo de retiro	9
vii) Seguro de gastos médicos mayores	2,047
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

15 Tal como se puede apreciar, entre lo que en su momento el Instituto Nacional Electoral en su carácter de órgano constitucional autónomo, envió al Poder Ejecutivo como resultado de un ejercicio presupuestario acorde con sus actividades

y funciones constitucionales y, lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se observan diferencias considerables que van más allá de intercambiar claves presupuestales por nombres de puestos, sino que además, se advierte la eliminación de prestaciones que vulneran los derechos adquiridos de los servidores públicos del Instituto.

16 En otro sentido, del Presupuesto de Egresos de la Federación no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte, de ahí que se insista en la invasión de esferas, es decir no existe dictamen, estudio o análisis alguno por la Cámara de Diputados o alguna de sus comisiones (Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública), que haya razonado la disminución al presupuesto propuesto por este Instituto. Consecuentemente, dicha Cámara no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria sin justificación o motivación, que se lleve a cabo sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que conlleva; ello se traduce en la violación no solo a la autonomía financiera, sino a la independencia decisoria, funcional y económica, sometiendo al Instituto a la necesidad de dejar de cumplir con las obligaciones o, en su caso, verse en la necesidad de gestionar ampliación presupuestal con el gobierno federal, en menoscabo a su autonomía e independencia.

17 Por lo anterior, es patente el menoscabo en la autonomía presupuestaria del Instituto Nacional Electoral y en consecuencia en su funcionamiento, en tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, coarta la independencia de este Instituto en la toma de sus decisiones y correcto funcionamiento conforme al artículo 41, base V, Apartado A, B, C, y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disminuir su presupuesto y



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

determinar las remuneraciones de sus servidores públicos sin justificación alguna, lo que le impide alcanzar los objetivos y proyectos presupuestados para el debido, oportuno y eficaz cumplimiento de sus competencias constitucionales como órgano especializado en materia electoral y garante del Estado democrático, al proteger los derechos políticos de la ciudadanía y asegurar la renovación periódica de los poderes conforme a nuestra Carta Magna.

III. PREMISAS ARGUMENTATIVAS SOBRE LAS QUE DESCANSA LA PRETENSIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INSTITUTO

III.A. Marco teórico sobre los órganos constitucionales autónomos

18. El artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instauro al Instituto Nacional Electoral como un órgano público autónomo. Le otorga también el rango de autoridad en la materia electoral, y lo dota de independencia en sus decisiones y funcionamiento, así como de profesionalismo especializado en su desempeño.
19. Previo a exponer las implicaciones que ello tiene para el caso del Instituto Nacional Electoral, es pertinente señalar algunas de las características generales que, la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte, asigna a los órganos constitucionales autónomos.
20. Esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ubicado la creación de órganos constitucionales autónomos en el contexto de la teoría de la división de poderes. Ha sostenido que la Constitución no suscribe una teoría material de la división de poderes, conforme a la cual cada uno de ellos ejerce, con exclusión de los otros, funciones legislativas, jurisdiccionales o ejecutivas. Así, la Corte ha sostenido que

la división de poderes en México opera conforme a un principio evolutivo, que permite “pesos y contrapesos” en las funciones del Estado.¹⁴

- 21 En ese marco, la Suprema Corte ha señalado que los organismos constitucionales autónomos han surgido como consecuencia de un modelo innovador de ingeniería constitucional, que buscan atender eficazmente un estado de cosas a modificar.¹⁵

¹⁴ INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES COMPATIBLE CON UNA CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE. El principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es útil para controlar las relaciones jurídicas entre los Poderes; no obstante, sus implicaciones normativas no se obtienen mediante la modalidad de interpretación literal de la Norma Fundamental, por resultar insuficiente para capturar la integridad del parámetro de control de la validez a que da lugar. Por ello, en tanto elemento articulador del Estado, es necesario acudir a sus fines como un instrumento de limitación y de ordenación del poder público -tanto negativa, en cuanto lo limita, como positiva, en cuanto genera posibilidades creativas de actuación-, para poder apreciar sus consecuencias normativas. Así, al tratarse de un principio evolutivo, con un contenido flexible, puede adaptarse a cada momento histórico y proyectar su ideal regulativo de pesos y contrapesos a cada arreglo institucional constitucional, toda vez que la arquitectura del poder público no es estática, sino dinámica. Pues bien, el Constituyente Permanente, atento a las necesidades de la sociedad, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introdujo un modelo innovador de ingeniería constitucional para atender un estado de cosas a modificar, a través de la creación de un órgano regulador constitucionalmente autónomo en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión para atender las distorsiones de éste, que de no atenderse sobre la base de criterios científicos y técnicos, impedirían lograr una eficiencia al mismo tiempo que un espacio óptimo para los derechos de libertad de expresión y acceso a la información. En consecuencia, cuando el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción IV, de la Constitución Federal establece que el IFT podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia, debe reconocer a este órgano constitucional que tiene la facultad cuasi legislativa necesaria para su fin institucional, denominada facultad regulatoria, cuyos límites en relación con las facultades de producción normativa de los otros Poderes, por ejemplo del Legislativo, deben determinarse caso por caso, buscando siempre un balance. Sin embargo, cualquier afirmación en tomo a que no puede ejercer una facultad de producción normativa de carácter general, por la única razón de que la facultad legislativa sea monopolio exclusivo del Poder Legislativo debe rechazarse, ya que el órgano regulador tiene asignada en el texto constitucional una facultad regulatoria que debe garantizarse en el margen necesario para cumplir sus fines institucionales a costa de lo que decidan en contrario los otros Poderes, lo que incluye necesariamente la capacidad de emitir reglas generales, abstractas e impersonales, condicionándose la validez competencial de sus actos y normas a que se inserten en el material de la regulación y no se extralimite invadiendo la facultad legislativa del Congreso de la Unión, definida en el artículo 73 constitucional. Así, el principio de división de poderes busca limitar el poder mediante la idea reguladora de pesos y contrapesos, esto es, a través de una cierta idea de balances que impida la concentración del poder, al mismo tiempo que posibilite la generación creativa de competencias públicas para la realización del bien común, balance que debe buscarse progresivamente, para determinar el alcance de las facultades del IFT en cada caso concreto.

[Época: Décima Época, Registro: 2010672, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 45/2015 (10a.), Página: 38].

¹⁵ Controversia constitucional 117/2014, párrafo 307.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Se trata de una evolución de la teoría clásica de la división de poderes, que se encuentra orientada por la necesidad de ejercer una función que, por su especialización e importancia social, requiere autonomía técnica, operativa, política (y, por lo tanto, presupuestal) de otros Poderes.¹⁶

22 La historia del Instituto Nacional Electoral se abordará más adelante, pero vale adelantar que fue justamente la necesidad de un órgano independiente la que dio origen al Instituto Federal Electoral en 1990, pues existía “la convicción de que era necesario crear un ente no subordinado a los poderes constitucionales para garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas”.¹⁷

23 La teoría moderna de la división de poderes, que ha suscrito ese Alto Tribunal en reiteradas ocasiones, tiene tres funciones fundamentales. En primer término, funciona como mecanismo protector de la ciudadanía frente al abuso de otros poderes.¹⁸ En segundo lugar, como un sistema de pesos y contrapesos que evita la consolidación de un poder u órgano que pueda distorsionar el sistema constitucional de competencias y afectar nuestra democracia.¹⁹ En tercer lugar, es un mecanismo de optimización de las funciones del Estado, que permite que las decisiones públicas se tomen por los órganos técnicos mejor preparados para ello.²⁰

¹⁶ Jurisprudencia 20/2007, del Tribunal Pleno, de rubro: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS, NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS, así como jurisprudencia 12/2008 de rubro: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. En el mismo sentido, Miguel Carbonell, Elementos de Derecho Constitucional, Fontamara, p. 103.

¹⁷ Sergio Valls Hernández y Carlos Matute González, Nuevo Derecho Administrativo, Porrúa, p. 335.

¹⁸ La acción de inconstitucionalidad 138/2007 es un claro ejemplo de ello, en tanto concibe a la autonomía como “una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y los propios partidos políticos”.

¹⁹ DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, [Época: Novena Época, Registro: 177980, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 52/2005, Página: 954.]

²⁰ Peter Häberle, El Estado Constitucional, UNAM-IIJ, 2018, p. 196-197.

24 En ese orden de ideas, las funciones de protección de la ciudadanía y sus derechos, contrapeso y optimización de las decisiones del Estado, sólo pueden llevarse a cabo si, conforme a lo establecido por ese Alto Tribunal,²¹ un órgano constitucional autónomo cuenta las siguientes características:

- a. Es creado en el propio texto constitucional;
- b. Tiene relaciones de coordinación, no subordinación, con otros poderes;
- c. Cuenta con autonomía e independencia funcional y financiera, y
- d. Desempeña funciones primarias u originarias del Estado.

25 De hecho, en el dictamen del Senado de la República que antecedió a la reforma constitucional que creó el Instituto Nacional Electoral en 2014 (en sustitución del Instituto Federal Electoral), se hizo referencia a dichas características en los términos siguientes:

En general, se pueden distinguir cuatro ámbitos de autonomía que confluyen para determinar el nivel de independencia general del órgano. Estas son la autonomía política, en tanto el órgano no forma parte de alguno de los tres poderes; la autonomía financiera, que conlleva la capacidad de independencia económica del órgano; la autonomía jurídica, que implica la facultad reglamentaria en el ámbito de su competencia, y la autonomía administrativa, que se refiere a la facultad de organizarse internamente y administrar sus recursos. Asimismo, los niveles de las autonomías pueden más o menos ser limitadas, o bien, totales, lo que determina el nivel general de independencia del órgano.

26 Así, resulta claro que, con el recorte presupuestal realizado de manera arbitraria por la Cámara de Diputados, se vulnera la autonomía financiera, pues se merma la capacidad de independencia económica, como pasa con frecuencia con los Organismos Públicos Locales Electorales de las entidades federativas.

²¹ Véase la jurisprudencia 20/2007, ya citada.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- 27 La autonomía que se menciona en el referido dictamen existe, en virtud que los órganos constitucionales autónomos funcionan en un régimen de cooperación y coordinación en que ejercen control recíproco. En ese régimen, cuentan con garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su autonomía y que les permite salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales. De otra manera, si un poder público interfiere de forma preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo, se violaría el principio de división de poderes.²² Si un poder público puede instruir a un órgano a que tome ciertas decisiones, o impedir que realice sus funciones a través de reducciones a su presupuesto, es claro que su autonomía se vulnera y su esencia orgánica y funcional se desnaturaliza.
- 28 El hecho que los órganos constitucionales autónomos compartan ciertas características, no implica que el ámbito de su autonomía sea idéntico. La Suprema Corte ha expresado que cada órgano constitucional autónomo tiene una esfera competencial propia, que es oponible al resto de los poderes y que puede utilizar al máximo para realizar sus fines.²³
- 29 En relación con lo anterior, la esfera competencial del Instituto Nacional Electoral radica, fundamentalmente, en organizar las elecciones constitucionales, para garantizar el ejercicio del derecho al voto libre, directo y secreto, tutelado en el artículo 35 constitucional, en la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo,

²² GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.

[Época: Décima Época, Registro: 2015478, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Torno I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), Página: 603.]

²³ Véase la jurisprudencia 43/2015, del Pleno de la Corte, de rubro: INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIA PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZARE SUS FINES INSTITUCIONALES.

así como los ejercicios de consulta popular y revocación de mandato cuando así proceda, pero, además, tiene encomendadas otras funciones estatales esenciales, vinculadas con la materia electoral, como son la formación y administración del Registro Federal de Electores, que sirve como base para toda la organización comicial y la expedición de la credencial para votar (medio de identificación oficial - de facto y de iure-),²⁴ la fiscalización permanente de los recursos de los partidos políticos; rectoría del Sistema Nacional de Elecciones, y la administración única de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines político electorales, así como su monitoreo exclusivo, entre otras. A diferencia de las labores de otros órganos constitucionales autónomos, la función del Instituto no está relacionada directamente con la regulación de actores económicos, sino que tiene como finalidad la protección de los derechos políticos de la ciudadanía y asegurar que los procesos de renovación del poder público se lleven a cabo con apego a los principios constitucionales.

- 30 En ese sentido, en función de la manera en la cual se integra el Instituto Nacional Electoral, las atribuciones constitucionales que tiene reconocidas y el conjunto de garantías con las cuales es arropado por la Constitución, es posible coincidir con

²⁴ Véase la Tesis XV/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. AL PERDER VIGENCIA COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, TAMBIÉN LA PIERDE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL.- De la interpretación de los artículos 35, fracciones I y II; 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, inciso b), y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y cuarto transitorio del Decreto expedido el veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, que reforma la Ley General de Población, se desprende que la credencial para votar con fotografía, esencialmente, el documento oficial necesario para ejercer el derecho al voto el cual, además y en forma accesoria, sirve como medio de identificación oficial. Así, dada su naturaleza dual e indisoluble se concluye que, al perder su vigencia como instrumento electoral, también la pierde como documento de identificación oficial.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 55 y 56.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Luigi Ferrajoli en el sentido de que se erige como un órgano de garantía primario,²⁵ que permite (porque esa es su misión primordial), que la contienda por el poder se articule conforme lo establezca el ordenamiento jurídico y sin la existencia de influencias indebidas de quienes concurren en ella o de aquellos que ostenten un interés propio incompatible con el general. La historia legislativa demuestra este aserto: la lucha por la exclusión en la toma de decisiones del proceso electoral de quienes en ella participan o cuentan con un interés personal, en forma tal que no distorsione el aparato democrático.

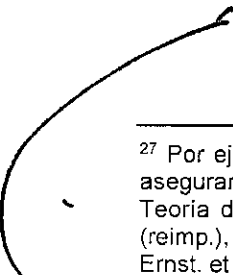
- 31 Se trata, como dice Ferrajoli, que no se incurra en un evidente conflicto de intereses. En este sentido, lo que se pretende con la forma en la que el Instituto Nacional Electoral se encuentra estructurado y la serie de normas que rigen su desempeño, es que las decisiones que hagan posible la función estatal de organizar las elecciones se ajusten a los principios que rigen la materia, lo que implica rechazar la toma de determinaciones por órganos o mediante criterios de tipo político, que minen dicha función. Como en todos los Estados democráticos, hay previsiones constitucionales que limitan el poder del *demos* -y también del *kratos*- y configuran así al Instituto, entre una serie de instituciones políticamente independientes (órganos constitucionales autónomos) que no representan tanto a las personas — ni como individuos ni como ciudadanos de un Estado— sino a ciertos valores o bienes públicos, en el caso, los necesarios para la celebración libre, auténtica y democrática de elecciones para la renovación del poder público, mediante el ejercicio igualmente libre del derecho humano al sufragio.²⁶

²⁵ Ferrajoli, Luigi, *Principio iuris. Teoría del derecho y de la democracia*, trad. esp. de Perfecto Andrés Ibáñez, *et al*, Madrid, Trotta, 2011, v. 2 (*Teoría de la democracia*), p. 185.

²⁶ Innerarity, Daniel, *La democracia en Europa*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2017, pp. 187 y ss.

32 En efecto, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo hacer efectivo el derecho de sufragio de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Dada la naturaleza de los derechos humanos involucrados en la participación política de la ciudadanía, se requiere necesariamente de la organización y procedimientos adecuados que permitan su libre ejercicio, esto es, de un complejo entramado organizacional y procedimental. Así lo reconoce tanto la doctrina²⁷ como la propia Constitución, al establecer las bases para la función estatal de organizar las elecciones, a cargo del Instituto y de los organismos electorales locales (artículo 41, base III), así como mediante el reconocimiento de que los comicios, a fin de renovar un cargo de elección popular, suponen la instauración de una serie de actos y actividades, así como una serie de procedimientos.

33 Es precisamente a través del proceso electoral que se articula la participación política de la ciudadanía en torno al espacio o espacios susceptibles de renovación, se posibilitan las condiciones para que esa participación, pasiva y activa, sea funcional o efectiva, mediante la difusión de las distintas candidaturas y de las respectivas plataformas electorales y se garantiza que los sufragios se traduzcan en cargos representativos mediante la aplicación del sistema electoral correspondiente. En suma, es a través de la acumulación de un conjunto de actos que, al margen de su eficacia individual, sólo adquieren auténtico significado en la medida que alcanzan su finalidad, que no es otra que la concreción del derecho de



²⁷ Por ejemplo, cuando se habla de un concepto amplio de procedimiento que comprende "la realización y aseguramiento de los derechos fundamentales por medio de la organización y el procedimiento". Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales*, 2ª ed., trad. esp. de Carlos Bernal Pulido, Madrid, CEPyC, 2008 (reimp.), p. 419; véase igualmente Hesse, Konrad, "Significado de los derechos fundamentales" en Benda, Ernst. et al., *Manual de Derecho constitucional*, trad. esp. de Antonio López Pina, Madrid, Marcial Pons, IVAP, 1996, pp. 101 y ss.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

sufragio universal, libre, secreto y directo, y con respeto de los principios rectores de la función electoral.

- 34 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido particularmente clara en establecer que la organización, dirección y vigilancia de las elecciones está a cargo de los organismos públicos autónomos electorales, esto es, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, que gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, es decir, dichos organismos tiene a su cargo en forma integral y directa la organización de los comicios, por lo que cualquier intromisión por parte de otros poderes, como lo es el poder legislativo, en dichas funciones, deviene inconstitucional.²⁸
- 35 La garantía o función de control que realiza el Instituto se rige por los mismos principios que la función jurisdiccional, entre otros, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Incluso, la Constitución establece un claro paralelismo entre las condiciones laborales de los Consejeros Electorales y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,²⁹ además de que esta última ya ha reconocido que las condiciones de autonomía aplicable a los órganos jurisdiccionales son trasladables a los órganos

²⁸ Véase la tesis de rubro GEOGRAFÍA ELECTORAL. EL ARTICULO 14 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AL PREVER LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL CONGRESO DEL ESTADO EN LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN III Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2009).

Época: Décima Época, Registro: 159851, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 25/2013 (9a.), Página: 151.

²⁹ Incluso, el texto del artículo 41 constitucional producto de la reforma de 1996, que dota al Instituto Federal Electoral (ahora INE) de la calidad de órgano constitucional autónomo, estableció: "La retribución que perciban el consejero presidente y los consejeros electorales, será igual a la prevista para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

encargados de realizar la función electoral.³⁰ Lo anterior, toda vez que tienen en común los criterios a partir de los cuales deben tomar decisiones (no políticos), aun cuando difieran en su composición, organización y procesos de toma de decisión.

III.B. Origen y función primordial del Instituto dentro de la organización del Estado Mexicano e impacto en la vida democrática nacional.

36 Repasar el origen y la evolución constitucional del Instituto Nacional Electoral, permite delimitar con mayor claridad el alcance de la autonomía, pues permite conocer las razones que la orientaron. La historia del Instituto en las últimas tres décadas revela que los cambios constitucionales relacionados con su marco normativo se han dirigido a incrementar su espacio de autonomía como mecanismo para proteger la certeza, equidad e imparcialidad de los procesos electores en el país. A diferencia de otros órganos constitucionales autónomos, la autonomía del Instituto Nacional Electoral se ha expandido gradualmente y, como consecuencia de esa autonomía, el Constituyente Permanente ha depositado en él más atribuciones.

37 La autonomía del Instituto Nacional Electoral es producto del desarrollo institucional y normativo de nuestro país en la construcción de nuestra democracia a través de elecciones libres, auténticas y periódicas. Durante aproximadamente 70 años (entre 1917 y 1987), hubo una evolución institucional lenta, en la que distintas Comisiones

³⁰ En la acción de inconstitucionalidad 138/2007, ese Tribunal Constitucional señaló que: "...las autoridades que tiene a su cargo la organización de las elecciones, se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme lo establece el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Norma Fundamental, puesto que en ambos casos, la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal, es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales) dada la alta función que les fue encomendada, emitieran sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural."



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

se encargaron de vigilar las elecciones, bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación. Fue hasta 1990, cuando se crea el Instituto Federal Electoral, a través de una específica reforma constitucional, desarrollada legalmente por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contaría con un servicio profesional electoral especializado para la integración de los órganos ejecutivos y técnicos.

38 La importancia de la profesionalización del trabajo del Instituto Federal Electoral fue tal, que en un principio la misma Constitución estableció, como resultado de la reforma de 1990, a aquélla como uno de los principios rectores de la función electoral, junto con la independencia, certeza, legalidad y objetividad.

39 Los dictámenes de las Cámaras de Diputados y Senadores del proceso que antecedió a la reforma constitucional del 6 de abril de 1990 revelan que el objetivo, con la creación del Instituto, era propiciar el avance democrático. De acuerdo con los legisladores, para llegar a ese fin, era necesaria la autonomía del Instituto, así como la especialización y profesionalización de su personal. Los dictámenes en cuestión señalan:

Dictamen Cámara de Diputados

Que para propiciar el avance democrático del país resulta conveniente reformar las normas relativas al régimen electoral federal y la integración y composición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, previstas en la Constitución General de la República.

Que es necesario sustentar nuevas bases para el ejercicio de la función estatal electoral, ya sea de forma directa por los poderes Legislativos y Ejecutivo o a través de un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, debiendo dicha función estatal estar regida por los principios de certeza, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Dictamen Senado de la República

...es importante destacar también que la autonomía será rasgo distintivo del organismo electoral y le permitirá ejercer con capacidad propia sus atribuciones. De esa manera.

estará encargado de velar porque en las elecciones haya certeza, imparcialidad y objetividad.

Que para el logro de los principios rectores de la función estatal es necesario que el organismo cuente, en su caso, con el personal calificado para prestar el servicio electoral profesional.

- 40 El impacto que tuvo la creación del Instituto Federal Electoral en la vida democrática es claro. Cuando el Senado de la República dictaminó la reforma constitucional que dio origen al actual Instituto Nacional Electoral, más de veinte años después de la creación del Instituto Federal Electoral, señaló:

Dictamen Senado de la República del 3 de diciembre de 2013

No cabe duda, que desde la creación del Instituto Federal Electoral contamos con elecciones, más transparentes. El papel que este órgano ha jugado en la consolidación de nuestra democracia ha sido crucial, al dotarse a los procesos electorales de condiciones de legalidad, equidad, certeza y transparencia.

- 41 Pese a que la creación del Instituto Federal Electoral fue un avance significativo, el Instituto Federal Electoral seguía presidido, en una primera etapa de su génesis histórica (hasta 1996), por el Secretario de Gobernación, aunque ya con otros integrantes y requisitos de independencia e imparcialidad. Entre 1990 y 1996 se fueron incorporando consejeros magistrados, primero, y consejeros ciudadanos, después, a las estructuras del entonces Instituto Federal Electoral. A su vez, el Congreso de la Unión le otorgó tres facultades de extrema importancia en la vida democrática nacional: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos, y establecer topes a los gastos de campaña. En 1996, el Congreso desvinculó al Instituto Federal Electoral por completo del Poder Ejecutivo y lo convirtió en órgano



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

constitucional autónomo, con la idea de que el arbitraje diera a todos los contendientes garantías de imparcialidad.³¹

- 42 Nuevamente, la revisión del proceso legislativo que dio origen a dichas reformas revela que la intención de las modificaciones al marco jurídico del Instituto era fortalecer su autonomía. Se materializó entonces la participación ciudadana como mecanismo de reforzamiento de la autonomía y la independencia de la autoridad electoral frente al gobierno, como lo demuestra el dictamen de la Cámara de Senadores que precedió a la reforma constitucional de abril de 1994, en el que se señaló lo siguiente:

Con base en esos antecedentes y con el ánimo de continuar con la evolución de las instituciones electorales mexicanas para afianzar el principio de imparcialidad en la organización y desarrollo de los comicios, los consensos alcanzados por distintos partidos políticos proponen el fortalecimiento de la participación ciudadana en dichas funciones, al tiempo que se replantea la naturaleza e intensidad de la presencia de los partidos políticos en los órganos electorales. Así, se propone que sea la participación ciudadana el conducto para reforzar la autonomía y la independencia de la autoridad electoral frente al gobierno legalmente constituido y a los partidos políticos nacionales. En atención a estas reflexiones, se plantea una reformulación del párrafo octavo del Artículo 41 de la Carta Magna para reiterar la autonomía del organismo público responsable de la función estatal electoral y para señalar específicamente la independencia como principio rector de dicha función.

- 43 La reforma electoral de 1996, impulsada con el apoyo político del Gobierno de la República y los coordinadores parlamentarios de los partidos más representativos también tuvo como finalidad consolidar la autonomía de la autoridad electoral. La exposición de motivos de la iniciativa, permite advertir que fue justamente la necesidad de autonomía la que llevó a que el titular de la Secretaría de Gobernación

³¹ Woldenberg, José y otros, *La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas*, 4ª ed., ediciones Cal y Arena, México, 2011, pág. 424

ya no ocupara la Presidencia del Consejo, y que los representantes del Poder Legislativo sólo concurrieran con voz, pero sin voto:

Así, en la iniciativa se materializa un acuerdo trascendente para consolidar la autonomía de la máxima autoridad electoral federal respecto de los poderes públicos. Para tal efecto el Secretario de Gobernación, en su condición de consejero del Poder Ejecutivo, dejará de formar parte y de presidir el Consejo General del Instituto Federal Electoral. De igual forma, se propone que los consejeros del Poder Legislativo concurren a la integración de ese órgano colegiado con voz, pero sin voto, a la vez que se amplía el número de los mismos para que estén representados legisladores de todos los grupos parlamentarios con afiliación a un partido político en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

- 44 El Instituto Federal Electoral, surgido de ese proceso de expansión de su autonomía, fue la autoridad que en 2000 organizó y vigiló las elecciones en las que se concretó la primera alternancia en la Presidencia de la República desde la Revolución Mexicana, gracias al voto libre de la ciudadanía. La autonomía del Instituto Federal Electoral permitió que, en el 2007, se depositaran en él más de media centena de nuevas atribuciones para fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones federales; asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales; fiscalizar a nivel nacional a partidos políticos y candidaturas; y transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados electorales, entre otras facultades.
- 45 El 9 de agosto de 2012, se adicionó al artículo 35 la fracción VIII constitucional, esto es, se prevé por primera vez el ejercicio democrático de consultas populares y lo más importante, se le confiere al entonces IFE la facultad de su organización. Posteriormente por reforma de 10 de febrero de 2014, se adicionó el numeral 4 a la fracción VIII del precepto legal en cita, facultando al Instituto Nacional Electoral para organizar, desarrollar y verificar el cómputo de los resultados en materia de consultas populares. En este rubro, por último, mediante reforma del 20 de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

diciembre de 2019, se prohibió la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno durante el tiempo que comprende el proceso popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, las cuales deberán realizarse el primer domingo de agosto de conformidad con el último párrafo del numeral 4 y el numeral 5, respectivamente, de la fracción VIII.

- 46 Cabe señalar que en 2014, se creó el Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral. El dictamen del Senado de la República demuestra que la expansión en sus competencias tuvo como finalidad que un órgano con autonomía consolidada, como ya lo era el Instituto Federal Electoral, se hiciera cargo de las elecciones a nivel nacional. En el dictamen del Senado de la República, se señaló:

...el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; se retirarán las funciones más controvertidas de los órganos locales que han puesto en duda su imparcialidad; se garantizarán las condiciones de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos (sic) locales; se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio nacional sean homogéneos, se observen los principios antes citados y se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de las entidades federativas.

- 47 La autonomía del Instituto Federal Electoral, lo habilitó para ser transformado en un órgano nacional que ahora organiza no sólo las elecciones federales, sino también participa en actividades sustantivas de los comicios estatales. En adición a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral, entre otras funciones, hoy se encarga de organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos, si así lo solicitan; de garantizar que las candidaturas independientes, al igual que los partidos políticos, tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, y de fiscalizar

permanentemente los recursos de los partidos políticos y candidaturas a nivel federal y local. Su autonomía llevó a que el Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión depositen en él las atribuciones que señala el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala:

Artículo 32.

1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

- I. La capacitación electoral;*
- II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras;*
- III. El padrón y la lista de electores;*
- IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;*
- V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral: conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales, y*
- VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.*

b) Para los procesos electorales federales:

- I. El registro de los partidos políticos nacionales;*
- II. El reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal;*
- III. La preparación de la jornada electoral;*
- IV. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;*
- V. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale esta Ley;*
- VI. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales;*
- VII. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;*
- VIII. La educación cívica en procesos electorales federales;*
- IX. Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y*
- X. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.*

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

- a) La organización de la elección de los dirigentes de los partidos políticos, cuando éstos lo soliciten y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la Ley;*
- b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales;*
- c) Suscribir convenios con órganos del Poder Ejecutivo Federal que establezcan los mecanismos de coordinación y aseguren cooperación en materia de inteligencia financiera;*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- d) *La verificación de los requisitos, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares a que se refiere la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución;*
- e) *Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;*
- f) *Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponde a los Organismos Públicos Locales, en los términos de esta Ley;*
- g) *Delegar las atribuciones a los Organismos Públicos Locales, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento;*
- h) *Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación;*
- i) *Emitir criterios generales para garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y*
- j) *Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.*

48 Estamos hablando de que el Instituto Nacional Electoral, cuenta en conjunto con 74 nuevas atribuciones adicionales que se suman a todas las que el Instituto Federal Electoral tenía anteriormente.

49 Asimismo, en términos del artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral **es un órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.**³² Actualmente, el Instituto Nacional Electoral tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y

³² Artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

objetividad. Durante 2018 condujo, vigiló y resolvió el proceso electoral que concluyó una nueva alternancia en el Ejecutivo Federal.

50 Como se señaló, las funciones que realiza el Instituto Nacional Electoral no se agotan en el proceso electoral. Tiene actividades ordinarias de la máxima relevancia, como lo es garantizar un medio de identificación a los mexicanos, ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión, o fiscalizar los recursos públicos que se entregan a los partidos políticos. Ello lo lleva a que la propia Ley le obligue a contar con una estructura permanente relevante que requiere un despliegue territorial nacional, es decir, contar con 32 delegaciones y 300 subdelegaciones.³³

51 Está fuera de discusión que la relevancia que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral no podría explicarse sin su componente autónomo. El actuar independiente y respetuoso del Estado de Derecho del Instituto le permitió constituirse como un actor en el que la ciudadanía confía para llevar a cabo los procesos de renovación de poderes, lo cual es fundamental para proteger la voluntad popular y la democracia en el país.

52 Cabe señalar, que la Suprema Corte se ha pronunciado sobre lo relevante de la autonomía e independencia electoral, al estar plenamente consciente de que este Instituto en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, genera un impacto en los derechos de las y los mexicanos, al velar por un Estado democrático con resonancia en el propio resguardo de la Constitución y los principios inmersos en ella.

³³ Artículo 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- 53 En ese sentido, tal y como fue sostenido en la jurisprudencia P./J. 144/2005, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

III.C. El proceso presupuestario en el orden jurídico mexicano

- 54 El Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta de un proceso que tiene su fundamento constitucional en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados:

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República,

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

- 55 De la lectura del precepto constitucional transcrito, se desprende que el proceso de examen y discusión del presupuesto es uno que involucra centralmente al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados. No hay referencia alguna en esa materia a la forma en la que la Cámara de Diputados debería aprobar el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos. Podría decirse que sigue en construcción el proceso de examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, por parte de la Cámara de Diputados, en relación con los órganos constitucionales autónomos. De ahí la importancia de la presente controversia constitucional ante dicha omisión normativa.
- 56 De hecho, la relación entre el Presupuesto de Egresos de la Federación y los órganos constitucionales autónomos se desprende de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De una interpretación armónica de los artículos 4, 5, 30 y 66 de dicho cuerpo legal, podemos establecer que el Congreso de la Unión, a través de esa ley, respeta la línea marcada por la Constitución, al no involucrar a la Cámara de Diputados con la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. En términos de dichos preceptos legales, los órganos constitucionales autónomos gozan de autonomía en la elaboración y ejecución de su presupuesto. Los órganos constitucionales autónomos elaboran su presupuesto y lo envían para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo integre, en sus



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

términos, al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año envía a la Cámara de Diputados.

- 57 No obstante, considerando que la presente controversia versa sobre aspectos esencialmente presupuestarios, resulta pertinente esbozar ciertas características del proceso presupuestario federal. Como se mencionó, el proceso presupuestario encuentra su regulación central en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Dicha ley establece, con un alto nivel de desagregación, normas que son aplicables al proceso bajo el cual el Poder Ejecutivo Federal entrega el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
- 58 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece reglas puntuales sobre el balance entre ingresos y gastos a nivel macroeconómico; dispone los aspectos esenciales que deben contener, tanto el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de que se trate; y plantea normas específicas para la comunicación y coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo. De su lectura se desprende que se trata de un ordenamiento legal que regula centralmente el proceso presupuestario entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo.
- 59 La lectura de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sugiere que mantener el balance macroeconómico es una de las preocupaciones más importantes en el procedimiento de planeación, programación, integración, envío, examen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, esa ley no prevé que la Cámara de Diputados entre a la examinación detallada del presupuesto. Lo que sí prevé, es que el Poder Ejecutivo Federal se sujeta a un procedimiento de aprobación de presupuesto intenso que debe llevarse a cabo en un marco de comunicación y coordinación. Dicho de otra forma, el examen y la

discusión del proyecto de presupuesto de egresos no es unilateral, debe realizarse en un marco de coordinación entre ambos poderes (ver artículos 42, 43 y 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) y, con el nuevo esquema de distribución de funciones del Estado, también con los órganos constitucionales autónomos.

- 60 En consonancia con lo anterior, la Cámara de Diputados no sólo se sujeta a reglas de comunicación y coordinación durante el procedimiento de examen y discusión del presupuesto, sino que tiene reglas específicas si quiere realizar ciertas modificaciones al proyecto de presupuesto. Esto quiere decir que el Congreso de la Unión le impuso lineamientos concretos al Ejecutivo Federal para asegurar un balance macroeconómico, pero también se aseguró que ese balance no lo rompiera la Cámara de Diputados al examinar y discutir el proyecto de presupuesto. Como ejemplo, se presenta la fracción VIII, del artículo 42, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Artículo 42.

[...]

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:

- a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley, así como observando los criterios generales de política económica;*
- b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada [sic] en el inciso anterior, deberán sustentarse en análisis técnicos;*
- c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;*
- d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información;*
- e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

f) *En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.*

IX. *Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.*

En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación.

61 En resumen, de la lectura de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria podemos desprender dos premisas. El procedimiento de examen, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es, primordialmente, un mecanismo de contrapeso; es decir, un mecanismo de control político de la Cámara de Diputados hacia el Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, ese mecanismo de contrapeso no lleva consigo la autorización de invadir la esfera de competencia del Ejecutivo Federal, menos de forma unilateral, por parte de la Cámara de Diputados.

62 En el caso de la relación entre la Cámara de Diputados y los órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión fue todavía más estricto al no proveer de facultad alguna específica a la Cámara de Diputados para modificar el proyecto de presupuesto de los órganos constitucionales autónomos. De hecho, el Congreso de la Unión pudo haber establecido reglas muy claras para los órganos autónomos, en relación con el examen de discusión y aprobación de su presupuesto, pero no lo hizo. El Congreso de la Unión sólo estableció dos universos normativos. Primero, normas relacionadas con los parámetros bajo los cuales los órganos constitucionales autónomos deben elaborar su presupuesto y, segundo,

normas relacionadas con el ejercicio de su presupuesto. En relación con las del ejercicio del gasto, el Congreso de la Unión incluso dispone que no se sujetan a las reglas generales que en esa materia emitan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- 63 Lo anterior nos puede llevar a una conclusión: la Cámara de Diputados no cuenta con facultades específicas sobre el nivel, los aspectos, el tipo de gasto o montos que puede modificar. No es sostenible interpretar que, ante la ausencia de normas específicas, la Cámara de Diputados pueda ejercer su facultad de aprobación presupuestaria en forma tal que invada la autonomía de otros órganos constitucionales autónomos o, incluso, de otros Poderes.
- 64 El parámetro de análisis de la Cámara de Diputados, en el examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos del Ejecutivo Federal, tiende más hacia la estabilidad macroeconómica que al detalle de los conceptos de gasto de programas o el número de personal que ocupan.
- 65 Esto es consistente con el principio de división de poderes. Como se explicó, dicho principio procura la toma de decisiones públicas óptimas, para lo cual la encomienda a los órganos mejor preparados para ello. Cuando la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria atribuye la planeación y presupuestación al Ejecutivo Federal y a los entes autónomos, reconoce que la naturaleza de éstos favorecerá que tomen mejores decisiones presupuestarias que las que podría tomar la Cámara de Diputados por sí sola.
- 66 La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó lo anterior al resolver la controversia constitucional 109/2004, referente al veto que el Presidente de la República ejerció respecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

2005. La Corte señaló que el proceso de construcción presupuestaria parte de una “estrecha colaboración [que] busca lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado, lleva a considerar que el Presidente de la República sí está facultado para realizar observaciones al Decreto expedido por la Cámara”. De acuerdo con lo que manifestó el ministro Juan Silva Meza en su voto particular, “de considerar que la Cámara de Diputados no debe atender a la legislación que regula el Presupuesto de Egresos de la Federación, podría dar lugar a que el Presupuesto aprobado sea totalmente ajeno a los lineamientos que el Ejecutivo Federal tuvo que cumplir para elaborar el Proyecto respectivo y, que, por tanto, no cumpla con las finalidades constitucionales y legales”.

67 Por ello, la Cámara de Diputados, en el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, debe atender a principios de comunicación y coordinación, no a decisiones unilaterales y arbitrarias sobre el presupuesto, máxime que no basó su decisión reductiva y no está soportada en análisis alguno de manera técnico-especializada que la motivara, sustentara o justificara.

IV. CONCEPTO DE INVALIDEZ

68 **PRIMERO.** La presente controversia constitucional tiene como eje argumentativo la invasión de competencias del Instituto Nacional Electoral, basada en una violación a su autonomía. En ese sentido, a continuación se argumenta que la autonomía prevista en el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Federal, constituye un límite para la Cámara de Diputados para decidir sobre aspectos de la autonomía

presupuestaria del Instituto. Dicha autonomía, se afirma, fue vulnerada, cuando menos, en tres vertientes:

- a. La Cámara de Diputados realiza una reducción injustificada, unilateral y arbitraria al gasto neto total del Instituto Nacional Electoral, la cual se manifiesta en los ANEXOS 1 y 32³⁴ del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en lo relativo al Ramo 22 Instituto Nacional Electoral;
- b. Al establecer, en el artículo Transitorio Vigésimo Primero del Presupuesto de Egresos 2021³⁵, que el Instituto Nacional Electoral, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, debe realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten a los límites máximos previstos en el Anexo 23 de dicho Decreto, impone al Instituto la obligación de que dichas medidas surtan sus efectos a partir de su entrada en vigor; es decir, a partir del 1º de enero de 2020.
- c. Al modificar y/o eliminar las cifras y conceptos incluidos en el ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos, para sujetarlo al monto que ella misma establece como límites de la percepción ordinaria neta y total en el Instituto Nacional Electoral, así como Remuneración Total Anual Máxima del mismo.

³⁴ ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)

³⁵ **Vigésimo Primero.** Los ejecutores de gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

69 Para llegar a esa conclusión, se desarrolla el alcance de la autonomía presupuestaria del Instituto Nacional Electoral. Para ello, se explica el alcance que la legislación asigna a ese concepto, así como las normas a las que el Instituto está constreñido al ejercer su autonomía (si bien subrayando que la autonomía no significa arbitrariedad). Posteriormente, se expondrán las razones por las que el Presupuesto de Egresos 2021, vulnera dicho marco de autonomía, al desconocer las decisiones especializadas tomadas por el Instituto (principio de deferencia) y someterlo a las decisiones de otro poder.

IV.A. Violación a la autonomía del Instituto Nacional Electoral a través de la reducción unilateral y arbitraria de su presupuesto en perjuicio de sus atribuciones constitucionales

IV.A.1. La autonomía presupuestaria del Instituto Nacional Electoral, en el marco del proceso de planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público

70 Como fue expuesto, el Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.³⁶ De tal forma que tiene **las características que la propia Corte ha asignado a dichos órganos**, entre las que destaca que cuenta con autonomía e independencia funcional y presupuestaria, como ya se mencionó inicialmente

³⁶ Artículo 29.

1. El Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

- 71 El Instituto Nacional Electoral, al organizar las elecciones del país, es un pilar de nuestro régimen democrático que goza de autonomía en el marco constitucional. Esa autonomía se refiere a que el INE no debe depender de otros poderes para ejercer sus funciones, y dentro de ese marco, la autonomía presupuestaria es instrumental para que el Instituto alcance sus fines. En efecto, “la autonomía presupuestaria del organismo electoral es determinante de sus posibilidades de eficacia, que depende de la forma en que se elabora, aprueba y desembolsa el presupuesto”³⁷.
- 72 Lo mismo pasa con el Poder Legislativo. Ninguno de los otros dos Poderes de la Unión, ni algún otro órgano autónomo cuenta con facultades para revisar su presupuesto, cuestionarlo y, mucho menos, modificarlo o reducirlo. **No hay independencia institucional sin autonomía presupuestaria.**
- 73 Como se mencionó, la historia del Instituto Nacional Electoral tiene uno de sus hitos más relevantes en la reforma electoral de 1996, en la que se desvinculó orgánicamente de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo Federal. La autonomía se fortaleció cuando se establecieron mecanismos de pesos y contrapesos en la elección de los Consejeros del Instituto, para buscar su neutralidad. El personal especializado del Instituto, ahora es parte producto de esa reforma y desde 2014, de un servicio profesional de carrera de carácter nacional. También es cierto, como se ha mencionado, que la autonomía del Instituto Nacional Electoral implica prohibiciones para los Poderes de la Unión u otros órganos autónomos de invadir su esfera de atribuciones.

³⁷ López Pintor, Rafael, “Administración Electoral”, en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Diccionario electoral, IIDH, San José, C. R., 2017, Vol. 1, p 31.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- 74 Es así que los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral, forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.³⁸
- 75 De esta forma, la garantía institucional de autonomía para el Instituto Nacional Electoral debe constituir una protección constitucional frente al actuar de otros poderes, siempre en función de procurar su más alto alcance para el correcto desempeño de sus competencias.
- 76 Pero nada de lo anterior sirve, si el Instituto Nacional de Electores no goza de libertad para establecer su presupuesto conforme a su conocimiento especializado en la materia, de la que es depositario exclusivo (pues ningún otro órgano o poder tiene competencia para ejercer dichas funciones al interior del Estado mexicano).
- 77 La evolución de la autonomía del antes Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, se ha reflejado en la consolidación de su autonomía

³⁸ Tesis aislada 2a. CLXVI/2017, Décima Época, registro: 2015478, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Página 603. "GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS"

presupuestaria. Aunque el concepto de autonomía presupuestaria no está definido expresamente con exhaustividad en alguna norma, puede desprenderse vía interpretación con base en el marco normativo constitucional y administrativo. Dicho marco normativo se inserta en el amplio universo de normas presupuestarias que se han desarrollado en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde antes de que se crearan los órganos constitucionales autónomos. La razón es que la división de poderes refiere, necesariamente, a que cada uno de ellos goza de autonomía en relación con los otros.

- 78 Actualmente, el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 74, fracción IV de la Constitución, establece el alcance de la autonomía presupuestaria para los Poderes de la Unión y los Órganos Constitucionales Autónomos, en lo relativo a la elaboración de su presupuesto, su ejercicio y contabilidad. En ese sentido, el numeral de mérito señala:

Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:

- a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;*
- b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;*
- c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;*
- d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- e) *Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;*
- f) *Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;*

II. y III...

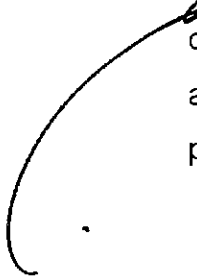
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes.

79 Del transcrito artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es necesario destacar tres aspectos:

- a. La autonomía presupuestaria de los entes autónomos, como el Instituto Nacional Electoral,³⁹ es la misma que gozan los Poderes Legislativo y Judicial (fracción I) respecto del Poder Ejecutivo.
- b. Tanto los Poderes Legislativo y Judicial, como los entes autónomos, envían sus proyectos de presupuesto para su integración en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda. Ese presupuesto no es revisable o modificable por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- c. En el ejercicio del gasto, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos no se sujetan a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, a lo largo del ejercicio fiscal, esas dos dependencias pueden emitir disposiciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, que, aunque sí son aplicables a las dependencias y entidades de la Administración Pública

³⁹ En términos del artículo 15, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Federal, no son aplicables para el Instituto Nacional Electoral. El INE tiene autonomía presupuestaria plena en el ejercicio de su presupuesto.

- 80 En tal sentido, el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dota de contenido al concepto de autonomía presupuestaria. El resultado de ello es que el Instituto goce de plena autonomía en la integración y el ejercicio de su presupuesto, dentro del marco de la ley, teniendo como límite la observancia de los criterios generales de política económica, como se mencionará adelante.
- 81 Podemos concluir entonces, que si la Constitución garantiza la autonomía del Instituto, la ley dota de contenido tal autonomía, y la protege al darle un amplio alcance. Dicha autonomía parte, por un lado, de la garantía a la función del órgano constitucional autónomo como mecanismo de protección del ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía. Por el otro, también encuentra su sustento en la función especializada del Instituto, por virtud de la cual se le concibe como el órgano del Estado idóneo para decidir sus requerimientos presupuestarios para realizar su función especializada.
- 82 Ello no significa, en forma alguna, que la autonomía presupuestaria sea una habilitación para el uso discrecional y dispendioso de los recursos. El Poder Legislativo ha impuesto una serie de obligaciones para los órganos constitucionales autónomos, desarrolladas a continuación. El hecho de que el Poder Legislativo haya impuesto esas obligaciones implica, por una parte, que los entes autónomos, al cumplir con la ley, no se sujeten a la intromisión, la dependencia o la subordinación a otra instancia de gobierno; y por otra, que utilicen sus recursos conforme a los principios constitucionales.
- 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- 83 Los requisitos de control sobre el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, se encuentran previstos en la Constitución y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es reglamentaria de los artículos 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 84 El Instituto Nacional Electoral, en tanto órgano del Estado que dispone de recursos públicos, se encuentra obligado a ejercerlos con apego a los principios eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez previstos en el artículo 134 de nuestra Constitución. A dicho precepto constitucional le acompaña la obligación legal del Instituto Nacional Electoral, como ente autónomo, prevista en el párrafo segundo del artículo 30, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 134 constitucional, entre otras disposiciones. Dicha obligación consiste en que el Instituto, en la programación y presupuestación de sus proyectos de presupuesto, debe sujetarse a lo dispuesto en dicha ley y observar que su propuesta sea compatible con los criterios generales de política económica.

Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo.

En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta sea compatible con los criterios generales de política económica.

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura programática a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta Ley.

- 85 Esos límites son recogidos en el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, que en su artículo 5, párrafo 2, dispone:

2. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto del Instituto de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales, así como las emitidas por el propio Consejo, aplicando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género, y en concordancia con el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional.

- 86 Lo anterior pone de manifiesto que la autonomía presupuestaria no es una carta blanca para el dispendio o la irresponsabilidad financiera. Dicha autonomía debe ejercerse bajo los parámetros macroeconómicos establecidos en un documento que se denomina Criterios Generales de Política Económica que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de parámetros, no controles, bajo los cuales los Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos deben hacer su proyecto de presupuesto. El deber de apegarse a esos criterios surge de un mandato legal en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 5 y 30), la cual también dispone la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe incluir en esos criterios cada ejercicio fiscal. No se trata de criterios unilaterales y arbitrarios en un marco de discrecionalidad no regulado.
- 87 En consonancia con lo anterior, debe tenerse en mente, en todo momento, que los órganos constitucionales autónomos sí están sujetos a diversos mecanismos de transparencia en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y de control ex post del gasto, en el marco de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y los mecanismos internos de control que dispone la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior sin omitir que sus servidores públicos se encuentran sujetos a regímenes de responsabilidades administrativas y penales por los actos que realicen en contra de la Constitución y las leyes que de ella emanan.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- 88 Es ese amplio marco de autonomía presupuestaria en el que hay independencia con responsabilidad, es que el Instituto Nacional Electoral, sin intervención de la Cámara de Diputados, presentó un presupuesto para 2021 en el marco de la austeridad y necesidad de eficientar recursos, y que, por ende, debía de ser comprendido y respetado por la Cámara de Diputados.
- 89 Sin embargo, la Cámara de Diputados en detrimento de dicha autonomía presupuestaria, no sustentó en momento alguno la disminución al presupuesto hecho por el INE, pues aun y cuando una de sus atribuciones exclusivas es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ello no lo exime de observar el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, así como el de división de poderes en el diverso 49 en relación con, en el caso en particular, el 41 de nuestra Carta Magna, con el primordial objetivo no sólo de atender a un equilibrio económico y congruente con los deberes constitucionales de cada poder y órgano autónomo sino de respeto a la propia Constitución y a evitar toda arbitrariedad el uso de dicha facultad exclusiva, la cual no es discrecional por mandato constitucional, por el contrario se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 90 En efecto, el artículo 42, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, deberá apoyar técnicamente las funciones de ésta en lo concerniente a la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual es concordante con el diverso artículo 74, fracción IV de la Constitución, sobre la facultad de dicha Cámara de llevar previamente el examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto respectivo con base en un

ejercicio de reflexión, de investigación y, por ende, de ponderación, lo cual debe ser lo suficientemente justificado.

IV.A.2 Estándar para que una acción de un Poder pueda considerarse violatoria del ámbito de autonomía de otro.

- 91 Como se expuso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a la división de poderes un carácter flexible y dinámico, no rígido. En ese tenor, la propia Constitución reconoce facultades de alguno de los poderes en el ámbito de competencia de otro, siempre que tal facultad esté prevista constitucionalmente, producto de un régimen de cooperación y coordinación.⁴⁰ En el nuevo contexto constitucional, un poder no puede arrogarse facultades que están otorgadas a otro poder u órgano constitucional autónomo. Un poder solo puede tomar decisiones

⁴⁰ "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera talante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas mediante un régimen de cooperación coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia." [Época: Novena Época, Registro: 166964, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 78/2009, Página: 1540.]



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

colaborativas, previstas constitucionalmente, que tengan como fin el buen funcionamiento del Estado.⁴¹

- 92 En ese contexto, ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente el criterio de que un acto es violatorio de la autonomía si da lugar a la intromisión, dependencia o subordinación de otro Poder o, en este caso, órgano constitucional autónomo. Sobre ese particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado un criterio fundamental en la controversia constitucional 35/2000, presentada por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, de la cual consideramos relevante citar los párrafos que se transcriben a continuación:

Así pues, este Alto Tribunal considera que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes; se trata de la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación con respecto a los restantes.

A manera de regla, puede decirse que ninguno de los poderes públicos de los estados de la Federación podrá realizar actos que den lugar a la intromisión, a la dependencia o a la subordinación de otro poder. Para la valoración de la presente controversia, y por la importancia de los criterios identificados, conviene revisar el contenido de cada uno de ellos.

El término intromisión proviene del latín intromissus, y significa acción y efecto de entrometer o entrometerse. Se trata, pues, de la acción de inmiscuirse en una cuestión ajena. En el tema que nos ocupa, puede decirse que la intromisión es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, pues para actualizarse, basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entremeta en una cuestión que, por ser propia de otro, le sea ajena. La intromisión, empero, no implica que el poder que se entremete en los asuntos de otro, pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere algún tipo de sumisión o relación jerárquica. Este primer límite del principio de división de poderes es, podría decirse, tenue, pues marca la frontera entre la violación y la no violación de tal principio. Debido a ese carácter, el juzgador constitucional debe analizar cuidadosamente, en cada caso concreto, el modo en que se lleva a cabo la relación normativa entre diversos poderes u órganos, ello con

⁴¹ Así lo señaló ese Tribunal en la controversia constitucional 32/2007, en donde apuntó que: "De lo que a final de cuentas se trata, es de la distribución de determinadas funciones desarrolladas ya sea por uno u otro de los poderes del Estado, pero siempre referidas al buen funcionamiento de del propio Poder que, en una estricta división, no podría desempeñar, y si así lo hace, ello debe ser en todo momento dentro de los lineamientos previstos constitucionalmente".

el fin de no confundir la intromisión con la colaboración en la realización de ciertas funciones normativas.

La dependencia (del latín dependēre: colgar, pender) es un estado de cosas causado indirectamente por un agente que toma la decisión de producirlo, pero que es llevado a cabo por otro agente que sólo aparentemente es el protagonista del acto. Quien está sujeto a una relación de dependencia no realiza sus acciones de manera autónoma, sino que se ve en la necesidad de atender a la voluntad del agente dominante. En la materia que nos ocupa, la dependencia conforma un segundo nivel de violación del principio de división de poderes, la cual representa un grado mayor de intromisión, puesto que implica la posibilidad de que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente. La dependencia es, sin embargo, una situación contingente, pues, el poder dependiente puede verse obligado a cumplir las condiciones que el otro le imponga, pero tiene la opción de no tomar la decisión a fin de evitar la imposición. En este sentido no necesariamente está compelido a hacer lo que el otro le imponga, puesto que existen otros cursos de acción que puede tomar distintos a la imposición.

El término subordinación proviene del latín subordinatō, subordinatōnis, y significa sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. En este contexto, se traduce en el tercer y más grave nivel de violación al principio de división de poderes. La subordinación no sólo implica que el poder subordinado no pueda tomar autónomamente sus decisiones (como en la dependencia), sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por no tomar la decisión a fin de evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado ningún curso de acción distinto al que le prescribe.

Como puede verse, estos tres conceptos (la intromisión, la dependencia y la subordinación) son en realidad grados de uno mismo. Son conceptos concéntricos porque cada uno forma parte del siguiente, sólo que con algunas características que aumentan su grado. No obstante, estos términos no son sinónimos porque son incluyentes hacia el grado inferior, y excluyentes hacia el grado superior. En otras palabras, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y ésta, a su vez, implica intromisión (grado inferior); en cambio, la intromisión excluye a la dependencia, dado que esta última es más rica en características que la primera, y la dependencia excluye a la subordinación por la misma razón.

- 93 Dicho criterio derivó de intromisiones por un Poder en la esfera de autonomía de otro, pero las razones que la orientan son aplicables para el caso de un órgano constitucional autónomo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el Tribunal Pleno ha sostenido que las autoridades electorales participan de los mismos principios de imparcialidad que los órganos jurisdiccionales, dada la función que les fue



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

encomendada y los principios que rigen ambas funciones (imparcialidad, entre otros), como lo pone de manifiesto la acción de inconstitucionalidad 138/2007:

...las autoridades que tiene a su cargo la organización de las elecciones, se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme lo establece el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Norma Fundamental, puesto que en ambos casos, la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal, es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales) dada la alta función que les fue encomendada, emitieran sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

94 En ese contexto, si la Suprema Corte ya ha señalado la semejanza en la autonomía entre los poderes judiciales y los órganos electorales, es pertinente recapitular sobre el criterio que ese Tribunal Constitucional ha construido en relación con los alcances que tiene la autonomía presupuestaria:

- a. En la controversia constitucional 10/2009, esa Suprema Corte estimó la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos 2009 que el Congreso del Estado de Tlaxcala asignó para el Poder Judicial del Estado. Dicha decisión derivó de que el Congreso del Estado no expuso razón para realizar dicha reducción, como se expone en la parte conducente de la ejecutoria:

De lo anterior deriva que, si existe un principio de irreductibilidad a favor de los Poderes Judiciales, es porque la reducción a su presupuesto es el caso más claro de afectación a su autonomía e independencia las que no pueden ser vistas como fines en sí mismos, sino como condiciones instrumentales que tienden a velar porque su tarea constitucional (impartir justicia) se lleve a cabo en forma adecuada.

Pero puede postularse la existencia implícita de otro principio que es, que las asignaciones presupuestales a los Poderes Judiciales locales se deben llevar a cabo con miras a que satisfagan su misión constitucional, y en este orden, el hecho de que los Poderes Judiciales preparen su propio presupuesto en un documento que no es revisable por el Poder Ejecutivo, y que tampoco esté obligado a remitirlo sin modificaciones al Congreso, no puede explicarse sino como la condición para que en el seno de este cuerpo legislativo se lleve a cabo la

ponderación, discusión y aprobación de un monto tal que permite garantizar el cumplimiento de las funciones judiciales.

Esto significa que el anteproyecto preparado por el propio Poder Judicial debe ser objeto de escrutinio expreso por parte de los integrantes del Congreso, quienes después de la deliberación, podrán aprobarlo en sus términos o incorporarle las modificaciones que estimen pertinentes, todo ello con base en la directriz consistente en que los fines de la impartición de justicia local sean colmados.

Así, el acto final de aprobación del Presupuesto de Egresos, en lo que toca al Poder Judicial, no puede tener una fundamentación y motivación simple, sino reforzada, con miras a dejar en claro que el órgano legislativo asignará una partida en principio suficiente para satisfacer las necesidades públicas que debe colmar la judicatura.

Dicho precedente es consistente con el criterio sostenido en la jurisprudencia que deriva de la controversia constitucional 10/2005, cuyo rubro y texto dicen:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁ PROTEGIDO POR LA GARANTÍA DE IRREDUCTIBILIDAD, POR LO QUE NO PUEDE, VÁLIDAMENTE, FIJARSELE UNO CON MONTO INFERIOR AL APROBADO PARA EL EJERCICIO ORDINARIO ANUAL ANTERIOR.

El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias relativas, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Por otra parte, en acatamiento a tal disposición, el segundo párrafo del artículo 90 de la Constitución de Baja California prevé que para garantizar la independencia económica del Poder Judicial, éste contará con un presupuesto propio, el que administrará y ejercerá en los términos que fijen las leyes respectivas, el cual no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso para el ejercicio anual anterior. Ahora bien, de la interpretación relacionada de dichos preceptos se concluye que el Tribunal de Justicia Electoral, órgano integrante del Poder Judicial del Estado de Baja California, **tiene garantizada la irreductibilidad presupuestaria, en el sentido de que jurídicamente no puede fijársele un presupuesto con monto inferior al aprobado para el ejercicio ordinario anual anterior, determinación que tiene la intención de proteger su autonomía, poniéndolo a salvo de todo tipo de presiones,** para que cumpla con plena independencia las atribuciones encomendadas por la Constitución Federal.⁴²

⁴² Época: Novena Época, Registro: 174954, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia(s): Constitucional; e Tesis: P.IJ. 70/2006, Página: 1477.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- b. En términos similares se pronunció ese Alto Tribunal en la controversia constitucional 42/2006, promovida a propósito de la reducción presupuestaria y que experimentó el Poder Judicial de Baja California, así como la supresión de partidas para el pago de prestaciones de los Magistrados. En dicho precedente señaló que *"sí existe la posibilidad de entregarle recursos para determinado fin y, en lugar de otorgárselos, se le encomienda a una persona diversa para que se haga cargo de la aplicación al mismo objetivo, es evidente que también se coloca a la parte actora en una situación de subordinación respecto del Ejecutivo local"*.
- c. En la controversia constitucional 35/2000, la Corte estimó violatorias de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, las normas que incidían en la facultad de Poder Judicial de llevar a cabo sus propias contrataciones, y fijó como estándar relevante el siguiente:
- a) *Que el contenido de la norma prescriba, explícita o implícitamente, alguna obligación, prohibición o facultad que implique la intromisión, la dependencia o la subordinación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con relación a los poderes Ejecutivo o Legislativo de dicha entidad federativa.*
 - b) *Que la toma de decisiones a propósito de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, del Poder Judicial del Estado, no corresponda en última instancia a dicho poder.*
 - c) *Que la ley vaya en contra de la finalidad del principio de división de poderes, es decir, que con la aplicación de aquélla no se preserve la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno los poderes públicos.*

De dicha controversia constitucional surgió la jurisprudencia 81/2004, que por su importancia se transcribe en su rubro y texto:

PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuable), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expeditos en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional.⁴³

- d. En el caso de Morelos, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial en varios casos, siendo los más recientes las controversias constitucionales 218/2017 y 232/2017. En tales asuntos, el Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó diversos decretos del Congreso del Estado, en los que este último otorgó a ciertos trabajadores del Poder Judicial una pensión por cesantía en edad avanzada. Al hacerlo, determinó que la pensión debía cubrirse con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin señalar de dónde provendrían los recursos para hacerlo. La Corte declaró inconstitucional dicho acto, al considerar lo siguiente:

Por otra parte, el Poder actor combate la parte del decreto en donde se establece que la pensión por cesantía en edad avanzada concedida por el Congreso de Morelos deberá ser cubierta por el Poder Judicial de esa misma entidad, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, en tanto que ello representa una determinación del destino de una parte del presupuesto de dicho poder.

Al respecto debe decirse que, con base en las consideraciones anteriores, esta Suprema Corte considera que efectivamente, esa orden emitida por el Congreso local lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el arado más grave

⁴³ Época: Novena Época, Registro: 180537, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 83/2004, Página: 1187.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

(subordinación)⁴⁴ y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal referidos, pues a través de ella el Legislativo dispone de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado ningún tipo de participación sin que hubiera generado previamente las condiciones legales y materiales para que el demandante pudiera hacer frente a esa carga.

Aunado a ello cabe destacar que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto; no define cómo deben financiarse esas pensiones, cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean, respectivamente, los que cubran aquellos a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión.

Y si bien ante esa indefinición podría pensarse que la propia ley posibilita que sea el Congreso local quien otorgue las pensiones con cargo al presupuesto de otro poder, esta Segunda Sala estima que es precisamente ello lo que torna al sistema de pensiones del Estado y al decreto aquí impugnado inconstitucionales.

- e. Finalmente, en la controversia constitucional 31/2006, la Corte invalidó un artículo del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2006, en el que prohibía al Poder Judicial el otorgamiento de bonos a sus empleados. En la ejecutoria, es relevante para el caso lo siguiente:

En efecto, través de este precepto impugnado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impone una restricción a la autonomía del Tribunal Electoral de dicha entidad en lo referente al ejercicio y aplicación de su presupuesto, puesto que hay una injerencia del órgano legislativo local sobre el órgano autónomo jurisdiccional ya que le da directrices en cuestiones que atañen al manejo y ejercicio de su

⁴⁴ Sobre los grados de afectación a la independencia entre poderes, el Tribunal Pleno ha señalado lo siguiente:

- a) La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión;
- b) La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones actúe de manera autónoma; y
- c) La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

presupuesto lo cual Indudablemente Incide sobre su organización y funcionamiento.

Así, no obstante como ya dijimos, que la Asamblea Legislativa está facultada para examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, tal facultad no puede ni debe entenderse al grado de permitir la Injerencia de ese órgano legislativo en cuestiones que atañen a la organización y funcionamiento del Tribunal Electoral, como lo es la administración, manejo y ejercicio autónomo de su presupuesto, cuestión que es competencia exclusiva de este órgano jurisdiccional, en razón de su carácter de órgano autónomo.

95 Los casos reseñados tienen en común que derivan de actos en los que los congresos locales, al momento de aprobar el presupuesto de egresos, toman decisiones que inciden en la competencia de otros poderes u órganos constitucionales autónomos. En ese tenor, la Suprema Corte ha definido límites de la facultad de aprobación del presupuesto, entre los que se encuentran los siguientes:

- a. Si la reducción se realiza en forma no razonada;
- b. Si la reducción se realiza en forma tal que pone en peligro el cumplimiento de las funciones constitucionales del órgano (indisponibilidad de la función constitucional por el legislador);
- c. Si existe la posibilidad de aprobar los recursos solicitados y, en lugar de hacerlo, se transfieren a otro ramo para que ejerza el gasto;
- d. Si se impide en cualquier manera al órgano ejercer su autonomía en la gestión presupuestal, mediante normas que impiden el libre ejercicio del gasto;
- e. Si el acto tiene impacto en el patrimonio del órgano;



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- f. Si el acto incide en cualquier forma sobre la organización y funcionamiento del órgano.

96 En este orden de ideas, aunque los precedentes de la Corte tienen una naturaleza muy variada, son consistentes en los criterios para decidir la constitucionalidad de una modificación en materia presupuestaria con base en los efectos que esa acción genera.

97 Sobre la base sostenida por ese Alto Tribunal, en el sentido de que las garantías que se establecen para la salvaguarda de la independencia y la autonomía de los Poderes Judiciales son aplicables a los institutos electorales, como órganos constitucionales autónomos, es importante citar lo que ha sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:⁴⁵

49. Un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que el poder judicial, Fiscalías y Defensorías no dependan para su disposición y manejo de otros poderes o entidades y cuenten con recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado de las funciones que se les han encomendado...

50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado los órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a las decisiones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo u otros órganos del poder público y las consecuentes negociaciones que pueden verse obligados a realizar para lograr la asignación de un presupuesto adecuado...

53. Para la Comisión el poder judicial, fiscalías y defensorías públicas deben poder participar efectivamente en la elaboración de su presupuesto y en las deliberaciones que sobre el mismo realice el órgano legislativo. Asimismo, como lo ha recomendado el Relator de la ONU todas las reducciones al presupuesto del Poder judicial asignado deberían contar con su consentimiento o el su órgano de gobierno...

55. En conclusión, la Comisión considera que para fortalecer la independencia institucional, tanto el poder judicial como las fiscalías y defensorías públicas deben contar con recursos estables y adecuados que estén normativamente asegurados y

⁴⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, 2013, pp. 24 a 27.

sean suficientes para cumplir con la función de proteger y garantizar el derecho de acceso a la justicia, el cual deben ser aumentados además progresivamente.

- 98 Una vez precisado lo anterior, es dable exponer las razones concretas que orientan la inconstitucionalidad de los anexos reclamados.

IV.A.3. La reducción al gasto neto total del Instituto Nacional Electoral viola su autonomía presupuestaria por generar intromisión, dependencia o subordinación respecto de otro poder

- 99 La modificación que la Cámara de Diputados formuló al gasto neto total del presupuesto de egresos del Instituto Nacional Electoral, es un acto que produce subordinación y que, por tanto, es violatorio de la autonomía presupuestaria del Instituto, al impedirle de manera injustificada a través dicha modificación, el cumplimiento a sus competencias constitucionales conforme al artículo 41 constitucional.
- 100 Para llegar a tal conclusión, es necesario atender a los efectos de la reducción señalada, lo que revela que tiene dos manifestaciones concretas de subordinación. Primera, pone al Instituto Nacional Electoral bajo una crisis financiera de cara a los procesos electorales de 2020 y 2021 (estos últimos comenzaron en septiembre del presente año⁴⁶), al no contar con los \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.) que le redujo la Cámara de Diputados, para ejercer sus funciones constitucionales, el Instituto Nacional Electoral dependería de una

⁴⁶Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 225.

1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.

(...)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ampliación presupuestaria que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le autorice, lo cual, *per se*, afecta su autonomía.

101 En otras palabras, el hecho de que la Cámara de Diputados haya reducido \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.) el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, máxime cuando su propuesta de presupuesto estuvo elaborada bajo una lógica de austeridad, racionalidad y sensibilidad social, trae dos consecuencias. Primera, pone en riesgo los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, el cual será, sin lugar a dudas, el más grande de la historia, ya que por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la Cámara de Diputados. De igual modo, en 2021 habrá 15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil 900 presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos por la vía democrática. Por tanto, la Cámara de Diputados pone en riesgo la elección y renovación democrática de las autoridades en cita, o bien, deja de cumplir con alguna atribución constitucional u obligación legal. Segunda, subordina al Instituto a la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la ampliación presupuestaria.

102 Como puede verse, la reducción que realizó la Cámara de Diputados coloca al Instituto en una situación de subordinación respecto de otros Poderes. Por un lado, lo subordina a la Cámara de Diputados, porque si dicha Cámara puede reducir injustificadamente y discrecionalmente, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, éste no estaría en capacidad libre para poder ejercer sus funciones. Una función o un programa del Instituto Nacional Electoral sin recursos suficientes para ser ejecutado, es un programa que no logrará alcanzar los propósitos para los cuales ha sido diseñado ni, por consecuencia, producir los efectos socialmente

útiles pretendidos. Por otro lado, cuando la Cámara de Diputados le reduce el presupuesto al Instituto Nacional Electoral, lo obliga a realizar acciones para tratar de compensar la reducción e inclusive orillándolo a violentar lo señalado por los artículos 126 y 134 de la Constitución⁴⁷. Sin embargo, esto no siempre es posible. Una de esas acciones es que el Instituto Nacional Electoral le solicite una ampliación presupuestaria, lo cual constituiría una subordinación del Instituto con respecto al Poder Ejecutivo, pues sin la ampliación no podría realizar sus funciones, situación que va en contra de la lógica de la reforma constitucional de 1996 que extrajo cualquier participación del referido Poder en el órgano electoral.

103 Si se generara un concierto para modificar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, de una forma en la que quitarle recursos lo deja con una crisis para enfrentar procesos electorales, se genera también un concierto en contra de la democracia mexicana que se ha venido construyendo a lo largo del último siglo. Ese escenario es especialmente amenazante para la fortaleza democrática del Instituto Nacional Electoral, en cualquier caso, pero más ante el contexto político actual en el que las minorías parlamentarias tiene una casi nula representación. Ello, pues la existencia de mayorías parlamentarias hace más relevante la función del Instituto Nacional Electoral como órgano de control para el desarrollo democrático del país y garantía de la celebración de elecciones libres, auténticas y equitativas.

104 Lo anterior confirma lo sostenido por éste Alto Tribunal en la referida controversia constitucional 10/2009. La Suprema Corte señaló que, en el caso del Poder Judicial

⁴⁷ **Artículo 126.** No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

(...)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

del Estado de Tlaxcala, **"la reducción a su presupuesto es el caso más claro de afectación a su autonomía e independencia"**.

105 Es fundamental mencionar que esa conclusión no puede variar por el hecho de que la Cámara de Diputados tenga la facultad constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Lo anterior es así, porque dicha facultad sólo puede ejercerse en un contexto de coordinación y colaboración institucional, bajo los límites constitucionales y legales y, por supuesto, sin violar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Para ello, debe ejercerse con un principio de deferencia en favor de lo solicitado por el órgano constitucional autónomo, que es el responsable técnico y operativo de una serie de facultades constitucionales encomendadas de manera exclusiva y excluyente a su esfera de responsabilidad.

106 Como se mencionó, el principio de deferencia obliga, en primer término, a tener por buenas las decisiones de los órganos del Estado que, por su naturaleza, son los que mejores decisiones pueden tomar en su ámbito de competencia, a menos que haya razones probadas, justificadas y motivadas en contrario, como no es el caso que ocupa la presente controversia constitucional. El principio de deferencia que la Cámara de Diputados debe guardar en la aprobación del Presupuesto de Egresos deriva de tres razones:

- a. **La naturaleza reglada del proceso de planeación y presupuestación del Instituto Nacional Electoral.** La planeación y presupuestación no es un procedimiento arbitrario, sino que se realiza conforme a directrices y parámetros legales que orientan la actuación del órgano constitucional autónomo. Por ende, el proyecto de presupuesto debe entenderse como el resultado de un proceso de planeación y programación que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en el marco de su especialización, que debe ser

la base para el proceso de discusión y aprobación, de manera tal que, si se considera necesario realizar ajustes, deben hacerse bajo una justificación adecuada y previo intercambio de información con la autoridad electoral. Afirmar lo contrario requeriría partir de una presunción de violación a la ley, lo cual es contrario a la presunción de validez y legalidad de los actos de la autoridad. En efecto, "todo acto administrativo que sea perfecto y eficaz se presume legítimo, esto es, válido frente al orden jurídico vigente".⁴⁸

- b. **La naturaleza especializada del Instituto Nacional Electoral como ejecutor de gasto.** Las funciones específicas que realiza el Instituto Nacional Electoral lo ubican como la instancia idónea para definir sus requerimientos presupuestarios. Es imposible sostener que la Cámara de Diputados tiene mejores herramientas para realizar el ejercicio de presupuestación en forma óptima, respecto de atribuciones y facultades que la Constitución no le confiere y que reserva de manera exclusiva a un órgano técnico especializado del Estado mexicano, como es el Instituto Nacional Electoral.
- c. **La función que el Instituto Nacional Electoral realiza en el marco institucional mexicano.** El Instituto Nacional Electoral es una autoridad electoral y ejerce una función de garantía del ejercicio de derechos humanos de participación política para la celebración periódica de elecciones libres y auténticas, vigilar la equidad de las contiendas electorales y para fiscalizar y sancionar, en su caso, el comportamiento imparcial de los Poderes y de las y los servidores públicos, en los términos establecidos por el artículo 134, penúltimo párrafo de la Constitución y que por ello se constituye como el pilar fundamental de la democracia en el país. La organización de elecciones se asemeja a la función judicial en que el incremento en recursos económicos

⁴⁸ Pérez Dayan, Alberto, *Teoría General del Acto Administrativo*, México, Porrúa, 2003, p.62



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

no puede favorecer su uso abusivo o con el ánimo de suprimir a los otros poderes o el balance constitucional. Por ende, un presupuesto excesivo no podría ser utilizado para menoscabar el balance democrático.

107 Si el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, responde a un proceso regulado en sus etapas y distintos ámbitos de competencia, y deriva de un órgano especializado que, por su naturaleza, no podría hacer un ejercicio abusivo del presupuesto en perjuicio de la democracia, la decisión del Instituto Nacional Electoral debe presumirse como la óptima para el funcionamiento del Estado. No es dable pensar que la Cámara de Diputados, que no siguió un proceso regulado para reducir el presupuesto y que no es especialista en la materia electoral, pueda tomar mejores decisiones que el Instituto sobre el presupuesto de este último, menos aun cuando dicha Cámara está obligada a mantener una actitud de deferencia frente al órgano técnico especializado que la Constitución establece en la materia.

108 **En conclusión, la Cámara de Diputados, al estudiar el presupuesto, le debe deferencia al Instituto y a su actividad constitucional; por tanto, en principio debería aprobar lo que le es enviado, en sus términos, salvo circunstancias excepcionales (que no ocurren en el caso que nos ocupa) y siempre fundando su decisión a partir de razones probadas, justificadas y motivadas de manera reforzada.**⁴⁹ En todo caso, cualquier ajuste que se haga a su presupuesto no puede comprometer jamás las funciones sustantivas del mismo. Lo anterior, en el

⁴⁹ Sobre dicho tema, Stephen Breyer ha sostenido que la deferencia de un Poder al conocimiento de un órgano especializado es el mecanismo mediante el cual puede reconciliarse el control democrático del Poder con la interpretación especializada de estatutos. Al respecto, véase Stephen Breyer, *Cómo hacer funcionar nuestra democracia*. El punto de vista de un Juez, Fondo de Cultura Económica, p.p. 182-190. Stephen Breyer, *Active Liberty. Interpreting Our Democratic Constitution*, Vintage, 2005, p. 102-108.

entendido de que el proceso de planeación, presupuestación y ejercicio del gasto debe ajustarse a principios constitucionales y siempre puede ser verificable.

109 **En otras palabras, el principio de deferencia referido elimina o restringe de manera muy significativa el margen para que la Cámara de Diputados reduzca el presupuesto de egresos enviado por el Instituto.**

110 En efecto, la función política del órgano legislativo en la aprobación del presupuesto, debe entenderse como un mecanismo de colaboración establecido entre los poderes, para que la definición de los programas, proyectos y actividades en los cuales deberá enfocarse el aparato estatal provenga, por un lado, de una instancia ampliamente legítima en términos democráticos, por otro, plural en su composición.

111 Sin embargo, ello debe analizarse a la luz de la realidad constitucional actual. En un esquema tradicional de división de poderes tripartita, resultaba razonable que fuera amplio el margen de arbitrio con el que debiera contar la instancia política que decide el destino de los recursos públicos, porque el espectro que corresponde abarcar al Ejecutivo y a la administración pública es vastísimo. No obstante, ese esquema no puede operar de igual forma en el contexto actual en el que han surgido diversos órganos constitucionales autónomos, porque su ámbito de actuación está muy focalizado a determinadas y específicas funciones, en la mayoría de los casos prioritarias.

112 Al respecto, ese control político ya no funciona de la misma forma ni con la misma intensidad, porque no se presenta la disyuntiva de cómo distribuir recursos, necesariamente limitados, de frente a una multiplicidad de necesidades, del más diverso orden, algunas de ellas apremiantes. Por el contrario, los órganos constitucionales autónomos tienen finalidades mucho más específicas, que,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

además, no se pueden alcanzar de cualquier manera, sino en función de las especificidades propias de la respectiva materia. Se trata de un proceso evolutivo inherente a la racionalización de la toma de decisiones públicas con la que se identifica al movimiento constitucional.

113 Sobre esta base, pudiera decirse que lo que subyace en toda esta evolución es la necesidad de garantizar a la ciudadanía el derecho a conocer la justificación de las contribuciones y el destino de estas.⁵⁰ Por ello, si bien la Corte se ha pronunciado en diversos sentidos respecto a límites que tiene la Cámara de Diputados al momento de discutir y aprobar el presupuesto de egresos, la evolución que ha experimentado este instrumento a través de los años hace necesario un nuevo análisis y, en su caso, una nueva definición que abarque la evolución del mismo.⁵¹

114 No escapa a este Instituto Nacional Electoral, que pueden existir casos en los que ocurran circunstancias excepcionales que impidan la aprobación del presupuesto en los términos propuestos. Tal sería el caso si, por ejemplo, existiera una crisis económica que alterara los criterios generales de política económica base del presupuesto, en cuyo caso, la referida deferencia implicaría que en una relación de coordinación y colaboración, la Cámara de Diputados entrara en un diálogo con los demás poderes y los órganos constitucionales autónomos, como es el Instituto, a fin de realizar ajustes sin menoscabar o poner en peligro su función y, por supuesto, bajo un contexto de motivación reforzada. Sin embargo, ello no ocurre en el caso concreto. Por el contrario, el Presupuesto de Egresos 2021 contempla un gasto neto

⁵⁰ Mora-Donatto, Cecilia, "Comentario al artículo 74", en Cámara de Diputados y otros, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus instituciones, 8ª ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2012, pp. 341 y 342.

⁵¹ Diener Sala, Max Alberto, "Comentario al artículo 74, fracción IV", en Cossío Díaz, José Ramón (coord.), *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada*, Tirant lo Blanch, México, 2017, p. 1192.

de \$6,295,736,200,000, lo que representa un aumento de más de \$188,003,800,000, respecto del año anterior.

115 Debe señalarse que incluso en el escenario de una crisis económica, la Cámara de Diputados tampoco podría realizar un recorte unilateral y arbitrario como el que nos ocupa. Ello es así, porque esa variable no permitiría soslayar el balance institucional y el sistema de pesos y contrapesos, que obliga a guardar deferencia al Instituto Nacional Electoral y otros órganos constitucionales autónomos. En esas circunstancias excepcionales (no presentes), la deferencia hacia el órgano constitucional autónomo se traduciría, primero, en el deber de darle audiencia para conocer de qué forma, en un contexto de diálogo democrático entre poderes, podría existir un ajuste presupuestario que permitiera al Instituto Nacional Electoral cumplir cabalmente su misión constitucional (controversia constitucional 10/2019 (párrafo 86, inciso a.)). En segundo lugar, se traduciría en el deber de la Cámara de Diputados de permitir al Instituto Nacional Electoral realizar el ajuste en el marco de su autonomía.

116 Se afirma lo anterior porque, como se expresó, la división de poderes encuentra su razón de ser, justamente, como un mecanismo de protección de los derechos de la ciudadanía, contrapeso, optimización de las decisiones del Estado, y limitación a decisiones arbitrarias y, por ende, contrarias al Estado constitucional democrático de Derecho, por parte de cualquier poder público. La pretensión de un Poder de expandir sus facultades genera vulnerabilidad de la ciudadanía ante la concentración de poder y falta de contrapeso, además de generar decisiones poco óptimas, por ser tomadas por los órganos no idóneos. Justamente por ello, la Corte ha insistido en que la división de poderes debe ocurrir en un contexto de



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

coordinación y mutuo respeto entre poderes, y no en un escrutinio arbitrario que sustituya a un poder en el otro.⁵²

117 Lo anterior, con independencia de que se trate de un Poder dotado de legitimidad democrática de origen, en virtud de resultar electos sus miembros a partir del voto popular; de que se trate de un Poder cuyos integrantes sean representantes de la Nación, como ocurre con la Cámara de Diputados, en términos del artículo 51 constitucional, y de que sus decisiones sean tomadas por mayoría de sus miembros.

118 Además, que las decisiones de la Cámara de Diputados sean tomadas por mayoría de sus miembros, como ocurrió con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, y que sus integrantes hayan sido democráticamente elegidos, como representantes de la Nación, no significa que esa capacidad de decisión sea discrecional o que sus determinaciones no estén sujetas a la serie de límites, controles y obligación de fundamentación y motivación, que

⁵² ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis la. CXXXIII/2004, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO Estricto DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)., siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." [Época: Novena Época, Registro: 173957, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 84/2006, Página: 29.]

constituyen el fundamento esencial, vertebrador de los Estados democráticos constitucionales de Derecho. De no ser así, estaríamos frente al poder omnímodo de las mayorías que Alexis de Tocqueville identificaba como el principal peligro que enfrentan las democracias, un poder omnímodo que nada se distingue de los despotismos.⁵³

119 La decisión de la Cámara de Diputados de reducir unilateral y arbitrariamente el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es una decisión que trastoca por completo el principio de división de poderes. Lo anterior, porque no es una decisión que se asuma como contrapeso, sino como imposición de la voluntad de la Cámara de Diputados respecto de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, es una decisión que no optimiza las decisiones públicas, pues la Cámara de Diputados sustituye al organismo especializado en la toma de decisión sobre el presupuesto necesario para llevar a cabo sus actividades. Finalmente, es una decisión que, al poner en entredicho la capacidad del Instituto de llevar a cabo sus actividades, desprotege a la ciudadanía y la coloca en riesgo de ejercer sus derechos políticos y pone el peligro la realización de elecciones equitativas, libres, ciertas y democráticas.

120 Para precisar, la reducción incide directamente en los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, el cual será, sin lugar a dudas, el más grande de la historia, ya que por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la Cámara de Diputados. De igual modo, en 2021 habrá 15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil 900 presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos por la vía democrática, por tanto no se está garantizando a la ciudadanía el ejercicio del

⁵³ Tocqueville, Alexis de, *La Democracia en América*, 29 ed., FCE, México, 1963, p. 264.



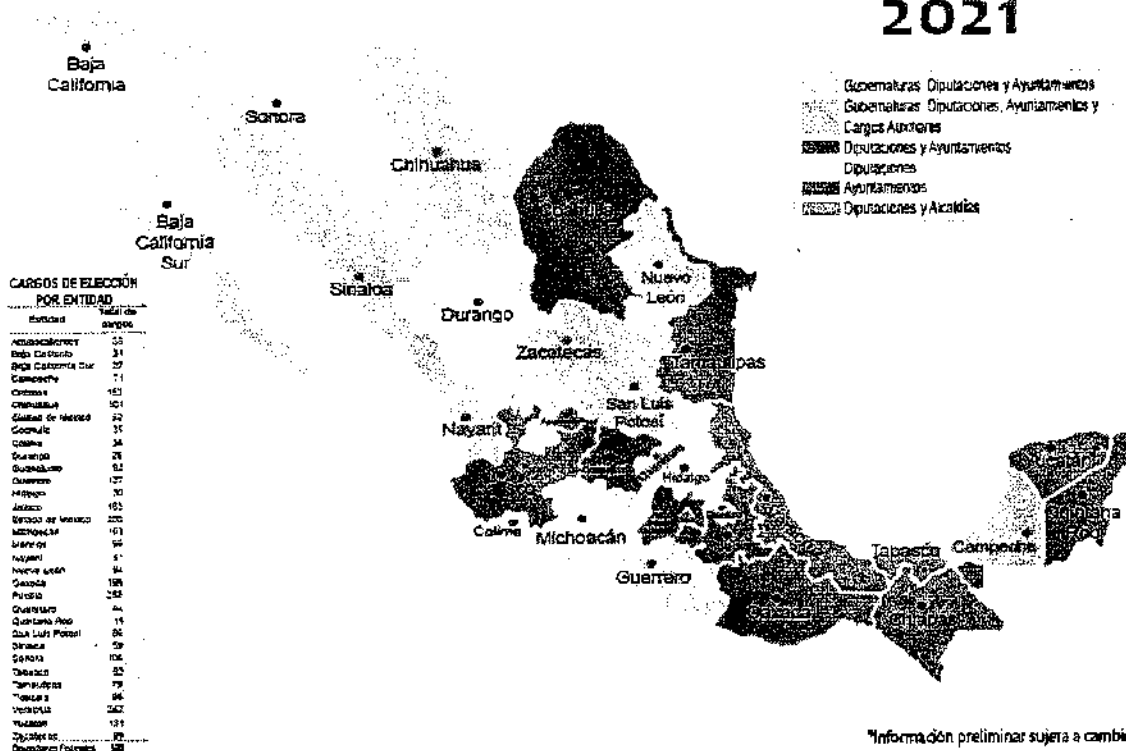
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

derecho al sufragio para la renovación democrática de las autoridades, porque los procesos electorales son proyectos especiales para los que se necesitan más de 830 millones de pesos.

Sírvase se ejemplo el siguiente mapa y gráfica⁵⁴:



Calendario —Electoral— 2021



⁵⁴ <https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/08/002-mapa-Electoral-2021-1.pdf>

CARGOS DE ELECCIÓN POR ENTIDAD

Entidad	Gobernatura	Diputaciones MR*	RP**	Ayuntamientos	Alcaldías	Cargos similares
Aguascalientes		18	9	11		
Baja California	1	17	8	5		
Baja California Sur	1	16	5	5		
Campeche	1	21	14	13		22
Chiapas		24	16	123		
Chihuahua	1	22	11	67		
Ciudad de México		33	33		16	
Coahuila				38		
Colima	1	16	9	10		
Durango		15	10			
Guanajuato		22	14	46		
Guerrero	1	28	18	80		
Hidalgo		18	12			
Jalisco		20	18	125		
Estado de México		45	30	125		
Michoacán	1	24	16	112		
Morelos		12	8	36		
Nayarit	1	18	12	20		
Nuevo León	1	26	16	51		
Oaxaca		25	17	153		
Puebla		25	15	217		
Queretaro	1	15	10	18		
Quintana Roo				11		
San Luis Potosí	1	15	12	58		
Sinaloa	1	24	16	18		
Sonora	1	21	12	72		
Tabasco		21	14	17		
Tamaulipas		22	14	43		
Tlaxcala	1	15	10	60		
Veracruz		30	20	212		
Yucatán		15	10	108		
Zacatecos	1	18	12	68		
Diputaciones Federales		300	200			

*MR - Mayoría Relativa
**RP - Representación Proporcional

121 Vale la pena recordar que el conjunto de los proyectos estratégicos, en el presupuesto solicitado, sumaban \$9,470,891,620. Eso significa que el recorte de de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), no puede ser absorbido en el presupuesto de proyectos estratégicos, sin afectar ineludiblemente los recursos para las elecciones.

122 Los rubros de gasto del Instituto Nacional Electoral que no son proyectos especiales son rubros de gasto asociados con actividades ordinarias permanentes que exige la Constitución (no con base anual, como las elecciones), indispensables en su vida institucional. Es decir, la reducción pone al Instituto Nacional Electoral ante el predicamento de si organizar los procesos electorales y ejercer todas sus atribuciones constitucionales, o bien, cumplir obligaciones fiscales; organizar los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

procesos electorales o pagar servicios básicos de luz, agua y teléfono, indispensables, por cierto para el ejercicio de sus funciones, o bien, dejar de cumplir con algunas otras funciones constitucionalmente previstas.

123 En resumen, la reducción unilateral y arbitraria de la Cámara de Diputados del gasto neto total del Instituto Nacional Electoral, sin análisis o trabajo técnico alguno que contenga las suficientes razones de dicha reducción, es un acto que produce su subordinación, que en términos del *test* de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “no sólo implica que el poder subordinado no pueda tomar autónomamente sus decisiones (como en la dependencia), sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante”. De esta manera, dicha subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.⁵⁵

124 En ese sentido, la subordinación tiene dos manifestaciones materiales. Primera, el Instituto Nacional Electoral no podría organizar los procesos electorales de 2020 y 2021, o expedir millones de credenciales para votar gratuitamente, o fiscalizar a los partidos políticos y candidaturas, o monitorear las transmisiones de radio y televisión, o bien dejaría de cumplir con sus obligaciones legales, como es pagar salarios o impuestos, al no contar con las suficiencias presupuestales por la reducción arbitraria de la Cámara de Diputados. Segunda, el Instituto Nacional

⁵⁵ Jurisprudencia P./J. 80/2004, Novena Época, registro 180648, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página: 1122, “DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”

Electoral dependería de una ampliación presupuestaria que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le autorice.

125 En otras palabras, el hecho de que la Cámara de Diputados haya reducido \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.) del presupuesto del Instituto Nacional Electoral trae dos consecuencias. Primera, impide que el Instituto, de forma independiente y autónoma, organice los procesos electorales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, expida millones de credenciales para votar gratuitamente, fiscalice a los partidos políticos y candidaturas, monitoree las transmisiones de radio y televisión, o bien, que cumpla con otras obligaciones constitucionales y legales, como el elemental pago de remuneraciones o impuestos. Segunda, subordina al Instituto a la decisión del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la adecuación presupuestaria.

126 De ahí que se estime inconstitucional, por violar los artículos 41, base V, apartado A, y 49, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 35, fracciones I y II, constitucional, el ANEXO 1 GASTO NETO TOTAL, en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral que establece la cifra de \$26,819,801,594 (Veintiseis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), en la que se refleja la reducción injustificada, arbitraria e irresponsable de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), cuando se contrasta con la de \$27,689,801,594 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales, como se explicó (párrafo 5), \$7,226,003,636 (siete mil doscientos veintiseis millones tres mil seiscientos treinta y seis pesos M.N.)



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

corresponden al financiamiento público de partidos políticos. En consecuencia, también es inconstitucional el ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos), en lo relativo a la reducción que consigna para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral.

127 De esta manera la Cámara de Diputados mediante las referidas adecuaciones, afecta las competencias y funciones de este Instituto en la organización de procesos electorales y proyectos relacionados con la materia, sin sustento alguno que compruebe su actuar conforme al artículo 74, fracción IV de la Constitución Federal en relación con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pues de manera discrecional reduce el presupuesto de este órgano autónomo, pasando por alto sus las necesidades y prioridades en su cometido constitucional, cuya naturaleza de índole electoral se diferencia de otros poderes y órganos autónomos, de ahí el acento en la subordinación acaecida a la autonomía de este Instituto.

IV.B. El ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos; así como el artículo Vigésimo Primero transitorio del Presupuesto de Egresos 2020, vulneran la autonomía del Instituto Nacional Electoral

128 La determinación sobre las remuneraciones de las y los servidores públicos del Instituto forma parte de su autonomía presupuestaria y, específicamente, su autonomía de gestión. Como se relata en el inciso e) del párrafo 86 de la controversia constitucional 31/2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la restricción que la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal impuso al Tribunal Electoral de esa entidad, para otorgar bonos a sus trabajadores. Dicha declaratoria obedeció a que ese Tribunal Constitucional considerara que la intromisión en lo relativo a las remuneraciones del personal implicaba una violación al principio de autonomía de los órganos constitucionales

autónomos. Con lo anterior, es claro que la fijación de remuneración constituye una especie del género autonomía presupuestaria.

129 Al respecto es propicio traer a colación el recurso **de reclamación 14/2019-CA, derivado de la Controversia 7/2019**, donde ese Alto Tribunal sostuvo que son actos de incidencia, aquellos que condicionen la integridad de las remuneraciones de los integrantes de los órganos constitucionales autónomos.

130 Lo anterior al establecer que es una máxima de los modelos de Estado constitucional que el principio de división de poderes debe garantizar que ciertos órganos tengan garantías de estabilidad salarial, de permanencia y suficiencia presupuestal, para efectos de aislar a sus titulares de presiones de los otros poderes, pues sólo mediante un blindaje presupuestal es posible obtener la independencia de criterio de los integrantes de esos órganos, lo cual es condición de existencia de una genuina autonomía en el ejercicio de competencias constitucionales diseñada para ejercerse bajo racionalidades distintas a la de oportunidad política.

131 Así, el Pleno precisó que un elemento del diseño introducido por el Constituyente fue el carácter 'contra-mayoritario' de los órganos constitucionales autónomos, en virtud del cual dichos órganos deben entenderse aislados de los órganos democráticamente elegidos, así como de los sujetos regulados; en otras palabras, la racionalidad del diseño constitucional descansa la tutela de esas precondiciones que permiten el posicionamiento contra-mayoritario de dichos órganos dentro del principio de división de poderes.

132 Esa consideración similar ha sido reiterada en el recurso de reclamación 12/2019-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 5/2019;



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

recurso de reclamación 30/2019-CA, del incidente de suspensión de la controversia constitucional 45/2019, y el recurso de reclamación 32/2019-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 75/2019. Por ello, es factible señalar que, adicional e independientemente de que ese Tribunal considere inconstitucional la reducción del gasto neto total, deberá hacer lo propio con el ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos, así como con el artículo Vigésimo Primero transitorio del Presupuesto de Egresos 2021. Pero más allá de lo anterior, existen otras razones que confirman la inconstitucionalidad del mencionado anexo, las cuales serán expuestas a continuación.

133 En el caso que nos ocupa, existe una intromisión de la Cámara de Diputados en una cuestión ajena. En el momento que la Cámara de Diputados decidió modificar los tabuladores del Instituto Nacional Electoral, se inmiscuyó en una cuestión ajena, como lo es la organización y funcionamiento del Instituto. Al determinar los límites máximos de las remuneraciones, la Cámara de Diputados está imponiendo limitaciones al Instituto Nacional Electoral en su gestión presupuestaria y a su potestad de interpretar, en ejercicio de su autonomía, el marco constitucional y legal aplicable, al subrogarse a éste y dictar errónea y limitadamente el alcance y sentido de la lectura del marco normativo al que debe sujetarse.

134 En este caso, es una violación fundamentalmente igual, pues la Cámara de Diputados determina, mediante un acto unilateral, los montos de las retribuciones que se otorgan al Instituto. Al hacerlo, altera por completo el esquema de funcionamiento y organización en tanto lo obliga a operar conforme a estándares decididos por la propia Cámara.

135 Lo anterior, cobra operatividad al tener presente no solo la naturaleza del Instituto Nacional Electoral, como órgano constitucional autónomo, sino su especial función

constitucional conforme al artículo 41, base V, Apartados A, B, C y D, de la Constitución Federal. De tal forma que las remuneraciones de sus trabajadores están directamente relacionadas con sus atribuciones, entre otras, la de procurar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; preparar la jornada electoral; llevar a cabo los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; declarar la validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; el cómputo de la elección de Presidente de la República; la capacitación y geografía electorales; fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos; así como administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales y locales.

136 De esta forma los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones del Instituto Nacional Electoral, se realiza material y humanamente, lo que implica una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los partidos políticos, lo cual se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales, emitir sus decisiones con plena capacidad operativa, imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, limitaciones, sugerencias o insinuaciones provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado.

137 En consecuencia, el ámbito competencial del Instituto Nacional Electoral y los recursos que requiere para su cometido, es un pilar en la existencia de un Estado democrático, pues en la medida que realiza sus atribuciones sin algún tipo de injerencia, protege los derechos políticos de la ciudadanía, así como asegura que los procesos de renovación del Poder Público se lleven a cabo con apego a los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

138 En este orden de ideas, a continuación, se expondrán cuatro argumentos que confirman que el ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos, así como el artículo vigésimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos 2021, violan la autonomía del Instituto Nacional Electoral:

- a) La Cámara de Diputados carece de criterios objetivos constitucionales y legales para establecer la Remuneración Total Anual del Presidente de la República, como límite máximo de percepciones ordinarias y remuneraciones totales anuales del personal del Instituto Nacional Electoral, en razón de existir un vacío legal, dado que no se cumplió con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2019 y su acumulada 108/2019 promovidas por la CNDH y Senadores del Congreso de la Unión, en cuanto a normar esos aspectos. No obstante, al aprobar el Presupuesto de Egresos de 2021, tampoco se utiliza criterio o base alguna para el establecimiento dicha Remuneración Total, ni mucho menos, para señalar los mínimos y máximos en cuanto a las retribuciones del personal del Instituto, lo que hace dichos actos completamente arbitrarios.
- b) La Cámara de Diputados viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral, al instruir que se ajuste a los "límites de la percepción ordinaria total" que señala para cada uno de los supuestos cargos tabulares del propio Instituto, así como a la remuneración total anual del Presidente de la República establecida, arbitraria y unilateralmente, en el Presupuesto de Egresos 2021, y eliminar, en consecuencia, su potestad de interpretar en el ámbito de su autonomía y

especialidad técnica, el dictado constitucional y legal que rige las remuneraciones de las y los servidores públicos.

- c) La Cámara de Diputados, al instruir al Instituto Nacional Electoral a ajustar las percepciones ordinarias y las remuneraciones del personal a los máximos que como "límites de la percepción ordinaria total" señala para cada uno de los supuestos cargos tabulares, así como a la remuneración total anual que aprobó para el Presidente de la República, lo obliga a violar los derechos laborales y, por ende, los derechos humanos del personal al que dicho ajuste le represente una reducción salarial.
- d) La Cámara de Diputados viola el artículo 127 constitucional, al establecer sin sustento legal o motivacional alguno las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.
- e) La Cámara de Diputados carece de atribuciones para controlar la constitucionalidad de los proyectos de presupuestos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV.B.1. La Cámara de Diputados carece de criterios objetivos constitucionales y legales para establecer la Remuneración Total Anual del Presidente de la República, como límite máximo de percepciones ordinarias y remuneraciones totales anuales del personal del Instituto Nacional Electoral

139 La Cámara de Diputados ha actuado de forma arbitraria y discrecional al sujetar al personal del Instituto a lo que denomina "límites de la percepción ordinaria total del Instituto Nacional Electoral", señalando no sólo cuál es la supuesta remuneración máxima para las y los servidores públicos del Instituto (consejeras y consejeros),



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

sino que establece mínimos y máximos a las percepciones ordinarias de cada uno de los supuestos cargos tabulares que, en su concepto, existen, limitando todas ellas a montos por debajo de la Remuneración Total Anual del Presidente de la República, todo ello en el Presupuesto de Egresos 2021.

- 140 Entre 2002 y 2008, se presentaron, al menos, 15 iniciativas de reforma constitucional con el fin de establecer un parámetro legal que impidiera abusos y redujera la discrecionalidad bajo la cual los propios servidores públicos se fijaran remuneraciones desproporcionadas. Así lo señala la iniciativa (Gaceta Parlamentaria 24 de enero de 2007) presentada por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en la que establece:

No hay que olvidar que uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en ciertos ámbitos de gobierno. Sobre todo, tratándose de regiones en los [sic] que se viven condiciones de verdadera miseria y en donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores es abrumadora.

- 141 En relación con esos excesos, otras iniciativas hicieron énfasis en la necesidad de eliminar la discrecionalidad en relación con las remuneraciones. Por ejemplo, el entonces Diputado Federal, Tomás Cruz Martínez, presentó una iniciativa (Gaceta Parlamentaria del 9 de diciembre de 2003) que señaló lo siguiente:

Es imperativo de la moral pública y de la democracia terminar con el ejercicio discrecional de la hacienda pública, que beneficia a un sector muy reducido de los mismos con reducciones salariales que ofenden y agravan a la sociedad en su conjunto y que son contrarias a los principios de justicia, igualdad, equidad y solidaridad.

- 142 Esa posición también la presentó el entonces Senador de la República, Pablo Gómez Álvarez, en una iniciativa (Diario de los Debates 9 de noviembre de 2006) que señala:

La política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como en las entidades públicas de todo género y los poderes de las entidades federativas e, incluso, en los ayuntamientos ha sido, hasta ahora, la discrecionalidad, es decir, la ausencia de una auténtica política que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y de las finanzas públicas.

143 El 24 de agosto de 2009, se publicó un Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma, en lo relativo al artículo 127, establece que, en principio, ningún servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, previendo asimismo algunas excepciones. Es decir, se estableció como punto de control de los excesos, como referente, la remuneración del Presidente de la República.

144 Es destacable el hecho de que, si bien la base II del artículo 127 constitucional estableció un límite máximo de remuneraciones para servidores públicos, también lo es que dicha base, al leerse en armonía con otras bases del mismo artículo y con otros artículos de la Constitución, **en realidad establece un punto de referencia y no una regla sin excepciones.** Podemos comenzar con observar que la propia base III del propio artículo 127 (misma frente a la cual la Cámara de Diputados es totalmente omisa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, como si no existiera ni fuera parte de un marco constitucional complejo) establece:

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

145 Lo anterior implica que, incluso, dentro del mismo artículo 127 se prevén excepciones al límite máximo en relación con la jerarquía y con el parámetro



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

máximo (Remuneración Total Anual del Presidente de la República). Además, si el artículo es aplicable a las y los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno (32 gobiernos locales y más de 2,400 municipales), es indispensable reflexionar sobre el hecho de que bajo diferentes circunstancias podría haber regímenes especiales. En el orden nacional, ese es precisamente el caso del Instituto, que por mandato del artículo 41, base V, apartado A, sujeta las relaciones laborales con su personal a la ley electoral y al estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General. Por ello, se estima que el límite máximo de la base II, del artículo 127, es solo una referencia y no una obligación sin excepciones, como indebidamente lo estimó la Cámara de Diputados, para el caso de los órganos constitucionales autónomos como es el caso del Instituto Nacional Electoral.⁵⁶

146 Cabe mencionar que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un límite de percepción ordinaria de \$203,899 (doscientos tres mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), que refleja un incremento en relación con el mismo concepto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, que era de \$152,467.17 (ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 17/100 M.M.). Es decir, la consecuencia de la nueva regla de límite máximo de remuneración establecido por el artículo 127 constitucional fue un incremento en el límite máximo de percepción ordinaria del Presidente de la República, no una reducción.

147 Desde entonces, se han transparentado las percepciones y remuneraciones de las y los servidores públicos de la Federación para evitar excesos en las mismas.

⁵⁶ Es importante resaltar que para el caso del Poder Judicial de la Federación, las remuneraciones no se sujetan necesariamente por debajo de la Remuneración Total Anual del Presidente de la República.

Pero, también, desde entonces, existe un vacío legal que no se debe pasar por alto. No se han emitido criterios objetivos que den certeza jurídica al procedimiento para establecer el monto de la Remuneración Total Anual del Presidente de la República. Es decir, no solo existe un régimen especial de alcance en la aplicación del artículo 127 constitucional para el caso del Instituto Nacional Electoral, sino que también existe un problema en la construcción del parámetro que constituye la adecuada remuneración total anual del Presidente de la República, bajo la característica de irrenunciable y proporcional a las responsabilidades y, además, como parámetro para que se fijen las remuneraciones anuales de todos los cargos tabulares de toda la estructura estatal, incluidos no solo los poderes de la Unión, sino además los órganos constitucionales autónomos y el resto de los órdenes de gobierno.

148 El artículo 127 constitucional es una norma de carácter complejo. Es incorrecto suponer que su contenido normativo se agota en la fracción II, de dicho dispositivo. Por el contrario, en primer término, debe leerse e interpretarse en su integridad y en conjunción con las demás disposiciones constitucionales que rigen el derecho humano a la remuneración salarial. En segundo lugar, es una norma que requiere disposiciones legales complementarias, que establezcan con claridad sus alcances y límites. Quizás esa es la razón por la que la fracción VI, de dicho precepto constitucional establece que el Congreso de la Unión, no la Cámara de Diputados, debe expedir leyes para hacer efectivo el contenido de dicho artículo y las disposiciones constitucionales relativas.

149 Hasta 2018, el Congreso de la Unión expidió una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (suspendida



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

por decisión de ese Alto Tribunal y declarada inconstitucional en algunos de sus artículos). Sin embargo, ni la Constitución, ni dicha ley reglamentaria establecen criterios objetivos para fijar la remuneración para el Presidente de la República. Dicho de otra forma, sigue pendiente resolver la discrecionalidad con la que en el pasado se fijaban las remuneraciones.

150 Hoy no existe un parámetro legal bajo el cual se calcule la remuneración total anual del Presidente de la República, incluyendo en la misma todas las percepciones en efectivo o en especie, tal como lo determina la base I, del citado artículo 127, constitucional (otra disposición que está totalmente ausente en la redacción del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por la Cámara de Diputados).

151 **Esa falta de certidumbre en el modo en que se integra el salario del Presidente de la República, impactó de forma injustificada en la reducción de las remuneraciones de los servidores públicos del INE,** lo cual ya ha sido analizado mediante la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del artículo 6, fracción III (la totalidad de la fracción en sus párrafos primero y segundo), de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, **normatividad de donde proviene el vicio de origen relativo a la falta de parámetros objetivos en la fijación del salario del Presidente de la República en el PEF 2021,** con base en las consideraciones siguientes:

[...]

El artículo 6 reproducido enumera las bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, entre otras, que ningún servidor público puede tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: el desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones

generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización; que en ningún caso se cubre remuneración con efectos retroactivos salvo resolución jurisdiccional, así como contiene reglas sobre lo que se denomina "dictamen de compatibilidad".

El diverso 7 ordena que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, los cuales contendrán los tabuladores de remuneraciones mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, los montos de sueldos, salarios y prestaciones. Así como que el presupuesto de egresos contendrá la remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda; y que la remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fideicomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I del propio artículo.

El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja.

Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La misma problemática se tiene en el artículo 7 del ordenamiento impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permite esa discrecionalidad porque solamente establece que las remuneraciones se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual, precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que confirma que se está ante una regulación que no fija límites a la autoridad, cuando el ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria, pues por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de autoridad debe estar acotado o encausado conforme a la Constitución y a las leyes que de ésta derivan, sin embargo, en el caso, del examen relacionado a los preceptos cuestionados se acredita que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer remuneraciones queda sujeta a los deseos de esa autoridad sin limitación alguna o criterio orientador que impida establecer sueldos que inobserven los principios del artículo 127 constitucional.

La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda alguna de los razonamientos expuestos por el Constituyente Permanente en el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, de donde se desprenden los mandatos dirigidos al Congreso de la Unión, quien debía hacer efectivo el contenido del artículo 127 constitucional y de las disposiciones también constitucionales relativas.

En ese contexto, se acentúa que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, **a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público**, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público.

A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se introdujeron hipótesis normativas que simplemente aluden a ese referente máximo, pero **no existen otras que contengan los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal**, cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho de que los preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución no hace a la ley ordinaria inconstitucional, también lo es que las órdenes fijadas en ese precepto constitucional son claras, por cuanto el legislador debía contemplar supuestos normativos que desarrollaran no sólo ese precepto constitucional, sino el resto de disposiciones del mismo rango que impacten en el servicio público.

En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis **no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud**, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie.

Por añadidura, el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, **a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones**, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración.

Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la República es el referente que irradia en la fijación del resto de remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de remuneraciones el Poder Reformador exigió proporcionalidad según las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, ya que no contienen los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, según se desprende de lo expuesto en el dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el Pleno de ésta, por cuanto se expuso la necesidad de que los sueldos respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, expresión ésta que subraya la importancia de haber introducido el término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, desde luego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los niveles de responsabilidad.

Lo antedicho guarda importante relación con un diverso mandato que permite que existan servidores públicos que puedan obtener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico, para lo cual **el Poder Reformador introdujo cuatro excepciones en la fracción III del artículo 127 constitucional, a saber, que el excedente de la remuneración: a. Sea consecuencia del desempeño de varios cargos públicos; b. Sea producto de las condiciones generales de trabajo; c. De un trabajo técnico calificado; o d. Por especialización en la función**, con la condición de que la suma de esas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

desde luego, de que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

A pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que **no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general** de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe.

En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos.

Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos.

En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada entre otras garantías la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y **en lo que concierne a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas.**

Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; **en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos.**

Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en cuenta:

- Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto;
- **Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;**
- **Especialización;**
- Riesgo asociado al desempeño de las funciones;
- Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;
- Índice inflacionario;
- Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;
- **Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,**
- La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen.

Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional.

Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, **además de que no pueden ser disminuidas;** aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, **principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas** para las funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad.

En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de Diputados quede al arbitrio de la autoridad.

Cabe aclarar que estas conclusiones no equivalen a desconocer la facultad exclusiva que tiene esa Cámara para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, pues lo que aquí se está acentuando es que esa facultad no se ejerza de manera tal que se traduzca en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o tan escueta que afecte la eficacia



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

y calidad de la función pública, razones que explican la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, que no sólo violan el artículo 127 constitucional, sino también aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal.

De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[...]

152 La carencia de criterios objetivos en la Ley de Remuneraciones y la falta de cumplimiento por parte del Congreso de la Unión en atender lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia, ha permeado en el PEF 2021 el cual debe atender los parámetros de dicha ley y, en su ausencia, obliga a la Cámara de Diputados a que, al fijar las remuneraciones, haga un ejercicio especial de motivación reforzada, pues debe de estar consciente que la Remuneración Total Anual de la presidencia de la República representa el parámetro bajo el cual, el resto de los poderes y los órganos autónomos, deben fijar las remuneraciones de sus funcionarios.

153 Lejos de ello, la Cámara de Diputados aprobó, sin valoración alguna, una remuneración total anual para el Presidente de la República que no responde, sino a la propuesta enviada por quien ocupa el cargo. Dicho de otra forma, ¿la consecuencia legal de la reforma constitucional de 2009 debe ser que la persona que ocupe el cargo de Presidente de la República defina unilateralmente su remuneración y, por ende, la del resto de las y los servidores públicos? En otras palabras, hipotéticamente e incluso irrisoriamente ¿si una persona que ocupa el cargo de Presidente de la República decidiera percibir mil pesos mensuales como remuneración total, entonces el personal de los otros dos Poderes de la Unión y

los órganos constitucionales autónomos deberían sujetarse a ese salario máximo de mil pesos?

154 Más allá de lo anterior, la Cámara de Diputados, además de fijar de manera arbitraria la remuneración de la presidencia de la República, lo hace de forma deficiente ya que no incorporó las percepciones en especie, como son entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad y servicios de salud, asimismo, establece mínimos y máximos a los cargos tabulares del Instituto, sin sustento alguno y obviando por completo la información aprobada por el Consejo General en su anteproyecto de presupuesto, así como la naturaleza no solo del órgano, sino de todos y cada uno de los cargos que existen en el Instituto, violentando con ello, los derechos que el personal de este órgano constitucional autónomo tienen en el marco de otras disposiciones constitucionales y de leyes que de ellas derivan, como son las condiciones generales de trabajo contenidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y las normas que de él derivan.

155 De esta forma, el PEF 2021 no contiene elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que debiera incluir, lo que no hace, todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I, del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

156 Finalmente, debemos mantener en mente que, si bien la finalidad del límite máximo establecido en la fracción II del artículo 127 constitucional, es evitar abusos y excesos de servidores públicos, también en dicho precepto constitucional se prevé el derecho humano a una remuneración adecuada e irrenunciable, que deberá ser siempre proporcional a la responsabilidad del cargo que se desempeñe. Si se permite por el decreto en cuestión que la remuneración total anual del Presidente de la República que sirve como parámetro para fijar las remuneraciones de los cargos públicos, incluidos los de todos los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, pueda ser determinada de forma unilateral y discrecional, los impactos al monto de esas remuneraciones podrían constituir un mecanismo inconstitucional de control político, en perjuicio de la función y competencia de otros poderes, estados, municipios y órganos autónomos como lo es Instituto Nacional Electoral.

157 Adicionalmente, sin criterios objetivos constitucionales ni legales, **el anexo 23.8 del PEF 2021 ignora las facultades de este órgano constitucional autónomo de poder establecer las remuneraciones de su personal conforme a las condiciones generales de trabajo en términos del artículo 41, fracción V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, además fija "mínimos y máximos" a los cargos que estima existen en el Instituto, sin consideración alguna que permita el análisis sobre si se tomó en cuenta tan solo uno de los requisitos constitucionales de los salarios, como es la proporcionalidad, por no mencionar el cuidado de respetar otros derechos humanos del personal; por tanto, la pregunta es ¿hasta dónde puede reducirse el monto de la remuneración total anual del Presidente de la República, de forma tal que no se deterioren las instituciones y los pesos y contrapesos del régimen democrático? Una pregunta más, al no haber parámetros constitucionales y

legales para resolver la pregunta anterior ¿puede la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, tomar una decisión que afecta la independencia y la autonomía de los otros Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos?, o bien, ¿puede la Cámara de Diputados establecer un catálogo de puestos para el Instituto (que no coincide con el enviado en el anteproyecto de presupuesto) y fijar mínimos y máximos a sus retribuciones, sin consideración alguna?

158 En principio la respuesta parece ser negativa. La Cámara de Diputados debe tomar como base lo que el propio Instituto, en uso de su autonomía y pleno ejercicio de sus facultades aprobó y, en todo caso, bajo una interpretación sistemática de todo el ordenamiento y bajo una motivación reforzada, *señalar*, como lo indica el artículo 75 constitucional, la retribución que corresponda a los empleos o cargos que del Instituto.

159 El Congreso de la Unión tenía la obligación constitucional de adoptar las medidas necesarias a través de las normas generales que tuviera a bien a emitir, a fin de resolver fundada y motivadamente, sobre los alcances y limitantes del artículo 127 constitucional, así como las bases y parámetros para que se puedan fijar las remuneraciones de las y los servidores públicos, en pleno respeto a sus derechos humanos, sin que lo hubiese hecho, por lo que se transgrede la propia Constitución Federal en perjuicio del Instituto Nacional Electoral y su autonomía en términos de lo establecido por los artículos 41, fracción V, apartados A y D, y 49, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

160 Al ordenar que las remuneraciones en el servicio público respondan a criterios objetivos, el Constituyente Permanente buscó que las remuneraciones en el ámbito público no estén sujetas exclusivamente a la discrecionalidad política. De



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

esa manera, las instituciones públicas pueden favorecer la continuidad de sus empleados mediante la estabilidad salarial, máxime en órganos autónomos como el electoral, en el que la imparcialidad, la independencia y la objetividad son principios rectores y que, por ello, deben existir garantías institucionales para garantizarlos.

161 En esa lógica, el artículo 127 constitucional no solo prevé el goce de un derecho humano, sino también funge como garantía de funcionamiento institucional frente a coyunturas políticas que pudieran favorecer una reducción generalizada de remuneraciones.

162 Curiosamente, una referencia puntual para evitar situaciones como la que dan pie a la presente controversia se encuentra en la Constitución de 1917 que establecía lo siguiente:

Art. 127.- El Presidente de la República, los Individuos de la Suprema Corte de Justicia, los Diputados y Senadores, y demás funcionarios públicos de la Federación, e nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por ley y pagada por el Tesorero Federal.

Esta Compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el período en que un funcionario ejerce el cargo.

163 El efecto material de aplicar una reducción en la remuneración total anual del Presidente de la República sin criterios constitucionales y legales para ello, al igual que a las remuneraciones del personal del Instituto, puede resultar en el debilitamiento institucional. Y, en el caso del Instituto Nacional Electoral, ese debilitamiento institucional representa, también, un debilitamiento de la democracia.

164 Así lo reconoce el Constituyente en el 2009, cuando al expedir el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de agosto de 2009, establece en su artículo transitorio tercero lo siguiente:

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

- a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.*
- b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
- c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.*

165 Adicionalmente, cabe reflexionar sobre el hecho de que, desde la puesta en vigor del artículo 127 vigente, el Constituyente establece una línea clara de aplicación de dicho precepto legal. El precepto constitucional parece no requerir de aplicación especial para el caso del Poder Ejecutivo Federal, es decir, para todo el personal que le reporta jerárquicamente al Presidente de la República, pero ocurre algo distinto con otros poderes y órganos constitucionales autónomos. Los poderes judiciales federal y estatales, así como los órganos constitucionales autónomos se ubican dentro del artículo tercero referido, mientras los relativos a



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

los poderes legislativos federal y locales se ubican en los artículos transitorios cuarto y quinto:

***Cuarto.** El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.*

***Quinto.** El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.*

166 En ninguno de los casos, un Poder de la Unión sujeta o somete a otro poder u órgano autónomo. Es el Constituyente el que establece las reglas para la entrada en vigor de ese decreto en particular. Reglas que se agotan al actualizarse los supuestos previstos y que hoy no podría establecer unilateralmente la Cámara de Diputados, pues de acuerdo con esas normas transitorias que se aprecian claramente, se extraen principios y garantías institucionales con la misma proyección normativa que aquellas, en beneficio de todos las y los servidores públicos.

167 Cabe agregar, que en atención a la autonomía presupuestaria del Instituto Nacional Electoral, conforme a los artículos 41 constitucional, y 5, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, está exento de sujetarse a las disposiciones que emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, por lo que los límites y máximos señalados en los anexos 23.8.1.A, y 23.8.1.B, así como el límite mal integrado sobre remuneración total anual fijada para el Presidente de la República, además de no guardar relación con los puestos acordes a este Instituto, no guardan sustento, objetividad y congruencia, trastocando el sistema de remuneraciones del servicio

público y con ello la autonomía del Instituto Nacional Electoral en fijar las de sus trabajadores con base en sus atribuciones y obligaciones constitucionales.

168 Finalmente, puede decirse que no sólo sería inconstitucional que la Cámara de Diputados violara la autonomía del Instituto Nacional Electoral al ordenarle o modificar sus percepciones y remuneraciones totales anuales, sino que, además, lo sería por dos vías si, al hacerlo, se toma como base una cifra construida de forma arbitraria. En otras palabras, no solo se estima que el límite máximo de la base II del artículo 127, es solo una referencia y no una obligación sin excepciones para el caso de los órganos constitucionales autónomos como es el caso del Instituto Nacional Electoral; sino que también se estima que la Cámara de Diputados ha establecido de forma unilateral y arbitraria la cifra que se construye con base en ese precepto legal.

IV.B.2. La Cámara de Diputados viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral al solicitarle que se ajuste, como límite máximo de percepciones ordinarias y remuneraciones totales de su personal a la remuneración total anual del Presidente de la República establecida, arbitraria y unilateralmente, en el Presupuesto de Egresos 2021.

169 La independencia de los órganos constitucionales autónomos ha sido tutelada por el Congreso de la Unión a través de diversas disposiciones. En el caso de la autonomía presupuestaria inherente a los órganos constitucionales autónomos, el Congreso de la Unión ha dispuesto, a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, diversas disposiciones que permiten establecer que corresponde al Instituto Nacional Electoral definir las percepciones ordinarias y las remuneraciones totales anuales de su personal.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

170 En el marco del artículo 5, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Instituto Nacional Electoral, como ente autónomo, elabora y aprueba su propio proyecto de presupuesto.

171 El Ejecutivo Federal no puede comentar ni modificar el proyecto de presupuesto porque, en términos de ese mismo artículo, tiene la única obligación de integrarlo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envíe a la Cámara de Diputados. De igual forma en términos del referido precepto, el Instituto Nacional Electoral, en el marco de su autonomía, también ejerce su presupuesto sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; realiza sus propios pagos sin intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni de la Tesorería de la Federación; y lleva su propia contabilidad.

172 En lo relativo al personal del Instituto Nacional Electoral, el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución establece que las relaciones de trabajo entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos se rigen bajo la ley electoral y el Estatuto que, con base en ella, apruebe el Consejo General, esto es, existe un régimen laboral especial que se desarrolla con base en esa cláusula habilitante que le permite a dicho órgano, en ejercicio de su autonomía, expedir las normas que lo regulan. Se trata de una disposición que responde a la especialización, profesionalización y conocimiento técnico requeridos para el personal del Instituto Nacional Electoral. Dicha disposición se introdujo en la reforma constitucional de 1996 para el entonces Instituto Federal Electoral y ese principio se ha mantenido incluso hasta la reforma por la que se crea el Instituto Nacional Electoral (artículo 41 base V, apartado A, de la Constitución vigente).

173 Bajo el régimen legal mexicano, el concepto relaciones de trabajo incluye el de la remuneración. Siempre que existe un conflicto de índole laboral con relación a la remuneración que percibe una persona a cambio de un servicio personal subordinado, ese conflicto se analiza en el marco de una relación laboral. Lo anterior se refuerza con lo dispuesto por el Congreso de la Unión a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la que establece que corresponde a la Unidad de Administración del Instituto Nacional Electoral, emitir su manual de remuneraciones, incluyendo el tabulador en términos de lo dispuesto por el artículo 66 de dicha ley, el cual a continuación se transcribe:

***Artículo 66.** La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y **los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones** incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente.*

Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de mayo de cada año.

174 El límite de percepciones y remuneraciones del artículo 127 constitucional, con base en la remuneración del Presidente de la República, se introdujo en 2009. Desde entonces, el apartado A de la base V el artículo 41 de la Constitución ha sido modificado en dos ocasiones. Una el 10 de febrero de 2014 y otra el 27 de mayo de 2015, y en ninguna de ellas se ha modificado la premisa de que las relaciones de trabajo entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores públicos se rige bajo la ley electoral y el Estatuto que, con base en ella, apruebe



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

el Consejo General.⁵⁷ Hoy el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

*El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. **Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.** Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. **Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.** Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.*

175 Así, la intención del Constituyente ha sido mantener ese régimen especial del Instituto Nacional Electoral. Un régimen que, por mandato constitucional que desde la reforma de 1989-1990 persiguiera tres propósitos definidos: 1) evitar que los funcionarios responsables de organizar las elecciones fueran impuestos por las autoridades; 2) lograr que estos funcionarios en su desempeño fueran refractarios a las presiones de partidos y actores políticos y, 3) que sus actos se apegaran escrupulosamente a la ley. Incluso, en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996, misma que fortaleció la autonomía constitucional del entonces Instituto Federal Electoral, se expresa con contundencia que “se pretende que estos consejeros electorales gocen de una serie de garantías necesarias para complementar su debido apego a los principios ya mencionados.

⁵⁷ El 30 de octubre de 2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que actualmente se encuentra vigente, el cual constituye el documento que regula las condiciones generales de trabajo, los derechos y obligaciones de sus integrantes, así como los criterios para la definición de salarios, compensaciones, procedimientos de selección, ingreso, capacitación, promoción, evaluación y permanencia, del personal de carrera como administrativo del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Se trata de dar eficacia a su función y autonomía en su desempeño, dotándolos de estabilidad en sus puestos, de seguridad económica y de garantías jurídicas para el libre ejercicio de sus atribuciones”.⁵⁸

- 176 Se trataba de crear un servicio civil de carrera integrado por profesionales, que garantizara imparcialidad y legalidad en la ejecución de cada una de las tareas que conforman la organización electoral. Además, se regula por disposiciones específicas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece el Servicio Profesional Electoral Nacional, que funciona bajo sus propias reglas, entre las que incluye normas sobre niveles, rangos, acceso y sanciones, entre otros temas.
- 177 Adicionalmente hay que señalar que los conflictos laborales que se susciten entre el Instituto Nacional Electoral y sus trabajadores y trabajadoras tienen una vía jurídica y una jurisdicción especial, pues se tramitan y resuelven a través de juicios laborales establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y ante las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, no ante instancias y por medios laborales ordinarios.
- 178 En línea con lo anterior, hoy el Instituto Nacional Electoral, en el marco con lo establecido por el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional, cuenta con un Servicio Profesional Electoral que “comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades

⁵⁸ Índice del proceso legislativo correspondiente a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, Poder Judicial de la Federación, 2017, p. 130, <https://goo.gl/c6Qnih>.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.”

179 Tales disposiciones constitucionales se desarrollan en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 30, párrafo 3, regula el Servicio Profesional Electoral, en los términos siguientes:

3. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente artículo.

180 En atención a lo anterior, la capacidad técnica, experiencia acumulada y la imparcialidad son características que distinguen a las y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en especial, de los miembros del servicio profesional, que ha servido de fundamento para que la Auditoría Superior de la Federación lo haya reconocido como el segundo más consolidado de los 26 que operan en México, lo cual también se reconoció en la reforma electoral de 2014. En la exposición de motivos de dicha reforma se estableció que el Instituto Nacional Electoral sería responsable de construir un servicio profesional electoral nacional, con bases similares a las del servicio profesional que operó en el Instituto Federal Electoral a lo largo de más de dos décadas.

181 Así, es dable aseverar que el Instituto Nacional Electoral es quien cuenta con las facultades constitucionales y legales para aplicar de forma armónica y coordinada los artículos 41, Base V, apartado A y 127, de la Constitución, en relación con los

diversos 1°, 5° y 123, apartado B, fracción XIV, constitucionales, en términos de la legislación citada. Y eso es precisamente lo que hizo en relación con el proyecto de presupuesto de 2021, aprobado por el Consejo General el 26 de agosto de 2020.

182 En otras palabras, el presupuesto de egresos propuesto por el Instituto Nacional Electoral cumple con los requisitos previstos constitucionalmente. Entre ellos con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también el resto del marco normativo que rige las relaciones laborales del Instituto con sus trabajadores, esto es, los artículos 1°, 5°, 41, 123, 127 y 133 constitucionales. Dicho marco normativo constituyó el parámetro normativo para fijar las remuneraciones de las y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, atribución que compete sólo a éste y no a la Cámara de Diputados.

183 Cabe precisar que el régimen de excepción está limitado o tasado a que la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

184 Lo anterior es trascendente en la conformación del presupuesto del INE, en la medida de que tal disposición constitucional debe ser interpretada en armonía con el resto del ordenamiento jurídico, buscando la interpretación que permita asumir la coexistencia coherente de normas que pudieran atender a fines antagónicos o incompatibles.

185 En este orden de ideas, la interpretación armónica e integral de las disposiciones referidas podría conducir a sostener, en principio, que los servidores públicos del



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE —como personal perteneciente a un organismo constitucional autónomo especializado e independiente—, se rigen bajo las reglas de excepción previstas tanto en la disposición constitucional como en la reciente ley, esto es, bajo la regla de especialización y las propias condiciones de trabajo existentes para el personal especializado que conforman los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, en su modalidad de servicio profesional electoral y de la rama administrativa.

186 Sin embargo, su aplicación debe analizarse también a la luz del principio de autonomía que rige al propio INE, así como con la garantía de independencia funcional y financiera —tanto en su vertiente colectiva como individual— prevista en la CPEUM, y con la protección a los derechos de las personas que laboran en él, a fin de garantizar los derechos laborales del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa del INE.

187 La forma de armonizar los principios y la regla estipulada respecto a la remuneración establecida por el titular del Ejecutivo, es que la determinación de dicha remuneración se fije no solo con base en los principios que lo rigen como remuneración de ese servidor público, sino como referente que irradia todo el sistema, de manera tal que, además, pueda objetivamente tomarse sólo como un referente respecto de los otros Poderes del Estado de los órganos autónomos, y desligada del cargo o de la persona que lo ejerce, a efecto de dar coherencia a dicha regla con los principios de división de Poderes, autonomía y las garantías de independencia de los citados órganos del Estado, pues de lo contrario el establecimiento de la remuneración del Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, implicaría una relación de subordinación anual de los demás Poderes de la Unión y de los órganos constitucionales autónomos.

como el INE, respecto al Ejecutivo, porque este último poder estaría en aptitud de decidir sobre un aspecto que debe ser decidido por cada Poder u órgano constitucional autónomo, tomando en consideración el contexto social, económico, así como los derechos reconocidos, en oposición a la independencia y división que debe darse entre los Poderes de la Unión.

188 Al respecto, debe tenerse presente que el INE cuenta con personal que tiene un perfil calificado y cualificado debido a la función electoral especializada que tiene a su cargo como órgano constitucional autónomo y que se rige por el Estatuto; tan es así que se someten a una evaluación que requiere la satisfacción de ciertos requisitos para todos sus trabajadores que revisten la calidad de confianza.

189 En tales circunstancias, la determinación de las percepciones del personal que labora en el INE debe establecerse de forma armónica y congruente con las previsiones constitucionales en materia de protección al salario, derechos adquiridos, la garantía de independencia y la autonomía financiera del INE, pues de optar por una interpretación diversa a la aquí señalada implicaría incumplir con los principios que rigen el proceso de presupuestación, los cuales exigen el irrestricto respeto a los derechos de las personas, sus garantías de protección, la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal representativo, así como la consolidación de la democracia como sistema de vida.

190 En este orden de ideas, la Cámara de Diputados comete un error y viola la autonomía del Instituto al aplicar de forma aislada y asistemática el artículo 127, base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin considerar otras disposiciones constitucionales y legales. No es obstáculo el que



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

aparentemente exista ausencia de disposiciones legales que permitan fijar de manera objetiva el referente para el establecimiento de los salarios en el Instituto, pues dicho órgano está obligado a dar operatividad a la disposición constitucional, con base en una interpretación sistemática de todos los supuestos previstos en la misma, así como el resto de normas constitucionales y legales que rigen las remuneraciones de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. Además de que incumple con el criterio que sostuvo esa Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, cuando refiere que si bien la Cámara de Diputados tiene la competencia exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero que ello en modo alguno se traduce en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o tan escueta que afecte la eficacia y calidad de la función pública.

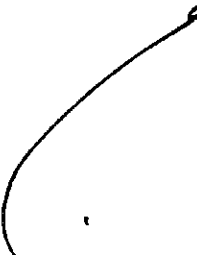
191 Asimismo, de los anexos reclamados no se acredita que la Cámara de Diputados haya interpretado la fracción III, del artículo 127 constitucional, que establece lo referente al trabajo técnico calificado o por especialización en la función, por lo cual en términos del artículo 75 de la Constitución Federal debió atender las bases previstas en el referido precepto 127, lo cual de igual manera hace patente la afectación a la esfera competencial y de autonomía del Instituto Nacional Electoral, al trastocar el sistema de remuneraciones regulado por nuestra Carta Magna, lo que desconoce no sólo las garantías institucionales de este órgano autónomo sino los derechos fundamentales de los servidores públicos que laboran en él. Desconoció la posibilidad de que existen servidores públicos que pueden recibir una remuneración mayor, producto de un trabajo técnico calificado

o por especialización en su función, con la limitación de que ello no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto que se combate.

- 192 En consecuencia, la Cámara de Diputados, al aprobar el Anexo 23.8 del Presupuesto de Egresos 2021, así como sus anexos relacionados, y el artículo séptimo transitorio, invadió la esfera de autonomía del Instituto Nacional Electoral. Dicha invasión resulta de la subordinación que implica dicho Anexo, pues con su emisión pretende obligar al Instituto Nacional Electoral a ajustar sus remuneraciones a la decisión arbitraria tomada por otro órgano. Con ello, retira al Instituto Nacional Electoral del régimen especial que la Constitución le confiere las relaciones laborales con su personal y, peor aún, lo obliga a ejecutar acciones para las que no tiene facultades legales, como la restricción de los derechos laborales de su personal.

IV.B.3. Si el Instituto Nacional Electoral ajusta las percepciones ordinarias y las remuneraciones del personal a la remuneración total anual que aprobó la Cámara de Diputados para el Presidente de la República, estaría violando los derechos laborales y, por ende, derechos humanos del personal al que dicho ajuste le represente una reducción salarial

- 193 Conforme al párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.



*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

194 El derecho al trabajo con una remuneración digna es consignado como derecho humano en los artículos 6 y 7 del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESCO), del cual México es parte, y que es parte de nuestro marco normativo en términos del artículo 133 constitucional. Asimismo, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen el derecho que tiene toda persona al trabajo, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, que incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, lo cual implica la garantía de una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. El principio de justa retribución también se encuentra consignado en el artículo 5° de la Constitución.

195 El propio artículo 127, constitucional reconoce el derecho de las y los servidores públicos a una remuneración adecuada e irrenunciable, que debe ser proporcional a las responsabilidades del empleo o cargo, lo cual es congruente con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el sentido de que todos los trabajadores tienen derecho a un salario equitativo, que depende de una serie de criterios objetivos no exhaustivos que reflejan no solo el resultado del trabajo, sino también las responsabilidades del trabajador, el nivel de calificación y de educación necesario para desempeñar el trabajo, las consecuencias que el trabajo tiene en la salud y la seguridad del trabajador, las

dificultades específicas relacionadas con el trabajo y la repercusión en la vida personal y familiar del trabajador.⁵⁹

196 En el caso del Instituto Nacional Electoral, como parte de su autonomía e independencia, a fin de poder cumplir con sus obligaciones constitucionales y desempeñar la función especializada y profesional que tiene encomendada, cuenta con personal igualmente especializado y calificado, el cual tiene un régimen laboral específico, a fin de resguardar su independencia frente a los demás órganos del Estado. Ese régimen laboral específico y los derechos que el régimen especial laboral que establece la Constitución generan un cúmulo de derechos del personal que el Instituto Nacional Electoral está obligado a respetar y que se traducen en las condiciones generales de trabajo que están establecidas en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral expidió, en cumplimiento a la cláusula habilitante que establece el artículo 41, base V, apartado A, segundo párrafo, constitucional.

197 En consonancia con lo anterior, y sobre la base sostenida por esa Suprema Corte en diversos precedentes y jurisprudencias, en el sentido de que las garantías que se establecen para la salvaguarda de la independencia y la autonomía de los Poderes Judiciales son aplicables a los institutos electorales, como órganos constitucionales autónomos, es importante traer a colación lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así como la capacitación permanente y seguridad son condiciones esenciales para el

⁵⁹ Observación general núm. 23 (2016) sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, párr. 10, consultable en <https://goo.gl/7QRIRK>.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

funcionamiento independientes de dichos órganos y, en consecuencia, para la eficaz protección de los derechos humanos que ellos tutelan, pues las condiciones adecuadas del servicio permiten, a su vez, eliminar presiones externas e internas. Tal es el caso de las remuneraciones que deben ser suficientes para asegurar la independencia económica de las y los funcionarios que toman las decisiones institucionales, para lo cual deben garantizarse las consignaciones presupuestales necesarias.⁶⁰

198 Por esa razón, el Instituto Nacional Electoral está obligado, cada ejercicio fiscal a elaborar un presupuesto que se ajuste a los criterios generales de política económica, a las necesidades impuestas por la austeridad en el gasto público y los derechos humanos de su personal, en el marco de lo dispuesto por los artículos 1º, 5º, 14, 35, 41, 123 y 127 de la Constitución; 30, párrafos 3 y 4; 53, 202, 203 y 204, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1º, 2, 5, 6, 7, 18, 27, 29, 31, 32, 33 y 41 al 394 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

199 El Instituto Nacional Electoral, al ser un órgano especializado, conoce sobre los gastos que implica la organización de procesos electorales, y funciona bajo parámetros de percepciones que responden o se relacionan de alguna forma con su Servicio Profesional Electoral. Su conocimiento especializado lo pone en la circunstancia única que obliga a tenerle deferencia en la elaboración de su presupuesto.

⁶⁰ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, 2013, pp. 55 a 59.

200 Como puede apreciarse, el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral envió para el ejercicio fiscal 2021 cumple con los parámetros constitucionales, no solo en las materias de remuneraciones y percepciones, sino también en materia de derechos humanos y laborales de su personal.

201 La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, ignora ese ejercicio que el Instituto Nacional Electoral ha realizado en el marco de su autonomía constitucional, para establecer límites a las percepciones respecto de todos los cargos tabulares que erróneamente estima existen en el Instituto y pretende que se ajusten sus percepciones ordinarias y remuneraciones totales anuales al máximo establecido para el Presidente de la República, bajo una interpretación literal asistemática y arbitraria del artículo 127, base II, constitucional, desconociendo el derecho humano y laboral que el propio precepto citado concede en favor de las y los servidores públicos del Instituto, a una remuneración justa, adecuada y proporcional a sus responsabilidades, y vedando al órgano competente del Instituto Nacional Electoral la posibilidad de aplicar dicho artículo 127 en su integridad y en armonía con el resto de disposiciones constitucionales, convencionales y legales que protegen a sus trabajadores.

202 Ello implica que el Instituto Nacional Electoral haga de lado el ejercicio ya hecho en sus ámbitos de autonomía y especialización, para construir, sin base, fundamento, parámetro ni argumentación alguna, una tabla de máximos y mínimos de percepciones, así como de remuneraciones totales anuales con base en un parámetro que ha sido establecido unilateral y arbitrariamente por la Cámara de Diputados como remuneración total anual para el Presidente de la República.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

203 Si el Instituto Nacional Electoral siguiera esa línea de acción, se vería obligado a realizar reducciones que no se sostendrían bajo ningún parámetro de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Lo anterior es relevante porque si bien la controversia constitucional es un medio de control que busca proteger el ámbito de autonomía, no puede soslayarse que su finalidad también incluye la protección del bienestar y dignidad humana.⁶¹ En este orden de ideas, los actos reclamados obligarían al Instituto Nacional Electoral a violar derechos humanos y, con ello, le impedirían cumplir con el mandato del artículo 1° de la Constitución en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se trata de una afectación, en el sentido amplio, a su ámbito de competencia.⁶²

⁶¹ CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER. El análisis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano. [Época: Novena Época, Registro: 193257, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 101/99, Página: 708.]

⁶² CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. La controversia constitucional es un medio de regularidad disponible para los Poderes, órdenes jurídicos y órganos constitucionales

204 Se afirma lo anterior porque, desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, una reducción en las remuneraciones de su personal de mando, como la que podría resultar de los actos reclamados, a su vez generaría una violación de diversos derechos humanos:

- a. **Violación al derecho humano previsto en el artículo 5° constitucional, consistente en no ser obligado a realizar un trabajo sin la justa retribución, en relación con el derecho previsto en el artículo 127 constitucional, relativo a que el desempeño de una función, cargo o comisión pública conlleva el derecho a una remuneración adecuada e irrenunciable.**
- b. **Violación al artículo 1° constitucional en virtud del cumplimiento progresivo de los derechos humanos.** El artículo 1° constitucional establece un mandato de progresividad y, por ende, de no regresividad, para las autoridades en el sentido de dar cumplimiento progresivo a los derechos humanos. Dicho cumplimiento debe realizarse en el margen de los recursos disponibles. En este contexto, si el Estado mexicano goza, en su conjunto, de

autónomos, para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales; sin embargo, atento a su teleología, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el texto constitucional. Ahora bien, en la aplicación del criterio referido debe considerarse que, en diversos precedentes, este Alto Tribunal ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación, y ha establecido que para acreditar esta última es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en perjuicio del actor, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales; no obstante, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones: 1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o, 2. De estricta legalidad. En cualquiera de estos casos no es dable analizar la regularidad de las normas o actos impugnados, pero ambos supuestos de improcedencia deben considerarse hipótesis de estricta aplicación, pues en caso de que se encuentren entremezclados alegatos de violaciones asociados a las órbitas competenciales de las partes en contienda, por mínimo que sea el principio de afectación, el juicio debe ser procedente y ha de estudiarse en su integridad la cuestión efectivamente planteada, aunque ello implique conexamente el estudio de violaciones sustantivas a la Constitución o de estricta legalidad. [Época: Décima Época, Registro: 2010668, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 42/2015 (10a.)t Página: 33.]



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

más recursos, el Instituto Nacional Electoral se encontrará en claro incumplimiento del principio de progresividad y no regresividad al reducir la remuneración de sus servidores públicos.

- c. **En el caso de los miembros del órgano superior de dirección, violación a su derecho de irreductibilidad salarial.** Ese Alto Tribunal ha señalado en diversos precedentes que la trascendencia del ejercicio de las funciones que realizan los órganos electorales, quienes cuentan con autonomía constitucional y, dada la alta función que la propia Constitución les encomienda, implica que, para garantizar que sus decisiones sean tomadas con plena imparcialidad y en estricto apego a la Constitución y a la ley, están protegidos con las mismas garantías que los Poderes Judiciales). Ello significa, en otras palabras, que la garantía salarial prevista en el artículo 94, décimo primer párrafo, de la Constitución Federal es aplicable a quienes forman parte del órgano máximo de dirección del Instituto Nacional Electoral.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados, acorde precisamente con el citado artículo 94 constitucional, respeta los tabuladores salariales que el Poder Judicial de la Federación envió, y señala expresamente la aplicabilidad del "artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional", situación que no hace respecto de los integrantes del Consejo General, a pesar de estar incluidos en el mismo precepto.

Esto es, desconociendo el paralelismo mencionado, así como el principio constitucional que se deriva del artículo tercero transitorio del el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de agosto de 2009.

Siguiendo a Orozco Henríquez,⁶³ para que la función electoral se realice con absoluta fidelidad al mandato de la Constitución y la ley, no basta con que las autoridades electorales gocen de autonomía orgánica y funcional, sino que, complementariamente se requiere también que sus integrantes actúen con absoluta independencia, imparcialidad y profesionalismo, sin reconocer subordinación a interés o voluntad diversos a los que la propia ley expresa. De

⁶³ Véase Orozco Henríquez, José de Jesús, *Justicia Electoral y Garantismo Jurídico*, Porrúa, México, 2006, pp. 38 a 42

tal manera, la independencia, imparcialidad y profesionalismo se garantizan, entre otros, con:

- El establecimiento de requisitos de idoneidad y un procedimiento para su designación, y
- El aseguramiento de estabilidad en el cargo y económica (que la duración de su cargo y monto de su salario, en los términos y plazos predeterminados en la Constitución o la ley, no puedan ser variados por voluntad de una persona o grupo alguno, sino sólo por reforma de la propia norma constitucional o legal), así como dedicación exclusiva a la función (como lo prevé el artículo 41, base V, apartado A, séptimo párrafo, constitucional).

Conforme con lo anterior, en todo caso, la disminución de su retribución solo puede ser, en ejercicio de su autonomía constitucional, una decisión propia (autónoma).

En ese tenor, la independencia en sus decisiones implica una garantía constitucional en favor de la ciudadanía y de los propios partidos políticos, como una situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a Derecho, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.⁶⁴ Además, dicho principio implica que la retribución

⁶⁴ FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

que los miembros de las autoridades electorales reciben no pueda ser reducida en el ejercicio de su encargo.⁶⁵ En el caso, si el Instituto Nacional Electoral cumple el mandato de la Cámara de Diputados, se encontrará vulnerando frontalmente dicho principio de irreductibilidad, que si bien funciona como garantía institucional, genera un derecho correlativo hacia sus trabajadores y los gobernados.

205 En este orden de ideas, el acto reclamado ubicaría al Instituto Nacional Electoral en la situación inaceptable de vulnerar los derechos de sus trabajadores. Es importante notar que la potencial afectación que una reducción de remuneraciones produciría a los derechos humanos fue precisada por ese Alto Tribunal, al resolver el incidente de suspensión de la acción de

apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. [Tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, noviembre de 2005, página 111].

⁶⁵ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, INCISO D), DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, QUE PREVE QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARÁN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACIÓN QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRÁN ÚNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD. Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. En congruencia con lo anterior y toda vez que los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán ejercen de manera permanente las funciones que les fueron encomendadas tanto en los procesos electorales como durante el periodo interprocesal, se concluye que el artículo 111, fracción III, inciso d), del Código Electoral del Estado de Michoacán, al prever que dichos consejeros gozarán "... durante los procesos electorales ..." de la remuneración que de acuerdo al presupuesto de egresos les corresponda y que "... entre procesos, recibirán únicamente dietas de asistencia a la sesión ...", transgrede los principios rectores de independencia, autonomía e imparcialidad contenidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en virtud de que durante el tiempo que ocupen el cargo tienen derecho a todas las prerrogativas derivadas de su designación. [Época: Novena Época, Registro: 170885, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9012007, Página: 740.]

inconstitucionalidad 105/2008 y su acumulada 108/2008, al señalar que “puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano, sí es factible conceder la suspensión, más en casos en que de obligarse a cumplir el mandato de ley, el daño se vuelve irreparable o el propio juicio quede sin materia por ser, precisamente, ese el tema a decidir en el fondo, de manera tal que, de continuarse con su aplicación, ningún sentido tendría ya obtener un fallo favorable, pues la violación alegada se habría consumado.” Lo anterior permite suponer que el Presupuesto de Egresos 2020, que fijó una remuneración sin parámetro objetivo, también podía tener como efecto “transgredir irreversiblemente un derecho humano”.

206 De igual forma, al resolver el fondo de ese asunto, esa Suprema Corte señaló expresamente que “la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, **además de que no pueden ser disminuidas**; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función.

207 De ahí que se afirme que la Cámara de Diputados vulneró la autonomía del Instituto Nacional Electoral al obligarlo a violar derechos humanos de sus trabajadores, al pretender obligarlo a disminuir las remuneraciones de estos.

IV.B.4. El PEF 2021, viola el artículo 127 Constitucional y con ello la división de poderes al establecer sin sustento y motivación alguna, las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral

208 La Cámara de Diputados, al establecer en el PEF 2021, la remuneración total anual de Presidente de la República y con ello el tope salarial de todos los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

servidores públicos, debió atender los principios señalados en el artículo 127 constitucional, sin que sea óbice la falta de normativa secundaria vigente, en virtud de la inconstitucionalidad declarada por esa Suprema Corte respecto de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones, y cuya carencia no fue atendida con la reforma a dicha ley el 12 de abril de 2019. Es decir, no existe razón para afirmar que, ante la ausencia de una ley reglamentaria en la materia, no sea dable constitucionalmente que la Cámara de Diputados, emita el PEF respetando los principios que señala nuestra Carta Magna o bien, que la falta de dicha ley de lugar a que ese órgano legislativo pueda exceder el mandato constitucional o aplicarlo discrecionalmente.

209 De esta manera, cuando en virtud de una acción de inconstitucionalidad (como aconteció en el caso de la 105/2019 y su acumulada 108/2019) se declare la invalidez de una porción normativa, sus efectos no podrán traducirse en que los operadores jurídicos de dicha norma puedan liberarse de lo establecido en la Constitución respecto de la materia regulada en la disposición invalidada, pues en acatamiento a la misma como norma suprema del sistema jurídico mexicano, no podrán dejar de existir parámetros mínimos que regulen la situación jurídica prevista en los artículos invalidados siempre dentro del margen delimitado por la Constitución.⁶⁶

210 En ese sentido, la Cámara de Diputados, en acatamiento al principio de legalidad, debió realizar con mayor razón una motivación reforzada sobre el parámetro de

⁶⁶ Jurisprudencia P./J. 14/2014 (10a.), con número de registro 2005870, de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 88, de título: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA PORCIÓN NORMATIVA EN LA REGULACIÓN DE DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES."

remuneración del titular del Ejecutivo Federal y no fijarlo de manera arbitraria en contravención del artículo 127 constitucional, así como en detrimento de la autonomía de este Instituto, al interferir a través, no solo respecto de dicho límite sino de los mínimos y máximos señalados en el anexo 23.8.

211 Al respecto, los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. En el caso de la reforzada, es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma, razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. En estos supuestos se estima que el legislador debe hacer un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar.

212 Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.⁶⁷

213 En este sentido, el PEF 2021 como acto formalmente legislativo, determina el gasto de los entes de gobierno a nivel federal; así como el límite de remuneraciones de los servidores públicos con base en la remuneración total anual de Presidente de la República, por lo que su injustificada determinación puede violar principios constitucionales y derechos fundamentales.

214 En consecuencia, dicho presupuesto debe ser puntual al fijar la remuneración total anual de Presidente de la República conforme al artículo 127 constitucional, pues se trata de un acto cuya trascendencia institucional y jurídica permea a todos los demás poderes de la unión, así como a los órganos constitucionales autónomos, en tanto genera un marco legal de percepciones cuya injerencia desemboca en su autonomía de gestión presupuestaria y de relación laboral con su personal. Por lo tanto, la existencia de una consideración sustantiva en la forma de fijar el límite salarial del titular del Ejecutivo Federal por parte de la Cámara de Diputados, debe obedecer a una motivación en sentido reforzado, ante la ausencia de norma reglamentaria en la materia, que haga visible el respeto al principio de división de poderes establecido en el artículo 49 constitucional, al igual que los de proporcionalidad, legalidad y progresividad establecidos en el diverso 127 de nuestro pacto federal, justamente por ser el referente de todo el sistema de remuneraciones, de lo contrario, dicha discrecionalidad seguirá permeando hacia todas y todos los servidores públicos,

⁶⁷ Jurisprudencia: P./J. 120/2009, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 1255, "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS".

al mismo tiempo que para este Instituto representa un acto de intromisión injustificado e insostenible.

215 De no aceptarse esta postura, bastaría que la Cámara de Diputados emitiera el PEF para que se diera por satisfecho lo exigido en el artículo 127 constitucional, traicionando la indicación expresa del Poder Constituyente al mandar que el presupuesto debe hacer efectivo cierto contenido constitucional, afectando a su vez el principio de supremacía constitucional y legalidad.

216 En ese contexto, si bien es la Constitución la que deja a la Cámara de Diputados la decisión de la aprobación del PEF 2021, la Constitución no es un pacto suicida. El Poder Constituyente interiorizó que será la remuneración del Presidente la que guíe las remuneraciones de todos los servidores públicos del país, sin embargo conforme al artículo 75 sujetó a la Cámara de Diputados a lo previsto en el propio artículo 127, por lo que dicha Cámara, debió hacer efectivo dicho contenido constitucional mediante la fijación de parámetros objetivos sustentados en una motivación que de manera reforzada hiciera patente el mandato constitucional, pues por sí sola, la falta de objetividad en la asignación del sueldo del Presidente de la República, sin perjuicio de otros motivos que se actualicen, vuelve inconstitucional establecer una limitante a los sueldos del resto de servidores públicos.

217 En este sentido, la política no puede ser la rectora de un aspecto de tal relevancia constitucional como la remuneración del Presidente de la República, por lo que la Cámara de Diputados al emitir el PEF 2021, debió cumplir al menos mediante una motivación reforzada y establecer los parámetros, mecanismos y/o procedimientos para delimitar con criterios objetivos el salario del presidente,



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

precisamente para hacer efectivo lo dispuesto en la fracción II del artículo 127 constitucional.

218 Lo anterior ocasiona una violación a la división de poderes, en tanto el PEF 2021 deja en completo estado de indefensión tanto a los órganos autónomos constitucionales como a los otros poderes de la Unión y sus servidores públicos frente a la posible decisión sobre las remuneraciones de una sola de las Cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, al no existir parámetros, su fijación se vuelve discrecional y puede generar una intromisión entre Poderes al incurrir arbitrariamente en su correcto funcionamiento, sin el más mínimo rasgo de objetividad, circunstancia que coloca a los receptores de dicha norma en un estado de subordinación, y por ende, de indefensión, pues se podría llegar indefinidamente a escenarios insostenibles, como el creado con el dicho presupuesto, en el que no se consideró la forma en que afectaría al resto de servidores públicos y como impactaría ello en sus derechos humanos y en general a todo aquello que tutela la Constitución.

219 En ese sentido, debe declararse la invalidez del PEF 2021, por invasión de competencias toda vez que la Cámara de Diputados incumplió en hacer efectivos los principios establecidos en el artículo 127 de la Constitución Federal, al no contener bases, lineamientos ni procedimientos para definir cómo se integrará la remuneración del Presidente de la República mediante una motivación reforzada y por ende la de los demás servidores públicos, nulificando el objetivo constitucional que se pretende alcanzar, consistente en evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos de los servidores públicos y de esta manera genera intromisión indebida en la gestión y funcionamiento de otros poderes y órganos públicos autónomos, como lo es el Instituto Nacional Electoral.

IV.B.5. La Cámara de Diputados carece de atribuciones para controlar la constitucionalidad de los proyectos de presupuestos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación

220 Como se mencionó en los hechos de la presente demanda, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos 2021, modificó el ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos anexos.

221 La eliminación de cifras, en combinación con la omisión de mencionar y aplicar las bases I y III del artículo 127, constitucional, entre otras disposiciones, implica que la Cámara de Diputados descartó las cifras definidas por el Instituto Nacional Electoral, y en su lugar determinó en el Anexo 23.8 del PEF montos mínimos y máximos para todos los supuestos cargos tabulares del Instituto, en clara invasión al ámbito de su competencia y autonomía, conforme al texto constitucional.

222 En este orden de ideas, la Cámara de Diputados vulnera la autonomía del Instituto como aplicador del artículo 127 constitucional, de manera integral, en relación con sus circunstancias particulares y el resto del orden jurídico. Pero, además, la Cámara de Diputados desconocen deliberadamente la esfera de competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se asume como intérprete último de la Constitución Política. Tanto así, que modifica la interpretación del órgano constitucional autónomo y emite una nueva que estima definitiva.

223 Lo anterior es trascendental, pues validar la actuación de la Cámara de Diputados implicaría aceptar que su control político se expande al grado de que dicha Cámara pueda controlar discrecionalmente los proyectos de presupuesto que se le envíen.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

224 Así, el Instituto Nacional Electoral considera inconstitucional el presupuesto, en respeto a la autonomía de la Cámara de Diputados y su ámbito de competencia, acude a ese Alto Tribunal, aunque ello no limita las capacidades de determinar las retribuciones de sus servidores, en ejercicio de su autonomía interpretativa de las normas constitucionales.

IV.B.6 La Cámara de Diputados a través de la aprobación del PEF 2021 comete una violación continuada y reiterada a la autonomía del INE, pues reitera exactamente las mismas violaciones que al aprobar el PEF2020

225 Causa agravio a este Instituto, la forma en que la Cámara de Diputados hace uso de la facultad prevista a su favor en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos, que establece que le corresponde la discusión y aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

226 Lo anterior porque conforme a dicha facultad, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de violentar año tras año, a través de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cúmulo de atribuciones y objetivos constitucionales del INE, al ejercer intromisión en su autonomía constitucional, de gestión y presupuestaria, en tanto no sea limitada judicialmente en el ejercicio de dicha potestad, tal y como ya aconteció en el PEF 2020 y como acontece ahora con el PEF 2021.

227 En efecto, el análisis de lo suscitado con la aprobación del PEF 2019, nos conduce a destacar que la Cámara de Diputados hizo una reducción presupuestaria al gasto neto total del INE, por un monto de 950 millones de pesos; le impuso ajustar las remuneraciones de su personal a la remuneración total anual que aprobó para el Presidente de la República (con la correspondiente reducción que ello implica para algunos servidores públicos del INE), aun cuando

la asignación de remuneraciones de sus servidores corresponde a dicho órgano autónomo constitucional, al mismo tiempo que omitió establecer los parámetros objetivos que siguió para establecer el salario del Ejecutivo Federal.

228 Posteriormente, se cometieron exactamente las mismas violaciones constitucionales e invasión competencia, pues la Cámara de Diputados, al aprobar el PEF 2020, hace nuevamente una reducción presupuestaria al gasto neto total del INE, en franca violación a su autonomía constitucional; además, fija arbitrariamente, sin fundamento, argumento, base o parámetro alguno, la Remuneración Total Anual del Presidente y, con base en ello, las remuneraciones máximas a aplicarse en el Instituto.

229 Así, para el próximo ejercicio se da una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), con lo que puede advertirse, la violación constitucional es exactamente la misma, de manera tal que se provocan esencialmente dos cuestiones que han sido reseñadas tanto en la controversia presentada por este órgano constitucional autónomo el año próximo pasado, radicada con el número de expediente 22/2019, como en la presente demanda.

230 Primero, se afecta la operación del Instituto, al obligarlo a cancelar proyectos específicos, así como generar economías para cubrir el déficit provocado, lo cual se ha traducido en el aplazamiento e, incluso, cancelación de programas y objetivos en el marco del modelo de planeación institucional, así como el obligar a la estructura a operar con deficiencias de personal, son las sobrecargas de trabajo y riesgos que todo ello ha implicado, al grado de poner en peligro el ejercicio de las facultades constitucionales.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

231 Segundo, se ha obligado al Instituto a vulnerar derechos humanos en perjuicio de su personal, lo cual ha provocado que el Instituto haya sido condenado en juicios de amparo al pago de remuneraciones reducidas en consecuencia del PEF 2019 y 2020, con las consecuencias económicas y riesgos de responsabilidad que ello implica.

232 En efecto, toda vez que, la designación de presupuesto es un acto periódico y permanente en términos del artículo 74, fracción IV, de la CPEUM, y la postura de la Cámara de Diputados, como ya aconteció en 2020 y ahora con el ejercicio fiscal 2021, está claramente encaminada a ejercer intromisión a la esfera competencial del INE y a su autonomía de gestión, al fijar topes presupuestarios sin lógica ni razonabilidad alguna, así como restricciones a las remuneraciones de sus servidores públicos, dejando de lado las tareas constitucionales que le confiere la propia Carta Magna, es que se hace patente la necesidad de que en la presente controversia se resuelva y se dilucide el conflicto competencial que se denuncia.

233 En efecto, de lo anterior, se advierte una clara intención de ir mermando de manera sistemática a la autoridad electoral, al grado de poner en riesgo la celebración de procesos electorales. La violación a la autonomía constitucional de este Instituto continua y reiterada que se pone de relieve, le causa perjuicio de forma específica conforme a las siguientes consideraciones:

A. Reducción presupuestaria al gasto global

234 La disminución global del presupuesto del Instituto por parte de la Cámara de Diputados, se interpreta como un acto de intromisión en el cúmulo de atribuciones que por mandato constitucional tiene el INE, que le subordina y también le

obstaculiza en el cumplimiento de sus objetivos constitucionales al mismo tiempo que rompe con el principio de división de poderes por invadir su autonomía constitucional, de gestión y presupuestaria.

235 Al respecto, la Suprema Corte ha señalado que los organismos constitucionales autónomos han surgido como consecuencia de un modelo innovador de ingeniería constitucional, que buscan atender eficazmente un estado de cosas a modificar. Se trata de una evolución de la teoría clásica de la división de poderes, que se encuentra orientada por la necesidad de ejercer una función que, por su especialización e importancia social, requiere autonomía técnica, operativa, política (y, por lo tanto, presupuestal) de otros Poderes. Fue justamente la necesidad de un órgano independiente la que dio origen al Instituto Federal Electoral en 1990, pues existía la convicción de que era necesario crear un ente no subordinado a los poderes constitucionales para garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas.

236 Así, el recorte presupuestal realizado de manera arbitraria por la Cámara de Diputados, vulnera la autonomía financiera del Instituto Nacional Electoral y con ello su competencia, la cual radica, fundamentalmente, en organizar las elecciones constitucionales, para garantizar el ejercicio del derecho al voto libre, directo y secreto, tutelado en el artículo 35 constitucional, pero, además, tiene encomendadas otras funciones estatales esenciales, vinculadas con la materia electoral, como son la formación y administración del Registro Federal de Electores, que sirve como base para la expedición de la credencial para votar (medio de identificación oficial -de facto y de iure-) , la fiscalización permanente de los recursos de los partidos políticos; rectoría del Sistema Nacional de Elecciones, y la administración única de los tiempos del Estado en radio y



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

televisión para fines político electorales, así como su monitoreo exclusivo, entre otras.

237 En efecto, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo hacer efectivo el derecho de sufragio de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Dada la naturaleza de los derechos humanos involucrados en la participación política de la ciudadanía, se requiere necesariamente de la organización y procedimientos adecuados que permitan su libre ejercicio, esto es, de un complejo entramado organizacional y procedimental.

238 En consecuencia, se estima que, no puede tolerarse que la Cámara de Diputados año tras año y de forma indefinida rompa con el equilibrio entre los entes públicos que debe guardarse en virtud del principio de división de poderes, ya que de permitirlo se estaría aceptando como válido que ese órgano legislativo pueda extrapolar sus atribuciones de forma discrecional y arbitraria en perjuicio de este Instituto y todo lo que representa conforme a la Constitución, atropellando la esencia misma del Estado de Derecho que prohíbe la existencia de poderes absolutos, desmedidos o desproporcionados, en tanto que la Constitución pugna porque cada ente cumpla con una función elemental del Estado debidamente asignada, en pro de la invasión de esferas competenciales; de ahí la importancia de que, se haga un estudio metódico y exhaustivo del conflicto competencial que se denuncia.

B. Tope salarial a las remuneraciones de los servidores públicos del INE

239 Como ha sido señalado, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el 20 de mayo de 2019, resolvió la acción de inconstitucionalidad 105/2019 y su acumulada 108/2019 promovidas por la CNDH y Senadores del

Congreso de la Unión, a través de la cual invalidó los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, 11C, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la ley reclamada (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos).

240 Es decir, se invalidaron las disposiciones normativas que sirvieron de base al PEF 2019, en el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, y al respecto ese Máximo Tribunal evidenció que dichas porciones normativas permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, mismo que fue fijado sin establecer parámetros objetivos, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público y este fue fijado de manera arbitraria.

241 Sin embargo, en uso arbitrario de la facultad que le asiste a la Cámara de Diputados conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, dicho órgano legislativo discutió y aprobó el PEF 2020, en el que nuevamente, en franca violación a la autonomía constitucional del INE, le fijo montos máximos y mínimos a las remuneraciones de sus servidores públicos, imponiendo como limitante a las mismas el salario asignado al Ejecutivo Federal, el cual fue fijado de nuevo sin atender a parámetros objetivos, siendo así inconstitucional

242 En este punto, se considera es más que notoria la inconstitucionalidad con la que obra la Cámara de Diputados, ya que por un lado sujeta a este Instituto a la asignación de remuneraciones de sus trabajadores que discrecionalmente decidió ese órgano legislativo, mientras que por el otro, lo deja en completo estado de indefensión e incertidumbre jurídica al no establecer los parámetros



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

objetivos en base a los cuales fijó el salario del Ejecutivo Federal, todo esto, dejando de lado que, conforme al artículo 41, base V, apartado A, el INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento, que podrá disponer del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones, y que las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores de dicho órgano.

243 Asimismo, el actuar de la Cámara de Diputados al invadir la esfera competencial del INE respecto de la asignación de remuneraciones a sus servidores públicos, viola a éstos el derecho de recibir una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional al encargo.

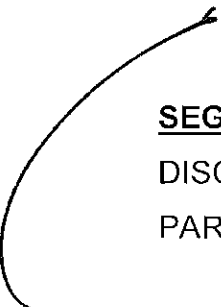
244 Conforme al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), párrafo primero, se articulan principios de adecuación y proporcionalidad; esto es, la remuneración de los servidores públicos de todo el sistema jurídico mexicano debe, por un lado, ser adecuada en deferencia a la función que se desempeña, y, también proporcional de cara a las responsabilidades que se depositan en el respectivo servidor público.

245 En ese sentido, el Poder revisor identificó la remuneración “adecuada” con el hecho de que el Estado cuente con ciudadanos que puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les sean confiadas, a la par de garantizar la dignidad en el salario que se recibe, esto es, reafirmando su conexión con el derecho fundamental a recibir un salario digno o justa retribución en términos del artículo 5° constitucional.

246 Por lo que toca al principio de proporcionalidad, incorporado de manera expresa en la reforma de 24 de agosto de 2009, también adquiere una faceta sustantiva como manifestación del derecho fundamental a recibir un salario digno, pero con especial énfasis en las responsabilidades públicas que se depositan en el servidor, esto es, ese principio consagra a primera vista la máxima de que a mayor responsabilidad depositada en relación con la cosa pública, la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, de ahí que se afirma que el derecho fundamental a un salario digno adquiere un cariz o tratamiento específico en el estatuto de protección a los servidores públicos que tutela el artículo 127 constitucional debido a las funciones que desempeñan.

247 La irrenunciabilidad de los derechos laborales puede desprenderse también del artículo 5° constitucional, que, refiere a la percepción de una retribución justa por la prestación de un servicio, en el caso, uno de naturaleza pública.

248 En las anotadas circunstancias, se estima resulta evidente que la intromisión en que incurre la Cámara de Diputados permea hasta el punto en que orilla al INE a violar los derechos humanos y laborales de sus trabajadores en contra de su propia autonomía constitucional, es decir, no es sólo el hecho de que ejerza actos de invasión lo que por sí ya es inconstitucional, sino que llega al punto de pretender que este Instituto desconozca los derechos adquiridos de sus servidores públicos, de ahí la urgencia de delimitar su actuar, el cual como se ha mencionado tiene la naturaleza de ser una intromisión continua y reiterada.



SEGUNDO. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN AL DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, VIOLÓ LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Y PRESUPUESTARIA DEL INE AL SUBORDINARLO RESPECTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA CONSULTA POPULAR Y, POR ENDE, IMPOSIBILITÁNDOLO PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN CONSTITUCIONAL.

249 Como es del conocimiento de ese Alto Tribunal, así como por constituir un hecho notorio, este Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la organización y realización de la Consulta Popular sobre "las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021.

250 Sin embargo, la Cámara de Diputados al aprobar el **Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 (PEF 2021)** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, es omisa en establecer la suficiencia presupuestaria para dicho ejercicio democrático, violentando con ello la autonomía constitucional y presupuestaria del INE, obstruyendo el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, por lo siguientes motivos:

- La Cámara de Diputados en el PEF 2021 es omisa en establecer la suficiencia presupuestaria para organizar la consulta popular convocada mediante "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, no obstante que el propio Constituyente previó en el artículo "TRANSITORIO QUINTO" del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2019, que “el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.

- La Cámara de Diputados en el PEF 2021 es omisa en permitir al INE contar con suficiencia presupuestal para realizar la consulta popular, no obstante que este Instituto mediante oficios INE/PC/238/2020, INE/PC/239/2020 e INE/PC/241/2020, dirigidos al Diputado Erasmo González Robledo, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a la Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como al titular del Ejecutivo Federal; respectivamente, y en cumplimiento de los puntos de acuerdo Segundo y Tercero del Acuerdo INE/CG554/2020, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento de dichas autoridades este acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Propuesta de Recursos Adicionales al Anteproyecto de Presupuesto de este Instituto para la realización de la Consulta Popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la referida Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y se adicione un monto total de \$1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

251 Aunado a lo anterior, y sin considerar la organización y realización de la consulta popular a cargo del Instituto y que no se le permitió contar con la suficiencia presupuestaria necesaria, la Cámara de Diputados al discutir y aprobar el PEF 2021, realizó al Instituto Nacional Electoral un recorte presupuestal respecto de su propuesta de anteproyecto por la cantidad de 870 millones de pesos, con lo cual se limita aún más la autonomía presupuestaria del Instituto y el ejercicio de sus funciones constitucionales, en tanto la Cámara de Diputados en desobediencia al propio Constituyente⁶⁸ y a lo solicitado en su comentario por este órgano autónomo, lo subordina a una insuficiencia presupuestaria para realizar la consulta popular, función electoral para la cual se debe contar con los recursos necesarios y suficientes así mandados por la Constitución y lo cual dicha Cámara es omisa en atender.

252 Con el fin de acreditar lo anterior, es necesario poner de relieve ante ese Alto Tribunal, las siguientes premisas:

a) La consulta popular como función a cargo del Instituto Nacional Electoral en términos de la reforma constitucional

253 La historia de las civilizaciones, los países y en especial la de México, ha demostrado que la consecución de un Estado de Derecho descansa

⁶⁸ El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, en el que se estableció en el artículo QUINTO Transitorio que, el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes: es decir, el propio Constituyente reconoció la necesidad de que el Instituto contara con suficiencia presupuestaria para la realización de la Consulta Popular.

esencialmente, en la capacidad de ir creando y mejorando sus sistemas democráticos.

254 En el caso particular de nuestro país, este se ha visto preponderantemente inclinado hacia un sistema democrático sustentado por esquemas políticos representativos **y ha sido hasta el siglo XXI, que nuestro sistema jurídico incluyó a la consulta popular como un mecanismo de democracia directa para consultar a la soberanía popular.**

255 En ese sentido, es de mencionarse que el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido reformado en diversas ocasiones, entre las que destacan las siguientes:

- La primera reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 agosto de 2012;
- Posteriormente fue mediante la reforma el día 10 de febrero del 2014; y
- Recientemente mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

256 La reforma correspondiente al 9 de agosto de 2012, resulta de gran trascendencia **ya que por primera vez se incorpora al texto constitucional la figura de la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana.** Esta figura se incorpora en el artículo 35, fracción VII y artículo 36, fracción III de la Constitución, siendo relevante en lo medular el texto siguiente⁶⁹:

⁶⁹ Luis Escobar Aubert, LA CONSULTA POPULAR EN MÉXICO / THE POPULAR QUERY IN MEXICO, págs. 197-198. (revistas.unam.mx).



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

- a) El Presidente de la República;*
 - b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o*
 - c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,*
- 2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;*
- 3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;*
- 4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;*
- 5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;*
- 6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y*

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

257 La segunda reforma que corresponde al 10 de febrero de 2014 es también relevante, toda vez que, en el texto constitucional añadido, en el CUARTO transitorio, se establece lo siguiente:

TRANSITORIOS

CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracción II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente.

258 De este transitorio, es de donde surge la nueva Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, la cual es reglamentaria de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁷⁰, y regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares.

259 Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.", el cual produjo las siguientes variaciones en el artículo 35 constitucional:

⁷⁰ Ibidem, págs. 198-198.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

[...]

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

[...]

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;

260 Entre los transitorios relativos a tal Decreto, resulta relevante el QUINTO de ellos, pues prevé que el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le

confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes, tal y como se ilustra a continuación:

Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.

261 Lo anterior, en el entendido que el propio Constituyente previó que dicho ejercicio democrático a cargo del INE, representaba una función constitucional extraordinaria que requería de un presupuesto particular, para que en el ejercicio de su autonomía se encargara en términos de nuestra Carta Magna, así como de las leyes secundarias de dichas actividades como órgano garante del Estado democrático.

262 De esta forma la referida reforma al artículo 35 constitucional, a través de su Transitorio Quinto, que versa sobre la disponibilidad presupuestaria del INE para hacer frente a la tarea que implica llevar a cabo la consulta popular, instituye a la suficiencia presupuestaria como un aspecto necesariamente ligado a la posibilidad de materializar la consulta popular y a la autonomía propia del Instituto en el ámbito de sus diversas funciones.

263 En ese sentido, dicha reforma implícitamente ha corroborado y/o reconocido la autonomía presupuestaria del INE, pues incluir la suficiencia



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

presupuestaria como medio para lograr la realización de la consulta popular responde a la necesidad de proteger y respetar la forma en que el INE, conforme a su autonomía constitucional, administra y ejerce su presupuesto y garantiza que esta autoridad pueda cumplir con todas sus atribuciones constitucionales y con ello permitir garantizar a la ciudadanía su participación a través de la emisión de su voto en este tipo de ejercicio democráticos.

264 Es posible advertir que la señalada previsión de no afectar la forma en que el INE dispone de sus recursos presupuestarios, también responde directamente a que LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR, RESULTA UNA ATRIBUCIÓN DEL INSTITUTO QUE SÓLO SE ACTIVA DE FORMA EVENTUAL O EXTRAORDINARIA, por lo que no es posible contar con una planificación presupuestaria de la misma, hasta que se tiene certeza jurídica de su realización por medio del Decreto de convocatoria correspondiente, y es por ello que el INE mediante acuerdo INE/CG554/2020, aprobó la Propuesta de Recursos Adicionales al Anteproyecto de Presupuesto, lo cual fue solicitado a la Cámara de Diputados; sin embargo ésta fue omisa en prever dicho recurso al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio respectivo.

265 Al respecto, es preciso recordar que el 22 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular presentada por el Presidente de la República y se expidió la Convocatoria a Consulta Popular.

266 Acto seguido, el 26 de octubre de 2020, en la oficialía de partes común del INE se recibió oficio número D.G.P.L. 64-II-8-4340, signado por el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, Diputada Dulce María Sauri Riancho y Diputada María Guadalupe Díaz Avilez, **mediante el cual se notifica al Instituto Nacional Electoral el Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la Convocatoria de Consulta Popular**, Decreto que en su contenido establece en la primera de sus BASES, denominada “**PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES**”, que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora. Es decir, conforme al sistema constitucional y normativo que se originó de las reformas al artículo 35 constitucional, la emisión del Decreto de convocatoria y su notificación al INE, han constituido en favor de aquél la fuerza vinculante, para que este se encargue de la organización de la consulta popular.

267 Establecido lo anterior, es necesario señalar de forma preliminar que, la Cámara de Diputados ha violentado la autonomía constitucional del INE al imposibilitarlo para contar con los recursos presupuestarios suficientes para realizar la Consulta Popular teniendo la posibilidad jurídica y el DEBER de hacerlo a través de PEF 2021, y con ello garantizar que este Instituto se encontrara en condiciones de efectuar dicha consulta como actividad extraordinaria, que si bien no fue prevista por este Instituto en su Anteproyecto de Presupuesto para el 2021⁷¹ al no tener certeza de esta, sí fue solicitado dicho recurso

⁷¹ Aprobado mediante el acuerdo INE/CG236/2020.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

mediante el acuerdo INE/CG554/2020⁷², donde contempló por este Instituto los recursos necesarios para dicho ejercicio democrático.

268 Lo anterior, como ha sido señalado de conformidad con la prerrogativa que el propio Constituyente instituyó en la reforma de 20 de diciembre de 2019, en el que se estableció en su artículo Quinto transitorio que, el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.

b) Obligaciones de la Cámara de Diputados respecto de la emisión de la convocatoria de consulta popular

269 Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace notar que, con base en el artículo 74, fracción IV, de la CPEUM, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, debió prever la suficiencia presupuestaria para la realización de la consulta popular.

270 Relacionado con dichas disposiciones constitucionales, la ley reglamentaria de la consulta popular señala conforme a su artículo 3 que, la aplicación de las normas de la Ley Federal de Consulta Popular corresponde al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al INE y al Tribunal

⁷² Acuerdo INE/CG554/2020 denominado "ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva".

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.

271 En ese sentido, resulta relevante referir que la ley reglamentaria reconoce que su aplicación por parte del Poder Legislativo será efectuada EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; es decir, producto de una interpretación sistemática, es posible advertir que lo anterior, impone a ese órgano legislativo un especial deber de, sin limitarse únicamente a la Ley Federal de Consulta Popular, hacer uso de todas las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden en la tramitación de una petición de consulta popular previa y posteriormente a su declaratoria de constitucionalidad por parte de la SCJN sobre todo considerando que es a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a quien corresponde discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación; lo anterior, a fin de garantizar que este Instituto se encuentre en condiciones de organizar y desarrollar la correspondiente consulta popular.

272 Máxime cuando el propio Constituyente mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, estableció que dicho ejercicio democrático estaba a cargo del INE en condición de su suficiencia presupuestaria y cuando este Instituto ya había solicitado RECURSOS ADICIONALES a ese órgano legislativo derivado del acuerdo INE/CG554/2020.

273 Es decir, bajo una interpretación conjunta y armónica de las normas constitucionales la Cámara de Diputados en relación con la consulta popular y en especial el relativo a la disponibilidad presupuestaria del INE, al discutir y aprobar el PEF 2021, ese órgano legislativo tenía la obligación de establecer los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

recursos respectivos que permitieran al Instituto Nacional Electoral contar con suficiencia presupuestaria con base en su autonomía y función constitucional en la materia.

274 Sin embargo, es el caso que, el 30 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021”, en el que no se contempló recurso alguno para efectuar la consulta popular, de los 1,499 millones solicitados, y por el contrario, se hizo al INE una reducción adicional injustificada al presupuesto solicitado por la cantidad de \$870,000,000.00 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), como se refirió en el concepto de invalidez precedente.

275 Cabe señalar, que el Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo con atribuciones constitucionales establecidas, debe contar con una planeación presupuestaria que necesariamente debe estar sujeta de forma anual a las actividades que desarrolla de forma permanente y periódica, en función de un ejercicio previo de planeación y presupuestación, que contemple la adecuada ejecución de recursos conforme a los artículos 126⁷³ y 134⁷⁴ de la Constitución.

276 Por otro lado, al generarse de manera eventual la tarea de una consulta popular, con todo lo que ello implica, esto es, cuando menos: la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular; la

⁷³ **Artículo 126.** No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

⁷⁴ **Artículo 134.** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

f(...)

difusión por los medios que se establezcan; la ubicación, conformación e integración de las casillas; la jornada de la consulta popular; el escrutinio y cómputo y, la validación de los resultados, esto sólo de forma enunciativa; se hace patente la necesidad de llevar a cabo las acciones para la preparación, desarrollo y ejecución de este ejercicio de participación ciudadana de manera independiente a las elecciones concurrentes y consecuentemente, se actualiza la necesidad de contar con recursos adicionales a los anualmente asignados, pues así como resulta ser una atribución que de manera imprevista se activa, también constituye un gasto no previsto y que escapa de la planeación presupuestal del INE, pues no es posible solicitar recursos para efectuar una actividad de la que no se tiene certeza.

277 En ese sentido, no debió pasar desapercibido para la Cámara de Diputados al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2021, lo establecido por el Constituyente en la reforma de 20 de diciembre de 2019, sobre disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2021, en relación con lo establecido en los artículos 35, fracción VIII, y 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en obediencia al orden constitucional, respetar la autonomía del Instituto Nacional Electoral como un organismo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

278 Dicho de otra forma, el INE para poder realizar la consulta popular que nos ocupa, deberá contar en su patrimonio con los recursos presupuestarios que requiera



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

para el ejercicio de dicha atribución, lo cual fue completamente desatendido por la Cámara de Diputados al momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2021, no obstante la solicitud formulada para contar con suficiencia presupuestaria que el INE efectuó mediante los oficios **INE/PC/238/2020**, **INE/PC/239/2020** e **INE/PC/241/2020** de 28 de octubre de 2020, dirigidos al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al Congreso de la Unión.

279 Lo anterior, debió ser atendido con la justa urgencia y relevancia que amerita en tanto, la realización de una consulta popular no representa una tarea menor, tal y como se puede apreciar en el conjunto de obligaciones inherentes a la emisión de la convocatoria de la consulta popular, conforme a lo establecido por los artículos 35 y 41 constitucional, así como 7, 8, 31 y 32, en especial su párrafo 2, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículos 3, y 32 a 64 de la Ley Federal de Consulta Popular, donde se ha identificado que, por lo menos, el Instituto deberá efectuar las siguientes acciones (que se mencionan únicamente de forma enunciativa y no limitativa) que se insiste, **NO FUERON CONSIDERADAS EN EL PEF 2021:**

i.- DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

- ✓ Informar a la ciudadanía sobre la atribución legal que tiene el Instituto y la promoción de la participación ciudadana en la consulta.
- ✓ Pedagogía de la consulta, es decir, toda la información destinada a la ciudadanía, así como para la ubicación de las casillas y los requisitos para participar.
- ✓ Posicionamiento de la fecha de celebración de la Consulta Popular.

- ✓ Difusión de resultados.
- ✓ Activación en redes sociales.
- ✓ Entrevistas en radio y televisión.
- ✓ Monitoreo y seguimiento de acciones digitales y territoriales.

ii.- ORGANIZACIÓN

- ✓ Registro de votantes (impresión de cuadernillos con corte de lista nominal).
- ✓ Integración de mesas receptoras de votación (7 capacitadores asistentes electorales CAE's por cada supervisor electoral SE y 6 casillas por capacitador CAE, 1 presidente, 1 secretario, 1 escrutador y 2 suplentes generales).
- ✓ Continuidad de órganos temporales (consejos y distritales, Oficinas Municipales).
- ✓ Asistencia electoral (distribución de documentación, apoyo a funcionarios de mesa directiva de casilla, ubicación e instalación de casillas).
- ✓ Aprobación de formatos y documentación.
- ✓ Programas de capacitación.
- ✓ Difusión en tiempos de radio y televisión.

iii.- JORNADA

- ✓ Instalación y apertura de casillas.
- ✓ Votación.
- ✓ Escrutinio y cómputo.
- ✓ Clausura y remisión de expediente.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

iv.- DECLARACIÓN DE RESULTADOS

- ✓ Sistema Informático para recabar los resultados preliminares.
- ✓ Cómputos distritales.
- ✓ Actas de cómputo distrital.
- ✓ Recuentos.
- ✓ Sumatoria y declaratoria de resultados.
- ✓ Declaratoria de validez y remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

280 Se insiste, que si bien la Carta Magna establece que la consulta popular deberá efectuarse por conducto de este Instituto, no debe dejarse de lado que **fue el propio Constituyente el que previó que el INE contara con los recursos necesarios**, ello pues tal y como ha quedado transcrito las tareas que desarrollará el Instituto son bastas, aunado a los ajustes presupuestales injustificados por la Cámara de Diputados de cara al proceso electoral 2020-2021, siendo dicho proceso el más grande de la historia, al estar en juego la elección de 21,368 cargos por la vía democrática, con una estimación aproximada a la participación de 95 millones de votantes, concurriendo por primera vez 32 elecciones locales, lo cual hace imposible que este órgano autónomo pueda hacer uso de sus atribuciones constitucionales en el caso en particular; por lo que resulta imposible para este Instituto ejercer sus atribuciones constitucionales en tanto no exista suficiencia presupuestaria para ello.

281 En este orden, al obligarlo a desapegarse de su proceso de planificación y verse en el adverso escenario de tener que desviar recursos de otras actividades

fundamentales para realizar la consulta popular y con ello violentar el artículo 126 constitucional, se terminaría por obstaculizar el correcto desarrollo de todo el funcionamiento del Instituto; ello es así porque se insiste, los recursos de otras actividades derivan un meticuloso proceso de análisis y presupuestación, por lo que su aplicación en forma diversa a la prevista, necesariamente vendría acompañado de una imposibilidad técnica, presupuestaria y logística para cumplir con los objetivos fijados por este Instituto.

d) Planeación de los recursos presupuestarios del INE

282 En correlación a la insuficiencia presupuestaria que se alude en el apartado anterior, se estima necesario hacer patente ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma en que este Instituto efectúa su planeación presupuestaria a efecto de poder realizar todas sus funciones de tipo ordinarias (permanentes) y de tipo extraordinarias (periódicas), ello con el fin de acreditar que para el Instituto, el hacerse cargo de una tercera función de índole eventual como lo es la consulta popular, sin tener la debida suficiencia presupuestal, tiene un grave impacto en todo el presupuesto del Instituto y le imposibilita ejercer sus funciones constitucionales y legales en la materia.

283 Conforme al artículo 41, base III, apartado A de la Constitución en relación con el artículo 30, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se determina como fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de los partidos políticos; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, así como fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del INE, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

284 Asimismo, el artículo 32, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE señala que, corresponde al Instituto para los procesos electorales federales: el registro de los partidos políticos nacionales; el reconocimiento a los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal; la preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y la producción de materiales electorales; los escrutinios y cómputos en los términos que señale dicha ley; el cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los Distritos electorales uninominales; la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; la educación cívica en procesos electorales federales; garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres y las demás que le señale esa ley y demás disposiciones aplicables.

285 Como es posible advertir, el INE cuenta con una amplia gama de atribuciones y responsabilidades tanto ordinarias como la continua actualización del Registro

Federal de Electores y la expedición de credenciales para votar, así como extraordinarias y relativas, entre otras, a la organización de elecciones federales y locales y para lo cual se realiza un trabajo de planeación que se ve reflejado en cada presupuesto que anualmente se contempla, es decir, **el INE tiene plenamente identificada la necesidad de dar continuidad a sus atribuciones ordinarias y por ello, previa planificación, solicita cada año los recursos presupuestarios pertinentes.**

286 De esa manera, el INE tiene identificado el ejercicio fiscal en el que se efectuarán actividades de índole periódica como la organización de elecciones y en esa medida puede solicitar los recursos pertinentes, como ha acontecido en la especie. Tal y como puede observarse en el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal del año 2021, antes que este Instituto fuera formalmente vinculado a efectuar la consulta popular que deberá realizarse en agosto de 2021, la integración de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021 consideró los recursos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, lo que como se señalado serán las elecciones más grandes y complejas de la historia.

287 En ese sentido y conforme al acuerdo INE/CG236/2020 del Consejo General del INE, titulado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021", la Cartera Institucional de Proyectos, había sido adaptada a los requerimientos específicos del Instituto, para 2021 el Instituto Nacional Electoral adicional a la operación permanente en las diferentes acciones democráticas y generación de la credencial para votar, destinaría parte de los recursos que le sean



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

asignados, a la organización y celebración de las elecciones federales y locales de 2021, en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras.

288 En comparación al Proceso Electoral Federal 2017-2018, se observó un incremento del 6.6 por ciento en la lista nominal. Asimismo, se van a requerir un millón 480 mil 950 funcionarios de casilla, es decir, casi 6 por ciento más que en 2018.

289 El incremento en la Cartera Institucional de Proyectos frente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 se debe a tres factores: Gastos extraordinarios por COVID-19, crecimiento natural de la lista nominal y la renovación tecnológica del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo. El monto total de los proyectos en mención asciende a casi mil 286 millones de pesos. En un ejercicio de comparación, si se resta este monto al presupuesto solicitado por el Instituto en 2021, el resultado del presupuesto a solicitar sería de 19 mil 179 millones de pesos. Es decir, 214 millones menos que en 2018.

290 Resultado de dicho ejercicio de planeación, el INE emitió un Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2021, por un monto total de \$20,463,797,958 (Veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

291 Aunado a ello, en las "**Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto 2021 del Instituto Nacional Electoral**", se describió a detalle la forma en cómo fue integrada la planeación presupuestaria para hacer frente en 2021 a las tareas constitucionales ordinarias y periódicas de este Instituto.

292 Sobre el particular, cabe mencionar que, ante la falta de certeza sobre la realización de una consulta popular, el INE al momento de formular y presentar su anteproyecto no consideró ni calculó el monto equivalente a los recursos que sean necesarios para ejercer tal función de tipo eventual y en el contexto creado en el que estamos de frente a las elecciones más complejas y grandes de la historia; sin embargo, sí fue solicitado con oportunidad mediante el acuerdo INE/CG554/2020, por lo que se considera que la Cámara de Diputados debió atender dicha solicitud de este Instituto de recursos adicionales para realizar la Consulta Popular y materializarla a través del PEF 2021, lo que no aconteció y por el contrario se puede apreciar que al presupuesto originalmente solicitado por este Instituto se le hizo una reducción por 870 millones de pesos.

293 Así por medio del PEF 2021 que se impugna, la Cámara de Diputados pone en peligro todo el funcionamiento del Instituto, pues como ha quedado demostrado, cada recurso solicitado por el INE año tras año, responde a gasto corriente y a proyectos específicos que con la debida antelación fueron planificados, por lo que intentar realizar la consulta, podría comprometer la ejecución de otras actividades planificadas, vinculadas con obligaciones constitucionales, lo que además significaría violentar el propio artículo 126 constitucional, que señala que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior, en relación con el 134 de nuestra Carta Magna, al establecer que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

294 Ello es así, toda vez que la planeación y presupuestación no es un procedimiento arbitrario, sino que se realiza conforme a directrices y parámetros legales que permiten a este órgano constitucional autónomo la consecución de sus objetivos. Por ende, el proyecto de presupuesto debe entenderse como el resultado de un proceso de planeación y programación que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en el marco de su especialización, que debe ser la base para el proceso de discusión y aprobación, **de manera tal que si se considera necesario realizar ajustes, deben hacerse bajo una justificación adecuada y previo intercambio de información con la autoridad electoral.**

295 En consecuencia, de lo anterior se actualiza una imposibilidad para que este Instituto ejecute correctamente sus atribuciones constitucionales, pues **sin el sustento presupuestario respectivo, omitido por la Cámara de Diputados al momento de emitir el PEF 2021, violenta la autonomía presupuestaria de este órgano ante la inexistencia de recursos para efectuar dicho ejercicio democrático, pone en riesgo su ejecución y las demás atribuciones del Instituto.**

296 Al respecto, ese Alto Tribunal en la REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA MATERIA DE CONSULTA POPULAR 1/2020, señaló que la consulta popular es un derecho humano de carácter político de fuente constitucional y convencional, previsto en los artículos 35 constitucional, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho permite la participación ciudadana, la

posibilidad de expresarse y decidir en un entorno democrático, así como la de opinar activamente en los asuntos públicos.

297 En ese sentido, resulta innegable que la consulta popular, reviste un medio de participación ciudadana que por eventual que sea, se equipara en trascendencia al derecho de votar en las elecciones de los órganos representativos, en tanto el resultado pueda alcanzar vinculatoriedad, de ahí que su desarrollo debe ser efectuado bajo los mismos estándares de calidad que las elecciones de los órganos representativos en términos de planeación y suficiencia presupuestaria.

298 Sobre el particular, debe señalarse que el desarrollo de este mecanismo de participación ciudadana, no concurre con el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2021, lo cual deriva de la reforma al artículo 35, fracción VIII de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, pues se eliminó la posibilidad de que fuese un ejercicio de democracia directa concurrente con las elecciones ordinarias, ello implica la necesidad de llevar a cabo las acciones para la preparación, desarrollo y ejecución de este ejercicio de participación ciudadana de manera independiente a las elecciones concurrentes, así como el uso de recursos adicionales, los cuales se insiste, son INEXISTENTES.

299 Así, partiendo de la gravedad de lo que implica siquiera pensar en la imposibilidad de poder hacer efectivo el derecho a la ciudadanía de participar en la consulta popular por no haberse asignado un presupuesto para ello, se hace hincapié en el hecho que la Cámara de Diputados en el ámbito de sus atribuciones y con motivo de lo solicitado mediante acuerdo INE/CG554/2020, debió a través del PEF



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

2021 proveer los recursos necesarios, a efecto de mitigar la carencia de estos para dicho ejercicio democrático y así evitar que se comprometa la funcionalidad total del Instituto y sobre todo, pueda producirse un impacto presupuestal de tal magnitud que perjudique el desarrollo de las elecciones en puerta.

300 En ese sentido, se colige que la Cámara de Diputados ha orillado al Instituto a efectuar la consulta popular con una grave carencia de suficiencia presupuestaria y agravando la misma con un recorte de 870 millones de pesos, lo cual es un completo desacierto constitucional pues el presupuesto que en su momento mandó el INE se efectuó bajo un arduo y estricto trabajo de planeación y austeridad con base en sus funciones ordinarias y periódicas, por lo que cualquier desvío de los recursos destinados a otras actividades, se traduce en la desarticulación y merma de las atribuciones constitucionales que el Instituto ejerce y sobre las cuales se trazó un plan de ejecución en sus funciones electorales.

301 En conclusión, el PEF 2021 resulta violatorio de la autonomía constitucional de este Instituto, al desatender lo mandado por el Constituyente, así como lo solicitado mediante acuerdo INE/CG554/2020, en tanto produce obstrucción y limitación en el ejercicio de la función electoral establecida en el artículo 35 en relación con el 41 constitucional, violando con ello la autonomía presupuestaria y funcional del INE, al no haberle permitido contar con la suficiencia presupuestaria para realizar la consulta popular como una de sus funciones constitucionales, por lo que ante dicha fractura de la autonomía presupuestaria del Instituto lo orilla a disponer de sus recursos de forma diversa a la planificada para intentar efectuar dicha consulta, lo cual trae consigo un detrimento en la prestación de todas las funciones

constitucionales electorales a su cargo, poniendo en riesgo la realización de sus actividades ordinarias, periódicas y extraordinarias, esto es las elecciones en puerta y hasta la propia consulta popular.

302 Lo anterior confirma lo sostenido por este Alto Tribunal en la referida controversia constitucional 10/2009. La Suprema Corte señaló que, en el asunto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, "la reducción a su presupuesto es el caso más claro de afectación a su autonomía e independencia", caso que se actualiza en la especie pues el efecto concreto que se genera de continuar dicha insuficiencia presupuestaria orilla al INE a reducir el presupuesto de los demás proyectos que fueron planificados para 2021, se insiste, ello con el inminente riesgo de obstaculizar al INE el correcto desarrollo de sus funciones constitucionales.

303 Así, dicha obstaculización en el cumplimiento de los objetivos constitucionales del INE, al mismo tiempo rompe con el principio de división de poderes por invadir su autonomía constitucional y presupuestaria.

304 De esa manera, el déficit presupuestario producido al INE, vulnera la autonomía financiera y con ello su competencia, la cual radica, fundamentalmente, en organizar las elecciones constitucionales, para garantizar el ejercicio del derecho al voto libre, directo y secreto, así como de organizar consultas populares como ejercicio democrático por el que se permite a la ciudadanía expresar su opinión, tal y como se encuentra tutelado en el artículo 35 constitucional, además de otras funciones estatales esenciales, vinculadas con la materia electoral.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

305 La autonomía que se menciona existe, en virtud que los órganos constitucionales autónomos funcionan en un régimen de cooperación y coordinación en que ejercen control recíproco, mas no de subordinación. En ese régimen, cuentan con garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su autonomía y que les permite salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales. De otra manera, si un poder público interfiere de forma preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo, se violaría el principio de división de poderes.⁷⁵ Si un poder público puede instruir a un órgano a que tome ciertas decisiones, **o impedir que realice sus funciones a través de alteraciones a su presupuesto, es claro que su autonomía se vulnera y su esencia orgánica y funcional se desnaturaliza.**

306 El Instituto Nacional Electoral, al organizar las elecciones de nuestro país y las consultas populares como medio de participación de la ciudadanía de reciente creación, se erige como un pilar de nuestro régimen democrático que goza de autonomía en el marco constitucional.

307 Esa autonomía se refiere a que el Instituto Nacional Electoral no debe depender de otros poderes para ejercer sus funciones, y dentro de ese marco la autonomía presupuestaria es instrumental para que el Instituto alcance sus fines. En efecto, "la autonomía presupuestaria del organismo electoral es determinante de sus posibilidades de eficacia, que depende de la forma en que se elabora, aprueba y

75 GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.

[Época: Décima Época, Registro: 2015478, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), Página: 603.]

desembolsa el presupuesto.⁷⁶ Esto es, no hay independencia institucional sin autonomía presupuestaria.

308 Así, la presente alegación parte de permitirle al INE contar con la suficiencia presupuestal, para llevar a cabo dicho ejercicio democrático en los términos constitucionales y legales establecidos. Asimismo, parte del imperativo de reivindicar que desde la propia Carta Magna se garantiza la autonomía del Instituto, por un lado, de la garantía a la función del órgano constitucional autónomo como mecanismo de protección del ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía; por el otro, también encuentra su sustento en la función especializada del Instituto, en virtud de la cual se le concibe como el órgano del Estado idóneo para decidir sus requerimientos presupuestarios al realizar su función especializada y los cuales no deberían ser invalidados, porque ese acto de subordinación por el que se le obliga a disponer de sus recursos de manera diferente a la que lo presupuestó, en violación al artículo 126 constitucional, será también en detrimento de la función que el INE brinda a la ciudadanía y del Estado de democrático en términos de los artículos 35 y 41 de nuestra Carta Magna.

309 Por lo anterior, resulta innegable que se ha actualizado la violación a la autonomía constitucional en perjuicio del INE, en tanto se le impide el adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a saber realizar la consulta popular sin presupuesto para ello y sin haber atendido lo establecido por el Constituyente y solicitado por este órgano autónomo derivado del acuerdo INE/CG554/2020 y notificado mediante los oficios INE/PC/238/2020.

⁷⁶ López Pintor, Rafael, "Administración Electoral", en Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Diccionario electoral, IIDH, San José, C. R., 2017, Vol. 1, p 31.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE/PC/239/2020 e INE/PC/241/2020, es decir, no dotarlo de la suficiencia presupuestaria, obligándolo a aplicar sus recursos de forma diferente a la que planificó en función de su especialización estatal, violentado el artículo 126 constitucional y acarreado la obstaculización de las atribuciones constitucionales que le corresponden en la materia.

310 En consecuencia, este Instituto acude ante ese Máximo Tribunal Constitucional a solicitar se remedie la problemática planteada y se ordene a la Cámara de Diputados como ente responsable de la discusión y aprobación del PEF 2021, en respeto a las atribuciones constitucionales de este Instituto y conforme a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019, así como a lo solicitado por este Instituto, **permitan a este órgano autónomo contar con la suficiencia presupuestaria necesaria para efectuar la Consulta Popular y así no imposibilitarlo para ejercer sus funciones en el ámbito de su autonomía constitucional y presupuestaria.**

V. CONEXIDAD

311 Ahora bien, la presente controversia constitucional se encuentra en un plano de similitud con las diversas 22/2019 y 10/2020, promovidas por el Instituto Nacional Electoral, en contra de los Presupuestos de Egresos 2019 y 2020, respectivamente, pues como se señaló, **en realidad la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación constituye un acto continuo, periódico y reiterado por el que la Cámara de Diputados viola la autonomía constitucional del INE, lo cual también acontece con el PEF 2021, por lo que se estima procedente invocar el principio de conexidad que se actualiza.** Lo anterior es así, por lo siguiente:

a) en dichas controversias se trata de las mismas partes,

b) el acto combatido en la presente controversia es el PEF 2021, como acto reiterativo de la conducta y postura desplegada por la Cámara de Diputados en el PEF 2019 y PEF 2020, por parte de la Cámara de Diputados en contra del INE, y

c) son las mismas violaciones e intromisiones reclamadas, es decir, el derecho de pedir es coincidente en ambas controversias, al tiempo que la presente litis está orientada por la misma afectación de la autonomía del INE, por lo cual se considera que deben resolverse y estudiarse de manera conjunta y, de preferencia, una vez dictada la conexidad, simultáneamente.

312 En efecto, toda vez que la aprobación del presupuesto es un acto periódico y permanente en términos del artículo 74, fracción IV, de la CPEUM, y la postura de la Cámara de Diputados, como ya aconteció en el 2019, 2020 y ahora con el ejercicio fiscal 2021, está claramente encaminada a ejercer intromisión a la esfera competencial del INE y a su autonomía de gestión, al fijar topes presupuestarios, así como restricciones a las remuneraciones de sus servidores públicos, dejando de lado las tareas constitucionales que le confiere la propia Carta Magna, haciéndole recortes injustificados e irracionales, es que se hace patente la necesidad de que en las controversia se resuelva y se dilucide el conflicto competencial que se denuncia de forma reiterada.

313 Por ello, con fundamento en el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la CPEUM (principios de impartición de justicia completa y de privilegio de solución



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

del conflicto sobre los formalismos procedimentales) y en el artículo 39 de la Ley Reglamentaria (examen en conjunto de los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada), así como con apoyo en la Jurisprudencia P./J.79/98 (examen de la constitucionalidad de los actos impugnados, superando cuestiones procesales que lo impidan), se emita la causa de pedir de este Instituto en las mencionadas controversias, en virtud de que la pretensión es idéntica y la litis planteada es igual, esto es, en dichos sumarios se alega la inconstitucional intromisión de la Cámara de Diputados en su autonomía, sin que la vigencia anual de los presupuestos de egresos, sea obstáculo para analizarla de manera conjunta, que, como se ha apuntado, es de naturaleza continua y periódica (continua porque la Constitución no acota la temporalidad en que la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la discusión y aprobación del Presupuesto, entendiéndose como una atribución permanente; es periódica en tanto que, dicho ejercicio deberá de llevarse de forma anual también conforme a la Constitución).

314 Al respecto, el imperativo de búsqueda de la cuestión efectivamente planteada hace referencia a un estándar que rige el procedimiento de análisis del expediente que la SCJN usa en su condición de máximo tribunal constitucional. La búsqueda de la cuestión efectivamente planteada tiene y debe tener una incidencia horizontal en todas las etapas en las que desemboca la resolución: identificación de los actos reclamados y de las normas constitucionales que se estiman violadas así como del impacto que esto produce en la esfera jurídica del actor, identificación del contexto fáctico y jurídico, sistematización de los conceptos de invalidez y de los argumentos de la demandada, todo con el objeto de que la autoridad jurisdiccional construya su sentencia desde la plena identificación de la causa de pedir y en esa medida aplique la ley.

315 Por su parte, la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, implica el deber de los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al analizar la cuestión efectivamente planteada deben abstenerse de integrar consideraciones arbitrarias, formalistas y superficiales que impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.

316 Lo anterior, porque la resolución de fondo es la que otorga máxima aplicación del derecho fundamental de tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, bajo la perspectiva de acceso a una justicia completa, entendida como el derecho a la resolución de todos y cada uno de los aspectos debatidos en el juicio, cuyo estudio sea necesario.

317 Así, la conexidad solicitada es procedente en tanto que, genera certidumbre a este Instituto sobre los agravios señalados en las controversias 22/2019 y 10/2020, como en la presente, pues la sentencia sobre la cuestión de fondo efectivamente planteada (invasión e intromisión periódica y continua) atendería dichas impugnaciones, de lo contrario, se entraría en un ciclo interminable de contiendas judiciales entre el INE y la Cámara de Diputados respecto de cada Presupuesto de Egresos que año con año discuta y apruebe según lo dispuesto por el artículo 74 constitucional, en tanto no exista pronunciamiento por ese Máximo Tribunal respecto de la apuntada intromisión; para muestra de ello, en el caso que nos ocupa, la Cámara de Diputados ha expedido el Presupuesto de Egresos 2021, repitiendo las mismas violaciones a la autonomía del INE que en el PEF 2019 y PEF 2020.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

318 Por lo tanto, es necesaria la conexidad y resolver la apuntada invasión competencial, en la magnitud que corresponde a su naturaleza cíclica, para dar certeza jurídica a este Instituto y limitar la intromisión en su autonomía y atribuciones que implica el inconstitucional actuar que la Cámara de Diputados ejerce apoyándose en lo previsto en el artículo 74 constitucional.

319 Lo anterior es así, pues debe precisarse que por disposición del numeral 38 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de casos similares aun y cuando no proceda la acumulación de controversias, la conexidad de asuntos podrá invocarse para resolverse en la misma sesión.

320 En efecto, si bien la figuras jurídicas de la acumulación y la conexidad tienen conotaciones distintas, en el presente caso resultan aplicables toda vez que a la fecha en las diversas 22/2019 y 10/2020, promovidas por el Instituto Nacional Electoral, en contra de los Presupuestos de Egresos 2019 y 2020, respectivamente, en ninguna de ellas se ha señalado día y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, establecida en el artículo 29⁷⁷ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

321 Por tanto, toda vez que en las diversas controversias constitucionales 22/2019 y 10/2020, promovidas por el Instituto Nacional Electoral, en contra de los Presupuestos de Egresos 2019 y 2020, respectivamente, no se ha señalado día

⁷⁷ Artículo 29 Habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o la reconvencción, el ministro instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes. El ministro instructor podrá ampliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite.

y hora para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, establecida en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese Alto Tribunal deberá decretar la conexidad con la presente litis y se deberá acordar que los tres medios de control de la constitucionalidad se resuelvan en la misma sesión en términos del artículo 38 de la Ley Reglamentaria⁷⁸.

VI. SUSPENSIÓN

322 Con fundamento en el artículo 14 de la ley reglamentaria, solicito que previo análisis de ese Alto Tribunal, se otorgue la suspensión en la presente controversia, para el siguiente efecto:

- Para que queden suspendidos los mandatos contenidos en el ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos), ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos), ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos ANEXO 23.8.1.A LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos); ANEXO 23.8.1.B LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETO MENSUAL) (pesos); ANEXO 23.8.3.A

⁷⁸ **ARTICULO 38.** No procederá la **acumulación** de controversias, pero cuando exista **conexidad** entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá acordarse que SE RESUELVAN EN LA MISMA SESIÓN.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos); ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021; ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos) y ANEXO 23.8.3.D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021, así como en el artículo vigésimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, incluidos sus efectos y consecuencias, **esto es que el parámetro de cálculo para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, sus salarios, prestaciones y remuneraciones nominales, adicionales, extraordinarias o de cualquier otra índole del ejercicio fiscal 2021 y subsecuentes, no sea la remuneración del Presidente de la República.**

- Asimismo, en vía de consecuencia, se suspenda la aplicación de cualquier norma de responsabilidad penal o administrativa para sancionar las conductas que puedan ser materia de la medida cautelar.

VI.A Razones que orientan la petición de suspensión del artículo vigésimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos 2021, ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos

323 Para la suspensión del ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos, así como el artículo vigésimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos 2021, es importante notar, en primer término, que al pronunciarse sobre la suspensión solicitada en la acción de inconstitucionalidad 105/2008 y su acumulada, así como la controversia constitucional 2/2019, este Alto Tribunal ya

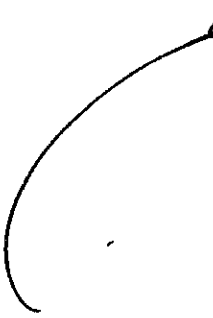
reconoció la afectación irreversible (peligro en la demora) que puede tener la reducción de remuneración de las y los servidores públicos. Ese Tribunal señaló lo siguiente:

Acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018

Lo anterior es así, porque con este pronunciamiento no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ni se afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudieran obtener los promoventes de la acción; por el contrario, de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos y la sociedad, pues de acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita, no tendría efectos retroactivos, ya que éstos sólo se permiten para la materia penal, al disponer tal ordenamiento lo siguiente

Controversia constitucional 2/2019

...de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los principios constitucionales que rigen al Banco de México, contenidos en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Federal, y los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados ocasionando con ello daños irreversibles a los servidores públicos de esa Institución; máxime que con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Federal, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita, no tendría efectos retroactivos...





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

324 Los precedentes de mérito ponen de relieve el reconocimiento de ese Alto Tribunal en el sentido que, si el Instituto Nacional Electoral cumple con el mandato que le obliga a violar derechos humanos y laborales de sus trabajadores, le impide el cumplimiento de su obligación en el marco del artículo 1° constitucional y representaría la afectación irreversible de las y los servidores públicos y la sociedad.

325 Una afectación a los derechos laborales de los trabajadores produciría efectos irreparables para el Instituto Nacional Electoral. Por una parte, si los trabajadores impugnaran la disminución salarial y obtuvieran una medida cautelar (lo cual es probable por los precedentes mencionados), el Instituto debería sufragar dichas cantidades, y las erogaciones realizadas no podrían recuperarse por la imposibilidad de otorgar efectos retroactivos a la sentencia. Por la otra, más grave aún, una baja salarial impediría que el Instituto Nacional Electoral retuviera al personal especializado, en claro detrimento del Servicio Profesional Electoral y las funciones del Instituto. **En otras palabras, una baja salarial puede afectar el trabajo de casi tres décadas para construir un servicio profesional y mantener los niveles de competencia de su personal especializado.**

326 Es así que las porciones impugnadas del Presupuesto de Egresos —ninguna de las cuales constituye una norma general—, con su implementación existe una probabilidad de afectación a las remuneraciones de los servidores públicos que prestan sus servicios al INE, que puede poner en peligro su autonomía constitucional de conformidad con lo previsto en el artículo 41, fracción V, apartado A de la Constitución Federal, y con su concesión no se actualiza ninguna de las prohibiciones del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia.

327 Al respecto, es importante poner de relieve que derivado de la controversia constitucional 10/2020 a la cual ya se ha hecho referencia, provino el recurso de reclamación 25/2020-CA, así en dicho medio de impugnación la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Es parcialmente fundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO. Se modifica el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 10/2020.

TERCERO. Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral en términos del último apartado de este fallo”.

328 En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión solicitada en la controversia constitucional 10/2020 en favor de este Instituto, para los siguientes efectos:

“VIII. EFECTOS

Por lo tanto, con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada respecto a las remuneraciones de los servidores públicos del INE, para el efecto de que lo dispuesto en los Anexos 23.1.2 y 23.1.3, 23.8.1.A y 23.8.1.B, 23.8.2, 23.8.3.A y 23.8.3.B, así como en el artículo vigésimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil veinte no se utilice como parámetro para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Si bien, se debe tener como efecto que las remuneraciones respectivas se fijen conforme a lo establecido en los artículos 75, párrafo primero, y 127 de la Constitución Federal y aplicar la remuneración aprobada para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve. Lo cierto, es que por encontrarse en sub judice, la diversa controversia constitucional 22/2019, en la que el INE también se inconformó del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, así como el recurso de reclamación 18/2019-CA, derivado del incidente de suspensión de esta última controversia, en el cual, dicho Instituto impugnó el auto en donde se le determinó negar la suspensión. Esta Primera Sala de la Suprema Corte debe mantener vigente la previsión salarial previamente existente, que en su momento no puso en peligro la seguridad o economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, es decir, la establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho.

La suspensión es una figura cautelar que prescribe mantener el estado de cosas existente antes de la aplicación del acto impugnado, por lo que, como se ha reiterado en distintos precedentes por esta Suprema Corte, no podría tener un efecto restitutorio, como podría ser la reviviscencia de normas derogadas. Sin embargo, debe concluirse que este no es el efecto ahora determinado.

Pues, al haberse suspendido la aplicación de las porciones precisadas del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de dos mil veinte se ordena mantener el estado de cosas previo, esto es, aquel en el cual no se aplica las porciones mencionadas.

Por tanto, el órgano de dirección o de la instancia correspondiente del INE, en cumplimiento a la suspensión decretada en esta resolución, debe volver a resolver sobre la fijación de las referidas remuneraciones para el efecto de que se respeten las cantidades fijadas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, sin considerar el tope establecido por la Cámara de Diputados.

Al darse cumplimiento a la presente suspensión, debe entenderse aplicable el límite del gasto programable establecido en favor del INE en el Anexo 1, relativo al Ramo 22, así como

aquellos gastos de programas específicos precisados en el referido decreto, por tanto, el órgano de dirección o la instancia correspondiente del Instituto recurrente debe proceder a reconducir aquellos montos de los que pueda disponer —con fundamento en su facultad de ejercicio autónomo de su presupuesto— para dar cumplimiento a los Lineamientos fijados en esta resolución cuidando no afectar obligaciones adquiridas, ni derechos adquiridos, así como no afectar el desempeño de sus funciones como órgano constitucional autónomo.

En vía de consecuencia, debe entenderse incluido en la suspensión la aplicación de cualquier norma de responsabilidad penal o administrativa para sancionar las conductas que son materia de la presente decisión.

Finalmente, se precisa que la medida cautelar concedida surtirá efectos desde el momento en que se notifique la presente Resolución y sin necesidad de otorgar garantía alguna.”

**Énfasis añadido.*

329 En este contexto, mediante oficio No. INE/DJ/6151/2020 de 1 de septiembre 2020, se comunicó al H. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión concedida había sido acatada en sus términos mediante acuerdo INE/JGE110/2020 de 24 de agosto de 2020, denominado: “ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020”.

330 Así se transcribe la parte relativa del oficio No. INE/DJ/6151/2020, para pronta referencia:



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

“Al respecto, conforme al acuerdo Quinto del Acuerdo INE/JGE110/2020, y a efecto de que se tenga por acatada en sus términos la interlocutoria citada, se informa que la Junta General Ejecutiva del INE acordó lo siguiente:

“PRIMERO. *Se modifica el Acuerdo INE/JGE245/2019, única y exclusivamente en su Acuerdo Segundo, inciso a) y último párrafo, en cuanto a la actualización de los Tabuladores de Sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; así como las Remuneraciones para las contrataciones de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios permanentes, del nivel Tabular RA1 al VC2, conforme a los efectos señalados en la resolución a la que se da cumplimiento.*

SEGUNDO. *Se aprueba la actualización de los referidos tabuladores y remuneraciones, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil dieciocho, en términos de lo dispuesto en el anexo único que forma parte integrante del presente Acuerdo, con efectos a partir 12 de agosto de año en curso.”*

331 **En ese sentido, se modificó el acuerdo INE/JGE245/2019, a efecto de mantener vigente en este Instituto la previsión salarial previamente establecida, que en su momento no puso en peligro la seguridad, economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, es decir, la establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, cuidando no afectar obligaciones ni derechos adquiridos, así como no alterar el desempeño de sus funciones como órgano constitucional autónomo.**

332 Conforme a lo anterior, y tal y como lo refiere la resolución de mérito al encontrarse en sub judice, las diversas controversias constitucionales 22/2019 y 10/2020, en la que el INE también se inconformó del Presupuesto de Egresos para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, respectivamente, es que considera posible mantener vigente la previsión salarial previamente existente, que en su momento no puso en peligro la seguridad o economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, es decir, la establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018. Lo anterior al haberse suspendido la aplicación de las porciones precisadas del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020, es que resulta procedente mantener el estado de cosas previo, esto es, aquel en el cual no se aplican las porciones mencionadas.

333 Por lo anterior, conforme a dicho precedente, se evidencia que, en el supuesto de no concederse la suspensión en los términos solicitados, se afectaría la autonomía otorgada por la Constitución Federal a este Instituto, ello en virtud de que sus titulares se verían perjudicados e influenciados por diversos poderes; como lo es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, máxime que se encuentra en desarrollo el proceso electoral 2020-2021.

334 Aunado a lo anterior, la demora en otorgar la suspensión solicitada, no causaría únicamente un grave daño en lo que atañe a las remuneraciones de los servidores públicos de este ente autónomo, sino también se causaría un daño irreparable en lo concerniente a las facultades y atribuciones constitucionales del INE, tales como el desarrollo del proceso electoral 2020-2021 e incluso la consulta popular.

335 Adicionalmente, se considera que una reconducción que cuide estos extremos supone un costo menor que el incurrido por la sociedad en contar con un órgano



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

constitucional autónomo que ejerce sus facultades constitucionales expuesto a las presiones políticas por parte de los otros poderes, en otras palabras, existe un mayor riesgo para la sociedad en un escenario en que las decisiones técnicas o especializadas del INE pudieran verse influenciadas por dichas presiones, es decir, que pueda afectar el ejercicio de su función o de las garantías institucionales de autonomía o independencia.

336 Rubustuce en lo conducente, el siguiente criterio federal 1a. CCXLI/2012 (10a.), con número de registro 2001875, emitido por la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 2, página 1304, de título y contenido siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE OTORGUE LA SUSPENSIÓN, NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. Conforme a los artículos 105, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, las sentencias definitivas no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que rigen los principios generales y las disposiciones legales de dicha materia. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXVII/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.", consideró que el mismo criterio debe aplicarse al otorgar la suspensión en ese medio de control, debido a que, si la sentencia

de fondo no puede tener efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución dictada en el incidente cautelar; además, si la suspensión impide que se realicen determinados actos, es claro que no puede concederse cuando éstos ya se materializaron. Lo anterior es así, porque si se toma en cuenta la facultad que el artículo 18 de la referida ley otorga al Ministro instructor para que cuando considere procedente conceder la suspensión, señale el día en que esta medida debe surtir efectos, resulta claro que no es factible señalar hacia el pasado la fecha en que tendrá efectividad, sino que debe ser a partir del dictado del auto que la concede, ello con la finalidad de dar certeza a las partes que tengan alguna relación con la controversia y que deban respetar o gozar de la medida, así como evitar concederla respecto de actos materializados, pues el fin de la suspensión es impedir que se realicen determinados actos; de ahí que no pueda tener efectos retroactivos."

337 Conforme a lo expuesto, es menester que la medida cautelar se conceda a la brevedad posible y bajo los términos solicitados, para así evitar daños irreparables no sólo a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, sino también al Estado democrático y a la división de poderes, mismas que conforma una de las instituciones fundamentales del Estado, resultando aplicable la jurisprudencia P./J. 21/2002, con número de registro 187055, emitida por el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 950, de título y contenido siguientes:

**"SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE**



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO" PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO. El artículo 15 de la ley mencionada establece que la suspensión **no podrá concederse cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano**; sin embargo, no precisa qué debe entenderse por éstas, por lo que debe acudirse a las reglas de la interpretación jurídica. De esta forma, si en su sentido gramatical la palabra "instituciones" significa fundación de una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras que el término "fundamentales" constituye un adjetivo que denota una característica atribuida a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, **se concluye que por instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a la Nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre sus recursos; y h) rectoría económica del Estado."**

Énfasis añadido.

338 Conforme al citado criterio jurisprudencial, **en caso de no concederse la medida cautelar, existiría una verdadera afectación a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano**, en consecuencia, se advierte la urgencia y peligro que existe en la demora respecto a la suspensión solicitada, por lo que ésta deberá concederse a mi representada.

VII. PRUEBAS

339 Con fundamento en el artículo 31 de la Ley Reglamentaria, ofrezco como pruebas las siguientes:

a. Documental Pública consistente en copia certificada del Acuerdo INE/CG40/2020 aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 06 de febrero de 2020, en la que se designó a Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral por un nuevo periodo de seis años.

b. Documentales Públicas consistentes en impresiones de:

- El Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, disponible para su consulta en https://www.dof.gob.mx/2020/SHCP/PEF_2021.pdf.
- El Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, disponible para su consulta en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603705&fecha=28/10/2020.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- El Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020, disponible para su consulta en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5605445&fecha=19/11/2020.
- La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recaída al recurso de reclamación 25/2020-CA, disponible para su consulta: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=270201>.

Documentales que constituyen “**HECHOS NOTORIOS**”, sirviendo de apoyo la *ratio essendi* de la Tesis de Jurisprudencia con datos de localización [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, enero de 2009; Pág. 2470. XX.2o. J/24. Registro No. 168 124, de título “*HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.*”, y que se agrega impreso para pronta referencia.

- c. Documental Pública consistente en copia certificada del acuerdo INE/CG236/2020 de 26 de agosto de 2020, con el que el Instituto Nacional Electoral aprobó su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal

2021, el cual incluye entre otros anexos las, "Bases Generales del Anteproyecto de Presupuesto 2021 del Instituto Nacional Electoral".

- d. Documentales Públicas consistentes en copia certificada de los oficios INE/PC/116/2020 e INE/PC/117/2020 signados por el Consejero Presidente del INE y a través de los que se envió el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 al Presidente de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- e. Copia certificada del Acuerdo INE/CG554/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral publicado el 13 de noviembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se aprueba la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, por un monto total de \$1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N).
- f. Copias certificadas de los acuses de recibo del oficio del oficio INE/PC/238/2020, INE/PC/239/2020 y INE/PC/241/2020 de 28 de octubre de 2020, mediante el cual el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, remitió el proyecto de presupuesto de dicho órgano para realizar la Consulta Popular al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al Congreso de la Unión, respectivamente para efecto de la su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- g. Copia certificada del oficio número D.G.P.L. 64-II-8-4340 presentado el 26 de octubre de 2020, en la oficialía de partes común del INE, y signado por el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, Diputada Dulce María Sauri Riancho y Diputada María Guadalupe Díaz Avilez, mediante el cual se notifica al Instituto Nacional Electoral el Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la Convocatoria de Consulta Popular.
- h. Documental Pública consistente en copias certificadas del "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS" identificado con la clave alfanumérica INE/CG634/2020; así como de las "Bases Generales del Presupuesto 2021 del Instituto Nacional Electoral".
- i. Copia certificada del acuerdo INE/JGE110/2020 de 24 de agosto de 2020, denominado: "ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020".
- j. Copia certificada del Oficio No. INE/DJ/6151/2020 de a 1 de septiembre 2020, se comunicó al H. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la

suspensión concedida fue acatada, lo anterior, derivado del Recurso de Reclamación 25/2020-CA, Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 10/2020 promovida por este Organismo Autónomo en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

- k. Copia certificada del oficio No 315-A-3702 suscrito por el Director General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual se da respuesta al oficio INE/PC/241/2020, mediante el cual el Consejero Presidente del INE hace del conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal que se están solicitando a la Cámara de Diputados recursos adicionales, toda vez que en el Anteproyecto de presupuesto no habían sido contemplados para la realización de la Consulta Popular a celebrarse el 1 de agosto de 2021.

VIII. PETITORIOS

340 Por lo expuesto y fundado, pido atentamente a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PRIMERO. Tener por promovido la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Tener por señalado el domicilio para recibir notificaciones y por designados a los delegados de esta autoridad, así como acordar favorablemente respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico y las notificaciones por esa vía.

TERCERO. Acordar favorablemente sobre la conexidad invocada.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CUARTO. Otorgar la suspensión solicitada.

QUINTO. Suplir la queja deficiente en el caso.

SEXTO. En su momento, declarar la invalidez de los actos reclamados.

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020

EDMUNDO JACOBO MOLINA,
Secretario Ejecutivo,
en representación del Instituto Nacional Electoral

019164

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2020 DIC 16 AM 9 22

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido por el buzón judicial en 47 folios
el día 15 de diciembre del presente año
con 9 anexos en copia certificada en
15) 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3 y 6 folios respectivamente
4 discos compactos compactos con su
certificación en 1 folio cada uno.

Diversos anexos en copia simple sin foliar
7 folios





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que la presente documentación es copia fiel y exacta del original del "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. EDMUNDO JACOBO MOLINA COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR UN NUEVO PERIODO DE SEIS AÑOS", identificado con la clave alfanumérica "INE/CG40/2020", aprobado en la segunda sesión extraordinaria del Consejo General de Instituto Nacional Electoral celebrada el día seis (6) de febrero del presente año. Documento que consta de veintisiete (27) folios, sin incluir la presente, mismo que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de esta Dirección del Secretariado. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

INE/CG40/2020

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL C. EDMUNDO JACOBO MOLINA COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR UN NUEVO PERIODO DE SEIS AÑOS

GLOSARIO

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto	Instituto Nacional Electoral
LGIFE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Austeridad	Ley Federal de Austeridad Republicana
OPL	Organismos Públicos Locales
Reglamento Interior	Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
UTVOPL	Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales

ANTECEDENTE

En sesión extraordinaria celebrada el **11 de abril de 2014**, el Consejo General aprobó por mayoría de votos el nombramiento del C. Edmundo Jacobo Molina como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a propuesta de su Presidente.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

CONSIDERANDOS

1. Competencia.

Este Consejo General es competente para designar al C. Edmundo Jacobo Molina como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, dado que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo tercero, base V, apartado A, párrafos noveno y décimo, de la Constitución; y 36, párrafo 8, de la LGIPE, tiene dentro de sus atribuciones de nombrar a la persona que ocupará dicho cargo, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta de su Presidente.

Asimismo, en términos del artículo 50 de la LGIPE, el Secretario Ejecutivo durará en el cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez.

Al efecto, el artículo 45, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, establece dentro de las atribuciones del Presidente del Consejo General, proponer el nombramiento del Secretario Ejecutivo.

En este sentido, el Presidente del Consejo General propone a dicho órgano colegiado la designación de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del Instituto, con apoyo en la facultad que le concede el citado artículo 50 de la LGIPE.

En ese tenor, este Consejo General tiene competencia para acordar la designación de mérito, bajo los siguientes fundamentos y consideraciones de derecho.

2. Fundamentos que sustentan la determinación

El artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado A, párrafo primero de la Constitución; en relación con los artículos 29, 30, párrafo 2, de la LGIPE, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

El artículo 41, párrafo tercero, base V, apartado A, párrafo segundo de la Constitución; en relación con el artículo 31, párrafo 1 de la LGIPE, dispone que el Instituto será autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un Consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; esta disposición constitucional está regulada en el artículo 36, párrafo 1, de la LGIPE.

El artículo 31, párrafo 4, de la LGIPE establece que el Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa.

El artículo 34, párrafo 1, de la LGIPE, establece que los órganos centrales del Instituto son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.

El artículo 38, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Secretario Ejecutivo deberá reunir los requisitos que se exigen para ser consejero electoral, previstos en el párrafo 1 del mismo precepto, salvo lo establecido en el inciso j); al efecto, en lo aplicable, el dispositivo señala:

Artículo 38

1. Los Consejeros Electorales deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser ciudadano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;*
- b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar;*
- c) Tener más de treinta años de edad, el día de la designación;*



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

- d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones;*
- e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso;*
- f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;*
- g) No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;*
- h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;*
- i) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y ...*

Los artículos 46 y 51 de la LGIPE; y 41, párrafo 2 del Reglamento Interior, establecen las atribuciones que corresponde al Secretario del Consejo y al Secretario Ejecutivo, dentro de las que cabe destacar las siguientes:

- Representar legalmente al Instituto.
- Suscribir, en unión con el Consejero Presidente, los convenios que el Instituto celebre para asumir la organización de procesos electorales locales.
- Auxiliar al Consejo General y a su Presidente en el ejercicio de sus atribuciones; actuar como secretario del Consejo General y de la



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

Junta General Ejecutiva; cumplir los acuerdos del Consejo General; informar sobre el cumplimiento de los acuerdos al Consejo General y de la Junta General Ejecutiva.

- Expedir los documentos que acrediten la personalidad de los consejeros y de los representantes de los partidos políticos.
- Ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral.
- Orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas y de las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto; aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del Instituto.
- Elaborar anualmente, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para someterlo a consideración del presidente del Consejo General.
- Coadyuvar con el titular del Órgano Interno de Control en los procedimientos que éste acuerde para la vigilancia de los recursos y bienes del Instituto.
- Definir y dar seguimiento de las auditorías del Instituto.
- Promover y dar seguimiento al modelo de planeación y visión estratégica institucional.
- Supervisar y coordinar la elaboración, integración, control y seguimiento del plan integral y calendario de los procesos electorales federales, así como de los planes integrales de coordinación y calendarios con los OPL para los procesos electorales locales, que lleven a cabo las áreas responsables.

3. Oportunidad en la decisión

Con fundamento en los preceptos legales citados, este Consejo General estima que es oportuna la designación de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo de este Instituto, por un nuevo periodo de seis años, en atención a lo siguiente.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

En primer término, conviene mencionar algunos antecedentes en los nombramientos que precedieron al actual Secretario Ejecutivo.

La figura de la Secretaría Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral surgió con la reforma de 1996, cuando la Secretaría General y la Dirección General se consolidaron en una sola figura, ahora denominada Secretaría Ejecutiva; el primer Secretario Ejecutivo cumplió esas labores durante el proceso de 1997, y el 31 de enero del 1998 abandonó el cargo.

Derivado de lo anterior, el entonces Consejero Presidente hizo varias propuestas para la ocupación del cargo y hasta abril se lograron los acuerdos necesarios para la designación del nuevo Secretario Ejecutivo de la institución, que duró 5 años 10 meses en el puesto.

Con posterioridad, la Secretaría Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral fue ocupada por diversas personas. Así, María del Carmen Alanís Figueroa, estuvo un año 6 meses al frente de la Secretaría Ejecutiva; Manuel López Bernal, de manera transitoria, solo por 6 días; nuevamente Manuel López Bernal, por 2 años, 5 meses; Ignacio Ruelas Olvera, encargado por 28 días; Hugo Alejandro Concha Cantú, encargado por un mes y 20 días.

En la etapa final del Instituto Federal Electoral, el método de la designación llevó varias semanas de procesamiento y, después de una larga lista de propuestas, Edmundo Jacobo Molina, fue designado el 5 de junio del 2008 como Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.

De los antecedentes señalados, puede observarse que la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva es un tema complejo, ya que además del análisis de los perfiles de las propuestas, implica un proceso de deliberación en el que sin duda es necesario generar consenso, dada la diversidad de opiniones respecto de quién podría desarrollar estas delicadas y fundamentales funciones para el funcionamiento del Instituto.

Ahora, es importante que el desarrollo de un proceso de esa naturaleza se lleve a cabo con la suficiente antelación a la fecha de la conclusión del cargo, dado que, de no ser así, se corre el riesgo que la falta de consenso genere la vacante en dicho cargo y, en consecuencia, se interrumpa la continuidad de los trabajos técnicos, administrativos y ejecutivos de la institución, porque,



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

como se expresará más adelante, el Secretario Ejecutivo cumple una serie de atribuciones que no solamente se refieren a un ámbito de actuación limitado, sino que, como coordinador de la Junta General Ejecutiva, Secretario de la misma y del Consejo General, así como su carácter de representante legal, tiene a su cargo una serie de encomiendas que ameritan atención diaria y constante.

La ratificación objeto del presente acuerdo es oportuna en atención a lo siguiente:

- La facultad que ejerce el Consejero Presidente en cuanto a la potestad de someter a consideración de los integrantes del Consejo General la propuesta de designación o ratificación del Secretario Ejecutivo no se encuentra regulada específicamente en la ley o en alguna norma reglamentaria del INE. Se trata, por ende, de una facultad discrecional,¹ es decir, compete a la presidencia valorar libremente el momento adecuado para ello.

En este caso, como se indicó, el ordenamiento jurídico es omiso en establecer, de manera implícita o explícita, alguna regla mediante la cual determine el momento en que el Consejero Presidente debe presentar la propuesta de designación o de ratificación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE.

La ausencia de parámetros normativos sobre cuándo y cómo el Consejero Presidente deba ejercer la atribución de proponer a un candidato, revela que la potestad en cuestión es una facultad discrecional, en oposición a las "atribuciones regladas",² ya que implica "una libertad de elección entre

¹ Eduardo García de Enterría encomiaba la precisión con la cual la exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa identificaba lo esencial de la discrecionalidad: "surge cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que sea de interés público". García de Enterría, Eduardo, *Democracia, jueces y control de la Administración*, 4ª ed., Madrid, Civitas, 1998, p. 143.

² Las potestades regladas o vinculadas son aquellas en que existen normas que determinan si la administración ha de actuar, cómo debe hacerlo, cuál es la autoridad competente, así como cuáles son las condiciones de la actuación administrativa, de tal suerte que no se deja "margen para elegir el procedimiento a seguir según la apreciación que el agente pueda hacer de las circunstancias del caso". Serra Rojas, Andrés, *Derecho Administrativo*, México, Librería de Manuel Porrúa, 1959, p. 275.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión se fundamenta normalmente en criterios extrajurídicos [...] no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración”.³ Entonces, si no existe en la Constitución, la LGIPE, ni en el Reglamento Interior, disposición que imponga los criterios o momentos que deban regir la emisión de un acto, ni dichas especificaciones son deducibles de un mandato constitucional o legal, el Consejero Presidente cuenta con la facultad de decidir, conforme a los intereses del INE, con libertad de elección entre alternativas igualmente válidas, conforme a criterios de oportunidad, políticos, sociales o de otra índole que se estime relevante y conveniente para la institución.

Ahora bien, los ámbitos de discrecionalidad con que cuenta un ente o agente no son absolutos, como se encuentra pacíficamente aceptado en la doctrina contemporánea, pues existen ciertas reglas que deben observarse invariablemente en el ejercicio de las atribuciones discrecionales.⁴ Así, suelen identificarse como elementos mínimos reglados de los actos administrativos discrecionales: la previsión normativa que reconozca o conceda la facultad discrecional,⁵ su extensión o hechos relevantes que la condicionan, el órgano competente para ejercerla y la finalidad que pretende lograrse mediante el ejercicio de la facultad discrecional.⁶

En la especie, se cumplen los parámetros reglados que anteriormente se han precisado, dado que la facultad discrecional está prevista legalmente (arts. 36, numeral 8; 44, numeral 1, inciso c), de la LGIPE); de ella se deriva el conjunto limitado de los casos en los cuales puede ejercerse (ausencia de la

³ García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, *Curso de Derecho administrativo*, t. I, 15ª ed., Madrid, Civitas, Thompson Reuters, 2011, p. 483.

⁴ De hecho, no es infrecuente que se recuerde que todo acto administrativo contiene dosis de actuación reglada y otros de discrecionalidad. Véanse, por ejemplo, Olivera Toro, Jorge, *Manual de Derecho administrativo*, 5ª ed., México, Porrúa, 1988, p. 181; Gordillo, Agustín, *Tratado de Derecho administrativo*, t. I, 8ª ed., Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2003, p. X-19; y Garrido Falla, Fernando, *Tratado de Derecho administrativo*, vol. I, 11ª ed., Madrid, Tecnos, 1989, p. 396.

⁵ Y es que, en efecto, todo “poder discrecional... ha tenido que ser atribuido previamente por el ordenamiento. No hay, por tanto, discrecionalidad en ausencia o al margen de la Ley”. García de Enterría, Eduardo, *ob. cit.*, p. 143.

⁶ Algunos autores mencionan también la necesidad de que exista un procedimiento para la actuación administrativa. Confróntense: García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, *op. cit.* nota 11, p. 479; Parada, Ramón, *Derecho administrativo*, vol. I, 18ª ed., Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 102; y Parejo Alfonso, Luciano, *Derecho administrativo*, Barcelona, Ariel, 2003, pp. 630 y 631.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

persona titular de la Secretaría Ejecutiva o, como en el caso, próxima conclusión del período para el que ha sido designada la persona que lo ocupa); el órgano competente para hacerlo —el Consejero Presidente—, así como las finalidades que pretenden satisfacerse o lograrse con su ejercicio; que en este caso están ligadas al adecuado funcionamiento de los órganos de la institución y, con ello, la prestación de la función electoral que tiene encomendada el INE. En este sentido, la facultad discrecional en cuestión se encuentra conectada con la diversa atribución reconocida a la presidencia del Consejo General, establecida en el artículo 45, párrafo 1, inciso a), de la LEGIPE, relativa a garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del instituto.

Esta situación cobra una relevancia especial, porque la falta de regulación que establezca la fecha o el periodo en que deba realizarse o tomarse la decisión de nombrar o ratificar al Secretario Ejecutivo permite que el Instituto, a través de su Consejo General, en ejercicio de su autonomía constitucional, emita oportunamente la decisión correspondiente conforme a una serie de consideraciones de oportunidad, pero siempre orientadas al cumplimiento de los fines institucionales.

Se debe enfatizar que ni la atribución del Presidente, ni la que deba tomar el Consejo General se encuentra condicionada o normada para realizarse al término exacto de los seis años, o en un lapso determinado y próximo a que ello ocurra; tampoco se debe esperar a que se genere vacante, renuncia, destitución o que se llegue el término del encargo. Ante la ausencia de un nombramiento, se iría en contra del funcionamiento y operación del Instituto, pues generaría inestabilidad, incluso, en el seguimiento a las tareas habituales de la institución.

Es importante destacar que, si bien es cierto que la ley refiere un término específico para la conclusión de un cargo, dicha previsión se realiza con el objeto de que se tenga certeza de la temporalidad para ejercerlo, y obedece a la necesidad de que haya continuidad en los trabajos que debe desarrollar el servidor público que ostente ese nombramiento y justamente previene que se ponga en riesgo la operación de cualquier institución.

También tiene como finalidad que se realice una adecuada planeación o previsión, para efecto de que se dé tiempo suficiente para la deliberación y ya se tenga un sustituto para ejercer el cargo, lo que evita que la operación



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

habitual se vea mermada o se causen perjuicios a los actores involucrados o a la propia ciudadanía, por premura en el nombramiento. Así como sucede en los cargos de elección popular, respecto de los cuales el proceso electoral para determinar las personas que habrán de continuar en el cargo o, en su defecto, quienes habrán de sucederlas, se realiza con mucha antelación a la finalización del periodo de quien lo ostenta e, incluso, la definición de los electos debe concretarse con la oportunidad suficiente que permita la continuidad de las operaciones de las instituciones representativas en las fechas constitucional o legalmente establecidas.

En consecuencia, el hecho de que se inicie con el proceso de nombramiento o ratificación del cargo del Secretario Ejecutivo con antelación y no hasta la fecha en la que concluye su nombramiento, dota de certeza, sentido y responsabilidad la decisión de este Consejo General, y garantiza la certeza y eficacia operativa de los procesos electorales en curso así como la continuidad de los trabajos preparatorios que las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto al día de hoy se encuentran realizando para los próximos procesos electorales; máxime, que dicho cargo constituye la columna vertebral de la estructura ejecutiva del Instituto, como se desarrollará más adelante.

En este mismo sentido, la facultad del Consejo General de designar por un nuevo periodo al Secretario Ejecutivo no está condicionada al término exacto de los seis años del cargo, sino que esta facultad, de acuerdo al artículo 44, párrafo 1, inciso c), de la LGIPE, se tiene al momento en que el Consejero Presidente realiza la propuesta correspondiente y no está sujeta a algún término específico del periodo o el agotamiento de la duración del encargo de seis años.

Así, como ya se mencionó, el lapso de seis años es un término máximo que considera el artículo 50 de la LGIPE para la duración del encargo, sin embargo, no se especifica en la ley en qué momento se debe presentar la propuesta de designación por un nuevo periodo, por lo que se puede realizar en cualquier momento que el Presidente del Consejo General lo considere oportuno.

Es importante destacar que, tratándose de ratificación de nombramientos no se aprecia en la ley electoral un procedimiento *ad hoc* o alguna norma que indique el momento oportuno. Sin embargo, se estima oportuno mencionar



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

que, por ejemplo, para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tampoco precisa una temporalidad para llevarla a cabo y sólo refiere en su artículo 121 que se deberá tomar en consideración:

- I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función;
- II. Los resultados de las visitas de inspección;
- III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente;
- IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y
- V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación.

Es decir, existen en el ordenamiento jurídico mexicano modelos de designaciones que no contemplan o establecen una temporalidad para realizarlas, evidenciando así, que es facultad discrecional de las autoridades responsables para hacerlas decidir cuándo es el momento oportuno de llevarlas a cabo, con el fin de garantizar la eficiente y continua operación del órgano respectivo.

En conclusión, no se encuentra algún tipo de restricción o impedimento legal o reglamentario para que se ratifique o se pueda designar al Secretario Ejecutivo en esta fecha. A continuación, se procede al análisis de los fundamentos y motivos que sustentan la facultad de este órgano máximo de dirección para votar la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva por un nuevo período de seis años.

4. Motivos que sustentan la determinación

Derivado de la reforma electoral 2014, la designación del primer Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo en sesión extraordinaria celebrada el 11 de abril de 2014, en la cual se realizó la verificación de los requisitos establecidos en la LGIPE, así como la valoración de la formación académica, profesional, conocimientos en materia electoral y experiencia en actividades de planeación, organización, así como la ejecución de programas y procesos del C. Edmundo Jacobo Molina.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

En ese sentido, en el caso particular al tratarse de una propuesta de designación por un nuevo período de seis años resulta innecesario el dictamen respecto del cumplimiento de requisitos, toda vez que en 2014 se llevó a cabo la revisión correspondiente y se validó por los integrantes de este Consejo General.

No obstante, se hace notar que el licenciado Edmundo Jacobo Molina sigue cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 38, párrafo 2 de la LGIPE.

En particular, se resalta que los requisitos previstos en dicho numeral, en los incisos a) al f) no han variado, puesto que no ha perdido su nacionalidad, sigue estando inscrito en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar; tiene más de treinta años de edad y continúa poseyendo título profesional; así como los conocimientos y experiencia profesional probada.

El requisito relativo a no haber sido condenado por delito alguno, al tratarse de hechos negativos, así como los consistentes en están en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos y gozar de buena reputación, se presumen, salvo prueba en contrario. Al respecto, resulta aplicable la razón esencial de los criterios de la Sala Superior, de rubro MODO HONESTO DE VIVIR. CARGA Y CALIDAD DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL,⁷ y ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.⁸

Por lo que hace a los requisitos contenidos en los incisos f) a i), constituyen un hecho notorio para este Consejo General, dado que en los últimos seis años se ha desempeñado como Secretario Ejecutivo y no ha desempeñado ningún otro cargo.

Ahora bien, es importante hacer notar algunos elementos de su formación académica y trayectoria profesional, ya que constituyen elementos de convicción sobre los cuales este Consejo General tiene por acreditada la

⁷ Consultable en <https://bit.ly/31udeKG>.

⁸ Consultable en <https://bit.ly/2Srh3vY>.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

formación profesional y la experiencia necesaria para continuar en el cargo como Secretario Ejecutivo

Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Guanajuato. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y de la Universidad Autónoma de Baja California, e investigador invitado y Director de Capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, ocupó diversos cargos, entre los que destacan: jefe del área de investigación "Estado y política económica" del Departamento de Economía; Coordinador del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Jefe del Departamento de Economía; Director de Planeación y Desarrollo Institucional y Rector de dicha Unidad, así como Secretario General de esa casa de estudios.

Del 5 de junio de 2008 y hasta la extinción del otrora Instituto Federal Electoral, el Licenciado Edmundo Jacobo Molina fue su Secretario Ejecutivo.

En el ámbito de la investigación fue responsable del proyecto de investigación "El Proceso Ideológico: El Caso de Baja California" en la escuela de Ciencias Sociales y Políticas, UABC; fue corresponsable del proyecto de investigación: "Cultura Política en el México Contemporáneo". UAM-Azcapotzalco; corresponsable del proyecto de investigación: "Seguimiento de la realidad mexicana actual", asociado a la revista El Cotidiano. UAM-Azcapotzalco. Miembro fundador del grupo de trabajo: "Empresarios y Estado en América Latina", del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); miembro fundador y Coordinador Nacional del "Grupo especializado de trabajo sobre Empresarios", del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECOS). Investigador en el Proyecto "Historia de seguridad social en México, ISSSTE".

Fundador de la Revista El Cotidiano, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Metropolitana-Azcapotzalco.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

Entre sus publicaciones más recientes sobresalen: "La reestructuración del poder económico y sus condicionantes", en el libro "La modernización de México"; "La evaluación universitaria. El caso de la Universidad Autónoma Metropolitana", en el libro "Planeación y Evaluación de la Universidad Pública en México"; "Educación Superior en México: la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana", en el libro "México frente a la modernización de China."

Ahora, la importancia de someter a consideración la designación del Secretario Ejecutivo por un nuevo periodo de seis años, con un poco de antelación a que concluya el periodo actual de su encargo, radica, como ya se dijo, en la necesidad de dar seguimiento y continuidad al Modelo de Planeación Institucional y al Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026, así como a las Políticas y Programas Generales de este Instituto, bajo la directriz de la eficiencia y eficacia administrativa, apego a la legalidad y a los principios que rigen la función electoral; así como a los procesos electorales en curso y a la continuidad de los trabajos preparatorios que las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto se encuentran realizando para los próximos procesos electorales, aunado a la complejidad que representa el próximo año para esta Institución, derivado de los retos que debe enfrentar dentro del proceso electoral 2021 y la diversidad de actividades a desarrollar para dar cumplimiento a sus funciones.

En ese contexto, se destacan los siguientes elementos que sustentan la necesidad de llevar a cabo la designación por un nuevo periodo de seis años en este momento.

A. En materia presupuestal

El Instituto debe afrontar el recorte presupuestal más grande de su historia, y es precisamente la Secretaría Ejecutiva la instancia responsable de proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, a través del ejercicio responsable de las partidas presupuestales aprobadas; por lo que las acciones para realizar los ajustes correspondientes requieren de los esfuerzos coordinados de cada una de las áreas que conforman la estructura ejecutiva de esta Institución, que requieren, entre otras:



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

- Definir e implementar la estrategia presupuestal derivado del recorte realizado por la Cámara de Diputados en 2019.
- Coordinar los trabajos de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a su cargo para eficientar el gasto durante 2020.

Debe precisarse que en la figura del Secretario Ejecutivo recae la coordinación de los aspectos administrativos estratégicos de la Institución.

B. Medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria

Toda vez que tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, como la Ley de Austeridad, establecen medidas de disciplina presupuestaria que debe observar el Instituto, y dado que de conformidad con dicho Presupuesto las medidas de austeridad a implementar deben publicarse a más tardar el último día hábil de febrero de 2020, será necesaria:

- La coordinación del Secretario Ejecutivo para la realización de un análisis respecto a los alcances y aplicación de la señalada ley; aunado a que dichas actividades no culminan sino hasta que se pueda armonizar la normatividad interna en concordancia con las directrices aprobadas en la misma, de conformidad con el Acuerdo del Consejo General del INE/CG567/2019.

C. Modelo de Planeación Institucional

La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo los componentes de Prospectiva estratégica, continuidad de operaciones y presupuesto eficiente del referido Modelo. Lo cual es relevante, pues aunque coordina la Junta General Ejecutiva, tiene a su cargo de manera directa el desarrollo de estos componentes, aunado a la supervisión de los demás.

Al respecto, es indispensable destacar que dentro de los componentes en los que participa el Secretario Ejecutivo se encuentra el de continuidad de operaciones que por su propia naturaleza tiene como insumo principal la experiencia que se ha tenido en los procesos electorales locales y federales, para detectar riesgos y la forma de mitigarlos, así como para orientar en la



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

toma de las determinaciones a fin de hacer efectivo el desarrollo de los procesos sustantivos del Instituto.

D. Constitución de partidos políticos nacionales

En enero y febrero de 2020 se presentarán las solicitudes de registro de las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituir un partido político nacional, lo que conlleva:

- Dar continuidad a la coordinación de los trabajos para la supervisión y revisión de los requisitos que deben cumplir dichas organizaciones, lo que implica el seguimiento de las actividades y la elaboración de un informe, por parte del Secretario Ejecutivo respecto del número total de organizaciones que solicitaron su registro como partido político⁹ y, en su momento, la presentación ante este Consejo General del proyecto de dictamen sobre el otorgamiento del registro.

E. Elecciones locales 2019-2020

En noviembre y diciembre de 2019 iniciaron los procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, respectivamente, en ese sentido, toda vez que dentro de las funciones de este Instituto en ese tipo de elecciones se encuentra la de la coordinación con los organismos públicos locales electorales, así como la capacitación electoral y la ubicación de casillas, se deben dirigir y supervisar, entre otras, las siguientes actividades:

- Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos nacionales acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, como locales y, en su caso, a las y los candidatos independientes acreditados ante el OPL correspondiente, para observaciones.
- Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de observadores electores.
- Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas.
- Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
- Capacitación a las personas insaculadas.

⁹ Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho fin.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

- Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales.
- Aprobación de los mecanismos de recolección.
- Traslado y recolección de los paquetes electorales.
- Remisión de las observaciones a los escenarios de cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOP.

F. Inicio de actividades para el proceso electoral federal concurrente 2020-2021

El proceso electoral 2020-2021, representa la organización de las elecciones más complejas en la historia de esta institución, pues se llevarán a cabo elecciones federales concurrentes con elecciones locales, que implican la renovación de la Cámara de Diputados y de diversos cargos en las 32 entidades de la República dentro de los que se encuentran Gubernaturas, Diputaciones locales y Ayuntamientos, en consecuencia es necesaria la coordinación para el inicio de diversas actividades para su preparación, dentro de las que se resalta, entre otras, las de:

- Planeación y seguimiento de los procesos electorales.
- Marco Geográfico Electoral: Conformación, integración y actualización de la cartografía electoral.
- Padrón Electoral, Lista Nominal de Electores y Credencial para Votar: Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral; credencialización y actualización de la Lista Nominal; atención ciudadana; depuración del Padrón Electoral; acceso a información registral; emisión de Listados Nominales de Electores.
- Voto de los Mexicanos residentes en el Extranjero: Documentación y materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero; integración y emisión de Listados Nominales de Electores Residentes en el Extranjero; estrategia de capacitación para la integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto en el extranjero; recepción, clasificación y resguardo de sobres-voto; actividades posteriores al escrutinio y cómputo de los votos.
- Capacitación Electoral: Estrategia para la integración de mesas directivas de casilla; diseño, producción y distribución de materiales para la capacitación electoral; primera y segunda insaculación; estrategia para la contratación de personal que apoye la integración de las mesas receptoras de votación en elecciones federales y/o concurrentes.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- Documentación y materiales electorales. Diseños y producción de la documentación y los materiales electorales; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; verificación de las medidas de seguridad de la documentación y los materiales electorales; supervisión del diseño, adjudicación y producción de la documentación y materiales electorales de los OPL.
- Observadores Electorales: Desarrollo del procedimiento de recepción de solicitudes, capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores electorales.
- Oficinas Municipales: Coordinación y seguimiento para la instalación y funcionamiento de Oficinas Municipales.
- Ubicación, instalación y funcionamiento de casillas: Coordinación y seguimiento de la ubicación, aprobación, instalación y funcionamiento de casillas; equipamiento y acondicionamiento de casillas; publicación de encartes; integración del sistema de consulta de la ubicación de las casillas el día de la jornada electoral.
- Verificación para el registro de candidaturas: Verificación de requisitos de los aspirantes a ser registrados como candidatos.
- Registro de candidaturas independientes en el ámbito federal: Emisión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse para alguna candidatura independiente; recepción y verificación de las manifestaciones de intención presentadas por las personas interesadas en postularse para alguna candidatura independiente.
- Monitoreo de programas de radio y televisión que difunden Noticias: Monitoreo y verificación de pautas y transmisiones en radio y televisión sobre programas que difunden noticias; registro de testigos del monitoreo; publicación del informe de monitoreo de noticieros durante precampañas y campañas.
- Debates: Organización de los debates presidenciales; monitoreo de debates organizados por terceros.
- Fiscalización: Planeación de la fiscalización; auditoría de los procesos electorales federales; resoluciones de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
- Encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales: Monitoreo de las encuestas electorales difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del proceso electoral federal 2020-2021.
- Registro de representantes de partidos políticos y candidatos independientes: Registro de representantes de los partidos políticos



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

nacionales ante los diversos consejos del Instituto; registro y acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes generales y ante mesas directivas de casilla.

- Sistema de Información sobre el desarrollo de la jornada electoral: Definición de procedimientos y metas del referido sistema; simulacros de operación; seguimiento a la jornada electoral.

En síntesis, la coordinación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas es una tarea compleja y multifacética por la cantidad y diversidad de tareas que se requieren realizar; en consecuencia, la Secretaría Ejecutiva tiene que coordinar y supervisar tanto a las áreas centrales como en el ámbito desconcentrado.

Al respecto es de resaltar que, conforme al diseño constitucional del Instituto, el funcionamiento de la autoridad electoral tiene sustento en tres tipos de determinaciones:

1. Directivas a cargo del Consejo General, a través de las determinaciones colegiadas de sus integrantes;
2. Ejecutivas y técnicas, las que toman las áreas ejecutivas y técnicas relacionadas con la operación de proyectos, aspectos administrativos y programáticos, así como en el ejercicio de recursos públicos asignados, y
3. De organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que garantizan el profesionalismo, la transparencia y la certeza en la aplicación de procedimientos, normas y leyes.

Al efecto, como se establece, si bien el Consejo General dirige el ejercicio de las funciones del Instituto para el cumplimiento de su fin de organizar elecciones y toma las determinaciones primordialmente en materia electoral, no pasa inadvertido que el Secretario Ejecutivo funge como una figura central en la toma de decisiones ejecutivas y técnicas, así como en la organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa que conforma esta Institución¹⁰, dado que dentro de sus principales funciones se encuentran las de orientar y coordinar las acciones de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y de las juntas ejecutivas

¹⁰ 2,516 nombramientos del SPEN y de la rama administrativa (ingresos, cambios de adscripción, incorporaciones temporales, titularidades).



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

locales y distritales, así como aprobar su estructura. Además provee a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, lo que implica el ejercicio de las partidas presupuestales.

El mejor mecanismo de evaluación que se debe tener respecto de un funcionario es el resultado de los trabajos que ha coordinado, que en el caso de este Instituto se refleja en la organización de las elecciones desde el punto de vista administrativo.

Aunado a la capacidad de coordinar esfuerzos entre todos los actores en el proceso, desde la participación de los propios consejeros electorales, consejeros del poder legislativo, representantes de partidos políticos y diversas autoridades, cabe precisar que el Licenciado Edmundo Jacobo Molina ha evidenciado también una capacidad de interlocución importante con instituciones públicas y privadas, así como con las propias representaciones de los partidos políticos y de los Consejeros del Poder Legislativo.

En este contexto, el propósito de la designación por un nuevo periodo de seis años del Secretario Ejecutivo es garantizar la funcionalidad de la estructura ejecutiva y no interrumpir la continuidad de los trabajos de organización y coordinación que se tienen implementados.

Ello, dado que la Secretaría Ejecutiva es una figura indispensable en la Institución, pues como quedó expuesto, además de tener bajo su responsabilidad la conducción de la administración y la supervisión del adecuado desarrollo de las actividades conferidas a la estructura ejecutiva y técnica, funge como Secretario tanto del Consejo General¹¹, como de la Junta General Ejecutiva.

Al respecto, con el objeto de resaltar la importancia de los trabajos que tiene a su cargo el C. Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE, así como la eficiencia y la eficacia demostrada en el desempeño de sus funciones, se destacan parte de los logros obtenidos, derivados de la coordinación de la estructura antes referida y el acompañamiento en las

¹¹ En ese sentido, de 2014 a la fecha la Secretaría Ejecutiva ha convocado a 334 sesiones al Consejo General, en las que se han aprobado 1,935 acuerdos y 3,128 dictámenes y resoluciones; en cuanto a la Junta General Ejecutiva, se han celebrado 185 sesiones, en las que se emitieron 1,287 acuerdos así como, 135 dictámenes y resoluciones.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

actividades del Consejo General y la Junta General Ejecutiva, como se detalla a continuación:

- I. La implementación de la reforma electoral 2014, derivado de la transformación del otrora Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, de la cual destacan las actividades siguientes:
 - Ordenar y realizar cambios en la estructura del Instituto;
 - Homologación de procesos entre el Instituto y los OPL;
 - Redistribución de competencias derivado de las nuevas atribuciones, y
 - Coordinación de los trabajos de revisión de la normatividad interna para su armonización con las disposiciones de la Constitución y la LGIPE.
- II. Colaboración con la Comisión Temporal de Reglamentos en los trabajos para la emisión del Reglamento de Elecciones, a través de la coordinación de actividades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a su cargo, para el análisis de reglamentos, acuerdos, lineamientos, manuales y demás instrumentos jurídico-electorales emitidos por el Consejo General, con el objetivo de contar con un ordenamiento que brindara certeza a los actores políticos y autoridades, sobre la normativa vigente aplicable a la preparación, desarrollo, conclusión del proceso electoral y resultados.
- III. Coordinación de actividades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas a su cargo, entre las que cabe destacar, entre otras:
 - Los procedimientos de designación y remoción de consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales.¹²

¹² Al 31 de diciembre de 2019 se han resuelto 123 procedimientos de remoción, de los que, 41 se desecharon (por incompetencia o improcedencia), 3 fueron sobreseídos (2 de ellos en virtud de que los actores se desistieron de la acción y 1 por renuncia del Consejero denunciado), 21 se tuvieron por no presentados, en virtud de que los actores no desahogaron la prevención o bien esta fue insuficiente; 2 fueron dados de baja administrativa; 48 fueron declarados infundados y 8 fueron declarados fundados (cuatro de ellos estaban acumulados).



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

- La incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los OPL al Servicio Profesional Electoral Nacional.
- Los trabajos para el desarrollo del sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos, aplicable también a aspirantes, precandidatos y candidatos.
- La elección nacional de integrantes del consejo nacional, consejos estatales y municipales y congreso nacional del Partido de la Revolución Democrática.
- Implementación de la elección del Constituyente de la Ciudad de México.
- Las actividades para la constitución de nuevos partidos políticos nacionales.
- Las actividades para la organización de la primera elección extraordinaria local, a cargo del Instituto, para elegir gobernador en el estado de Colima, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-678/2015 y su acumulado.
- Verificación del cumplimiento de los criterios de designación y el desempeño de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección del OPL de Durango designados en cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015, en el marco del proceso electoral local 2015-2016.
- Ratificación del nombramiento de la encargada del despacho de la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
- Implementación, operación y ejecución de conteo rápido, durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

- Participación en el diseño, implementación y operación del conteo rápido en la elección de Gobernador de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante sus procesos electorales locales 2017-2018.
 - La coordinación, organización e implementación de los trabajos institucionales relacionados con los procesos electorales 2017-2018, tanto a nivel local como federal.
 - La organización y realización del proceso electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir al titular del Ejecutivo Estatal, así como para integrar a los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma.
 - Coordinación interinstitucional con los OPL, así como con órganos jurisdiccionales.¹³
- IV. Realización y coordinación de actividades en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, en los procesos electorales federales, así como, en el proceso electoral extraordinario de Puebla 2019.
- V. Realización y coordinación de actividades en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, en los procesos electorales federales, así como, en el proceso electoral extraordinario de Puebla 2019. Desde 2014 a la fecha, la Secretaría Ejecutiva ha revisado 317 estudios, ha presentado 20 informes ante el Consejo General, emitió 195 acreditaciones para realizar encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, elaboró 280 requerimientos y revisó 481 informes que elaboraron los OPL.

¹³ A raíz de la reforma electoral de 2014, la Secretaría Ejecutiva ha coordinado con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales convenios estratégicos de colaboración; de 2014 a la fecha se han celebrado 72 convenios de coordinación y colaboración con los 32 OPL, e igual número de anexos técnicos y financieros, a fin de establecer las reglas y procedimientos para darle viabilidad a las atribuciones que le corresponden a cada autoridad electoral.



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- VI. Como ya se ha mencionado, la Secretaría Ejecutiva articula la operación de los restantes órganos del INE, tanto los directivos como los ejecutivos, los técnicos y los de vigilancia, pues, por un lado, coordina y supervisa el funcionamiento de las direcciones y unidades, de tal suerte que las áreas presenten en tiempo y forma los lineamientos, acuerdos, informes, cumplimientos y demás insumos para la toma de las decisiones de la alta dirección, y por otro, como integrante del Consejo General coadyuva con la presidencia en supervisar el cumplimiento de las determinaciones del máximo órgano de la institución. Un dato que refleja, de manera indirecta, la eficiencia en la operación del INE es el de la estadística de las impugnaciones interpuestas contra el Consejo General, porque es precisamente en sus decisiones en donde se encuentra reflejada una parte importante de los esfuerzos institucionales.

En efecto, desde 2014 se han aprobado 5245 acuerdos, dictámenes y resoluciones, de las cuales se han impugnado 1652, es decir, el 31.5% del total; de estos solo fueron revocados 505, o sea el 9.6% de los acuerdos y resoluciones emitidas por el órgano central del Instituto. Este resultado refleja, ciertamente, la eficacia y calidad en el desempeño de Edmundo Jacobo Molina en las tareas de coordinación que el ordenamiento confiere a la Secretaría Ejecutiva, especialmente en los años que involucran los procesos electorales al amparo del complejo modelo constitucional de 2014, ya que el porcentaje del total de asuntos impugnados que han sido revocados. En 2015 fueron revocados el 16% del total de los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General, mientras que, en 2019, solo se revocó el 8% de aquellos emitidos. Es decir, aun durante el proceso electoral más complejo en la historia del Instituto, este ha incrementado su eficiencia bajo la coordinación del actual Secretario Ejecutivo.

5. La diversidad de actividades descritas, reflejan la relevancia en las funciones de coordinación de las unidades administrativas que lleva a cabo la Secretaría Ejecutiva; además se debe destacar que en todos los casos se ha logrado con éxito la realización de la función primordial del Instituto de organizar procesos electorales apegados a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
6. Ello, dado que el C. Edmundo Jacobo Molina ha demostrado contar con los conocimientos y la experiencia profesional exigidas, además de haber



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

acreditado el liderazgo y la capacidad para afrontar los retos y responsabilidades que implica el cargo.

En el transcurso de casi seis años al frente de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ha contribuido al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, toda vez que, con la toma de decisiones ágil y oportuna, así como la orientación al personal directivo, técnico y operativo ha garantizado la fluidez en las tareas que le corresponden y con ello asegurado la operación adecuada del Instituto.

Así, el ejercicio de las funciones del C. Edmundo Jacobo Molina al frente de la Secretaría Ejecutiva ha sido imprescindible para la gobernabilidad del Instituto y para la eficacia de los mecanismos de comunicación institucional que deben, entre otras cosas, atender a cabalidad las solicitudes de los Partidos Políticos y los ámbitos de competencia de las diferentes áreas y órganos que conforman al Instituto.

7. Con base en lo anterior, en ejercicio de la autonomía constitucional otorgada al Instituto y derivado del deber, así como la facultad del Instituto para adoptar las medidas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de organizar las elecciones, con el propósito de asegurar la continuidad y la cohesión de los trabajos con los integrantes de la Junta General Ejecutiva que garanticen la adecuada operación de esta autoridad electoral, se estima procedente ratificar a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva por un nuevo periodo de seis años.
8. La decisión de ratificar con prudente anticipación al titular de la Secretaría Ejecutiva es, no sobra decirlo, plenamente congruente con otras decisiones tomadas por este Consejo General, en particular, con el Acuerdo INE/CG407/2019, mediante el cual, en lo que interesa, se prorrogó la presidencia de las comisiones del propio consejo, así como sus integrantes.

Ciertamente, las determinaciones de ratificar al Secretario Ejecutivo y de mantener la integración de las comisiones permanentes y temporales del máximo órgano de dirección hasta que se produzca la renovación del mismo en abril próximo son situaciones distintas y, en consecuencia, de primera mano no pueden aplicar los mismos razonamientos en uno y otro caso.

En efecto, en dicho Acuerdo el Consejo General reiteró el criterio consistente en que las comisiones, como auxiliares del propio consejo, deben ser



**Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL**

instancias que faciliten el análisis y discusión de las decisiones que deben llegar ante aquél; de tal suerte que los consejeros electorales tienen la facultad de organizar su trabajo interno, acorde a las situaciones y problemáticas que enfrentan en su labor cotidiana. En otras palabras, la labor de las comisiones permanentes o temporales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se rigen dentro de un esquema de organización interna y de la dinámica de planeación de este organismo electoral nacional.

Por su parte, la función del Secretario Ejecutivo es de organizar, coordinar y ejecutar, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las atribuciones que constitucional y legalmente tiene el Instituto Nacional Electoral, y por lo tanto obedece a una dinámica distinta a la de las comisiones que atiende a la distribución de trabajo entre las y los consejeros.

Con todo, como se anticipó, en el fondo ambas determinaciones descansan en la misma lógica institucional, que es la de priorizar el funcionamiento efectivo de los órganos para la oportunidad y eficiente toma de decisiones. En efecto, en dicho acuerdo se expresó: "Particularmente, la prórroga que se propone es una extensión excepcional que atiende a la finalidad de garantizar la continuidad en el trabajo de los órganos colegiados y hacer coherente el sistema teniendo como referente la renovación de los integrantes del Consejo General".

En otras palabras, la labor de las Comisiones permanentes o temporales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se rigen dentro de un esquema de organización interna y de la dinámica de planeación de este organismo electoral nacional.

Por su parte, la función del Secretario Ejecutivo es de organizar, coordinar y ejecutar, en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las atribuciones que constitucional y legalmente tiene el Instituto Nacional Electoral. De ahí que no pueda ser considerado como aplicable lo sostenido en el Acuerdo INE/CG407/2019, por tratarse de materias distintas.

En razón de los fundamentos y consideraciones expuestas, este Consejo General, emite el siguiente:



Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la designación del C. Edmundo Jacobo Molina como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por un nuevo periodo de seis años.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Electoral y en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de febrero de 2020, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

EN FUNCIONES DE SECRETARIO
DEL CONSEJO GENERAL

ING. RENÉ MIRANDA
JAIMES

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 2 y 44, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 15, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA SEDE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Demanda de
Controversia Constitucional

NOMBRE DEL PROMOVENTE:

Instituto Nacional
Electoral

NÚMERO DE COPIAS:

7 (siete trasladados)

NÚMERO DE ANEXOS:

15 (quince anexos y
04 cd's)

FOLIO: 5753

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 3470777

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	VITO860328HDFLBS05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000001bcd	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:23Z / 16/12/2020T15:39:23-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1b d6 ab 04 e2 94 27 6e 01 1b ac bc c8 0a 11 21 49 26 b3 6c af 4d 98 29 bc e3 51 89 51 88 d2 b6 a3 50 16 21 e7 4f 29 a1 54 01 2a 20 74 e6 ab 47 6d cc 5b 19 ff e9 aa aa 15 37 af b7 93 1f e8 17 05 e3 9f 61 2e e3 6b 67 4d 73 d4 b7 3f ec 16 c4 55 4f 2a c9 9e d4 5c 94 2f 3d 7a 09 27 ad b4 ab 31 c7 1e a4 6a 3f cf 9b 47 bc 38 b2 92 17 7c de 9a aa fa 81 60 d5 d5 31 84 fc 49 ba f4 ed 76 56 46 7c ca 44 ec 20 c6 ec 11 8e db e8 7f 58 c6 75 ef 78 ab fe ed d0 28 4a a6 1f 9d 52 32 91 7f 8a bc 21 ed a5 4c b5 73 77 40 29 6b 89 77 0c 82 8c e7 44 1e 46 f4 58 67 02 cc 43 69 4d fb 5a a2 ce bb ea d2 92 dc 30 cf 00 75 53 cd 00 49 6a 4d 7d f4 74 e9 6e f3 cc a2 09 e3 be 9c 38 12 c1 d5 f9 14 0e 33 0e f0 e3 00 f7 33 6a a7 98 c7 31 df 3a a9 70 a3 a5 bb cd a4 d9 f2 e6 1a 52 b0 0e 82 a1			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:25Z / 16/12/2020T15:39:25-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e000000000000000000000001bcd			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:23Z / 16/12/2020T15:39:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3528517			
	Datos estampillados:	9F73724A684174C9CE503E022BB5771F8B3C5069			



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/PC/116/2020" de veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020), firmado por el "Dr. Lorenzo Córdova Vianello" Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y dirigido al "Lic. Andrés Manuel López Obrador", Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).-----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUSE PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/116/2020
CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020

2020 AGO 27 12:45

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE

RECIBIDO

Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso z) y 45, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en referencia a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 31, numeral 2 de la LGIPE, envío a usted el Proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal del año 2021, mismo que fue aprobado por el Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Es importante resaltar que este proyecto de presupuesto contempla los gastos estrictamente indispensables para cumplir con el mandato constitucional conferido a este organismo autónomo, considerando las condiciones extraordinariamente complejas por la pandemia causada por COVID-19, se trata de un presupuesto mesurado, atendiendo las condiciones económicas del país y preservación de la democracia.

El Proyecto de Presupuesto se integra por los recursos necesarios para la operación del Instituto en el año 2021, mismo que asciende a \$20,463,797,958 (Veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, con el propósito de que el citado Proyecto pueda incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que será enviado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su examen, discusión y aprobación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE



DR. LORENZO CORDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE

Original en: ASISTENTE
Caj. 1. Desactivada

2020 AGO 27 AM 11:41

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
OFICINA DE PARTES CORAM

C.C.P. DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ - SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - PRESENTE.
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA - SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL - PRESENTE.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/PC/117/2020" de veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020), con sello de recibido de veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020), firmado por el "Dr. Lorenzo Córdova Vianello" Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y dirigido al "Dr. Arturo Herrera Gutiérrez", Secretario de Hacienda y Crédito Público. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) días de diciembre de dos mil veinte (2020).-----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUSE

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO NO. INE/PC/117/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE AGOSTO DE 2020

2020 AGO 27 12:46

Anexo. CD.

RECIBIDO

DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, inciso z) y 45, numeral 1, inciso I), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIEP), en referencia a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 31, numeral 2 de la LGIEP, y en atención a su oficio, de fecha 24 de agosto del año en curso, envío a usted el Proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal del año 2021, mismo que fue aprobado por el Consejo General de este Instituto, en sesión extraordinaria celebrada el día de la fecha.

Es importante resaltar que este proyecto de presupuesto contempla los gastos estrictamente indispensables para cumplir con el mandato constitucional conferido a este organismo autónomo, considerando las condiciones extraordinariamente complejas por la pandemia causada por COVID-19, se trata de un presupuesto mesurado, atendiendo las condiciones económicas del país y preservación de la democracia.

El Proyecto de Presupuesto se integra por los recursos necesarios para la operación del Instituto en el año 2021, mismo que asciende a \$20,463,797,958 (Veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, con el propósito de que el citado Proyecto pueda incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que será enviado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su examen, discusión y aprobación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

DR. LORENZO CORDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE

C.c.p. LIC. EDUARDO JACOBO MOLIN. SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. PRESENTE.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
OFICINA DE PARTES CORRI
2020 AGO 27 PM 11:41
Original en D. S/A
con identificación



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento constante de dos (2) fojas, es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/DJ/6151/2020" de uno (1) de septiembre de dos mil veinte (2020), con sello de recibido de dos (2) de septiembre de dos mil veinte (2020), firmado por el "Mtro. Gabriel Mendoza Elvira" Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral y dirigido al "H. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá", Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de la referida Dirección Jurídica; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).-----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**DIRECCIÓN JURÍDICA
Oficio No. INE/DJ/6151/2020**

2020 SEP -2 PM 12: 08 Ciudad de México, a 1 de septiembre 2020

RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Asunto: Controversia Constitucional 10/2020

Asunto: Se informa el cumplimiento otorgado a la resolución de 3 de junio de 2020, en el recurso de reclamación 25/2020-CA.

**H. MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ,
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
P R E S E N T E**

GABRIEL MENDOZA ELVIRA, en mi calidad de Director Jurídico del Instituto Nacional Electoral, así como delegado por la parte promovente en términos del artículos 11, párrafo segundo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante usted, respetuosa y atentamente manifiesto que con relación a la resolución dictada el 3 de junio de 2020, en el recurso de reclamación 25/2020-CA, derivado de la Controversia Constitucional 10/2020, en la que esa H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió lo siguiente:

***"PRIMERO.** Es parcialmente fundado el presente recurso de reclamación.*

***SEGUNDO.** Se modifica el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 10/2020.*

***TERCERO.** Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Nacional Electoral en términos del último apartado de este fallo".*

Con base en lo citado, le comunico que la suspensión concedida fue acatada en sus términos mediante acuerdo INE/JGE110/2020 de 24 de agosto de 2020, denominado: "ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020".

Al respecto, conforme al acuerdo Quinto del Acuerdo INE/JGE110/2020, y a efecto de que se tenga por acatada en sus términos la Interlocutoria citada se informa que la Junta General Ejecutiva del INE acordó lo siguiente:

***"PRIMERO.** Se modifica el Acuerdo INE/JGE245/2019, única y exclusivamente en su Acuerdo Segundo, inciso a) y último párrafo, en cuanto a la actualización de los Tabuladores de Sueldos*

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2020

RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA

Antecedente: Controversia Constitucional 10/2020

para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; así como las Remuneraciones para las contrataciones de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios permanentes, del nivel Tabular RA1 al VC2, conforme a los efectos señalados en la resolución a la que se da cumplimiento.

SEGUNDO. *Se aprueba la actualización de los referidos tabuladores y remuneraciones, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil dieciocho, en términos de lo dispuesto en el anexo único que forma parte integrante del presente Acuerdo, con efectos a partir 12 de agosto de año en curso."*

En ese sentido, se modificó el acuerdo INE/JGE245/2019, a efecto de mantener vigente en este Instituto la previsión salarial previamente establecida, que en su momento no puso en peligro la seguridad, economía nacional o las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, es decir, la establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018, cuidando no afectar obligaciones ni derechos adquiridos, así como no alterar el desempeño de sus funciones como órgano constitucional autónomo.

Por lo expuesto, amablemente solicito:

ÚNICO. Tener por exhibido el acuerdo INE/JGE110/2020 de 24 de agosto de 2020, y por cumplida en sus términos la resolución de 3 de junio de 2020, dictada en el recurso de reclamación 25/2020-CA, para los efectos legales a que haya lugar.

PROTESTO LO NECESARIO

MTRO. GABRIEL MENDOZA ELVIRA,
DIRECTOR JURÍDICO

C.c.p. Ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su superior conocimiento.
Mtro. Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Para su conocimiento.

Autorizó	Francisco Juan Cortés Guzmán	
Revisó	Luis Fernando Alcántara Salazar	
Elaboró	Jesús Ángel Salazar Sánchez	



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento constante de tres (3) fojas, es copia fiel y exacta del "Oficio No. 315-A.-3702" de tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020), firmado por "Omar A. N. Tovar Ornelas" Director General de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual va dirigido al "Lic. Edmundo Jacobo Molina", Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).-----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA

ACUSE

Oficio No. 315-A.-3702

Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2020.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral
Presente

Hago referencia al Oficio No. INE/PC/241/2020 por medio del cual ese Instituto Nacional Electoral (INE), refiere al Acuerdo INE/CG554/2020 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el que se aprobó la propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de Presupuesto de ese Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, por un monto de \$1,449,392,669.67, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Por lo anterior, el INE hace de conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal que está solicitando a la Cámara de Diputados recursos adicionales, toda vez que en el Anteproyecto de Presupuesto no contempló recursos para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la citada consulta popular por tratarse de un hecho superveniente.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8A, de su Reglamento, y 55 Apartado A, fracción I, y Apartado B, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito informar a usted lo siguiente:

- Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de conformidad con el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra dice: "Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal; una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos".



Oficio No. 315-A-3702

- De igual forma, el segundo párrafo de la fracción IV del citado artículo 74 Constitucional, establece que el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, y dicha Cámara deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Plazos que se ven reflejados a su vez en el artículo 42, fracciones III y V, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
- El artículo 5 de la LFPRH establece que la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la CPEUM o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende a los entes autónomos, otorgándoles, entre otras, las siguientes atribuciones:
 - "a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;*
 - b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;*
 - c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;*
- Aunado a lo anterior, el artículo 30 de la LFPRH establece que los entes autónomos enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sus proyectos de presupuesto, a efecto integrarlos al Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF), a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo.
- Asimismo, el artículo 41, fracción I, inciso "b", de la LFPRH, señala que el PPEF contendrá, entre otros, la exposición de motivos en la que se señalen las políticas de gasto en los entes autónomos.
- El artículo 60 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), dispone que la SHCP integrará al PPEF los proyectos de presupuesto que le remitan los Poderes Legislativos y Judicial y los entes autónomos en términos del artículo 30 de la LFPRH. Asimismo, integrará las políticas de gasto



Oficio No. 315-A-**3702**

que le remitan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos para su inclusión en la exposición de motivos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, inciso b) de la Ley.

Conforme a lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, fue aprobado por la Cámara de Diputados el día 13 de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**


OMAR A. N. TOVAR ORNELAS

C.c.p.- C. Subsecretaría de Egresos.- SHCP.- Presente. (Turno 202005425 y Presidencia SP-162/11-06-20).
C. Director General Adjunto de Programación y Presupuesto de Servicios.- SHCP.- Presente.

SRB/JSC

Vol. 201751-1

3/3





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento que consta de dos (2) fojas, es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/PC/239/2020" de veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), con sello de recibido de veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), firmado por el "Dr. Lorenzo Córdova Vianello" Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y dirigido a la "Dip. Dulce María Sauri Riancho", Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ACUSE

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PG/239/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

2020 OCT 29 12:25

DIP. DULCE MARÍA SAURIRI RANCHO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

OCT 29 PM 2:12



Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, incisos z) y iii) y 45, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en referencia a lo dispuesto por los artículos 35 fracción VIII, 41, párrafo tercero, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 31, numeral 2 de la LGIPE, envío a usted el Acuerdo INE/CG554/2020 del día de la fecha, a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

Lo anterior en virtud de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la notificación realizada del oficio N. D.G.P.L. 64-II-8-4340 al Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre de 2020, del Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la convocatoria de Consulta Popular. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la fecha.

La convocatoria establece que la consulta será celebrada el 1 de agosto de 2021, y que su organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, es de suma importancia hacer notar que este Instituto aprobó mediante acuerdo INE/CG236/2020, el 26 de agosto de 2020, su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, en cuya construcción no contempló recursos para la realización de la consulta popular, por lo que las áreas ejecutivas y técnicas, así como los órganos de este organismo autónomo se encontraban en imposibilidad de conocer la forma y términos de un ejercicio de esa naturaleza, para planear y programar los recursos mínimos indispensables para su realización.

4 copias

11/11/20



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/239/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

Ahora bien, una vez que se tuvo conocimiento de la determinación de la SCJN, este Instituto se dio a la tarea de revisar y analizar a detalle las actividades y tareas inherentes a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular a fin de presupuestar los recursos necesarios e indispensables para su realización, con la exigencia de racionalizar al máximo el uso de los recursos, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y austeridad.

Por lo anterior, toda vez que en el anteproyecto de presupuesto no se contempló los recursos para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular por tratarse de un hecho superveniente, se remite la solicitud de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto, por un monto de \$1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.), para la realización de la consulta popular a celebrarse el 1 de agosto de 2021, a fin de que sea considerada en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE

C.c.p. DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
LIC. EDUARDO JACOBO MOLINA.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.- PRESENTE.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento que consta dos (2) fojas, es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/PC/241/2020" de veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), con sello de recibido de veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020); firmado por el "Dr. Lorenzo Córdova Vianello" Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y dirigido al "Lic. Andrés Manuel López Obrador", Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).-----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/241/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

Acuse 2020

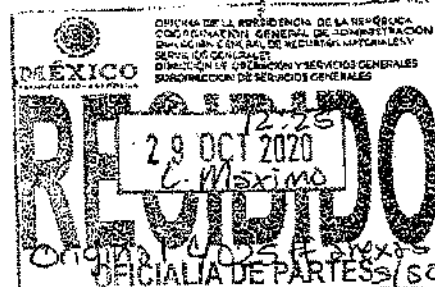
OUT 29 12 26

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, incisos z) y j) y 45, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en referencia a lo dispuesto por los artículos 35 fracción VIII, 41, párrafo tercero, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 31, numeral 2 de la LGIPE, envío a usted el Acuerdo INE/CG554/2020 del día de la fecha, a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

Lo anterior en virtud de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la notificación realizada del oficio N. D.G.P.L. 64-II-8-4340 al Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre de 2020, del Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la convocatoria de Consulta Popular. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la fecha.

La convocatoria establece que la consulta será celebrada el 1 de agosto de 2021, y que su organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, es de suma importancia hacer notar que este Instituto aprobó mediante acuerdo INE/CG236/2020, el 26 de agosto de 2020, su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, en cuya construcción no contempló recursos para la realización de la consulta popular, por lo que las áreas ejecutivas y técnicas, así como los órganos de este organismo autónomo se encontraban en imposibilidad de conocer la forma y términos de un ejercicio de esa naturaleza, para planear y programar los recursos mínimos indispensables para su realización.





INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/241/2020**

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

Ahora bien, una vez que se tuvo conocimiento de la determinación de la SCJN, este Instituto se dio a la tarea de revisar y analizar a detalle las actividades y tareas inherentes a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular a fin de presupuestar los recursos necesarios e indispensables para su realización, con la exigencia de racionalizar al máximo el uso de los recursos, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y austeridad.

Por lo anterior, toda vez que en el anteproyecto de presupuesto no se contempló los recursos para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular por tratarse de un hecho superveniente; se hace de su conocimiento que se están solicitando a la Cámara de Diputados recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto, por un monto de \$1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N), para la realización de la consulta popular a celebrarse el 1 de agosto de 2021, a fin de que sea considerada en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

**DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE**

C.c.p. DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.- PRESENTE.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente documento que consta dos (2) fojas, es copia fiel y exacta del acuse del "Oficio No. INE/PC/238/2020" de veintiocho (28) de octubre de dos mil veinte (2020), con sello de recibido de veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020); firmado por el "Dr. Lorenzo Córdova Vianello" Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y dirigido al "Dip. Erasmo González Robledo", Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Documento que tuve a la vista y cuyo original obra en los archivos de este Instituto; lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020).-

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



ACUSE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/238/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

2020 OCT 29 12:26

DIP. ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

2020 OCT 30 AM 11:15

RECEIVED
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Con fundamento en los artículos 44, numeral 1, incisos z) y j) y 45, numeral 1, inciso I), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en referencia a lo dispuesto por los artículos 35 fracción VIII, 41, párrafo tercero, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 31, numeral 2 de la LGIPE, envío a usted el Acuerdo INE/CG554/2020 del día de la fecha, a través del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto para la realización de la consulta popular el 1 de agosto de 2021, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.

Lo anterior en virtud de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la notificación realizada del oficio N. D.G.P.L. 64-II-8-4340 al Instituto Nacional Electoral el 26 de octubre de 2020, del Decreto del Congreso General mediante el cual se expide la convocatoria de Consulta Popular. Dicho Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la fecha.

RECIBIDO

La recepción del presente documento **NO obliga** a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar los recursos solicitados por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente para la realización de la consulta popular, por lo que las áreas ejecutivas y técnicas, así como los órganos de este organismo autónomo se encontraban en imposibilidad de conocer la forma y términos de un ejercicio de esa naturaleza, para planear y programar los recursos mínimos indispensables para su realización.

Se deberá observar por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública los efectos pú- blicos que establezca el procedimiento que para dichos efectos pú- blicos establezca la Comisión, conforme lo establecen los artículos 18 primer párrafo y 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 196 numeral 5, y 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

001804



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL
OFICIO No. INE/PC/238/2020

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE OCTUBRE DE 2020

Ahora bien, una vez que se tuvo conocimiento de la determinación de la SCJN, este Instituto se dio a la tarea de revisar y analizar a detalle las actividades y tareas inherentes a la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular a fin de presupuestar los recursos necesarios e indispensables para su realización, con la exigencia de racionalizar al máximo el uso de los recursos, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y austeridad.

Por lo anterior, toda vez que en el anteproyecto de presupuesto no se contempló los recursos para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular por tratarse de un hecho superveniente; se remite la solicitud de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto de este Instituto, por un monto de \$1,499,392,669.67 (Un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N), para la realización de la consulta popular a celebrarse el 1 de agosto de 2021, a fin de que sea considerada en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Sin otro particular, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

ATENTAMENTE


DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
CONSEJERO PRESIDENTE

C.c.p. DR. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.- PRESENTE.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, - - - - -

- - - - - **CERTIFICA** - - - - -

Que la presente documentación constante de cinco (5) fojas, es copia fiel y exacta de oficio número D.G.P.L. 64-II-8-4340 y su anexo, con acuse de recibo de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020) de la oficialía de partes común del Instituto Nacional Electoral; signado por el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Dulce María Sauri Riancho, mediante el cual se notifica al Instituto Nacional Electoral el Decreto del Congreso General por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, misma que obra en los archivos de este Instituto. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). - - - - -

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



CONGRESO DE LA UNIÓN

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
OFICINA DE PARTES COMUN

2020 OCT 26 PM 2:35

Original en 1H, Savas 44
Cop. ...

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OFICIO N. D.G.P.L. 64-II-8-4340

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
Presidente del Instituto Nacional Electoral
Presente.

En sesiones celebradas los días 7 y 22 de octubre del año en curso, las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 26, fracción VI de la Ley Federal de Consulta Popular, aprobaron el Decreto por el que se resuelve sobre la procedencia y transcendencia de la Petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República, y se expide la Convocatoria de Consulta Popular.

Para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio, se comunica a usted para los efectos a que haya lugar.



Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020.

Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta



CONGRESO DE LA UNIÓN

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR, DECRETA:

SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR

CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR

Artículo Único.- El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 35, fracción VIII, Apartados 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de Consulta Popular

CONVOCA

A las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión en el proceso de CONSULTA POPULAR sobre "las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos", la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, conforme a las siguientes:

BASES

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.

La organización, desarrollo,* coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.





CONGRESO DE LA UNIÓN

SEGUNDA. DIFUSIÓN.

La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del Capítulo III de la Ley Federal de Consulta Popular.

TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA.

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS?

SÍ ESTOY DE ACUERDO ☐

NO ESTOY DE ACUERDO ☐



CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas de la Consulta Popular, considerando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla.



CONGRESO DE LA UNIÓN

QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR.

Apertura.

La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su opinión.

Cierre.

Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo.

Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto facultado para ello.



SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA.

La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo de la instancia calificadora.



CONGRESO DE LA UNIÓN

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la metodología aprobada serán resueltos por el Instituto Nacional Electoral.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Notifíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto al Instituto Nacional Electoral.

Tercero. Publíquese la Convocatoria contenida en el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2020




Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente


Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta


Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
Secretaria


Dip. María Guadalupe Díaz Avilez
Secretaria



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente medio óptico (CD) contiene dos (2) archivos del documento digitalizado relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS", identificado con la clave alfanumérica "INE/CG634/2020", así como las Bases Generales del Presupuesto 2021 que forman parte integral del acuerdo. Aprobado en la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el siete (7) de diciembre del presente año; documentos que tuve a la vista y cuyos originales obran en los archivos de esta Dirección del Secretariado. Disco compacto que será válido siempre que contenga la firma autógrafa de quien expide la presente. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los once (11) días de diciembre del año dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA

Validó:	Maestro Alberto Gaytán Ramírez
Elaboró:	Licenciado Noé González Velázquez



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que la presente documentación es copia fiel y exacta del original del "ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020", identificado con la clave alfanumérica "INE/JGE110/2020", así como el anexo único que forma parte integral del presente Acuerdo, aprobado en la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral celebrada el día veinticuatro (24) de agosto del presente año. Documentación que tuve a la vista y cuyos originales obran en los archivos de esta Dirección del Secretariado. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, a los once (11) días del mes de diciembre del dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA

Validó:	Maestro Alberto Gaytán Ramírez
Elaboró:	Licenciado Noé González Velázquez



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente medio óptico (CD) contiene cuatro (4) archivos del documento digitalizado relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021", identificado con la clave alfanumérica "INE/CG236/2020", así como las Bases Generales que forman parte integral del acuerdo. Asimismo, un (1) voto concurrente que presentaron conjuntamente los Consejeros Electorales, la maestra Norma Irene De la Cruz Magaña y el doctor José Roberto Ruiz Saldaña; y un (1) voto particular que formularon de manera conjunta los Consejeros Electorales, el doctor Uuc-Kib Espadas Ancona y el doctor José Roberto Ruiz Saldaña. Acuerdo aprobado en la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el veintiséis (26) de agosto del presente año; documentos que tuve a la vista y cuyos originales obran en los archivos de esta Dirección del Secretariado. Disco compacto que será válido siempre que contenga la firma autógrafa de quien expide la presente. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los once (11) días de diciembre del año dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO

LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

La licenciada Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base V, apartado A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, numerales 1, inciso v) y 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 68, numeral 1, incisos j) y k) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y en ejercicio de la atribución conferida en el artículo 21 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, así como el oficio INE/SE/OE/1/2019 de delegación de atribuciones para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, suscrito por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de este órgano electoral, -----

-----**CERTIFICA**-----

Que el presente medio óptico (CD) contiene dos (2) archivos del documento digitalizado relativo al "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE RECURSOS ADICIONALES AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE ESTE INSTITUTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR EL 1 DE AGOSTO DE 2021, CON EL OBJETO DE SOLICITAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEA CONSIDERADA EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA.", identificado con la clave alfanumérica "INE/CG554/2020", así como un (1) voto particular presentado por la Consejera Electoral, maestra Norma Irene De la Cruz Magaña. Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada el veintiocho (28) de octubre del presente año; documentos que tuve a la vista y cuyos originales obran en los archivos de esta Dirección del Secretariado. Disco compacto que será válido siempre que contenga la firma autógrafa de quien expide la presente. Lo que certifico para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los once (11) días de diciembre del año dos mil veinte (2020). -----

DIRECTORA DEL SECRETARIADO


LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect2_2.pdf
Secuencia: 3470778

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOSÉ OSCAR VILLEGAS TABARES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	VITO860328HDFLBS05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e00000000000000000000000001bcd	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:34Z / 16/12/2020T15:39:34-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	11 8b c4 83 ee d7 7f 3f b9 17 89 81 08 aa 04 e9 62 4f 88 4b 52 47 70 ac d3 53 70 93 13 ad 24 6c 14 f1 a4 8b 39 0f a6 59 d7 4b c8 f1 b3 a5 1e 4d 20 e8 b8 99 26 8c 9f 0b 02 ed 48 ad 70 de 71 b5 dc 96 5d 86 8d fd 90 5b 6f 7a 6c e1 50 0f 63 16 09 ea 8d c4 b3 14 54 7b be ee 63 62 62 a9 2f 1a 0a 07 23 50 eb 28 4c 3a cc e9 5d c1 a7 fe d4 89 a9 64 c1 88 bd 44 2f f6 4f 87 7f a4 e7 8c a8 c0 50 b1 bf c5 ea a1 30 d2 8c be 7a cf 6f ac 64 09 66 27 59 bc c8 35 b0 04 31 a6 ae 88 3d b3 e7 ff 0d d5 12 21 74 05 95 04 fa 50 cc 60 f7 28 cc ab ed 76 f7 95 3d cf e8 82 8e 4d c2 1b af 44 e6 de 01 fa fd ae f5 82 12 d2 bf 59 15 fb ed 92 72 62 2b bb 31 09 00 1d 06 f6 af b4 63 f7 2f ea 64 5f 9d 48 e4 09 aa 98 8e ac e7 15 5f 4e 6e 90 4e 03 e4 9c 0f fe 2e 39 f1 b5 fd d9 7d 71 6f ef ed e0			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:35Z / 16/12/2020T15:39:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000001bcd			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	16/12/2020T21:39:34Z / 16/12/2020T15:39:34-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3528518			
	Datos estampillados:	3A3D7A565DD7D6FE6662913A33FF59ACFA576E95			



CLASIFICACIÓN: 406/20/19.

ACTOR: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL: 211/2020

ASUNTO: SE CONTESTA DEMANDA DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

VENCIMIENTO: 16 DE FEBRERO DE 2021.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 DE FEBRERO DE 2021.

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS SECCIÓN DE
TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.**

PINO SUÁREZ NO. 2, COLONIA CENTRO, ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, C.P. 06065, CIUDAD DE MÉXICO.

La suscrita **DIRECTORA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**, personalidad que se acredita con copia certificada del Formato Único de Puesto, anexa al presente, con fundamento en los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (en adelante, “**Constitución**”); 10, fracción II y 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, “**Ley Reglamentaria**”) y 112, fracciones VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación¹, **VENGO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2020** promovida por el **INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**, en representación de la **SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**, en los siguientes términos:

¹ Artículo 112.- La Dirección General de Procedimientos Constitucionales tiene las atribuciones siguientes: (...)

VI. Representar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a la Secretaría ante los Tribunales Federales y del fuero común y ante toda autoridad en los trámites jurisdiccionales y cualquier otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría, con todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer excepciones, nombrar peritos, reconocer firmas y documentos, redargüir de falsos a los que presente la contraparte, repreguntar y tachar de falsos a testigos o ratificantes, articular y absolver posiciones, formular denuncias y querellas, desistirse, otorgar perdón, ofrecer y rendir toda clase de pruebas; recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los derechos de la Secretaría, así como para sustituir poder en términos de ley a los representantes que para el efecto señale. Por virtud de esta disposición, se entenderá ratificado por la persona Titular de la misma todo lo que se haga, en los términos de ley, por esta Dirección General y los representantes que acredite, en cada uno de los casos en que intervengan;

VII. Representar, de conformidad con la normativa aplicable, a la Secretaría o a su Titular en los juicios de amparo; intervenir en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en los demás procedimientos constitucionales en que sea parte la Secretaría, así como opinar las actuaciones que otras unidades administrativas de la Secretaría realicen en los juicios, acciones y procedimientos referidos; (...)





I. OPORTUNIDAD.

De conformidad con el artículo 26 de la Ley Reglamentaria el término para dar contestación a una demanda de controversia constitucional es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se realizó la notificación.

En este sentido, la presente contestación es oportuna puesto que el acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2020, a través del cual se admite a trámite la demanda, fue notificado a esta autoridad el 29 de diciembre, surtiendo efectos ese mismo día, por lo que, el plazo dar contestación comenzó a correr a partir del 4 de enero de 2021, feneciendo el 16 de febrero del mismo año.

Lo anterior, considerando que los días 30 y 31 de diciembre de 2020; 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero, y 1, 5, 6, 7, 13 y 14 de febrero de 2021 fueron inhábiles para sustanciación y resolución del presente medio de control de la constitucionalidad, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 19 de la Ley de Amparo; 74 de la Ley Federal del Trabajo, fracción I; y el Acuerdo número 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles.

II. LEGITIMACIÓN.

En las controversias constitucionales surgen diversos problemas debido a la mención genérica de quienes son los sujetos que pueden actuar en este juicio, es por ello, que se necesita identificar los órganos legitimados activa y pasivamente.

Así, la legitimación es la facultad otorgada por el orden jurídico a determinados sujetos para ser parte de un procedimiento específico; esto es la aptitud jurídica de ser titular de los derechos y obligaciones que corresponden a una parte procesal.²

En el caso de la legitimación activa se entiende como el atributo jurídico, normalmente de configuración legal, otorgado para la realización de determinado tipo de facultades procesales, específicamente las conferidas a quien demanda o funge como parte actora, para reclamar en juicio las pretensiones que estime tener y actuar en el proceso correspondiente.

Por su parte, la legitimación pasiva se entiende como el atributo jurídico, también de configuración legal, que permite al demandado acudir a un órgano jurisdiccional a defender, mediante el ejercicio de sus excepciones, una posición jurídica contraria a las pretensiones que la actora hubiere planteado en su contra a través de la demanda, la cual le permite la realización determinado tipo de facultades dentro de un proceso.³

Con relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, "SCJN"), emitió la tesis siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA. De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción

²Baltazar Robles Germán E., *Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad*, 1ª edición, México, Ángel Editor, 2002 p. 47.

³Cossío Díaz, José Ramón, "Las partes en las controversias constitucionales", *Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, México, Número 16, Enero - Junio 2007, p. 92.





constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: la Federación, una entidad federada, un Municipio y Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los poderes de una misma entidad federada (Poderes Locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica.”⁴

Como se puede advertir de la tesis transcrita, la legitimación activa es para aquellos órganos y órdenes a los que se les confiere expresamente atribuciones en la Constitución, es decir, los órganos primarios u originarios del Estado. En lo referente a **legitimación pasiva**, menciona que los órganos derivados del Estado no pueden tener legitimación activa, pero si pueden ser sujetos de control constitucional pues estos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Constitución.

Ahora bien, el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria establece que, se puede señalar como demandado a la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general que se hubiere reclamado en la controversia constitucional. Se transcribe la porción normativa en comentario:

“Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

(...)

II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;

(...)”.

En esa tesitura, el artículo 92 de la Constitución, prevé:

“Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.”

Asimismo, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece:

“Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas.

Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso de la Unión, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobernación.”

⁴Tesis: P. LXXIII/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, p.790.





En ese sentido, los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, -para su validez y observancia constitucional- ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más Secretarías, deben ser **refrendados** por todos los titulares de las mismas.

En el caso de los decretos promulgatorios de las **leyes o decretos que sean expedidos por el Congreso de la Unión**, sólo se requerirá el refrendo del **TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**.

Ahora bien, en la presente controversia constitucional se reclama la inconstitucionalidad del *Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020*, (en adelante, “**PEF 2021**”), el cual tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos.⁵

Este instrumento jurídico constituye un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, pues lo expide únicamente la **Cámara de Diputados**. El proyecto de presupuesto no tiene su origen en un estricto proceso legislativo, sino que lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión e, incluso, puede modificarlo, para determinar o fijar los montos y destino del gasto público.

Ahora bien, en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, única y exclusivamente requiere para su validez constitucional, del refrendo de la **Secretaría de Gobernación (SEGOB)**, pues la materia de dicho Decreto está constituida únicamente por la orden del Presidente de la República para que se publique o se dé a conocer, y no por la materia aprobada por el órgano legislativo.

Resulta aplicable al anterior argumento, la siguiente tesis:

“REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES. EL ARTICULO 13 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL NO VIOLA EL ARTICULO 92 CONSTITUCIONAL. El artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no es contrario al 92 de nuestra Carta Magna cuando señala que **los decretos promulgatorios de las leyes expedidas por el Congreso de la Unión sólo requieren el refrendo del Secretario de Gobernación para su validez, pues la materia de dichos decretos está constituida únicamente por la orden del presidente de la República para que se publique o se dé a conocer la ley o el decreto del órgano legislativo Federal para su debida observancia, mas no por la materia misma de la ley o decreto oportunamente aprobado por el Congreso de la Unión; luego es de concluirse que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional, mediante el cumplimiento del imperativo formal establecido en nuestra Ley Suprema, de la firma del Secretario de Gobernación cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado. Así pues, el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no es incongruente con el 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**”

[Énfasis añadido]

⁵ **PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. SU OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA.** Tesis I.8o.A.3 CS (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017 Tomo IV, página 2517.





Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar las jurisprudencias P./J. 109/2001 y P./J. 104/2004, Novena Época, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001 y Tomo XX, octubre de 2004, páginas 1104 y 1817, de rubros, respectivamente: **“SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO”** y **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN AQUELLA, TANTO RESPECTO DEL REFRENDO, COMO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS DECRETOS DEL GOBERNADOR”**, precisó que el refrendo de los decretos y reglamentos del Titular del Ejecutivo, a cargo de los Secretarios de Estado, por un lado, reviste autonomía al constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal y, por otro, que a causa de la autonomía, está obligado a satisfacer las exigencias que se le demandan respecto del refrendo de los actos; por lo que **los Secretarios de Estado cuentan con legitimación pasiva en la substanciación de controversias constitucionales, a pesar de no ser órganos originarios.**

Llegados a este punto, se puede concluir que la Secretaría de Gobernación cuenta con legitimación pasiva en la presente controversia constitucional al ser la autoridad que **publicó y refrendó** el Decreto por el cual se expidió el PEF 2021.

III. REPRESENTACIÓN.

La representación o la legitimación en el proceso consiste en la facultad de una persona de promover o realizar actos procesales tanto en función de un interés propio, o bien, en virtud de un interés ajeno, dado que quien comparece efectivamente al juicio no es el titular directo de los derechos y obligaciones controvertidas en el mismo, por lo que, tratándose de personas jurídicas, como lo es el Estado en sus diferentes manifestaciones, es indispensable que se comparezca a juicio por conducto de personas que los representen.⁶

El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y que, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario⁷. Este último principio refiere la existencia de un ordenamiento que rijan el órgano u orden de gobierno que consigne que el funcionario carece de representación.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo en comento prevé que los representantes en las controversias constitucionales pueden designar delegados para que hagan promociones, asistan a las audiencias, rinda pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes o recursos previstos en la ley.

En ese sentido, con fundamento con los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 112, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la suscrita Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría cuenta con atribuciones suficientes para representar a la Secretaría de Gobernación en la presente controversia constitucional y, por tanto, para dar contestación a la misma.

⁶Cfr. Baltazar Robles Germán E., *Op. cit.* p. 58.

⁷ **CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REPRESENTACIÓN DEBE PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN QUE LA RIGE Y EN CASOS EXCEPCIONALES PRESUMIRSE.** Tesis 1a. XVI/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, agosto de 1997, p. 466 .





Se transcriben las porciones normativas en comento:

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

*“Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, **Directores**, Subdirectores, Jefes de Departamento, y los demás funcionarios, en los términos que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público contarán cada una con una Oficialía Mayor, las cuales tendrán las funciones que establezca el artículo 20 de esta ley y las que determinen los reglamentos interiores.*

En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.”

“Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.”

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

“Artículo 112. La Dirección General de Procedimientos Constitucionales tiene las atribuciones siguientes:

(...)

VII. Representar, de conformidad con la normativa aplicable, a la Secretaría o a su Titular en los juicios de amparo; intervenir en las controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en los demás procedimientos constitucionales en que sea parte la Secretaría, así como opinar las actuaciones que otras unidades administrativas de la Secretaría realicen en los juicios, acciones y procedimientos referidos.”

[Énfasis propio]

Asimismo, se adjunta al presente copia certificada del **FORMATO ÚNICO DE PERSONAL** con número de folio 1972020, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, el cual acredita que la suscrita Verónica Rojas Cortés ostenta el cargo de Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

Con relación a dicha documental, se solicita se le dé el tratamiento que prevé la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que se impongan y accedan a ésta, quienes necesariamente para el ejercicio de sus funciones se encuentren habilitados, lo anterior, en atención a que contiene datos personales y, por tanto, constituye información confidencial.





IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

Del escrito de demanda de controversia constitucional, se advierte que las normas generales o actos cuya invalidez se reclaman son los siguientes:

“El PEF-2021 publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, como acto concreto que particulariza un sistema normativo, por lo que de manera destacada se impugna dicho presupuesto respecto de lo que establece el artículo 14, fracción II, y los Anexos “23.1.2 REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)” y 23.1.3 REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)”. El mencionado presupuesto en la parte que se precisa se impugna de las autoridades señaladas en el capítulo II de la presente demanda, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

En ese sentido, los Anexos 23.1.2 y 23.1.3. del PEF-2021 señalan la remuneración ordinaria total líquida mensual neta total anual de percepciones ordinarias en numerario, sin considerar las demás prestaciones que integran la referida retribución en particular, aquellas establecidas en especie. Asimismo, en el desglose de dicha retribución se prevén únicamente prestaciones ordinarias, sin señalar aquellas otras que, como lo señala la fracción I del propio artículo 14 del PEF-2021, también integran las remuneraciones de todo servidor público de la Federación, incluidas, en su caso, las de carácter extraordinario a que hace referencia la fracción I del mismo artículo.

Lo anterior resulta contrario al artículo 127 de la Constitución Federal, dado que invade las atribuciones constitucionales y legales del Banco de México y, adicionalmente, dado que el PEF-2021 no establece de manera cierta en el parámetro máximo que refiere la remuneración total específica con todas las prestaciones que la integran, lo cual corresponde al límite para fijar el monto de remuneraciones para sus servidores públicos, impone una imposibilidad para determinar el límite aplicable a las remuneraciones de los servidores públicos del Banco de México.”

Sin embargo, la parte actora no reclamó ningún acto propio ni específico de la SEGOB, por lo que, se mencionó, se infiere que los actos que reclama son el refrendo y la publicación del decreto impugnado.

V. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS EXPUESTOS POR LA PARTE ACTORA, COMO ANTECEDENTES DE LA NORMA O ACTO CUYA INVALIDEZ DEMANDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción I de la Ley Reglamentaria, respecto de los hechos narrados por la parte actora en el escrito de demanda en el rubro **“VI. LA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL ACTOR Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE”**, se precisa:

Por lo que hace a los hechos marcados con los numerales 1 y 3, no se afirman ni se niegan por no ser propios, sin embargo, con relación al hecho identificado con el numeral 2, se manifiesta que, el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la SEGOB fue la autoridad que realizó la **publicación**, y la Secretaría de Gobernación el **refrendo** del decreto impugnado.

VI. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOSTIENEN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA O ACTO CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA.





Como se mencionó, **la parte actora no reclamó ningún acto propio ni específico de la SEGOB, por lo que, por lo que hace a esta autoridad, únicamente se sostendrá la constitucionalidad del refrendo y la publicación del decreto impugnado.**

a) Publicación.

La publicación del decreto impugnado se realizó con fundamento en los artículos 27, fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal⁸, 2 y 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, así como 12, fracciones XXVII y XXVIII y 14 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación⁹.

Así, esta autoridad tiene la función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.¹⁰

Lo anterior es visible en los artículos 2 y 3 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, los cuales se transcriben a continuación:

*“ARTICULO 2o. El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, **cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente**”.*

⁸ Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

XVI. Administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión, de alguna de las dos Cámaras o de la Comisión Permanente y los reglamentos que expida el Presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 constitucional y el artículo 72 constitucional, así como las resoluciones y disposiciones que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial;

(...).

⁹ Artículo 14.- La Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación tiene las atribuciones siguientes:

I. Colaborar con la persona Titular de la Unidad de Gobierno en la administración y organización del Diario Oficial de la Federación, con respecto a la publicación en éste de los actos legislativos, administrativos y judiciales que, conforme a la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales y demás disposiciones legales, deban publicarse en dicho medio de difusión oficial;

II. Proponer a la persona Titular de la Unidad de Gobierno las estrategias de modernización y mejora continua, para asegurar la edición y difusión del Diario Oficial de la Federación de conformidad con la normativa aplicable;

III. Garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada;

IV. Custodiar, conservar y preservar la edición electrónica e impresa del Diario Oficial de la Federación;

V. Constituir, organizar y preservar la hemeroteca del Diario Oficial de la Federación;

VI. Enviar una copia certificada del ejemplar impreso de la publicación electrónica del Diario Oficial de la Federación a cada una de las instituciones que indica la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales;

VII. Velar por la accesibilidad de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, en los términos que determine la persona Titular de la Unidad de Gobierno, y

VIII. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos de edición y difusión del Diario Oficial de la Federación.

¹⁰ “DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA”. [TA]; Décima Época; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tesis I.3o.C.26 K (10a.); Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3; pág. 1996.



“Artículo 3o. Serán materia de *publicación* en el Diario Oficial de la Federación:

I.- Las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión, así como cualquier otro acto o resolución relativos a la actividad parlamentaria que sean de interés general;

II.- Los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general;

III.- Los acuerdos, circulares y órdenes de las Dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general;

IV.- Los Tratados celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos;

V.- Los acuerdos y resoluciones de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

VI.- Las disposiciones jurídicas que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial;

VII.- Los acuerdos y resoluciones de carácter general que emitan los Órganos Constitucionales Autónomos que sean de interés general;

VIII.- Aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República, y

IX.- Las fe de erratas que la autoridad estime necesarias”.

[Énfasis propio]

Así como puede advertirse de la normatividad transcrita, esta autoridad únicamente ejerció las atribuciones que le confieren tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de esta dependencia y la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, para *publicar* a través de sus unidades administrativas el decreto materia de impugnación.

Además de lo anterior, se manifiesta que la *publicación* que realizó la presente autoridad cumplió con todos los requisitos que establece el artículo 6 de la Ley del Diario Oficial en comentario¹¹.

b) Refrendo.

La Secretaría de Gobernación únicamente participó en el *refrendo* del Decreto a través del cual se expidió el PEF 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020.

¹¹ ARTICULO 6o.- El Diario Oficial de la Federación deberá contener por lo menos los siguientes datos:

I. El nombre Diario Oficial de la Federación, y la leyenda “Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”;

II.- Fecha y número de publicación;

III.- Índice de Contenido, y

IV.- Firma de la autoridad responsable, ya sea electrónica en el caso de la versión digital y rúbrica en el ejemplar impreso de cada edición”.





Sin embargo, el referido acto se realizó con fundamento en los artículos 92 de la Constitución, 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 5o., fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

En consecuencia, **el acto reclamado resulta constitucional al haberse observado los requisitos de validez establecidos en nuestro derecho**, aunado a que, de la lectura integral del escrito de demanda, no se advierte que la parte actora haya formulado conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos atribuidos a esta autoridad.

VII. PRUEBAS

En términos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Reglamentaria, se ofrecen como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTAL. Consistente en copia certificada del formato único de personal de la Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, a efecto de acreditar la personería que ostenta para representar a la Secretaría de Gobernación, en términos de los artículos 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 112, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

2. DOCUMENTAL. Consistente en copia certificada del ejemplar del Diario oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2020, el cual contiene la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2021.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente se solicita a esa **SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**:

PRIMERO. Tenerme por acreditada con la personalidad que ostento, dando contestación en tiempo y forma a la demanda de la presente controversia constitucional en representación de la **SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN**.

SEGUNDO. Declarar constitucional el **refrendo** y la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2021.

TERCERO. Tener por ofrecidas y admitidas las pruebas que se acompañan a la presente contestación de demanda y, en su caso, se le otorgue el tratamiento que prevé la normativa aplicable en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a la documental que se anexa, al contener información de carácter confidencial.

CUARTO. Tener por designados como delegados, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los licenciados en derecho: **CONCEPCIÓN MARÍA DEL ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ** y a los Licenciados en Derecho: **VERÓNICA ROJAS CORTÉS, SELENE GUADALUPE GONZÁLEZ CADENA, KARLA ESTHER HERNÁNDEZ MATA, ALEJANDRA LORENA BUSTOS PAVÓN, JAIME MAURICIO NIETO MONTOYA, JOVANY YUNUEL ROBLES ZAMORA, MARIBEL GAYTÁN GONZÁLEZ, JORGE DAVID MALDONADO ANGELES, EDUARDO GABRIEL BARRERA ROBLERO, ADRIANA IVVET REYES HIDALGO, IVONNE PÁNICO BRESSANT, STEPHANY YOLANDA CASTILLO HERRERA y GUILLERMO ZUAR PÉREZ FLORES**, así como al C. **CÉSAR ANTONIO MONDRAGÓN RIVERA**.





QUINTO. Tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en General Prim número 21, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 en la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

**LA DIRECTORA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CONSTITUCIONALES, EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA
DE GOBERNACIÓN, CON FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 112,
FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN.**

VERÓNICA ROJAS CORTÉS



Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion8100_1.docx
Secuencia: 3533192

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AUTORIDAD CERTIFICADORA

Firmante	Nombre:	VERONICA ROJAS CORTES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROCV920906MMNJRR05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	3030303031303030303030353033383732353937	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:14Z / 11/02/2021T20:06:14-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	29 8a 7a 7b f1 97 3b 8b 3e 90 8f ec b5 4c cd e2 00 b4 01 e3 b5 fc 06 73 be c7 b8 99 59 41 e2 f9 6c 84 db 5f 40 87 77 ab 57 4f 92 a9 2e 60 cb b0 8c c1 34 91 e7 0a 8d fd 0c fe 3d 50 00 43 3a 6b 3a 57 1a 5e 3b 2c 13 22 34 8f 0e 7a 2c 9c 58 4c fd 3f e0 4f 0d df f1 8a 45 21 9b 04 1d 13 4e eb b3 cc 08 db 5d 3f b5 2c 05 d0 a6 5c 42 2a bd 95 dc 2e a1 24 63 e9 b6 81 f3 e1 cc 4c 94 ef 9f 8f 48 0b d7 3b 93 28 21 d9 af 3e d4 b4 10 fe 4b 35 6e 65 c6 98 7e df c3 37 d4 a9 5f d6 2a e5 ef 48 bf 6b 96 03 a2 f9 24 e1 db 14 15 93 99 b3 7f f2 e5 4f 5b 07 70 e9 8e 0f 98 2a e4 56 ec e1 b4 c5 f4 3a be c3 df 90 b6 e1 54 92 f7 e2 cf 1a d3 18 db ab d8 82 00 fa ff 3e ea 0f ca 17 dc f0 40 79 8f c8 4d 05 2f 96 f5 5d 4e f9 8d d5 27 df 04 db fc 0a b4 b9 a0 24 28 0a 65 4b 56 36 8d a9 e1 5c			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:31Z / 11/02/2021T20:06:31-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	Servicio OSCP SAT			
	Emisor del certificado de OSCP:	AUTORIDAD CERTIFICADORA			
	Número de serie del certificado OSCP:	3030303031303030303030353033383732353937			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:14Z / 11/02/2021T20:06:14-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3605387			
	Datos estampillados:	F1417437572D0825242329CF6ABEFB3244E02CBD87F58BEB3B5C7D6160879086			

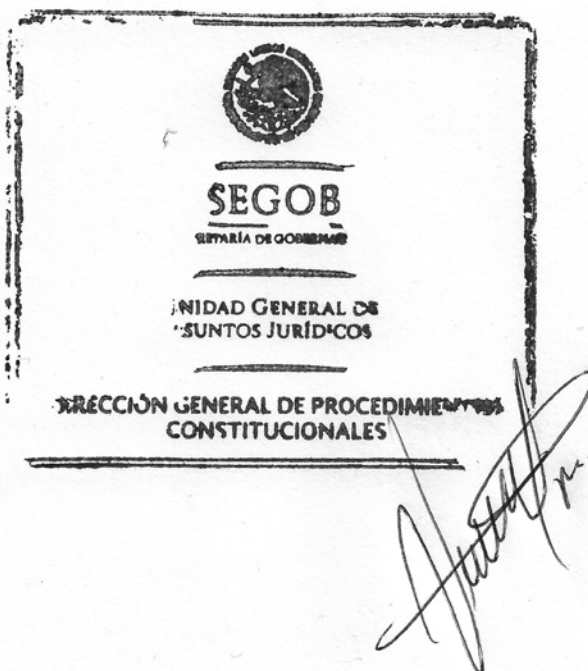


VERÓNICA ROJAS CORTÉS, DIRECTORA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 FRACCIÓN XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTA DEPENDENCIA,-----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN UNA (1) FOJA ÚTIL, QUE VA DEBIDAMENTE SELLADA Y RUBRICADA, CONCUERDA FIELMENTE CON LA ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA, LA QUE SE EMITE PARA SER PRESENTADA ANTE LA **SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**. DADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.

VRC/CRO/KEHM/MGG.





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO ÚNICO DE PERSONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
D.G.R.H.

4105a2d5a71466d4bd67f7f0811e4be4ec14

NÚMERO DE EMPLEO		DEFINITIVO		INTERNO		CÓDIGO LINEA DE PUESTO		S.P.C.		DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO		FOLIO	
REG. E.O. CAUSANTES		R.F.C.		HOM.		CLAVE ÚNICA DE REGISTRO PERSONAL		LUGAR DE NACIMIENTO		ENTIDAD ORIGIN.			
R.O.S. CORRESPONDENCIA		R.O.S. CORRESPONDENCIA		SEXO		E.O. CIVIL		E.O. CIVIL		CLAVE			
DIRECCIÓN PARTICULAR		CALLEJA EXT. NO. 101, COLONIA		CÓDIGO POSTAL		TELÉFONO PARTICULAR		FECHA DE INGRESO		GOBIERNO FEDERAL		GOBERNACIÓN	

NOMBRE PUESTO		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		PAQUETA		CLAVE PRESUPUESTARIA		PUESTO		PLAZA		MUEL		DENOMINACIÓN DEL PUESTO	
O.C.E.																DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS CONSTITUCIONALES	
O.C.E.																HARRARD	
ÁREA DE TRABAJO		ÁREA DE TRABAJO		PAG.		HOL.		CLAVE		RACIACIÓN		DENOMINACIÓN		EMBAJO		FEDERAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES																A	

SUELDO Y SALARIOS		IMPORTE
P.T.O.A.	DENOMINACIÓN	
	SUELDO COMPACTADO	
	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	

MODIFICACIONES O DATOS DEL SUBSISTO	
NÚMERO DE	APPELLIDO MATERNO, APPELLIDO MATERNO, APELLIDO (S)
SUBLEDO	
CLAVE	MOTIVO DE LA BAJA O LICENCIA
DESCRIPCIÓN	FECHA DE VIGENCIA
	DE A

Se expide en la Ciudad de México a 27 de agosto de 2020

PRESTO CONTRATO AL PERSONAL POR EL
APORTE DE LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL
POR EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
EN LA UNIDAD DE LA ENFERMIA

EMPLEADO	
R.O.S. CORRESPONDENCIA	

TITULAR DE LA DEUDA	
R.O.S. CORRESPONDENCIA	



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	
D.C. CHRISTOPHER VALENZUELA POYCE	

THE COMMISSIONER OF THE CUSTOMS AND EXCISES



SECRETARIA DE GOBERNACION

COPIA CERTIFICADA DE LA EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NO. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITA POR RAFAEL CÉSAR DÍAZ HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96, QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN, CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTA DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.-



DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

No. de edición del mes: 21

Ciudad de México, lunes 30 de noviembre de 2020

CONTENIDO

Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Bienestar
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Cultura
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Consejo de la Judicatura Federal
Banco de México
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Avisos
Índice en página 346 de la Segunda Sección

00000001

**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN****SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO****PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

/ Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**TÍTULO PRIMERO****DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN****CAPÍTULO I****Disposiciones Generales**

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2021, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La información que, en términos del presente Decreto, deba remitirse a la Cámara de Diputados será enviada a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnará dicha información a las comisiones competentes, en forma impresa y en formato electrónico de texto modificable o de base de datos según corresponda, con el nivel de desagregación que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y será publicada en las páginas de Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría presentará información presupuestaria comparable respecto del ejercicio fiscal anterior y de los diversos documentos presupuestarios.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las correspondientes al Anexo Transversal Anticorrupción; así como las principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda, respecto del presupuesto aprobado, por ramo y entidad.

CAPÍTULO II**De las erogaciones**

Artículo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$6,295,736,200,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de \$718,193,400,000.

000000021



Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto. **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN**
Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos autónomos, administrativos y generales, así como los capítulos específicos que incorporan los flujos de efectivo de las Entidades, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 1 del presente Decreto y los Tomos II a IX, de este Presupuesto de Egresos. En el Tomo I se incluye la información establecida en el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. El gasto corriente estructural se incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los gastos obligatorios, se incluye en el Anexo 3 de este Decreto;

IV. El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales en términos del artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluye en el Anexo 4 de este Decreto, en términos de lo que se señala en el artículo 25 del mismo;

V. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el Anexo 5 de este Decreto;

VI. El capítulo específico que incorpora el monto máximo anual de gasto programable para atender los compromisos de pago requeridos para los nuevos proyectos de asociación público-privada y para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno de ellos, en términos del artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se incluye en el Anexo 5.A de este Decreto y en el Tomo VIII de este Presupuesto de Egresos;

VII. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el Anexo 6 de este Decreto y en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos;

VIII. El capítulo específico que incorpora las previsiones salariales y económicas, se incluye en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y en los Tomos III a VI de este Presupuesto de Egresos.

Los montos y términos aprobados en este capítulo específico en dichos Anexos y Tomos del Presupuesto de Egresos, incluyendo las previsiones para contingencias y sus ampliaciones derivadas de adecuaciones presupuestarias y ahorros necesarios durante el ejercicio fiscal para cumplir, en su caso, con las disposiciones laborales aplicables, forman parte de la asignación global a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

IX. La suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal; aquél correspondiente a la deuda de las empresas productivas del Estado incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de este Decreto; las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquellas para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 8 de este Decreto;

X. Para los efectos de los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, serán los señalados en el Anexo 9 de este Decreto. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado;

XI. Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los términos del artículo 2o., Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41, fracción II, inciso j), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se presentan desglosados por ramo y programa presupuestario;

XII. Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se señalan en el Anexo 11 de este Decreto, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XIII. El monto total de los recursos previstos para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se señala en el Anexo 12 de este Decreto;

00000003

**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

XIV. Las erogaciones de los programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se señalan en el Anexo de este Decreto;

XV. El presupuesto consolidado de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, conforme al artículo 24 de la Ley de Transición Energética, se señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 20 de este Decreto;

XVII. Las erogaciones para el Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 21 de este Decreto.

Las provisiones para servicios personales del Ramo General referidos en el párrafo anterior, que se destinen para sufragar las medidas salariales y económicas, deberán ser ejercidas conforme a lo que establece el segundo párrafo de la fracción VIII anterior y el artículo 13 de este Decreto y serán entregadas a las entidades federativas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y, solo en el caso de la Ciudad de México se ejercerán por medio del Ramo General 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos;

XVIII. Las erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 22 de este Decreto.

En términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esa Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por lo anterior, para el cálculo de la distribución deberá considerar la información del Censo de Población y Vivienda 2020. En caso de que dicha información no esté publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa dada a conocer por el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En términos de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a las entidades federativas, con base en la fórmula señalada en ese artículo, sujetándose a lo siguiente:

a) Para determinar la variable PIB_{pci} , definida como la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i , en caso de no estar disponible esa información, se deberá tomar en cuenta la última información del Producto Interno Bruto por entidad federativa anual que dé a conocer el Instituto referido, misma que se dividirá entre la información de la última publicación de proyección de la población a mitad de año con información anual, que dé a conocer el Consejo Nacional de Población. Cabe señalar, que ambas variables deberán corresponder al mismo año para cada entidad federativa, y

b) Con respecto a la variable n_i , definida como la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i , se deberá considerar la información del Censo de Población y Vivienda 2020, y de no estar publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa, que dé a conocer el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La Secretaría, en relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, continuará transfiriendo a las entidades federativas que así lo soliciten a la Federación hasta el 100 por ciento de las aportaciones con cargo a cada Fondo, en el fideicomiso o vehículo financiero que determinen procedente, siempre y cuando se encuentre previsto en su legislación local; y cuya administración y ejercicio de dichos recursos serán responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, los cuales deberán destinarse exclusivamente para los objetivos y fines expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y cumplir íntegramente con lo establecido en la misma y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, las entidades federativas en el fideicomiso o vehículo financiero que instrumenten conforme a su legislación local, podrán continuar afectando las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en garantía o fuente de pago hasta por el 25 por ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de dichos Fondos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal;

00000004

XIX. Los límites de las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación se señalan en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos;

XX. Las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas para los Ramos Generales 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 24 de este Decreto;

XXI. Los programas sujetos a reglas de operación se señalan en el Anexo 25 de este Decreto;

XXII. Los principales programas previstos en este Presupuesto de Egresos se detallan en el Anexo 26 de este Decreto, y

XXIII. Los recursos para el Anexo Transversal Anticorrupción se señalan en el Anexo 31 de este Decreto.

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero; subsidios para organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa hidráulico: subsidios para acciones en materia de agua.

Asimismo, en el Anexo 27 de este Decreto se consideran los recursos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que tendrá por objeto atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, de conformidad con las declaratorias correspondientes conforme a lo previsto en la Ley General de Protección Civil. La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través de este Programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 4. Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021 se aprueba para Petróleos Mexicanos una meta de balance financiero de -\$92,687,000,000 y un techo de gasto de servicios personales de \$93,632,929,374. Asimismo, se aprueba para la Comisión Federal de Electricidad una meta de balance financiero de \$28,500,000,000, y un techo de gasto de servicios personales de \$62,460,041,455.

Artículo 6. Conforme al artículo 272 de la Ley del Seguro Social, el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de \$901,687,110,152. El Gobierno Federal aportará al Instituto la cantidad de \$110,992,564,617, como aportaciones para los seguros; dispondrá de la cantidad de \$409,179,302,312, para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; aportará la cantidad de \$5,429,653,204, para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley, y aportará la cantidad de \$21,678,502, para atender lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá destinar a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, a que se refieren los artículos 280, fracciones III y IV, y 286 K, respectivamente, de la Ley del Seguro Social, la cantidad de \$31,857,124,231, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que se establecen en dicha Ley; así como para hacer frente a las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual con sus trabajadores.

Para los efectos del artículo 277 G de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá sujetarse a las normas de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en este Decreto, en los términos propuestos por el Consejo Técnico de dicho Instituto las cuales se aplicarán sin afectar el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes; asimismo, conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en este Decreto.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

El uso de reservas de cualquier naturaleza y tipo deberá ser registrado invariablemente como gasto programable. Asimismo, las reservas del Seguro de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, únicamente serán destinadas para las prestaciones monetarias de esos seguros; y no para financiar gasto corriente del Instituto, salvo en los casos que así lo prevea la Ley del Seguro Social.

El titular y los servidores públicos competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social serán responsables de que el ejercicio del gasto de dicho Instituto se sujete a los montos autorizados para cubrir su gasto programable, para las reservas y el fondo a que se refiere este artículo.

TÍTULO SEGUNDO DEL FEDERALISMO CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:

I. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los convenios correspondientes;

III. Los proyectos de infraestructura que realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los recursos de los fondos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", sin perjuicio de las demás que establezca el presente Decreto.

La Secretaría deberá publicar de forma trimestral, en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria, la información relativa a los proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, incluyendo el monto aprobado y pagado, su ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos recursos. Asimismo, deberá informar en dicho medio el avance financiero de los proyectos con base en los reportes que, de conformidad con la normatividad aplicable, realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La información anterior, deberá estar disponible, a su vez, en formato de datos abiertos;

IV. Los programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, se sujetarán a lo siguiente:

a) El porcentaje o monto que corresponda aportar a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será establecido por las Dependencias a cargo de los respectivos programas;

b) Dichos órdenes de gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que les correspondan en las cuentas bancarias productivas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo con el calendario establecido en los convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de marzo.

Antes del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga para realizar la aportación correspondiente de recursos locales, hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior;



c) La entidad federativa, municipio o demarcación territorial que se vea afectado por situaciones que obliguen al Ejecutivo Federal a emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos de la Ley General de Protección Civil, contará con una prórroga de 20 días hábiles adicionales para efectuar el depósito de las aportaciones que le correspondan, una vez publicada la declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán cubrir hasta en dos exhibiciones durante el ejercicio fiscal su aportación a los programas concurrentes en materia educativa para todos los niveles, y

e) Las ministraciones de recursos federales podrán ser suspendidas cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no aporten en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas;

V. La Secretaría de Educación Pública comunicará a las entidades federativas a más tardar el último día hábil del mes de marzo, el presupuesto para el subsidio para organismos descentralizados estatales que la Federación otorga, así como para los programas financiados con fondos concurrentes;

VI. En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes que fuera necesario realizar a los recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados;

VII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de los artículos 19, fracción IV, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 12, sexto párrafo, de su Reglamento, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Dichos recursos se considerarán devengados al momento de su aportación al patrimonio de este Fideicomiso, y el ejercicio de los mismos por parte de las entidades federativas se realizará conforme a los calendarios de ejecución registrados por éstas ante la Secretaría para los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. En el caso de los subsidios que tengan el mismo destino, la Secretaría deberá entregar los recursos a las entidades federativas de acuerdo con un calendario establecido y podrá emitir las disposiciones correspondientes para comprobación de los mismos en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán enviar a la Secretaría, a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la información de las evaluaciones que lleven a cabo sobre recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha información en los Informes Trimestrales;

IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la seguridad pública, promoverá y vigilará que su aplicación se oriente al cumplimiento de los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional definidos por dicho Consejo, así como que su erogación se realice en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

00000007

**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos para seguridad pública, a través del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para implementar y operar el modelo de desarrollo y operación policial previsto en la ley de la materia, conforme a los ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y

X. Durante los primeros 10 días naturales del mes de febrero, las entidades federativas deberán enviar a la Secretaría, en forma impresa y en formato electrónico de base de datos, el calendario de distribución y montos que de los fondos a los que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan para el ejercicio fiscal 2021 a sus municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

Artículo 8. Las entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que realicen proyectos de infraestructura con recursos del Ramo General 23 deberán reportar a la Secretaría, en los términos que ésta determine y a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del contrato bajo el cual se realicen dichos proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Las entidades federativas serán responsables de la veracidad de la información reportada.

TÍTULO TERCERO

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 9. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda. Al efecto, la Secretaría informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a partir del 1o. de abril, sobre dichos subejercicios. En el caso de las economías generadas durante el ejercicio fiscal, éstas deberán canalizarse a los programas y Tomos aprobados en este Presupuesto de Egresos.

La determinación de los subejercicios se realizará conforme a los calendarios autorizados, en los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CAPÍTULO II

De las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria

Artículo 10. Las Dependencias y Entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley Federal de Austeridad Republicana y en las disposiciones de austeridad republicana emitidas por el Ejecutivo Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias y Entidades observarán las disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, o que sean resultado de reformas jurídicas; así como por determinación de la Secretaría en los supuestos en que las mismas generen los ingresos para cubrir su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad atender situaciones de carácter emergente o contingente;

II. Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2020;

III. Las Dependencias y Entidades no podrán crear estructuras orgánicas y ocupacionales excesivas, y se sujetarán a lo que establezca la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales continuará las acciones para el mejor uso y aprovechamiento inmobiliario que considere, entre otras, la puesta a disposición de inmuebles desaprovechados, mismos que podrán ser utilizados para resolver necesidades de otras instituciones públicas o, en su defecto, para su desincorporación y enajenación. Para tal efecto, dicho Instituto actualizará el programa de aprovechamiento inmobiliario federal mismo que deberá publicarse en su portal de Internet, así como podrá realizar verificaciones a los inmuebles que así considere, previo aviso a la institución pública de que se trate. Las acciones derivadas del programa deberán sujetarse al presupuesto aprobado para las Dependencias y Entidades;

00000008



V. Las contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles; para tal efecto, las Dependencias y Entidades podrán realizar las transferencias de recursos conforme a las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el Estado;

VI. Las Dependencias y Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros sobre personas y bienes deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mantengan o mejoren las condiciones contratadas en la póliza, y

VII. La Secretaría podrá establecer mecanismos financieros de cobertura de riesgos para atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las Dependencias y Entidades, considerando las asignaciones con las que cuenten para tal fin, así como de aquellas obras de arte que ingresen al territorio nacional para su exhibición al público en general.

Las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos. Para ello, se integrará la información que al respecto contenga el sistema CompraNet o, en su caso, el que determine la Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Secretaría, desde el ámbito del control presupuestario, podrá autorizar en casos excepcionales modalidades específicas de aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria referidas en las fracciones anteriores, o bien en los supuestos que las Dependencias y Entidades que sean objeto de reformas jurídicas, de nueva creación o cuando se realicen modificaciones a su estructura programática.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de Internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los informes trimestrales las variaciones en el gasto corriente estructural.

Artículo 11. En materia de comunicación social, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se sujetarán a la Ley General de Comunicación Social y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente, se sujetarán a la política de comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de la República, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación. Asimismo, los ejecutores de gasto deberán observar lo siguiente:

I. Podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas de comunicación social, a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado los tiempos oficiales, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.

No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Solo podrán realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere el párrafo anterior, en los casos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación en la materia;

II. Las Dependencias y Entidades registrarán la información a la que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social, en el sistema respectivo, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Ley señalada;

III. Las erogaciones que conforme a este artículo realicen las Entidades deberán ser autorizadas por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente;

00000009



IV. Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones y/o trasposos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo que dichos recursos se destinen a mensajes para atender situaciones de carácter preventivo o contingente; que tengan como propósito mantener la prestación de servicios a la población que no se puedan atender de manera presencial derivado de situaciones emergentes; que se requieran para la promoción comercial de las Entidades para que generen mayores ingresos; que tengan como propósito promover a México como destino turístico en el extranjero, o que se realicen con cargo a los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos, los ejecutores de gasto deberán obtener de la Secretaría de Gobernación la autorización del programa de comunicación social o bien, de la modificación respectiva, para lo cual señalarán el costo y su fuente de financiamiento y, posteriormente, deberán realizar el trámite de adecuación presupuestaria ante la Secretaría;

V. Una vez que las Dependencias y Entidades cuenten con los recursos autorizados conforme a la fracción anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, presentará a la Cámara de Diputados a través de la Comisión competente, un informe con las razones que justifican la ampliación o traspaso correspondiente, así como su cuantía y modalidades de ejercicio.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que, conforme a la Ley General de Comunicación Social, deban cumplir las Dependencias y Entidades;

VI. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán únicamente con órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes de inserción para medios impresos y con órdenes de servicio para medios complementarios. En todos los casos se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura geográfica, circulación certificada y pautas de difusión en relación con el medio de comunicación que corresponda;

VII. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las Dependencias y Entidades;

VIII. La Función Pública, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social, a través del sistema respectivo dará seguimiento al registro que realicen las Dependencias y Entidades sobre las erogaciones en materia de Comunicación Social;

IX. El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto de Egresos deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables, y

X. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, que cuenten con recursos en este Presupuesto de Egresos para Comunicación Social, deben elaborar sus respectivos Programas Anuales de Comunicación Social, de conformidad y en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 12. Para lograr una mayor transparencia en materia de contrataciones públicas, promover la reactivación económica y fortalecer las cadenas productivas, las Dependencias y Entidades que realicen adquisiciones de bienes y contratación de servicios o de obra pública, se sujetarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., a fin de dar de alta en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa, las cuales serán emitidas por la Secretaría e interpretadas por la unidad administrativa de la misma que ejerza las facultades de coordinación con las instituciones de banca de desarrollo.

Con el propósito de fomentar la transparencia, tratándose de las empresas productivas del Estado, éstas podrán incorporarse al Programa de Cadenas Productivas, con el objeto de que sus proveedores y contratistas sean beneficiados con este programa.

El registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo con los plazos definidos en dichas disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con el apoyo de dichas Dependencias y Entidades y, en su caso, las empresas productivas del Estado, promoverá la utilización del Programa de Cadenas Productivas con los proveedores y contratistas del sector público y reportará los avances que se presenten en los Informes Trimestrales.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO III

De los servicios personales

Artículo 13. Los recursos previstos en los presupuestos de las Dependencias y Entidades en materia de servicios personales y, en su caso, en los ramos generales, incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas, y se sujetarán a lo siguiente:

I. Los incrementos a las percepciones se determinarán, conforme a:

- a) La estructura ocupacional autorizada;
- b) Las plazas registradas en el sistema de administración de nómina y demás elementos previstos en el caso del artículo 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;
- c) La plantilla de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y
- d) Las plantillas de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y, en el caso de los servicios de educación para adultos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las previsiones para el incremento a las percepciones, a que se refieren los Anexos 7 y 24 de este Decreto, incluyen la totalidad de los recursos para categorías y personal de confianza y sindicalizado, por lo que no deberá utilizarse la asignación prevista a un grupo para favorecer a otro;

II. En el presente ejercicio fiscal en las Dependencias y Entidades no se crearán plazas en nivel alguno con excepción de los casos previstos en el artículo 10, fracción I, de este Decreto;

III. Las previsiones a que se refiere el Anexo 24 de este Decreto incluyen los recursos para la educación tecnológica y de adultos correspondientes a aquellas entidades federativas que no han celebrado los convenios establecidos en el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal. Una vez que dichas entidades celebren los convenios respectivos, dichos recursos serán entregados a éstas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

IV. Los recursos del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, incluyen las previsiones para cubrir:

a) Las medidas salariales y económicas correspondientes al fondo previsto en los artículos 26, 26-A, 27 y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que serán cubiertas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

b) Las medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Asimismo, las previsiones para incrementos a las percepciones incluyen las correspondientes a los sistemas de desarrollo profesional que, en su caso, correspondan en los términos de la ley de la materia, y

c) Las plazas que sean creadas con cargo a los recursos establecidos en el rubro de previsiones salariales y económicas del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para su aplicación a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, de acuerdo con la normalidad aplicable, y

V. Las previsiones incluidas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), incluyen los recursos para cubrir aquellas medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud.

Las Dependencias y Entidades reportarán en los Informes Trimestrales el impacto de los incrementos salariales en el presupuesto regularizable.

Artículo 14. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto, en su Anexo 23 y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación.

00000011



Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias considerarán los elementos variables de dicha remuneración, la cual solo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las Dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario.

La Secretaría podrá autorizar, en términos de las disposiciones específicas que emita, el otorgamiento de compensaciones económicas para el personal que integra la Guardia Nacional como parte de su sistema de remuneraciones, así como de los sistemas complementarios de seguridad social, sin que lo anterior comprometa recursos de largo plazo mayores a los autorizados en los términos de este Decreto.

Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en la presente fracción, forman parte de su remuneración;

II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto y, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:

- i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y
- ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos de las percepciones ordinarias presentadas en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador;

b) La remuneración ordinaria total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de percepciones ordinarias autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto;

III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se presentan en los Anexos siguientes de este Decreto:

- a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;
- b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;
- c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;
- d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;
- f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;
- h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
- i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;
- j) Anexo 23.11. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;



k) Anexo 23.12. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y

m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.

Las Dependencias y Entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1. del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.

Las Entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.

Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las Dependencias y Entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Las Dependencias y Entidades deberán reportar a la Secretaría, a través del sistema que para tales efectos esta determine, la información relativa a las plazas ocupadas de su plantilla autorizada, para efectos del control presupuestario de los servicios personales, en términos de las disposiciones específicas que emita la Secretaría.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

Artículo 15. Los servidores públicos de mando y personal de enlace de las Dependencias y Entidades solo podrán percibir las prestaciones establecidas en el manual a que se refiere el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las Dependencias y Entidades no podrán destinar recursos para cubrir prestaciones en adición a aquéllos previstos en el gasto de servicios personales aprobado en este Presupuesto de Egresos.

En los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo y de los contratos colectivos de trabajo que realicen las Dependencias y Entidades se deberán sujetar a su presupuesto autorizado.

Los titulares de las Entidades informarán a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría y a la Función Pública, sobre los resultados obtenidos en los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y de las revisiones de salario que, en su caso, realicen en el presente ejercicio fiscal. Dichos informes, incluyendo el reporte sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán presentados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de dichas negociaciones.

Las Dependencias y Entidades enviarán informes a la Secretaría con el detalle de todas las prestaciones que perciben los servidores públicos a su cargo, así como el gasto total destinado al pago de las mismas en el periodo correspondiente, a fin de que se incluyan en los Informes Trimestrales.

Artículo 16. Las Dependencias y Entidades observarán las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

1. Solicitarán autorización presupuestaria de la Secretaría, respecto de sus tabuladores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base V del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;



II. Los pagos retroactivos por ocupación de plazas, cuando procedan, solo podrán comprender hasta 45 días naturales anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba su nombramiento. Lo anterior, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia y desempeño del servicio durante dicho periodo en la plaza respectiva, y

III. Podrán traspasarse las plazas necesarias de las Dependencias y Entidades, que con motivo de una reestructura en la Administración Pública Federal, derivada de una reforma legal o a ordenamientos de carácter administrativo, asuman funciones de aquéllas que se transformen, compacten, eliminen o sean creadas, para lo cual se deberá contar con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines.

Artículo 17. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la Administración Pública Federal; la desincorporación de Entidades; la cancelación de plazas, o la eliminación de unidades administrativas de las Dependencias o Entidades, en los términos de las disposiciones específicas que, al efecto, emita la propia Secretaría.

Dichas disposiciones específicas establecerán, entre otros aspectos, los montos de la compensación económica, los cuales se podrán cubrir con recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas o conforme al mecanismo presupuestario y de pago que se determine; los tipos de personal que podrán acogerse al mismo, considerando no afectar la prestación de servicios públicos; así como el procedimiento que deberán seguir las Dependencias y Entidades correspondientes para su aplicación.

Artículo 18. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberán remitir a la Secretaría los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a su presupuesto de servicios personales aprobado.

Artículo 19. Las instituciones de banca de desarrollo deberán remitir a la Secretaría para el registro correspondiente los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos; así como a los demás servidores públicos; en el que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman.

Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla total, incluidas las plazas a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha.

En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos.

CAPÍTULO IV

De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo Federal impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar los principios de igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en el instrumento de seguimiento del desempeño de los programas bajo su responsabilidad;



II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad, en su caso, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, y población indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan;

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres;

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su responsabilidad, las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género, y

V. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Las acciones contenidas en las fracciones anteriores serán obligatorias en lo relativo a los programas y acciones incorporadas en el Anexo 13 del presente Decreto y para los demás programas federales que correspondan.

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas dirigidos a mujeres y atribuciones para lograr la igualdad de género entre mujeres y hombres, así como las entidades federativas y municipios que reciban recursos etiquetados incluidos en el Anexo 13 de este Decreto, deberán suscribir los convenios respectivos durante el primer trimestre, así como informar sobre los resultados de los mismos, los publicarán y difundirán para darlos a conocer a la población e informarle, en las lenguas nacionales reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas existentes en la entidad federativa, sobre los beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la normativa aplicable.

Para el seguimiento de los recursos destinados a la igualdad de género entre mujeres y hombres, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en su instrumento de seguimiento del desempeño, generará, cuando ello sea factible y sujetándose a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, información de manera desagregada, al menos por edad, sexo, entidad federativa, municipio o demarcación territorial, grado máximo de estudios y pertenencia étnica. Los padrones deberán tener una versión pública, la cual estará disponible para su consulta. Las Dependencias y Entidades con presupuesto asignado dentro del Anexo 13, que realicen estudios y generen bases de datos o levantamientos de encuestas, deberán hacer públicos sus resultados en sus portales institucionales con el propósito de poder realizar evaluaciones y análisis posteriores. Las Dependencias y Entidades responsables de la coordinación de los programas contenidos en el Anexo 13 del presente Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollado por la Secretaría, y en el Sistema de Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través de los indicadores y sus metas contenidos en el instrumento de seguimiento respectivo. Asimismo, se detallarán los aspectos por cada programa presupuestario, contenido en el Anexo mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los recursos.

La Secretaría presentará en los Informes Trimestrales los avances financieros y programáticos que le envíe el Instituto Nacional de las Mujeres con base en la información que a éste le proporcionen las Dependencias y Entidades responsables de los programas a través del sistema indicado en el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de las Mujeres remitirá el informe mencionado anteriormente a la Cámara de Diputados, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. Asimismo, deberá poner dicho informe a disposición del público en general a través de su página de Internet, en la misma fecha en que se publiquen los Informes Trimestrales.

La información que se publique trimestralmente servirá para las evaluaciones que se realicen en el marco de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.

00000015



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Los resultados de los montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el Anexo 13 de Decreto se detallarán en un anexo específico dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres revisará las reglas de operación de los programas del Anexo 13 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las menciones realizadas en el presente Decreto con respecto a beneficiarios, así como a titulares y servidores públicos de los ejecutores de gasto, se entenderán referidas a las mujeres y los hombres que integren el grupo de personas correspondiente.

CAPÍTULO V

De la inclusión de las personas con discapacidad

Artículo 22. Las Dependencias y Entidades, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

A más tardar el último día hábil de octubre, las Dependencias y Entidades entregarán un reporte a la Secretaría de Bienestar, en relación con las acciones señaladas en este artículo.

El reporte al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión para su turno a las Comisiones competentes.

CAPÍTULO VI

Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a IX, y Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Dependencias y Entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:

I. Las disposiciones para la operación de los programas que la Administración Pública Federal desarrolle en la materia considerarán la participación que, en su caso, tenga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención que corresponda al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para facilitar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a sus beneficios;

II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;

III. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus Dependencias y Entidades, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados, exclusivamente para que los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, sean registrados por la entidad federativa en su Cuenta Pública;

IV. Las reglas de operación de los programas operados por las Dependencias y Entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del presente Decreto;

V. Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de mantenimiento y reconstrucción;



VI. Se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas mediante programas de la banca de desarrollo y, en su caso, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y

VII. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada, cuente con perspectiva de derechos indígenas y pertinencia cultural.

CAPÍTULO VII

De la inversión pública

Artículo 24. En el presente ejercicio fiscal se podrán comprometer nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y de inversión condicionada, a que se refieren los artículos 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley Federal de Deuda Pública, por la cantidad señalada en el Anexo 6.A, de este Decreto, correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad.

El monto autorizado a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y condicionada, aprobados en ejercicios fiscales anteriores, asciende a la cantidad señalada en el Anexo 6.B, de este Decreto. Las variaciones en los compromisos de cada uno de dichos proyectos se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

La suma de los montos autorizados de proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y los montos para nuevos proyectos se presentan en el Anexo 6.C, de este Decreto.

Los compromisos correspondientes a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores, se detallan en el Anexo 6.D, de este Decreto y comprenden exclusivamente los costos asociados a la adquisición de los activos, excluyendo los relativos al financiamiento en el periodo de operación de dichos proyectos.

Por lo que se refiere a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión condicionada, en caso de que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presente ejercicio fiscal surja la obligación de adquirir los bienes en los términos del contrato respectivo, el monto máximo de compromiso de inversión será aquél establecido en el Anexo 6.E, de este Decreto.

Las previsiones necesarias para cubrir las obligaciones de inversión física por concepto de amortizaciones y costo financiero de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa, que tienen efectos en el gasto del presente ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, se incluyen en el Anexo 6.F, de este Decreto. Dichas previsiones se especifican a nivel de flujo en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos y reflejan los montos presupuestarios autorizados, así como un desglose por proyecto.

Los montos de cada uno de los proyectos a que se refiere este artículo se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

En el último Informe Trimestral del ejercicio, adicionalmente se deberá incluir la información sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operación; los proyectos que están en construcción, su monto ejercido y comprometido; el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos, y la fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos. Esta información se deberá publicar en la página de Internet de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 25. En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán nuevos proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se observa en el Anexo 4 de este Decreto.

CAPÍTULO VIII

De la evaluación del desempeño

Artículo 26. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones.

00000017



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Las Dependencias y Entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:

I. Actualizar los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas presupuestarios.

Todos los programas deberán contar con un instrumento de seguimiento del desempeño en el que se deberá priorizar la inclusión de indicadores estratégicos.

Los programas que determine la Secretaría tendrán instrumentos de seguimiento del desempeño, en los cuales estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos. Para la actualización de los instrumentos de seguimiento del desempeño, se deberá considerar, al menos lo siguiente:

a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios;

b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis realizados conforme al programa anual de evaluación;

c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los programas presupuestarios sujetos a las mismas;

d) Los criterios y recomendaciones que, en su caso, emitan la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos de las disposiciones aplicables, y

e) Los elementos contenidos en el diagnóstico a que refiere el numeral Vigésimo Primero de los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal.

Los instrumentos de seguimiento del desempeño deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales con perspectiva de género, juventud, discapacidad, y etnicidad y de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Dependencias y Entidades deberán hacer públicos sus instrumentos de seguimiento al desempeño en su página de Internet.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales el avance en las metas de los indicadores registrados de los programas presupuestarios que conforman el gasto programable previsto en los ramos administrativos y generales y en las Entidades sujetas a control presupuestario directo, considerando la periodicidad de medición de dichos indicadores;

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la Secretaría, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen;

III. La evaluación se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos en dicho programa, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán entregar los resultados de las evaluaciones de tipo complementarias a las que haga referencia el programa anual de evaluación y los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, a más tardar 30 días posteriores a su realización, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores, así como ejecutar lo relacionado con las evaluaciones para 2021;

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales hallazgos y resultados de las evaluaciones conforme al Mecanismo para el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora vigente, definido por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos específicos, se reportarán los avances y resultados que se alcancen mediante el sistema de evaluación del desempeño y se publicarán en los términos de las disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y, en su caso, a ejercicios fiscales anteriores, se tomará en cuenta como parte de un proceso gradual y progresivo, durante 2021 y para los procesos presupuestarios subsecuentes;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

V. Efectuar las evaluaciones de los programas presupuestarios en los siguientes términos:

a) Por sí mismas, o

b) A través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, instituciones académicas y de investigación, u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Asimismo, la contratación o ejecución, así como la supervisión de la evaluación se deberá realizar por una unidad administrativa ajena a la operación del programa a evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en los términos de las disposiciones aplicables.

En el supuesto a que se refiere el inciso b) de la presente fracción, las Dependencias y Entidades cubrirán el costo de las evaluaciones con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago que se determine. Asimismo, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este párrafo abarquen varios ejercicios fiscales, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El total de las erogaciones que, en su caso, se efectúen para realizar las diferentes etapas de las evaluaciones se deberá registrar de manera específica para su plena transparencia y rendición de cuentas;

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora derivados de las mismas, en los Informes Trimestrales que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la información relativa al avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean susceptibles de mejora. Asimismo, las Dependencias y Entidades publicarán dicha información en su página de Internet y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá publicar trimestralmente en su página de Internet los avances en el cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones contempladas en los programas anuales de evaluación.

Para tal efecto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social remitirá a la Secretaría la información derivada de las evaluaciones que haya coordinado, dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del trimestre que se informa, en la forma que para tal efecto determine la Secretaría.

La Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establecerán los modelos de términos de referencia y demás elementos particulares que se requieran para las evaluaciones y coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas;

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones, la Auditoría y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será pública y estará disponible en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias o Entidades correspondientes.

La Secretaría definirá los criterios específicos a seguir al respecto y proporcionará capacitación y asistencia técnica para que las instancias de la Cámara de Diputados que lo soliciten puedan llevar a cabo directamente las consultas y la generación de los reportes que requieran, con base en la información disponible en el sistema correspondiente;

VIII. La Secretaría podrá apoyar a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de planeación, programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para instrumentar la evaluación del desempeño, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

IX. Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento organizacional y el proceso de presupuesto y gasto público, con el objeto de que la información obtenida del seguimiento del cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, de las evaluaciones realizadas a los programas, y del seguimiento a los resultados de éstas, se utilice gradualmente en las decisiones presupuestarias y en la gestión de los programas. Lo anterior será coordinado por la Secretaría;

00000019

61c97d4c966f552e2601e1ee88541005a2d5a71466d4bd67f7f081e1e4be4ec14



X. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño;

XI. Publicar en los portales de Internet de cada dependencia o entidad, para dar transparencia, todas las evaluaciones, estudios y encuestas, que con cargo a recursos fiscales hagan las Dependencias y Entidades, aun cuando no sean parte del Programa Anual de Evaluación, y

XII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a más tardar a los 20 días naturales posteriores al término del segundo trimestre de 2021, deberán enviar, en los términos que establezca la Secretaría y mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informes definitivos sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros, de los recursos federales que les fueron transferidos durante 2020. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deben reportar al finalizar cada trimestre de 2021.

La Secretaría deberá incluir en el segundo Informe Trimestral la información definitiva anual a que hace referencia el párrafo anterior.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la información de su competencia que se entregue a la Secretaría, incluyendo su veracidad y calidad.

TÍTULO CUARTO DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS

CAPÍTULO I Disposiciones Generales

Artículo 27. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el Anexo 25 de este Decreto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

- a) Deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios;
- b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones;
- c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;
- d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;
- e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;
- f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos;
- g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;
- h) Se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, incluyendo el fomento a las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, según corresponda;
- i) Darán prioridad en la asignación presupuestaria a las acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad permanente y a los pueblos indígenas;
- j) Se promoverán mecanismos para facilitar a los mexicanos repatriados, el acceso a los beneficios de los programas y garantizar su atención y protección de manera prioritaria;
- k) Deberán promover la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos;



l) En ningún caso se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo;

m) Se promoverá la transparencia y acceso a la información pública, así como la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de una estructura informática que permita homologar la información proveniente de los datos de los beneficiarios de los Programas;

II. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos:

a) La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas, por parte de las Dependencias y Entidades, así como aquél relacionado con los recursos presupuestarios federales que se transfieran a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que se aplique a través de anuncios en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos y restringirse a lo establecido en el artículo 11 de este Decreto;

b) Publicar en sus respectivas páginas de Internet el padrón de beneficiarios para los programas sujetos a reglas de operación, que deberá incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo otorgado o bien entregado;

c) Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo, en el cual se proporcione asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre el cumplimiento de los requisitos y trámite que deben observarse para obtener los recursos o los beneficios de los programas, y

d) Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los programas; los indicadores de desempeño de los programas, y los medios de contacto de las unidades responsables de los mismos deberán estar disponibles en las páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

La Secretaría publicará en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria la información que permita identificar las características de cada programa federal con base en sus reglas de operación. Para efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades remitirán a la Secretaría la información relacionada con las reglas de operación de los programas federales a su cargo, así como las modificaciones a las mismas, en los términos que la Secretaría determine.

Queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales.

Para la entrega de los apoyos a la población objetivo de los programas de subsidios en numerario, las Dependencias y Entidades deberán promover la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales, preferentemente a través del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cuando este cuente con la cobertura bancaria necesaria para la entrega de los apoyos, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas sujetos a reglas de operación deberán observar las siguientes disposiciones para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos:

I. Publicar en sus páginas de Internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban, las preguntas frecuentes del trámite, así como los principales motivos de rechazo. Los rechazos deberán estar fundados y motivados;

II. Tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente y las entidades federativas decidan suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación, éstos deberán celebrarse en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán como mínimo: los programas a que se refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa a que se destinarán los recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización.

00000021



El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los Comités de Planeación para el Desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del Convenio de Coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los mismos, y

III. Brindar asesoría a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la integración de los expedientes técnicos que, en su caso, requiera el programa, especialmente a los que se encuentran en condiciones de muy alta y alta marginación.

Artículo 29. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas presupuestarios considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como programas o acciones federales de desarrollo social deberán enviar a la Secretaría, en los términos y plazos que esta disponga, información sobre su población potencial, población objetivo y población atendida, misma que hará pública en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria.

CAPÍTULO II

De los criterios específicos para la operación de los programas

Artículo 30. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 Bienestar considera los programas establecidos en el Anexo 25 para dicho ramo.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, y los gobiernos de las entidades federativas se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Estos instrumentos promoverán que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Derivado de estos instrumentos se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y municipios, y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que concurren en sujeción a los programas concertados.

Los convenios a que se refiere este artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el correspondiente medio oficial de difusión de la entidad federativa que corresponda, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que queden íntegramente suscritos.

A efecto de fortalecer la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las Dependencias y Entidades.

Las faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de la información relativa a avances y metas alcanzadas, deberán ser informadas a la Función Pública o a la Secretaría de Bienestar en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta última dependencia, después de escuchar la opinión del gobierno de la entidad federativa, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.



Para el control de los recursos que se asignen a las entidades federativas, el Ejecutivo Federal convendrá con los gobiernos respectivos, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Bienestar los avances de ejecución físicos y financieros.

Artículo 31. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se sujetará a los siguientes lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este Presupuesto de Egresos:

I. Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El presupuesto dirigido al campo deberá tener las siguientes características:

- a) Mejorar e incrementar la productividad, cerrando las brechas existentes;
- b) Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar de las personas que los habitan;
- c) Mejorar la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio climático, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la utilización y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad;
- d) Incrementar la contribución de la agricultura nacional a la seguridad alimentaria de todas las personas;
- e) Que permita la complementariedad de acciones con las demás Dependencias y Entidades;
- f) Que permita el desarrollo de proyectos productivos por etapas;
- g) Que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- h) Una agricultura más incluyente, pero con políticas diferenciadas para cada una de las regiones del país, al tiempo que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- i) Que procuren la progresividad en el otorgamiento de los incentivos;

II. Los ramos administrativos que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable continuarán con el sistema de rendición de cuentas sobre el destino de los recursos fiscales de los programas concurrentes, el cual incorpora los siguientes elementos: región geográfica, entidad federativa, municipio y localidad, actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo, monto fiscal y fecha de otorgamiento, y la estratificación correspondiente;

III. Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:

a) Incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales, en un marco de sustentabilidad, generación de oportunidades y que contribuya a la seguridad alimentaria;

b) Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se orienten principalmente a las pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos.

Dichos recursos se direccionarán una vez que se cuente con la estratificación de zonas y regiones productivas del país dando prioridad a las pequeñas unidades de producción;

c) Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad;

d) Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;

e) Contribuir a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático, así como la oportuna prevención, administración y atención a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, considerando los potenciales productivos de cada región;

f) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, y

g) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente a los recursos genéticos;

IV. Propiciar la competitividad de las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como estrategias especiales para otros sistemas producto de alto impacto social;

V. Coadyuvar al impulso de la producción primaria, de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otros, para el aprovisionamiento de insumos básicos y apoyo a paquetes tecnológicos;

VI. Impulsar la producción y productividad en el sector mediante el fomento de proyectos integrales que consideren la tecnificación del riego y el uso de insumos (semillas, fertilizantes, biofertilizantes y prácticas agrícolas sustentables, entre otros);

VII. Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;

VIII. Se fortalecerán las obras de tecnificación de riego para aumentar la producción y productividad, dando prioridad a las pequeñas unidades de producción, y

IX. Las autoridades fiscales pondrán a disposición de las Dependencias y Entidades encargadas del otorgamiento de subsidios y estímulos, herramientas tecnológicas que permitan la consulta sobre el cumplimiento de la obligación contenida dentro del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En las reglas de operación de los Programas Federales del Ramo 08 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se deberá establecer que la consulta referida la hará directamente ésta última dependencia y no el beneficiario.

Artículo 32. La ejecución y operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o, en su caso, las Entidades de su sector coordinado.

Artículo 33. La Secretaría de Educación Pública será responsable de emitir las reglas de operación de sus programas sujetos a las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales contendrán, entre otras reglas, las siguientes:

I. Los recursos destinados a programas educativos deberán ser ejercidos exclusivamente por las autoridades educativas, tanto federales como estatales;

II. Las instituciones educativas contarán con un listado exhaustivo que contenga el personal comisionado a actividades sindicales. La Secretaría de Educación Pública enviará dichos listados a la Cámara de Diputados, y

III. En ningún caso podrán existir nóminas o partidas confidenciales. Los recursos públicos otorgados a las instituciones educativas que sean usados para el pago de nóminas deberán ejercerse en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que los beneficiarios de dichos programas deberán reportar a la Secretaría de Educación Pública los montos pagados a cada trabajador.

La Secretaría de Educación Pública, antes del 31 de enero, emitirá las convocatorias para el concurso de los diversos fondos aprobados, respecto de los programas a que se refiere este artículo, con la excepción de los que estén sujetos a los calendarios escolares específicos.

Artículo 34. Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones:

I. La Secretaría de Educación Pública al diseñar los programas deberá enviar a la Cámara de Diputados un informe sobre cómo dichos programas disminuirán los rezagos de cobertura y absorción en educación media superior y superior en las diversas regiones del país;



II. Las entidades federativas deberán enviar, de manera trimestral, informes tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública, sobre la aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media superior y superior;

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, y

IV. Las instituciones públicas federales y estatales de educación media superior y superior pondrán a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través de este Presupuesto de Egresos. En el marco de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en su caso, la ley local respectiva, las instituciones incorporarán en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos autorizados. En particular, el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral.

La información a que se refiere este artículo deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá enviar dicha información a la Secretaría de manera trimestral.

De conformidad con los Lineamientos Operativos que sean emitidos por la Secretaría de Educación Pública, el otorgamiento de subsidios para organismos descentralizados estatales, conforme al programa presupuestario correspondiente, estará condicionado a que las entidades federativas aporten la parte que les corresponda con cargo a sus presupuestos autorizados.

TÍTULO QUINTO

OTRAS DISPOSICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 35. Con el objeto de impulsar la cultura del pago por suministro de agua en bloque en los Distritos de Riego y mejorar la infraestructura de riego, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, devolverá a los Distritos de Riego que estén al corriente en sus pagos, un importe de recursos equivalente a las cuotas que se generen en el presente ejercicio fiscal, los cuales se destinarán en un 65 por ciento a la conservación y mantenimiento de los canales y drenes menores; 25 por ciento a la conservación de la red mayor, canales y drenes principales; 8 por ciento al mantenimiento de las obras de cabeza, y 2 por ciento a la supervisión y gasto de operación.

Artículo 36. Los programas de la Secretaría de Educación Pública, destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa Primera Infancia, Media Superior y Superior, establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.

La Secretaría de Educación Pública deberá informar a la Cámara de Diputados, sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa a los que hace referencia el párrafo anterior, su distribución y metas de mediano y largo plazo, a más tardar el 31 de marzo.

Los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información siguiente:

- I. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes;
- II. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación;
- III. Desglose del gasto corriente destinado a su operación;
- IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y
- V. La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como con los lineamientos que emita en la materia el Consejo Nacional de Armonización Contable, las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior llevarán el registro y la vigilancia de los activos, pasivos corrientes y contingentes, ingresos, gastos y patrimonio.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior a que se refiere este artículo entregarán a la Secretaría de Educación Pública la información señalada en el mismo, a más tardar a los 15 días naturales posteriores a la conclusión del trimestre que corresponda. Dicha Secretaría entregará esta información a la Cámara de Diputados y la publicará en su página de Internet, a más tardar a los 30 días naturales posteriores al periodo correspondiente.

Las autoridades correspondientes para aplicar dichos recursos verificarán que el personal de cada una de las universidades e instituciones de educación media superior y superior públicas, cumplan con sus obligaciones en términos de los contratos laborales correspondientes realizándose, en su caso, la compulsa entre las nóminas y los registros de asistencia.

La Secretaría de Educación Pública enviará la información a que se refiere este artículo a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles posteriores a que aquélla la reciba.

Artículo 37. Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2021, serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y su ejercicio y destino deberá reportarse en los Informes Trimestrales.

Artículo 38. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en este Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro del primer trimestre del año.

El Consejo Nacional de Armonización Contable, a más tardar el último día hábil de diciembre, deberá publicar en su página de Internet un reporte especial sobre la aplicación de los recursos del fondo a que hace referencia el presente artículo, así como:

- I. El monto de los subsidios otorgados a cada una de las entidades federativas y municipios;
- II. El tipo y alcances de los subsidios federales otorgados, y
- III. Los avances y resultados reportados por las entidades federativas y municipios.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2021, salvo lo dispuesto en el Transitorio Décimo Sexto, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones administrativas emitidas con base en lo dispuesto en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a éste, hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones administrativas que las reformen o abroguen.

Tercero. Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para que emita las autorizaciones que correspondan, a efecto de que los ejecutores de gasto realicen las adecuaciones o los trasposos de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios como consecuencia de reformas jurídicas que tengan por objeto la creación o modificación de la estructura administrativa de cualquier dependencia, entidad o ente autónomo, o cambio de sector en los casos que corresponda, reportando las mismas en los Informes Trimestrales.

Con la finalidad de garantizar y dar continuidad a las acciones de gobierno, las Dependencias, Entidades y unidades administrativas que se encuentren en proceso de readscripción o modificación de sus programas, podrán continuar su operación en la estructura organizacional y presupuestaria en la que se encuentren a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto no se realice la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales o se modifiquen sus programas.

00000026

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Los ejecutores de gasto deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas y ocupacionales respecto de las unidades responsables que cambiaron de adscripción o se encuentren en proceso de readscripción como consecuencia de reformas jurídicas.

Cuarto. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos correspondientes a las entidades federativas que no hayan suscrito los convenios a los que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal deberán ser transferidos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios al Ramo 11 Educación, a fin de que a través de éste se transfieran para esos mismos fines a dichas entidades federativas. Lo anterior, hasta en tanto sean suscritos los convenios de coordinación respectivos.

Quinto. Las entidades federativas deberán notificar y realizar la entrega de los recursos federales que correspondan a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los plazos y términos que establecen las leyes federales aplicables, el Presupuesto de Egresos, y en el caso de programas de subsidios o gasto reasignado, conforme a lo previsto en los convenios que celebren con las Dependencias y Entidades que les transfieran recursos federales.

Las entidades federativas no podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las entidades federativas, por conducto de sus secretarías de finanzas o sus equivalentes, deberán hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de recursos federales que deriven de los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, realizadas a sus municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de sus respectivas páginas oficiales de Internet, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que los recursos correspondientes hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias específicas de los municipios o demarcaciones, incluyendo el número de identificación de la transferencia.

El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades competentes en los términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que, en su caso, se determinen.

Los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la correcta integración de la información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los recursos que les transfieran las entidades federativas respectivas, conforme a lo señalado en este artículo.

Sexto. Para el ejercicio 2021, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2021, los cuales podrán determinar que hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos.

Séptimo. Los ejecutores de gasto deberán cubrir con cargo a sus presupuestos autorizados los compromisos u obligaciones que deriven de las determinaciones o las resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional competente. Para efectos de lo anterior, los ejecutores de gasto deberán ajustar sus presupuestos para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique ampliaciones a los mismos.

Octavo. El presupuesto aprobado del Ramo 12 Salud incluye hasta los treinta y tres mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación con cargo al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, en términos de lo señalado en el transitorio Décimo Quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021; los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en salud previstas en este Presupuesto.

Del presupuesto al que se refiere el párrafo anterior, se destinan los recursos necesarios para la detección oportuna y atención del cáncer infantil.

Noveno. Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las acciones que correspondan para que la entrega de los subsidios y apoyos a los beneficiarios de los programas se realice de manera directa a través de la Tesorería de la Federación, en forma electrónica mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los mismos, salvo que se esté en alguno de los supuestos de excepción regulados en la Ley de Tesorería de la Federación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, o bien, que la Secretaría autorice que se efectúe de manera distinta.

00000027

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Décimo. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, continuará durante el ejercicio fiscal 2021 con el análisis y revisión del anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Primero. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en su carácter de instancia técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, dará seguimiento a la implementación del Anexo Transversal Anticorrupción para el presente ejercicio fiscal, para lo cual deberá elaborar un informe anual de ejecución y seguimiento del mismo con base en la metodología presentada para el ejercicio fiscal 2021. Dicho informe deberá presentarse a la Cámara de Diputados.

Décimo Segundo. La Secretaría realizará durante el ejercicio fiscal 2021 el análisis y revisión de la metodología utilizada para la conformación del anexo transversal referente a los recursos para las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Tercero. Los proyectos que reciban recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberán contar con la participación de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de considerar su opinión en cuanto a su factibilidad.

Décimo Cuarto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá reportar en su página de Internet, las acciones que está implementando el Gobierno Federal para la mitigación y adaptación al cambio climático. La información deberá ser reportada en formato de datos abiertos y actualizada de manera trimestral.

Décimo Quinto. Los aprovechamientos que se obtengan del entero de recursos a la Tesorería de la Federación que realicen las universidades e instituciones públicas de educación superior respecto de recursos federales no ejercidos en ejercicios fiscales anteriores al 2021, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a proyectos de inversión en infraestructura educativa a cargo de universidades e instituciones públicas de educación superior.

Décimo Sexto. Las dependencias y entidades, respecto de los fideicomisos que se extinguirían, o bien, de los mandatos y análogos públicos que se darían por terminados, en términos de lo señalado en el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto, para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos, sin perjuicio de que, con cargo a su presupuesto autorizado, puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos, cuando así corresponda, en tanto emiten las referidas disposiciones.

Décimo Séptimo. Las dependencias y entidades, así como entidades federativas, que reciben recursos para la atención de los desastres naturales, continuarán siendo las responsables de la aplicación de los mismos para los fines para los cuales fueron otorgados, mediante el seguimiento que le den a la ejecución de las obras y acciones que estas contraten y al cumplimiento del calendario de ejecución en los términos y plazos establecidos. Asimismo, en la contratación de las obras de reconstrucción, los ejecutores deberán prever el establecimiento de medidas de mitigación que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas.

Décimo Octavo. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.

00000028



Décimo Noveno. La Secretaría, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, podrá asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante ésta durante el ejercicio fiscal 2020, así como durante el presente ejercicio, con el propósito de impulsar la inversión pública en el país. Lo anterior sujeto a las disposiciones específicas que, en su caso, emita la Secretaría.

Vigésimo. Se eliminará la etiqueta realizada en el Ramo 12 "Salud" del Programa P020. Acción 448 "Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia" con un presupuesto de \$330,641,100, en virtud de que en el Ramo 20 "Bienestar" se encuentra etiquetado presupuesto bajo el Programa U012 "Programa de apoyo para refugios especializados para las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos".

El presupuesto de la acción 448 del Programa P020 del Ramo 12, deberá ser asignado a las acciones propias contenidas en el Programa P020. "Programa de salud materna, sexual y reproductiva", contenidas en el Anexo Transversal 13, en los siguientes términos:

ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 141. CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD MATERNA Y NEONATAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DE FORMA INTEGRAL PARA TODAS LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, DURANTE LA ETAPA PREGESTACIONAL, EL CONTROL PRENATAL, EL PARTO, EL PUERPERIO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A PERSONAS RECIEN NACIDAS Y LA PREVENCIÓN DE DÉFECTOS EN EL NACIMIENTO	555.693.293
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 144. DISMINUIR EL RITMO DEL CRECIMIENTO DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS PARA LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	330.077.904
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 146. DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	343.943.590
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS ADOLESCENTES DISFRUTEN DE UNA VIDA SEXUAL SATISFACTORIA, SALUDABLE Y SIN RIESGOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN MATERIA DE ANTICONCEPCIÓN Y DE SALUD SEXUAL	126.323.890
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 287. CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA EJERZA SU DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, EL NÚMERO Y EL ESPARCIMIENTO DE SUS HIJOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	125.483.809
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 312. ATENCIÓN A CÁNCER PULMONAR EN MUJERES	3.565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 313. ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES CON ASMA	3.565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 405. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN TODO EL PAÍS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	281.168.510
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 338. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO Y METASTÁSICO	39.125.930

Vigésimo Primero. Los ejecutores de gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.

No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación Individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

00000029



ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

RAMOS AUTÓNOMOS		134,904,757,546
Gasto Programable		
01	Poder Legislativo	14,816,605,390
	Cámara de Senadores	4,080,778,000
X	Cámara de Diputados	8,282,000,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390
03	Poder Judicial	71,299,339,460
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,090,436,565
	Consejo de la Judicatura Federal	63,178,622,895
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,030,280,000
22	Instituto Nacional Electoral	26,819,801,594
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,879,905,810
41	Comisión Federal de Competencia Económica	598,670,029
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	905,335,647
49	Fiscalía General de la República	17,275,099,816
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA		7,746,100,001
	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,746,100,001
RAMO: 32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		2,883,619,680
	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,883,619,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS		1,246,242,755,522
Gasto Programable		
02	Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292
04	Gobernación	5,853,226,701
05	Relaciones Exteriores	8,121,231,865
06	Hacienda y Crédito Público	20,228,539,183
07	Defensa Nacional	112,557,168,656
08	Agricultura y Desarrollo Rural	49,291,453,404
09	Comunicaciones y Transportes	55,919,591,344
10	Economía	6,538,472,433
11	Educación Pública	337,851,440,847
12	Salud 1/	145,414,570,947
13	Marina	35,476,715,511
14	Trabajo y Previsión Social	23,799,853,830
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16,620,344,244
18	Medio Ambiente y Recursos Naturales	31,348,192,349
18	Energía	47,050,243,165
20	Bienestar	191,724,999,417
21	Turismo	38,613,394,661
27	Función Pública	1,389,004,630
31	Tribunales Agrarios	800,879,640
36	Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,668,472
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,986
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028
45	Comisión Reguladora de Energía	253,346,972
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,797,597
47	Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953
48	Cultura	13,985,117,395

00000030



C: RAMOS GENERALES		3,430,649,780,272
Gasto Programable		
19	Aportaciones a Seguridad Social ^{1/}	951,026,481,285
23	Provisiones Salariales y Económicas	127,486,744,341
25	Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,454,347,981
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,842,880,397
Gasto No Programable		
24	Deuda Pública	541,094,614,451
28	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	921,402,840,917
29	Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
30	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,096,200,000
34	Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO		1,275,212,396,584
Gasto Programable		
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,525,285,432
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	901,687,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		1,133,301,449,660
Gasto Programable		
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,598,071,166
TVV	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	417,145,392,655
Gasto No Programable		
	Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:	171,557,985,839
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,319,871
TVV	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	29,799,665,968
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.		935,184,669,265
GASTO NETO TOTAL		5,295,736,200,000

1/ Incluye recursos dentro del programa presupuestario U012.- "Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud", para cubrir el pago de las provisiones que permitan mantener la homologación salarial del personal que fue regularizado y formalizado, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33.

2/ Los recursos relativos a los Laudos y Prestaciones que no estén directamente vinculadas a obligaciones decretadas en materia de seguridad social no serán cubiertas con cargo a los recursos del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social".

3/ Incluye 12'163,204.00 que serán transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020, por el que se emitió el "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado el 20 de julio de 2010.

ANEXO 2. GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL (pesos) */

Gasto Corriente Estructural	2,490,876,855,284
-----------------------------	-------------------

*/ La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 3. GASTOS OBLIGATORIOS (millones de pesos)*/

Provisiones para Gastos Obligatorios	4,203,006.3
Provisiones para Gastos Obligatorios con Pensiones y Jubilaciones	5,267,094.8

*/ La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 4. EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (millones de pesos)

En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	0.0
---	-----

00000031



ANEXO 5. COMPROMISOS PLURIANUALES (millones de pesos)

	MONTO
Dependencias y Entidades (Recursos Fiscales)	43,514.81
Entidades de Control Directo	42,306.75
Empresas Productivas del Estado	307,193.61
Poder Judicial	2,304.91
Instituto Nacional Electoral	1,434.87
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	104.75

ANEXO 5.A. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (millones de pesos)

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3o. del Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de asociación público-privada, asciende a la cantidad de \$42,735.6 millones, de los cuales para el periodo 2021 se tiene estimado un monto de \$10,761.9 millones.

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	ENTIDAD FEDERATIVA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN ¹	MONTO DE INVERSIÓN 2021 ²	PAGO ANUAL ESTIMADO 2021 ³
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		43,838.9	345.9	10,761.9
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		3,807.5	266.1	0.0
Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla	Veracruz	3,807.5	266.1	0.0
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		22,717.3	0.0	7,081.8
Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes	Puebla	1,054.7	0.0	116.8
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí)	Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí	1,976.1	0.0	745.3
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa)	Tabasco y Veracruz	2,246.3	0.0	724.8
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Matahuila - Saltillo) para el periodo 2017-2027	Nuevo León	1,710.0	0.0	892.3
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Pirámides-Tulancingo-Pachuca) para el periodo 2017-2027	Estado de México e Hidalgo	2,172.3	0.0	604.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo) para el periodo 2017-2027	Coahuila y Nuevo León	2,337.0	0.0	416.0
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Texcoco-Zacatepec) para el periodo 2017-2027	Estado de México, Tlaxcala y Puebla	1,470.1	0.0	682.1
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga-Tapachula)	Chiapas	3,881.8	0.0	994.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche-Mérida)	Campeche y Yucatán	1,864.9	0.0	636.6
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí-Matahuila)	San Luis Potosí	1,688.4	0.0	788.5
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico-Ciudad Victoria)	Tamaulipas	2,095.7	0.0	651.0
SECRETARÍA DE TURISMO		1,188.7	79.8	0.0
Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa	Sinaloa	1,188.7	79.8	0.0
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		7,799.9	0.0	1,147.1
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit	Nayarit	1,654.3	0.0	536.5

Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas	Chiapas	1,874.5	0.0	610.6
Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León**	Nuevo León	2,101.5	0.0	0.0
Construcción del Hospital General Regional de 280 camas en Tepic, Estado de México**	Estado de México	2,169.6	0.0	0.0
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO		8,325.6	0.0	2,553.0
Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México***	Ciudad de México	1,753.9	0.0	0.0
Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán	Yucatán	1,149.8	0.0	293.4
Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Guría Urgell en Villahermosa, Tabasco	Tabasco	1,361.2	0.0	413.7
Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit	Nayarit	1,388.5	0.0	635.5
Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México	Ciudad de México	2,672.2	0.0	1,210.4
TOTAL		43,838.9	345.9	10,761.9

Cifras con IVA a pesos de 2021.

** Este Proyecto se encuentra rescindido y en proceso de impugnación por parte del Desarrollador.

*** El Contrato del proyecto se rescindió, sin embargo, el proyecto se incluyó en el Documento de Planeación 2021.

Montos de inversión contratados.

1/ Monto total estimado en gasto de inversión del sector privado en infraestructura. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tiene una inversión de SECTUR por 400.1 mdp y de FONADIN por 185 mdp.

2/ Inversión estimada prevista por el sector privado para el 2021. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tienen prevista una inversión de SECTUR y de FONADIN.

3/ Pagos anuales estimados por el Sector Público. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios, por lo anterior no hay pagos programados por parte del Sector Público.

Para los proyectos de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se consideran pagos anuales desde el inicio del proyecto, toda vez que la ejecución y operación comienzan simultáneamente.

ANEXO 6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (pesos)

6.A. Monto autorizado para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	9,360,367,214	0	9,360,367,214

6.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	717,727,705,720	349,293,583,364	1,067,021,269,084

6.C. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	727,088,072,934	349,293,583,364	1,076,381,636,298

6.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	610,670,114,789	510,799,895,147	223,196,769,893

6.E. Monto máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	285,502,038,896	199,702,388,302	133,651,928,141

6.F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa

	Inversión Física (Amortizaciones)	Costo Financiero	Suma
Comisión Federal de Electricidad	16,482,003,489	10,314,662,039	26,796,665,528

Nota: Para estos anexos los totales pueden no sumar respecto al total debido al redondeo.

00000033



ANEXO 7. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

		Incremento a las percepciones	Creación de plazas	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
		I	II	III	
Ramos Administrativos					
02	Oficina de la Presidencia de la República	14,603,293	0	2,701,029	17,304,322
04	Gobernación	94,565,585	0	25,503,898	120,069,483
05	Relaciones Exteriores	35,176,099	0	9,971,238	45,147,335
06	Hacienda y Crédito Público	393,743,111	0	106,975,789	500,718,900
07	Defensa Nacional	1,369,372,604	1,040,255,517	642,985,200	3,052,613,621
08	Agricultura y Desarrollo Rural	194,041,397	0	62,773,328	256,814,725
09	Comunicaciones y Transportes	171,575,625	0	73,378,312	244,953,937
10	Economía	51,272,292	0	22,633,389	73,905,681
11	Educación Pública	2,268,451,389	0	2,311,331,432	4,579,782,821
12	Salud	746,077,534	6,566,139,280	162,792,320	7,475,009,134
13	Marina	375,828,453	0	300,256,215	676,082,668
14	Trabajo y Previsión Social	46,414,158	0	18,108,630	64,522,788
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44,946,161	0	18,839,414	63,785,575
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	160,495,565	0	92,252,004	252,747,569
18	Energía	39,099,597	0	3,269,975	42,369,572
20	Bienestar	42,338,121	0	19,693,693	62,031,814
21	Turismo	20,033,228	0	7,030,151	27,063,379
27	Función Pública	36,064,610	0	4,817,834	40,882,444
31	Tribunales Agrarios	15,201,240	0	5,322,424	20,523,664
36	Seguridad y Protección Ciudadana	743,377,657	0	217,887,765	961,265,432
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3,469,070	0	292,838	3,761,908
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	142,235,906	0	81,870,052	224,105,958
45	Comisión Reguladora de Energía	4,212,438	0	336,445	4,548,883
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	4,316,706	0	183,200	4,500,906
47	Entidades no Sectorizadas	49,740,606	0	14,898,133	64,638,739
48	Cultura	134,644,753	0	14,405,595	149,050,349
Ramos Generales					
23	Provisiones Salariales y Económicas *	10,136,054,546	1,562,958,022	3,043,181,090	14,742,203,658

* Para efectos de control presupuestario y eficiencia del gasto, la administración de estos recursos se considera en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas.

ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	MONTO
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	541,094,514,451
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	171,557,985,639
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,000
Total	723,898,501,190



ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	215	737
15,000	30,000	245	1,061
30,000	50,000	276	1,382
50,000	100,000	308	1,705
100,000	150,000	337	2,033
150,000	250,000	383	2,454
250,000	350,000	414	2,764
350,000	450,000	446	2,934
450,000	600,000	475	3,253
600,000	750,000	491	3,423
750,000	1,000,000	538	3,745
1,000,000		567	3,913

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	342	169	3,050	2,368
15,000	30,000	424	215	3,384	2,538
30,000	50,000	509	254	3,895	3,050
50,000	100,000	590	293	4,741	3,551
100,000	150,000	678	342	5,586	4,231
150,000	250,000	765	382	6,434	5,076
250,000	350,000	931	464	7,454	5,586
350,000	450,000	1,013	509	8,128	6,077
450,000	600,000	1,189	590	9,659	7,278
600,000	750,000	1,356	678	10,997	8,298
750,000	1,000,000	1,518	765	12,355	9,307
1,000,000		1,611	847	13,869	10,487

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

00000035



ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		111,474,967,485
04 Gobernación		14,942,762
	Conducción de la política interior	14,942,762
08 Agricultura y Desarrollo Rural		5,182,753,182
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	248,150,202
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,245,338,332
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	219,235,137
	Producción para el Bienestar	3,374,999,986
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	95,029,514
09 Comunicaciones y Transportes		2,282,492,083
	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	975,800,000
	Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,228,692,083
	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	80,000,000
10 Economía		144,000,000
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	144,000,000
11 Educación Pública		15,308,819,121
	Educación para Adultos (INEA)	90,106,492
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	766,050,361
	Normar los servicios educativos	101,550,645
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	8,942,351,568
	Programa de Becas Elisa Acuña	200,572,889
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	1,017,635,340
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	3,317,156,000
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	296,223,958
	La Escuela es Nuestra	577,171,750
12 Salud		8,015,244,696
	Rectoría en Salud	9,800,000
	Prevención y control de enfermedades	41,497,762
	Salud materna, sexual y reproductiva	15,716,608
	Fortalecimiento a la atención médica	295,544,083
	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	7,651,686,242
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		490,781,835
	Procuración de justicia agraria	235,894,303
	Programa de Atención de Conflictos Agrarios	32,937,531
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,350,000
	Programa Nacional de Reconstrucción	217,600,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,234,159,785
	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	40,950,000
	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	408,035,510
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	285,835
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	42,666,319
	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	209,217,857
	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	204,011,889
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	328,992,374
19 Aportaciones a Seguridad Social		4,913,719,671
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,913,719,671
20 Bienestar		60,010,144,730
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	116,092,785
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	35,357,069,374
	Sembrando Vida	24,536,982,591

00000036



33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10,130,458,058
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,516,596,075
FAM Asistencia Social	2,613,861,983
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	18,174,449
Proteger, promover y difundir los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y atender asuntos de personas indígenas privadas de su libertad.	18,174,449
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	35,243,171
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	35,243,171
47 Entidades no Sectorizadas	3,633,887,159
Actividades de apoyo Administrativo	159,617,980
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,931,158
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	926,916,198
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,718,081
48 Cultura	60,146,784
Educación y cultura indígena	60,146,784

ANEXO 11. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (millones de pesos)

Vertiente	Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva	MONTO
	Total	336,227.6
Competitividad		31,025.4
	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	31,025.4
	Agricultura y Desarrollo Rural	31,025.4
	Fertilizantes	1,912.0
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	10,961.8
	Producción para el Bienestar	13,500.0
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,428.5
	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	3,223.1
Medio Ambiente		2,035.8
	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	2,035.8
	Agricultura y Desarrollo Rural	119.5
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	119.5
	Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,916.2
	Forestal	1,515.3
	Protección al medio ambiente en el medio rural	400.9
	Desarrollo Regional Sustentable	142.2
	PROFEPA	206.3
	Vida Silvestre	52.4
Educativa		52,907.2
	Programa de Educación e Investigación	52,907.2
	Agricultura y Desarrollo Rural	8,416.8
	Colegio de Postgraduados	1,479.0
	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)	110.6
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)	1,302.9
	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	455.5
	Universidad Autónoma Chapingo	3,068.9
	Educación Pública	46,490.4
	Desarrollo de Capacidades Educación	15,277.0
	Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	20,120.3
	Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	10,055.1
	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	1,038.0
Social		117,959.7
	Programa de atención a la pobreza en el medio rural	112,645.7
	Relaciones Exteriores	75.0
	Atención a migrantes	75.0

00000037

Bienestar	108,936.8
Atención a la población agraria	108,936.8
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	80,218.4
Sembrando Vida	28,718.4
Entidades no Sectorizadas	3,633.9
Atención a la población indígena y atomexicana (INPI)	3,633.9
Programa de Derecho a la Alimentación	3,387.9
Agricultura y Desarrollo Rural	3,387.9
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,240.8
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.	2,147.1
Programa de apoyo a la adquisición de leche	1,768.9
Agricultura y Desarrollo Rural	1,768.9
Adquisición de leche nacional	1,768.9
Programa de atención a las mujeres en situación de violencia	157.2
Bienestar	157.2
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF	157.2
Infraestructura	66,496.4
Programa de infraestructura en el medio rural	66,496.4
Comunicaciones y Transportes	4,593.0
Infraestructura	4,593.0
Mantenimiento de Caminos Rurales	4,593.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,183.0
IMTA	201.2
Infraestructura Hidroagrícola	470.8
Programas Hidráulicos	1,510.9
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Salud	55,232.5
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	55,232.5
Salud	41,335.9
Salud en población rural	41,335.9
Desarrollo de Capacidades Salud	536.1
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)	40,799.7
Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	40,799.7
Aportaciones a Seguridad Social	13,896.6
IMSS-BIENESTAR	13,607.8
Seguridad Social Cañeros	289.0
Agraria	154.3
Programa para la atención de aspectos agrarios	154.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	154.3
Atención de aspectos agrarios	154.3
Archivo General Agrario	154.3
Administrativa	9,416.3
Gasto Administrativo	9,416.3
Agricultura y Desarrollo Rural	8,573.0
ASERCA	153.6
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	15.9
CONAPESCA	584.3
CDNAZA	59.0
Dependencia SADER	3,692.6
FEESA	5.7
FIRCO	255.1
INCA RURAL	32.1
SENASICA	1,628.0
SIAP	91.6
SNICS	55.1
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,042.5
Dependencia SEDATU	2,042.5
Tribunales Agrarios	800.9
Tribunales Agrarios	800.9



ANEXO 11.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Entidad	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Aguascalientes	22.3
Baja California	30.3
Baja California Sur	27.8
Campeche	53.4
Coahuila	49.5
Colima	25.2
Chiapas	107.0
Chihuahua	73.1
Ciudad de México	3.7
Durango	55.8
Guanajuato	68.4
Guerrero	65.2
Hidalgo	50.7
Jalisco	106.7
Estado de México	45.6
Michoacán	117.1
Morelos	34.8
Nayarit	64.0
Nuevo León	49.7
Oaxaca	47.3
Puebla	66.6
Querétaro	26.3
Quintana Roo	27.0
San Luis Potosí	55.8
Sinaloa	227.1
Sonora	91.4
Tabasco	57.2
Tamaulipas	81.6
Tlaxcala	13.2
Veracruz	105.4
Yucatán	48.5
Zacatecas	44.0
Total	1,939.8

ANEXO 12. PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (pesos)

Ramo	Unidad Responsable	Recursos Fiscales	Recursos Propios	MONTO
Total		86,746,886,615	15,973,906,444	102,720,793,059
05	Relaciones Exteriores	2,300,000	0	2,300,000
K00	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo	2,300,000		2,300,000
08	Agricultura y Desarrollo Rural	4,948,320,562	247,600,000	5,195,920,562
A11	Universidad Autónoma Chapingo	2,320,298,466	3,600,000	2,323,898,466
D00	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	418,098		418,098

00000039

61c97d4c966f552e2601e1ee88541005a2d5a71466d4bd67f7f0811e4be4ec14



/ZC	Colegio de Postgraduados	1,404,763,850	24,000,000	1,428,763,850
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	1,222,840,348	220,000,000	1,442,840,348
09	Comunicaciones y Transportes	200,088,108	0	200,088,108
A00	Instituto Mexicano del Transporte	136,447,482		136,447,482
JZN	Agencia Espacial Mexicana	63,640,626		63,640,626
10	Economía	381,480,297	1,078,024,370	1,439,504,667
K2H	Centro Nacional de Metrología	150,424,611	74,952,674	225,377,285
K8V	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial		199,418,615	199,418,615
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor		4,230,920	4,230,920
LAU	Servicio Geológico Mexicano	211,055,686	799,422,181	1,010,477,847
11	Educación Pública	42,853,958,696	1,922,944,874	44,776,903,570
511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	8,509,002,547		8,509,002,547
514	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	650,593,845		650,593,845
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	1,495,532		1,495,532
611	Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios	1,098,175		1,098,175
A00	Universidad Pedagógica Nacional	107,303,477		107,303,477
A2M	Universidad Autónoma Metropolitana	3,697,704,258	45,343,161	3,743,047,419
A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	14,874,159,889	961,898,255	15,836,059,144
B00	Instituto Politécnico Nacional	4,728,719,242		4,728,719,242
K00	Universidad Abierta y a Distancia de México	28,368,047		28,368,047
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	21,701,730	199,437	21,901,167
L4J	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	2,479,220,067	667,822,212	3,147,042,279
L6H	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	91,085,910	105,153,170	196,239,080
L8K	El Colegio de México, A.C.	598,560,445	138,933,165	737,493,610
M00	Tecnológico Nacional de México	5,983,126,402		5,983,126,402
MEY	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	98,741,319		98,741,319
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	983,077,809	3,594,474	986,672,283
12	Salud	7,628,713,021	279,355,645	7,908,068,667
160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	29,595,178		29,595,178
610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	3,927,369,067		3,927,369,067
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	6,275,448	598,540	6,873,988
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	158,144,966	4,712,240	162,857,206
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	26,356,762	723,710	27,080,472
N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	354,978		354,978
NAW	Hospital Juárez de México	230,392,370	100,000	230,492,370
NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	105,428,703		105,428,703
NBD	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"	249,877,047	17,938,680	267,815,727
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	223,858,343	12,580,795	236,439,138



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	11,733,372	3,030,362	14,763,734
NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	7,062,036	570,000	7,632,036
NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán	133,538,660	5,300,000	138,838,660
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	1,481,879	384,302	1,866,181
NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapalapa	6,739,887	1,727,024	8,466,911
NBV	Instituto Nacional de Cancerología	124,959,179		124,959,179
NCA	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	186,974,103	30,525,966	219,500,069
NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	232,000,029		232,000,029
NCE	Instituto Nacional de Geriátrica	49,079,913	8,020,000	57,099,913
NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	382,184,036	10,860,084	393,144,120
NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	195,538,532	28,855,941	224,394,473
NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	111,319,955	5,878,746	117,198,701
NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	281,010,132	21,107,381	302,117,513
NDE	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	229,451,791	23,684,787	253,136,578
NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra	162,191,654	2,233,989	164,425,643
NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	483,775,445	70,822,115	564,597,560
NEF	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.		29,600,984	29,600,984
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	59,921,358		59,921,358
13	Marina	14,700,000	0	14,700,000
100	Secretaría	14,700,000		14,700,000
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	368,905,935	200,000,000	568,905,935
RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	201,234,605	200,000,000	401,234,605
RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	167,671,330		167,671,330
18	Energía	1,128,732,954	6,130,544,053	7,259,277,007
211	Dirección General de Energías Limpias	249,195,071		249,195,071
TDK	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	301,687,391	771,022,662	1,072,710,053
T00	Instituto Mexicano del Petróleo		5,014,598,154	5,014,598,154
T0Q	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	577,850,492	344,923,237	922,773,729
21	Turismo	17,082,719	0	17,082,719
A00	Instituto de Competitividad Turística	17,082,719		17,082,719
23	Provisiones Salariales y Económicas	2,229,800,000	0	2,229,800,000
411	Unidad de Política y Control Presupuestario	2,229,800,000		2,229,800,000
36	Seguridad y Protección Ciudadana	66,492,606	0	66,492,606
E00	Centro Nacional de Prevención de Desastres	66,492,606		66,492,606
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028	3,718,076,366	30,291,180,394
90A	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	62,320,527	9,400,821	71,721,348
90C	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	191,490,360	21,487,290	212,977,650
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	195,200,817	29,931,754	225,132,571

00000041

DIARIO
DE LA FEDERACIÓN

90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	192,893,046	96,103,088	288,995,134
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	198,395,792	52,896,659	251,292,451
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	116,901,899	45,484,480	162,386,379
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	392,591,713	15,517,291	408,109,004
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	485,563,721	34,119,623	519,683,344
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	279,897,779	38,568,975	318,466,754
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	188,037,078	7,040,114	195,077,192
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	198,829,334	35,277,477	232,106,811
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	318,841,054	6,036,338	324,877,392
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	20,187,829,182	2,000,000	20,189,829,182
90Y	CIATED, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	284,040,288	308,255,078	592,295,366
91A	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.		1,114,168,783	1,114,168,783
91C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	323,594,235	35,621,787	359,216,022
91E	El Colegio de la Frontera Sur	371,064,604	42,343,189	413,407,793
91I	El Colegio de Michoacán, A.C.	151,704,429	3,420,230	155,124,659
91K	El Colegio de San Luis, A.C.	119,855,205	12,000,000	131,855,205
91M	INQITEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación	0	884,116,213	884,116,213
91O	Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos	88,795,415	224,544,221	311,339,636
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	282,788,573	63,822,150	346,610,723
91S	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	190,521,680	4,826,708	195,348,388
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	348,539,826	35,200,000	383,739,826
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	144,375,194	103,254,541	247,629,735
92U	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	314,876,462	371,920,319	686,796,781
92W	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	562,052,486	72,987,672	635,040,158
92Y	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	386,103,329	47,731,365	433,834,694
48	Cultura	129,993,838	0	129,993,838
D00	Instituto Nacional de Antropología e Historia	129,993,838		129,993,838
49	Fiscalía General de la República	116,163,434	45,000,000	161,163,434
SKC	Instituto Nacional de Ciencias Penales	116,163,434	45,000,000	161,163,434
	Instituto Mexicano del Seguro Social	0	757,692,364	757,692,364
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		757,692,364	757,692,364
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,050,417	40,498,969	147,549,386
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,050,417	40,498,969	147,549,386
	Comisión Federal de Electricidad	0	1,554,169,802	1,554,169,802
TVV	Comisión Federal de Electricidad		1,554,169,802	1,554,169,802

00000042



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		128,353,630,307
01 Poder Legislativo		6,000,000
	Actividades derivadas del trabajo legislativo	6,000,000
	H. Cámara de Senadores	6,000,000
04 Gobernación		324,908,141
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,184,184
	Planeación demográfica del país	7,452,000
	Protección y defensa de los derechos humanos	7,289,877
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	10,000,000
05 Relaciones Exteriores		17,000,000
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	12,000,000
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
	Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,000,000
06 Hacienda y Crédito Público		4,000,000
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
07 Defensa Nacional		128,629,277
	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,629,277
08 Agricultura y Desarrollo Rural		7,832,883,210
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,288,281,033
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	2,192,351,374
	Fertilizantes	669,199,999
	Producción para el Bienestar	3,374,999,996
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	308,050,808
09 Comunicaciones y Transportes		5,098,686
	Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	5,098,686
10 Economía		2,688,209,243
	Actividades de apoyo administrativo	209,243
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	1,152,000,000
	Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares	1,536,000,000
11 Educación Pública		20,936,860,464
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	761,087,588
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	33,294,278
	Políticas de igualdad de género en el sector educativo	2,000,774
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	7,984,242,470
	Programa de Becas Elisa Acuña	1,311,150,059
	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8,096,947
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,544,088,350
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	8,292,890,000
12 Salud		5,026,554,886
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	21,025,858
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	167,899,178
	Atención a la Salud	1,500,060,984
	Prevención y atención contra las adicciones	51,846,013
	Programa de vacunación	449,308,724
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	404,229,242
	Prevención y control de enfermedades	4,835,657
	Salud materna, sexual y reproductiva	2,026,829,971
	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	400,519,282

00000043

13 Marina		6,860,000
	Sistema Educativo naval y programa de becas	6,860,000
14 Trabajo y Previsión Social		10,007,612,280
	Procuración de justicia laboral	40,000,000
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,958,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	9,942,652,330
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,578,843,392
	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2,454,668
	Programa de Vivienda Social	1,973,123,488
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	59,265,236
	Programa Nacional de Reconstrucción	544,000,001
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		137,244,658
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	335,652
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	71,110,531
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	65,798,475
18 Energía		3,367,864
	Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	99,760
	Actividades de apoyo administrativo	3,118,104
	Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	150,000
19 Aportaciones a Seguridad Social		328,650
	Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	328,650
20 Bienestar		72,040,443,179
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	278,536,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,684,509,023
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	59,460,978,928
	Sembrando Vida	9,189,881,120
	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos	405,003,761
21 Turismo		6,098,235
	Planeación y conducción de la política de turismo	6,098,235
22 Instituto Nacional Electoral		70,818,217
	Gestión Administrativa	1,100,000
	Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	28,626,923
	Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	3,902,800
	Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	28,090,829
	Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	7,951,681
	Vinculación con la sociedad	686,002
	Tecnologías de información y comunicaciones	479,982
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		42,581,639
	Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres	28,920,571
	Actividades de apoyo administrativo	13,661,058
36 Seguridad y Protección Ciudadana		3,518,236
	Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	3,518,236
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		6,162,370,696
	Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	113,583,708
	Becas de posgrado y apoyos a la calidad	5,048,786,988

00000044



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

40 Información Nacional Estadística y Geográfica	204,429,778
Producción y difusión de información estadística y geográfica	204,429,778
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	9,262,907
Actividades de apoyo administrativo	9,262,907
45 Comisión Reguladora de Energía	220,000
Regulación y permisos de electricidad	80,000
Regulación y permisos de Hidrocarburos	60,000
Actividades de apoyo administrativo	100,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,010,029,931
Atención a Víctimas	7,772,233
Actividades de apoyo administrativo	12,789,871
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8,248,938
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	444,583,330
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	355,349,561
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	171,286,998
48 Cultura	22,072,092
Desarrollo Cultural	18,453,477
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	3,618,615
49 Fiscalía General de la República	77,386,646
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	69,282,154
Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales	482,099
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	2,952,657
Promover la formación profesional y capacitación del capital humano	1,344,384
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
18 Energía "	210,362
Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	11,779
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	195,362
Actividades de apoyo administrativo	2,584
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	537
Instituto Mexicano del Seguro Social "	22,677,285,518
Prevención y control de enfermedades	2,390,434,065
Servicios de guardería	13,090,398,979
Atención a la Salud	7,196,452,474
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "	600,716,214
Equidad de Género	52,873,440
Prevención y control de enfermedades	547,842,774
Petróleos Mexicanos "	11,720,000
Actividades de apoyo administrativo	11,720,000
Comisión Federal de Electricidad "	4,407,000
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	467,000
Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión	120,000
Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica	2,130,000
Comercialización de energía eléctrica y productos asociados	500,000
Prestación de servicios corporativos	415,000
Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios	91,000
Actividades de apoyo administrativo	494,000
Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	190,000

1/ El presupuesto no suma en el total, por ser recursos propios.

00000045

ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		203,637,953,713
04 Gobernación		138,262,478
	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	138,262,478
05 Relaciones Exteriores		129,029,646
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	129,029,646
11 Educación Pública		16,145,980,752
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	6,634,312,000
	Educación para Adultos (INEA)	265,337,225
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	55,381,089
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,035,270,580
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	6,387,393,976
	Programa de Becas Elisa Acuña	501,432,473
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	246,853,299
12 Salud		11,599,743,467
	Asistencia social y protección del paciente	510,876,623
	Atención a la Salud	8,105,994,063
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	101,325,926
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	120,787,284
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	454,004,404
	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	25,767,978
	Programa Nacional de Reconstrucción	333,333,333
	Salud materna, sexual y reproductiva	893,714,498
	Servicios de asistencia social integral	1,053,938,358
14 Trabajo y Previsión Social		13,265,530,814
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,959,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	13,240,570,864
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,296,714,743
	Programa de Vivienda Social	1,183,874,093
	Programa Nacional de Reconstrucción	1,112,840,650
19 Aportaciones a Seguridad Social		4,994,004,761
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,994,004,761
20 Bienestar		151,290,834,280
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
	Desarrollo integral de las personas con discapacidad	31,048,573
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	128,587,525,190
	Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	15,683,785,707
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	278,535,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,638,471,929
	Sembrando Vida	3,775,873,435
	Servicios a grupos con necesidades especiales	294,059,097
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		32,107,591
	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos	18,285,242
	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	13,822,349
47 Entidades no Sectorizadas		3,633,887,159
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,931,158
	Actividades de apoyo administrativo	159,617,980
	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	926,916,198
	Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,716,081
	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
48 Cultura		60,146,784
	Educación y cultura indígena	60,146,784
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		51,711,239
	Atención a Personas con Discapacidad	51,711,239

00000046


ANEXO 15. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		8,972,603,511
04 Gobernación		973,764
12 Salud		6,417,827
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,784,728
	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	1,784,728
18 Energía		325,689,974
	Secretaría de Energía	249,195,071
	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	76,094,903
	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	400,000
Petróleos Mexicanos		169,502,476
	Pemex Exploración y Producción	134,502,476
	Pemex Transformación Industrial	35,000,000
Comisión Federal de Electricidad		8,468,234,742
	CFE Consolidado*	8,468,234,742

* Incluye la inversión financiada de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

ANEXO 16. RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		70,274,272,931
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,452,373
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,452,373
09 Comunicaciones y Transportes		153,980,808
	Reconstrucción y Conservación de Carreteras	153,980,808
11 Educación Pública		86,746,701
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	60,517,612
	Programa de Becas Elisa Acuña	5,814,985
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	19,356,407
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	1,057,697
12 Salud		344,189,989
	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12,083,089
	Vigilancia epidemiológica	332,106,920
13 Marina		13,005,275
	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	13,005,275
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		606,804,849
	Programa de Vivienda Social	197,312,349
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	409,492,500
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		5,635,519,362
	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	3,435,359
	Investigación científica y tecnológica	186,074,497
	Protección Forestal	1,307,090,815
	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	153,103,383
	Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas	98,590,123
	Regulación Ambiental	61,713,629
	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,198,556
	Gestión integral y sustentable del agua	771,770,475
	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable	16,930,215
	Actividades de apoyo administrativo	11,544,780
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3,419,696

00000047

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	41,174,485
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	142,221,082
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	356,388,479
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	1,569,322,223
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	825,598,409
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias	34,943,175
18 Energía	368,209,397
Actividades de apoyo administrativo	1,846,311
Conducción de la política energética	46,549,787
Coordinación de la política energética en electricidad	4,125,684
Coordinación de la política energética en hidrocarburos	7,431,802
Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	59,260,742
Fondos de Diversificación Energética	249,195,071
21 Turismo	650,000
Planeación y conducción de la política de turismo	650,000
23 Provisiones Salariales y Económicas	8,927,349,813
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	8,727,349,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
36 Seguridad y Protección Ciudadana	141,077,927
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	141,077,927
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	259,103,342
Investigación científica, desarrollo e innovación	127,914,952
Becas de posgrado y apoyos a la calidad	131,188,390
47 Entidades no Sectorizadas	30,000,000
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	30,000,000
Petróleos Mexicanos	207,912,560
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	198,912,560
Mantenimiento de infraestructura	11,000,000
Comisión Federal de Electricidad	53,498,270,536
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	4,158,500
Servicio de transporte de gas natural	52,931,600,000
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	3,976,392
Proyectos de infraestructura económica de electricidad	99,821,856
Mantenimiento de infraestructura	458,713,786

ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		440,175,024,339
07 Defensa Nacional		1,957,089,768
	Sistema educativo militar	1,957,089,768
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,798,851,473
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	1,393,851,472
	Producción para el Bienestar	405,000,001
10 Economía		288,000,000
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	288,000,000
11 Educación Pública		263,433,686,218
	Educación Básica	16,949,471,719
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	857,564,471
	Producción y transmisión de materiales educativos	34,518,273
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	1,149,075,571
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	11,177,939,458

00000048

Programa de Becas Elisa Acuña	48,918,204
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,380,022
La Escuela es Nuestra	3,315,667,500
Educación para Adultos (INEA)	345,408,220
Educación Media Superior	109,655,637,946
Servicios de Educación Media Superior	45,672,572,182
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,593,707
Normalización y certificación en competencias laborales	922,038,859
Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	36,538,126
Programa de Becas Elisa Acuña	141,248,613
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,649,539
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)	26,016,817
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	33,171,560,000
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,702,332
Apoyos a centros y organizaciones de educación	81,070,031
Educación Física de Excelencia	198,647,730
Educación Superior	135,452,362,453
Servicios de Educación Superior y Posgrado	51,211,093,845
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5,453,147,671
Proyectos de infraestructura social del sector educativo	160,000,000
Programa de Becas Elisa Acuña	3,723,701,405
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	131,879,497
Jóvenes Escribiendo el Futuro	8,649,900,390
Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,808
Subsidios para organismos descentralizados estatales	62,590,423,529
Apoyos a centros y organizaciones de educación	444,729,114
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	687,413,194
Posgrado	1,376,214,101
Programa de Becas Elisa Acuña	131,514,653
Subsidios para organismos descentralizados estatales	1,244,699,448
12 Salud	1,132,893,114
Prevenición y atención contra las adicciones	831,115,872
Prevenición y atención de VIH/SIDA y otras ITS	301,877,242
13 Marina	639,541,505
Sistema Educativo naval y programa de becas	639,541,505
14 Trabajo y Previsión Social	20,370,109,022
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,370,109,022
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	250,672
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	250,672
19 Aportaciones a Seguridad Social	5,819,268,050
Seguro de Enfermedad y Maternidad	5,819,268,050
20 Bienestar	111,155,257
Instituto Mexicano de la Juventud	111,155,257
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	1,123,959,556
Servicios de educación normal en la Ciudad de México	1,123,959,556
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104,546,093,782
Educación Básica	98,335,294,863
FAM Infraestructura Educativa Básica	80,147,492
FONE Servicios Personales	89,192,745,415
FONE Otros de Gasto Corriente	2,579,905,778
FONE Gasto de Operación	3,583,057,808
FONE Fondo de Compensación	2,578,034,394
FAETA Educación de Adultos	321,403,977

ALTO OFICIAL
LA FEDERACIÓN

00000049

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

	Educación Media Superior	1,604,318,105
	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	695,397,361
	FAETA Educación Tecnológica	908,920,744
	Educación Superior	4,608,480,814
	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	4,608,480,814
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	40,681,358
	Investigación científica, desarrollo e innovación	40,681,358
47	Entidades no Sectorizadas	203,901,542
	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	203,901,542
48	Cultura	12,174,892
	Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	12,174,892
	Instituto Mexicano del Seguro Social	44,307,844,167
	Prevención y control de enfermedades	359,209,583
	Atención a la Salud	43,948,634,584
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	2,387,423,952
	Prevención y Control de Enfermedades	384,543,494
	Atención a la Salud	2,002,880,466

1. Programa operado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		791,684,563,878
04 Gobernación		115,917,216
	Atención a refugiados en el país	4,057,050
	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	68,684,001
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	588,400
	Registro e Identificación de Población	42,609,765
05 Relaciones Exteriores		4,000,000
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	4,000,000
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,652,359,947
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	870,686,810
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	781,673,138
11 Educación Pública		160,323,930,090
	Apoyos a centros y organizaciones de educación	3,381,414,844
	Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)	26,016,817
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	28,537,248,000
	Educación Física de Excelencia	79,459,092
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	3,830,251,903
	Educación para Adultos (INEA)	165,195,236
	Expansión de la Educación Inicial	825,000,000
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	55,381,099
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,593,707
	La Escuela es Nuestra	12,280,250,000
	Normalización y certificación en competencias laborales	922,038,869
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	3,175,164,708
	Producción y transmisión de materiales educativos	127,845,454
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,969,879
	Programa de Becas Elisa Acuña	141,600,318
	Programa de Cultura Física y Deporte	1,301,983,761
	Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	185,124,285



Programa Nacional de Inglés	392,465,653
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	81,651,951
Servicios de Educación Media Superior	45,672,572,182
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,702,332
12 Salud	61,482,216,455
Atención a la Salud	17,354,238,499
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	30,252,036,185
Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	134,433,268
Investigación y desarrollo tecnológico en salud	89,525,075
Prevención y atención contra las adicciones	200,905,918
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,589,941
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	29,455,528
Programa de Atención a Personas con Discapacidad	18,552,944
Programa de vacunación	2,042,312,382
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	65,184,153
Salud materna, sexual y reproductiva	535,188,244
Servicios de asistencia social integral	758,636,338
14 Trabajo y Previsión Social	4,482,788
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	4,482,788
19 Aportaciones a Seguridad Social	6,279,382,662
Programa IMSS-BIENESTAR	6,279,382,662
20 Bienestar	2,598,623,674
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	12,921,184
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,585,702,490
22 Instituto Nacional Electoral	6,519,294
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	6,375,294
Tecnologías de información y comunicaciones	144,000
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	41,022,701,440
Becas para la población atendida por el sector educativo	174,297,208
Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	200,000,000
Servicios de educación básica en la Ciudad de México	40,648,404,232
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	458,679,780,522
FAETA Educación de Adultos	210,765,775
FAETA Educación Tecnológica	4,044,346,765
FAM Asistencia Social	9,113,711,331
FAM Infraestructura Educativa Básica	9,429,116,762
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	695,397,361
FASSA	27,129,158,388
FONE Fondo de Compensación	10,741,809,976
FONE Gasto de Operación	14,929,407,533
FONE Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402
FONE Servicios Personales	371,636,439,228
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	5,902,735
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes	5,902,735
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	8,050,000
Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión	8,050,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,359,854,300
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,359,854,300

00000051



48 Cultura	45,209,771
Desarrollo Cultural	22,314,300
Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales	1,837,870
Servicios Cinematográficos	815,254
Servicios educativos culturales y artísticos	20,242,346
49 Fiscalía General de la República	71,629,568
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	67,144,796
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	1,159,420
Instituto Mexicano del Seguro Social	52,303,800,273
Atención a la Salud	34,613,369,750
Prestaciones sociales	227,875,101
Prevención y control de enfermedades	4,372,158,443
Servicios de guardería	13,090,368,979
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	15,720,223,144
Atención a la Salud	11,326,977,795
Prevención y control de enfermedades	1,785,380,503
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	2,607,864,846

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		209,372,405,069
4 Gobernación		595,932,505
	Conducción de la política interior	33,851,388
	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	57,746,001
	Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México	36,709,581
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,164,164
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	137,021,715
	Protección y defensa de los derechos humanos	30,439,656
6 Hacienda y Crédito Público		170,010,527
	Detección y prevención de ilícitos financieros	170,010,527
7 Defensa Nacional		6,249,181,059
	Derechos humanos	59,548,410
	Programa de Igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,529,277
	Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública	4,103,913,604
	Sistema educativo militar	1,957,089,768
11 Educación Pública		104,735,218,129
	Atención al deporte	575,314,715
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	24,878,570,000
	Desarrollo Cultural	3,662,051,212
	Educación Física de Excelencia	264,863,640
	Educación para Adultos (INEA)	30,035,497
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	7,225,210,914
	La Escuela es Nuestra	8,841,760,000
	Producción y distribución de libros y materiales culturales	114,276,825
	Producción y transmisión de materiales educativos	824,079,723
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,969,879
	Programa de Becas Elisa Acuña	3,569,718,382
	Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,808
	Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	210,700,973
	Servicios de Educación Media Superior	4,906,500,923
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	6,628,352,813
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	8,475,012,228
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	493,706,597

00000052



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

12 Salud	2,374,982,950
Prevenición y atención contra las adicciones	1,413,830,829
Prevenición y control de enfermedades	32,451,661
Salud materna, sexual y reproductiva	928,700,460
13 Marina	6,451,720,602
Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	5,503,731,387
Sistema Educativo naval y programa de becas	947,989,215
14 Trabajo y Previsión Social	20,603,109,622
Capacitación para Incrementar la Productividad	1,000,000
Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales	1,000,000
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	1,000,000
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,600,109,022
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	6,551,880,000
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	6,551,880,000
20 Bienestar	9,221,811,959
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,711,456
Actividades de apoyo administrativo	19,215,700
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,308
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	211,077,754
Sembrando Vida	8,958,271,742
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12,752,432,999
FAETA Educación Tecnológica	772,709,731
FASP	7,695,616,328
FORTAMUN	4,294,106,940
36 Seguridad y Protección Ciudadana	37,789,711,013
Actividades de apoyo administrativo	7,777,556,414
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	239,228,409
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	27,951,271,330
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1,811,654,860
48 Cultura	1,866,414,305
Desarrollo Cultural	1,785,511,331
Educación y cultura indígena	60,146,784
Programa de Apoyos a la Cultura	20,756,190

ANEXO 20. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

	MONTO
Previsiones Salariales	13,790,309,730
Situaciones laborales supervenientes	13,790,309,730
Provisiones Económicas	9,013,390,953
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	8,727,348,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
Comisiones y pago a CECOBAN	86,041,140
Provisiones Salariales y Económicas	14,742,203,658
Desarrollo Regional	50,000,000
Provisión para la Armonización Contable	50,000,000
Otras Provisiones Económicas	71,000,000,000
Programa de Separación Laboral	1,000,000,000
Subsidios a las Tarifas Eléctricas	70,000,000,000
Gastos asociados a Ingresos petroleros	18,890,840,000
TOTAL	127,486,744,341

00000053

61c97d4c966f552e2601e1ee88541005a2d5a71466d4bd67f7f0811e4be4ec14

**ANEXO 21. RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)**

	MONTO
Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	16,262,547,484
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,497

ANEXO 22. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)

	MONTO
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE):	408,057,264,139
Servicios Personales	371,636,439,228
Otros de Gasto Corriente ^{1/}	10,748,607,402
Gasto de Operación	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,809,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	109,501,268,964
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,409,852
Entidades	10,278,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ^{2/}	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ^{3/}	85,882,138,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,283,323,958
Asistencia Social	12,550,329,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,937
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,719,222,563
Educación Tecnológica	4,953,267,509
Educación de Adultos	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal ^{3/}	7,895,616,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	46,924,635,800
TOTAL ^{3/}	777,842,880,397

1/ Incluye recursos para las plazas subsidiadas a las entidades federativas incluidas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conforme a los registros que se tienen en las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público.

2/ La Ley de Coordinación Fiscal considera en la denominación de estos Fondos al Distrito Federal.

3/ Considera los recursos para dar cumplimiento al artículo 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir el 0.1 por ciento, con excepción del componente de servicios personales previsto en el FONE.

Con respecto a lo previsto en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a la Evaluación del Desempeño, no se considera transferencia de recursos al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), toda vez que la Unidad de Evaluación del Desempeño, en su carácter de unidad responsable del FIDEFAF, consideró que el patrimonio contable con que cuenta el mismo, resulta suficiente para efectuar la contratación de las evaluaciones externas de los Fondos de Aportaciones Federales, mandatadas en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

00000054

ANEXO 23. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ANEXO 23.1.1. LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (pesos)

Grupo	Tipo de Personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total ^{2/}	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando ^{1/}							
G	Secretario de Estado		111,785		28,406		140,191
H	Subsecretario		110,957		28,101		139,058
J	Jefe de Unidad	101,769	108,455	25,572	26,785	127,341	135,239
K	Director General	86,003	98,758	21,355	23,577	107,358	120,336
L	Director General Adjunto	69,184	82,553	17,747	20,534	86,931	103,087
M	Director	42,629	78,396	11,046	18,969	53,675	97,366
N	Subdirector	26,478	41,742	8,142	10,832	34,618	52,574
O	Jefe de Departamento	17,800	26,122	6,447	7,987	24,246	34,109
P	Personal de Enlace	9,373	17,058	4,911	6,254	14,284	23,311
Personal Operativo		7,229	10,582	9,271	10,207	16,500	20,789
Personal de Categorías:							
	Del Servicio Exterior Mexicano	11,072	90,075	5,150	22,092	16,222	112,167
	De Educación	318	70,176	12,142	52,723	12,459	122,899
	De las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines	9,936	52,979	14,873	26,984	24,809	79,962
	De Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	8,250	30,610	19,003	65,899	27,253	96,509
	De Seguridad Pública	11,585	38,246	10,178	52,534	21,783	90,780
	De Gobernación	14,229	21,814	12,828	14,675	27,057	36,489
	De las Fuerzas Armadas	6,971	114,229	7,670	27,352	14,641	141,581

1/ Las denominaciones de Secretario de Estado, Subsecretario y Jefe de Unidad son exclusivas de las Dependencias del Ejecutivo Federal. Los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades adoptan como denominación el de Director General, Vocal, Comisionado, etc., independientemente de que el rango tabular pudiera ser coincidente con el de las Dependencias para las denominaciones de uso exclusivo.

2/ La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos por sueldos y salarios, y por prestaciones ordinarias, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas. Los montos netos mensuales corresponden a la cantidad que perciben los servidores públicos, una vez aplicadas las disposiciones fiscales. Los montos indicados no incluyen las prestaciones extraordinarias. Los rangos de las remuneraciones del personal operativo y de categorías, varían conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos Colectivos de Trabajo.

ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida ^{1/}
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	112,122
Impuesto sobre la renta retenido (34%) * y deducciones de seguridad social	50,190
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	162,311
a) Sueldos y salarios:	161,058
i) Sueldo base	44,897
ii) Compensación garantizada	116,159
b) Prestaciones:	1,255
i) Prima quinquenal (antigüedad)	235
ii) Ayuda para despensa	985
iii) Seguro colectivo de retiro	35

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

1/ Corresponde a la remuneración en numerario sin considerar las prestaciones en especie.

00000055



ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

(pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,719,581
Impuesto sobre la renta retenido (34%) *	684,072
Percepción ordinaria bruta anual	2,403,653
a) Sueldos y salarios:	1,932,672
i) Sueldo base	538,764
ii) Compensación garantizada	1,393,908
b) Prestaciones:	470,981
i) Aportaciones a seguridad social	69,322
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE) 1/	20,330
iii) Prima vacacional	14,966
iv) Aguinaldo (sueldo base)	89,358
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	234,883
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	2,820
vii) Ayuda para despensa	11,820
viii) Seguro de vida institucional	27,057
ix) Seguro colectivo de retiro	425

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1/ Conforme a la Ley del ISSSTE se incluye esta prestación a partir de 2010.

ANEXO 23.2. CÁMARA DE SENADORES

ANEXO 23.2.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios ⁽¹⁾		Prestaciones ⁽¹⁾		Percepción ordinaria total ⁽¹⁾⁽²⁾	
			(Efectivo y Especie)			
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		104,673		25,322		129,995
Coordinador / Contralor / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	100,171	103,261	23,911	24,475	124,082	127,736
Director General	83,490	99,933	20,564	23,556	104,054	123,489
Jefe de Unidad	69,439	81,763	17,565	19,788	87,004	101,551
Director de Área	46,802	71,454	13,046	17,484	59,848	88,938
Subdirector de Área	33,283	45,859	10,179	12,355	43,462	58,224
Jefe de Departamento	22,878	32,128	9,599	11,083	32,477	43,211
<u>Personal de Servicio Técnico de Carrera</u>	12,239	45,960	7,022	11,257	19,261	57,217
<u>Personal operativo de confianza</u>	27,778	29,497	12,432	12,849	40,210	42,346
<u>Personal operativo de base</u>	6,328	17,479	33,943	38,858	40,271	58,137

1) La remuneración neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Cámara de Senadores, una vez aplicadas las disposiciones fiscales y deducciones de seguridad social.

2) En la Percepción Ordinaria Total se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de: aguinaldo y prima vacacional.

3) Los importes de las percepciones mensuales plasmadas en este documento, corresponden a los tabuladores vigentes para el ejercicio fiscal 2019, no contemplan ajustes por incrementos en la unidad de medida y actualización (UMA), ni efectos inflacionarios.

00000056



ANEXO 23.2.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida ^{1/}
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,175,479
Impuesto sobre la renta retenido ^{2/}	460,760
Percepción bruta anual	1,636,239
I. Percepciones ordinarias:	1,636,239
a) Sueldos y salarios:	1,338,292
i) Sueldo base ^{2/}	1,338,292
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	297,947
i) Aportaciones a seguridad social	4,378
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	
iii) Prima vacacional	
iv) Aguinaldo (sueldo base)	216,745
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida institucional	76,823
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de separación individualizado	
xii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	

^{1/} Cálculo obtenido conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

^{2/} Corresponde a las percepciones para 2019.

^{2/} Dieta.

ANEXO 23.2.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	79,273
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	32,252
Percepción ordinaria bruta mensual	111,524
I. Percepciones ordinarias:	111,524
a) Sueldos y salarios:	111,524
i) Sueldo base	111,524
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	
i) Prima quinquenal	
ii) Ayuda para despensa	
iii) Seguro colectivo de retiro	

Vigencia a partir de enero de 2020

00000057

ANEXO 23.2.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,559,943
Impuesto sobre la renta retenido * /	673,029
Percepción bruta anual	2,232,972
I. Percepciones ordinarias:	2,232,972
a) Sueldos y salarios:	1,812,396
i) Sueldo base	306,000
ii) Compensación garantizada	1,506,396
b) Prestaciones:	420,576
i) Aportaciones a seguridad social	61,644
ii) Ahorro solidario	19,896
iii) Prima vacacional	12,756
iv) Aguinaldo (sueldo base)	49,552
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	243,944
vi) Seguro de vida institucional	32,628
vii) Seguro colectivo de retiro	158

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.2.5. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA	104,673
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	46,350
Percepción bruta mensual	151,033
a) Sueldos y salarios:	151,033
i) Sueldo base	25,500
ii) Compensación garantizada	125,533

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.3. CÁMARA DE DIPUTADOS**ANEXO 23.3.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS (NETOS MENSUALES) (pesos)**

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
CÁMARA DE DIPUTADOS						
Personal de base:						
2		8,795		14,829		23,624
3		8,863		15,052		23,915
4		8,992		15,152		24,144
5		9,210		15,325		24,534
6		9,396		15,434		24,830
7		10,121		15,510		25,731
8		10,625		15,673		26,298
9		11,165		15,813		26,978
10		11,801		16,278		28,079
11		13,881		16,641		30,521
12		15,114		16,760		31,893
13		17,246		16,918		34,164

00000058



DIARIO OFICIAL
DE LA NACIÓN

Personal de base sindicalizado:					
2		5,795		23,724	32,519
3		8,863		24,033	32,897
4		8,992		24,165	33,157
5		9,210		24,391	33,601
6		9,396		24,530	33,926
7		10,121		24,723	34,844
8		10,625		24,775	35,400
9		11,165		24,921	35,086
10		11,801		25,510	37,311
11		13,881		25,823	39,703
12		15,114		26,015	41,128
13		17,246		26,302	43,547
14		17,754		26,427	44,181
15		17,846		26,446	44,293
16		19,261		26,627	45,888
17		20,113		26,739	46,852
18		21,968		27,027	49,016
Personal de confianza:					
0		3,869		9,354	13,223
00		5,483		9,465	14,948
2		8,785		13,628	22,423
3		8,863		13,786	22,659
4		8,992		13,873	22,865
5		9,210		14,008	23,218
6		9,396		14,095	23,491
7		10,121		14,246	24,367
8		10,625		14,307	24,932
9		11,165		14,431	25,596
10		11,801		14,804	26,606
11		13,881		15,157	29,037
12		15,114		15,369	30,483
13		17,246		15,548	32,794
14		17,754		15,608	33,362

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

CÁMARA DE DIPUTADOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		105,795		18,963		124,758
Secretario de Servicios/Contralor Interno/Coordinador de Comunicación Social		104,548		18,749		123,397
Director General	98,369	104,007	17,577	18,629	115,946	122,636
Secretario de Enlace		99,237		17,739		116,976
Homólogo a Director General		98,369		17,577		115,946
Director de Área y Homólogos	62,915	90,133	11,270	16,039	74,184	106,172
Subdirector de Área y Homólogos	42,489	57,214	7,820	10,277	50,309	67,491
Jefe de Departamento y Homólogos	29,202	35,232	5,522	6,465	34,724	41,697

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.

00000059



ANEXO 23.3.2.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,500		10,200		20,700
9		11,833		10,394		22,227
10		14,153		10,751		24,904
12		19,039		11,504		30,543
13		19,341		11,550		30,891
14		21,986		11,758		33,745
15		30,641		12,504		43,146

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.2.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Jefe de la Unidad		104,648		18,749		123,397
Director de Área		98,369		17,577		115,946
Secretario Técnico		65,249		11,624		76,873
Subdirector de Área		59,866		10,790		70,757
Coordinador		52,527		9,496		62,023
Especialista		38,231		7,025		45,257

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.

ANEXO 23.3.3.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,625		14,307		24,932
9		11,165		14,431		25,596
10		11,801		14,804		26,606
11		13,881		15,157		29,037
12		15,114		15,369		30,483
13		17,248		15,548		32,794
14		17,754		15,608		33,362

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

00000060



ANEXO 23.3.3.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Director General		104,007		18,829		122,836
Director de Área y Homólogos		90,133		18,039		108,172
Jefe de Departamento y Homólogos		35,232		6,465		41,697

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.
 LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE

ANEXO 23.3.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN DIPUTADO FEDERAL (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) (1)	1,150,738
Impuesto sobre la renta retenido (2)	408,877
Percepción Bruta Anual	1,559,415
I. Percepciones Ordinarias:	1,559,415
a) Sueldos y salarios:	1,264,538
i) Sueldo Base (3)	1,264,538
ii) Compensación Garantizada	
b) Prestaciones:	294,878
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Ahorro solidario (art. 100 ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	
iv) Aguinaldo	
v) Gratificación de fin de año	140,504
vi) Prima quinquenal	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida institucional	
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de Separación Individualizado	
xii) Apoyo económico para la adquisición de vehículo	
xiii) Otras prestaciones (4)	71,038
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago por riesgo y potencialización de seguro de vida	

(1) Corresponde a las percepciones 2020

(2) Conforme lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

(3) Dieta.

(4) Prestación I.S.R. de gratificación de fin de año.

00000061



ANEXO 23.4. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.4.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO	621,219	1,363,310	212,904	739,566	834,123	2,102,896
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		112,482		26,333		138,815
AUDITOR ESPECIAL		111,448		26,055		137,503
TITULAR DE UNIDAD		110,415		25,823		136,238
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	108,087	109,381	25,353	25,592	133,340	134,973
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	95,967	99,046	23,085	23,650	119,052	122,696
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	90,845	92,517	21,923	22,229	112,768	114,746
SECRETARIO TÉCNICO		81,600		20,238		101,838
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	57,422	61,518	15,520	16,255	72,942	77,773
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	41,887	44,515	12,387	12,848	54,271	57,363
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA						
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR JURÍDICO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR JURÍDICO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"		20,521		10,340		30,861
SECRETARIA PARTICULAR "A"		26,931		12,288		39,217
OPERADOR SUPERVISOR "A"	21,010	23,078	14,382	14,261	35,392	37,339
SECRETARIA PARTICULAR "B"		21,551		12,512		34,063
OPERADOR SUPERVISOR "B"		19,107		14,490		33,597
OPERADOR SUPERVISOR "C"		17,758		14,571		32,329
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA		16,628		14,649		31,277
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA		16,628		14,649		31,277
OPERADOR SUPERVISOR "D"		16,628		14,649		31,277
VIGILANTE DE LA ASF		16,628		14,649		31,277
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA		14,541		14,195		28,736
PERSONAL OPERATIVO DE BASE						
TÉCNICO SUPERIOR		11,416		24,706		35,852
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES		11,035		24,668		35,703
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS		10,712		24,533		35,245
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS		10,048		24,395		34,444
ESPECIALISTA TÉCNICO		9,683		24,290		33,973
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS		9,312		24,190		33,502
ESPECIALISTA HACENDARIO		8,962		24,101		33,063
TÉCNICO MEDIO		8,591		23,995		32,587
ANALISTA CONTABLE		8,210		23,893		32,103
TÉCNICO CONTABLE		7,823		23,779		31,602
TÉCNICO MEDIO CONTABLE		7,419		23,620		31,039
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE		7,020		23,465		30,485

1.- Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

3.- No se considera el incremento en la medida de fin de año para el personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

4.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de base, en términos del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, para el presente ejercicio fiscal.

5.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de confianza, en términos del Lineamientos para Otorgar Estímulos y Gratificación a los Servidores Públicos Operativos de Base y de Confianza de la ASF, para el presente ejercicio fiscal.

6.- En el ejercicio de los importes aquí señalados, se estará a lo dispuesto en las disposiciones aplicables, incluida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



ANEXO 23.4.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL (pesos)

TIPOS DE PERSONAL	Plazas	Pago extraordinario anual unitario
		Hasta
PERSONAL DE MANDO		
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1	
AUDITOR ESPECIAL	4	
TITULAR DE UNIDAD	5	
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	36	
DIRECTOR GENERAL AJUNTO	2	
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	137	
SECRETARIO TÉCNICO	3	
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	307	
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	476	
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA		
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	183	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	19	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	77	68,535
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	245	62,086
AUDITOR JURÍDICO "A"	92	62,086
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	90	62,086
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	153	57,147
AUDITOR JURÍDICO "B"	3	57,147
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	48	57,147
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"	1	54,769
SECRETARIA PARTICULAR "A"	15	67,328
OPERADOR SUPERVISOR "A"	2	38,597
SECRETARIA PARTICULAR "B"	36	56,815
OPERADOR SUPERVISOR "B"	10	34,876
OPERADOR SUPERVISOR "C"	25	33,614
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA	83	32,569
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA	13	32,569
OPERADOR SUPERVISOR "D"	10	32,569
VIGILANTE DE LA ASF	16	32,569
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	1	30,657
PERSONAL OPERATIVO DE BASE		
TÉCNICO SUPERIOR	37	45,750
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES	7	45,591
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS	7	45,136
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS	6	44,096
ESPECIALISTA TÉCNICO	7	43,549
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS	7	42,993
ESPECIALISTA HACENDARIO	4	42,465
TÉCNICO MEDIO	12	41,899
ANALISTA CONTABLE	26	41,338
TÉCNICO CONTABLE	36	40,732
TÉCNICO MEDIO CONTABLE	41	40,070
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE	51	39,410

1.- Los límites de percepción extraordinaria neta anual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

00000063

**ANEXO 23.4.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (pesos)**

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) ^{1/}	1,665,785
Impuesto sobre la renta retenido ^{2/}	685,536
Percepción bruta anual	2,351,321
I. Percepciones ordinarias:	2,351,321
a) Sueldos y salarios:	1,905,272
i) Sueldo base	450,663
ii) Compensación garantizada	1,454,609
b) Prestaciones:	446,049
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Prima vacacional	12,518
iii) Aguinaldo (sueldo base)	77,036
iv) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	247,249
v) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vi) Ayuda para despensa	10,620
vii) Seguro de vida institucional	32,199
viii) Seguro de gastos médicos mayores	
ix) Seguro de separación individualizado	
x) Revisión Médica	
xi) Vales de Despensa	
II. Percepciones extraordinarias:	0
a) Estímulo por Resultado de la Evaluación del Desempeño	

1/ Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social

2/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ANEXO 23.5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**ANEXO 23.5.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)****SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

DESCRIPCIÓN	NIVEL	Sueldos y salarios	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 127 CONSTITUCIONAL)	1		204,883.000
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		100,993.062
COORDINADOR	3		100,267
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		99,583
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL., SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE TRAMITE DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		98,839
SRIO. DE ACUERDO DE SALA	6		99,412
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	88,853	98,735
SRIO. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	88,570	98,411
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	9	87,749	97,499
SUBDIRECTOR GRAL.	10	88,214	98,016
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	88,711	98,016
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	88,214	98,016
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	87,759	97,510

00000064



SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE SALA	14		84,626
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	58,547	78,665
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	42,935	78,665
ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	42,935	64,609
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	18	42,935	64,569
ACTUARIO	19	38,702	47,443
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	32,620	47,003
SUBDIRECTOR DE AREA	21	42,935	47,003
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	36,359	37,775
JEFE DE DPTO. AYUDANTE DE COMEDOR	23		38,702
TAC JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	28,618	37,751
PROF. OPERATIVO	25	25,114	37,751
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	26	30,741	33,622
SECRETARIA	27	16,218	30,859
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	18,219	30,857
TÉCNICO OPERATIVO	29	16,218	30,857
CHOFER	30	15,205	30,857
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	15,205	30,857
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	16,218	28,618
OFICIAL DE SERVICIOS	33	13,843	18,218

ANEXO 23.5.2. LÍMITES DE LAS PERCEPCIONES (NETA TOTAL ANUAL) (pesos)
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL)	1		444,413	415,946	0
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		214,217	0	280,771
COORDINADOR	3		213,052	0	278,618
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		211,493	0	276,819
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL., SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		210,318	0	274,456
SRIO. DE ACUERDO DE SALA	6		207,818	0	276,087
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,396	205,996	0	274,005
SRIO. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	184,470	204,956	0	272,927
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	9	177,231	196,924	0	267,873
SUBDIRECTOR GRAL.	10	179,942	199,936	0	270,681
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	184,470	199,936	0	270,681
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	179,942	199,936	0	270,681
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	177,047	196,719	0	267,947
SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE SALA	14		172,260		228,690
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	114,208	159,418		211,323
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	79,483	159,418		211,323

00000065



ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	79,483	159,418	211,323
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	18	79,483	127,228	170,710
ACTUARIO	19	70,059	89,537	123,829
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	58,447	88,779	122,656
SUBDIRECTOR DE AREA	21	79,483	88,779	122,656
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	84,548	87,451	97,030
JEFE DE DPTO., AYUDANTE DE COMEDOR	23		70,059	100,501
TAC. JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	49,629	87,965	96,936
PROF. OPERATIVO	25	41,848	87,965	96,936
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	26	53,084	58,735	85,273
SECRETARIA	27	24,798	54,032	78,751
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	28,793	54,014	78,745
TÉCNICO OPERATIVO	29	24,798	54,014	78,745
CHOFER	30	22,344	54,014	78,745
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	22,344	54,014	78,745
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	24,798	49,629	73,162
OFICIAL DE SERVICIOS	33	19,567	24,796	42,348

ANEXO 23.5.3. REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (3RO TRANSITORIO) (pesos)

REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3º TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	MINISTRO (De conformidad con el artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional)
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,396,341
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,604,327
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,000,668
A) SUELDOS Y SALARIOS	3,588,845
I) SUELDO BASE	851,241
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,785,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	131,759
B) PRESTACIONES	791,906
I) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 LEY DEL ISSSTE)	0
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE). COMPENSACIÓN GARANTIZADA	588,114
V) GRATIFICACIÓN DEL FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	0
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	0
VII) AYUDA PARA DESPESA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,246
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	38,908
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	0
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	43,165
XIV) AYUDA DE ANTEOJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	639,917

N/A: No Aplicable.

00000066



ANEXO 23.6. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ANEXO 23.6.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
CONSEJERO	2		204,683
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		100,162
VISITADOR JUDICIAL A	5		99,814
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		150,083
TITULAR DE UNIDAD	6A		100,213
VOCAL, SRIO. EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	6B		100,547
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		100,554
JUEZ DE DISTRITO	7		136,762
SRIO. TÉCNICO, COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO	8A		100,582
DIRECTOR GRAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GRAL.	8		100,754
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	9		99,799
SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO	9B	90,205	100,228
SRIO. TÉCNICO AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	89,635	99,594
VISITADOR JUDICIAL B	10		99,065
SRIO. TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DE STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA	11	88,911	98,790
COORDINADOR DE ÁREAS, ADMINISTRADOR REGIONAL	12	79,868	91,344
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		79,019
DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISIÓN, SRIO. DE APOYO B	13		68,313
DELEGADO, SRIO. TRIBUNAL, ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		76,731
EVALUADOR	13B		74,352
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO, SRIO. DE JUZGADO	13C		70,929
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		68,313
SRIO. DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, ASESOR ESPECIALIZADO, SPS	15		65,592
SRIO. PARTICULAR DE SPS.	16		65,126
DEFENSOR PÚBLICO, ASESOR JURÍDICO	16A		62,575
ASESOR SPS, LÍDER DE PROYECTO, COORDINADOR TÉCNICO DE SPS	20	47,817	55,468
DELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		47,817
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDADO DE ARCHIVOS JUDICIALES	21B		47,323
SUBDIRECTOR DE ÁREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, COORDINADOR TÉCNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	37,728	45,659
SRIO. PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SRIO. PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		36,283
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y COORDINADOR DE MTTO. DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL	21C	30,806	35,928

00000067

LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS MENSUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDO Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, AUDITOR, DIGTAMINADOR, COORDINADOR TÉCNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	30,689	32,414
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		31,718
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	25,106	29,603
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		28,608
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2		25,634
SECRETARÍA	25B	22,491	
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAQUIGRAFÍA JUDICIAL PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, SECRETARÍA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	25		27,584
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		26,212
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		25,106
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		24,642
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	18,212	22,448
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARÍA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	28		22,063
TÉCNICO OPERATIVO	28B	16,218	20,338
ANALISTA A	29A		18,199
SECRETARÍA A, ANALISTA	29		17,840
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO	30		17,294
ANALISTA ADMINISTRATIVO	31		16,708
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		15,878
CHOFER	33A		15,205
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		14,792
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		14,229

ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETO ANUAL) (pesos)
SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CONSEJERO	2		444,413	415,946	0
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		214,178	0	290,784
VISITADOR JUDICIAL A	5		213,351	0	289,771
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		291,290	472,043	0
TITULAR DE UNIDAD	6A		209,407	0	288,935
VOCAL, SECRETARIO EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	6B		205,723	0	288,605
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		201,184	0	287,050
JUEZ DE DISTRITO	7		261,563	422,006	0
SECRETARIO TÉCNICO COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO	8A		195,862	0	286,027
DIRECTOR GENERAL, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GENERAL	8		169,472	0	284,347
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	9		185,472	0	287,789
SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO	9B	165,658	184,064	0	290,052
SECRETARIO TÉCNICO DE AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	168,803	187,559	0	288,154
VISITADOR JUDICIAL B	10		198,129	0	271,919
SECRETARIO TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DEL STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA	11	173,345	192,605	0	288,713
COORDINADOR DE ÁREAS, ADMINISTRADOR REGIONAL A	12	156,531	180,502		248,297
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		159,417		211,323

00000068



DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISOR, SECRETARIO DE APOYO B	13		130,778	180,285
DELEGADO, SECRETARIO DE TRIBUNAL, AGENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		150,175	204,459
EVALUADOR	13B		145,569	197,335
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO	13C		137,925	182,670
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		130,778	180,285
SECRETARIO DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, ASESOR ESPECIALIZADO SPS	15		124,831	172,604
SECRETARIO PARTICULAR DE SPS	15		123,812	171,288
DEFENSOR PÚBLICO, ASESOR JURÍDICO	16A		113,209	164,085
ASESOR SPS, LÍDER DE PROYECTO, COORDINADOR TÉCNICO DE SPS	20	87,174	103,451	144,424
DELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		87,174	124,097
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDO Y ARCHIVOS JUDICIALES	21B		88,800	122,782
SUBDIRECTOR DE ÁREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, COORDINADOR TÉCNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	65,257	82,437	118,362
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SECRETARIO PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		62,031	92,610
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL	21C	54,244	63,562	91,625
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, AUDITOR, DICTAMINADOR, COORDINADOR TÉCNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	51,995	54,998	82,463

LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		53,631		80,838
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	41,848	52,169		76,382
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		48,626		73,155
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2	41,878			65,745
SECRETARIA	25B	36,931			73,155
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAOUGRAFA JUDICIAL PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	25		46,700		70,605
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		40,803		67,184
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		41,848		64,428
OFICIAL ADMIN., ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		40,803		63,274
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	28,792	38,685		57,882
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARIA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	28		35,639		56,982
TÉCNICO OPERATIVO	28B	24,748	32,737		52,943
ANALISTA A	29A		28,673		47,937
SECRETARIA A, ANALISTA	29		27,710		47,072
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMIN.	30		26,629		45,525
ANALISTA ADMIN.	31		25,464		43,882
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		23,517		40,919
CHOFER	33A		22,252		39,068
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		20,979		37,654
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		19,985		35,087

ANEXO 23.6.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (pesos)

	CONSEJERO
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA 2021	3,417,171
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,583,567
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA 2020	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS:	3,525,393
I) SUELDO BASE	620,230
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,816,858
III) PRESTACIONES NOMINALES	68,307
B) PRESTACIONES	835,428
I) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	63,006
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 103 DE LEY DEL ISSSTE)	20,330
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	586,115
V) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	N/A
VI) PRIMA QUINQUENAL	18,360
VII) AYUDA PARA DESPENSA	N/A
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,248
IX) SEGURO DE VIDA COLECTIVO	145
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	13,821
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) AYUDA ECONÓMICA PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES	N/A
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	7,929
XIV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE / PADRE	N/A
C) PAGO POR RIESGO	639,917

ANEXO 23.7. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.7.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		202,885
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3		153,154
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN., COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		100,702
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		100,016
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F. Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	6		99,329
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	89,432	99,369
SECRETARIO DE TESIS	8		98,949
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	89,054	98,949
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		88,385
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	80,347	89,908
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIAIA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	71,720	91,785
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	55,856	75,073
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		61,703
SRIO. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TICS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SRIO. TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SRIO. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SRIO. AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	41,136	59,023

00000070

SRIO. AUXILIAR	16		46,037
ACTUARIO	17		45,390
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	18	37,100	44,915
ACTUARIO REGIONAL Y SRIO. DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19		40,995
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DPTO., SRIA. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	29,605	35,700
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	29,605	32,545
PROFESIONAL OPERATIVO	22	24,612	32,499
SRIA. DE MAGISTRADO REGIONAL Y SRIA. DE PONENCIA	23	27,442	31,749
SECRETARÍA	24	18,619	27,729
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	17,405	27,715
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	14,400	24,016
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	15,989	21,502
OFICIAL DE APOYO	28	14,400	21,502
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	13,380	15,391

ANEXO 23.7.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETOS ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		444,413	379,894	0
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3		313,560	429,409	0
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN., COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		220,869	0	277,818
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		218,960	0	275,735
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	6		217,257	0	273,658
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,180	205,755	0	272,658
SECRETARIO DE TESIS	8		201,852	0	269,586
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	181,666	201,852	0	269,586
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		198,569	0	267,618
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	161,761	184,487		241,332
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	142,586	184,851		246,962
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	107,545	150,132		196,828
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		120,051		158,963



SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
SRIQ. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TICS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SRIQ. TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SRIQ. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SRIQ. AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	75,000	113,905		151,399
SRIQ. AUXILIAR.	16		85,968		116,706
ACTUARIO	17		84,534		114,987
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICIALÍA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	18	85,982	83,458		113,726
ACTUARIO REGIONAL Y SRIQ. DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19		74,684		103,309
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DPTO., SRIA. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	51,358	63,592		88,661
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	51,358	56,916		80,267
PROFESIONAL OPERATIVO	22	41,659	56,866		80,159
SRIA. DE MAGISTRADO REGIONAL Y SRIA. DE PONENCIA	23	47,011	55,489		78,408
SECRETARIA	24	29,563	48,132		68,620
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	27,452	48,101		68,583
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	21,355	40,420		59,367
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	24,359	35,361		53,321
OFICIAL DE APOYO	28	21,355	35,361		53,321
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	19,474	23,364		38,288

ANEXO 23.7.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS MAGISTRADOS DE SALA SUPERIOR (pesos)

	MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR 2021
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,421,002
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,579,736
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS	3,532,889
I) SUELDO BASE	651,242
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,785,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	95,802
B) PRESTACIONES	839,447
I) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	63,006
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 DE ISSSTE)	20,330
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	586,115
V) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	NA
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	18,380
VII) AYUDA PARA DESPENSA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,246
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	146
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	25,769
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	NA
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0
XIV) AYUDA DE ANTEJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	628,402

00000072



ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANEXO 23.8.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANO						
CONSEJERO PRESIDENTE/CONSEJEROS ELECTORALES "	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
SECRETARIO EJECUTIVO	91,502	101,669	36,516	40,573	128,018	142,242

1/ Miembros permanentes del Consejo General del Instituto de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

ANEXO 23.8.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
1 Consejero Presidente, Consejeros Electorales	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
Secretario Ejecutivo	91,502	101,669	36,516	40,573	128,018	142,242
2 Titular del Órgano Interno de Control, Directores Ejecutivos, Titulares de Unidad Técnica, Titulares de Unidad (OIC) y puestos homólogos	91,477	101,642	36,540	40,601	128,018	142,242
3 Coordinadores del Registro Federal de Electores, Titulares de Unidad Técnica, Vocales Ejecutivos Locales, Directores de Área y puestos homólogos	90,427	100,475	36,689	40,769	127,116	141,240
4 Directores de Área, Coordinadores y puestos homólogos	89,757	99,730	37,359	41,510	127,116	141,240
5 Vocales Secretarios en J.L., Vocales Locales, Vocales Ejecutivos y Secretarios Distritales, Subdirectores de Área y puestos homólogos	45,656	59,571	13,952	29,955	59,609	89,526
6 Vocales Distritales, Jefes de Departamento y puestos homólogos	28,432	44,784	9,889	20,092	38,321	64,876
Personal operativo:						
7 Técnico Operativo	10,238	28,289	4,649	14,424	14,889	42,714

ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos	7,142		
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL GA1 AL GA2	7,142		13,300

Corresponde a la prestación de vales de fin de año del ejercicio 2020 para el personal técnico operativo, en razón de que es la única que se tiene la absoluta certeza de que lo recibirá.

El resto de las prestaciones que se otorgan, es para el personal que se hace acreedor a las mismas o bien, que pueden ejercer el derecho a su obtención. Por ejemplo, el apoyo que da para la adquisición de lentes, que se otorga cada tres años o el apoyo (becas) para estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Acumular todos los posibles conceptos puede generar una lectura equivocada, ya que se podría interpretar que son percepciones extraordinarias que efectivamente recibe el personal, cuando no es así.

Derivado del punto anterior, la H. Cámara de Diputados, la sociedad en general y los propios funcionarios del Instituto, podrían tener una percepción que no corresponde con la realidad.

00000073

**ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)****CONSEJERO PRESIDENTE / CONSEJEROS ELECTORALES**

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,928
Impuesto sobre la renta retenido * /	758,409
Percepción bruta anual	2,477,335
a) Sueldos y salarios:	2,008,448
i) Sueldo base	374,979
ii) Compensación garantizada	1,633,467
b) Prestaciones:	468,889
i) Aportaciones a seguridad social	40,153
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	12,956
iii) Prima vacacional	10,416
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	342,455
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,529
vi) Ayuda para despensa	0
vii) Seguro de vida institucional	37,859
viii) Seguro colectivo de retiro	101
ix) Seguro de gastos médicos mayores	23,319
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de Enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	131,537
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	45,502
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	177,039
a) Sueldos y salarios:	167,371
i) Sueldo base	31,248
ii) Compensación garantizada	136,122
b) Prestaciones:	9,668
i) Aportaciones a seguridad social	3,345
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,080
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	127
iv) Ayuda para despensa	0
v) Seguro de vida institucional	3,163
vi) Seguro colectivo de retiro	8
vii) Seguro de gastos médicos mayores	1,943
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

00000074


ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)
**DIARIO OFICIAL
DE LA PRESIDENCIA**
SECRETARIO EJECUTIVO

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,706,905
Impuesto sobre la renta retenido * /	742,754
Percepción bruta anual	2,449,659
a) Sueldos y salarios:	1,981,159
i) Sueldo base	334,476
ii) Compensación garantizada	1,646,683
b) Prestaciones:	468,500
i) Aportaciones a seguridad social	42,296
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	13,847
iii) Prima vacacional	9,291
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	336,721
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,611
vi) Ayuda para despensa	2,819
vii) Seguro de vida institucional	37,444
viii) Seguro colectivo de retiro	107
ix) Seguro de gastos médicos mayores	24,564
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.D REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021
(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LIQUIDA MENSUAL NETA	130,659
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	44,644
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	175,304
a) Sueldos y salarios:	165,097
i) Sueldo base	27,873
ii) Compensación garantizada	137,224
b) Prestaciones:	10,207
i) Aportaciones a seguridad social	3,525
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,137
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	134
iv) Ayuda para despensa	235
v) Seguro de vida institucional	3,120
vi) Seguro colectivo de retiro	8
vii) Seguro de gastos médicos mayores	2,047
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

00000075



ANEXO 23.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIARIO OFICIAL ANEXO 23.9.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

EN LA FORTALEZA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
PRESIDENTE DE LA CNDH		109,989		30,158		140,157
VISITADOR/A GENERAL, VISITADOR/A GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADOR/A GENERAL DE SRAJ, SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARIO/A EJECUTIVO/A		108,811		29,900		138,711
OFICIAL MAYOR		108,075		29,740		137,815
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		106,978		29,502		136,480
DIRECTOR/A GENERAL Y HOMÓLOGOS/AS	104,291	106,276	27,225	29,350	131,515	135,626
DIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	52,920	82,429	13,717	22,390	66,637	104,819
VISITADOR/A ADJUNTO/A	28,176	51,162	8,058	14,338	36,234	65,500
SUBDIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	28,176	51,162	8,058	14,338	36,234	65,500
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS/AS	27,130	35,243	7,672	10,502	34,802	45,745
Personal de Enlace u Operativo						
OPERATIVO/A	12,663	27,090	4,071	10,023	16,734	37,113

Este anexo refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales aplicables a las personas servidoras públicas durante 2021, en función del puesto que ocupen. Contemplan las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador/a.

A fin de cumplir con el desglose de remuneraciones que establece el artículo 75 Constitucional, se presentan los límites mínimos y máximos en términos netos por concepto de sueldos y salarios y de prestaciones, diferenciados por el tipo de servidores/as públicos/as a los que aplican los límites correspondientes.

ANEXO 23.9.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario Máximo
Total Puestos	1,779	
Personal de mando:	1,056	
PRESIDENTE DE LA CNDH	1	
VISITADOR/A GENERAL, VISITADOR/A GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADOR/A GENERAL DE SRAJ, SECRETARIO/A TÉCNICO/A DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARIO/A EJECUTIVO/A	11	
OFICIAL MAYOR	1	
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	
DIRECTOR/A GENERAL Y HOMÓLOGOS/AS	28	
DIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	129	19,695
VISITADOR/A ADJUNTO/A	523	15,163
SUBDIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	189	15,163
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS/AS	173	13,049
Personal Operativo	723	
OPERATIVO/A	723	25,490


ANEXO 23.9.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,716,463
Impuesto sobre la renta retenido	685,713
Percepción bruta anual	2,402,176
I. Percepciones ordinarias:	2,402,176
a) Sueldos y salarios:	1,910,735
Sueldo base	360,308
Compensación Garantizada	1,550,428
b) Prestaciones:	491,442
i) Aportaciones a seguridad social	63,328
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	53,076
iv) Gratificación de fin de año	321,547
v) Prima quinquenal	3,420
vi) Ayuda para despesa	3,600
vii) Seguro de vida	26,143
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago extraordinario	

ANEXO 23.10. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
ANEXO 23.10.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones		Percepción Ordinaria Total	
			(En efectivo y en especie)			
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Comisionada Presidenta de la Comisión		115,148		28,096		143,244
Comisionado		114,312		27,930		142,242
Jefe de Unidad		113,402		26,837		140,239
Director General/ Titular del Órgano Interno de Control		111,153		27,082		138,235
Director Ejecutivo	74,962	109,514	20,806	27,584	95,768	137,098
Coordinador General	46,920	78,760	14,174	21,248	61,093	100,006
Subcoordinador General	32,990	44,386	11,238	13,315	44,228	57,701
Coordinador de Área		29,551		10,630		40,181
Jefe de Área	21,447	28,475	9,061	10,286	30,508	38,761
Personal de Enlace	12,757	19,034	7,385	8,505	20,142	27,539
Personal Operativo	8,095	9,706	9,391	9,702	17,486	19,408

00000077

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.10.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA COMISIONADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (pesos)

	Remuneración Comisionada Presidenta COFECE
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido	714,582
Percepción bruta anual	2,433,508
I. Percepciones ordinarias:	2,433,508
a) Sueldos y salarios:	1,981,600
i) Sueldo base	234,158
ii) Compensación garantizada A	1,747,442
b) Prestaciones:	451,908
i) Aportaciones a seguridad social	47,171
ii) Ahorro solidario	15,221
iii) Prima vacacional	6,505
iv) Aguinaldo (sueldo base)	38,166
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	283,474
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	1,535
vii) Ayuda para despesa	7,533
viii) Vales de despesa	23,031
ix) Seguro de vida institucional	28,931
x) Seguro colectivo de retiro	340

ANEXO 23.10.3. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos			
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP10-OP1A ^{1/}	17		229,500
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP10-OP1A ^{2/}	17		62,815

1/ Corresponde a la prestación denominada medidas de fin de año (vales de despesa).

2/ Corresponde a la prestación denominada ayuda para útiles escolares (efectivo).

ANEXO 23.11. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ANEXO 23.11.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Banda Salarial (Nivel)	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidente	27		104,780		38,464		143,244
Comisionado	26		103,970		38,272		142,242
Coordinador Ejecutivo	25		103,499		37,742		141,240
Titular de Unidad	25		102,747		37,491		140,239
Secretario Técnico del Pleno	25		102,747		37,491		140,239
Coordinador General	25		102,553		36,684		139,237
Director General	23 23	91,269	101,410	33,143	38,825	124,412	138,235
Director General Adjunto	21 22	65,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Investigador	21 22	65,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Director de Área	18 21	34,607	71,909	15,156	27,135	49,764	99,045
Subdirector de Área	16 18	21,605	42,643	10,588	18,649	32,192	59,293
Jefe de Departamento	14 16	14,975	29,644	8,576	12,585	23,551	42,229
Técnico	10 17	6,358	33,838	6,237	17,625	12,595	51,261
Enlace	11 13	8,121	16,162	6,371	8,816	14,492	24,780

- La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones por Sueldos y Salarios, y por Prestaciones, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas.

- No se incluyen prestaciones en las que el personal pueda o no ser acreedor a éstas y ejercer su derecho, tales como: ayuda para anteojos, apoyo de guardería o preescolar y apoyos institucionales para que realicen estudios que les permitan incrementar o concluir su formación académica, o especializarse en temas relacionados con sus funciones.

- La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020.

00000078

00000078



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.11.2. LÍMITES DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS NETAS TOTALES (pesos)

Nivel	Banda Salarial		Pago Extraordinario Anual Unitario*	
	Nivel			
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidente		27		
Comisionado		26		
Coordinador Ejecutivo		25		82,356
Titular de Unidad		25		75,847
Secretario Técnico del Pleno		25		75,847
Coordinador General		25		75,089
Director General	23	23	59,600	66,872
Director General Adjunto	21	22	39,045	50,540
Investigador	21	22	39,045	50,540
Director de Área	18	21	20,764	43,146
Subdirector de Área	16	18	90,740	179,103
Jefe de Departamento	14	16	62,894	124,504
Técnico	10	17	26,705	141,273
Enlace	11	13	34,107	67,882

*El pago de la percepción extraordinaria incluye:

- El importe correspondiente al estímulo al desempeño sobresaliente, contenida en el artículo 34, inciso c), de las Disposiciones por las que se establece el Sistema de Servicio Profesional del Instituto Federal de Telecomunicaciones y;
- El importe correspondiente al pago extraordinario por riesgo, que el Instituto podrá otorgar al personal con nivel de enlace, técnico, jefe de departamento y subdirector, que realice labores en campo, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad.

Podrá autorizarse y realizarse el pago de la percepción extraordinaria únicamente en un monto que, sumado a la percepción ordinaria, no supere el monto de la remuneración del Presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 127, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 23.11.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (pesos)

Nivel Jerárquico: Comisionado (Grado 27)	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ANUAL TOTAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido ^v	725,287
Percepción bruta anual	2,444,213
I. Percepciones ordinarias:	2,444,213
a) Sueldos y salarios:	1,954,099
i) Sueldo base	247,744
ii) Compensación garantizada	1,716,356
b) Prestaciones:	480,114
i) Aportaciones de seguridad social	49,908
ii) Ahorro Solidario	16,104
iii) Prima Vacacional	27,279
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,786
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	190,706
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	0
vii) Ayuda para despesa	5,376
viii) Vales de despesa	14,278
ix) Seguro de vida institucional	27,498
x) Seguro Colectivo de Retiro	337
xi) Seguro de Gastos Médicos Mayores	20,030
xii) Seguro de Separación Individualizado	0
xiii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	92,809
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Componente salarial variable asociado a la gestión del desempeño	

1/ El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

00000079

ANEXO 23.12. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**ANEXO 23.12.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (NETOS MENSUALES) (pesos)**

Tipo de personal	Nivel		Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando y Enlace / Homólogos								
Comisionado Presidente/Comisionados		HB1		107,708		26,290		133,999
Secretario		KB2		98,273		22,834		121,108
Director General/Jefe de Ponencia/Contralor		KA4		92,125		21,501		113,625
Secretario de Ponencia	MD1	MD5	70,589	86,674	16,656	20,457	87,246	107,132
Director de Área	MC2	MC5	59,336	74,709	14,007	17,534	73,343	92,243
Subdirector de Área	NC2	MB2	37,872	53,261	9,368	12,520	47,260	65,782
Jefe de Departamento/ Consultor/Auditor	OC3	NB2	23,975	32,784	6,961	8,418	30,935	41,203
Enlace/Proyectista/Asesor	PC1	OB6	14,756	21,857	5,269	6,620	20,025	28,477
Secretaria	PC3	OD3	16,824	24,338	5,836	7,102	22,660	31,439
Chofer	OB1	OB5	13,378	20,896	5,158	6,391	18,536	27,287
Auxiliar Administrativo	PA1	PA5	11,774	16,377	4,597	5,431	16,370	21,808

1/ La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020

ANEXO 23.12.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE / COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA	1,614,506
Impuesto sobre la renta retenido*	640,925
Percepción ordinaria bruta anual	2,255,431
a) Sueldos y salarios:	1,818,477
i) Sueldo base	284,006
ii) Compensación garantizada	1,534,471
b) Prestaciones:	436,954
i) Aportaciones a seguridad social	62,053
ii) Ahorro solidario	18,460
iii) Prima vacacional	101,027
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,501
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	191,809
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vii) Ayuda para despensa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	13,639
ix) Seguro colectivo de retiro	425.4

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020

00000030



ANEXO 23.12.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE A LA EDUCACIÓN COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	105,952
Impuesto sobre la renta retenido* y deducciones de seguridad social	46,793
Percepción ordinaria bruta mensual	152,745
a) Sueldos y salarios:	151,540
i) Sueldo base	23,887
ii) Compensación garantizada	127,653
b) Prestaciones:	1,205
i) Prima quinquenal (antigüedad)	285
ii) Ayuda para despesa	885
iii) Seguro colectivo de retiro	35

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 23.13. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 23.13.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Fiscales	33,703	110,786	7,490	28,214	41,193	139,000
Policía de Investigación	27,035	48,678	5,589	10,654	32,624	59,343
Analistas	11,738	45,733	3,453	10,197	15,191	55,930
Auxiliares	13,203	25,621	3,613	6,868	16,816	32,489
Peritos	29,227	47,777	6,128	11,990	35,355	59,767
Personal Profesional						
Mando Sustantivo	17,922	109,950	5,185	27,740	23,108	137,690
Pilotos	28,911	37,492	6,302	9,476	35,213	46,969
Apoyo Aéreo	13,499	31,173	3,867	7,592	17,366	38,766
Protección a Personas	33,728	53,225	6,608	10,799	40,336	64,024
Apoyo a la Investigación	47,592	54,501	9,694	13,942	57,286	68,442
Personal Técnico						
De Protección a Instalaciones Estratégicas	13,281	28,859	3,612	7,603	16,893	36,462
Personal Administrativo						
Mando Administrativo	17,922	109,950	5,185	27,740	23,108	137,690
Administradores	17,287	56,185	4,377	14,675	21,664	80,860
Técnicos Especializados	9,604	17,191	3,742	6,147	13,346	23,338
Operativo Confianza	11,728	13,827	9,212	11,002	20,940	24,829
Operativo Base	11,806	13,034	9,191	10,818	20,997	23,852

00000081



ANEXO 23.13.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA ANUAL NETA	1,573,251
Impuesto sobre la renta retenido	678,234
Percepción ordinaria mensual	2,351,495
a) Sueldos y salarios:	1,914,432
i) Sueldo base	433,656
ii) Compensación garantizada	1,480,776
b) Prestaciones:	437,063
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Ahorro Solidario	
iii) Prima vacacional	12,046
iv) Aguinaldo (sueldo base)	73,372
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	250,548
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despesa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	27,045
ix) Seguro colectivo de retiro	425

ANEXO 23.13.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	110,786
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social*	46,851
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	160,421
a) Sueldos y salarios:	159,536
i) Sueldo base	36,136
ii) Compensaciones adicionales por servicios especiales	123,398
b) Prestaciones:	885
i) Prima quinquenal (antigüedad)	
ii) Ayuda para despesa	885
iii) Seguro colectivo de retiro	
*Deducciones personales de seguridad social y seguros	2,784

ANEXO 23.14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

ANEXO 23.14.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidencia del Instituto		109,457		13,003		122,460
Vicepresidencia		109,457		13,003		122,460
Dirección General		106,757		12,595		119,352
Coordinación General / Dirección General Adjunta	86,044	104,147	10,240	12,201	98,284	116,348
Dirección de Área	48,924	85,409	6,206	10,129	55,130	95,538
Subdirección de Área	30,100	45,620	4,197	5,770	34,297	51,390
Jefatura de Departamento	20,947	29,898	3,403	4,162	24,350	34,060
Personal de Enlace	14,297	18,672	2,780	3,174	17,077	21,846
Personal Operativo	8,354	11,478	5,095	5,183	13,449	16,661

Las percepciones ordinarias netas incluyen los ingresos que reciben los servidores públicos independientemente de su periodicidad o fecha de pago. Asimismo, contempla la aplicación de las disposiciones fiscales y de seguridad social.


ANEXO 23.14.2 LÍMITES DE PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

Tipo de personal	Pago Extraordinario Anual Unitario Máximo
Presidencia del Instituto	
Vicepresidencia	
Dirección General	31,535
Coordinación General / Dirección General Adjunta	32,133
Dirección de Área	33,985
Subdirección de Área	64,502
Jefatura de Departamento	66,263
Personal de Enlace	100,527
Personal Operativo	211,584

Las percepciones extraordinarias se otorgan al personal que se hace acreedor a las mismas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable.

Las percepciones extraordinarias netas incluyen la aplicación de las disposiciones fiscales.

ANEXO 23.14.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HC3	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,617,806
Impuesto sobre la renta	633,088
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,250,894
a) Sueldos y salarios:	1,899,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	351,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,620
II) Ahorro solidario	20,330
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,691
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,336
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despensa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,589
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de separación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

00000083

ANEXO 23.14.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HA1	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,617,806
Impuesto sobre la renta	633,098
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,250,894
a) Sueldos y salarios:	1,899,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	351,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,620
II) Ahorro solidario	20,330
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,691
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,335
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despesa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,589
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de separación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 24. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DE LOS RAMOS 25 Y 33 (pesos)

	Incremento a las percepciones	Creación de plazas "	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
Ramos Generales				
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	8,664,222,852	850,000,000	6,748,324,632	16,262,547,484
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México	975,108,603	0	2,627,202,129	3,603,310,732
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,581,188,257	850,000,000	4,067,841,027	12,499,029,284
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	106,925,992	0	53,281,476	160,207,468
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,839,307,341	0	427,625,920	2,266,933,261
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,839,307,341	0	427,625,920	2,266,933,261

1/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.

00000084



ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

08 Agricultura y Desarrollo Rural
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
10 Economía
Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Programa de Becas Elisa Acuña
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa Nacional de Inglés
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
12 Salud
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Fortalecimiento a la atención médica
Calidad en la Atención Médica
14 Trabajo y Previsión Social
Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Vivienda Social
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Programa Nacional de Reconstrucción
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-BIENESTAR
20 Bienestar
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Seguro de vida para jefas de familia
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
47 Entidades no Sectorizadas
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
48 Cultura
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

00000085



ANEXO 28. PRINCIPALES PROGRAMAS

04 Gobernación
Política y servicios migratorios
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Registro e Identificación de Población
Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas
06 Agricultura y Desarrollo Rural
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Adquisición de leche nacional
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
09 Comunicaciones y Transportes
Proyectos de construcción de carreteras
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
10 Economía
Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior y Posgrado
Desarrollo Cultural
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Educación Inicial y Básica Comunitaria
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Subsidios para organismos descentralizados estatales
Programa de Cultura Física y Deporte
La Escuela es Nuestra
12 Salud
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Atención a la Salud
Prevención y atención contra las adicciones
Salud materna, sexual y reproductiva
Fortalecimiento a la atención médica
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Programa de vacunación
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
14 Trabajo y Previsión Social
Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa Nacional de Reconstrucción
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Programa de Vivienda Social



ESTADO DE OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Protección Forestal
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
20 Bienestar
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
21 Turismo
Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros
36 Seguridad y Protección Ciudadana
Administración del sistema federal penitenciario
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado
47 Entidades no Sectorizadas
Proyectos de construcción de puertos
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
48 Cultura
Desarrollo Cultural
Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Servicios educativos culturales y artísticos

ANEXO 27. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (millones de pesos)

Educación ^{1/}	4.5
Salud	333.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,128.8
Cultura	333.3
TOTAL	1,800.0

1/ Lo que equivale a la cantidad de 4,512.907

ANEXO 28. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERO (pesos)

ESTADO	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS
No Distribuible Geográficamente	8,231,338,063	1,504,834,523
Oaxaca	0	2,500,000,000
TOTAL	8,231,338,063	4,004,834,523

00000087

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 29. SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (pesos)

	MONTO
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales (UR 511)-^{1/}	65,033,628,328
Aguascalientes	904,024,288
Baja California	1,791,554,054
Baja California Sur	510,108,405
Campeche	1,008,802,837
Chiapas	1,451,057,061
Chihuahua	2,122,981,492
Coahuila	1,506,719,580
Colima	1,643,277,530
Durango	1,446,422,243
Estado de México	2,300,986,424
Guanajuato	1,925,612,076
Guerrero	2,084,821,759
Hidalgo	1,474,738,549
Jalisco	6,375,107,035
Michoacán	2,109,421,784
Morelos	1,321,861,587
Nayarit	1,528,563,624
Nuevo León	5,778,349,318
Oaxaca	1,272,519,453
Puebla	4,577,424,284
Querétaro	1,508,414,640
Quintana Roo	321,104,838
San Luis Potosí	2,125,856,394
Sinaloa	4,824,979,265
Sonora	2,212,474,568
Tabasco	1,328,220,743
Tamaulipas	2,385,097,324
Tlaxcala	694,101,387
Veracruz	2,746,583,989
Yucatán	2,111,337,324
Zacatecas	1,632,304,473

1/ Los recursos previstos para las Entidades Federativas de Baja California Sur y Campeche se indican en el presente anexo.

ANEXO 29.1 CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES (pesos)

	MONTO
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Universidades Interculturales)	87,395,905
Universidad Intercultural de Chiapas	11,024,449
Universidad Intercultural del Estado de México	14,561,044
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	13,319,638
Universidad Intercultural del Estado de Puebla	9,247,692
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	8,409,635
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero	3,604,134
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	12,238,277
Universidad Intercultural Veracruzana	1,800,293
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	11,192,745
Universidad Autónoma Intercultural del Estado de Hidalgo	1,000,000
Universidad Autónoma Intercultural de San Luis Potosí	1,000,000

00000088



ANEXO 30. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ACCIONES EN MATERIA DE AGUA (pesos)

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Estado	Subsidios Administración del Agua y Agua Potable	Subsidios Hidroagrícolas
Aguascalientes	18,145,952	6,707,050
Baja California	57,173,367	32,407,850
Baja California Sur	32,673,779	10,346,259
Campeche	41,315,598	26,346,421
Coahuila	32,789,098	16,805,691
Colima	14,567,386	10,130,617
Chiapas	82,938,869	137,393,077
Chihuahua	60,850,848	44,350,665
Ciudad de México	71,831,283	10,884,466
Durango	58,447,450	19,843,576
Guanajuato	90,264,847	93,098,027
Guerrero	115,988,720	105,086,267
Hidalgo	57,535,270	49,125,098
Jalisco	78,179,761	35,838,931
Estado de México	172,720,537	33,944,134
Michoacán	76,591,564	70,547,850
Morales	57,223,195	30,181,413
Nayarit	39,448,895	13,248,217
Nuevo León	61,835,066	16,363,969
Oaxaca	83,884,948	56,153,052
Puebla	93,614,181	74,847,539
Querétaro	48,141,093	13,046,725
Quintana Roo	37,811,073	46,003,797
San Luis Potosí	70,658,033	50,863,076
Sinaloa	56,080,183	148,347,857
Sonora	63,963,858	91,112,726
Tabasco	57,580,159	34,238,511
Tamaulipas	68,416,502	100,033,121
Tlaxcala	17,539,646	5,325,424
Veracruz	112,815,238	97,903,190
Yucatán	49,029,889	75,305,797
Zacatecas	43,838,786	11,593,828
No Distribuido Geográficamente	60,678,352	0
TOTAL	2,082,169,335	1,569,322,223

00000089

ANEXO 31. ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN (pesos)

Ramo / Denominación Unidad Responsable	Ejes				MONTO
	1. Combatir la corrupción y la impunidad	2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder	3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad	4. Involucrar a la sociedad y el sector privado	
Total	2,483,699,792	693,494,939	-66,670,775	81,875,597	3,315,741,103
03 Poder Judicial	975,702,108	489,435,347		39,608,090	1,504,745,545
Consejo de la Judicatura Federal	975,702,108	489,435,347		39,608,090	1,504,745,545
06 Hacienda y Crédito Público	334,836,368				334,836,368
Unidad de Inteligencia Financiera	170,010,527				170,010,527
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	69,626,079				69,626,079
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	8,162,139				8,162,139
Servicio de Administración Tributaria	87,037,623				87,037,623
27 Función Pública	856,387,150	187,728,315	37,977,210	35,234,146	1,116,326,820
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	67,254,610				67,254,610
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	7,022,657	13,471,771	18,123,566	7,033,361	45,651,355
47 Entidades no Sectorizadas	119,965,598	2,859,506	570,000		123,395,104
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	119,965,598	2,859,506	570,000		123,395,104
49 Fiscalía General de la República	123,531,300				123,531,300
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	123,531,300				123,531,300

ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)

	PROYECTO PEF	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REASIGNACIONES	PEF APROBADO
A: RAMOS AUTÓNOMOS	137,089,157,545	2,164,400,000	0	-2,164,400,000	134,924,757,545
Gasto Programable					
01 Poder Legislativo	14,916,605,390	100,000,000	0	-100,000,000	14,816,605,390
Cámara de Senadores	4,085,778,000	5,000,000	0	-5,000,000	4,080,778,000
Cámara de Diputados	8,377,000,000	95,000,000	0	-95,000,000	8,282,000,000
Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390	0	0	0	2,453,827,390
03 Poder Judicial	72,429,339,460	1,130,000,000	0	-1,130,000,000	71,299,339,460
Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,159,436,565	69,000,000	0	-69,000,000	5,090,436,565
Consejo de la Judicatura Federal	64,044,622,895	866,000,000	0	-866,000,000	63,178,622,895
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,225,280,000	196,000,000	0	-196,000,000	3,030,280,000
22 Instituto Nacional Electoral	27,689,801,594	870,000,000	0	-870,000,000	26,819,801,594
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,679,905,810	0	0	0	1,679,905,810
41 Comisión Federal de Competencia Económica	598,670,029	0	0	0	598,670,029
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000	0	0	0	1,510,000,000
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	918,735,647	13,400,000	0	-13,400,000	905,335,647
49 Fiscalía General de la República	17,346,099,616	71,000,000	0	-71,000,000	17,275,099,616
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL, ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	7,746,100,001	0	0	0	7,746,100,001
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,746,100,001	0	0	0	7,746,100,001

00000000



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,856,619,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,856,619,680
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,856,619,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,856,619,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS	1,244,235,355,522	353,914,970	2,361,314,970	2,007,400,000	1,246,242,755,522
Gasto Programable					
02 Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292	0	0	0	805,024,292
04 Gobernación	5,800,177,812	0	53,048,789	53,048,789	5,853,226,601
05 Relaciones Exteriores	8,121,231,865	0	0	0	8,121,231,865
06 Hacienda y Crédito Público	20,228,539,183	0	0	0	20,228,539,183
07 Defensa Nacional	112,557,168,656	0	0	0	112,557,168,656
08 Agricultura y Desarrollo Rural	49,291,453,404	0	0	0	49,291,453,404
09 Comunicaciones y Transportes	55,919,501,344	0	0	0	55,919,501,344
10 Economía	6,538,472,433	0	0	0	6,538,472,433
11 Educación Pública	338,046,927,940	349,402,063	153,914,970	-195,487,093	337,851,440,847
12 Salud	145,414,570,947	0	0	0	145,414,570,947
13 Marina	35,476,715,511	0	0	0	35,476,715,511
14 Trabajo y Previsión Social	23,799,853,830	0	0	0	23,799,853,830
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16,624,857,151	4,512,907	0	-4,512,907	16,620,344,244
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	30,948,192,349	0	400,000,000	400,000,000	31,348,192,349
18 Energía	47,060,243,165	0	0	0	47,060,243,165
20 Bienestar	189,970,848,205	0	1,754,351,211	1,754,351,211	191,724,999,417
21 Turismo	38,613,394,661	0	0	0	38,613,394,661
27 Función Pública	1,389,004,630	0	0	0	1,389,004,630
31 Tribunales Agrarios	800,879,640	0	0	0	800,879,640
36 Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,669,472	0	0	0	63,441,669,472
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,986	0	0	0	141,450,986
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028	0	0	0	26,573,104,028
45 Comisión Reguladora de Energía	253,346,872	0	0	0	253,346,872
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,797,597	0	0	0	219,797,597
47 Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953	0	0	0	12,213,921,953
48 Cultura	13,985,117,395	0	0	0	13,985,117,395
C: RAMOS GENERALES	3,430,449,790,272	0	200,000,000	200,000,000	3,430,649,790,272
Gasto Programable					
19 Aportaciones a Seguridad Social	961,026,461,285	0	0	0	961,026,461,285
23 Provisiones Salariales y Económicas	127,486,744,341	0	0	0	127,486,744,341
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,254,347,981	0	200,000,000	200,000,000	58,454,347,981
Provisiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	16,062,547,484	0	200,000,000	200,000,000	16,262,547,484
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,497	0	0	0	42,191,800,497
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,842,880,397	0	0	0	777,842,880,397
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	408,057,264,139	0	0	0	408,057,264,139
Servicios Personales	371,636,439,228	0	0	0	371,636,439,228
Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402	0	0	0	10,749,607,402
Gasto de Operación	14,929,407,533	0	0	0	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,809,976	0	0	0	10,741,809,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	109,501,268,964	0	0	0	109,501,268,964

00600091



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,409,852	0	0	0	84,779,409,852
Entidades	10,276,495,240	0	0	0	10,276,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,502,914,612	0	0	0	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,882,138,793	0	0	0	85,882,138,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,283,323,958	0	0	0	27,283,323,958
Asistencia Social	12,550,329,021	0	0	0	12,550,329,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,937	0	0	0	14,732,994,937
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,719,222,563	0	0	0	7,719,222,563
Educación Tecnológica	4,953,267,509	0	0	0	4,953,267,509
Educación de Adultos	2,765,955,054	0	0	0	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	7,695,618,328	0	0	0	7,695,618,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	48,924,835,800	0	0	0	48,924,835,800
Gasto No Programable					
24 Deuda Pública	541,094,614,451	0	0	0	541,094,614,451
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipales	921,402,640,917	0	0	0	921,402,640,917
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0	0	0	0	0
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,098,200,000	0	0	0	32,098,200,000
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900	0	0	0	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900	0	0	0	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,000	0	0	0	11,245,900,000
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO	1,275,212,396,584	0	0	0	1,275,212,396,584
Gasto Programable					
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,525,286,432	0	0	0	373,525,286,432
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	901,687,110,152	0	0	0	901,687,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	1,133,301,449,660	0	0	0	1,133,301,449,660
Gasto Programable					
TYT Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,598,071,166	0	0	0	544,598,071,166
TVV Comisión Federal de Electricidad	417,145,392,855	0	0	0	417,145,392,855
Gasto No Programable					
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:	171,557,985,839	0	0	0	171,557,985,839
TYT Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,319,871	0	0	0	141,758,319,871
TVV Comisión Federal de Electricidad	29,799,665,968	0	0	0	29,799,665,968
Nota: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	935,184,669,265	0	0	0	935,184,669,265
GASTO NETO TOTAL	6,295,736,200,000	2,561,314,970	2,561,314,970	0	6,295,736,200,000



ANEXO 33. AMPLIACIONES AL RAMO 04 GOBERNACIÓN (pesos)

	MONTO
Ramo 04 Gobernación	53,048,789
E006 Atención a refugiados en el país "	3,857,050
N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	3,857,050
P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes "	10,938,000
P00 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	10,938,000
E012 Registro e Identificación de Población "	38,253,739
941 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad	38,253,739

1/ Monto incluido en el Anexo 18 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes.

ANEXO 34. AMPLIACIONES AL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (pesos)

	MONTO
RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	400,000,000
B00 Comisión Nacional del Agua	400,000,000
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	200,000,000
K129 Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas	200,000,000

ANEXO 35. AMPLIACIONES AL RAMO 20 BIENESTAR (pesos)

	MONTO
RAMO: 20 Bienestar	1,754,351,211
S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	596,351,211
S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	1,158,000,000

ANEXO 36. AMPLIACIONES AL RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

	MONTO
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) "	200,000,000
700 Unidad de Administración y Finanzas	200,000,000

1/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.

ANEXO 37. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)

	MONTO
Ramo 11 Educación Pública	153,914,970
U281 Programa Nacional de Reconstrucción	4,512,907
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación "	149,402,063

1/ Los recursos proceden del programa presupuestario U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación del Ramo 11 Educación Pública.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

00000093

**INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO****SECRETARIA DE GOBERNACION**

Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el "Día Nacional de la Filosofía". 2

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. 2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 4

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 2020, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2020 y las participaciones del fondo de fiscalización y recaudación del tercer trimestre de 2020. 7

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1722 a la ciudadana Lydia Georgina Méndez Arellano, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Guanajuato como aduana de adscripción. 53

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1825 a favor de la ciudadana Yvette Bazán Muzquiz, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como aduana de adscripción. 54

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 55

Oficio mediante el cual se autoriza a Avla Seguros, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros. 57

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Circular por la que se comunica a los Oficiales Mayores y equivalentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las empresas productivas del Estado y alcaldías de la Ciudad de México, así como a los municipios y las entidades federativas, cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa EMAJA PERFORACIONES, S.A. de C.V. 61

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández. 62

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. 63

00000094



ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chihuahua.	64
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Colima.	74
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Durango.	83
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de México.	92

SECRETARÍA DE SALUD

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.	102
Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.	169
Programa Institucional del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 2020-2024.	191

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se reciben electrónicamente las solicitudes de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor.	221
--	-----

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Acuerdo por el que se prorroga el Diverso por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.	223
---	-----

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 29/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el Circuito indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	227
Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	230

00000095



Acuerdo General 31/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	233
---	-----

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.	236
Tasas de interés interbancarias de equilibrio.	236
Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.	236

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nota aclaratoria al Acuerdo SS/23/2020, relativo a la designación de la Directora General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.	237
---	-----

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Manual de Organización General del Instituto Nacional de Ciencias Penales.	237
---	-----

AVISOS

Judiciales y generales.	304
------------------------------	-----

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Acuerdo que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, compuesta por las redes de radiocomunicación de Seguridad Pública, similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.	1
Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial los días 5 y 6 de noviembre de 2020, para 2 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.	4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.	5
---	---

SECRETARIA DE BIENESTAR

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021.	97
---	----

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director General Adjunto*

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación
Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

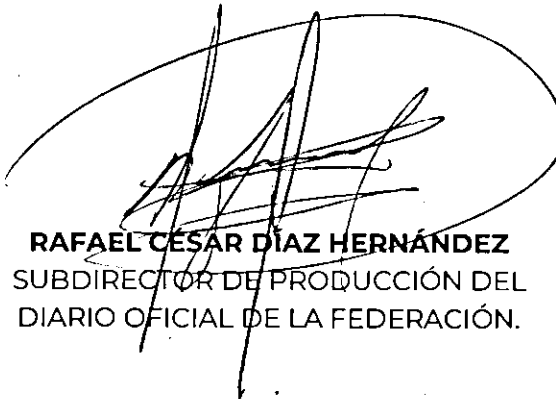
Esta edición consta de dos secciones, con un total de 682 páginas

00000096

CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO RAFAEL CÉSAR DÍAZ HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS 5o. DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES; 9o., 10 FRACCIONES III Y XIII, 11 FRACCIONES I Y IV Y 14 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. -----


-----**CERTIFICA**-----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96, QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN, CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTA DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA DE LA **EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NO. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**, Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.-----



RAFAEL CÉSAR DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PRODUCCIÓN DEL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.



REVISÓ:


LIC. CLAUDIA GUTIÉRREZ GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y
ATENCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN.

COTEJÓ:


**LIC. MARÍA ALEJANDRA TURCOTT
GONZÁLEZ**
DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE
INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion8100_2.pdf
Secuencia: 3533193

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a una copia certificada.

AUTORIDAD CERTIFICADORA

Firmante	Nombre:	VERONICA ROJAS CORTES	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	ROCV920906MMNJRR05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	3030303031303030303030353033383732353937	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:22Z / 11/02/2021T20:06:22-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7d d6 52 b3 4a 0d 28 44 c5 1f 05 b0 74 64 3f eb 56 5b 40 5c 44 f4 41 44 82 e1 1a 01 2e 2d c6 2d 8b c2 ac 4e 14 e9 2f 02 d2 18 30 c6 2f 0d e3 91 73 5d 76 e7 51 b1 0f f5 19 a5 32 ca cb 8e e8 54 75 c4 d1 61 b1 17 a0 ee b5 0b 1a ec 61 27 85 8a 83 98 93 b9 3d d0 00 fc 13 16 c2 15 6c cd 8f 3f ed 63 fa 96 a5 70 42 78 22 81 b2 32 ca 73 b0 80 20 e4 95 5d 38 04 be 2a c8 1f e8 3e 30 48 66 d1 05 1f b5 35 02 8f 63 64 bd 84 d9 19 ec 8e 29 ca 96 dc c1 bb b3 0a 90 2c 37 b3 45 4a 19 cb bb 81 95 24 33 f9 94 cf 65 e2 5c 8a 75 75 e9 25 de 70 49 2c f3 0c f0 1c f0 fd 5d a6 af 77 7d 2a af ac ac 3a 81 a5 32 7d 5e 57 95 de c2 0e 3c 48 e9 c4 8f 72 95 db d2 79 f6 54 35 d7 9f 8b 6b 72 86 a0 5b 8a ed 96 65 2d 27 41 83 6f 1f 75 63 2b 54 f1 27 b3 0e 78 62 cb da 29 69 5b d3 7b 05 00 a4 5d			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:39Z / 11/02/2021T20:06:39-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	Servicio OSCP SAT			
	Emisor del certificado de OSCP:	AUTORIDAD CERTIFICADORA			
	Número de serie del certificado OSCP:	3030303031303030303030353033383732353937			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/02/2021T02:06:22Z / 11/02/2021T20:06:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3605388			
	Datos estampillados:	61C97D4C966F552E2601E1EE88541005A2D5A71466D4BD67F7F0811E4BE4EC14			



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"2021: Año de la Independencia".

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Consejería Adjunta de Control
Constitucional y de lo Contencioso.

ASUNTO: Se rinde contestación en la
controversia constitucional 211/2020,
promovida por el Instituto Nacional
Electoral.

Oficio No. 10219 /2021.

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021.

SEÑOR MINISTRO
JAVIER LAYNEZ POTISEK,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E.

LICENCIADO JULIO SCHERER IBARRA, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de la República, en terminos del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2001, personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos de la controversia constitucional citada al rubro, con el debido respeto ante Usted expongo:

Que con fundamento en los artículos 11, 23 y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria), estando dentro del plazo legal concedido para tales efectos, **VENGO A CONTESTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DEMANDA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL**, promovida por el Instituto Nacional Electoral, por conducto de Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en la que impugna lo siguiente:

"El Decreto por el que se expide el Presupuesto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (Presupuesto de Egresos 2021), expedido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 27 de noviembre de 2020, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 siguiente, así como su refrendo y promulgación, específicamente por lo que hace a:
a. ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos), en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por el monto que se fija para el Instituto Nacional Electoral por \$26,819,801,594 (veintiséis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
2021 FEB 17 PM 3:05
CERCA DE
CERTIFICACIÓN JURÍDICA
Y CORRESPONDENCIA

b. El ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) y ANEXO 23.1.3 REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos).

c. El ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos), en lo relativo a la reducción que consigna para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por un monto de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.);

d. El ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos: ANEXO 23.8.1.A LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos) Y ANEXO 23.8.1.B LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos); ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021; ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos) Y ANEXO 23.8.3.D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021.

(...).

e. Artículo Transitorio Vigésimo Primero en el cual se dispone lo siguiente:

Vigésimo Primero. Los ejecutores del gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021 a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.

(...)."

I. CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción I de la Ley Reglamentaria, a continuación, se da contestación a los hechos narrados en el escrito de demanda:

1. En el párrafo 1. de los antecedentes, el actor señala lo siguiente:

"1. El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó su Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, mediante acuerdo INE/CG236/2020."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

2. En el párrafo 2. de los antecedentes, el promovente manifiesta lo siguiente:

"2. El proyecto de presupuesto para el 2021 del Instituto Nacional Electoral atendió a los principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos; de transparencia y rendición de cuentas, y de disciplina presupuestaria, sin menoscabar el cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de sus atribuciones."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

3. En el párrafo 3. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:

"3. El proyecto de presupuesto, es producto de un ejercicio profundo en el que se analizaron las necesidades de gasto de los proyectos que ejecuta cada unidad administrativa. Las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral realizaron un análisis a fondo de todas las partidas de gasto de su presupuesto base, con la finalidad de optimizar recursos y canalizarlos de manera eficiente a sus prioridades."

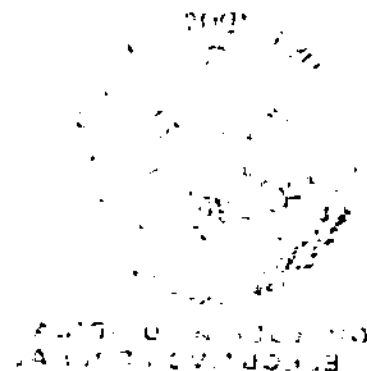
Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

4. En el párrafo 4. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:

"4. El Instituto Nacional Electoral propuso un presupuesto total de \$27,689,801,594 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales \$7,226,003,636 (siete mil doscientos veintiséis millones tres mil seiscientos treinta y seis pesos M.N.) representan el monto de financiamiento público federal para los Partidos Políticos Nacionales, así como para gastos de campaña del conjunto de Candidaturas Independientes en el ejercicio 2021, en tanto que \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), son el presupuesto previsto como gasto neto total. Esto es, de esos recursos, más de la tercera parte corresponde a los recursos que reciben los partidos políticos, a través del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus funciones."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

5. En el párrafo 5., 6. y 7. de los antecedentes, el actor expresa lo siguiente:



"5. Los \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que sí forman parte del gasto del Instituto Nacional Electoral, se integra de la siguiente manera:

	Total	%
Presupuesto base	10,992,906,338	53.71
Cartara Institucional de Proyectos	9,470,891,620	46.28
Organizar procesos electorales locales	33,630,601	0.16
Organizar Proceso Electoral Federal	8,168,910,742	39.92
Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión	136,334,235	0.67
Fortalecer la Gestión y Evaluación Administrative y Cultura de Servicio Público	430,200,280	2.10
Fortalecer los Mecanismos de Actualización de los Procesos Registrales	259,086,893	1.27
Fortalecer el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	33,449,330	0.16
Fortalecer la Equidad y Legalidad en el Sistema de Partidos Políticos	387,435,776	1.89
Coordinar el Sistema Nacional Electoral	21,843,763	0.11
Total	20,463,797,958	100.0

6. De esta tabla se desprende que, los \$20,463,797,958 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que corresponden al Instituto Nacional Electoral, más de 10 mil millones se destinan a gastos permanentes que no obedecen a las prioridades específicas del ejercicio fiscal que corresponde. Al ser gastos asociados a actividades permanentes, existe un mínimo grado de flexibilidad en los conceptos de gastos asociados a ese monto.

7. Los otros \$9,470.8 millones de pesos sí responden a proyectos especiales del ejercicio fiscal. La integración del Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021 considera los recursos para el proceso electoral 2020-2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos y juntas municipales. Para dichos procesos se contempló un presupuesto de \$8,202,541,343 (ocho mil doscientos dos mil millones quinientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100M.N.) De ahí que una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), como se describe en esta demanda, tenga un impacto extremadamente sustantivo en los procesos electorales referidos."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

6. En el párrafo 8 de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"8. Cabe destacar que en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se señaló precisamente ese ejercicio de austeridad; entre otros argumentos, en los siguientes términos:

Consideraciones para el gasto presupuestal 2021.

La integración del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal de 2021, considera los recursos para el Proceso Electoral Federal y Locales 2020-2021, el cual será, sin lugar a dudas, la elección más grande de la historia. Por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la Cámara de Diputados Federal. De igual modo, en 2021 habrá 15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil 900 presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 21,368 cargos por la vía democrática. De acuerdo con el crecimiento natural del Padrón Electoral, se prevé que en el 2021 estén en condiciones de votar prácticamente 95 millones de ciudadanos, lo que implicará la instalación de más de 164,500 casillas así como la contratación de más de 48,000 capacitadores y supervisores electorales que serán los encargados de capacitar a los funcionarios de casilla, auxiliarlos en las tareas de la mesa de votación, entregar la documentación y material electoral a la ciudadanía, así como apoyar en el traslado de paquetes electorales, en el seguimiento de incidentes el día de la jornada electoral y en actividades esenciales para poder contar con resultados confiables.
(...)."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

7. En los párrafos 9., 10., 11. y 12. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:

"9. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, con base en la información que le hizo llegar el Instituto Nacional Electoral, contenía los siguientes anexos:

i. EL ANEXO 1 GASTO NETO TOTAL, en el que incluyó el gasto neto total enviado por el Instituto Nacional Electoral, que sumado al financiamiento público de los partidos políticos ascendía a un monto de \$27,689,801,594 (veintisiete mil seiscientos ochenta y nueve millones ochocientos y un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

ii. EL ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, desglosado de la siguiente manera:

- ANEXO 23.8.1.A LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos).
- ANEXO 23.8.1.B LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN

- EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. (NETOS MENSUAL) (pesos)
- ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS. (pesos)
 - ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. (pesos)
 - ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021.
 - ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)
 - ANEXO 23.8.3.D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021."

(...)

10. El 11 de noviembre de 2020, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2021.

11. Dicho dictamen contempló una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N.), respecto del proyecto originalmente aprobado por este Instituto Nacional Electoral, el cual se considera que de verse además con la perspectiva adecuada, ya que hay dos factores que permiten ponderar su impacto. El primero es que, de los más de 27.6 mil millones que el Instituto Nacional Electoral envió como gasto neto total de su presupuesto \$7,226,003,636 (siete mil doscientos veintiséis millones tres mil seiscientos treinta y seis pesos M.N.) corresponden al financiamiento público de partidos políticos, que constitucionalmente es inmodificable, de acuerdo con el artículo 41, base II, de la Constitución Federal. El segundo es que de los más de 20.4 mil millones de pesos que si son gasto del Instituto Nacional Electoral, más de 10.9 mil millones corresponden al gasto fijo de la institución.

12. Lo anterior implica que se asignaron poco más de 9.4 mil millones de pesos a proyectos especiales para el año 2021. Los proyectos especiales son actividades propias del ejercicio fiscal que corresponde. En el caso de 2021, dentro de los proyectos especiales se encuentran el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1900 ayuntamientos y juntas municipales que representan \$8,168,910,742 (ocho mil ciento sesenta y ocho millones novecientos diez mil setecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N) de ese universo. De ahí que una reducción de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N) como se describe en esta demanda, tenga un impacto extremadamente sustantivo en el proceso electoral referido."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios.

8. En el párrafo 13. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"13. El 30 de noviembre de 2020, el Diario Oficial de la Federación publicó el Presupuesto de Egresos-2021, que entró en vigor el 1° de enero de 2021, conforme al artículo primero transitorio del mismo, en el que prevalecieron las afectaciones mencionadas."

Es cierto que el 30 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que entró en vigor el 1° de enero de 2021, conforme al artículo primero transitorio del mismo.

Respecto a la consideración de la parte actora, en el sentido de que, derivado de la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos 2021, prevalecieron las afectaciones que ha mencionado, se señala que dichas aseveraciones se analizarán al momento de analizar el fondo del asunto, pues se trata de juicios de valor y no propiamente un hecho que se pueda afirmar o negar.

9. En los párrafos 14. y 15. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:

"14. En ese orden es posible comprobar la grave afectación que el PEF 2021 provoca a este Instituto Nacional Electoral, tomando en consideración que en su ANEXO 23 y subsecuentes, se establecieron montos mínimos y máximos de las percepciones ordinarias para quienes laboran en el INE, además de ser incongruentes al señalar puestos específicos dentro de la estructura ocupacional de este Instituto, sin observar ni analizar los niveles de los puestos como originalmente se establecieron en las Bases Generales del Anteproyecto de presupuesto 2021, enviadas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Consejero Presidente del INE, mediante oficio INE/PC/117/2019, el 27 de agosto del 2020, para su integración al Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 y su posterior envío a la Cámara de Diputados para su aprobación, (...)

15. Tal como se puede apreciar, entre lo que en su momento el Instituto Nacional Electoral en su carácter de órgano constitucional autónomo envió al Poder Ejecutivo como resultado de un ejercicio presupuestario acorde con sus actividades y funciones constitucionales y, lo que fue aprobado por la Cámara de Diputados, se observan diferencias considerables que van más allá de intercambiar claves presupuestales por nombres de puestos, sino que además, se advierte la eliminación de prestaciones que vulneran los derechos adquiridos de los servidores públicos del Instituto."



SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 107

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios, además, se señala que dichas aseveraciones se analizarán al momento de estudiar el fondo del asunto, por tratarse de juicios de valor.

11. En los párrafos 16. y 17. de los antecedentes, el accionante expresa lo siguiente:

"16. En otro sentido, del Presupuesto de Egresos de la Federación no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte, de ahí que se insista en la invasión de esferas, es decir no existe dictamen, estudio o análisis alguno por la Cámara de Diputados o alguna de sus comisiones (Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública) que haya razonado la disminución al presupuesto propuesto por este Instituto. Consecuentemente, dicha cámara no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria sin justificación o motivación, que se lleve a cabo sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que conlleva; ello se traduce en la violación no solo a la autonomía financiera, sino a la independencia decisoria funcional y económica, sometiendo al instituto a la necesidad de dejar de cumplir con las obligaciones o, en su caso, verse en la necesidad de gestionar ampliación presupuestal con el gobierno federal, en menoscabo a su autonomía e independencia.

17. Por lo anterior, es patente el menoscabo en la autonomía presupuestaria Instituto Nacional Electoral y en consecuencia en su funcionamiento, en tanto el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, cuarta la independencia de este Instituto en la toma de sus decisiones y correcto funcionamiento conforme al artículo 41, base V, Apartado A, B, C, y D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disminuir su presupuesto y determinar las remuneraciones de sus servidores públicos sin justificación alguna, lo que impide alcanzar los objetivos y proyectos presupuestados para el debido oportuno y eficaz cumplimiento de sus competencias constitucionales como órgano especializado en materia electoral y garante del Estado democrático al proteger los derechos políticos de la ciudadanía y asegurar la renovación periódica de los poderes conforme a nuestra Carta magna."

Lo anterior no se afirma ni se niega, por no ser hechos propios, además, se señala que dichas aseveraciones se analizarán al momento de analizar el fondo del asunto, por tratarse de juicios de valor.

II. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

ÚNICA. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL INSTITUTO



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

NACIONAL ELECTORAL PARA PROMOVER LA PRESENTE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA.

El artículo 19, en su fracción VIII, de la Ley Reglamentaria establece que podrá devenir la improcedencia de la controversia constitucional en los casos que la propia ley establezca, aun cuando no sean los expresamente contenidos en el capítulo de improcedencia y sobreseimiento.

Por su parte, el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental prevé los poderes, entidades y órganos legitimados para promover una controversia constitucional.

Con relación a lo anterior, el numeral 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria establece lo siguiente:

*"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;
(...)"*

El referido precepto prevé a las partes de la controversia constitucional y señala que quien promueva el juicio será la parte actora.

Ahora bien, para acudir a este medio de control constitucional el actor debe probar su interés legítimo, el cual se actualiza cuando exista una afectación a sus atribuciones, esfera jurídica, o solamente un principio de afectación.

Al respecto, ese Alto Tribunal se ha pronunciado en el siguiente sentido:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. En materia de controversias



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO

constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del interés legítimo, ha hecho algunas diferenciaciones que, aunque sutiles, deben tenerse presentes: 1. En la controversia constitucional 9/2000 consideró que el interés legítimo se traduce en la afectación que las entidades, poderes u órganos resienten en su esfera de atribuciones, y se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada pueda causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en que se encuentra; 2. En la controversia constitucional 328/2001 sostuvo que el interés legítimo se traducía en la afectación a la esfera jurídica del poder que estuviera promoviendo; 3. En la controversia constitucional 5/2001 determinó que si bien es cierto que la controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado, y que debe tomarse en cuenta que la normalidad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución, quedando las transgresiones invocadas sujetas a dicho medio de control constitucional, también lo es que no se abrogó, por decirlo de alguna manera, lo relativo al interés legítimo para la procedencia de la acción, sino que se matizó considerando que era necesario un principio de afectación; y, 4. En la controversia constitucional 33/2002 retomó el principio de afectación para efectos del interés legítimo, y estableció un criterio para determinar cuándo y cómo debe estudiarse ese principio. Así, puede entenderse que se colmará el requisito relativo al interés legítimo cuando exista una afectación a la esfera de atribuciones de las entidades, poderes u órganos legitimados, a su esfera jurídica, o solamente un principio de afectación." [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXVII, Febrero de 2008; Pág. 1897; Registro: 170 357. Número de Tesis: 2a. XVI/2008.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE ACTOS DIRIGIDOS A UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SÓLO SI AFECTAN SU ESFERA DE ATRIBUCIONES. Los municipios pueden acudir a la controversia constitucional ante la existencia de actos que afecten su competencia constitucional relativa a la prestación de servicios públicos, aun cuando dichos servicios sean prestados a través de organismos descentralizados; sin embargo, cuando los actos impugnados no inciden en la prestación del servicio público, ni afectan el ámbito de atribuciones o garantías institucionales del propio municipio, éste carece de interés legítimo para impugnarlos." Décima Época, Registro: 2006021, Primera Sala, Tesis Aislada, Gaceta del S.J.F., Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXIX/2014 (10a.), Página: 721.

"INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL. De acuerdo con el criterio prevaleciente en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el interés legítimo, para la promoción de la controversia constitucional por parte de los órganos legitimados en el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien, de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales." Décima Época, Registro: 2006022, Primera Sala, Tesis Aislada, Gaceta del S.J.F., Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CXVIII/2014 (10a.), Página: 721.

En ese sentido, la Suprema Corte ha sostenido que, para que la controversia constitucional sea procedente, el actor debe contar con un interés legítimo, es decir, una afectación en su esfera de competencias otorgadas expresamente por la Carta Magna, pues la finalidad de dicho medio de control constitucional es tutelar los ámbitos de competencias que la propia Norma Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado Mexicano y que cuentan con legitimación para incoar el juicio constitucional, de conformidad con el artículo 105, fracción I, de la Constitución General.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de la lectura integral de la demanda, se desprende que el Instituto actor pretende hacer valer múltiples conceptos de invalidez en los que el argumento esencial es la supuesta violación a derechos fundamentales de los servidores públicos que laboran en el mismo, a partir de la impugnación de la remuneración del Presidente de la República, como límite máximo de las remuneraciones de todos los servidores públicos, con la finalidad de estar en posibilidad de rebasar dicho límite.

Lo anterior sin que exista un punto de contacto entre la remuneración del Presidente de la República y la supuesta afectación a su autonomía, por ende, no basta referir que la supuesta vulneración a las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto actor genera una violación a su autonomía, sino que debe existir una relación causal entre los aspectos primeramente referidos, misma que debió ser demostrada por el accionante.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA

Por lo tanto, se obtiene que el accionante pretende que el presente medio de control constitucional sea empleado como una vía para la impugnación de normas generales por considerarlas violatorias de derechos humanos, lo cual evidencia claramente la falta de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional.

En efecto, las controversias constitucionales son medios de control de regularidad de nuestra Norma Fundamental, por virtud de los cuales se busca garantizar el correcto ejercicio de las facultades que el Constituyente ha conferido a los poderes, entidades u órganos legitimados para promoverlas, de conformidad con el artículo 105, fracción I, de la propia Carta Magna. Esto quiere decir que el presente juicio constitucional tiene por objeto resolver sobre la posible invasión de atribuciones constitucionales propias que le corresponden a un determinado poder, entidad u órgano, por parte de otro poder, entidad u órgano del Estado, en aras de garantizar el sistema federal y el principio de división de poderes.

En este sentido, la controversia constitucional no tiene la función de tutelar derechos fundamentales, pues, para ello, existen otro tipo de mecanismos establecidos en la propia Constitución, como el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad.

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio del Pleno de ese Alto Tribunal:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE. La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe ser



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en la que se encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y, consecuentemente, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano, mas no la afectación a cierta clase de gobernados. Por otra parte, del cúmulo de atribuciones que el artículo 115 constitucional confiere a los Municipios no se advierte la de defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas que se encuentran geográficamente dentro de su circunscripción territorial, en un medio de control constitucional, situación que tampoco se advierte del artículo 2o. de la Ley Suprema, el cual impone una serie de obligaciones a cargo de los diferentes niveles de gobierno en relación con aquéllos; sin embargo, si bien es cierto que las facultades y obligaciones que dicho precepto constitucional otorga a los Municipios buscan la protección de los pueblos y de las comunidades indígenas, también lo es que se refieren a su propio ámbito competencial, sin llegar al extremo de que, vía controversia constitucional, puedan plantear la defensa de aquéllos. En esas circunstancias, los Municipios carecen de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra disposiciones generales que consideren violatorias de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que habiten en su territorio, si no guardan relación con la esfera de atribuciones que constitucionalmente tienen conferidas. Sostener lo contrario desnaturalizaría la esencia misma de la controversia constitucional, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del Municipio para promoverla, le permitiera plantear argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de los gobernados que habitan en su territorio, sin importar si afectan o no su esfera competencial, o que, aun sin invadirla, exista un principio de afectación para la situación de hecho que detentan, esto es, como control abstracto, lo cual no es propio de la naturaleza de las controversias constitucionales.” Décima Época, Registro: 160588, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 83/2011 (9a.), Página: 429.

En este orden, las tesis de jurisprudencia P./J. 98/99 y P./J. 101/99 no resultan suficientes para desvirtuar la naturaleza el medio de control constitucional que ahora nos ocupa, ya que las mismas se refieren únicamente a la presente vía como un mecanismo para salvaguardar el respeto del orden primario y limitar cualquier arbitrariedad que, en esencia, iría en contra del pueblo soberano, como un fin último, mas no autorizar el empleo de este medio para hacer valer posibles violaciones a derechos humanos, y siempre y cuando exista un principio de afectación al órgano promovente.

Los criterios en cita, expresamente, señalan:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER. El análisis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que, si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano." Época: Novena Época, Registro: 193257, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 101/99, Página: 708.

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control." Época: Novena Época, Registro: 193259, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 98/99, Página: 703.

Asimismo, las jurisprudencias transcritas derivan de la controversia constitucional 31/97, en la que se cuestionó la procedencia del estudio de conceptos de invalidez en los que se plantearon argumentos de mera legalidad. En las consideraciones de dicho precedente, se señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Por otro lado, cabe resaltar que este Alto Tribunal también ha sostenido que es procedente el estudio de los argumentos en que se aduzcan violaciones indirectas a la Constitución Federal, relacionadas con disposiciones secundarias, siempre que, de resultar fundadas, sean aptas para provocar la invalidación del acto impugnado, lo cual se traduce en que, en esta instancia, puede verificarse el procedimiento de formación del acto impugnado, para determinar si se dio o no cumplimiento a las formalidades esenciales previstas en la normatividad que lo origina y que por su inobservancia, por vía de consecuencia, resultarían transgresoras de algún dispositivo de la Constitución Federal que prevenga tales formalidades, siendo que, de no ser así, procederá decretar su nulidad, ante la falta de observancia de esos requisitos formales.

La jurisprudencia 23/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, correspondiente a abril de 1997, página 134, es la tesis que contiene el razonamiento sobre la procedencia del examen de violaciones indirectas de

naturaleza formal, a la luz de lo estatuido por el artículo 16 constitucional, de la manera siguiente:

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una controversia constitucional, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en el que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de los actos impugnados.'

En los argumentos que sustentaron el criterio anterior, éste Tribunal Pleno estableció que la conclusión a que se llegó obedecía al hecho de que la apertura en el examen de conceptos de invalidez propiamente de legalidad estaba autorizado por la finalidad de decisión judicial en cuanto al análisis integral de la validez del acto impugnado, tal y como sucede cuando se aducen transgresiones ocurridas durante el proceso legislativo, previo a la formación de la norma.

Lo anterior revelaba que, en las controversias constitucionales, lo estrechamente vinculado a lo constitucional, cuando no se trate de disposiciones de la parte orgánica que regulen expresamente la relación entre entes de poder o sus atribuciones, debía circunscribirse únicamente a lo relacionado con las formalidades que prevé la Carta Magna para la validez de todo acto de autoridad, como por ejemplo, si durante la formación del acto se siguieron las formalidades esenciales requeridas por el procedimiento, si fue emitido por una autoridad competente o si está fundado y motivado.

Una nueva reflexión y análisis de los criterios reseñados, confrontada con la finalidad de la reforma constitucional vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, consistente en fortalecer el federalismo y erigir a esta Suprema Corte como tribunal constitucional, garante de la supremacía de la Carta Magna, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo, en las que se soslaya el análisis de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, por las razones que a continuación se exponen.

Partiendo de la base de que una de las finalidades del control constitucional consiste en dar unidad y cohesión a los diferentes órdenes jurídicos parciales, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que en el texto de la Constitución se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la norma fundamental, produciría, en



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

numerosos casos, la ineficacia del medio de control de que se trate, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de las libertades y competencias de cada uno de ellos.

En efecto, de acuerdo con las iniciativas de las reformas constitucional y legal que quedaron transcritas con anterioridad, lo que se pretende es que la Suprema Corte de Justicia sirva como baluarte en la defensa del Estado de derecho, pues si las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, cuyo sentido final es lograr el bienestar de la población que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades que redundarían en la transgresión del orden constitucional que se pretende salvaguardar.

Conviene destacar que la afirmación contenida en el párrafo anterior de que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, su sentido final es lograr el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllas, encuentra claro sustento en el análisis relacionado en todos los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El título primero, que comprende sus primeros veinticuatro artículos se ocupa de las garantías individuales que constituyen una barrera infranqueable para todas las autoridades que, de violentarlos, podrán ser señaladas como responsables en un juicio de amparo que promueva un gobierno que estime que se incurrió en esa arbitrariedad, todo ello, con fundamento en el artículo 107 de la Constitución. En el artículo 16 se establece la garantía de legalidad que exige que las autoridades sólo puedan hacer lo que la ley les permite, lo que significa que no pueden actuar fuera de su competencia. En el artículo 14 se previene la garantía de debido proceso legal, lo que obliga a cumplir con los procedimientos que las leyes establezcan antes de emitir una resolución que pueda producir una afectación.

Vinculados con estos principios se encuentran los artículos 39, 40, 41 y 49 de la propia Carta Fundamental. En el primero se reconoce el principio de soberanía popular, conforme al cual todo poder público dimana del pueblo y se constituye para beneficio de éste. En el segundo, se previene que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por Estados libres y soberanos. En el tercero, se precisa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, regulándose en su parte restante los principios de derecho electoral que tienden a salvaguardar el ejercicio de la democracia. En el cuarto, finalmente, se reconoce el principio de la división de poderes, técnica de carácter jurídico-político que busca evitar la concentración del poder y a través del equilibrio de los tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, logra el control y limitación recíproca entre ellos.

En los artículos 115 y 116 se consagra el Municipio Libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados,



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

reconociéndoles a aquéllos prerrogativas específicas y estableciendo a dichos Estados su marco jurídico de actuación.

De acuerdo con este esquema de carácter constitucional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, que constituyen el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que en esencia irían en contra del pueblo soberano.

De acuerdo con el panorama descrito, aun cuando la materia fundamental sobre la que versen las decisiones de las controversias constitucionales se relacionen con actos de carácter político, si su expresión tiene también una connotación jurídica, son susceptibles de ser examinados por esta Suprema Corte de Justicia, dado que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa a través de los medios de control de su regularidad debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, sin que se pueda parcializar este importante ejercicio por meras construcciones interpretativas.

Ciertamente, la doctrina ha establecido que las garantías individuales benefician, en su carácter de derechos públicos subjetivos, a los gobernados, quienes pueden oponerlos a los actos de autoridad; sin embargo, las prevenciones constitucionales que establecen esas normas fundamentales generales disponen también obligaciones que deben cumplir las autoridades en su actuar, siendo que no existe razón jurídica para dejar de requerirlas cuando su destinatario sea otra autoridad, órgano o ente de poder, perteneciente al mismo u otro orden jurídico parcial, pues basta con que el acto de que se trate sea susceptible de afectar el ejercicio competencial de la entidad para que este Alto Tribunal pueda determinar, sin cortapisas y en su integridad, su apego al Estado de derecho, lo que se traduce en la salvaguarda de la supremacía constitucional, como orden jurídico total.

Llevando los razonamientos expuestos al caso que se examina, es de concluirse que cuando una legislatura dirime un conflicto de límites entre Municipios, respetando siempre los principios contenidos en la Constitución Federal, ejercita plenamente su autonomía, ejercicio que es susceptible de examen integral por esta Suprema Corte para evitar arbitrariedades, pues de lo contrario se podría estar reconociendo y autorizando implícitamente la comisión de infracciones a la Norma Suprema, violaciones que no serían susceptibles de purgarse con posterioridad.

Efectivamente, declarar la improcedencia de la controversia constitucional, bajo la óptica de que examinar cualquier acto proveniente de la Legislatura Estatal para con sus Municipios, vulneraría la autonomía local, en virtud de que en esta clase de conflictos sólo son susceptibles de estudio los aspectos sobre invasión de esferas competenciales o de cuestiones meramente formales, conduciría



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

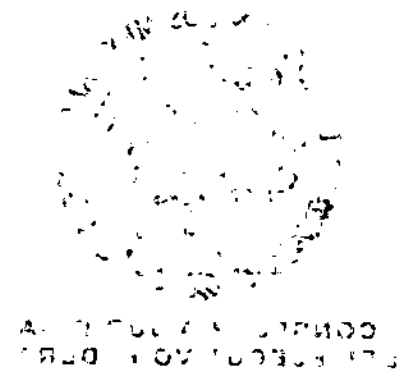
prácticamente a derogar el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución, puesto que solamente reduciría la procedencia y examen de fondo en las controversias constitucionales a un reducido número de supuestos, con lo que quedarían soslayadas del control, hipótesis que pudieran presentarse en las relaciones políticas entre Estados y Municipios, en que las autoridades estatales, teniendo facultades constitucionales para realizar actos que inciden sobre la esfera de atribuciones de las autoridades municipales y cubriendo los requisitos formales previstos en la Constitución Federal, cometan arbitrariedades o emitan actos incongruentes que redundan en la desarmonía y desajuste del orden normativo del orden jurídico parcial estatal.

De este modo, de admitir la opinión contraria a la que en esta resolución se sustenta, quedaría cumplido, sólo en apariencia, el principio de autonomía interna (soberanía) de las entidades federativas, pues se permitiría que las autoridades estatales incumplieran con la obligación de respetar los postulados de la Carta Magna Federal, deber impuesto precisamente a los Estados por el artículo 40 de dicho ordenamiento.

En efecto, si como se ha establecido, el control ejercido por la Suprema Corte es una función constitucional, derivada directamente de las normas constitucionales, siendo su materia la totalidad de los actos autoritarios federales y locales enumerados en el artículo 105, fracción I, constitucional, cuya finalidad consiste en preservar los dos principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos parciales señalados con anterioridad, a saber, salvaguardar el federalismo y la supremacía constitucional, no debe existir una limitante conceptual para examinar los aspectos propuestos como conceptos de invalidez, porque la actualización de una arbitrariedad, cualquiera que sea su connotación, al incidir en la armonía en la relación entre entidades de diferentes órdenes jurídicos parciales, u órganos pertenecientes a uno de ellos, provoca el desajuste de todo el orden jurídico total, cuyo fortalecimiento es el objetivo de este medio de control, en detrimento de los gobernados a los que, en esencia, se trata de servir."

Conforme a lo anterior, se puede colegir que el actor carece de un interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, al pretender sostener supuestas violaciones a derechos fundamentales, por lo que el presente juicio de controversia constitucional es improcedente, por no ser esta la vía para salvaguardar violaciones a los derechos humanos de los servidores públicos del promovente.

Además, debe precisarse que la materia de impugnación en las controversias constitucionales se constriñe a la posible invasión de esferas competenciales, pues la tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las atribuciones que la Constitución General de la República prevé para las entidades, poderes u órganos que señala su



artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, por lo que, para que esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe causarle un perjuicio al ente promovente y, **los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano originario del Estado Mexicano.**

Bajo esta óptica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para que la controversia constitucional sea procedente, el promovente debe contar con un interés legítimo, es decir, una afectación en su esfera de competencias otorgadas expresamente por la Carta Magna, pues la finalidad de dicho medio de control constitucional es tutelar los ámbitos de competencias que la propia Norma Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado Mexicano y que cuentan con legitimación para incoar el juicio constitucional. Incluso también, el Pleno ha señalado que, sostener lo contrario, **desnaturalizaría la esencia misma de la controversia constitucional**, pues podría llegarse al extremo de que la legitimación del actor para promoverla le permitiera plantear argumentos tendentes exclusivamente a la defensa de sus propios servidores públicos, sin importar si afectan o no su esfera competencial, cosa contraria a lo que establece la Carta Magna.

En este sentido, de los argumentos que hace valer el Instituto Nacional Electoral, en su escrito de demanda, no se acredita ninguna violación o afectación a su esfera o a sus atribuciones constitucionales, por lo que, observando la naturaleza y efectos de los actos que impugna, ese Alto Tribunal debe advertir que los anexos que se impugnan del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en relación con sus servidores públicos, en ningún momento actualizan un principio de afectación en perjuicio del ahora promovente, ni mucho menos una cuestión de invasión de competencia que derive directamente del Texto Fundamental.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Bajo esta tesitura, resulta evidente que el actor carece de un interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, al no plantear, en modo alguno, una invasión o afectación a su esfera de competencias conferidas directamente por la Constitución General, sino que se limita a cuestionar los límites de percepciones de sus servidores públicos y la remuneración del Presidente de la República establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en relación con cuestiones de violaciones a derechos humanos de sus servidores públicos, como su remuneración, por lo cual se deberá sobreseer el presente juicio de control constitucional.

Lo anterior máxime que, como se mencionó en líneas precedentes, no existe un punto de contacto entre la determinación de los límites de las remuneraciones de los servidores públicos, así como de la remuneración del Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, y la supuesta afectación a su autonomía constitucional, misma que no es demostrada por el promovente.

Es por las anteriores consideraciones que se puede concluir que el Instituto Nacional Electoral carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, al pretender impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en específico, las percepciones de sus servidores públicos, así como la remuneración del Presidente de la República, con la única finalidad de salvaguardar los supuestos derechos salariales de los servidores públicos que laboran en dicho Instituto. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional, al no ser necesario un estudio de fondo para llegar a esa conclusión.

Resulta aplicable, en lo conducente, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por ese Alto Tribunal:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. La jurisprudencia número P./J. 92/99 del Tribunal Pleno, cuyo título es: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.', no es de aplicación irrestricta sino limitada a aquellos

supuestos en que no sea posible disociar con toda claridad la improcedencia del juicio, de aquellas cuestiones que miran al fondo del asunto, **circunstancia que no acontece cuando la inviabilidad de la acción resulta evidente, porque la norma impugnada no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones de la entidad actora**, pues tal circunstancia revela de una forma clara e inobjetable la improcedencia de la vía, sin necesidad de relacionarla con el estudio de fondo del asunto; en esta hipótesis, no procede desestimar la improcedencia para vincularla al estudio de fondo sino sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo privilegiarse en tal supuesto la aplicación de las jurisprudencias números P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001 de rubros: **'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.'** y **'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.'**, de las que se infiere que para la procedencia de la controversia constitucional se requiere que por lo menos exista un principio de agravio, que se traduce en el interés legítimo de las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, para demandar la invalidez de la disposición general o acto de la autoridad demandada **que vulnere su esfera de atribuciones.**" Época: Novena Época, Registro: 181168, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 50/2004, Página: 920.

Así, en el caso no se actualiza un principio de afectación respecto a la esfera competencial del promovente, pues, como se advirtió con anterioridad, de los conceptos de invalidez no se advierte que se desarrollen argumentos dirigidos a acreditar que los anexos impugnados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, invada su esfera de atribuciones constitucionales o bien, le genere alguna afectación, es por ello que se insiste que la controversia constitucional es un medio de control creado para dirimir conflictos entre los órganos, poderes o entidades a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución General, cuyo objeto principal es solicitar la invalidez de las normas generales o actos que invadan o afecten las esferas competenciales de cada poder, entidad u órgano originario, que la Constitución General prevé, a fin de preservar el sistema federal y el principio de división de poderes, situación que no se actualiza en el presente caso.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Por todo lo anterior es que ese Alto Tribunal deberá decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional, en términos del artículo 20, fracción II, en relación con los numerales 19, fracción VIII, y 10, fracción I, todos de la Ley Reglamentaria y 105, fracción I de la Constitución General, ya que el actor no cuenta con interés legítimo para promover dicho medio de control constitucional, dado que pretende desvirtuar la naturaleza del presente juicio a fin de hacer valer supuestas violaciones a derechos humanos.

III. CONSIDERACIONES PREVIAS.

A. División de poderes.

La teoría de la división del Poder, originalmente fue postulada por Nicolás Maquiavelo, John Locke y Montesquieu, autores de los que de una evolución ideológica ha podido desprenderse que la división a que hacían referencia era una interrelación organizada de actividades legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales.

A partir de ello, el constitucionalismo moderno se ha construido sobre una base orgánica que segmenta la actuación del Estado en un ejercicio equilibrado del poder, con la finalidad de mantener lo que se denomina "Estado de Derecho".

De esta forma, la importancia de la división de poderes radica en la función que se le ha asignado, como baluarte del propio régimen constitucional, instaurándose como uno de los elementos fundamentales de la matriz teórica del Estado moderno.

Conforme a ello, logra asignar de manera diferenciada el ejercicio del poder público a diversos órganos, a fin de evitar una concentración que pudiera vulnerar los derechos individuales y posteriormente se establece un esquema de asignación de competencias entre órganos, con la finalidad de que tal organización permita un eficaz cumplimiento de las tareas estatales.

En la práctica, la división de poderes no ha funcionado de manera absoluta o radical, más bien, los poderes han actuado de acuerdo a su respectiva competencia, desarrollando en una forma flexible las atribuciones que les han sido conferidas por el Poder Constituyente, interactuando cada una con la otra.

Es de destacarse la fórmula de división de poderes o funciones que consagra la constitución, de acuerdo con el Maestro Elisur Arteaga Nava, en la que se apuntan cuatro objetivos principales:

- 1 Atribuir de manera preferencial a uno de los poderes una función en específico, en la cual se puede permitir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o les sea atribuida cierta forma de actuar en ella.
- 2 Permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen unos a otros.
- 3 Que se dé entre ellos una forma de colaboración o perfeccionamiento.
- 4 Establecer mecanismos en virtud de los cuales uno de los poderes se defiende de la acción de otro.

De este modo, al Poder Legislativo se le atribuye de manera preferente la función de creación normativa que permitirá lograr un andamiaje jurídico que tutele los derechos fundamentales de las personas.

Por otra parte, al Poder Ejecutivo se le encomienda la función administrativa y de gestión de las tareas estatales a fin de asegurar que se brinden los servicios y atenciones necesarias que la sociedad demande.

Finalmente, como un poder de revisión y control de la regularidad legal y constitucional, el Poder Judicial asume la atribución de resolver los conflictos que pudieran suscitarse entre los particulares y estos con el Estado, a fin de preservar el Estado de Derecho.

Es por lo anterior que la división de poderes, es un principio que, pese a que asegura una separación orgánica, al derivar de un mismo ente constituido debe ser analizado de manera flexible en cuanto a su conformación constitucional.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Al respecto, si bien la división de poderes se encuentra tutelada en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no supone que las demás disposiciones constitucionales le resulten ajenas a cada uno de los Poderes en las funciones que desarrollan, puesto que todo el marco constitucional debe regir para cada uno de ellos.

Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente:

"DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE: La división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales, corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109 constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder Judicial, a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la propia Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro poder. Para que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas, y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia, puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación estricta. Época: Séptima Época, Registro: 237686, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: Página: 117."

Ahora bien, es de entenderse que los órganos constitucionales autónomos son entes creados por la Constitución, que participan en la dirección política del Estado, sin pertenecer a ninguno de los poderes tradicionales, por lo que su



actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), sin que con ello altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado, por el contrario, son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado Constitucional de Derecho.

B. Órganos Constitucionales Autónomos.

Cita Filiberto Valentín Ugalde Calderón¹, la evolución de la teoría clásica de la división de poderes en la que se concibe a la organización del Estado, en los tres poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial, ha permitido que, en la actualidad, se considere como una distribución de funciones o competencias para hacer más eficaz el desarrollo de sus actividades; asimismo, se ha permitido la existencia de órganos constitucionales autónomos en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales.

Su actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado. Son órganos indispensables en la evolución contemporánea del Estado Constitucional de Derecho.

De esta manera, los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes del Estado.

También pueden ser los que actúan con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca

¹ "Órganos constitucionales autónomos". Revista del Instituto de la Judicatura Federal número 29.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1100/2015, señaló que:

*"...los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal."*²

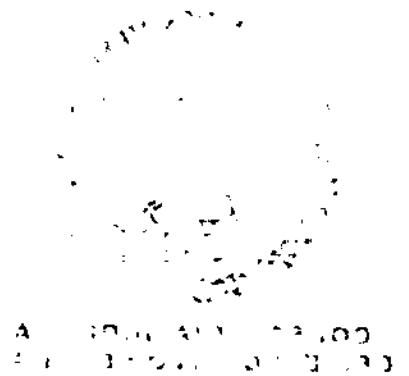
a. Características de los órganos constitucionales autónomos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 20/2007 y P./J. 12/2008³, ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos:

- Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

² Tesis 2a. CLXVI/2017 (10a.), de rubro **"GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS."**

³ Tesis: P./J. 20/2007, emitida en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647 de rubro **"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."**, así como la diversa P./J. 12/2008, emitida en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871 de rubro **"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS."**



- Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que, por su especialización e importancia social, requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.
- La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

De los anteriores puntos, se pueden identificar las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos, mismas que son:

- a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal.
- b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación.
- c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
- d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Acorde a lo anterior, se tiene que los órganos constitucionales autónomos, pese a su independencia operativa, mantienen relaciones con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin que se presente una subordinación frente a alguno de ellos.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Asimismo, la autonomía encuentra su explicación en diversos motivos entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

- a) La necesidad de contar con un ente especializado técnica y administrativamente.
- b) La conveniencia de un órgano específico que ejecute las tareas que no deben ser sujetas a la coyuntura política, pero que son parte de las atribuciones naturales del Estado.
- c) En el caso de las autoridades electorales, la necesidad de contar con las máximas garantías de imparcialidad en los procesos electorales.

Un legítimo órgano autónomo cuenta con especialización en su área y no se guía por intereses partidistas o situaciones coyunturales, sino con estricto apego a la legalidad.

En la medida en que un órgano tenga independencia respecto de los poderes tradicionales y se evite cualquier injerencia gubernamental o de otra índole, se asegura y garantiza su autonomía, siempre en estricto apego al principio de constitucionalidad, pues la limitante de la autonomía radica precisamente en que sus actos se encuentren apegados a dicho principio.

b. Tipos de autonomía.

- **Técnica.**

Es la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia específica que les ha sido asignada, mediante procedimientos especializados, con personal calificado para atenderlos.

Estos entes no podrán estar sometidos a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado.

- **Orgánica o administrativa.**

Los que de manera funcional no dependen jerárquicamente de ningún otro poder o entidad.

- **Financiera-presupuestaria.**

A estos órganos se les permite definir y proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos económicos que les sean asignados para el cumplimiento de sus fines. Con dicha suficiencia económica, se les brinda un margen de acción amplio en el desarrollo de sus actividades.

- **Normativa.**

Son aquellos que se encuentran facultados para emitir sus reglamentos, políticas, lineamientos y, en general, todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas.

- **De funcionamiento.**

Es una combinación de los otros tipos de autonomía, implica que los organismos cuenten con la capacidad de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual involucra, tanto a la autonomía técnica como a la orgánica, financiera-presupuestal y normativa.

- **Plena.**

Implica una autonomía total.

No obstante lo anterior, la autonomía de que gocen determinados entes, debe guardar un estricto apego a las disposiciones constitucionales, pues éste es el marco normativo que les da origen y las instrumenta.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Ahora bien, en términos del artículo 2, fracción XV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos son las personas de Derecho Público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las que se le asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.

El periodo de integración presupuestaria que deben seguir los órganos autónomos es el procedimiento que se encuentra previsto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.⁴

4 Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;

d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;

e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;

f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;

II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación:

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

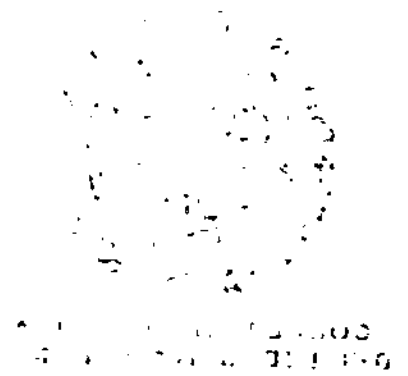
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos;

d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y

III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones:

a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;



En ese sentido, la autonomía presupuestaria permite que los órganos correspondientes tengan libertad de programar, diseñar y aprobar sus proyectos de presupuesto, sin que ello implique el desconocimiento de las máximas constitucionales, es decir, su margen de acción sólo encuentra límite o directriz al cumplimiento de los requisitos que la Constitución establezca.

La autonomía financiera ha sido tratada en la literatura como autonomía de gestión, aludiendo entonces a la capacidad para resolver sobre la administración y manejo de los fondos en general, junto con los recursos humanos y materiales utilizados para llevar a cabo sus tareas.

En tal contexto, la autonomía de gestión implica la autonomía de determinación presupuestal, que posibilita al órgano proyectar sus necesidades económicas a partir de su plan de actividades; la autonomía administrativa, que permite llevar a cabo las gestiones administrativas de forma independiente; y la autonomía de fiscalización, estrechamente vinculada a los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, es de señalarse que, con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, se estableció como obligación constitucional que todas las remuneraciones se ajustarían a los parámetros establecidos en el citado numeral 127.

Dicho ajuste se realizaría de forma libre y autónoma por cada ente, al momento de que presentara su presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente al de la

b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en esta Ley;

c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo.

Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

vigencia de la reforma constitucional, tal como se advierte de los artículos Primero y Segundo Transitorios que se transcriben a continuación:

"Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto.

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto."

De lo expuesto con antelación, se puede observar que los entes autónomos que ejecutan gasto, así como los que actúan en términos de su libertad de gestión, determinarán sus presupuestos, sin que el cumplimiento de la Constitución General pueda estimarse como violatorio de la autonomía de que detentan.

C. El Presupuesto de Egresos.

1. Bases constitucionales del Presupuesto.

Primeramente, es de mencionarse que el presupuesto es el instrumento, producto de la recaudación de impuestos, y concentra las partidas o asignaciones de las que podrá disponer el Estado para la consecución de sus fines en la satisfacción de necesidades colectivas, de ahí que tal instrumento oriente y rija la actividad económica y financiera del país.

El sustento para la elaboración del presupuesto se encuentra establecido en los artículos 25, 26, 31, fracción IV, 73, fracciones VII y XXIX, 74, fracción IV, 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que, de forma sintética, refieren lo siguiente:

a) Artículo 25 constitucional. Rectoría del Estado para garantizar el desarrollo nacional.

A fin de cumplir con los objetivos de alentar y proteger la actividad económica, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Bajo estos principios, es que se podrá establecer una política clara que permita la conducción de un gasto ordenado y planeado por el Estado, mismo que permita un desarrollo sostenido y asegure la viabilidad de las actividades oficiales.

b) Artículo 26 constitucional. Planeación del Desarrollo Nacional.

Los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución determinarán los objetivos de la planeación, misma que se traducirá en el ejercicio ordenado de los recursos públicos.

De esta manera, la planeación será democrática y deliberativa, a través de mecanismos por los que se logre cumplir con las expectativas sociales de bienestar.

En estas condiciones, el Estado, por conducto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como órgano autónomo, podrá realizar mediciones de la pobreza, de los programas, objetivos, metas y acciones vinculados al desarrollo social.

Así también, a partir de una adecuada planeación el presupuesto podrá ser aplicado en los rubros que, de forma prioritaria, se vinculan con el desarrollo nacional y al mismo tiempo, ser punta de lanza para las demás tareas del Estado.

c) Artículo 31, fracción IV, de la Constitución General. Obligaciones de los mexicanos y principios tributarios.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

El origen del presupuesto lo encontramos en las actividades que el Estado realiza con la finalidad de obtener los recursos económicos, de entre ellas, se encuentra la labor de recaudación en la que participan los contribuyentes de forma proporcional y equitativa.

La obtención de recursos económicos permitirá que éstos sean aplicados de forma efectiva en la atención de las necesidades de la población; de esta forma, la aplicación de los recursos recaudados permitirá un adecuado desarrollo nacional.

d) Artículos 73, fracciones VII y XXIX; y 74, fracción IV de la Constitución. Facultades del Congreso y de la Cámara de Diputados para legislar en materia presupuestaria.

El Congreso de la Unión está facultado para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, de ahí que la actuación del Poder Legislativo sea de relevante importancia en el proceso de creación del Presupuesto.

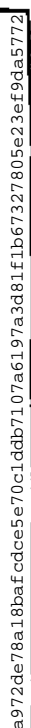
Conforme al procedimiento constitucional de integración del Presupuesto, la Cámara de Diputados, aprobará de manera anual o, de ser el caso, modificará el proyecto correspondiente.

Para tales efectos, el Ejecutivo tendrá hasta el 15 del mes de noviembre para hacer llegar a la Cámara su iniciativa o propuesta.

Como límite al ejercicio del presupuesto, se prevé que no puedan aprobarse partidas secretas fuera de las necesarias.

e) Artículo 75 constitucional. Presupuesto de Egresos.

El artículo 75 constitucional prevé diversas directrices que regirán en la creación del presupuesto como son:



Identificación de remuneraciones. En la aprobación del Presupuesto, no se podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley.

En caso de que no se contemplara u omitiera hacer mención a la remuneración de algún empleo, se considerará como tal la que se hubiera fijado en el Presupuesto del ejercicio anterior o en la ley que estableció el empleo.

Limitación de remuneraciones. La determinación de las remuneraciones en todo momento será respetando las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución.

Tabuladores de órganos autónomos u otros poderes. Respecto a la autonomía de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución; éstos, bajo las directrices previstas en la Carta Magna, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos.

En ese sentido, debemos entender que, dentro de la autonomía de los órganos, deberán respetarse las bases mínimas y límites máximos señalados en la propia Constitución, dejando a dichos órganos para que en ejercicio de sus atribuciones ejerzan el presupuesto de forma adecuada y conforme a la Norma Suprema.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos deberá seguir el procedimiento de aprobación previsto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, y demás disposiciones legales.

f) Artículo 127 constitucional. Bases de la determinación de la remuneración.

En este precepto, se establecen las bases esenciales de la remuneración de los servidores públicos, directrices que serán aplicados a los miembros de la




CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y órganos autónomos, y cualquier otro ente público.

Atento a ello, la remuneración, en términos constitucionales, deberá ser adecuada al desempeño de las funciones, empleo, cargo o comisión; proporcional a sus responsabilidades e irrenunciable.

De esta forma, la remuneración se determinará de manera anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, siguiendo las bases siguientes:

1. La remuneración es toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
2. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
3. Ningún servidor público podrá recibir remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, dicha suma no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
4. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos



o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condición general de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servicios públicos por razón del cargo desempeñado.

5. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos tanto en efectivo como en especie.
6. Es competencia del Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, expedir las leyes para hacer efectivo el contenido del artículo 127 de la Norma Fundamental y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en dicho precepto constitucional.

Conforme a lo anterior, es oportuno señalar que, de no seguirse las bases constitucionales indicadas, así como las normas que las instrumentan, se estaría ante el desconocimiento de los parámetros fijados por el Constituyente en materia presupuestaria.

Atento a ello, toda erogación que no se encuentre sustentada en los parámetros constitucionales podría ser considerada como indebida, de ahí que resulte importante cumplir con los elementos que rigen al presupuesto y las reglas para su ejercicio.

2. Principios rectores del Presupuesto de Egresos.

Resulta oportuno precisar que el Presupuesto de Egresos, en su sentido más amplio, es un plan u ordenación racional de la actividad financiera del Estado, que abarca por completo el ciclo financiero, que comienza en el momento en que el Estado detrae la riqueza de las economías de los particulares convirtiéndolas en ingresos **para cubrir los gastos inherentes a su finalidad**



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

de satisfacción de las necesidades públicas, y termina cuando los ingresos se han transformado en servicios públicos o en rentas entregadas por el Estado a las economías privadas.

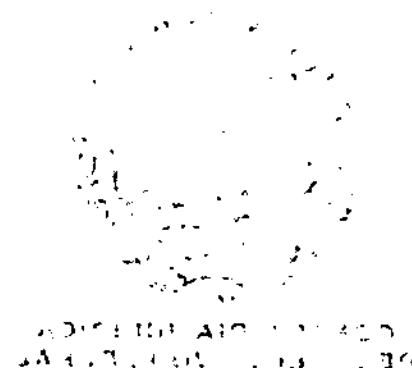
El Presupuesto es, también, la institución que refleja la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el ejercicio del poder financiero del Estado. A partir de dicha perspectiva, se puede afirmar que el *Presupuesto es una Ley de carácter anual, aprobada por el Poder Legislativo*, cuyo contenido básico es la previsión de los ingresos que se estiman recaudar y se autoriza a los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos a realizar los gastos con los límites que la propia Ley de Presupuesto contiene.

Así, debe considerarse al *Presupuesto de Egresos* como un instituto jurídico básico para el desarrollo de la actividad financiera en cuanto refleja la planificación de la misma en un periodo de tiempo determinado.

Ahora bien, en un sentido estricto, es una ley en sentido formal, en tanto que su aprobación anual corresponde a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, es una ley en sentido material, en cuanto regula los poderes atribuidos a la administración financiera en materia de gasto, y tiene un claro contenido jurídico que afecta a la administración, es decir, sus normas tienen la característica de ser generales, abstractas e impersonales.⁵

Esto es, se trata de una ley que regula el modo de gastar los medios económicos del Estado, y por lo tanto es un documento único e indivisible, emanado del órgano legislativo en el ejercicio de facultades constitucionales expresas, sin que sea válido separar la parte que contiene el plan de gastos, del texto legal que lo aprueba, pues el acto legislativo es unitario por naturaleza.

⁵ Tesis: I.3o. (I Región) 20 A (10a.), Página: 1208, Décima Época, Registro: 2005201, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Constitucional. "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011. SU ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, ES UNA NORMA JURÍDICA EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL".



De la misma forma, no debe perderse de vista que la facultad legislativa del órgano correspondiente, es reservada, primordial, básica y originaria.

Ahora bien, es de suma importancia destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación se rige por los principios de:

- **Universalidad.** En tanto que debe contener todos los gastos del poder público.
- **Unidad.** Debe estar contenido en un sólo documento.
- **Especialidad.** Debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Es común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son:
 - a) **Ramos:** Corresponden con los distintos poderes, Secretarías o erogaciones específicas como la deuda, las entidades paraestatales, etc.
 - b) **Programas:** Las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los programas que tenga a su cargo, los cuales, a su vez, pueden dividirse en "subprogramas".
 - c) **Capítulos de gasto:** Son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y, sobre la cual deberá informarse en la Cuenta Pública Anual a nivel de partida de gasto, la cual es el nivel más desagregado en el que se clasifica el gasto público.
- **Planificación.** Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente en el Presupuesto de Egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un Plan de esta naturaleza.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- **Equilibrio presupuestario.** El presupuesto debe estar equilibrado. Los gastos ordinarios deben cubrirse con los recursos obtenidos de los impuestos ordinarios, evitando el recurso al endeudamiento público y el déficit presupuestario.
- **Anualidad.** Tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.
- **Previsión.** Debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública.
- **Periodicidad.** Es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo presupuesto.
- **Claridad.** Debe ser entendible y puede ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación; se cumple al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto.
- **Publicidad.** Se publica en el Diario Oficial de la Federación, para que surta los efectos correspondientes.
- **Exactitud.** Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar.
- **Exclusividad.** Sólo corresponde a la Cámara de Diputados su aprobación. En el Presupuesto, exclusivamente se detallarán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole.
- **Transparencia.** Los recursos y gastos de la Federación deben ser de dominio público, siempre que no estén clasificados como información reservada o confidencial.



- **Continuidad.** Los elementos del Presupuesto deben apoyarse en resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta las expectativas de los ejercicios futuros.
- **Flexibilidad.** El presupuesto tiende al cumplimiento de los objetivos del Estado, para lo cual deben posibilitarse las adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto público federal, que sean necesarias para su consecución.

Los principios antes referidos establecen reglas de naturaleza jurídica y de contenido técnico, que se configuran al servicio del más satisfactorio cumplimiento del ciclo presupuestario. Estas reglas deben ser respetadas para una actividad presupuestaria correcta.

En esa tesitura, es de resaltar que la actividad presupuestaria correcta debe estar siempre dirigida a cubrir el gasto público de manera acorde a las necesidades y prioridades de la Nación.

Derivado de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,⁶ al resolver el amparo en revisión 1305/2004, definió el concepto de "gasto público", afirmando que tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos:

"Del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', en relación con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, se infiere que el concepto de 'gasto público', tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las necesidades

⁶ **GASTO PÚBLICO.** Segunda Sala. Amparo en revisión 1305/2004. Jorge Ernesto Calderón Durán. 19 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez. [TA]: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Enero de 2005; Pág. 605.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el concepto material de 'gasto público' estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la colectividad."

En otro criterio, ese Máximo Tribunal⁷ sostiene que el gasto público doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y será siempre gasto público el importe de lo recaudado a través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos:

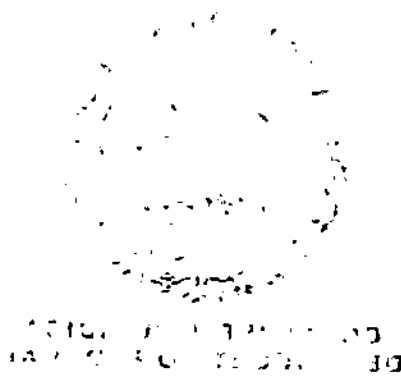
"...el gasto público doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y será siempre gasto público el importe de lo recaudado a través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos. Sostener otro criterio, o apartarse en otros términos de este concepto, es incidir en el unilateral punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios."

Coincidente con lo anterior, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 4, se define formalmente gasto público, de la manera siguiente:

"Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:

- I. El Poder Legislativo;
- II. El Poder Judicial;
- III. Los entes autónomos;
- IV. Los tribunales administrativos;
- V. La Procuraduría General de la República;
- VI. La Presidencia de la República;
- VII. Las dependencias, y

⁷ HOSPEDAJE. EL IMPUESTO RELATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUMPLE CON EL REQUISITO DE QUE SE DESTINE AL GASTO PÚBLICO. Amparo en revisión 2561/97. Hotel Royal Courts, S.A. de C.V., propietario del Hotel Best Western Royal Courts. 26 de abril de 2000. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teófilo Angeles Espino. [TA]; 9a. Época; 1a. Sala: S.J.F. y su Gaceta; Tomo XII, Octubre de 2000; Pág. 248.



VIII. *Las entidades.*"

Ahora bien, conforme al artículo 134 de la Constitución Federal, el gasto público, en relación con el presupuesto federal, debe ejercerse con base en criterios de **legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.**

Bajo tal consideración, el artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que "[l]os *ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones aplicables, realizarán los cargos al Presupuesto de Egresos, a través de los gastos efectivamente devengados en el ejercicio fiscal y registrados en los sistemas contables correspondientes.*"

Ahora bien, desde una concepción amplia, se puede considerar que las disposiciones aplicables del gasto público que refiere el artículo 52 en comento, no pueden equipararse a la legalidad o cobertura presupuestaria, pues es evidente que la norma se refiere a "las disposiciones aplicables". Es decir, el referido numeral puede entenderse como un sometimiento a la legalidad por la Administración Pública Federal, los poderes Legislativo y Judicial, así como por los órganos constitucionales autónomos, estados y municipios *ratione materiae*, es decir, el hecho de llevar a cabo una determinada actividad como lo es la actividad financiera, **impone la exigencia de someterse a la legalidad vigente.**

Conforme a los razonamientos expuestos con anterioridad, se estima que el Constituyente determinó, en el artículo 74 del Pacto Federal, qué facultades le corresponderían, en exclusiva, a la Cámara de Diputados, dentro de las cuales se encuentra la prevista en la fracción IV, consistente en aprobar, anualmente, el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Dicha aprobación implica un procedimiento legislativo específico que incluye la iniciativa, discusión, examen, en su caso, modificación y aprobación del, Presupuesto de Egresos de la Federación.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En adición a lo anterior, la disposición constitucional referida prevé como parte de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que la misma aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación: previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

Al respecto, se observa que las únicas restricciones que tiene la Cámara de Diputados para aprobar o, en su caso, modificar el proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación son aquéllas previstas en la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanen, sin la intervención de ningún otro órgano del Estado, acorde sólo a los principios ya referidos.

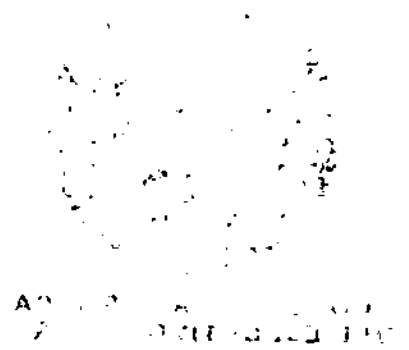
Con la finalidad de ejemplificar lo anterior, a nivel constitucional, no debe perderse de vista que dicha Cámara está obligada a:

- Autorizar las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión e infraestructura (artículo 74, fracción IV de la Constitución General), y
- Señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por ley (artículo 75, primer párrafo de la Constitución General).

Por ello, las únicas limitantes para la Cámara de Diputados al aprobar o modificar el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, son las disposiciones constitucionales o de ley que expresamente establezcan asignaciones o requisitos que deban observarse obligadamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, desde luego, que previamente se hayan aprobado los ingresos suficientes para cubrir el gasto público.

En ese sentido, es importante traer a colación que el Presupuesto de Egresos de la Federación es una ley que se forma gracias a la composición y naturaleza democrática de la República, por lo cual, su aprobación se encomienda a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, toda vez que se considera la representante más directa de la soberanía popular.

Ahora bien, en la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación, participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la siguiente manera:



1. El Poder Ejecutivo cuenta con la facultad exclusiva de formular el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
2. La Cámara de Diputados, al tener el predominio de la representación popular en su conformación, cuenta, por mandato constitucional, con la facultad exclusiva de examinar, discutir y, en su caso, modificar el Proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Federal, a través de un proceso legislativo caracterizado por la pluralidad en su conformación y en su naturaleza democrática que, entre otros puntos, se sustenta en el principio de "No hay tributo sin representación".

Tal esquema resulta congruente con los principios de soberanía popular y división de poderes, consagrados en los artículos 39 y 49 de la Constitución Federal, los cuales, en esencia, rechazan frontalmente la idea de la concepción del Presupuesto de Egresos de la Federación como mero acto administrativo.

Por lo tanto, el gasto público contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación es el resultado de una relación de colaboración en materia presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados, que constituye el instrumento en el que se concretan las decisiones adoptadas que afectan el funcionamiento del Estado en su conjunto.

Es importante tomar en cuenta que se trata de un documento jurídico que contempla obligaciones y derechos en materia financiera para la Administración Pública, expresadas en términos contables.

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Presupuesto de Egresos de la Federación es una ley que regula el compromiso del gasto público, entendido como una relación jurídica que surge cuando la Administración obliga o compromete al Presupuesto para el pago de diversas obras o servicios públicos. Con la ordenación de los gastos públicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene la naturaleza de ley respecto



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

de los créditos presupuestarios, en tanto que tiene el valor de una autorización cuantitativa, cualitativa y temporal.

Asimismo, se debe advertir que la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación está integrada por un Decreto y sus anexos. Así, tanto los estados numéricos del Presupuesto que son consideraciones de tipo económico, como su articulado son mandatos concretos dirigidos a la Administración, que no deben considerarse como elementos aislados. Asimismo, la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación, previo procedimiento legislativo, es susceptible de modificarse por la Cámara de Diputados, pues las facultades de la Cámara respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación son plenas y francamente de legislación.

Como ya ha quedado señalado, se trata de una norma que se rige por los principios de universalidad, unidad, y no afectación, por lo que el gasto público no debe interpretarse como susceptible de dividirse, en atención a que cada uno de los gastos contemplados en dicho presupuesto tiene efectos y consecuencias en la totalidad del gasto público.

Así, debe considerarse que constreñir a las autoridades que intervienen en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a incorporar recursos para un determinado rubro, sin que ello esté previsto en las leyes federales, implicaría la afectación del proceso programático presupuestario, en razón de que el Ejecutivo Federal elabora el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación basándose en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, proponiendo las estimaciones de recursos que le permitan la ejecución de dichos programas y, consecuentemente, el desarrollo de las actividades de la Administración Pública Federal.

Del mismo modo, dicho Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla los elementos que, en ejercicio de su autonomía, le remiten al Ejecutivo Federal, los Poderes Legislativo Federal y Judicial Federal, así como los órganos constitucionales autónomos, únicamente para su incorporación al Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ahora bien, la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación autoriza los recursos que serán destinados al desarrollo de los programas federales del Poder Ejecutivo, de los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos, contando con la atribución de modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, asignando los recursos en función de las prioridades que determine dicha Cámara.

Conforme lo anterior, es de tomarse en cuenta que no se puede atentar contra lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitucional Federal, a través del cual se establece a nivel constitucional, la presupuestación basada en resultados, incorporando como herramienta de retroalimentación para el proceso de programación-presupuesto a la evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de los programas, pues se obligaría a reasignar el gasto sin considerar los resultados obtenidos.

De esta forma la materialidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se rige por las normas presupuestarias, en tanto que las remuneraciones constituyen erogaciones que realiza el Estado de forma directa o indirecta para la consecución de sus fines, **de ahí que deban de cumplirse con los límites o topes previstos en la propia Constitución para efecto del ejercicio del gasto.**

3. El ciclo presupuestario.

La planeación nacional de desarrollo no es una facultad que competa en exclusiva al Ejecutivo Federal; tampoco se agota en la expedición de un Plan Nacional de Desarrollo, sino que se surte también, anualmente, con la expedición de la Ley de Ingresos y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que son los instrumentos primarios encaminados a la ejecución de los programas y acciones que el plan importa.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

De esta forma, el Decreto de Presupuesto es un instrumento de planeación regulador del gasto público, considerando que los recursos públicos son limitados y deben enfocarse en la atención de necesidades con alto sentido social y alcance de interés colectivo, por su carácter eminentemente vinculatorio entre gobernantes -ejecutor de acciones de beneficio público- y gobernados -obligados al pago de contribuciones en términos del artículo 31 constitucional-, lo que debe concretarse con absoluta rigurosidad técnica y constitucional, pues su cabal cumplimiento involucra diversos órganos estatales y exige la más estricta escrupulosidad financiera.

Ahora bien, en la materialización del presupuesto es necesario cumplir con su ciclo de creación y aplicación, el cual se encuentra conformado por siete etapas, consistentes en planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, las cuales se describen a continuación:

- **Planeación:** Se realiza considerando el gasto de cada peso en función de las metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

La misma está orientada a resultados, por lo que debe ser estratégica operativa y participativa, partiendo de los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, debe considerarse la situación económica global del país, incluyendo la estimación de crecimiento del PIB, a efecto de advertir posibles riesgos de estabilidad y crecimiento económico, así como el precio del barril del petróleo, tipo de cambio de dólar, inflación, tasa de interés internacional y crecimiento de Estados Unidos⁸.

- **Programación:** En este ciclo deben definirse los programas presupuestarios que tendrán a cargo cada dependencia y entidad, así como la cantidad de recursos que serán necesarios para cumplir los objetivos.

⁸ Página consultada: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Planeacion#Planeacion>



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Este ciclo constituye, por ende, un reflejo de la Ley de Ingresos, en relación a cuánto debe recaudarse y cómo deberá distribuirse, concluyendo en el momento en que el Ejecutivo envía al Congreso de la Unión el paquete económico.

- **Presupuestación:** Lo constituye el Presupuesto de Egresos de la Federación, en cuyo contenido, se definen las cantidades, distribución y destino de los recursos públicos incluyendo los tres poderes de la Unión, así como los organismos constitucionales y Estados y Municipios.
- **Ejercicio y Control.** Es el siguiente ciclo una vez que el presupuesto de egresos fue aprobado, lo cual va a acontecer del 1 de enero al 31 de diciembre.

Asimismo, el gasto que lleven a cabo las dependencias no es discrecional, sino que está controlado al logro de resultados.

- **Seguimiento:** Comprende la generación de información sobre los avances en metas y aplicación de recursos asignados a programas, lo cual va a permitir evaluar la estrategia y toma de decisiones con información actual o relevante.

Esto es, se permite una valoración objetiva de los programas, además asegura que los recursos ocurran de manera efectiva para lograr los objetivos de la planeación.

- **Evaluación:** Consiste en analizar de manera sistemática y objetiva los programas, a fin de determinar la pertinencia y logro de objetivos y metas, comprobando la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

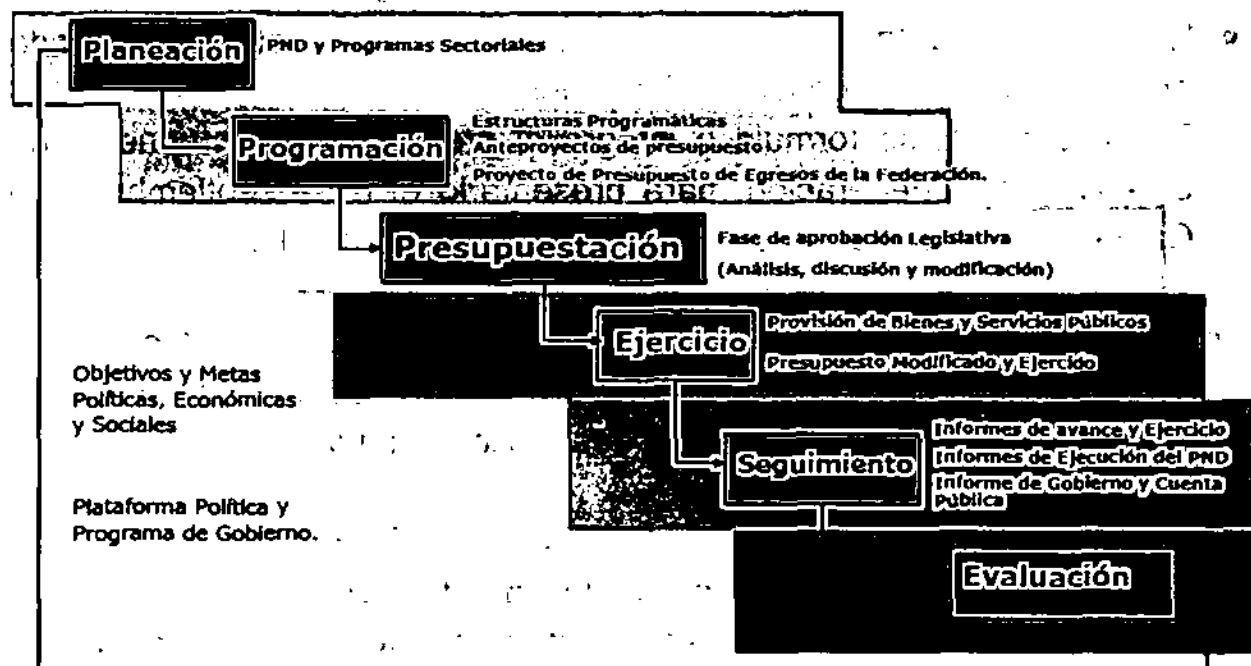
La evaluación debe realizarse por evaluadores externos peritos en la materia a efecto de tener resultados confiables y objetivos, que conlleven a perfeccionar los programas.

Entre los tipos de evaluación están la de Diseño, Consistencia y Resultados, Procesos, Impacto, Específica y Estratégica.

- **Rendición de cuentas:** Finalmente, en este ciclo, se pretende dar certeza y transparencia en el gasto público, dando un informe sobre los resultados a efecto de corregir deficiencias y permitir la fiscalización.

Para un mejor entendimiento de lo anterior, se esquematiza de la manera siguiente:

El Ciclo Integral del PEF



En este mismo sentido, se puede señalar que el Presupuesto es un acto legislativo programático anual, cuya determinación compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, constituye en sí mismo una autorización o habilitación a la administración pública para que utilice los recursos asignados y su ejecución del gasto deberá ser estrictamente para lo que fue programado.

En este punto, cabe precisar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseña la política fiscal a través de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, función que desempeña mediante una calendarización con la finalidad de lograr la sincronía del proceso presupuestario.

Esta organización en la planeación presupuestaria se desarrolla de la manera siguiente:

- De febrero a agosto, sucede la elaboración de la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- De junio a agosto, se lleva a cabo la preparación preliminar del Presupuesto de Egresos de la Federación.
- De julio a agosto, se determinan las referencias de gasto preliminares.
- En agosto, se determinan los techos financieros para el gasto de cada programa, proyecto, entidad o dependencia.
- En septiembre, se formula e integra el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para presentarlo el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados y éste se aprueba antes del 15 de noviembre.

Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevé mecanismos de control y evaluación permanentes del gasto para así conocer el impacto en la economía y el desarrollo de la sociedad mexicana.

Igualmente, la fracción XXII, del artículo 2, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la estructura programática, como el conjunto de categorías y elementos ordenados que define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, delimita la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En abundancia a lo anterior, para cumplir con los citados mandatos normativos, se establecen mecanismos para que la asignación presupuestaria sea racional, transparente y eficiente, bajo estas premisas, se establece que los pilares en los que se fundamenta la ley son el equilibrio presupuestal, la disciplina fiscal y el cumplimiento de metas.

En este orden de ideas, es que las remuneraciones de los servidores públicos se rigen por las directrices presupuestarias que permiten su planeación y aplicación anual.

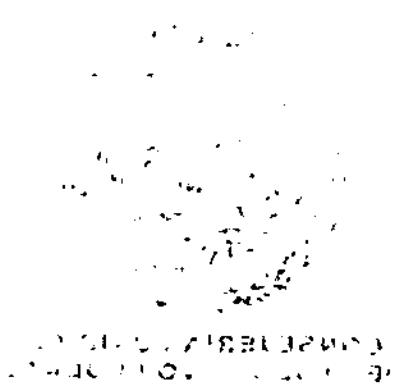
4. Clasificación del gasto público.

El gasto público se clasifica de diversas maneras con la finalidad de identificar de forma directa o indirecta el fin al cual se pretende sea aplicado.

De esta forma, el agregado se conoce como gasto neto, y de aquí se desprende una primera clasificación como gasto programable y no programable:

- **Gasto programable:** Es el conjunto de recursos o pagos que se destinan a cada una de las instituciones que conforman los Poderes de la Unión, es decir, el Poder Ejecutivo (entidades, dependencias y organismos constitucionales autónomos), Legislativo (Cámara de Diputados y Senadores) y Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, etc.).

También incluye las aportaciones federales, aquellos recursos transferidos a las Entidades Federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para que cumplan funciones ya determinadas por la Ley de Coordinación Fiscal. En general, son los recursos destinados a la producción de bienes y servicios estratégicos o esenciales para la población y que se pueden atribuir a los programas que el gobierno lleva a cabo, satisfaciendo así, necesidades y demandas sociales.



- **Gasto no programable:** Corresponde a los recursos o pagos que no financian la operación de las instituciones del Gobierno Federal.

Este tipo de gasto incluye la deuda pública, los estímulos fiscales y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), esto es, los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al que se está presupuestando.

Por ejemplo, cuando el gobierno solicita una compra en 2015, pero recibe el bien o servicio al año siguiente (2016), los recursos se extraen de 2016, cuando se ejecuta el pago, no cuando se solicitó la compra. Asimismo, incluye las participaciones a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que son aquellas transferencias que se realizan en el marco de la coordinación fiscal, para que los ejerzan libremente de acuerdo con sus necesidades, por ejemplo, para sostener su administración pública estatal.

De esta manera, el Presupuesto de Egreso de la Federación presenta tres clasificaciones generales de los gastos del sector público.

- I. Clasificación administrativa.
- II. Clasificación funcional.
- III. Clasificación económica.

I. Clasificación administrativa.

La clasificación en comento, tiene como finalidad establecer un sistema de control previo y administrativo de los gastos públicos, así como facilitar las necesidades de contabilidad de la Hacienda Pública Federal.

Define al ejecutor o administrador directo de los recursos públicos y los organiza en ramos presupuestales e identifica a todos los ejecutores de gasto y facilita la ubicación de los responsables del gasto público, ya que muestra



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

cuánto se asigna a las diferentes instituciones, organismos y empresas que forman parte del aparato estatal.

II. Clasificación funcional.

La presente clasificación agrupa los gastos por función y sub-función de acuerdo con aquello para lo cual serán destinados, su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastos que se destinan a cada tipo de servicios.

Así también, refleja los objetivos y prioridades de inversión y desarrollo del Gobierno Federal. Estas prioridades están presentes en las funciones o actividades específicas que nos muestran qué o cuántos recursos se asignarán para llevarlo a cabo.

III. Clasificación económica.

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto según su naturaleza económica y objeto, ya sea gasto corriente o de capital. Esta distribución permite medir la influencia que ejerce el gasto público sobre la economía, a su vez, muestra el tipo de demanda que realiza el sector público en bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la administración o la producción.

La finalidad de esta clasificación es aportar información sobre el impacto y la influencia que el sector gubernamental tiene en el desarrollo económico de un país, así como saber a qué sectores contribuyen y en qué escala.

Respecto a lo anterior, es oportuno tener especial atención a la clasificación económica, toda vez que es en esta en donde encontramos el ramo correspondiente al pago de remuneraciones de los servidores públicos federales -RAMO 1000-.

5. Análisis de la integración del manual de percepciones.

Con motivo de las reglas en estudio, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, debe ser un instrumento que contenga el tabulador de remuneraciones ordinarias y las reglas para su aplicación conforme a las previsiones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, siempre guardando congruencia y apego con el artículo 127 de la Constitución Federal.

De esta forma, el Manual contemplará las remuneraciones de los servidores públicos considerados como operativos, mandos, de enlace y militares, considerando remuneración a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Del mismo modo, quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Por su parte, las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los préstamos o créditos, no formarán parte de las remuneraciones, cuando se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Ahora bien, no debe de perderse de vista que el ajuste en las remuneraciones de los servidores públicos, solo afecta a las percepciones ordinarias complementarias, al sueldo base tabular, y por tal motivo no forman parte del sueldo básico, de ahí que este último no va a ser afectado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, como se puede advertir desde la exposición de motivos de 13 de abril de 2010:

“(…)

EXPOSICION DE MOTIVOS

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES.

INCIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

(...)

Para dar coherencia a ese esquema, se adopta la acepción amplia de servidor público y se define el termino de remuneración para incluir en él, además del salario toda percepción en dinero o en especie que perciba quien realiza una labor en cualquier entidad pública, de manera que el nuevo andamiaje constitucional permita combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal o para fines distintos al servicio público. A esto se agregó una regulación completa que garantizara la eficacia de la propuesta.

(...)

De esta manera, la reforma pretende poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignaban las percepciones de los servidores públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera, sin ningún parámetro y escasos controles.

(...)"

En ese sentido, las demás prestaciones al ser adicionales y regirse bajo los principios presupuestarios, pueden ajustarse para efecto de que sean acordes con la política en la materia.

En efecto, las compensaciones son remuneraciones complementarias al sueldo tabular que, si bien son cubiertos a los servidores públicos y se integran a su sueldo y salario, no forman parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social, salvo aquéllas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables, así como tampoco debe considerarse para el cálculo de indemnización o liquidación.

No menos importante es el señalar que si bien los ingresos complementarios se encuentran previstos en el tabulador, no quiere decir que éste no pueda ser modificado, dado que, por ser una remuneración complementaria, la misma no incide sobre el sueldo tabular o básico.

Esto puede incluso ser corroborado de la redacción del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias Entidades de la Administración Pública Federal.



Asimismo, el Manual citado señala que el importe mensual bruto por sueldos y salarios, que se otorga a los servidores públicos, debe integrarse por el sueldo base tabular y las compensaciones ordinarias complementarias.

Como se puede advertir, el Manual de referencia excluye a las compensaciones del sueldo base tabular, al señalar claramente que constituyen remuneraciones complementarias al mismo, en virtud de que, no obstante que las mismas fueron percibidas como trabajadores, año con año, no forman parte de la base para determinar las prestaciones básicas ni las cuotas de aportación social, por tal motivo, las mismas pueden modificarse, atendiendo al presupuesto de egresos de la federación.

De lo anterior, se desprende que el salario tabular es el importe consignado en los tabuladores regionales base para calcular las prestaciones, mientras que las remuneraciones complementarias son distintas al sueldo base tabular y las cuales no forman parte para el cálculo del mismo, y que por ello éstas últimas pueden disminuirse atendiendo a las finanzas públicas, sin que por ello se contravenga el principio de irretroactividad, pues no existe un derecho adquirido de que siempre se otorguen los ingresos complementarios, o en su caso el mismo monto.

En este sentido, se debe llegar a la conclusión de que si bien es cierto, las remuneraciones complementarias se encuentra dentro del Manual de Percepciones de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, tal circunstancia no la hace ser parte del salario tabular, ya que dicha circunstancia se deriva de que es un concepto distinto y que en el Manual se detallan las percepciones monetarias y en especie, así como prestaciones que se cubren para cada nivel jerárquico; por lo que afirmar lo contrario se llegaría al absurdo de considerar cualquier cantidad establecida en el multicitado Manual como parte del salario tabular.

Por ende, se debe hacer hincapié de que la modificación a los sueldos y salarios de los servidores públicos recae sobre las remuneraciones



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

complementarias, y no, sobre el sueldo base tabular, el cual no puede ser disminuido en perjuicio de los trabajadores, ello derivado de la protección al salario de la cual gozan los trabajadores de confianza.

Resulta aplicable por analogía, el siguiente criterio:

"COMPENSACIÓN GARANTIZADA. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL VIGENTES DE 2007 A 2013, AL NO INCLUIRLA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Conforme al citado precepto, las 'compensaciones' no se toman en consideración para calcular las cuotas y aportaciones de seguridad social -salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables-, a pesar de que se refleje su importe en el 'tabulador de sueldos y salarios'. Lo anterior es acorde con los conceptos que integraban el sueldo básico de cotización conforme al artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, esto es, el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación ('compensaciones adicionales por servicios especiales'), los cuales se compactaron en uno solo, es decir, en el sueldo tabular a que se refiere el artículo 17 de la mencionada ley vigente a partir del 1 de abril de 2007, en el cual, no se contempla la 'compensación garantizada'. Por consiguiente, esa prestación no forma parte del cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social en aplicación de los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal vigentes de 2007 a 2013; de ahí que su artículo 2, fracción II, no transgrede el derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, pues tomando en consideración que en éstos no se precisan los presupuestos de acceso al invocado derecho, en relación con la obtención de una pensión jubilatoria, ni la forma de calcular su monto, y se deja al legislador ordinario la regulación de tales aspectos para establecer planes sostenibles que permitan lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, pudiendo establecer reglas para la cuantificación mínima y máxima del salario de cotización, se advierte que las normas generales que no incluyan todas las prestaciones del trabajador en activo en el sueldo base de cotización no violan el citado derecho, máxime que los manuales de percepciones señalados se encuentran subordinados jerárquicamente a la ley de seguridad social aludida y regulan en idéntica forma que ésta la integración del sueldo básico de cotización." Época: Décima Época, Registro: 2011395, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a./J. 42/2016 (10a.), Página: 1159.

Acorde a las anteriores manifestaciones, resultaría inviable considerar que existe una violación a derechos adquiridos o a la irretroactividad normativa, ya que las compensaciones complementarias del salario, no eran parte integrante definitiva de las percepciones de los servidores públicos, al poder ser modificadas cada año, en términos de las autorizaciones correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En efecto, el sueldo base tabular es un sólo concepto y las remuneraciones complementarias si bien está incluidas en el tabulador, lo cierto es que no forma parte del cálculo del sueldo base tabular, de ahí que sea susceptible realizar ajustes sobre las mismas, más si la racionalidad de la medida es mantener la congruencia con el texto constitucional.

En abundancia a lo anterior, en términos del artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, se toma en cuenta el Sueldo del Tabulador Regional, lo que se transcribe a continuación:

"Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como llmite inferior un Salario Mínimo y como llmite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo.

Será el propio Sueldo Básico, hasta el llmite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación."

Ahora bien, el artículo citado con antelación señala que el sueldo que se tomará en cuenta es el Sueldo Tabular, el cual es equivalente al Sueldo Base o Sueldo Básico señalado en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

marzo de 2007, el cual se conforma con los conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación.

Por tanto, es dable afirmar que con los ajustes de las remuneraciones de los servidores públicos con motivo de la implementación de la reforma constitucional a los artículos 75 y 127, es acorde al esquema jurídico que rige al presupuesto y a las remuneraciones en sí mismas, posibilitando la conclusión de que no puede considerarse que existan violaciones a derechos adquiridos o al principio de irretroactividad normativa.

Consecuentemente, las remuneraciones, en todo momento han estado sujetas a cambios o ajustes a cada periodo de renovación presupuestaria, pues, como se ha analizado, estas percepciones se rigen, en un primer momento, por el principio de anualidad y, por otra, por los límites previstos en el artículo 127 de la Constitución General.

D. Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

1. Antecedentes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La Ley de Remuneraciones tiene su fundamento en la reforma efectuada al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, siendo su objeto principal, establecer criterios para crear una política de sueldos de los servidores públicos, fijando un tope máximo en los sueldos que éstos perciben, debido a que muchas remuneraciones son en demasía elevadas, ello aunado a que, en numerosas dependencias y organismos, el sueldo es adicionado con múltiples percepciones que son definidas con total discrecionalidad que, en ocasiones, existe violación de los presupuestos.

Así las cosas, y en aras de dar seguimiento a la imperiosa necesidad de regular las percepciones de los funcionarios públicos, la iniciativa expuso y propuso, la prioridad de establecer un tope a los salarios de los servidores



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

públicos, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones públicas de cualquier naturaleza.

Es de precisar que, en dicho tope salarial, se encierran todas las percepciones en dinero o en especie, además de ser suficiente, decoroso, moderado y equilibrado, entre otros.

Así también, en el mismo se estableció la limitante que ningún servidor público recibiera remuneraciones mayores a las que percibe el Presidente de la República, lo anterior, bajo la premisa de que *"si los más altos jefes ganan la cantidad señalada, se entiende que los subordinados ganarán menos"*.

Lo anterior se aprecia de la lectura de las exposiciones de motivos emitidas tanto por el Senado de la República (por diversos grupos parlamentarios), así como del Ejecutivo Federal, mismas que en la parte conducente señalan:

**"CAMARA DE ORIGEN: SENADORES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

México, D.F., a 9 de noviembre de 2006.

(...)

A través de las leyes y de los presupuestos de egresos sería posible establecer criterios y crear, así, una política de sueldos públicos, pero es necesario fijar una percepción máxima para todas las esferas públicas de México, tanto de la federación como de las entidades federativas y los municipios, así como para toda clase de instituciones y organismos públicos de cualquier naturaleza jurídica.

En realidad, el establecimiento de un tope máximo en los sueldos es indispensable debido a que muchas remuneraciones son actualmente demasiado altas y a que, en numerosas dependencias y organismos, el sueldo es adicionado con otras percepciones que también se deciden con total discrecionalidad y muchas veces en violación de los presupuestos.

(...)

La dignificación de la función pública atraviesa por sueldos adecuados y transparentes, que no sean aumentados a través de argucias administrativas, las cuales son en realidad prebendas, canonjías, privilegios de los jefes.

Para establecer la base de una política de sueldos de carácter nacional es preciso modificar la Constitución, pues no existe otra forma de lograr que los estados y municipios deban acatar un tope máximo de percepciones.

(...)

La presente iniciativa contiene la propuesta de fijar un sueldo neto máximo para todos los servidores públicos del país, incluidos los funcionarios de



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

*organismos, empresas e instituciones de cualquier género. Dicho sueldo incluiría toda otra percepción en dinero o en especie, de tal manera que se pueda combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal.
(...)"*

INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL. (Iniciativa publicada en la Gaceta del Senado el 25 de enero de 2007).

*"Iniciativa que reforma los artículos 73, Fracción I, Y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(...)"*

*El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos preparados, capaces y honestos, y que puedan ejercer con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.
(...)"*

En este contexto, al presentar el programa de austeridad del Gobierno federal me pronuncié por enviar al Constituyente Permanente una iniciativa que regule y transparente las percepciones de los servidores públicos en los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los tres órdenes de gobierno.

Hoy doy cumplimiento a este compromiso al presentar esta iniciativa al Constituyente Permanente.

Este proyecto pretende ajustar el marco constitucional que sustenta las remuneraciones de todos los servidores públicos del país -en los ámbitos federal, estatal y municipal-, a fin de crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

El Ejecutivo federal a mi cargo está consciente del imperativo de que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que la función pública debe estar orientada por un principio de vocación de servicio hacia la Nación y, por ello, las remuneraciones por el trabajo desempeñado deben mantenerse ajenas a todo exceso. Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa.

Contenido de la iniciativa

En primer lugar, se propone reformar el artículo 73, fracción XI, de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para establecer, por medio de una ley, las bases generales a las que debe ajustarse toda percepción pública a nivel nacional. Ello, con sujeción a los criterios y principios que se proponen para el artículo 127 también de la Constitución. La Ley que emita el Congreso de la Unión, en la medida en que definirá directamente el sentido y alcance de disposiciones constitucionales,



AL GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

vinculará por igual a todos los órganos públicos, entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los órganos constitucionales autónomos; los tres poderes de los estados y equivalentes en el Distrito Federal, incluidos sus órganos autónomos de carácter focal; los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en general, cualquier órgano que realice funciones de Estado.

La atribución que se otorga al Poder Legislativo federal tiene como objetivo establecer bases uniformes para la fijación de remuneraciones, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y municipios.

Por otra parte, se propone también modificar de manera substancial el artículo 127 de la propia Constitución.

(...)

Por ello, en la iniciativa se recoge, por un lado, el actual principio de que los servidores públicos percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función; pero, por otro lado, se establece que los límites mínimos y máximos de tales remuneraciones se deberán precisar, año con año, en los respectivos presupuestos de egresos.

(...)

Cabe señalar que el establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los cuales debe determinarse la remuneración en el artículo 127 de la Constitución es un paso de innegable importancia en el proceso de transparencia en el ejercicio del poder. Dichas regulaciones permitirán a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus servidores.

(...)

Por último y a efecto de que exista a nivel constitucional un parámetro definido, se propone que ninguna remuneración de los servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto federal para la remuneración del Jefe del Estado. Con ello, los distintos órganos públicos contarán con un tope máximo de referencia que evite que, bajo argumentaciones relativas al manejo autónomo de los presupuestos, se adopten sueldos y prestaciones desmedidos.

Régimen transitorio

Tomando en consideración que los límites que, de aprobarse la iniciativa se establecerían en nuestra Carta Magna, deben ser respetados por todos los servidores públicos, aún por aquéllos que se encuentran actualmente en funciones, se prevé incorporar un artículo transitorio que permita ajustar las remuneraciones que rebasen los límites de referencia, a más tardar al inicio del ejercicio fiscal 2008.

No escapa a nuestra atención lo previsto en el párrafo noveno del artículo 94 constitucional que dispone que la remuneración que perciban diversos funcionarios judiciales no podrá ser disminuida durante su encargo.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Sin embargo, es indudable que la ratio legis de dicho principio constitucional está referida a los poderes constituidos precisamente para evitar cualquier acto de presión que aquellos pudieran intentar en contra de la función jurisdiccional, en otras palabras, el precepto es un instrumento que pretende garantizar la autonomía del Poder Judicial.

No obstante, es indiscutible que, si el Órgano Reformador de la Constitución dicta un mandato que autoriza, en su caso, la afectación de algunos funcionarios, ello no vulnera lo dispuesto en el citado artículo 94. Además, nuestro máximo tribunal ya ha definido con claridad que sólo el texto constitucional pudiera permitir, en caso de ser necesario, una aplicación retroactiva de la norma.

En este contexto, no obstante, el perjuicio que se pueda ocasionar a intereses individuales debe atenderse al bien superior de contar con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, con el fin de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos.

(...)"

De las anteriores transcripciones, se desprende que lo regulado en la ley de la materia, no cambia el régimen de las remuneraciones de los servidores públicos, sino que obedece a la declaración del Constituyente que tiene entre otras premisas, las siguientes:

- a. La creación de un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y de las finanzas públicas.
- b. Las remuneraciones que perciben los funcionarios en la administración pública, se fijan proporcionalmente al cargo desempeñado.
- c. Dichas remuneraciones se entregan conforme a lo ordenado tanto en la ley como en el presupuesto.
- d. Ningún servidor público percibirá más de los ingresos que por dicho concepto recibe el Jefe de Estado.
- e. La determinación de las remuneraciones conforme a lo establecido en el artículo 127 constitucional, es un paso para el proceso de transparencia.
- f. Siempre se debe atender al bien superior de contar con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, a efecto de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de aplicar los parámetros establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo se avocó a instrumentar la aplicación de los artículos 75 y 127 constitucionales, a través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2018, misma que en la Iniciativa que le da origen dispone:

**"CAMARA DE ORIGEN: SENADORES
EXPOSICION DE MOTIVOS**

México D.F., martes 13 de abril de 2010.

INICIATIVA DE SENADOR (GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD)

Con el fin de establecer un parámetro que definiera la remuneración máxima, se optó por tomar el cargo de Presidente de la República como la referencia obligada.

Por su parte, la Cámara de Diputados realizó adiciones al proyecto con los cuales se definieron las características que debería tener la presupuestación de las remuneraciones de los servidores públicos.

II. Finalmente, el 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena la reglamentación rigurosa de las percepciones salariales de los servidores públicos en México, para lo cual se establecen las siguientes reglas generales:

1. Una definición amplia de los servidores públicos a quienes aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios.

2. Reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes a la federación, las entidades federativas y los municipios.

a). Integración de la remuneración: para el cálculo de la remuneración correspondiente, deberá considerarse toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

Se exceptúan de la integración de la remuneración los apoyos y los gastos que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales que deben ser comprobados como todas las erogaciones del Estado. Se excluyen también los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

a). Salario máximo: ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.

c) Equidad salarial: ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las siguientes excepciones:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

i) Que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos,

ii) Que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, en uno u otro caso, la remuneración total no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República.

d) Pensiones y otras percepciones por retiro: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

e) Transparencia: las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

3. Reglas para la aprobación legislativa anual, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de las remuneraciones de los servidores públicos federales: los tres poderes de la unión y los organismos con autonomía constitucional deberán incluir en sus proyectos presupuestales los tabuladores desglosados de las remuneraciones que proponen perciban sus servidores públicos, para efecto de que sean examinados, discutidos, modificados y aprobados por la Cámara de Diputados.

4. Reglas para la determinación presupuestal de las remuneraciones de los servidores públicos locales: inclusión de los tabuladores desglosados estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus delegaciones.

5. Reglas especiales para los casos del Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales y el Instituto Federal Electoral:

Conforme al artículo Tercero Transitorio, a partir del ejercicio fiscal de 2010 las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:

a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores a la establecida para el Presidente en el Presupuesto de Egresos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda a la establecida para el Presidente en el Presupuesto de Egresos.

c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores aprobados por el Poder Legislativo, sea el Federal o los de las entidades federativas.

De esta manera, la reforma pretende poner fin a la discrecionalidad con la cual se asignaban las percepciones de los servidores públicos, compuestas por sueldos, compensaciones, bonos y otras formas de ingreso, así como sus pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera, sin ningún parámetro y escasos controles.

Para hacer efectivo el contenido la reforma constitucional, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido por ésta, el Congreso estableció, en la fracción VI del artículo 127, la obligación del mismo Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, de expedir las leyes respectivas.

IV. Además, conforme al artículo segundo transitorio del decreto publicado en agosto de 2009, las remuneraciones que en aquel momento fueren superiores a la que percibía el Presidente o el superior jerárquico del servidor público de que se trate, deberían ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

La previsión anterior y la carencia de una ley reglamentaria obligaron a la Cámara de Diputados a modificar las disposiciones del Capítulo de Servicios Personales en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio, incluyendo los tabuladores contenidos en el anexo 16 del Decreto, para evitar la posibilidad de que las percepciones de los funcionarios públicos fueran violatorias al texto constitucional.

Así, el artículo 22 del Decreto de Presupuesto federal desarrolló las disposiciones incorporadas por la reforma constitucional en materia de percepciones de los servidores públicos. Entre dichas disposiciones destacan:

1. La integración de la remuneración de los servidores públicos con la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias.
2. La remuneración mensual autorizada al Presidente de la República y los tabuladores de remuneraciones para la Administración Pública Federal, contenidos en el anexo 16 del propio Presupuesto, en cuyas disposiciones se detallan los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias y extraordinarias netas mensuales para los servidores públicos federales.
3. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos (con excepción del Banco de México) y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de sus servidores públicos.

En el caso del Poder Judicial de la Federación, se establecen las reglas especiales en lo relativo a las percepciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional de referencia.

V. En cuanto a la cobertura de pensiones otorgadas en el pasado sin disposición legislativa pertinente, el Congreso desconoce si se siguen otorgando a



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL


exservidores públicos, lo cual sería una transgresión a las nuevas disposiciones constitucionales.

(...)"

De lo anterior, se advierten los puntos principales para la expedición de la Ley Reglamentaria a los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo éstos los siguientes:

- La remuneración de los servidores públicos debe ser proporcional a sus responsabilidades.
- La remuneración de los funcionarios públicos se determinará anual y equitativamente en tabuladores aprobados por el Poder Legislativo, ya sea que corresponda al fuero federal o de las entidades federativas.
- Se establece un parámetro que define la remuneración máxima de los servidores públicos, optando por tomar el cargo de Presidente de la República como la referencia obligada.
- Se establecen reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la Federación.
- Se establece el principio de equidad salarial, que se traduce en que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, a menos que desempeñe varios empleos públicos, que su remuneración sea derivada de un trabajo técnico calificado o por especialización, que goce de pensiones u otras percepciones por retiro.
- Se establece el principio de transparencia, que obliga a que los tabuladores de percepciones sean públicos.
- Para hacer efectivo el contenido la reforma constitucional, se propone adecuar las legislaciones locales y federales para sancionar penal y administrativamente las conductas contrarias.
- Se establecen reglas especiales para los casos del Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales y el Instituto Federal Electoral.

Derivado de lo anterior, es de señalarse que, atendiendo a la reforma constitucional, se emitió la Ley de Remuneraciones, en razón de instaurar un tope a las remuneraciones que perciben los servidores públicos la cual será



proporcional y suficiente para cubrir necesidades propias y las de sus familias, siendo éstas acordes a las prestaciones económicas que se relacionan con las funciones que cada uno desempeña en sus cargos.

E. Forma en que se cubren las remuneraciones.

El artículo 127 de la Constitución Federal⁹ prevé que las remuneraciones que reciban los servidores públicos, la cual debe de ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, misma que deberá de ser proporcional a sus responsabilidades y determinarse de forma anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos que correspondan.

De esta forma, las remuneraciones deben sujetarse a las siguientes bases constitucionales:

⁹ **Artículo 127.** Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo."



- 71

ANEXO II
JANUARI 1972

- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Atendiendo a lo anterior, es de señalarse que las bases constitucionales que rigen a las remuneraciones de los servidores públicos son las que instrumenta la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, por lo que las disposiciones contempladas en ésta no resultan ser una situación novedosa que rige aquellas percepciones.

En ese tenor, para efecto de la determinación de las partidas presupuestarias correspondientes a las remuneraciones, deberá en todo momento tutelarse el cumplimiento a los preceptos constitucionales referidos en el párrafo que antecede, así como a la Ley que los reglamenta.

Conforme a ello, si bien la fracción IV, del artículo 123 de la Constitución¹⁰, prevé que las remuneraciones deben ser fijadas en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, dicha prescripción debe ser analizada en forma correlacionada y acorde a los límites del diverso 127 del mismo ordenamiento.

¹⁰ "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas."



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

De esta forma, la interpretación sistemática de la propia Constitución permite la convergencia y complementariedad de los preceptos en cuestión, pues no podría considerarse que existe una antinomia dentro de la propia Constitución, sino que sus disposiciones deben ser analizadas de forma armónica y congruente como un todo, en aras de garantizar la supremacía constitucional.

No menos importante es el señalar que, de conformidad al numeral 3 de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal¹¹, la remuneración que perciban los servidores públicos, deben de ser adecuadas e irrenunciables; asimismo, deben derivar del desempeño de una función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades; de igual forma, está sujeta a los principios siguientes:

- **Anualidad:** La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo.
- **Reconocimiento del desempeño:** La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes.

¹¹ **Artículo 3.** Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable.

En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes:

I. **Anualidad:** La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;

II. **Reconocimiento del desempeño:** La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;

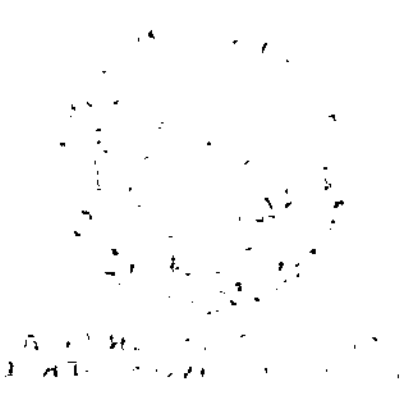
III. **Equidad:** La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;

IV. **Fiscalización:** La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes;

V. **Igualdad:** La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;

VI. **Legalidad:** La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y

VII. **Transparencia y rendición de cuentas:** La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad."

- 
- **Proporcionalidad:** La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto.
 - **Fiscalización:** La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes.
 - **Igualdad laboral:** La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos.
 - **Legalidad:** La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente.
 - **Transparencia y rendición de cuentas:** La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a la ley.
 - **No discriminación.** La remuneración de los servidores públicos se determinará sin distinción motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Lo señalado permite una aplicación ordenada y planeada de los recursos, desde su consideración en el Presupuesto de Egresos, hasta la materialización en el pago de las remuneraciones de los servidores públicos.

En adición a lo anterior, y conforme a lo previsto por el numeral 8 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dichas remuneraciones serán cubiertas de conformidad a los tabuladores que al efecto emitan las Dependencias, tal y como se observa a continuación:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto."

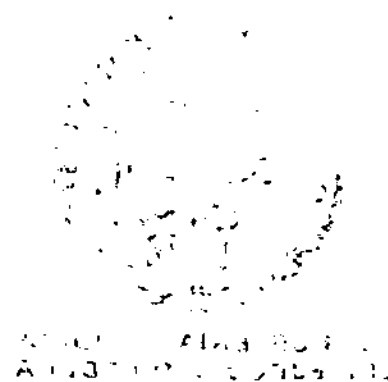
El manual de remuneraciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, se apegarán estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el párrafo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegarán estrictamente a las disposiciones de esta Ley."

Como se observa; las disposiciones normativas señaladas deben ser atendidas por los entes que ejercen el presupuesto, mismas que se reitera, no resultan novedosas ni diferentes a la forma en que se venían regulando las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos que laboran en los mismos.

Se dice lo anterior, toda vez que de conformidad al artículo 64 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la totalidad de los siguientes recursos:

- Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias.
- Las aportaciones de seguridad social.
- Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables.
- Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.



En este punto igualmente es conveniente resaltar que, de conformidad al artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la sección específica de las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación, comprende lo siguiente:

- Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto¹² por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones.
- Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

Como se observa, los sueldos de los servidores públicos deben estar previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en razón de la relación laboral que sostienen con un ente de gobierno, por lo que a efecto de determinar las Dependencias aquellas remuneraciones a cubrir a sus trabajadores, deben atender a lo establecido en el mismo.

De la misma manera, los entes de gobierno deben de realizar la proyección de las remuneraciones que deberán de cubrir a sus trabajadores, ello mediante la emisión de tabuladores en los que se contemplen las cantidades a cubrir por el citado concepto.

Por lo que los ejecutores del gasto, como lo son las Dependencias de la Administración Pública, al realizar el pago de las remuneraciones que corresponden a los servidores públicos por la prestación de sus servicios

¹² "Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
(...)

XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos."



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

personales subordinados, esto es, en su calidad de trabajadores, de conformidad a lo dispuesto en las fracciones I y II, del numeral 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberán de tomar en cuenta lo siguiente:

"Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente: -

I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 33 de esta Ley;

II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones generales aplicables;

Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos.

(...)"

En tales condiciones, el pago por concepto de servicios personales, debe atender tanto al Presupuesto de Egresos de la Federación, como a los Tabuladores de remuneraciones emitidos anualmente por las Dependencias de gobierno, mismas que no pueden ser mayores a las previstas en el citado Presupuesto.

Relacionado a lo anterior, el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria¹³, prevé lo relativo al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, mismo que incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, de conformidad a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos, el cual será emitido de forma anual.

¹³ "Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente.

Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de mayo de cada año."

Por otra parte, referente a que las remuneraciones que perciban los servidores públicos, no podrán ser mayores a las establecidas para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni ser iguales o mayores a las que perciba su superior jerárquico, tal y como señala el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; dichas determinaciones no resultan novedosas, toda vez que tales principios se encontraban previstos con anterioridad en las fracciones II y III, del artículo 127 de la Constitución Federal, en relación con el segundo párrafo, de la fracción II, del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 8 y 9 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Circunstancia que al efecto se desprende del contenido de los citados numerales:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

"Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. (...)

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

"Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

I. Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 33 de esta Ley;

II. Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones generales aplicables;

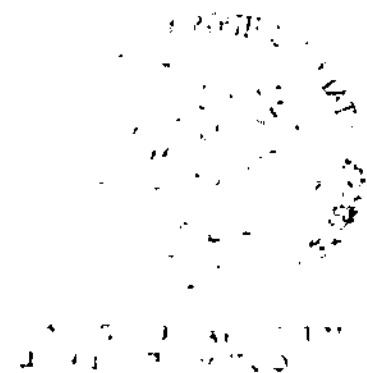
Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos."

MANUAL DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

"Artículo 8.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración, en términos del artículo 14 del presente Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables."

Artículo 9.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos."

Bajo las anteriores precisiones, se puede señalar que no resulta ajeno ni una cuestión extraordinaria, lo estipulado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que regula la forma en que se deberán de cubrir las remuneraciones de servidores públicos que laboran en las Dependencias de la Administración Pública, puesto que dichos principios y/o bases que la rigen, ya se venían observando con anterioridad a la emisión de la citada norma.



En consecuencia, no se cambia ni altera la forma en que serán cubiertas las remuneraciones a los servidores públicos que laboren, entre otros, en los órganos constitucionales autónomos.

F. Instituto Nacional Electoral.

Al ser el Estado Mexicano una Democracia, es de inminente importancia salvaguardar, consolidar y legitimar todas las actuaciones políticas y electorales llevadas a cabo dentro del Territorio.

Por ello es que, tras la reforma de 1994, se creó el Instituto Federal Electoral, para controvertir la desconfianza existente entre los ciudadanos y los partidos políticos de oposición hacia los diferentes órganos electorales cuya observancia se llevaba a cabo a través de la Secretaría de Gobernación, por ser la Secretaría de Estado a quien el Poder Ejecutivo asignó dicha responsabilidad.

En su momento, el Instituto Federal Electoral se encargaba de establecer las reglas de procedimientos y formalidades para las autoridades y ciudadanos en materia electoral, sometiendo tanto al poder público, así como al pueblo al imperio de la ley¹⁴, basando su régimen en cinco principios fundamentales:¹⁵

1. El principio de certeza.
2. El principio de legalidad.
3. El Principio de independencia.
4. El principio de imparcialidad.
5. El principio de objetividad.

Dichos principios a la fecha se mantienen vigentes ahora con el Instituto Nacional Electoral.

¹⁴ Compendio, Legislación Nacional Electoral, Tomo I, México, 2017.

¹⁵ La División de Poderes y de Funciones, en el Derecho Mexicano Contemporáneo, Cesar Nava Vázquez.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En específico, el principio de certeza consiste en que los resultados de las actividades electorales sean verificables, fidedignos y confiables.

El principio de legalidad atiende a que las diversas unidades del Instituto se apeguen de manera estricta a los preceptos constitucionales y legales de la materia.

El principio de imparcialidad radica en que los órganos del Instituto deben a toda costa mantenerse ajenos a cualquier interés personal o partidista en su actuación.

Por último, el principio de objetividad es la manera en que se espera que los servidores públicos del Instituto ejecuten sus actos, apegados a los hechos que integran la realidad y que se alejen de opiniones parciales y unilaterales.

En el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece:

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

(...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un

consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

El instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución;

b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurren a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;

c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que, una vez realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes;

d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación;



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación.

De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el periodo de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia.

El titular del órgano interno de control del instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de diligencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral;
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;
3. El padrón y la lista de electores;
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas;
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales;



6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
 7. Las demás que determine la ley.
- b) Para los procesos electorales federales:
1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
 2. La preparación de la jornada electoral;
 3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley
 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores;
 6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y
 7. Las demás que determine la ley.
- c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación.
- El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes.
- La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.
- Apartado C.** En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
 2. Educación cívica;
 3. Preparación de la jornada electoral;
 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;
 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;
 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;
 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y

11. Las que determine la ley

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá:

a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales;

b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o

c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.

Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este Servicio.

(...)"

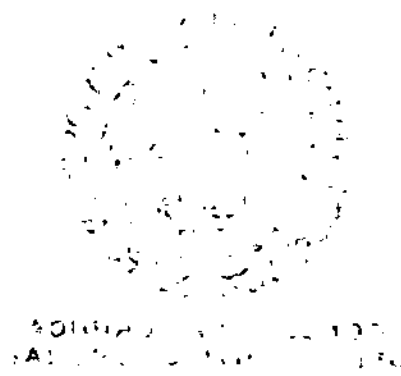
Por su parte, el artículo 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala:

"Artículo 31.

1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y **las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación**, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley.



4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa."

De lo anterior se desprende que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales.

Como puede observarse, si bien el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cierto es que ello no le exime del cumplimiento y protección de lo contenido en la Constitución General, pues como cualquier otro poder, entidad u órgano del Estado Mexicano, debe actuar conforme a los postulados que consagra la Norma Fundamental y las leyes que de ella emanan, en atención al principio de supremacía constitucional.

Ello es así, pues, como se puede advertir del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2020, en sus artículos 18 y 19, se determinaron las remuneraciones de los servidores públicos, de conformidad a lo siguiente:

"Artículo 18. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto, en su Anexo 23 y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación.

Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual solo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario.

La Secretaría podrá autorizar, en términos de las disposiciones específicas que emita, el otorgamiento de compensaciones económicas para el personal que integra la Guardia Nacional como parte de su sistema de remuneraciones, así como de los sistemas complementarios de seguridad social, sin que lo anterior comprometa recursos de largo plazo mayores a los autorizados en los términos de este Decreto.

Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en la presente fracción forman parte de su remuneración.

II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto y, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y.

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos de las percepciones ordinarias presentadas en el Anexo 23.1 no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las

disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador;

b) La remuneración ordinaria total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2020 se incluye en el Anexo 23.12. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de percepciones ordinarias autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2020 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto;

III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se presentan en los Anexos siguientes de este Decreto:

a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;

b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;

c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;

d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Anexo 23.6. Ramo 03. Consejo de la Judicatura Federal;

f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;

h) Anexo 23.9. Ramo 30: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;

j) Anexo 23.11. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

k) Anexo 23.12. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y

m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.

Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1., del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.

Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.

Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar, en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación Individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 19. Los servidores públicos de mando y personal de enlace de las dependencias y entidades solo podrán percibir las prestaciones establecidas en el manual a que se refiere el artículo 66 de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las dependencias y entidades no podrán destinar recursos para cubrir prestaciones en adición a aquéllos previstos en el gasto de servicios personales aprobado en este Presupuesto de Egresos. En los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo y de los contratos colectivos de trabajo que realicen las dependencias y entidades se deberán sujetar a su presupuesto autorizado.

Los titulares de las entidades informarán a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría ya la Función Pública, sobre los resultados obtenidos en los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y de las revisiones de salario que, en su caso, realicen en el presente ejercicio fiscal.

Dichos informes, incluyendo un reporte sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán presentados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de dichas negociaciones.

Las dependencias y entidades enviarán informes a la Secretaría con el detalle de todas las prestaciones que perciben los servidores públicos a su cargo, así como el gasto total destinado al pago de las mismas en el período correspondiente, a fin de que se incluyan en los Informes Trimestrales."

Como se advierte de los numerales citados, tenemos que el Instituto Nacional Electoral debe observar los lineamientos que se desprenden de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el ejercicio del gasto público, esto es, de los recursos que se le han asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que incluye el pago de las remuneraciones de los servidores públicos.

En este sentido, es de mencionar que los servidores públicos que laboran dentro del Instituto Nacional Electoral se rigen bajo el Apartado B del artículo 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las modificaciones determinadas de manera anual a través del Presupuesto de Egresos de la Federación y los Manuales de percepciones relativos.

De igual manera, se encuentra obligado a observar lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a lo dispuesto en el artículo 41, Base V de la propia Carta Magna, de cuyo numeral 31, como ya se vio, se desprende que su patrimonio se integra de las partidas presupuestales que le sean señaladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, no se puede perder de vista la primera fase de la integración del presupuesto del Instituto Nacional Electoral.

En primera instancia, debe decirse que los órganos constitucionales autónomos, pese a su independencia operativa, mantienen relaciones con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin que se presente una subordinación frente a alguno de ellos.

En el caso, esa coordinación y correlación se puede observar en la remisión del anteproyecto de presupuesto que elabora el Instituto Nacional Electoral al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación¹⁶, cuya modificación y aprobación corresponde a la Cámara de Diputados.

¹⁶ "Artículo 44.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En este sentido, la Unidad de Política y Control Presupuestario, en el ámbito de sus atribuciones, integra al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos en que fue elaborado y remitido por el ente autónomo, y que corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto que le envíe el Poder Ejecutivo Federal.

Una vez que la Cámara de Diputados le ha asignado al ente autónomo, una cantidad específica, y dada su naturaleza de órgano autónomo que cuenta con autonomía presupuestaria para el manejo, administración y ejercicio de su presupuesto, el mismo cuenta con libertad para determinar el manejo de su presupuesto aprobado, sujetándose siempre a la normatividad de la materia, esto quiere decir que el órgano legislativo aprueba el presupuesto de egresos, conforme a los montos ahí consignados, previo examen y las modificaciones correspondientes, y es el órgano autónomo quien decide cómo ejerce esos recursos.

Lo anterior de ninguna manera significa que dicho organismo, puede ejercer arbitrariamente y sin ningún tipo de control su presupuesto aprobado, pues este órgano autónomo es sujeto de fiscalización en el ejercicio de su presupuesto.

En efecto, en términos del artículo 2, fracciones XV y XIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos son ejecutores de gasto con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

(...)

z) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presidente del Consejo General y remitirlo una vez aprobado, al titular del Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

(...)"

"Artículo 45.

1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

h) Proponer anualmente al Consejo General el anteproyecto de presupuesto del Instituto para su aprobación;

i) Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia;

(...)"

administración, creadas por disposición expresa de la Constitución a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.

Es por ello que si bien los órganos constitucionales autónomos –aún los dotados de autonomía presupuestaria– deben sujetarse a las prescripciones presupuestales contenidas en la Constitución General y en las leyes, no sólo desde la formulación de su presupuesto, sino también en el ejercicio del gasto público. Además, las limitantes constitucionales y legales respectivas pretenden establecer un balance adecuado de pesos y contrapesos entre los referidos órganos autónomos y los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, en función de un sistema de colaboración y correlación en la formulación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación que imprima las directrices, parámetros y necesidades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

IV. CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ.

PRIMERO. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO ACTOR A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE SU PRESUPUESTO.

El accionante, en esencia, aduce que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, vulnera su autonomía, en virtud de que la Cámara de Diputados realizó una reducción unilateral y arbitraria al gasto neto del Instituto, sin análisis técnico, ni sustento alguno que contengan las razones suficientes de dicha reducción al presupuesto hecho por el Instituto actor.

Además, aduce que la modificación que la Cámara de Diputados formuló al gasto neto total del presupuesto del Instituto Nacional Electoral es un acto que le produce subordinación.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Además, la Cámara de Diputados mediante las referidas adecuaciones afecta las competencias y funciones del Instituto en la organización de procesos electorales y proyectos relacionados con la materia, pasando por alto sus necesidades y prioridades en su cometido constitucional.

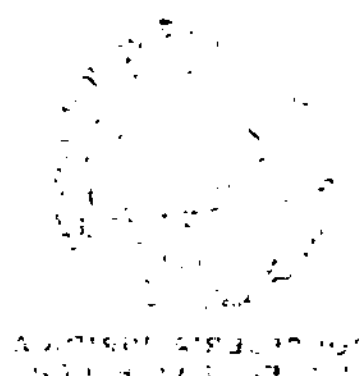
Asimismo, señala que existen las mismas violaciones que, a su parecer, tuvieron lugar respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 y 2020, en el que también se redujo su presupuesto, generando una violación a su autonomía constitucional, dado que se ha afectado la operación del Instituto, al obligarlo a cancelar proyectos específicos, así como generar economías para cubrir el déficit provocado, lo cual se ha traducido en el aplazamiento e, incluso, cancelación de programas y objetivos en el marco del modelo de planeación institucional, así como el obligar a la estructura a operar con deficiencias de personal, como las sobrecargas de trabajo y riesgos que todo ello ha implicado, al grado de poner en peligro el ejercicio de las facultades constitucionales.

Lo anterior es infundado en atención a las siguientes consideraciones y fundamentos:

Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes del Estado.

Igualmente tienen como característica, el actuar con independencia en sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar, y/o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional.

Actuación que implica que no esté sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (legislativo, ejecutivo y judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los



referidos organismos guarden autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado, ya que son órganos que coadyuvan en la evolución contemporánea del Estado Constitucional de Derecho.

Ahora bien, por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, tiene sus orígenes en el Instituto Federal Electoral creado en 1994, con el objetivo de organizar los procesos electorales bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 41, fracción V, Apartado A. de la Constitución General, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

De lo anterior se puede observar que dicho Instituto cuenta con una autonomía orgánica o administrativa, es decir, de tipo operativo, por tanto, nuestra Norma Fundamental únicamente posibilita que dicho órgano cumpla con el propósito para el que fue creado, esto es, organizar las elecciones federales, así como de llevar a cabo, en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y en la Ciudad de México, siempre bajo las bases constitucionales y bajo los principios señalados con anterioridad.

De hecho, tal y como se podrá advertir, la autonomía que se le otorga al Instituto Nacional Electoral, es la necesaria para garantizar que cumpla con su función de organizar las elecciones federales, estatales y locales, sin que esto se pueda traducir en que el referido Instituto sea ajeno al propio Estado, y a los Poderes de la Unión que lo conforman, pues éstos últimos tienen atribuciones y obligaciones encomendadas en la Norma Suprema, que pueden ocasionar concurrencia entre los poderes y los organismos autónomos, sin que esto implique una intromisión a su autonomía, ya que es una atribución expresamente señalada en la propia Constitución y limitada por la misma.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Es por eso que, si bien el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley, no está eximida del cumplimiento y protección de lo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

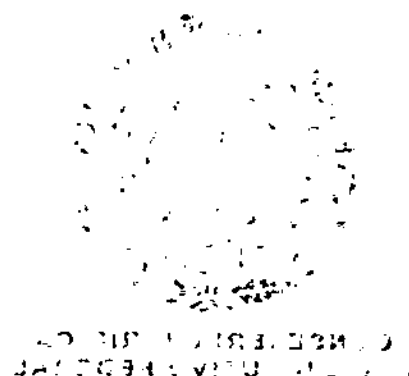
Así las cosas, pese a que el Instituto cuenta con la potestad constitucional de tener una fuente propia de ingresos, resulta también claro que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una de las fuentes de ingresos son las partidas que se le otorguen por conducto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El dispositivo 31 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expresamente, señala lo siguiente:

"Artículo 31.

1. El Instituto es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.
2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.
3. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley.
4. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa."

En este orden de ideas, es un hecho innegable que el Instituto Nacional Electoral debe ajustarse a las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación.



Bajo esta óptica, la autonomía con que cuenta el Instituto actor no implica que pueda realizar asignaciones definitivas e inmodificables del presupuesto, pues podría llegarse al extremo de que, *so pretexto* de ser un órgano autónomo, realice erogaciones que no se encuentren vinculadas con sus facultades o fines para los cuales se creó dicho organismo.

En este orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, fracción XV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los entes autónomos son las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución a las que se le **asignen recursos del Presupuesto de Egresos** a través de los ramos autónomos.

Por esa razón, se puede señalar que los órganos autónomos también estarán regidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, de ahí que para su inclusión deban cumplirse con los requisitos previstos para aquél y su concordancia con las disposiciones constitucionales.

Expuesto lo anterior, no menos importante es precisar en este punto que el ciclo de integración presupuestaria que deben seguir los órganos autónomos es el procedimiento previsto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que dispone lo siguiente:

"Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:

- a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;***
- b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;***
- c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;***




CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;
 - e) **Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;**
 - f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;
- II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación;
- a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;
 - b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación y el control de los órganos correspondientes;
 - c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos; Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior,
- y
- III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones:
- a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, **observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;**
 - b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos y a lo dispuesto en esta Ley;
 - c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo.

Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes."

De la anterior transcripción se observa que los órganos autónomos tienen plena libertad de programar, diseñar y aprobar sus proyectos de presupuesto, de ahí que su margen de acción se limite sólo al cumplimiento de los requisitos



que prevén las normas de la materia y la Constitución General, como observar los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal.

Acorde a ello, los órganos constitucionales autónomos disponen de autonomía e independencia financiera, lo que significa que pueden realizar sus presupuestos y ejercerlos de acuerdo a sus propias decisiones.

Lo anterior permite advertir que todos los ejecutores del gasto, en términos de la Constitución General y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera autónoma determinarán sus presupuestos, pero siempre estarán sujetos a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, el propio artículo 5º, fracción I, inciso e), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la facultad de los entes autónomos de determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, observando las disposiciones de dicha ley.

En este orden, de conformidad con dicho dispositivo legal, se puede colegir válidamente que si bien es cierto que la autonomía del Instituto actor implica que éste ejercerá su presupuesto, de forma autónoma, también lo es que ello será conforme al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados, de acuerdo con la facultad soberana que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General.

Al respecto, no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 74, fracción IV de la Norma Fundamental establece la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, **modificación** del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

El artículo constitucional en cita dispone, en su literalidad, lo siguiente:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

(...)

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

(...)"

Como puede observarse, la Cámara de Diputados tiene expedita la atribución expresa de modificar el proyecto de presupuesto de egresos que le sea enviado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Bajo esta óptica, derivado de esa autonomía, el Instituto actor se encuentra facultado para ser independiente en la toma de decisiones y funcionamiento, así, puede dictar sus resoluciones con plena independencia, ejercer su presupuesto de forma autónoma, a fin de cumplir con el objeto para el que fue creado constitucionalmente, sin que ello implique que su proyecto de presupuesto no pueda ser modificado por la Cámara de Diputados.

Robustece lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:

"PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN. Del análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte, por una parte, que en su artículo 49 establece como nota característica del Gobierno Mexicano, el principio de división de poderes al señalar expresamente que 'El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.'. Determinando en su segundo párrafo, como regla general, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, lo que sustenta el principio complementario de autonomía de cada poder. Por otra parte, también se aprecia que ambos principios no implican que los poderes tengan que actuar siempre y necesariamente separados, pues si bien cada uno tiene señaladas sus atribuciones (73, Congreso de la Unión; 74, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados; 76, facultades exclusivas de la Cámara de Senadores; 77, facultades de ambas Cámaras en que no requieren de la intervención de la otra; 78, atribuciones de la Comisión Permanente; 79,

facultades de la autoridad de fiscalización superior de la Federación; 89, facultades y obligaciones del presidente de la República; 99, facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 103, 104, 105, 106 y 107, facultades de los tribunales del Poder Judicial de la Federación), del examen de las mismas se aprecia que en varios casos se da una concurrencia de poderes, como ocurre, por ejemplo, en la designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que participan el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que hace la designación, y el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, que presenta temas para que de ellas se seleccione a quienes se designe. Conforme al principio de supremacía constitucional, cabe inferir que cuando se está en presencia de facultades u obligaciones de cada uno de los poderes que se relacionan con otro poder, las mismas deben estar expresamente señaladas en la propia Constitución y si bien el Congreso de la Unión tiene dentro de sus atribuciones dictar leyes, ello no puede exceder lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, ni lo expresamente señalado en las disposiciones especificadas, relativas a las facultades y deberes de cada poder. Por consiguiente, las fracciones XXIV y XXX del artículo 73, que precisan como facultades del Congreso de la Unión la de '...expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión ...'; y la de '...expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.', deben interpretarse enmarcadas y limitadas por los principios referidos, es decir, salvaguardando el de división de poderes y el de autonomía de cada uno y regulando, en detalle, las facultades y obligaciones que a cada poder señala la propia Constitución, pero sin introducir atribuciones u obligaciones que no estén consignadas en la misma y que supusieran no ajustarse a ella, vulnerando los repetidos principios." Época: Novena Época, Registro: 191089, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CLVIII/2000, Página: 33.

En este sentido, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos, lo que incluye la prerrogativa de modificarlo, atendiendo a las políticas que el Gobierno, a través de sus entidades, órganos y dependencias, ejecutará para el ejercicio fiscal correspondiente, así como en relación con los ingresos que se obtengan durante el mismo.

Es por ello que, contrario a lo señalado por el actor, la modificación que la Cámara de Diputados efectuó sobre su presupuesto propuesto no implica una



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

violación al principio de división de poderes contemplado en el diverso artículo 49 de la Carta Magna.

Conforme a los razonamientos anteriores, es importante destacar que las únicas restricciones que tiene la Cámara de Diputados para aprobar o, en su caso, modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación son aquéllas previstas en la Constitución General y en las leyes que de ella emanen.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la autonomía con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral implica que éste será quien ejerza su presupuesto de manera autónoma y la Cámara de Diputados será la que designe el presupuesto a dicho Instituto, a fin de que se le permita el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias. Sin que sea válido afirmar que sea el propio Instituto quien se autodetermine y apruebe el presupuesto que deba serle asignado, pues esto implicaría una transgresión al principio de división de poderes al permitirle, llevar a cabo facultades exclusivas de la Cámara de Diputados que le fueron concedidas por la Norma Suprema.

Lo anterior, es reafirmado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que, en su artículo 31, se reitera que el patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de la Ley.

En ese sentido, es válido y justificable que sea la Cámara de Diputados en ejercicio de su facultad exclusiva la que apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los ramos que deban ser asignados a los organismos autónomos como lo es la parte actora, pues, en sentido estricto, es una ley, en sentido formal, en tanto que su aprobación anual corresponde a la Cámara de Diputados, y a su vez, es una ley en sentido material, en cuanto regula los poderes atribuidos a la administración financiera en materia de gasto, y tiene un claro contenido jurídico que afecta a la administración, es

decir, sus normas tienen la característica de ser generales, abstractas e impersonales¹⁷.

Es decir, se trata de una ley que regula el modo de gastar los medios económicos del Estado, y por lo tanto es un documento único e indivisible, emanado del órgano legislativo en el ejercicio de facultades constitucionales expresas, sin que sea válido separar la parte que contiene el plan de gastos, del texto legal que lo aprueba, pues el acto legislativo es unitario por naturaleza.

Sobre este último punto, no se debe desconocer que el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento normativo que establece las directrices que deberán observarse en el gasto público, es decir, los programas, actividades y servicios que deberán tener una prioridad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece los siguientes principios:

“...Tales son los lineamientos en los que se enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y estos son los principios rectores de su propuesta:

(...)

No al gobierno rico con pueblo pobre

Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.

(...)

Economía para el bienestar

¹⁷ “PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011. SU ARTÍCULO 4, FRACCIÓN II, ES UNA NORMA JURÍDICA EN SENTIDO FORMAL Y MATERIAL”. Tesis: 1.3o. (I Región) 20 A (10a.), Página:1208, Décima Época, Registro:2005201, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia (s): Constitucional.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación.

(...)

Por el bien de todos, primero los pobres

Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del poder económico. La connivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en detrimento de la población. Pero una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía que es factor indispensable de cohesión, instauro la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento.

(...)

I. POLÍTICA Y GOBIERNO

Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

(...)

El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego al marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico.

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a los viajes sin sentido.

Únicamente los titulares de las secretarías de Estado podrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de seguridad.

(...)

Como puede observarse, el Plan Nacional de Desarrollo pone un especial énfasis en generar las condiciones necesarias para aumentar el bienestar de la población, a través de la reducción de los recursos empleados por los servidores públicos, el crecimiento del bienestar, la erradicación de la corrupción, la disciplina fiscal, creación de empleos, así como la primacía que



tendrán las personas menos favorecidas, frente a los intereses corporativos del poder económico.

Tomando en cuenta este contexto normativo, se estima pertinente mencionar que la reducción presupuestal que aduce la promovente se encuentra plenamente justificada en una política de austeridad republicana transversal, en la que todos los entes gubernamentales asuman el compromiso de emplear los recursos que les sean asignados de manera eficiente, eficaz, honesta y transparente, generando un ahorro que permita destinar los recursos excedentes a programas prioritarios para la sociedad.

Tomando en cuenta lo anterior, en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, se señaló lo siguiente:

"Desde el inicio de esta administración, el Gobierno de México planteó una transformación de fondo dirigida fundamentalmente a redefinir la concepción del servicio público, el combate a la corrupción, la supresión de gastos innecesarios, la reasignación de recursos para los fines más urgentes de la vida pública nacional y el direccionamiento de las políticas públicas hacia programas y proyectos que al ser de gran beneficio para la población, requieren de una asignación que potencie el alcance de sus acciones y coadyuve a un desarrollo con bienestar.

El PPEF 2021 se presenta en un momento en que el país enfrenta dos crisis simultáneamente; la sanitaria y la económica. La primera, a causa de la pandemia del COVID19 y la segunda, por las medidas de suspensión de actividades y distanciamiento social establecidas para evitar su propagación. Por tanto, el PPEF 2021 se constituye, al mismo tiempo, como el plan de actuación para el logro de prioridades que define el PND 2019-2024 y como un instrumento para atender a los grupos de población más vulnerable e incentivar las actividades productivas que nos permitan hacer frente a los impactos económicos generados por esta situación contingente.

El regreso a la nueva normalidad debe ir acompañado de la convicción de profundizar en los cambios ya iniciados por nuestro gobierno y avanzar en la construcción de un estado de bienestar, que permita reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional y las condiciones de la vida de la población. Por tanto, el PPEF 2021 propone un reordenamiento de las políticas públicas y la asignación de los recursos asociados a ellas, a fin de reflejar un equilibrio entre las necesidades de la población y de la economía, en el marco de una política dirigida al bienestar compartido, al incremento de la eficiencia en la administración de los recursos públicos y a la mejora de los estándares



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

de calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos que la población demanda.

Bajo este contexto, las Acciones del Gasto Público 2021 serán las articuladoras del bienestar económico y social de la población, a través de un nuevo enfoque integral del quehacer gubernamental, que propicie que todos los sectores sean corresponsables y participe del cambio que se requiere para alcanzar los niveles de bienestar propuestos por el Gobierno de México.

El gasto neto programable para la articulación de las Acciones del Gasto Público 2021 es del orden de 4,618.3 mil millones de pesos, y se distribuyen conforme a las acciones identificadas, como se ilustra a continuación.

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL GASTO PÚBLICO 2021.

(Millones de pesos)

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL GASTO PÚBLICO 2021

(Millones de pesos)

GASTO NETO PROGRAMABLE	4,618,338.9
1. Educación, cultura y deporte para todos	837,260.4
2. Salud para todos	248,991.5
3. Seguridad social y salud a derechohabientes	1,412,647.6
4. Trabajo y bienestar para todos	197,171.1
5. Apoyo al campo	78,464.8

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL GASTO PÚBLICO 2021

(Millones de pesos)

GASTO NETO PROGRAMABLE	4,618,338.9
1. Educación, cultura y deporte para todos	837,260.4
2. Salud para todos	248,991.5
3. Seguridad social y salud a derechohabientes	1,412,647.6
4. Trabajo y bienestar para todos	197,171.1
5. Apoyo al campo	78,464.8

En cada una de estas Acciones del Gasto Público participan los diversos ramos de la Administración Pública Federal (APF) que, a partir de sus funciones, programas y proyectos, contribuyen a alcanzar lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024.

(...)

Como puede apreciarse, el Presupuesto de Egresos de la Federación se constituye como un plan de acción para ser frente a las crisis sanitarias y económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, así como un instrumento para atender a los grupos de población más vulnerables e incentivar las

actividades productivas que permitan hacer frente a los impactos económicos por la situación contingente.

Asimismo, se advierte que, en todo momento, se buscará el regreso a la nueva normalidad avanzando en la construcción de un estado de bienestar que permita reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional y las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, es válido y justificable que sea la Cámara de Diputados en ejercicio de su facultad exclusiva la que apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los ramos que deban ser asignados a los organismos autónomos como lo es la parte actora, pues como se expuso, en sentido estricto, es un acto formalmente legislativo, en tanto que su aprobación anual corresponde a la Cámara de Diputados y a su vez, es un acto administrativo con la peculiaridad de que es de observancia general y obligatoria para los sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión y los órganos autónomos en el ejercicio del gasto público, para satisfacer necesidades colectivas y el gasto corriente que implica la estructura de gobierno y en general del Estado Mexicano.

Ello aunado a que, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución General, la Cámara de Diputados puede modificar el Presupuesto de Egresos, incluyendo los ramos correspondientes a los órganos constitucionales autónomos.

Derivado de lo anterior, deviene infundada la aseveración que realiza la parte actora en el sentido de que la Cámara de Diputados redujo su presupuesto de manera arbitraria e injustificada, ya que dicha modificación deriva de una atribución exclusiva que le confiere nuestra Carta Magna; por lo que el hecho de justificarla en una política pública de austeridad republicana transversal es suficiente para que se considere debidamente motivada.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Por otro lado, no debe pasar desapercibido que si bien el Instituto Nacional Electoral cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, el Poder Legislativo tiene una participación activa en sus actividades.

Tan es así que la Cámara de Diputados es la encargada de emitir el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, mediante convocatoria pública.

Concatenado con lo anterior, la jurisprudencia P./J.12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, pág.1871, determino lo siguiente:

"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

*Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, **órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas**, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal, radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad." Época: Novena Época, Registro: 170238, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 12/2008, Página: 1871 "*

Los órganos constitucionales autónomos se crean para controlar y encargarles funciones específicas, para conseguir una mejor especialización, agilización, control y transparencia y demandas sociales, sin que se altere o destruya la

tradicional doctrina de la división de poderes, en virtud de que cada poder trabaja de manera armónica el uno con el otro.

Sin embargo, la autonomía de que gocen determinados entes, debe guardar un estricto apego a las disposiciones constitucionales, pues éste es el marco normativo que les da origen y las instrumenta.

Por lo que aun y cuando estos organismos gocen de su autonomía de gestión, administración y funcionamiento, no pueden invalidar el campo natural de los Poderes Tradicionales, pues sus facultades no interfieren con el desarrollo de sus atribuciones encomendadas, sino que debe de trabajar de manera armónica con los diversos Poderes.

Lo anterior, tomando en cuenta que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es otorgado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, y es dicha Institución la encargada de determinar de la manera que considere pertinente –siempre de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables– la forma en que distribuirá en las diferentes áreas los gastos relativos.

Por las anteriores consideraciones, se estima que las normas combatidas no violan la esfera competencial del Instituto actor, ni su autonomía constitucional, ya que las reducciones presupuestales a su gasto neto total fueron emitidas de conformidad con el artículo 74, fracción IV de la Constitución General, y se encuentran debidamente justificadas. Por lo tanto, ese Alto Tribunal deberá reconocer su validez.

SEGUNDO. LOS ANEXOS 23.1.2, 23.1.3, 23.8 Y SUS CORRELATIVOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021, NO VULNERAN LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Y SON ACORDES A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL.

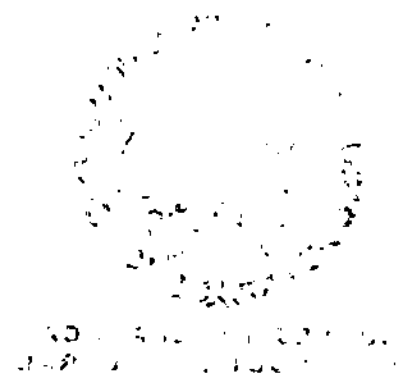


CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En su escrito de demanda, la parte actora considera que el anexo 23.8 y sus correlativos, así como el artículo Vigésimo Primero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, violan la autonomía del Instituto actor, de acuerdo a sus siguientes argumentos:

- La Cámara de Diputados carece de criterios objetivos constitucionales y legales para establecer la Remuneración Total Anual del Presidente de la República, como límite máximo de percepciones ordinarias y remuneraciones totales anuales del personal del Instituto actor.
- La Cámara de Diputados viola la autonomía del accionante al instruir que se ajusten a los límites de percepción ordinaria total que se señala para cada uno de los supuestos cargos tabulares del propio Instituto, así como a la remuneración total anual del Presidente de la República establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y en consecuencia obliga al Instituto actor a **violar derechos laborales y por ende derechos humanos de su personal**, ya que dicho ajuste les representa una reducción salarial.
- La Cámara de Diputados, viola el artículo 127 de la Constitución Federal al establecer sin sustento legal o motivacional las remuneraciones de los servidores públicos del accionante.
- La Cámara de Diputados carece de atribuciones para controlar la constitucionalidad de los proyectos de presupuestos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, refiere que los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como personal perteneciente a un organismo constitucional autónomo especializado e independiente, se rigen bajo las reglas de excepción previstas tanto en la disposición constitucional como en la ley, esto es, bajo la regla de especialización y las propias condiciones de trabajo existentes para el personal especializado que conforman los órganos de dirección, ejecutivos y



técnicos, en su modalidad de servicio profesional electoral y de la rama administrativa.

Al respecto, también señala que, de los anexos impugnados, no se acredita que la Cámara de Diputados haya interpretado la fracción III del artículo 127 constitucional, que establece lo referente al trabajo técnico calificado o por especialización en la función, por lo cual, en términos del artículo 75 de la Constitución General debió atender las bases previstas en el referido precepto 127, lo cual hace patente la afectación a la esfera competencial y la autonomía del Instituto actor, lo que desconoce no sólo las garantías institucionales de dicho órgano, sino **los derechos fundamentales de los servidores públicos que laboran en él.**

Por otro lado, el Instituto actor alega, en esencia, que la Cámara de Diputados, al establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, la remuneración total anual del Presidente de la República y, con ello, el tope salarial de todos los servidores públicos, debió atender a los principios señalados en el artículo 127 constitucional, sin que sea óbice la falta de normativa secundaria vigente, en virtud de la declaratoria de invalidez de los artículos 6° y 7° de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.

Es por ello que considera que la Cámara de Diputados debió realizar con mayor razón una motivación reforzada sobre el parámetro de remuneración del titular del Ejecutivo Federal y no fijarlo de manera arbitraria en contravención del artículo 127 constitucional, así como en detrimento de la autonomía de dicho Instituto, al interferir a través de dicho límite y de los mínimos y máximos señalados en el Anexo 23.8.

En otro punto, el órgano demandante señala que la Cámara de Diputados carece de atribuciones para controlar la constitucionalidad de los proyectos de presupuestos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, al modificar el Anexo 23.8 y sus correlativos, a fin de reducir las



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, con lo que, a su juicio, vulnera su autonomía.

Finalmente, refiere que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, se invalidaron las disposiciones normativas que sirvieron de base al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en lo relativo a las remuneraciones de los servidores públicos y, a partir de su resolución, se evidenció que dichas porciones normativas permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional.

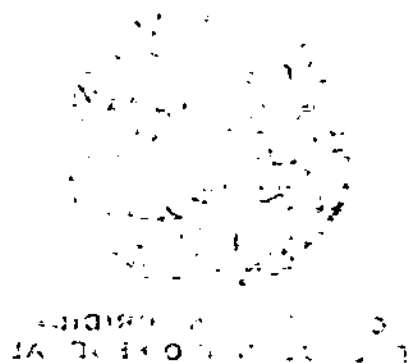
Lo anterior deviene infundado, en atención a las siguientes consideraciones y fundamentos:

En primer lugar, es de reiterar que son infundados los conceptos de invalidez, puesto que el Instituto actor pretende plantear supuestas violaciones a derechos laborales y humanos de su personal, lo cual no puede ser materia de una controversia constitucional, pues ésta constituye un medio de control constitucional que busca proteger el sistema federal y la división de poderes, mas no así tutelar derechos fundamentales. Por lo que su argumento deviene a todas luces inatendible y, por ende, infundado.

Ello es así, ya que el Instituto promovente pretende hacer supuestas violaciones a los derechos de sus servidores públicos, bajo la relación causal hipotética en el sentido de que ello viola su autonomía constitucional.

Así, en principio, el Instituto actor no acredita ni demuestra la relación causal entre la supuesta reducción a las remuneraciones de sus servidores públicos y la afectación a su autonomía, pues se basa en la mera suposición de que, al ser reducidas, y, a su consideración, inadecuadas y desproporcionales, genera como consecuencia inmediata una vulneración a su autonomía constitucional.

Es por ello que se estima que el promovente pretende alterar la naturaleza y fines del presente medio de control constitucional, al buscar hacer valer



derechos de sus servidores públicos, y no así una posible invasión a su esfera de competencias.

No obstante lo anterior, **ad cautelam**, se expone lo siguiente:

En primera instancia, se estima pertinente recordar que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley; será autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño, y contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

En cuanto al régimen laboral de su personal, el mismo se rige por el Apartado B., del artículo 123 constitucional, en cuya fracción IV, se establece lo siguiente:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas.

(...)"

Lo anterior se puede corroborar del texto del artículo 206 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que dispone:

"Artículo 206.

1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado 'B' del artículo 123 de la Constitución.

2. El personal del Instituto será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

3. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia.

4. Las relaciones de trabajo entre los órganos públicos locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, **de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución.**

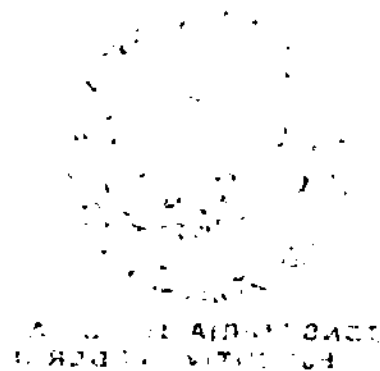
En este sentido, conforme al artículo 123, Apartado B., fracción IV, de la propia Constitución General, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida **durante la vigencia de éstos**, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución y en la ley.

De dicho precepto constitucional se puede desprender claramente que las remuneraciones de los servidores públicos se determinarán anualmente y que deberán sujetarse a lo dispuesto por el propio artículo 127 constitucional.

Siguiendo esta línea argumentativa, el artículo 127, fracción II y III de la Norma Fundamental establece lo siguiente:

- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Derivado de lo anterior, el artículo 127 constitucional establece como regla general que ningún servidor público podrá tener una remuneración mayor a la



establecida para el Presidente de la República, y, de igual manera, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, y la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En este sentido, en el caso del Instituto actor, sus servidores públicos no pueden obtener una remuneración superior a la del Presidente de la República, pues se trata de una prohibición categórica consagrada en una disposición constitucional expresa.

Así, pese a que el Instituto actor cuenta con autonomía constitucional, ello no lo exime de observar los mandatos que nuestra propia Carta Magna establece, incluyendo las modificaciones que la Cámara de Diputados realice al proyecto de presupuesto de egresos que le remita el Ejecutivo Federal, que incluye los proyectos de presupuesto de los órganos autónomos, así como las remuneraciones de los servidores públicos que laboren en éstos.

Asimismo, los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, deben observar la normatividad aplicable a la formulación de los proyectos de presupuesto, el ejercicio de los recursos y la cuenta pública.

En este orden, tenemos que el Instituto actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobará su proyecto de presupuesto y lo enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Es por ello que aun y cuando el Instituto Nacional Electoral sea un ente público con autonomía presupuestal, se encuentra sujeto a la normatividad federal, al ser un instituto del Estado, por lo que debe observar, en todo momento, los mandatos constitucionales que le resulten aplicables, así como las leyes de carácter federal que lo regulen.

Así, por lo que hace a su presupuesto, ya se demostró que el proyecto que remita al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá ser acorde a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el propio Ejecutivo Federal.

En consonancia con lo anterior, las remuneraciones de sus servidores públicos también deben ajustarse a los principios consagrados en nuestra Norma Fundamental, particularmente, los previstos en los artículos 127 y 134 constitucionales.

Asimismo, se reitera que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, Apartado B., fracción IV de la Constitución General, las remuneraciones de los servidores públicos serán fijadas en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la propia Constitución General y en la ley. Es decir, los salarios de los servidores públicos no podrán ser modificados durante el ejercicio fiscal que rija el presupuesto de egresos respectivo, y los mismos se determinarán de manera anual en dicho instrumento.

En este sentido, es incuestionable que las remuneraciones de los servidores públicos deben sujetarse no sólo al artículo 127 constitucional, sino también a su ley reglamentaria.

Por si fuera poco, el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla como parte de los entes que deberán seguir sus postulados, a los organismos autónomos, tal como se advierte a continuación:

"Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

**Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
(...)"**

Atendiendo a lo anterior, debe puntualizarse que los organismos constitucionalmente autónomos, como lo es el Instituto Nacional Electoral, deben ceñirse a las directrices que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al principio de supremacía constitucional, sin que ello suponga una afectación a su autonomía, puesto que no se limitan sus facultades para determinar las directrices que correspondan a su organización.

Por lo que, si bien el Instituto actor es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, no está eximido del cumplimiento y protección de lo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Así, con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto del dos mil nueve, se previó como obligación constitucional que todas las remuneraciones se ajustarían a los parámetros establecidos en el citado artículo 127 de la Constitución Federal.

En la exposición de motivos de dicho Decreto, se advierte lo siguiente:

"CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS México, D.F., 24 de enero de 2007.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

2. INICIATIVA DEL EJECUTIVO *Nota: Iniciativa publicada en la Gaceta del Senado el 25 de enero de 2007.*

Iniciativa que reforma los artículos 73, Fracción 1, y 127 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.

En primer lugar, se propone reformar el artículo 73, fracción XI, de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para establecer, por medio de una ley, las bases generales a las que debe ajustarse toda percepción pública a nivel nacional. Ello, con sujeción a los criterios y principios que se proponen para el artículo 127 también de la Constitución.

La Ley que emita el Congreso de la Unión, en la medida en que definirá directamente el sentido y alcance de disposiciones constitucionales, vinculará por igual a todos los órganos públicos, entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los órganos constitucionales autónomos; los tres poderes de los estados y equivalentes en el Distrito Federal, incluidos sus órganos autónomos de carácter local; los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en general, cualquier órgano que realice funciones de Estado

La atribución que se otorga al Poder Legislativo federal tiene como objetivo establecer bases uniformes para la fijación de remuneraciones, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y municipios.

Por otra parte, se propone también modificar de manera substancial el artículo 127 de la propia Constitución.

No hay que olvidar que uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en algunos ámbitos de gobierno. Sobre todo tratándose de regiones en las que se viven condiciones de verdadera miseria y en donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores es abrumadora.

Por ello, en la iniciativa se recoge, por un lado, el actual principio de que los servidores públicos percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función; pero, por otro lado, se establece que los límites mínimos y máximos de tales remuneraciones se deberán precisar, año con año, en los respectivos presupuestos de egresos.

Adicionalmente se elevan a rango constitucional los principios a los que habrá de sujetarse la asignación de remuneraciones, como lo serían, la equidad, igualdad, desempeño, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. Al efecto, en la iniciativa de ley, se desarrollan y se otorga de un contenido concreto a cada uno de tales principios.

Cabe señalar que el establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los cuales debe determinarse la remuneración en el artículo 127 de la Constitución es un paso de innegable importancia en el proceso de transparencia en el ejercicio del poder. Dichas regulaciones permitirán a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus servidores.

Una parte fundamental de la propuesta de reforma consiste en que existan comités de expertos, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local, que



SECRETARÍA DE GOBIERNO

participen en la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos y los tabuladores que deben regularlos. Esto tiene como finalidad permitir la participación de la sociedad en un tema que le es particularmente sensible y, al mismo tiempo, contar con criterios técnicos en la elaboración de los manuales de remuneraciones, que incluyen los tabuladores de los trabajadores al servicio del Estado.

Por último y a efecto de que exista a nivel constitucional un parámetro definido, se propone que ninguna remuneración de los servidores públicos sea superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto federal para la remuneración del Jefe del Estado. Con ello, los distintos órganos públicos contarán con un tope máximo de referencia que evite que, bajo argumentaciones relativas al manejo autónomo de los presupuestos, se adopten sueldos y prestaciones desmedidos. (...)"

Tomando en cuenta lo antes señalado, los órganos constitucionales autónomos quedan sujetos a tener una remuneración menor a la del Presidente de la República, con independencia de su autonomía presupuestaria. Ello es una limitación que deben observar, en atención a que, conforme al Constituyente, es indignante que los servidores públicos obtengan ingresos extremadamente elevados y desproporcionados, principalmente, cuando existen regiones en nuestro país en los que se viven condiciones de verdadera miseria.

En perfecta consonancia con lo anterior, tenemos que los órganos autónomos también se encuentran obligados a observar los principios del gasto público consagrados en el artículo 134 constitucional, a saber, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, ya que son aplicables a todos los poderes, entidades y órganos que conforman la Federación, así como los de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, mismos que ejercen recursos públicos.

Tomando en cuenta este contexto constitucional, es de precisar que el Presupuesto de Egresos de la Federación impugnado no afecta la forma en cómo se fijan las remuneraciones, así como tampoco se impide que se cuente con el personal capacitado, ello, porque la norma jurídica tiene el carácter de abstracta, lo cual implica que sólo toma en consideración situaciones generales y no específicas, lo que posibilita a que sea el ejecutor del gasto quien fije conforme a las necesidades de la institución, qué trabajos requieren



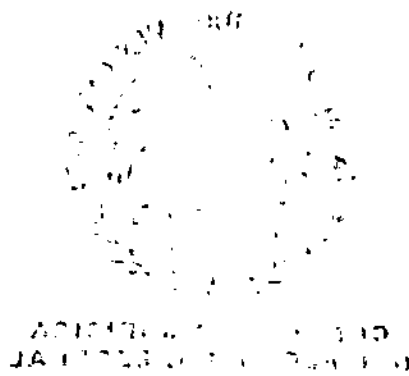
CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

de menor o mayor grado de responsabilidad, toda vez que es en función del objeto de cada Ente Público, que se fijarán parámetros para determinar las cualidades necesarias para ocupar un empleo, cargo o comisión, con lo cual no se afecta la forma en cómo se fijan las remuneraciones.

En esta tesitura, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 establece parámetros mínimos para determinar la forma en que deberán calcularse y pagarse las retribuciones conforme al grado de responsabilidad que el empleo, cargo o comisión requieran, toda vez que resulta imposible que en un sólo ordenamiento legal, se precisarán los diversos grados de responsabilidad que cada servidor público tiene, toda vez que éstos de manera general se fijan en atención al puesto desempeñado (ejemplo jefe de departamento, subdirector, director o director general etc.), funciones a realizar (por ejemplo, administración de recursos humanos y/o materiales, control de archivo jurídico etc.), número de personal a su cargo, tipo de información que se maneja, etc. todo lo cual no podría concentrarse en una sola Ley, pues pueden presentarse tantos escenarios como puestos y variantes de éstos se encuentren previstos en los diferentes reglamentos interiores y/o Leyes Orgánicas de cada Dependencia, entidad u órgano.

Atento a lo anterior, tenemos que las bases o parámetros constitucionales y legales para la determinación de las remuneraciones son los siguientes:

- Las remuneraciones se contemplen en el Presupuesto de egresos a cada empleo establecido en Ley. (Artículo 75)
- Ante la omisión en el Presupuesto de Egresos, se tendrá como remuneración la que se hubiere fijado en el Presupuesto anterior. (Artículo 75)
- Los entes públicos deberán integrar en sus proyectos de presupuestos, los tabuladores de las remuneraciones de los servidores adscritos, acorde con el texto de la Constitución y las reglas presupuestarias. (Artículo 75)
- Los servidores públicos percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable. (Artículo 127)
- La remuneración será proporcional a las responsabilidades del servidor.



(Artículo 127)

- Las remuneraciones serán determinadas de forma anual y equitativa. (Artículo 127)
- La remuneración será objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes. (Artículo 127)
- Se considera remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. (Artículo 127)
- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. (Artículo 127)
- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de:
 - a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales.
 - b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo.
 - c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente.
 - d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un



Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. (Artículo 127)

- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. (Artículo 127)
- Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. (Artículo 127)
- Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. (Artículo 127)
- Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. (Artículo 127)
- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del artículo 127 y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación. (Artículo 127)

De lo anterior podemos advertir que la remuneración del Presidente de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 127 Constitucional, será determinada mediante un acto legislativo diverso, como es el Presupuesto de Egresos del ejercicio de que se trate, brindando la suficiente seguridad a los servidores públicos.

Bajo este contexto, se estima importante precisar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es un acto formalmente legislativo, pero materialmente administrativo, que tiene como objetivo fundamental el ordenamiento del gasto público, mediante la distribución y asignación de un

determinado monto de recursos, estimado con base en los ingresos que se obtendrán por la recaudación de impuestos y la obtención de derechos.

Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de la Federación se rige por distintos principios, entre los que se encuentra el de flexibilidad, mismo que consiste en que el presupuesto tiende al cumplimiento de los objetivos del Estado, posibilitando las adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto público federal, que sean necesarias para su consecución.

Dicho principio establece las reglas de naturaleza jurídica y de contenido técnico, que se configuran al servicio del más satisfactorio cumplimiento del ciclo presupuestario, el cual debe ser respetado para efecto de una actividad presupuestaria correcta, consistente en estar siempre dirigida a cubrir el gasto público de manera acorde a las necesidades y prioridades de la Nación.

Sobre este último punto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece las directrices que deberán observarse en el gasto público, es decir, los programas, actividades y servicios que deberán tener una prioridad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, transcrito *supra*, pone un especial énfasis en generar las condiciones necesarias para aumentar el bienestar de la población, a través de la reducción de los recursos empleados por los servidores públicos, el crecimiento del bienestar, la erradicación de la corrupción, la disciplina fiscal, creación de empleos, así como la primacía que tendrán las personas menos favorecidas, frente a los intereses corporativos del poder económico.

Tomando en cuenta lo anterior, en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2021, también transcrita en líneas precedentes, se busca generar un plan de acción para ser frente a las crisis sanitarias y económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, así como un instrumento para atender a los grupos de población más vulnerables e incentivar las actividades productivas que permitan hacer frente a los



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

impactos económicos por la situación contingente. Además, tiene como objetivo el regreso a la nueva normalidad avanzando en la construcción de un estado de bienestar que permita reducir el impacto de los factores externos en la economía nacional y las condiciones de vida de la población.

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, continúa con la intención que se ha mantenido constante y uniforme en el sentido de establecer que el Gobierno de México, se encuentra comprometido a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y teniendo como fin último mejorar el bienestar de todos, en el marco de una política de respeto y entendimiento mutuo, en ese sentido, se mantienen, en dicho presupuesto, diversas acciones que permitirán continuar con la transformación social del país.

Así, las Acciones del Gasto Público 2021 serán las articuladoras del bienestar económico y social de la población.

De lo anterior, se advierte que, en todo momento, se buscará el crecimiento económico como la palanca del desarrollo nacional, mediante el impulso de sectores económicos estratégicos como el energético y el campo, que genere condiciones para la creación de empleos con salarios dignos; propiciando el crecimiento con justicia social, contribuir a disminuir las brechas regionales y las desigualdades en el país; así como posibilita el acceso efectivo a los derechos humanos y la recuperación del papel del Estado como garante de la soberanía, la estabilidad y el Estado de Derecho; todo esto en el marco de una administración de los recursos públicos basada en los principios de un gobierno austero y sin corrupción.

En sintonía con lo anterior, los Criterios General de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2021, disponen lo siguiente:

"Introducción

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para el ejercicio fiscal 2021 que se presentan a continuación son muy diferentes a los de años anteriores y se distinguen por una reflexión más profunda sobre los aspectos económicos y sociales, así como en materia de salud, economía y finanzas públicas del país. Asimismo, los CGPE 2021 contienen un análisis de los resultados de las políticas implementadas al momento, los retos que quedan por superar y sobre las medidas de política que se proponen para lograrlo.

La pandemia del COVID-19 ha impuesto ya varios costos a la sociedad mexicana, el más importante de los cuáles es la desafortunada pérdida de vidas humanas. Es importante reconocer el dolor que las familias han enfrentado, así como la solidaridad de la ciudadanía y el esfuerzo y trabajo de los trabajadores del sector salud en la atención y contención de la pandemia.

El COVID-19 también está representando costos significativos para la economía mexicana, la cual enfrenta actualmente el reto más complejo desde la Gran Depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad económica agregada. El despliegue de acciones para la atención de la pandemia, que ha tenido como eje un confinamiento autoinducido, ha generado una situación extraordinaria para la población y ha provocado una de las más severas contracciones económicas de las que se tenga registro en los últimos cien años.

En este contexto, los CGPE 2021 llegan en el marco de la conmemoración de 200 años de vida independiente de México, periodo en el cual la economía y la hacienda pública se han transformado notablemente. Hemos pasado de ser una economía agrícola y de autoconsumo, precarizada por la guerra de independencia, con impuestos diferenciados entre regiones –las alcabalas– que impedian la formación de un mercado nacional y sin moneda de baja denominación para el comercio al menudeo, a ser una de las mayores economías del mundo, basada en los servicios y con un sector industrial insertado en las cadenas globales de valor.

No obstante, algunos retos persisten. Ahora como entonces nuestro país enfrenta el reto de mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de la mayoría de la población, requisito indispensable para alcanzar un verdadero desarrollo que sea incluyente, duradero y sostenible.

La economía global y el COVID-19

El brote y posterior evolución como pandemia del COVID-19 ocurrió en un entorno externo de por sí complejo, con una marcada desaceleración sincronizada de las principales economías del mundo que estaba en marcha desde 2019. Ésta estaba asociada al fin de un largo ciclo económico y también a la incertidumbre generada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos (EEUU) y China, así como por tensiones geopolíticas relacionadas con la negociación del Brexit y diversos eventos en Medio Oriente.

El primer mes de 2020 auguraba una moderación de la desaceleración global, con el acuerdo comercial denominado 'Fase Uno' alcanzado por EEUU y China. Asimismo, con la ratificación en ciernes del Tratado entre México, EEUU y Canadá (T-MEC), en México se registraba un nivel de riesgo país en su nivel más bajo desde septiembre de 2014. Además, se observaba un precio promedio



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

del petróleo superior al usado en las estimaciones de ingresos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba en su Panorama de la Economía Mundial de enero de 2020 que más de 160 de sus países miembros experimentarían crecimiento en el ingreso per cápita durante este año.

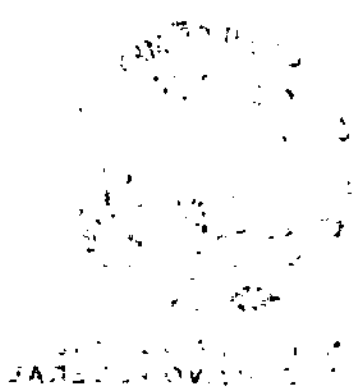
La aparición del COVID-19 y las restricciones a la movilidad y a la realización de actividades que se pusieron en marcha para proteger a la población, conocidas ahora como el Gran Confinamiento, generaron la primera contracción económica global por diseño de la historia. Los esfuerzos por preservar vidas y asegurar la atención médica de los enfermos, en un entorno de poca información respecto al nuevo coronavirus y a sus efectos sobre la salud de la población y la economía, elevaron velozmente la incertidumbre en los primeros meses del año y tuvieron impactos profundos sobre la economía, los mercados financieros y los de materias primas globales casi de inmediato.

Al tiempo que los sistemas de salud de los países hacían frente a un virus y una enfermedad nuevos, sin vacuna ni cure y con mecanismos de transmisión, tasas de contagio y de mortalidad desconocidos, el cierre de fronteras y de los sectores industriales de las principales economías –las primeras afectadas por el COVID-19– impactaba inmediata y particularmente a los sectores de transporte y de turismo de todos los países, así como a la producción de aquellos altamente integrados a las cadenas globales de suministro, como el nuestro, incluso antes de que ejecutaran sus propias medidas de confinamiento.

Además, el aumento en la aversión al riesgo entre inversionistas de todo el mundo ocasionó una salida significativa de capital de los mercados emergentes hacia activos más seguros, que a su vez implicó dislocaciones en los mercados financieros de dichas economías, depreciaciones de sus monedas, incremento en las primas de riesgo y deterioro de los volúmenes de operación de los mercados bursátiles. Por su parte, la expectativa de una pronunciada reducción en la demanda global trejo consigo una rápida disminución del precio del petróleo, entre otras materias primas, que fue exacerbada por tensiones durante marzo y parte de abril entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). Así, para abril de 2020 el FMI estimaba que más de 170 países experimentarían una reducción en su ingreso per cápita.

Desde inicios del año, la conjunción de todo lo anterior configuró retos importantes en materia de política pública y para las finanzas públicas del mundo en general, y de México en específico. En particular, se pueden identificar cinco elementos que presionaron la posición de las finanzas públicas: (1) un incremento del gasto en salud, para atender la emergencia sanitaria; (2) una mayor asignación necesaria de recursos para atender las funciones de desarrollo social y económico con el fin de apoyar la economía de personas y empresas; (3) menores ingresos tributarios y no tributarios asociados a la disminución en la actividad económica; (4) el impacto a los ingresos petroleros por las caídas en precios y ventas de hidrocarburos y combustibles; y (5) el aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa, por el mayor tipo de cambio.

Contexto de las políticas de salud, económica y hacendaria



Las políticas públicas han priorizado en todo momento la salud y el bienestar de la población, particularmente de los grupos más vulnerables y con menos alternativas y protección formal en situaciones de estrés financiero y económico. El Gobierno de México ha implementado durante 2020 una serie de acciones que han evolucionado con la trayectoria de la enfermedad, están permitiendo enfrentar la contingencia sanitaria y económica, han equilibrado lo anterior con objetivos de mediano y largo plazo y han mantenido finanzas públicas sanas y estabilidad macroeconómica durante la mayor contracción económica global en nueve décadas.

(...)

Los retos hacia adelante y el Paquete Económico 2021

En 2021 las políticas públicas deberán continuar adaptándose a la trayectoria de la pandemia del COVID-19, garantizando la disponibilidad de atención médica, procurando una recuperación económica sostenida pero segura en términos sanitarios, manteniendo la salud del sistema financiero para que cumpla su función de intermediación de recursos y preservando finanzas públicas sanas, a fin de contribuir a la estabilidad macroeconómica y disponer de recursos en el largo plazo para cumplir los objetivos del Estado, en lugar de destinarlos al servicio de la deuda. En este sentido, las políticas fiscales y financiera que se proponen en el Paquete Económico 2021 están orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables; promover un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica; continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

(...).¹⁸

Derivado de lo anterior, se advierte que, para el ejercicio fiscal de 2021, las políticas fiscales y financiera que se propusieron en el Paquete Económico 2021, están orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos más vulnerables; promover un restablecimiento rápido y sostenido del empleo y de la actividad económica; continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Aunado a lo anterior, resulta importante reiterar que, para la presente Administración, el impulso macroeconómico que requiere nuestro país tiene

¹⁸ Página consultable:

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2021.pdf



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

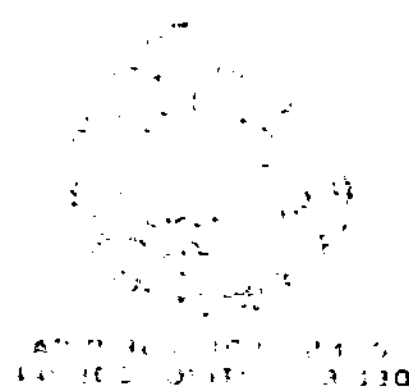
como uno de sus pilares el principio de austeridad republicana y la erradicación de la corrupción en el servicio público, para ello será necesario mantener las medidas de austeridad ya implementadas, particularmente, respecto de los recursos empleados por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.

Precisado lo anterior, se estima que deviene infundado el concepto de invalidez hecho valer por el promovente en el sentido de que la remuneración del Presidente de la República no se encuentra debidamente justificada ni motivada, pues resulta evidente que tal aseveración es falsa.

Lo anterior en virtud de que la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y tomando en cuenta las directrices y principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y los Criterios General de Política Económica para el presente ejercicio, determinó fijar la remuneración mensual del Presidente de la República por un monto de \$112,122.00, lo cual obedece a una política de austeridad republicana que, además, busca contar con los recursos disponibles y necesarios para enfrentar las crisis económica y sanitaria que se atraviesa a nivel mundial.

Se debe enfatizar que dicha política no es ajena a nuestra Carta Magna, ya que en la iniciativa de reforma a los artículos 73, fracción I, y 127 de la propia Constitución General, presentada por el Ejecutivo Federal el 24 de enero de 2007, se señaló lo siguiente:

"El Presidente Benito Juárez, al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señalaba que: '...bajo el sistema federativo no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les señala'. Hoy los mexicanos demandan a los servidores públicos el eficaz cumplimiento de los principios a los que aludía el Benemérito de las Américas. El país debe contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos que desempeñen sus funciones con alto grado de responsabilidad y eficiencia. Para ello, es imprescindible que se prevean remuneraciones



adecuadas y dignas, dentro de las posibilidades presupuestarias del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.

El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos preparados, capaces y honestos, y que puedan ejercer con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.

Es por ello que, al asumir el cargo de Presidente de la República, manifesté que el Gobierno de México debe demostrar con acciones que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos, y que el esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de elemental eficiencia y austeridad por parte de la autoridad. Igualmente, me comprometí a establecer normas claras que regulen de manera objetiva y justa el pago de los servidores públicos.

En este contexto, al presentar el programa de austeridad del Gobierno federal me pronuncié por enviar al Constituyente Permanente una iniciativa que regule y transparente las percepciones de los servidores públicos en los tres Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los tres órdenes de gobierno.

Hoy doy cumplimiento a este compromiso al presentar esta iniciativa al Constituyente Permanente.

Este proyecto pretende ajustar el marco constitucional que sustenta las remuneraciones de todos los servidores públicos del país -en los ámbitos federal, estatal y municipal-, a fin de crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.

El Ejecutivo federal a mi cargo está consciente del imperativo de que los servidores públicos dispongan de una remuneración adecuada y suficiente que les permita cubrir sus propias necesidades y las de sus familias. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que la función pública debe estar orientada por un principio de vocación de servicio hacia la Nación y, por ello, las remuneraciones por el trabajo desempeñado deben mantenerse ajenas a todo exceso. Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa."

Como puede observarse, una remuneración adecuada para los servidores públicos no implica que deba ser competitiva con los sueldos que ofrece el mercado laboral para el sector privado, sino que debe ser justa y suficiente para cubrir sus necesidades y las de sus familias, y de esta manera, propiciar la eficiencia y la austeridad en la fijación de dichas retribuciones.

Al respecto, se estima pertinente citar la exposición de motivos de la iniciativa de adición al artículo 127 constitucional, presentada por los Grupos



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Convergencia y Partido del Trabajo en el Senado de la República, de fecha 9 de noviembre de 2006, en la cual se señaló lo siguiente:

"La política del sueldos en la administración pública, los poderes legislativo y judicial de la Federación, así como en las entidades públicas de todo género y los poderes de las entidades federativas e, incluso, en los ayuntamientos ha sido, hasta ahora, la discrecionalidad, es decir, la ausencia de una auténtica política que ordene un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y de las finanzas públicas."

A través de las leyes y de los presupuestos de egresos sería posible establecer criterios y crear, así, una política de sueldos públicos, pero es necesario fijar una percepción máxima para todas las esferas públicas de México, tanto de la federación como de las entidades federativas y los municipios, así como para toda clase de instituciones y organismos públicos de cualquier naturaleza jurídica.

En realidad, el establecimiento de un tope máximo en los sueldos es indispensable debido a que muchas remuneraciones son actualmente demasiado altas ya que, en numerosas dependencias y organismos, el sueldo es adicionado con otras percepciones que también se deciden con total discrecionalidad y muchas veces en violación de los presupuestos.

En el país sigue prevaleciendo la cultura del patrimonialismo de los recursos públicos en las altas esferas de la administración y en los poderes del Estado y otros organismos. Se ha sustentado, incluso, el criterio de que el sector público debe brindar sueldos iguales a los de grandes empresas con el propósito de contar con personas altamente capacitadas que, con percepciones menores, no aceptarían desempeñar cargos o empleos públicos. Este argumento es falaz, ya que en el país no existen tantos puestos de dirección de grandes empresas ni todas las personas altamente capacitadas están dispuestas a trabajar para tales grandes empresas.

En comparaciones internacionales, incluso con países ricos, México se encuentra entre quienes mejor pagan a quienes desempeñan altos cargos en el Estado. Esto se debe a que en muchos lugares del mundo la sociedad está vigilante y exige moderación en los sueldos de sus dirigentes y altos empleados (...)

La presente iniciativa contiene la propuesta de fijar un sueldo neto máximo para todos los servidores públicos del país, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género. Dicho sueldo incluiría toda otra percepción en dinero o en especie, de tal manera que se pueda combatir el uso de recursos públicos para gastos que, en realidad, son de carácter personal.

Se propone que el sueldo máximo anual ascienda a treinta y tres mil veces el salario mínimo general diario determinado para el Distrito Federal, es decir, unos 120 mil pesos mensuales más 160 mil de aguinaldo, para un total de 1,600,000 pesos al año, que equivale a unos 145, 500 dólares estadounidenses.

*Se estima que, bajo las condiciones reinantes en el país y que, previsiblemente, no cambiarán totalmente durante algunos lustros, este sueldo tope es suficiente, decoroso, moderado, equilibrado, aunque para algunos podría ser todavía alto. Sin embargo, estamos hablando de un máximo y de ninguna manera de una media nacional. Si los más altos jefes ganan la cantidad señalada, se entiende que los subordinados ganarán menos.
(...)”*

De lo anterior se obtiene que, para el Constituyente, es falaz el argumento en el sentido de que el sector público debe brindar sueldos iguales a los de grandes empresas con el propósito de contar con personas altamente capacitadas que, con percepciones menores, no aceptarían desempeñar cargos o empleos públicos, ya que en el país no existen tantos puestos de dirección de grandes empresas ni todas las personas altamente capacitadas están dispuestas a trabajar para tales grandes empresas.

Por otro lado, en perfecta consonancia con la intención del Constituyente de reformar el artículo 127 constitucional, en los “Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019”¹⁹, -los cuales si bien se refieren a un ejercicio fiscal concluido, sirven de referencia para comprender la política de austeridad que se busca implementar en la presente Administración— se señaló, respecto a las medidas de austeridad, lo siguiente:

“1. INTRODUCCIÓN

El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019 se elaboró con base en los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción que caracterizan los compromisos del Gobierno de México. Este Paquete garantiza mantener la fortaleza de las finanzas públicas con la que cuenta el país y busca optimizar los recursos presupuestarios disponibles, en línea con los principios de equilibrio presupuestario y responsabilidad que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). En este sentido, los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) contienen la propuesta del Ejecutivo Federal de los lineamientos de política económica y fiscal para 2019.

(...)”

¹⁹ Consultable en la página:

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

En materia de política de ingresos para 2019 se preserva la estructura tributaria, enfocando los esfuerzos de recaudación en la administración tributaria. Por su parte, en materia de gasto público, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación tiene como eje central una política de ahorro y austeridad que permita canalizar los recursos públicos a las necesidades prioritarias de la sociedad e impulsar el gasto en inversión productiva.

(...)

Medidas de austeridad

El Paquete Económico 2019 se sustenta en dos pilares. El primero de ellos es un compromiso con la disciplina fiscal y financiera, de manera que se garantice estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. El segundo pilar descansa en la observación escrupulosa de los principios de austeridad, base de la reconfiguración del gasto que se ha implementado para orientar los recursos públicos hacia rubros con un alto impacto en el bienestar de las y los mexicanos y en las capacidades de mediano y largo plazo de la economía. En este sentido, las asignaciones presupuestales para 2019 obedecen principalmente a las medidas de austeridad estimadas para el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y presupuestales, para contribuir a la aplicación oportuna del gasto, incidiendo directamente en la adopción de una disciplina permeable para un ejercicio del gasto responsable

Se proponen ajustes salariales de altos servidores públicos con el fin de aminorar la carga fiscal que representan estas erogaciones dentro de los servicios personales así como el adelgazamiento de las estructuras organizacionales burocráticas del gobierno. Lo anterior significa una caída de 1.4% en términos reales con respecto al presupuesto aprobado en 2018.

(...)

Con los recursos propuestos para los Ramos Administrativos, se mejorarán las políticas públicas orientadas a elevar la calidad y cobertura de los servicios de educación y de salud; se profundizará la lucha contra la pobreza extrema y las condiciones de marginación; se robustecerán las acciones encaminadas a lograr el desarrollo agrícola y del medio rural; y se fortalecerán las medidas para brindar seguridad pública a la población, en adición a los trabajos relacionados con la protección de la nación.

(...)"

De la anterior transcripción se desprende que, dentro de las políticas de austeridad que plantea el Gobierno Federal se encuentra la reducción de erogaciones de servicios personales, a fin de que los recursos que anteriormente se destinaban a estos rubros, se dirijan a atender necesidades prioritarias para la ciudadanía.



En este sentido, contrario a lo sostenido por el accionante, la remuneración del Presidente de la República no se ha establecido con la finalidad de mermar la autonomía constitucional del mismo, ni mucho menos para ejercer presión política para actuar en un determinado sentido, sino que la misma obedece justamente a una política de austeridad con la que se busca impulsar la economía de nuestro país e incrementar el bienestar de la población.

Con la finalidad de cumplir con el mandato del artículo 127 constitucional, así como con las directrices antes señaladas, se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y de esta manera, contar con un marco legal que permita implementar los postulados del referido precepto.

En esta tesitura, la Ley en referencia tiene como objeto principal establecer criterios para crear una política de sueldos públicos, fijando un tope máximo en los sueldos que perciben los funcionarios públicos debido a que muchas remuneraciones son en demasía elevadas, ello aunado a que, en numerosas dependencias y organismos, el sueldo es adicionado con múltiples percepciones que son definidas con total discrecionalidad que en ocasiones existe violación de los presupuestos.

Así, tal y como se expuso en líneas precedentes, en los antecedentes de dicha Ley, se planteó la prioridad de establecer un tope a los salarios de los servidores públicos, incluidos los funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género.

Tomando en cuenta lo anterior, la expedición de la Ley en cuestión partió de las siguientes premisas:

- a. La creación de un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica del país y de las finanzas públicas.
- b. Que las remuneraciones que perciben los funcionarios en la administración pública, se determinen proporcionalmente al cargo desempeñado.
- c. Que dichas remuneraciones se entreguen conforme a lo ordenado tanto



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

en la ley como en el presupuesto.

- d. Que ningún servidor público perciba más de los ingresos que por dicho concepto recibe el Jefe de Estado.
- e. La determinación de las remuneraciones conforme lo establecido en el artículo 127, Constitucional es un paso para el proceso de transparencia.
- f. Siempre se debe atender al bien superior de contar con un régimen de remuneraciones equitativo, igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, a efecto de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos.

Bajo tales parámetros, los puntos principales para la expedición de la Ley Reglamentaria a los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fueron los siguientes:

- La remuneración de los servidores públicos debe ser proporcional a sus responsabilidades.
- La remuneración de los funcionarios públicos se determinará anual y equitativamente en tabuladores aprobados por el Poder Legislativo, ya sea que corresponda al fuero federal o de las entidades federativas.
- Se establece un parámetro que define la remuneración máxima de los servidores públicos, optando por tomar el cargo de Presidente de la República como la referencia obligada.
- Se establecen reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos de egresos correspondientes de la Federación.
- Se establece el principio de equidad salarial, que se traduce en que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, a menos que desempeñe varios empleos públicos, que su remuneración sea derivada de un trabajo técnico calificado o por especialización, que goce de pensiones u otras percepciones por retiro.
- Se establece el principio de transparencia, que obliga a que los tabuladores de percepciones sean públicos.
- Para hacer efectivo el contenido de la reforma constitucional, se propone adecuar las legislaciones locales y federales para sancionar penal y

administrativamente las conductas contrarias.

- Se establecen reglas especiales para los casos del Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales y el Instituto Nacional Electoral.

En este orden, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos instrumenta el contenido del artículo 127 constitucional, bajo la regla general de que ningún servidor público podrá obtener una remuneración superior a la fijada para el Presidente de la República, con sus respectivas excepciones.

No es óbice a lo anterior que, con motivo de la emisión de la sentencia en la acción de inconstitucionalidad 105/2018, y su acumulada 108/2018, se declaró la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, además, se condenó al Congreso de la Unión a que legisle respecto de las deficiencias legislativas advertidas en ese fallo, sin perjuicio de que dicha autoridad tiene la facultad para legislar de la manera que estime adecuada.

En este sentido, se debe considerar que, a pesar de que dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fueron declarados inconstitucionales, se estima que los artículos 75, 127 y 134 constitucionales, así como el resto del articulado de la citada Ley, en congruencia con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, los Criterios Generales de Política Económica y las exposiciones de motivos del Presupuesto de Egresos, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, contienen los elementos suficientes para la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos.

Es por lo anterior que, como se señaló *supra*, la remuneración del Presidente de la República contenida en los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, no ha sido fijada de manera discrecional y tampoco se encuentra viciada de origen ante la declaratoria de invalidez parcial de dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Tomando en cuenta lo anterior, se demuestra que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, es acorde a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, al respetar los parámetros en él establecidos.

Derivado de lo hasta aquí expuesto, se puede colegir que las remuneraciones del Presidente de la República y de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral son adecuadas, proporcionales y no son arbitrarias ni discrecionales, pues se basan en una política de austeridad republicana y permiten a dichos servidores públicos atender sus necesidades personales y familiares, dignamente.

En otro aspecto, también deviene infundado el argumento del promoyente en el sentido de que la Cámara de Diputados debió aplicar la fracción III del artículo 127 constitucional a los servidores públicos del Instituto actor por las razones siguientes:

En primer lugar, es de tener presente que el artículo 75 de la Constitución General establece que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, deberá señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

Además, dicho precepto constitucional establece que la fijación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de las remuneraciones de los servidores públicos deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Finalmente, el artículo 75 de la Constitución General establece la obligación a los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía de incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se

propone perciban sus servidores públicos. Las citadas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74, fracción IV de la Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Ahora bien, el artículo 127 de la Constitución General establece que los servidores públicos de la Federación del Estado Mexicano recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

En concordancia con el contenido del artículo 75 de la Constitución General, la remuneración de los servidores públicos se determinará de manera anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
- Ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
- Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- o No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración.
- o Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
- o El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en el artículo 127 de la constitución General.

Ahora bien, el Congreso de la Unión en cumplimiento de lo ordenado por el Constituyente en el artículo 127 de la Constitución General, expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, cuyos artículos 6º, 7º, 7 Bis y 8º, establecen lo siguiente:

"Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:

I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. (Déclareda inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

III. (Declarada inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente:

a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público. Si la recibe, formulará solicitud de compatibilidad

en la que señalará la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.

La solicitud de compatibilidad observará las determinaciones generales de la Secretaría de la Función Pública, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público;

b) (Declarada inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

c) (Declarada inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información requerida para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

(Último párrafo declarado inválido mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)."

"Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente:

a) (Declarado inválido mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas.

II. (Declarada inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.).

III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:

- a) Cámara de Senadores;
- b) Cámara de Diputados;
- c) Auditoría Superior de la Federación;
- d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- e) Consejo de la Judicatura Federal;
- f) Banco de México;



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- h) Tribunales administrativos de la Federación;
- i) Instituto Nacional Electoral;
- j) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
- k) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
- l) Comisión Federal de Competencia Económica;
- m) Instituto Federal de Telecomunicaciones;
- n) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
- o) Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
- p) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- q) Fiscalía General de la República;
- r) Organismos de la administración pública paraestatal;
- s) Instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo;
- t) Empresas Productivas del Estado;
- u) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
- v) Cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos indicados en esta fracción, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respectivos, a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al Presidente de la República.

IV. (Declarada inválida mediante sentencia de 20 de mayo de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.)

En la definición de las remuneraciones se implementará una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que en igualdad de condiciones, los sueldos sean los mismos entre mujeres y hombres."

"Artículo 7 Bis. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será responsable de emitir una opinión anual sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos, y sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la elaboración de la opinión referida en el párrafo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, solicitará y tomará en cuenta las consideraciones y propuestas que al efecto emitan por lo menos tres instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros de investigación nacionales de reconocido prestigio.

Dicha opinión será remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cinco días después de que la Cámara de Diputados haya recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación."

"Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto. El manual de remuneraciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, se apegarán estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el párrafo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegarán estrictamente a las disposiciones de esta Ley."

De los artículos transcritos se advierte lo siguiente:

Para determinar la remuneración de los servidores públicos se deberá considerar que ningún servidor público podrá recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de la Ley, deberán dictaminar la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones, conforme a las reglas establecidas en el artículo 6º de la Ley de Remuneraciones.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Remuneraciones establece que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán:

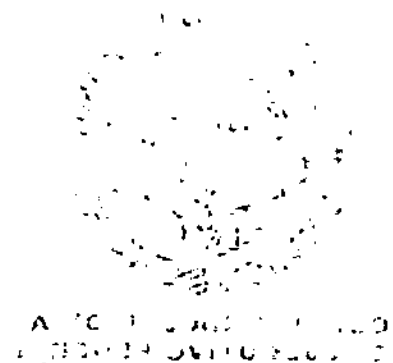
- I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales.
- II. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de los entes siguientes:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- a) Cámara de Senadores;
- b) Cámara de Diputados;
- c) Auditoría Superior de la Federación;
- d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- e) Consejo de la Judicatura Federal;
- f) Banco de México;
- g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- h) Tribunales administrativos de la Federación;
- i) Instituto Nacional Electoral;
- j) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
- k) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
- l) Comisión Federal de Competencia Económica;
- m) Instituto Federal de Telecomunicaciones;
- n) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
- o) Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
- p) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
- q) Fiscalía General de la República;
- r) Organismos de la administración pública paraestatal;
- s) Instituciones de educación superior de la Federación, de carácter autónomo;
- t) Empresas Productivas del Estado;
- u) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
- v) Cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

Cabe señalar que el artículo 7 de la Ley de Remuneraciones establece que, para la determinación de la remuneración de los servidores públicos antes indicados, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que correspondan a los entes públicos respectivos, a falta de superior jerárquico, se considerará como equivalente al Presidente de la República.



Finalmente, el artículo 7 de la Ley de Remuneraciones establece que las autoridades competentes al definir las remuneraciones de los servidores públicos deberán implementar una política de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que en igualdad de condiciones, los sueldos sean los mismos entre mujeres y hombres.

Por su parte, el artículo 7 Bis de la Ley de Remuneraciones, incorporado en la reforma de abril de 2019, establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será responsable de emitir una opinión anual sobre los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos, y sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función.

Así, para la elaboración de la opinión el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados deberá solicitar las consideraciones y propuestas que al efecto emitan por lo menos tres instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros de investigación nacionales de reconocido prestigio.

Una vez que se encuentre debidamente integrada la opinión deberá ser remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cinco días después de que la Cámara de Diputados haya recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al respecto, es de precisar que la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas tiene por finalidad ser un instrumento de apoyo y consulta para que la Cámara de Diputados analice si las propuestas de remuneraciones de los servidores públicos contenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se ajustan a los criterios y directrices de política económica establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Criterios Generales de Política Económica, en las exposiciones de motivos de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos, entre otros.



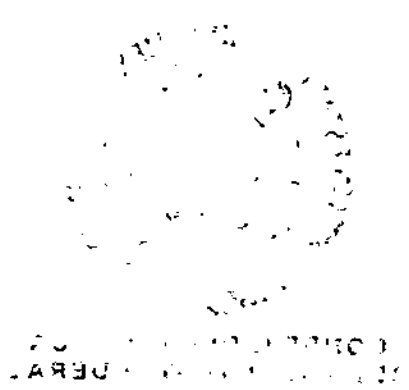
CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Finalmente, el artículo 8 de la Ley de Remuneraciones establece que, durante el procedimiento de programación y presupuestación, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto.

Así, el manual de remuneraciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, se deberán constreñir a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo anterior, se advierte que los artículos 6º, 7º, 7 Bis y 8º de la Ley de Remuneraciones contienen las reglas mínimas necesarias para que las autoridades competentes estén en posibilidad de determinar en el Presupuesto de Egresos correspondiente o en sus proyectos de presupuesto, las remuneraciones de los servidores públicos, a que hace mención la citada Ley Federal, ello, en términos de los principios y reglas consagrados en los artículos 75 y 127 de la Constitución General, por lo que, contrario a lo señalado por el Instituto actor, y como se verá más adelante, no permite la fijación arbitraria de la remuneración del Presidente de la República la cual será referente para los demás servidores públicos.

Cabe resaltar que, en términos de lo establecido por el artículo 127 de la Constitución General, los artículos citados de la Ley de Remuneraciones permiten fijar una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo o cargo, el cual deberá ser proporcional a sus responsabilidades, en el entendido de que la regulación contenida en dicha Ley se complementará con los reglamentos internos de cada ente, las instrucciones o determinación para cada empleo, cargo o comisión, así como los oficios e instrucciones que se emitan de momento en momento atendiendo a las características especiales del puesto, cargo o comisión, o instrucciones



específicas que se emitan, situaciones que permiten fijar los razonamientos básicos necesarios para que se determine de forma individual el pago que deberá cubrir a cada servidor público dependiendo de su responsabilidad, desde luego, tomando como base la remuneración total anual que perciba el Presidente de la República.

Robustece lo anterior, el hecho de que el artículo 8º de la Ley de Remuneraciones señala que los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores de las remuneraciones que se proponen perciban los servidores públicos que presten sus servicios en cada ejecutor de gasto; y que los manuales de percepciones que cada ente emita se apegará a lo aprobado en cada presupuesto de egresos, por lo que será cada uno de ellos quienes determinarán los niveles de los tabuladores de sus servidores públicos.

Máxime que la Ley de Remuneraciones en su artículo 7 Bis dispone que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas deberá emitir una opinión respecto de los montos mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos con el apoyo de, por lo menos tres instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros de investigación nacionales de reconocido prestigio.

Es por lo anterior que se estima que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, se ajusta a la Constitución General, a las disposiciones vigentes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a la Exposición de motivos de la norma impugnada y a los Criterios Generales de Política Económica 2021.

En consecuencia, también se cuentan con los parámetros suficientes para la determinación de la remuneración del Presidente de la República, tal y como se ha demostrado.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Además, es de señalar que desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, no se ha considerado aplicable la fracción III del artículo 127 constitucional al Instituto actor, sino hasta ahora que se aplica una política de austeridad republicana.

En efecto, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 en el que se previeron, por primera vez, las remuneraciones de los servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional Electoral, éstas nunca han superado –en un 50% o menos, como lo pretende el accionante–, la remuneración del Presidente de la República, como podrá apreciarse en el siguiente cuadro:

Ejercicio fiscal	Remuneración total anual del Presidente de la República	Remuneración total anual de la Máxima Representación del Instituto Nacional Electoral Consejero Presidente / Consejeros Electorales
2015	2,984,089	2,979,897
2016	2,989,128	2,987,547
2017	3,002,971	2,994,563
2018	3,115,531	2,997,090
2019	1,663,050	
2020	1,716,654	1,716,000
2021	1,719,581	1,718,926

Como puede apreciarse, durante los años de 2015 a 2020, la remuneración de la Máxima Representación del Instituto actor –como referencia para las retribuciones del resto de sus servidores públicos– fue inferior a la del Presidente de la República.

Derivado de lo anterior, es evidente que la inaplicación de la fracción III del artículo 127 constitucional a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral constituye un acto consentido que no puede ser hecho valer 5 años después del primer acto en que no se aplicó ese dispositivo. En ese sentido, la validez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 debe ser reconocida.



Como corolario, es de destacar que de acuerdo al artículo 205 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, por la naturaleza estatal que tiene encomendada, harán prevalecer el respeto a la Constitución, las leyes y la lealtad a la Institución, por encima de cualquier interés particular. Por lo que debe ser incuestionable la obligación que tienen de hacer observar los postulados de los artículos 74, fracción IV, 127 y 134 constitucionales, con independencia a cualquier interés personal, en la determinación de sus remuneraciones.

Es por las anteriores consideraciones que, en términos generales, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 no viola la autonomía del Instituto accionante ni el contenido del artículo 127 constitucional, por lo que deberá reconocerse su validez.

TERCERO. LA REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, COMO TOPE MÁXIMO PARA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL NO VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE SU PERSONAL.

El Instituto actor señala, en esencia, que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, vulnera su autonomía constitucional para establecer los límites a las percepciones respecto de todos los cargos tabulares que estima existen en el Instituto y pretende que se ajusten sus percepciones ordinarias y remuneraciones totales anuales al máximo establecido para el Presidente de la República, bajo una interpretación literal asistemática y arbitraria del artículo 127, base II, constitucional, desconociendo el derecho humano y laboral que el propio precepto citado concede en favor de las y los servidores públicos del Instituto, a una remuneración justa, adecuada y proporcional a sus responsabilidades, y vedando al órgano competente del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de aplicar dicho artículo 127 en su integridad y en



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL


armonía con el resto de disposiciones constitucionales, convencionales y legales que protegen a los trabajadores.

Así, desde la perspectiva del Instituto actor, una reducción en las remuneraciones de su personal de mando, como la que podría resultar de los actos reclamados, a su vez podría derivar en una violación de diversos derechos humanos:

- a. Violación al derecho humano previsto en el artículo 5° constitucional, consistente en no ser obligado a realizar un trabajo sin la justa retribución, en relación con el derecho previsto en el artículo 127 constitucional, relativo a que el desempeño de una función, cargo, o comisión pública conlleva el derecho a una remuneración adecuada e irrenunciable.
- b. Violación al artículo 1° constitucional en virtud del cumplimiento progresivo de los derechos humanos. El artículo 1° constitucional establece un mandato de progresividad y, por ende, de no regresividad, para las autoridades en el sentido de dar cumplimiento progresivo a los derechos humanos. Dicho cumplimiento debe realizarse en el margen de los recursos disponibles. En este contexto, si el Estado Mexicano goza, en su conjunto, de más recursos, el Instituto Nacional Electoral se encontrará en claro incumplimiento del principio de progresividad y no regresividad al reducir la remuneración de sus servidores públicos.
- c. En el caso de los miembros del órgano superior de dirección, violación a su derecho de irreductibilidad salarial. Al respecto, el promovente considera que la garantía salarial prevista en el artículo 94, décimo primer párrafo, de la Constitución General es aplicable a quienes forman parte del órgano máximo de dirección del Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior se estima **infundado**, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se reitera que son inatendibles los conceptos de invalidez, puesto que el Instituto actor pretende plantear supuestas violaciones a



derechos laborales y humanos de su personal, lo cual no puede ser materia de una controversia constitucional, pues ésta constituye un medio de control constitucional que busca proteger el sistema federal y la división de poderes, mas no así tutelar derechos fundamentales. Por lo que su argumento deviene a todas luces inatendible y, por ende, infundado.

Ello es así, ya que el Instituto promovente pretende hacer supuestas violaciones a los derechos de sus servidores públicos, bajo la relación causal hipotética en el sentido de que ello viola su autonomía constitucional.

Así, en principio, el Instituto actor no acredita ni demuestra la relación causal entre la supuesta reducción a las remuneraciones de sus servidores públicos y la afectación a su autonomía, pues se basa en la mera suposición de que, al ser reducidas, y, a su consideración, inadecuadas y desproporcionales, genera como consecuencia inmediata una vulneración a su autonomía constitucional.

Es por ello que se estima que el promovente pretende alterar la naturaleza y fines del presente medio de control constitucional, al buscar hacer valer derechos de sus servidores públicos, y no así una posible invasión a su esfera de competencias.

No obstante lo anterior, ad cautelam, se expone lo siguiente:

Previo a analizar si la remuneración del Presidente de la República, al ser reducida en relación con lo determinado hasta 2018, viola o no derechos fundamentales, se insiste en que el Instituto actor no cuenta con atribuciones suficientes para fijar las retribuciones de sus servidores públicos, pues, como ya se expuso, la Cámara de Diputados tiene la facultad de modificar los tabuladores propuestos por dicho Instituto en su proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución General.

Es por ello que lo referido por el Instituto actor en el sentido de que la fijación de la remuneración del Presidente de la República, es violatoria de su



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

autonomía constitucional, es infundado, pues ésta no implica que pueda hacer determinaciones presupuestales definitivas e inmodificables.

Así, la modificación de las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto actor obedeció precisamente a la retribución determinada para el Primer Mandatario, observando lo dispuesto por el artículo 127 constitucional, ya que la propuesta original del accionante no cumplía con el postulado relativo a que ningún servidor público podrá obtener una remuneración superior al Presidente de la República.

Lo anterior máxime que, como se explicó en líneas precedentes, la excepción prevista en la fracción III del artículo 127 constitucional no puede ser generalizada a todos los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, como indebidamente lo pretende el actor, pues se mermaría la intención del Constituyente al prever esta medida excepcional. Ello aunado a que, como ya se dijo, dicha fracción nunca se les ha aplicado a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, por lo menos, desde 2015, después de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Tomando en cuenta las anteriores premisas, la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto actor no son violatorias de sus derechos fundamentales, particularmente, a obtener una remuneración adecuada e irrenunciable y al principio de progresividad y no regresividad, por las razones siguientes:

En primer lugar, es de mencionar que el accionante considera que su autonomía se ve vulnerada a partir de la reducción significativa de la remuneración del Presidente de la República, es de señalar que los artículos 123, Apartado B, fracción IV y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permiten realizar ajustes salariales.

Lo anterior es así, ya que el principio que se considera violentado establece un supuesto de excepción, en el que determina que "[s]ólo podrán hacerse



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes", tal y como se observa a continuación:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en las entidades federativas.

(...)"

"Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

(...)"

De lo transcrito con antelación se aprecia que la fracción IV, del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos —esto es, durante el ejercicio fiscal en



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

que rija el presupuesto respectivo—, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución y en la ley.

Derivado de lo anterior, se desprende, *a contrario sensu*, que la Constitución General de la República permite que los salarios de los trabajadores al servicio del Estado puedan ser reducidos cada año, con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.

En este orden, los artículos 123 y 127 de la Constitución General prevén los principios de remuneración, de asignación presupuestaria y la excepción que permite la disminución salarial en el caso de que el servidor público tenga una percepción mayor a la del Presidente de la República, o a la de su superior jerárquico, principios que están dirigidos a los servidores públicos y garantizan el derecho a recibir una remuneración proporcional a las responsabilidades que desempeñen, fijada en el Presupuesto de Egresos.

En ese sentido, es claro que existe una permisión constitucional para llevar a cabo la reducción salarial a los servidores públicos que tengan una percepción mayor a la del Presidente de la República, por lo que es evidente que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021 en ningún momento vulnera el principio de no disminución salarial.

Asimismo, no debe pasar desapercibido que las prestaciones que se otorgan a los servidores públicos se pagan con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, por ende, si se reducen los recursos a presupuestar, es dable pensar que se tengan que reducir los salarios que se otorgan a los servidores públicos de los Poderes de la Unión, así como a los servidores públicos de los órganos autónomos.

De no ser así, podría llegarse al absurdo de que el Estado debiera mantener en los mismos términos las remuneraciones de los servidores públicos, careciendo de recursos para cubrirlas, o bien teniendo la imperiosa necesidad de aplicar éstos en otros rubros de interés prioritario para la soberanía nacional.



Resulta aplicable al presente juicio el siguiente criterio:

"SALARIO, REDUCCIÓN DEL. No es exacto que toda reducción del salario, aun con el consentimiento del trabajador, esté prohibida, lo que nuestra legislación laboral prohíbe es que se pacte un salario inferior al mínimo (artículo 85 de la Ley Federal del Trabajo), o un salario que no sea remunerador (fracción XXVII, inciso b), del artículo 123 de la Constitución Federal). Cuando se reduce el salario al grado de que llegue a ser inferior al mínimo legal, o deje de ser un salario remunerador, tal reducción no puede surtir efecto alguno, aun cuando el trabajador haya consentido en ello, por implicar una renuncia de los derechos de éste. Pero fuera de los casos indicados, la reducción del salario con el consentimiento del trabajador es válida. Esta conclusión se deriva del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: 'El trabajador podrá rescindir el contrato: I ... VIII. Por reducir el patrón el salario del trabajador sin su consentimiento, a menos que medie decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. De acuerdo con dicha disposición, es válida la reducción del salario con el consentimiento del trabajador, toda vez que éste sólo puede invocar esa reducción para rescindir su contrato de trabajo por causas imputables al patrón, cuando no haya dado su consentimiento para que se le reduzca el salario.' Época: Sexta Época, Registro: 276507, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Quinta Parte, Materia(s): Laboral, Tesis:, Página: 112.

Del criterio al que se hace referencia con antelación, se desprende que el mismo establece que no toda reducción salarial está prohibida, sino que lo que nuestra legislación prohíbe es:

- Que se pacte un salario inferior al mínimo.
- Que se pacte un salario que no sea remunerador.

Derivado de lo anterior, es que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, no vulnera principio ni derecho laboral alguno, atento a que no establece una reducción salarial al grado de que llegue a ser inferior al mínimo legal o deje de ser un salario remunerador, ya que con el presupuesto asignado al Instituto actor se podrán cubrir y determinar las remuneraciones de sus servidores públicos, por lo que la reducción salarial que ha implicado la disminución de la remuneración del Presidente de la República es válida.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Aunado a lo expuesto, se estima necesario señalar que el salario tabular es el importe consignado en los tabuladores regionales base para calcular las prestaciones, mientras que las remuneraciones complementarias son distintas al sueldo base tabular y las cuales no forman parte para el cálculo del mismo, y que, por ello, estas últimas pueden disminuirse atendiendo a las finanzas públicas, sin que, por ello, se contravenga el principio de irretroactividad, pues no existe un derecho adquirido para que siempre se otorguen los ingresos complementarios, o, en su caso, el mismo monto.

En este sentido, si bien es cierto que las remuneraciones complementarias se encuentran dentro del Presupuesto de Egresos, también lo es que las mismas no forman parte del salario tabular, en virtud de que corresponden a un concepto distinto y por tanto en el Presupuesto de Egresos se especifican las percepciones monetarias y en especie, así como prestaciones que se cubren para cada nivel jerárquico.

En tales circunstancias, se reitera que los ajustes a los sueldos y salarios de los servidores públicos, recaen sobre las remuneraciones complementarias, y no así sobre el sueldo base tabular, mismo que no puede ser rebajado en perjuicio de los trabajadores, aspecto que deviene de la protección al salario de la cual disfrutaban los trabajadores de confianza.

El sueldo base tabular es un sólo concepto y las remuneraciones complementarias si bien están incluidas en el tabulador, no son parte del cálculo del sueldo base tabular, circunstancia que hace apto efectuar ajustes sobre las mismas, más si la racionalidad de la medida es mantenerse acorde con el texto constitucional.

En tales condiciones, se puede afirmar que los ajustes de las remuneraciones de los servidores públicos con motivo de la implementación de la reforma constitucional a los artículos 75 y 127, son acordes al esquema jurídico que rige al presupuesto y a las remuneraciones en sí mismas, posibilitando la



conclusión de que no puede considerarse que exista una violación al principio de irreductibilidad salarial.

En este esquema, las remuneraciones, en todo momento, han estado sujetas a cambios o ajustes a cada periodo de renovación presupuestaria, pues, como se ha analizado, estas percepciones se rigen por el principio de anualidad y por los límites previstos en el artículo 127 de la Constitución General.

Asimismo, la remuneración acorde a la función que desempeña el servidor continúa siendo tutelada en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del artículo 127 constitucional, sigue contemplando que los trabajadores del Estado recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, así como, proporcional a sus responsabilidades, la cual será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos, pero ahora limitados por un techo cuya razonabilidad radica en un principio de austeridad republicana.

En efecto, en atención a la política de austeridad republicana que, como se ha mencionado en el presente escrito, es una razón subyacente de la reforma al artículo 127 constitucional, expresada en la iniciativa respectiva, en la que se decidió reducir la remuneración del Presidente de la República a fin de que los recursos sobrantes se destinarán a programas prioritarios que beneficien directamente a la población.

Así, la remuneración del Presidente de la República, como tope máximo para la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos, establecida en el Presupuesto de Egresos ahora impugnado, persigue una finalidad de interés público que deberá tomarse en cuenta por ese Alto Tribunal al momento de resolver la presente controversia constitucional.

En este orden, se estima que la remuneración total anual del Presidente de la República, contenida en los Anexos impugnados, no transgrede el principio de no reductibilidad de las remuneraciones, ni los derechos laborales del personal del Instituto actor.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Aunado a lo anterior, es de mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que un **derecho adquirido** es aquél que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquél que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico, a diferencia de una **expectativa de derecho** la cual es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho.

Esto es, mientras que el **derecho adquirido constituye una realidad**, la **expectativa de derecho corresponde al futuro**. En estas condiciones, se colige que si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no violan la garantía de irretroactividad.

Robustece lo anterior la tesis siguiente:

"IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado." Época: Novena Época, Registro: 189448, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. LXXXVIII/2001, Página: 306.

Por tanto, una norma resulta violatoria del principio de irretroactividad, cuando la misma trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; es decir, derechos o supuestos jurídicos y consecuencias ya realizadas.

Ahora bien, nuestro Alto Tribunal, de igual forma, ha señalado que, para que una ley sea retroactiva, **se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial.**

Es importante resaltar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es de carácter anual en términos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Federal, por lo que, en cuanto a la fijación de remuneraciones a los servidores públicos ahí fijada, así como en el caso de la remuneración del Presidente de la República, se debe de presupuestar y aprobar anualmente.

Por tanto, las remuneraciones que se otorgan a los servidores públicos, están sujetas a los presupuestos establecidos en ley, los cuales se rigen por el principio de anualidad, es por lo anterior que las remuneraciones se determinan y autorizan por cada ejercicio fiscal, cuya vigencia inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

En tales condiciones, al ser anual la norma materia de impugnación, su aplicación sólo produce efectos hacia el futuro, sin que ello implique afectar situaciones anteriores, en razón de su propia naturaleza, de ahí que no se vulneren derechos adquiridos de los servidores públicos, pues todas las partidas correspondientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, pueden ser modificadas año con año dependiendo de lo aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, las remuneraciones, al estar contenidas dentro del Presupuesto relativo, que se reitera deberá ser aprobado año con año, atendiendo las condiciones económicas del país, están sujetas a las modificaciones que la Cámara de Diputados considere necesarias, de acuerdo con el objetivo de las



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

finanzas públicas respecto de ese año fiscal, sin que ello pudiera considerarse de forma alguna, contrario a lo previsto en el artículo 14 Constitucional.

Por lo que las remuneraciones de los servidores públicos de la parte actora, así como sus condiciones generales de trabajo, son simples expectativas de derechos, y no derechos adquiridos. De ahí que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en lo atinente al tope máximo de las remuneraciones de los servidores públicos, no resulta violatorio del principio de seguridad jurídica ni del de legalidad.

De igual forma, resulta infundado el argumento de la accionante en el sentido de que la garantía salarial prevista en el artículo 94, décimo segundo párrafo de la Constitución General resulta aplicable a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, pues es claro que es una disposición aplicable únicamente a los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, durante el ejercicio de sus encargos, mas no así al personal del Instituto actor.

En este sentido, no es procedente la aplicación del artículo 94, décimo segundo párrafo de la Norma Fundamental, a fin de que se exima al Instituto actor del deber constitucional contenido en el artículo 127 de la Carta Magna, atentando en contra del principio de supremacía constitucional. Lo anterior máxime que el artículo 127 constitucional es aplicable para todas las entidades y órganos públicos, incluso, aquéllos que gozan de autonomía, y, en consecuencia, la norma constitucional comprende al Instituto Nacional Electoral.

Así, no sería posible realizar una aplicación analógica del artículo 94 constitucional, pues la misma se traduciría en una violación al numeral 127 de la propia Carta Magna.

Aunado a lo expuesto, se estima necesario señalar que el salario tabular es el importe consignado en los tabuladores regionales base para calcular las

prestaciones, mientras que las remuneraciones complementarias son distintas al sueldo base tabular y las cuales no forman parte para el cálculo del mismo, y que, por ello, estas últimas pueden disminuirse atendiendo a las finanzas públicas, sin que, por ello, se contravenga el principio de irretroactividad, pues no existe un derecho adquirido para que siempre se otorguen los ingresos complementarios, o, en su caso, el mismo monto.

En este sentido, si bien es cierto que las remuneraciones complementarias se encuentran dentro del Presupuesto de Egresos, también lo es que las mismas no forman parte del salario tabular, en virtud de que corresponden a un concepto distinto y por tanto en el Presupuesto de Egresos se especifican las percepciones monetarias y en especie, así como prestaciones que se cubren para cada nivel jerárquico.

En tales circunstancias, se reitera que los ajustes a los sueldos y salarios de los servidores públicos, recae sobre las remuneraciones complementarias, y no así sobre el sueldo base tabular, mismo que no puede ser rebajado en perjuicio de los trabajadores, aspecto que deviene de la protección al salario de la cual disfrutaban los trabajadores de confianza.

El sueldo base tabular es un sólo concepto y las remuneraciones complementarias si bien están incluidas en el tabulador, no son parte del cálculo del sueldo base tabular, circunstancia que hace apto efectuar ajustes sobre las mismas, más si la racionalidad de la medida es mantenerse acorde con el texto constitucional.

En abundancia a lo anterior, es de señalar que, conforme a lo establecido por el artículo 277 D de la Ley del Seguro Social, deben considerarse los tabuladores que serán adaptados a las dependencias y entidades del sector público federal expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se puede apreciar en la siguiente transcripción:

"Artículo 277 D. El Consejo Técnico, sujeto a las previsiones presupuestarias, aprobará los sueldos y prestaciones de los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta Ley, y la contratación de servicios profesionales



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

por honorarios, que resulten estrictamente necesarios, conforme a las bases de observancia obligatoria que el mismo emita.

Los sueldos a que se refiere el párrafo anterior se determinarán considerando los tabuladores que para las dependencias y entidades del sector público federal expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las condiciones imperantes en el mercado, conforme a un sistema de valuación de puestos. Los ajustes deberán guardar congruencia con los lineamientos que al efecto observe el Gobierno Federal, efecto para el cual el Instituto solicitará la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

(...)"

Derivado de lo anterior podemos definir que independientemente de que los trabajadores de la parte actora tengan remuneraciones agregadas, cuentan con su sueldo base tabular que no podrá ser alterado; sin embargo, todos los complementarios deberán ajustarse a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Lo anterior, en cumplimiento con lo preceptuado por la fracción II del artículo 127 de la Constitución Federal en la que se determina que ningún servidor público podrá obtener una remuneración mayor a la fijada para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

En tales condiciones, se puede afirmar que los ajustes de las remuneraciones de los servidores públicos con motivo de la implementación de la reforma constitucional a los artículos 75 y 127, son acordes al esquema jurídico que rige al presupuesto y a las remuneraciones en sí mismas, posibilitando la conclusión de que no puede considerarse que existan violaciones a derechos adquiridos o al principio de irretroactividad normativa.

En este esquema, las remuneraciones, en todo momento, han estado sujetas a cambios o ajustes a cada período de renovación presupuestaria, pues, como se ha analizado, estas percepciones se rigen por el principio de anualidad y por los límites previstos en el artículo 127 de la Constitución General.

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se actualiza una violación al principio de progresividad de derechos humanos, puesto que los servidores

públicos no tienen un derecho adquirido a recibir una remuneración fija, pues ello se encuentra sujeto a ajustes presupuestales anuales. De tal forma que la cantidad determinada que corresponda a su remuneración es una mera expectativa de derecho.

Además, la variación de las remuneraciones de los servidores públicos en función de la determinada para el Presidente de la República en el presente ejercicio fiscal, no es regresiva en relación con el derecho a una remuneración **adecuada**, pues este carácter no viene dado, por sí mismo, de la percepción del Primer Mandatario, sino que dicho parámetro deberá atender a otro tipo de cuestiones tales como cargo, nivel de responsabilidad, entre otros.

A mayor abundamiento, es de precisar que el principio de progresividad irradia a la totalidad de los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, lo cual se relaciona no solamente con la prohibición de regresividad del disfrute de éstos, sino con la obligación positiva de promover su mejoramiento de manera gradual, esto es, el Estado tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura jurídica, económica, social, política y cultural del país, a fin de garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos de manera plena.

Así, el principio de progresividad exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales.

Conforme a lo anterior, es claro que existiría una violación al principio de progresividad cuando el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad a los derechos humanos, o bien, una vez adoptadas tales medidas, exista una regresión -sea o no deliberada- en el avance del disfrute y protección de tales derechos.

Lo antes señalado tiene sustento jurisprudencial, en el criterio siguiente:



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

"PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de vulneración al principio referido, pues para determinar si una medida lo respeta, es necesario analizar si: (I) dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el operador jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada." Época: Décima Época, Registro: 2010360, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a. CXXVI/2015 (10a.), Página: 1298.

El criterio citado establece que, para cumplir con el principio de progresividad, las autoridades están obligadas a incrementar la protección a los derechos humanos y sus garantías, y para determinar si los actos del Estado atienden a dicho principio, el órgano jurisdiccional tiene el deber de analizar la afectación individual en relación con el derecho de la colectividad, de lo que resulta evidente que el interés social prevalece ante el individual.

Ahora bien, el límite de las remuneraciones de los servidores públicos establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2021, no viola el principio de progresividad, en razón de que no restringe el derecho a una vida digna, sino que únicamente limita los ingresos de los servidores públicos en función de la remuneración del Presidente de la República.



Lo anterior, se traduce en un beneficio para sectores sociales vulnerables, esto es, en caso de que se efectúe una reducción en las remuneraciones de los servidores públicos que integran el Instituto demandante, los recursos respectivos se podrán aplicar en programas prioritarios, lo que implica una justificación en la medida, así como un cumplimiento cabal al principio de progresividad, por tanto, la medida garantiza la protección constitucional y legal, es por lo anterior que no puede considerarse que exista un retroceso frente al nivel de protección alcanzado que vaya en contra del principio de progresividad.

Precisado lo anterior, debe estimarse que el Presupuesto de Egresos de la Federación, no puede considerarse que transgreda el principio de progresividad, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido, ni suprime el mandato constitucional que impone al Estado determinar una **remuneración proporcional a las responsabilidades del servidor público así como, adecuada por la función, que desempeñen**, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de calcularse dicha remuneración, con los objetivos siguientes:

- Redistribuir los recursos públicos que se presupuestan a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, para destinarlos a sectores sociales vulnerables.
- Impedir problemas para la economía nacional.

Máxime que el Legislador federal si bien estableció un tope en las remuneraciones de los servidores públicos, lo cierto es que también contempló que esta remuneración fuera digna y proporcional a las responsabilidades del servidor público.

Así, se puede afirmar que la fijación de la remuneración del Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no constituye una medida regresiva, en tanto que existe una plena justificación de la medida, consistente en la necesidad de redistribuir los recursos presupuestales,



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

máxime que la Ley controvertida establece remuneraciones adecuadas y proporcionales a las responsabilidades del servidor público.

Lo anterior es así, en tanto que el principio de progresividad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal, supone que una vez ingresado un derecho humano al sistema jurídico interno, no puede ser desconocido ni retrogrado en el futuro.

En otras palabras, la progresividad supone una tendencia hacia la extensión de los derechos humanos, pero tales principios -de progresividad y no regresividad- no tienen el alcance pretendido por el demandante, es decir, reajustar las remuneraciones de los servidores públicos.

Ahora bien, si bien la remuneración del Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, establece una remuneración distinta y menor a lo presupuestado en años anteriores; lo cierto es que dicha modificación no desconoce derecho humano alguno, reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

En efecto, la remuneración acorde a la función que desempeña el servidor continúa siendo tutelada en la Constitución y en la Ley Reglamentaria del artículo 127 constitucional, sigue contemplando que los trabajadores del Estado recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, así como, proporcional a sus responsabilidades, la cual será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos, pero ahora limitados por un techo, por tanto no estamos ante una regresión, sino ante una redistribución equitativa de los recursos de la Nación.

Es por lo anterior que, en atención a la política de austeridad republicana que, como se ha mencionado en el presente escrito, se encuentra inmersa en el artículo 127 constitucional, de conformidad con la intención del Constituyente de reformar dicho precepto, expresada en la iniciativa respectiva, se decidió reducir la remuneración del Presidente de la República a fin de que los

recursos sobrantes se destinaran a programas prioritarios que beneficien directamente a la población.

Ello, desde luego, encierra un interés público que permite la desatención al principio de confianza legítima, lo que se traduce en una finalidad constitucionalmente válida para limitar, de alguna manera, dicho principio.

De lo anterior se desprende que, atendiendo a una exigencia social, se determinó establecer el tope a las remuneraciones que perciben los servidores públicos, contenido en los Anexos 23.1.2 y 23.1.3 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ello no implica, de modo alguno, que los servidores públicos, a partir de dicho tope, dejen de percibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades, pues, como se ha expuesto, estos parámetros se refieren a que dicha remuneración sea justa y suficiente para cubrir las necesidades de los servidores públicos y de sus familias, y que sean proporcionales al trabajo desempeñado y al nivel de responsabilidades que cada servidor público tenga.

Como consecuencia de lo anterior, ese Alto deberá reconocer la validez de los Anexos 23.1.2, 23.1.3, así como los diversos 23.8, 23.8.1.A, 23.8.1.B, 23.8.3.A y 23.8.3.B del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, al no existir una violación a los derechos laborales, su libertad de trabajo, los principios de seguridad jurídica, legalidad y progresividad, y el derecho a la irreductibilidad salarial.

CUARTO. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN AL DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NO VIOLA LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL Y PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN RELACIÓN CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA CONSULTA POPULAR.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

El accionante aduce que la Cámara de Diputados fue omisa en establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la suficiencia presupuestaria para organizar la consulta popular convocada mediante *"Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, no obstante que el propio Constituyente previó en el artículo *"transitorio quinto"* del *"Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato"*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2019, que *"el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes"*.

En ese tenor, el promovente indicó que solicitó fuera aprobado el monto adicional de \$1,499,392,669.67 (un mil cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.) para la organización y realización de la consulta, no obstante, la Cámara de Diputados, al discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, realizó al Instituto Nacional Electoral un recorte presupuestal respecto de su propuesta de anteproyecto por la cantidad de 870 millones de pesos, con lo cual se limita aún más la autonomía presupuestaria del Instituto y el ejercicio de sus funciones constitucionales, en tanto la Cámara de Diputados en desobediencia al propio Constituyente y a lo solicitado en su comentario por este órgano autónomo, lo subordina a una insuficiencia presupuestaria para realizar la consulta popular, función electoral para la cual se debe contar con los recursos necesarios y suficientes así mandatados por la Constitución.

Lo anterior se estima **infundado**, en atención a las siguientes consideraciones:

En principio, es necesario para el caso que nos ocupa, tener presente el contenido de los Decretos citados por la parte actora, como son los siguientes:

"DECRETO por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular."



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INTERIORES

(...)

CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR.

Artículo Único. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 35, fracción VIII, Apartados 1o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción VI, de la Ley Federal de Consulta Popular

CONVOCA

A las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión en el proceso de CONSULTA POPULAR sobre 'las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos', la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, conforme a las siguientes:

BASES

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.

SEGUNDA. DIFUSIÓN.

La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que determine la metodología aprobada por el Instituto Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35, fracción VIII, Apartado 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Sección Tercera del Capítulo III de la Ley Federal de Consulta Popular.

TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA.

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES, CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS POR LOS ACTORES POLÍTICOS ENCAMINADO A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS?

SÍ ESTOY DE ACUERDO

NO ESTOY DE ACUERDO

CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

El Instituto Nacional Electoral determinará la ubicación de las casillas de la Consulta Popular, considerando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Instituto determine, el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla.

QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPULAR.

Apertura.

La jornada de la Consulta Popular se realizará el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determine el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán todas las y los ciudadanos interesados en emitir su opinión.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Cierre.

Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo.

Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado en el acta circunstanciada que al efecto se levante por personal del Instituto facultado para ello.

SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA.

La validación de los resultados de la Consulta Popular estará a cargo de la instancia calificadora.

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria y en la metodología aprobada serán resueltos por el Instituto Nacional Electoral.

(...)"

"DECRETO por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020.

(...)

Artículo Único. Se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para realizar la jornada de consulta popular.

Segundo. a Tercero. ...

(...)"

Al respecto, conviene señalar que la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados

United Mexican States, applying in the conduct of the same the provisions of the Federal Code of Institutions and Electoral Procedures²⁰.

De igual forma se prevé que serán objeto de consulta popular, **los temas de trascendencia nacional**, que será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resultado de la misma es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores²¹.

Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y que impacten en una parte significativa de la población²².

Por su parte, el artículo 7 de la Ley Federal de Consulta Popular, prevé que votar en las consultas populares **constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos** para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional. A su vez, el artículo 8 del mismo ordenamiento dispone que la consulta o consultas populares a que convoque el Congreso, se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.

²⁰ "Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la consulta popular exclusivamente cuando la consulta coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."

²¹ "Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado de la misma es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores."

²² "Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como:

- I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y
- II. Que impacten en una parte significativa de la población."



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Al respecto, el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular, prevé lo siguiente:

"Artículo 13. La petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, en términos de esta Ley, a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal."

Del numeral en cita, se advierte que la petición de consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, a partir del uno de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el quince de septiembre del año previo al en que se realice la jornada electoral federal.

Por otra parte, como se mencionó en párrafos anteriores, el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular,²³ prevé que **cuando la propuesta de consulta popular provenga del Presidente de la República**, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta y la enviará.

²³ *"Artículo 26. Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:*

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

II. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo;

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c) Notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita;

III. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen;

V. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VI. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con su propuesta de pregunta formulada para que resuelva sobre su constitucionalidad.

Aprobada la petición del Congreso, éste expedirá la Convocatoria de Consulta Popular mediante Decreto; notificará al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De conformidad con lo que establece el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Instituto Nacional Electoral será el responsable del ejercicio de la función estatal de organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, incluida, la de llevar a cabo la promoción de su participación.

Asimismo, el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular²⁴, prevé que el Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto.

Ahora bien, conviene reiterar que los argumentos del Instituto actor son a todas luces infundados, pues el accionante pierde de vista que las facultades que le son conferidas no constituyen funciones eventuales o extraordinarias, como lo pretende hacer ver.

De lo anterior, cabe señalar que el 9 de agosto de 2012, se adicionó al artículo 35 constitucional, la fracción VIII, esto es, se prevé por primera vez el ejercicio democrático de consultas populares y lo más importante, se le confiere al Instituto Nacional Electoral, la facultad de su organización, el cual, a la letra señala:

"ARTÍCULO 35. Son derechos del ciudadano:
(...)

²⁴ "Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y del Código."



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

VIII.- Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

(...)

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción; así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

(...)."

Lo anterior, pone en evidencia que, desde el 9 de agosto de 2012, se encuentra previsto en el texto constitucional como derechos de los ciudadanos, votar en las consultas populares, así como otorgarle la facultad directa al Instituto Nacional Electoral, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2014, se adicionó el numeral 4²⁵ de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, facultando al Instituto Nacional Electoral para organizar, desarrollar y verificar el cómputo de los resultados en materia de consultas populares.

Así, el 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley Reglamentaria del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la Ley Federal de Consulta Popular, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Asimismo, el artículo 45 de la Ley Federal de Consulta Popular, hace referencia a los rubros que forman parte del material electoral para la jornada de la consulta popular, el cual se transcribe:

²⁵ "4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;"

"Artículo 45. Los presidentes de los Consejos Distritales entregarán a cada presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los cinco días previos al anterior de la jornada de consulta y contra el recibo detallado correspondiente:

I. Las papeletas de la consulta popular, en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de electores con fotografía para cada casilla de la sección;

II. La urna para recibir la votación de la consulta popular;

III. La documentación, formas aprobadas, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, y

IV. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de los funcionarios de la casilla.

A los presidentes de mesas directivas de las casillas especiales les será entregada la documentación y materiales a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción de la lista nominal de electores con fotografía, en lugar de la cual recibirán los medios informáticos necesarios para verificar que los electores que acudan a votar se encuentren inscritos en la lista nominal de electores que corresponde al domicilio consignado en su credencial para votar. El número de papeletas que reciban no será superior a 1,500.

La entrega y recepción del material a que se refieren los párrafos anteriores se hará con la participación de los integrantes de las Juntas Distritales que decidan asistir."

Por último, mediante reforma del 20 de diciembre de 2019, se modificó la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

(...)

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculativo para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Apartado reformado DOF 20-12-2019

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

Apartado reformado DOF 10-02-2014, 20-12-2019

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción se realizarán el primer domingo de agosto;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

(...)"

De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- Las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional se sujetarán a ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: i) Presidente de la República; ii) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o iii) los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Además, agrega que la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión y que cuando la participación total corresponda, al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y para las autoridades competentes.
- El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1 del artículo 35 en estudio, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
- El Instituto **promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos.** Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.
- Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

- Las consultas populares convocadas, se realizarán el primer domingo de agosto.

Ahora bien, el artículo 35, fracción VIII de la Carta Magna en relación con el artículo 35²⁶ y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Consulta Popular,²⁷ prevén que corresponde al Instituto Nacional Electoral, la obligación de llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la Consulta Popular.

Efectivamente, en la Ley Reglamentaria del artículo 35 de la Constitución General, esto es, la Ley Federal de Consulta Popular, específicamente en sus artículos 35 a 39²⁸, se establecen las facultades del Instituto Nacional Electoral, como organismo autónomo encargado de la organización, desarrollo, difusión, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular, ley que se encuentra vigente desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 15 de marzo de 2014.

En ese sentido, desde la adición de la fracción VIII al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 9 de agosto de 2012 y de la publicación de su ley reglamentaria, -Ley Federal de Consulta Popular-, se destaca que dentro de las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, se encuentran de forma directa la organización, difusión,

²⁶ "Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y del Código."

²⁷ "Sexto. Las referencias que esta Ley hace al Instituto Federal Electoral, se entenderán realizadas al Instituto Nacional Electoral, una vez que éste último queda integrado."

²⁸ "Artículo 36. Una vez que el Congreso notifique la Convocatoria al Instituto, el Secretario Ejecutivo lo hará del conocimiento del Consejo General en la siguiente sesión que celebre.

Artículo 37. Al Consejo General del Instituto le corresponde:

I. Aprobar el modelo de las papeletas de la consulta popular;
II. Aprobar los formatos y demás documentación necesaria para realizar la consulta popular, y
III. Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares.

Artículo 38. A la Junta General Ejecutiva del Instituto le corresponde:

I. Supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación en materia de consultas populares, y
II. Las demás que le encomiende la normatividad aplicable, o le instruya el Consejo General o su Presidente.

"Artículo 39. El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica elaborará y propondrá los programas de capacitación en materia de consultas populares."

desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular, cualquiera que ella sea, motivo por el cual es desacertado lo señalado por la parte actora al sostener que dichas facultades son eventuales y extraordinarias.

Ello en virtud, de que si bien es cierto que la Convocatoria de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de octubre de 2020, es la primera que se llevará a cabo desde la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no menos es cierto que desde la adición de la fracción VIII del artículo 35 Constitucional el Instituto Nacional Electoral, tuvo conocimiento de su importante participación en dicho procedimiento, pues sus facultades derivan del mandato constitucional, el cual no puede ser desconocido por una circunstancia particular, como lo es que éste no previere en su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021, una partida presupuestaria para las gestiones relacionadas con las "consultas populares".

Así, resulta por demás inconcuso que las facultades y gestiones que tiene la obligación de realizar el Instituto Nacional Electoral, como lo enmarca el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes a la consulta popular no son una función eventual o extraordinaria, como lo pretende evidenciar en su demanda de controversia constitucional, pues como se ha reiterado con anterioridad desde la adición de la fracción VIII al artículo 35 Constitucional, el actor tenía conocimiento de que el legislador había previsto, de forma directa, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados de la consulta popular.

En ese sentido, no puede condicionarse, como lo pretende la parte actora, la partida presupuestaria para llevar a cabo sus facultades conferidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las leyes reglamentarias, a lo que, en su caso determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular, pues se reitera que, conforme a la Constitución General,



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

desde la adición de la fracción VIII al artículo 35 Constitucional, le fue conferida de manera directa dicha facultad constitucional.

Así, el Instituto actor se centra en demostrar que el Congreso de la Unión no previó los mecanismos que proveyeran del presupuesto necesario al Instituto accionante, para hacer frente a su encomienda constitucional como órgano autónomo, en el uso de sus atribuciones y facultades para contribuir al desarrollo de la vida democrática y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

Además, agrega que conforme al Artículo Quinto Transitorio del *"Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular"* publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2020, se previó que las atribuciones conferidas al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares se cubrirían con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, pues dicha función es eventual o extraordinaria y no necesariamente está planificada y presupuestada por el Instituto accionante dentro del ejercicio anual respectivo.

Sin embargo, la parte actora omite tomar en cuenta varios puntos trascendentales los cuales demuestran que es obligación de ésta el prever el desarrollo de las obligaciones constitucionales en materia de consultas populares conforme a las disposiciones aplicables a la materia, por lo que son infundados los argumentos esgrimidos en su demanda.

Primeramente, se debe partir de la noción de que ese Alto Tribunal sostiene que los órganos constitucionales autónomos deben contar con autonomía funcional y financiera. Estas dos ideas surgen como consecuencia de la independencia y no subordinación a los poderes tradicionales, de la misma manera que lo son la autonomía técnica, la de gestión, o la de decisión.

La autonomía e independencia funcional y financiera radica en que ningún otro poder puede decidir sobre el funcionamiento del órgano con autonomía

constitucional ni en el manejo de sus finanzas, con independencia de que esté sujeto a la rendición de cuentas. Sin embargo, y esto es importante aclarar, ninguno tiene garantizado el monto de su presupuesto en el texto constitucional.

Al respecto, el Instituto accionante goza de una autonomía financiera restringida, pues su presupuesto queda sujeto a la aprobación legislativa y solamente los partidos políticos tienen un monto presupuestal constitucionalmente garantizado, conforme al artículo 41 de la Constitución General.

Bajo este contexto, la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente:

"Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:

I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:

a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;

b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes;

c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;

d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;

e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;

f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;

(...)"

Como puede observarse del precepto transcrito, el Instituto actor como ente autónomo cuenta con una autonomía financiera restringida, pues deberá aprobar su proyecto de presupuesto observando los criterios generales de



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

política económica, y posteriormente enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Ahora bien, ningún Poder establecido en la Constitución General puede decidir sobre el funcionamiento de la parte actora ni en el manejo de sus finanzas, pero, como ya fue mencionado, éste no tiene garantizado el monto de su presupuesto en el texto constitucional.

Es por ello que el Instituto actor tiene la obligación de aprobar su propio presupuesto tomando en consideración sus obligaciones tanto constitucionales como legales y enviarlo a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Como es evidente, la participación de la Cámara de Diputados surge una vez se tenga conformado el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no tiene participación alguna en la conformación del Presupuesto del propio Instituto como ente autónomo, pues su realización se da de manera interna dentro del Instituto Nacional Electoral.

En otras palabras, la autonomía financiera del Instituto actor nace a partir de la libertad que tiene en cuanto a determinar, analizar y aprobar su propio presupuesto conforme a sus atribuciones y funciones conferidas, pero esta libertad se encuentra restringida en cuanto a la aprobación de ese Presupuesto por parte de la Cámara de Diputados.

Al respecto, es importante destacar que la autonomía financiera consiste en la capacidad o aptitud que tiene un ente dotado de autonomía constitucional para administrar sus recursos públicos, es decir, se trata de una potestad de gasto que implica que no cabe injerencia alguna de otros poderes públicos en la

elaboración, aprobación y aplicación de su propio presupuesto, es decir, se trata de una libertad de administración.²⁹

Así, la gestión de recursos públicos involucra una planeación y proyección hacia el cumplimiento de determinados objetivos -en el caso, el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto Nacional Electoral, en materia de consultas populares-, contando con un número previamente determinado de recursos, ya sea materiales, financieros y humanos.

En efecto, para la jurista, Susana Thalia Pedroza de la Llave, los órganos constitucionales autónomos son entes establecidos expresamente en la Constitución, con un mandato supremo, caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia, los cuales tienen como principal característica disponer de sus fondos con plena libertad, como se advierte de la siguiente transcripción:

"Los órganos constitucionales autónomos son unos entes establecidos expresamente en la Constitución, con un mandato supremo, caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia en un marco de garantías institucionales vinculadas con la proyección y el manejo independiente de su presupuesto, personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad absoluta para la toma de sus decisiones en el campo técnico que la Constitución les otorga. Para que un ente u órgano sea considerado autónomo no es suficiente que su autonomía sea sólo presupuestaria, sino que es necesario cubrir otros elementos como lo veremos a continuación, abordando algunas de las características que deben tener los órganos autónomos:

(...)

4) Autonomía financiera o de gasto, para disponer de sus fondos con plena libertad, la cual implica que los órganos constitucionales autónomos pueden determinar, en primera instancia, sus propias necesidades

²⁹ Registro digital: 167568, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 12/2009, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1106, Tipo: Jurisprudencia. Rubro: "AUTONOMÍA FINANCIERA LOCAL. SE DESPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

materiales mediante un anteproyecto de presupuesto que es sometido a la aprobación del Poder Legislativo.³⁰

En este sentido, un presupuesto integrado por recursos públicos, es un instrumento financiero que contiene los recursos disponibles en un determinado periodo -un ejercicio fiscal-, con base en el cual los poderes, órganos y entidades del Estado Mexicano deberán cumplir con determinados objetivos y funciones que la propia Norma Fundamental establece -a saber, constitucionales, legales y de política pública-.

Así, como en cualquier organización, ya sea pública o privada, los recursos siempre serán limitados; por lo que dependerá de la persona o ente administrador destinarlos a los fines a alcanzar durante un periodo determinado, con los elementos disponibles.

En el caso, los recursos públicos que deberán destinarse a la organización y desarrollo de las consultas populares, sólo pueden ser administrados y erogados por el Instituto Nacional Electoral, conforme a los que se encuentren disponibles en su presupuesto.

De ahí, que no se pueda aducir una vulneración en la autonomía del Instituto, ya que, como podrá observarse, de la demanda no se desprende la intromisión de alguno de los poderes en la determinación, análisis y aprobación del Presupuesto Interno del Instituto actor. Tan es así que la actora en ningún momento demuestra una intromisión en su esfera competencial por parte de alguno de los poderes de la nación, o bien, de los propios Decretos.

En ese sentido, si la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, fue aprobado por la Cámara de Diputados, ello se debió a un principio de legalidad con total apego a los procesos y procedimientos que marcan las leyes y en estricto acatamiento a un precepto constitucional como lo es el artículo 74 fracción IV³¹ de la Carta Magna. Por lo

³⁰ Página consultada: "LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS", <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6169/13.pdf>

³¹ "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

(...)

que la suficiencia presupuestaria para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, depende del propio Instituto Nacional Electoral.

Por otro lado, el actor pretende de manera errónea desligarse de una obligación que emana de la Constitución General, al tratar de demostrar que el Congreso de la Unión era el responsable de proveer del presupuesto necesario a favor del Instituto Nacional Electoral, para hacer frente a su encomienda constitucional como órgano autónomo.

Sin embargo, el Instituto actor pretende demostrar supuestas ilegalidades en la conformación del Presupuesto de Egresos, más que en evidenciar una vulneración a la autonomía del Instituto accionante derivada del contenido de los Decretos impugnados. Aunado al hecho de que la obligación de prever el presupuesto necesario para la realización de las consultas populares es precisamente del propio Instituto, así como, es su obligación el tomar en consideración los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones al momento de aprobar su propio presupuesto.

En efecto, si bien es cierto que las consultas populares en nuestro país no se realizan de manera continua, ello no implica que el Instituto Nacional Electoral deba omitir tomar en consideración el presupuesto necesario para la realización de las mismas.

Recordemos que, a partir de la reforma de 2014 el Instituto actor asumió funciones en las consultas populares, las iniciativas ciudadanas y las candidaturas independientes.

Es por lo anterior, que surgen nuevas atribuciones propias del Instituto en cuanto a la organización y el desarrollo de las consultas populares.

*IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
(...)."*



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Así tenemos que el artículo 35 constitucional fracción VIII, numeral 4º, establece lo siguiente:

"Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

(...)

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

(...)

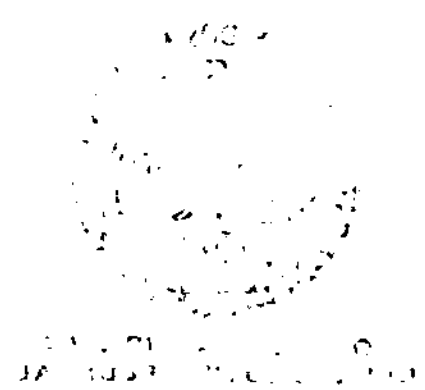
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

(...)"

De tal dispositivo puede apreciarse la obligación constitucional del Instituto al tener a su cargo la organización, difusión y desarrollo, cómputo y declaración de resultados tratándose de consultas populares de temas de trascendencia nacional.

De ahí que el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, como ley reglamentaria, de manera específica señale:

"Artículo 35. El Instituto es responsable del ejercicio de la función estatal de la organización y desarrollo de las consultas populares y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y del Código."



Para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares el Instituto debe de contar con los recursos suficientes para su realización. Para lograr lo anterior, es necesario la solicitud de dichos recursos, teniendo en cuenta que el medio con el que cuenta es precisamente a través del anteproyecto que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la posterior integración de este al proyecto de Presupuesto de Egresos, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En este orden, la organización y desarrollo de las consultas populares son disposiciones constitucionales a cargo del Instituto Nacional Electoral, por lo que no queda a su discrecionalidad la realización de éstas, más bien, es una situación que debe contemplar al realizar su anteproyecto para contar con los medios para su realización.

Una vez que el anteproyecto de presupuesto de la parte actora es enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y este es integrado al proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, queda pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados.

Cuando quede aprobado el Presupuesto de Egresos, tal como lo marca el artículo 74, fracción IV de la Norma Fundamental, se establecerá el monto destinado a cada ente gubernamental. Por tanto, una vez asignado el presupuesto a cada uno de los entes, estos procederán a realizar y adecuar sus actividades de acuerdo a dicho presupuesto asignado.

De ahí, que en total respeto hacia la autonomía de los órganos autónomos y tratándose específicamente del Instituto Nacional Electoral, este debió haber previsto los recursos necesarios para la realización de la consulta popular, pues su desarrollo y organización es obligación del Instituto y no así del Congreso de la Unión en los Decretos impugnados.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Tan es así, que el Instituto actor dentro de sus atribuciones de carácter constitucional, el inciso s) numeral 1 y 2 del artículo 5 de su Reglamento Interior señala:

"Artículo 5.

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo:

(...)

s) Aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para la organización y desarrollo de las consultas populares y el modelo de las papeletas, los formatos y demás documentación; así como realizar el cómputo total, hacer la declaratoria de resultados, darlos a conocer e informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

(...)


2. El Consejo aprobará el anteproyecto de presupuesto del Instituto de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales, así como las emitidas por el propio Consejo, aplicando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género, y en concordancia con el Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional."

De los dispositivos transcritos, se advierte la obligación del Instituto actor de organizar y desarrollar las consultas populares, de conformidad con las disposiciones constitucionales, como es el artículo 35, fracción VIII. Constitucional que prevé la realización de consultas populares y legales, como el artículo 35 de la Ley Federal de Consulta Popular, cuyo contenido señala que será el propio Instituto el encargado de la organización y desarrollo de las consultas populares.

Es por esto que resulta erróneo argumentar que el Congreso de la Unión transgredió su autonomía financiera y presupuestaria, pues ello, en realidad, es una facultad y obligación del propio Instituto actor.

Además, es importante destacar que nos encontramos ante una omisión en el cumplimiento de una obligación por parte del Instituto de prever adecuadamente el presupuesto necesario, así como los mecanismos para la realización de la consulta popular aprobada por ese Alto Tribunal.

Al respecto, se debe recordar que el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de



la Federación el 20 de diciembre de 2019, establece que la consulta popular se llevará a cabo con los recursos con los que disponga el Instituto actor, sin que puedan preverse partidas adicionales o especiales.

Lo anterior se puede observar en la siguiente transcripción:

"Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes."

Por lo tanto, al Instituto actor le corresponde administrar sus recursos a fin de lograr los objetivos constitucionales, en pleno respeto de su autonomía presupuestaria, pues de ninguna manera el Congreso de la Unión se inmiscuye en ello.

Es por esto que, de ningún modo, puede tomarse como válido el argumento de la actora, pues la correcta realización de la consulta popular aprobada por ese Alto Tribunal es obligación del Instituto, pues como se reitera, ninguno de los tres poderes puede decidir sobre el funcionamiento del órgano con autonomía constitucional ni en el manejo de sus finanzas y es ahí precisamente donde queda evidenciado el respeto que hubo hacia su propia autonomía del órgano.

Se defiende lo anterior, ya que, en el caso concreto, ninguno de los tres poderes realizó una intromisión en la esfera competencial del Instituto actor, por dos cuestiones: en primer lugar, porque hubo un respeto hacia la conformación de su anteproyecto de presupuesto interno y, en segundo lugar, porque ningún poder realizó actividades tendientes a organizar y desarrollar las consultas populares, que constitucionalmente le corresponde a la parte actora.

Por todo lo anterior, se evidencia la incorrecta interpretación realizada por la actora respecto del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2019, en donde se previó que las atribuciones conferidas al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares se cubrirían con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio.

Ello es así, pues de la lectura del artículo Quinto Transitorio, se advierte que **el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.**

Lo anterior, porque si bien es cierto que dicho precepto estableció que las atribuciones conferidas al Instituto actor en materia de consultas populares se cubrirían con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio, ello no significa desligar al Instituto de su obligación de organizar, desarrollar y aprobar un anteproyecto de presupuesto interno en el que contemple la realización de las consultas populares.

Lo único que se pretendía aclarar era que dependiendo del presupuesto establecido a cada ente gubernamental es que debían **realizar y adecuar sus recursos para concretar sus obligaciones, funciones y atribuciones constitucionales**, sin garantizar un presupuesto específico.

Tampoco puede aducirse que, al no haberse contemplado los recursos necesarios, genera una invalidez a la consulta popular aprobada por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no sería constitucionalmente válido hacer depender el ejercicio de un derecho humano, como lo es votar en las consultas populares, a la decisión del Instituto Nacional Electoral de contar o no con los recursos suficientes. Defender lo contrario traería como consecuencia que se modificara todo el proceso de realización de las consultas populares donde se le diera la opción al Instituto actor de elegir el ciclo presupuestal que mejor le convenga para su realización, lo cual, es totalmente contrario a lo contemplado en la legislación vigente que señala la **obligación del actor de realizar su presupuesto interno de manera que se encuentre en aptitud de organizar y desarrollar las consultas populares.**

Además, cabe mencionar que el presupuesto para el Instituto accionante para el ejercicio fiscal 2021, es mucho mayor al ejercicio fiscal anterior, tal como puede observarse en el siguiente cuadro comparativo: ---

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

A: RAMOS AUTÓNOMOS		134,904,757,546
Gasto Programable		
01	Poder Legislativo	14,816,605,390
	Cámara de Senadores	4,080,778,000
	Cámara de Diputados	8,282,000,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390
03	Poder Judicial	71,299,339,460
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,090,436,565
	Consejo de la Judicatura Federal	63,178,622,805
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,030,280,000
22	Instituto Nacional Electoral	26,819,801,594
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,879,905,810
41	Comisión Federal de Competencia Económica	598,678,029
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	905,335,647
49	Fiscalía General de la República	17,275,099,816

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

A: RAMOS AUTÓNOMOS		119,082,401,892
Gasto Programable		
	Poder Legislativo	13,540,183,980
	Cámara de Senadores	4,085,778,000
	Cámara de Diputados	7,078,000,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,378,405,960
	Poder Judicial	67,305,117,703
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	4,821,903,248
	Consejo de la Judicatura Federal	59,834,611,435
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	2,648,603,020
	Instituto Nacional Electoral	16,660,795,818
	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,874,207,802
	Comisión Federal de Competencia Económica	581,230,908
	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,541,244,024
	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	677,435,005



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

Fiscalía General de la República

16,702,187.474

Del cuadro anterior se puede advertir que el Instituto actor cuenta con mayor presupuesto para el ejercicio fiscal 2021; así, dicho Instituto está en pleno derecho para destinar dichos recursos de acuerdo a sus funciones y actividades, conforme a su autonomía constitucional; pues, tal como se expuso en párrafos anteriores, éste debe realizar y adecuar sus recursos para concretar sus obligaciones, funciones y atribuciones constitucionales.

En otro punto de ideas, resulta infundado el argumento aducido por el promovente, respecto de la violación a su autonomía y al principio de división de poderes, al sustentarse en premisas falsas.

En efecto, como ya quedó evidenciado, la autonomía presupuestaria permite que los órganos correspondientes tengan libertad de programar, diseñar y aprobar sus proyectos de presupuesto, sin que ello implique el desconocimiento de las máximas constitucionales, es decir, su margen de acción solo encuentra límite o directriz al cumplimiento de los requisitos que la Constitución establece.

La autonomía financiera ha sido tratada en la literatura como autonomía de gestión, aludiendo entonces a la capacidad para resolver sobre la administración y manejo de los fondos en general, junto con los recursos humanos y materiales utilizados para llevar a cabo sus tareas.

En este sentido, la autonomía administrativa y de funcionamiento implica la autonomía de realizar, sin restricción o impedimento alguno, todas las actividades inherentes a sus atribuciones o facultades, lo cual involucra, tanto a la autonomía técnica como a la orgánica, financiera-presupuestal y normativa sin depender jerárquicamente de algún otro poder.

Por lo que aún y cuando estos organismos gocen de su autonomía de gestión administración y funcionamiento, no pueden invalidar el campo natural de los Poderes tradicionales, pues sus facultades no interfieren con el desarrollo de sus atribuciones encomendadas, sino que debe de trabajar de manera armónica con los diversos Poderes.

Sin perder de vista que el presupuesto del Instituto Nacional Electoral es autorizado mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, dicha Institución es la encargada de distribuir los recursos de la manera que considere pertinente, siempre de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables.

Es por lo anterior que se considera que el Presupuesto de Egresos de la Federación es acorde a la Norma Fundamental y no restringe ni limita la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral, por lo que se solicita a ese Alto Tribunal reconocer su validez.

IV. DESAHOGO DE REQUERIMIENTO.

En atención al requerimiento formulado por el Ministro Instructor, mediante auto de 17 de diciembre de 2020, se acompaña al presente escrito las copia certificada del "Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020.

V. SOLICITUD DE COPIAS SIMPLES Y DE REPRODUCCIÓN DIGITAL DE ACTUACIONES.

Solicito se me expidan copias simples de la opinión que emita la Fiscalía General de la República, las contestaciones rendidas por las partes, los alegatos que en su oportunidad se presenten, así como del acta de la audiencia que, llegado el momento, se celebre ante ese Alto Tribunal.

Asimismo, solicito a ese Alto Tribunal se autorice la reproducción digital de las actuaciones tramitadas en la controversia constitucional de mérito, a través del uso de medios electrónicos.



CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

SSS100

SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FERIA

15 DE MARZO DE 2021

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, A ESA SUPREMA CORTE, POR SU DIGNO CONDUCTO SEÑORA MINISTRA, RESPETUOSAMENTE SOLICITO:

PRIMERO. Tenerme por presentado, en representación del Presidente de la República y con la personalidad que ostento, dando contestación, en tiempo y forma, a la demanda que en vía de controversia constitucional promueve el Instituto Nacional Electoral.

SEGUNDO. Declarar fundada la causal de improcedencia que se hacen valer en el presente escrito.

TERCERO. Reconocer la validez de las normas impugnadas, conforme a las consideraciones y fundamentos expuesto en el presente escrito.

CUARTO. Tener por cumplido el requerimiento contenido en el acuerdo de fecha 17 de diciembre de 2020.

QUINTO. Expedir las copias simples solicitadas y autorizar la reproducción digital de las actuaciones tramitadas en el expediente que nos ocupa.

EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL

LIC. JULIO SCHERER IBARRA.

RMSB/MRM/MIVC/SLG/LACP/LGRZ.

001722

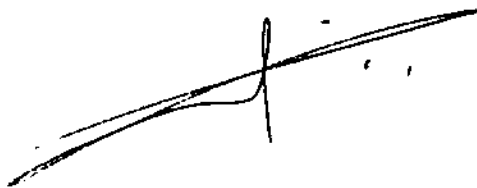
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2021 FEB 18 AM 9 21

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

COM. ALFONSO
JAS. 10. 00. 11. 11. 11

Recibido por el buzón judicial en 96 folios
el día 17 de febrero del presente año con 2
anexos en 19 98 folios según sus certificaciones





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA CORTA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Contratación CC 211/2020

NOMBRE DEL PROMOVENTE: CJEF

NÚMERO DE COPIAS: 54 1 copia certificada DGF

NÚMERO DE ANEXOS: 2 anexos 1 copia certificada notaría

FOLIO: 6796



C. Julio Scherer Ibarra,
Presente.

Andrés Manuel López Obrador, *Presidente*
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los
artículos 90 y 102, apartado 2, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 4ª, de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, he tenido a bien
nombrarlo Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

Andrés Manuel López Obrador

RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CJEF

CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

LIC. RÁUL MAURICIO SEGOVIA BARRIOS, CONSEJERO ADJUNTO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, -----

-----CERTIFICO-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTANTE EN UNA (1) FOJA ÚTIL, IMPRESA POR AMBAS CARAS, CONCUERDAN CON EL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL. DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DIEZ (10) DÍAS DEL MES FEBRERO DE DOS MILS VEINTIUNO (2021).-----

CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL EJECUTIVO FEDERAL

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 11 fracciones V y VI del Reglamento Interior de esta Secretaría de Gobernación, queda registrado con el número 19 a foja 2, del "Libro de Nombramientos de Servidores Públicos que designa el Ejecutivo Federal".

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2018.

TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO



a972de78a18bafcdce5e70c1ddb7107a6197a3d81f1b67327805e23ef9da5772

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

a972de78a18bafcdce5e70c1ddb7107a6197a3d81f1b67327805e23ef9da5772



COPIA CERTIFICADA DE LA EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, No. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITA POR LA LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA TURCOTT GONZÁLEZ, DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96 QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN Y CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.-----



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

No. de edición del mes: 21

Ciudad de México, lunes 30 de noviembre de 2020

CONTENIDO

Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Bienestar
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Cultura
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Consejo de la Judicatura Federal
Banco de México
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Avisos
Índice en página 346 de la Segunda Sección



LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2021, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La información que, en términos del presente Decreto, deba remitirse a la Cámara de Diputados será enviada a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnará dicha información a las comisiones competentes, en forma impresa y, en formato electrónico de texto modificable o de base de datos según corresponda, con el nivel de desagregación que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y será publicada en las páginas de Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría presentará información presupuestaria comparable respecto del ejercicio fiscal anterior y de los diversos documentos presupuestarios.

La Secretaría reportará en los informes Trimestrales la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las correspondientes al Anexo Transversal Anticorrupción; así como las principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda, respecto del presupuesto aprobado, por ramo y actividad.

CAPÍTULO II

De las erogaciones

Artículo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$6,295,736,200,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de \$718,193,400,000.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
MEXICO

Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto y Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos autónomos, administrativos y generales, así como los capítulos específicos que incorporan los flujos de efectivo de las Entidades, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 1 del presente Decreto y los Tomos II a IX, de este Presupuesto de Egresos. En el Tomo I se incluye la información establecida en el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. El gasto corriente estructural se incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los gastos obligatorios, se incluye en el Anexo 3 de este Decreto;

IV. El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales en términos del artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluye en el Anexo 4 de este Decreto, en términos de lo que se señala en el artículo 25 del mismo;

V. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el Anexo 5 de este Decreto;

VI. El capítulo específico que incorpora el monto máximo anual de gasto programable para atender los compromisos de pago requeridos para los nuevos proyectos de asociación público-privada y para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno de ellos, en términos del artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se incluye en el Anexo 5.A de este Decreto y en el Tomo VIII de este Presupuesto de Egresos;

VII. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el Anexo 6 de este Decreto y en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos;

VIII. El capítulo específico que incorpora las previsiones salariales y económicas, se incluye en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y en los Tomos III a VI de este Presupuesto de Egresos.

Los montos y términos aprobados en este capítulo específico en dichos Anexos y Tomos del Presupuesto de Egresos, incluyendo las previsiones para contingencias y sus ampliaciones derivadas de adecuaciones presupuestarias y ahorros necesarios durante el ejercicio fiscal para cumplir, en su caso, con las disposiciones laborales aplicables, forman parte de la asignación global a que se refiera el artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

IX. La suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal; aquél correspondiente a la deuda de las empresas productivas del Estado incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de este Decreto; las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquéllas para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 8 de este Decreto;

X. Para los efectos de los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, serán los señalados en el Anexo 9 de este Decreto. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado;

XI. Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los términos del artículo 2o., Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41, fracción II, inciso j), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se presentan desglosados por ramo y programa presupuestario;

XII. Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se señalan en el Anexo 11 de este Decreto, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XIII. El monto total de los recursos previstos para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se señala en el Anexo 12 de este Decreto;

XIV. Las erogaciones de los programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se señalan en el Anexo 13 de este Decreto;

XV. El presupuesto consolidado de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, conforme al artículo 24 de la Ley de Transición Energética, se señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 20 de este Decreto;

XVII. Las erogaciones para el Ramo General 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 21 de este Decreto.

Las provisiones para servicios personales del Ramo General referidos en el párrafo anterior, que se destinen para sufragar las medidas salariales y económicas, deberán ser ejercidas conforme a lo que establece el segundo párrafo de la fracción VIII anterior y el artículo 13 de este Decreto y serán entregadas a las entidades federativas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y, solo en el caso de la Ciudad de México se ejercerán por medio del Ramo General 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos;

XVIII. Las erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 22 de este Decreto.

En términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 38 de esa Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por lo anterior, para el cálculo de la distribución deberá considerar la información del Censo de Población y Vivienda 2020. En caso de que dicha información no esté publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa dada a conocer por el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En términos de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a las entidades federativas, con base en la fórmula señalada en ese artículo, sujetándose a lo siguiente:

a) Para determinar la variable PIBpci, definida como la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i, en caso de no estar disponible esa información, se deberá tomar en cuenta la última información del Producto Interno Bruto por entidad federativa anual que dé a conocer el Instituto referido, misma que se dividirá entre la información de la última publicación de proyección de la población a mitad de año con información anual, que dé a conocer el Consejo Nacional de Población. Cabe señalar, que ambas variables deberán corresponder al mismo año para cada entidad federativa, y

b) Con respecto a la variable ni, definida como la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i, se deberá considerar la información del Censo de Población y Vivienda 2020, y de no estar publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa, que dé a conocer el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La Secretaría, en relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, continuará transfiriendo a las entidades federativas que así lo soliciten a la Federación hasta el 100 por ciento de las aportaciones con cargo a cada Fondo, en el fideicomiso o vehículo financiero que determinen procedente, siempre y cuando se encuentre previsto en su legislación local; y cuya administración y ejercicio de dichos recursos serán responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, los cuales deberán destinarse exclusivamente para los objetivos y fines expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y cumplir íntegramente con lo establecido en la misma y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, las entidades federativas en el fideicomiso o vehículo financiero que instrumenten conforme a su legislación local, podrán continuar afectando las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en garantía o fuente de pago hasta por el 25 por ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de dichos Fondos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

XIX. Los límites de las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación se señalan en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos;

XX. Las provisiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas para los Ramos Generales 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 24 de este Decreto;

XXI. Los programas sujetos a reglas de operación se señalan en el Anexo 25 de este Decreto;

XXII. Los principales programas previstos en este Presupuesto de Egresos se detallan en el Anexo 26 de este Decreto, y,

XXIII. Los recursos para el Anexo Transversal Anticorrupción se señalan en el Anexo 31 de este Decreto.

Los Anexos 14, 16 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero; subsidios para organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa hidráulico: subsidios para acciones en materia de agua.

Asimismo, en el Anexo 27 de este Decreto se consideran los recursos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que tendrá por objeto atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, de conformidad con las declaratorias correspondientes conforme a lo previsto en la Ley General de Protección Civil. La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través de este Programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 4. Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021 se aprueba para Petróleos Mexicanos una meta de balance financiero de -\$92,687,000,000 y un techo de gasto de servicios personales de \$93,632,929,374. Asimismo, se aprueba para la Comisión Federal de Electricidad una meta de balance financiero de \$28,500,000,000, y un techo de gasto de servicios personales de \$62,460,041,455.

Artículo 6. Conforme al artículo 272 de la Ley del Seguro Social, el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de \$901,687,110,152. El Gobierno Federal aportará al Instituto la cantidad de \$110,992,564,817, como aportaciones para los seguros; dispondrá de la cantidad de \$409,179,302,312, para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; aportará la cantidad de \$5,429,653,204, para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley, y aportará la cantidad de \$21,678,502, para atender lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá destinar a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, a que se refieren los artículos 260, fracciones III y IV, y 286 K, respectivamente, de la Ley del Seguro Social, la cantidad de \$31,857,124,231, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que se establecen en dicha Ley; así como para hacer frente a las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual con sus trabajadores.

Para los efectos del artículo 277 G de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá sujetarse a las normas de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en este Decreto, en los términos propuestos por el Consejo Técnico de dicho Instituto las cuales se aplicarán sin afectar el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes; asimismo, conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en este Decreto.



El uso de reservas de cualquier naturaleza y tipo deberá ser registrado invariablemente como gasto programable. Asimismo, las reservas del Seguro de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, únicamente podrán destinarse para las prestaciones monetarias de esos seguros; y no para financiar gasto corriente del Instituto, salvo en los casos que así lo prevea la Ley del Seguro Social.

El titular y los servidores públicos competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social serán responsables de que el ejercicio del gasto de dicho Instituto se sujete a los montos autorizados para cubrir su gasto programable, para las reservas y el fondo a que se refiere este artículo.

TÍTULO SEGUNDO

DEL FEDERALISMO

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
a los municipios y a las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México

Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:

i. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los convenios correspondientes;

III. Los proyectos de infraestructura que realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los recursos de los fondos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", sin perjuicio de las demás que establezca el presente Decreto.

La Secretaría deberá publicar de forma trimestral, en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria, la información relativa a los proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, incluyendo el monto aprobado y pagado, su ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos recursos. Asimismo, deberá informar en dicho medio el avance financiero de los proyectos con base en los reportes que, de conformidad con la normatividad aplicable, realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La información anterior, deberá estar disponible, a su vez, en formato de datos abiertos;

IV. Los programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, se sujetarán a lo siguiente:

a) El porcentaje o monto que corresponda aportar a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será establecido por las Dependencias a cargo de los respectivos programas;

b) Dichos órdenes de gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que les correspondan en las cuentas bancarias productivas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo con el calendario establecido en los convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de marzo.

Antes del vencimiento del plazo a que se refiere al párrafo anterior, las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga para realizar la aportación correspondiente de recursos locales, hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

c) La entidad federativa, municipio o demarcación territorial que se vea afectado por situaciones que obliguen al Ejecutivo Federal a emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos de la Ley General de Protección Civil, contará con una prórroga de 20 días hábiles adicionales para efectuar el depósito de las aportaciones que le correspondan, una vez publicada la declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán cubrir hasta en dos exhibiciones durante el ejercicio fiscal su aportación a los programas concurrentes en materia educativa para todos los niveles, y

e) Las ministraciones de recursos federales podrán ser suspendidas cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no eporten en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas;

V. La Secretaría de Educación Pública comunicará a las entidades federativas a más tardar el último día hábil del mes de marzo, el presupuesto para el subsidio para organismos descentralizados estatales que la Federación otorga, así como para los programas financiados con fondos concurrentes;

VI. En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ejustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes que fuera necesario realizar a los recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados;

VII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de los artículos 19, fracción IV, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 12, sexto párrafo, de su Reglamento, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES). Dichos recursos se considerarán devengados al momento de su aportación al patrimonio de este Fideicomiso, y el ejercicio de los mismos por parte de las entidades federativas se realizará conforme a los calendarios de ejecución registrados por éstas ante la Secretaría para los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. En el caso de los subsidios que tengan el mismo destino, la Secretaría deberá entregar los recursos a las entidades federativas de acuerdo con un calendario establecido y podrá emitir las disposiciones correspondientes para comprobación de los mismos en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán enviar a la Secretaría, a través del sistema el que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la información de las evaluaciones que lleven a cabo sobre recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha información en los Informes Trimestrales;

IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiera el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la seguridad pública, promoverá y vigilará que su aplicación se oriente al cumplimiento de los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional definidos por dicho Consejo, así como que su erogación se realice en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos para seguridad pública, a través del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para implementar y operar el modelo de desarrollo y operación policial previsto en la ley de la materia, conforme a los ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y

X. Durante los primeros 10 días naturales del mes de febrero, las entidades federativas deberán enviar a la Secretaría, en forma impresa y en formato electrónico de base de datos, el calendario de distribución y montos que de los fondos a los que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan para el ejercicio fiscal 2021 a sus municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

Artículo 8. Las entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que realicen proyectos de infraestructura con recursos del Ramo General 23 deberán reportar a la Secretaría, en los términos que ésta determine y a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del contrato bajo el cual se realicen dichos proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Las entidades federativas serán responsables de la veracidad de la información reportada.

TÍTULO TERCERO

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 9. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda. Al efecto, la Secretaría informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a partir del 1o. de abril, sobre dichos subejercicios. En el caso de las economías generadas durante el ejercicio fiscal, éstas deberán canalizarse a los programas y Tomos aprobados en este Presupuesto de Egresos.

La determinación de los subejercicios se realizará conforme a los calendarios autorizados, en los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CAPÍTULO II

De las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria

Artículo 10. Las Dependencias y Entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley Federal de Austeridad Republicana y en las disposiciones de austeridad republicana emitidas por el Ejecutivo Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias y Entidades observarán las disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, o que sean resultado de reformas jurídicas; así como por determinación de la Secretaría en los supuestos en que las mismas generen los ingresos para cubrir su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad atender situaciones de carácter emergente o contingente;

II. Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2020;

III. Las Dependencias y Entidades no podrán crear estructuras orgánicas y ocupacionales excesivas, y se sujetarán a lo que establezca la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales continuará las acciones para el mejor uso y aprovechamiento inmobiliario que considere, entre otras, la puesta a disposición de inmuebles desaprovechados, mismos que podrán ser utilizados para resolver necesidades de otras instituciones públicas o, en su defecto, para su desincorporación y enajenación. Para tal efecto, dicho Instituto actualizará el programa de aprovechamiento inmobiliario federal mismo que deberá publicarse en su portal de Internet, así como podrá realizar verificaciones a los inmuebles que así considere, previo aviso a la institución pública de que se trate. Las acciones derivadas del programa deberán sujetarse al presupuesto aprobado para las Dependencias y Entidades;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNMEXICO
NO. 043333A130

V. Las contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles; para tal efecto, las Dependencias y Entidades podrán realizar las transferencias de recursos conforme a las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el Estado;

VI. Las Dependencias y Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros sobre personas y bienes deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mantengan o mejoren las condiciones contratadas en la póliza, y

VII. La Secretaría podrá establecer mecanismos financieros de cobertura de riesgos para atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las Dependencias y Entidades, considerando las asignaciones con las que cuenten para tal fin, así como de aquellas obras de arte que ingresen al territorio nacional para su exhibición al público en general.

Las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos. Para ello, se integrará la información que al respecto contenga el sistema CompraNet o, en su caso, el que determine la Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Secretaría, desde el ámbito del control presupuestario, podrá autorizar en casos excepcionales modalidades específicas de aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria referidas en las fracciones anteriores, o bien en los supuestos que las Dependencias y Entidades que sean objeto de reformas jurídicas, de nueva creación o cuando se realicen modificaciones a su estructura programática.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los Informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los informes trimestrales las variaciones en el gasto corriente estructural.

Artículo 11. En materia de comunicación social, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se sujetarán a la Ley General de Comunicación Social y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente, se sujetarán a la política de comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de la República, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación. Asimismo, los ejecutores de gasto deberán observar lo siguiente:

I. Podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas de comunicación social, a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado los tiempos oficiales, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.

No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Solo podrán realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere el párrafo anterior, en los casos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación en la materia;

II. Las Dependencias y Entidades registrarán la información a la que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social, en el sistema respectivo, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Ley señalada;

III. Las erogaciones que conforme a este artículo realicen las Entidades deberán ser autorizadas por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente;

LA JEFATURA
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

IV. Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones y/o traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo que dichos recursos se destinen a mensajes para atender situaciones de carácter preventivo o contingente; que tengan como propósito mantener la prestación de servicios a la población que no se puedan atender de manera presencial derivado de situaciones emergentes; que se requieran para la promoción comercial de las Entidades para que generen mayores ingresos; que tengan como propósito promover a México como destino turístico en el extranjero, o que se realicen con cargo a los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos, los ejecutores de gasto deberán obtener de la Secretaría de Gobernación la autorización del programa de comunicación social o bien de la modificación respectiva, para lo cual señalarán el costo y su fuente de financiamiento y, posteriormente, deberán realizar el trámite de adecuación presupuestaria ante la Secretaría;

V. Una vez que las Dependencias y Entidades cuenten con los recursos autorizados conforme a la fracción anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, presentará a la Cámara de Diputados a través de la Comisión competente, un informe con las razones que justifican la ampliación o traspaso correspondiente, así como su cuantía y modalidades de ejercicio.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que, conforme a la Ley General de Comunicación Social, deban cumplir las Dependencias y Entidades;

VI. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán únicamente con órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes de inserción para medios impresos y con órdenes de servicio para medios complementarios. En todos los casos se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura geográfica, circulación certificada y pautas de difusión en relación con el medio de comunicación que corresponda;

VII. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las Dependencias y Entidades;

VIII. La Función Pública, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social, o través del sistema respectivo dará seguimiento al registro que realicen las Dependencias y Entidades sobre las erogaciones en materia de Comunicación Social;

IX. El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto de Egresos deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables, y;

X. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, que cuenten con recursos en este Presupuesto de Egresos para Comunicación Social, deben elaborar sus respectivos Programas Anuales de Comunicación Social, de conformidad y en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 12. Para lograr una mayor transparencia en materia de contrataciones públicas, promover la reactivación económica y fortalecer las cadenas productivas, las Dependencias y Entidades que realicen adquisiciones de bienes y contratación de servicios o de obra pública, se sujetarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., a fin de dar de alta en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, epegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa, las cuales serán emitidas por la Secretaría e interpretadas por la unidad administrativa de la misma que ejerce las facultades de coordinación con las instituciones de banca de desarrollo.

Con el propósito de fomentar la transparencia, tratándose de las empresas productivas del Estado, éstas podrán incorporarse al Programa de Cadenas Productivas, con el objeto de que sus proveedores y contratistas sean beneficiados con esta programa.

El registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo con los plazos definidos en dichas disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con el apoyo de dichas Dependencias y Entidades y, en su caso, las empresas productivas del Estado, promoverá la utilización del Programa de Cadenas Productivas con los proveedores y contratistas del sector público y reportará los avances que se presenten en los Informes Trimestrales.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

CAPÍTULO III

De los servicios personales

Artículo 13. Los recursos previstos en los presupuestos de las Dependencias y Entidades en materia de servicios personales y, en su caso, en los ramos generales, incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas, y se sujetarán a lo siguiente:

I. Los incrementos a las percepciones se determinarán, conforme a:

- a) La estructura ocupacional autorizada;
- b) Las plazas registradas en el sistema de administración de nómina y demás elementos previstos en el caso del artículo 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;
- c) La plantilla de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y
- d) Las plantillas de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y, en el caso de los servicios de educación para adultos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las previsiones para el incremento a las percepciones, a que se refieren los Anexos 7 y 24 de este Decreto, incluyen la totalidad de los recursos para categorías y personal de confianza y sindicalizado, por lo que no deberá utilizarse la asignación prevista a un grupo para favorecer a otro;

II. En el presente ejercicio fiscal en las Dependencias y Entidades no se crearán plazas en nivel alguno, con excepción de los casos previstos en el artículo 10, fracción I, de este Decreto;

III. Las previsiones a que se refiera el Anexo 24 de este Decreto incluyen los recursos para la educación tecnológica y de adultos correspondientes a aquellas entidades federativas que no han celebrado los convenios establecidos en el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal. Una vez que dichas entidades celebren los convenios respectivos, dichos recursos serán entregados a éstas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

IV. Los recursos del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, incluyen las previsiones para cubrir:

a) Las medidas salariales y económicas correspondientes al fondo previsto en los artículos 26, 26-A, 27 y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que serán cubiertas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

b) Las medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Asimismo, las previsiones para incrementos a las percepciones incluyen las correspondientes a los sistemas de desarrollo profesional que, en su caso, correspondan en los términos de la ley de la materia, y

c) Las plazas que sean creadas con cargo a los recursos establecidos en el rubro de previsiones salariales y económicas del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para su aplicación a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, de acuerdo con la normatividad aplicable, y

V. Las previsiones incluidas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), incluyen los recursos para cubrir aquellas medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud.

Las Dependencias y Entidades reportarán en los Informes Trimestrales el impacto de los incrementos salariales en el presupuesto regularizable.

Artículo 14. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto, en su Anexo 23 y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación.

007.11

Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias considerarán los elementos variables de dicha remuneración, la cual solo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las Dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario.

La Secretaría podrá autorizar, en términos de las disposiciones específicas que emita, el otorgamiento de compensaciones económicas para el personal que integra la Guardia Nacional como parte de su sistema de remuneraciones, así como de los sistemas complementarios de seguridad social, sin que lo anterior comprometa recursos de largo plazo mayores a los autorizados en los términos de este Decreto.

Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en la presente fracción, forman parte de su remuneración.

II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto y, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:

- i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y
- ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos de las percepciones ordinarias presentadas en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador.

b) La remuneración ordinaria total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de percepciones ordinarias autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto;

III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforma a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se presentan en los Anexos siguientes de este Decreto:

- a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;
- b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;
- c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;
- d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;
- f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;
- h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
- i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;
- j) Anexo 23.11. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

k) Anexo 23.12. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y

m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.

Las Dependencias y Entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1. del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.

Las Entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.

Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las Dependencias y Entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, el personal militar, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Las Dependencias y Entidades deberán reportar a la Secretaría, a través del sistema que para tales efectos esta determine, la información relativa a las plazas ocupadas de su plantilla autorizada, para efectos del control presupuestario de los servicios personales, en términos de las disposiciones específicas que emita la Secretaría.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

Artículo 15. Los servidores públicos de mando y personal de enlace de las Dependencias y Entidades solo podrán percibir las prestaciones establecidas en el manual a que se refiere el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las Dependencias y Entidades no podrán destinar recursos para cubrir prestaciones en adición a aquéllas previstos en el gasto de servicios personales aprobado en este Presupuesto de Egresos.

En los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo y de los contratos colectivos de trabajo que realicen las Dependencias y Entidades se deberán sujetar a su presupuesto autorizado.

Los titulares de las Entidades informarán a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría y a la Función Pública, sobre los resultados obtenidos en los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y de las revisiones de salario que, en su caso, realicen en el presente ejercicio fiscal. Dichos informes, incluyendo el reporte sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán presentados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de dichas negociaciones.

Las Dependencias y Entidades enviarán informes a la Secretaría con el detalle de todas las prestaciones que perciben los servidores públicos a su cargo, así como el gasto total destinado al pago de las mismas en el periodo correspondiente, a fin de que se incluyan en los Informes Trimestrales.

Artículo 16. Las Dependencias y Entidades observarán las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

I. Solicitarán autorización presupuestaria de la Secretaría, respecto de sus tabuladores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base V del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Los pagos retroactivos por ocupación de plazas, cuando procedan, solo podrán comprender hasta 45 días naturales anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba su nombramiento. Lo anterior, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia y desempeño del servicio durante dicho periodo en la plaza respectiva, y

III. Podrán traspasarse las plazas necesarias de las Dependencias y Entidades, que con motivo de una reestructura en la Administración Pública Federal, derivada de una reforma legal o a ordenamientos de carácter administrativo, asuman funciones de aquéllas que se transformen, compacten, eliminen o sean creadas, para lo cual se deberá contar con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines.

Artículo 17. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la Administración Pública Federal; la desincorporación de Entidades; la cancelación de plazas, o la eliminación de unidades administrativas de las Dependencias o Entidades, en los términos de las disposiciones específicas que, al efecto, emita la propia Secretaría.

Dichas disposiciones específicas establecerán, entre otros aspectos, los montos de la compensación económica, los cuales se podrán cubrir con recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas o conforme al mecanismo presupuestario y de pago que se determine; los tipos de personal que podrán acogerse al mismo, considerando no afectar la prestación de servicios públicos; así como el procedimiento que deberán seguir las Dependencias y Entidades correspondientes para su aplicación.

Artículo 18. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberán remitir a la Secretaría los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a su presupuesto de servicios personales aprobado.

Artículo 19. Las instituciones de banca de desarrollo deberán remitir a la Secretaría para el registro correspondiente los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos; así como a los demás servidores públicos, en el que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman.

Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su planilla total, incluidas las plazas a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorgan con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha.

En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos.

CAPÍTULO IV

De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo Federal impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar los principios de igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en el instrumento de seguimiento del desempeño de los programas bajo su responsabilidad;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad, en su caso, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, y población indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan;

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres;

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su responsabilidad, las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género, y

V. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Las acciones contenidas en las fracciones anteriores serán obligatorias en lo relativo a los programas y acciones incorporadas en el Anexo 13 del presente Decreto y para los demás programas federales que correspondan.

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas dirigidos a mujeres y atribuciones para lograr la igualdad de género entre mujeres y hombres, así como las entidades federativas y municipios que reciban recursos etiquetados incluidos en el Anexo 13 de este Decreto, deberán suscribir los convenios respectivos durante el primer trimestre, así como informar sobre los resultados de los mismos, los publicarán y difundirán para darlos a conocer a la población e informarle, en las lenguas nacionales reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas existentes en la entidad federativa, sobre los beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la normativa aplicable.

Para el seguimiento de los recursos destinados a la igualdad de género entre mujeres y hombres, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en su instrumento de seguimiento del desempeño, generará, cuando ello sea factible y sujetándose a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, información de manera desagregada, al menos por edad, sexo, entidad federativa, municipio o demarcación territorial, grado máximo de estudios y pertenencia étnica. Los padrones deberán tener una versión pública, la cual estará disponible para su consulta. Las Dependencias y Entidades con presupuesto asignado dentro del Anexo 13, que realicen estudios y generen bases de datos o levantamientos de encuestas, deberán hacer públicos sus resultados en sus portales institucionales con el propósito de poder realizar evaluaciones y análisis posteriores. Las Dependencias y Entidades responsables de la coordinación de los programas contenidos en el Anexo 13 del presente Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollada por la Secretaría, y en el Sistema de Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través de los indicadores y sus metas contenidos en el instrumento de seguimiento respectivo. Asimismo, se detallarán los aspectos por cada programa presupuestario, contenido en el Anexo mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los recursos.

La Secretaría presentará en los Informes Trimestrales los avances financieros y programáticos que le envíe el Instituto Nacional de las Mujeres con base en la información que a éste le proporcionen las Dependencias y Entidades responsables de los programas a través del sistema indicado en el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de las Mujeres remitirá el informe mencionado anteriormente a la Cámara de Diputados, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. Asimismo, deberá poner dicho informe a disposición del público en general a través de su página de Internet, en la misma fecha en que se publiquen los informes Trimestrales.

La información que se publique trimestralmente servirá para las evaluaciones que se realicen en el marco de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.

Los resultados de los montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el Anexo 13 de este Decreto se detallarán en un anexo específico dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres revisará las reglas de operación de los programas del Anexo 13 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las menciones realizadas en el presente Decreto con respecto a beneficiarios, así como a titulares y servidores públicos de los ejecutores de gasto, se entenderán referidas a las mujeres y los hombres que integren el grupo de personas correspondiente.

CAPÍTULO V

De la inclusión de las personas con discapacidad

Artículo 22. Las Dependencias y Entidades, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

A más tardar el último día hábil de octubre, las Dependencias y Entidades entregarán un reporte a la Secretaría de Bienestar, en relación con las acciones señaladas en este artículo.

El reporte al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión para su turno a las Comisiones competentes.

CAPÍTULO VI

Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 20., Apanado B, fracciones I a IX, y Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Dependencias y Entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:

I. Las disposiciones para la operación de los programas que la Administración Pública Federal desarrolle en la materia considerarán la participación que, en su caso, tenga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención que corresponda al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para facilitar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a sus beneficios;

II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;

III. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus Dependencias y Entidades, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados, exclusivamente para que los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, sean registrados por la entidad federativa en su Cuenta Pública;

IV. Las reglas de operación de los programas operados por las Dependencias y Entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del presente Decreto;

V. Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de mantenimiento y reconstrucción.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

VI. Se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas mediante programas de la banca de desarrollo y, en su caso, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y

VII. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada, cuente con perspectiva de derechos indígenas y pertinencia cultural.

CAPÍTULO VII

De la inversión pública

Artículo 24. En el presente ejercicio fiscal se podrán comprometer nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y de inversión condicionada, a que se refieren los artículos 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley Federal de Deuda Pública, por la cantidad señalada en el Anexo 6.A, de este Decreto, correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad.

El monto autorizado a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y condicionada, aprobados en ejercicios fiscales anteriores, asciende a la cantidad señalada en el Anexo 6.B, de este Decreto. Las variaciones en los compromisos de cada uno de dichos proyectos se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

La suma de los montos autorizados de proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y los montos para nuevos proyectos se presentan en el Anexo 6.C, de este Decreto.

Los compromisos correspondientes a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores, se detallan en el Anexo 6.D, de este Decreto y comprenden exclusivamente los costos asociados a la adquisición de los activos, excluyendo los relativos al financiamiento en el periodo de operación de dichos proyectos.

Por lo que se refiere a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión condicionada, en caso de que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presente ejercicio fiscal surja la obligación de adquirir los bienes en los términos del contrato respectivo, el monto máximo de compromiso de inversión será aquél establecido en el Anexo 6.E, de este Decreto.

Las previsiones necesarias para cubrir las obligaciones de inversión física por concepto de amortizaciones y costo financiero de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa, que tienen efectos en el gasto del presente ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, se incluyen en el Anexo 6.F, de este Decreto. Dichas previsiones se especifican a nivel de flujo en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos y reflejan los montos presupuestarios autorizados, así como un desglose por proyecto.

Los montos de cada uno de los proyectos a que se refiere este artículo se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

En el último Informe Trimestral del ejercicio, adicionalmente se deberá incluir la información sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operación; los proyectos que están en construcción, su monto ejercido y comprometido; el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos, y la fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos. Esta información se deberá publicar en la página de Internet de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 25. En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán nuevos proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se observa en el Anexo 4 de este Decreto.

CAPÍTULO VIII

De la evaluación del desempeño

Artículo 26. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones.

Las Dependencias y Entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:

I. Actualizar los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas presupuestarios.

Todos los programas deberán contar con un instrumento de seguimiento del desempeño en el que se deberá priorizar la inclusión de indicadores estratégicos.

Los programas que determine la Secretaría tendrán instrumentos de seguimiento del desempeño, en los cuales estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos. Para la actualización de los instrumentos de seguimiento del desempeño, se deberá considerar, al menos lo siguiente:

- a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios;
- b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis realizados conforme al programa anual de evaluación;
- c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los programas presupuestarios sujetos a las mismas;
- d) Los criterios y recomendaciones que, en su caso, emitan la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos de las disposiciones aplicables, y
- e) Los elementos contenidos en el diagnóstico a que refiere el numeral Vigésimo Primero de los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal.

Los instrumentos de seguimiento del desempeño deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales con perspectiva de género, juventud, discapacidad, y etnicidad y de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Dependencias y Entidades deberán hacer públicos sus instrumentos de seguimiento al desempeño en su página de Internet.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales el avance en las metas de los indicadores registrados de los programas presupuestarios que conforman el gasto programable previsto en los ramos administrativos y generales y en las Entidades sujetas a control presupuestario directo, considerando la periodicidad de medición de dichos indicadores;

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la Secretaría, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen;

III. La evaluación se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos en dicho programa, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán entregar los resultados de las evaluaciones de tipo complementarias a las que haga referencia el programa anual de evaluación y los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, a más tardar 30 días posteriores a su realización, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores, así como ejecutar lo relacionado con las evaluaciones para 2021;

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales hallazgos y resultados de las evaluaciones conforme al Mecanismo para el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora vigente, definido por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos específicos, se reportarán los avances y resultados que se alcancen mediante el sistema de evaluación del desempeño y se publicarán en los términos de las disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y, en su caso, a ejercicios fiscales anteriores, se tomará en cuenta como parte de un proceso gradual y progresivo, durante 2021 y para los procesos presupuestarios subsecuentes;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNADICIONADO
10/11/2020

V. Efectuar las evaluaciones de los programas presupuestarios en los siguientes términos:

a) Por sí mismas, o

b) A través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, instituciones académicas y de investigación, u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Asimismo, la contratación o ejecución, así como la supervisión de la evaluación se deberá realizar por una unidad administrativa ajena a la operación del programa a evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en los términos de las disposiciones aplicables.

En el supuesto a que se refiere el inciso b) de la presente fracción, las Dependencias y Entidades cubrirán el costo de las evaluaciones con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago que se determine. Asimismo, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este párrafo abarquen varios ejercicios fiscales, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El total de las erogaciones que, en su caso, se efectúen para realizar las diferentes etapas de las evaluaciones se deberá registrar de manera específica para su plena transparencia y rendición de cuentas;

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora derivados de las mismas, en los informes Trimestrales que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la información relativa al avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean susceptibles de mejora. Asimismo, las Dependencias y Entidades publicarán dicha información en su página de Internet y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá publicar trimestralmente en su página de Internet los avances en el cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones contempladas en los programas anuales de evaluación.

Para tal efecto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social remitirá a la Secretaría la información derivada de las evaluaciones que haya coordinado, dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del trimestre que se informa, en la forma que para tal efecto determine la Secretaría.

La Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establecerán los modelos de términos de referencia y demás elementos particulares que se requieran para las evaluaciones y coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas;

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones, la Auditoría y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será pública y estará disponible en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias o Entidades correspondientes.

La Secretaría definirá los criterios específicos a seguir al respecto y proporcionará capacitación y asistencia técnica para que las instancias de la Cámara de Diputados que lo soliciten puedan llevar a cabo directamente las consultas y la generación de los reportes que requieran, con base en la información disponible en el sistema correspondiente;

VIII. La Secretaría podrá apoyar a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de planeación, programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para instrumentar la evaluación del desempeño, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

IX. Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento organizacional y el proceso de presupuesto y gasto público, con el objeto de que la información obtenida del seguimiento del cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, de las evaluaciones realizadas a los programas, y del seguimiento a los resultados de éstas, se utilice gradualmente en las decisiones presupuestarias y en la gestión de los programas. Lo anterior será coordinado por la Secretaría;

X. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño;

XI. Publicar en los portales de Internet de cada dependencia o entidad, para dar transparencia, todas las evoluciones, estudios y encuestas, que con cargo a recursos fiscales hagan las Dependencias y Entidades, aun cuando no sean parte del Programa Anual de Evaluación, y

XII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a más tardar a los 20 días naturales posteriores al término del segundo trimestre de 2021, deberán enviar, en los términos que establezca la Secretaría y mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informes definitivos sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros, de los recursos federales que les fueron transferidos durante 2020. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deben reportar al finalizar cada trimestre de 2021.

— La Secretaría deberá incluir en el segundo Informe Trimestral la información definitiva anual a que hace referencia el párrafo anterior.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la información de su competencia que se entregue a la Secretaría, incluyendo su veracidad y calidad.

TÍTULO CUARTO DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 27. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos señalados en el Anexo 25 de este Decreto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente:

1. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

- a) Deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios;
- b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento, para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones;
- c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;
- d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;
- e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;
- f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos;
- g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;
- h) Se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, incluyendo el fomento a las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, según corresponda;
- i) Darán prioridad en la asignación presupuestaria a las acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad permanente y a los pueblos indígenas;
- j) Se promoverán mecanismos para facilitar a los mexicanos repatriados, el acceso a los beneficios de los programas y garantizar su atención y protección de manera prioritaria;
- k) Deberán promover la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos e impiden el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos;



l) En ningún caso se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo;

m) Se promoverá la transparencia y acceso a la información pública, así como la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de una estructura informática que permita homologar la información proveniente de los datos de los beneficiarios de los Programas;

II. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos:

a) La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas, por parte de las Dependencias y Entidades, así como, aquel relacionado con los recursos presupuestarios federales que se transfieran a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que se aplique a través de anuncios en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos y restringirse a lo establecido en el artículo 11 de este Decreto;

b) Publicar en sus respectivas páginas de Internet el padrón de beneficiarios para los programas sujetos a reglas de operación, que deberá incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo otorgado o bien entregado;

c) Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo, en el cual se proporcione asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre el cumplimiento de los requisitos y trámite que deben observarse para obtener los recursos o los beneficios de los programas, y

d) Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los programas; los indicadores de desempeño de los programas, y los medios de contacto de las unidades responsables de los mismos deberán estar disponibles en las páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

La Secretaría publicará en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria la información que permita identificar las características de cada programa federal con base en sus reglas de operación. Para efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades remitirán a la Secretaría la información relacionada con las reglas de operación de los programas federales a su cargo, así como las modificaciones a las mismas, en los términos que la Secretaría determine.

Queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales.

Para la entrega de los apoyos a la población objetivo de los programas de subsidios en numerario, las Dependencias y Entidades deberán promover la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales, preferentemente a través del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cuando este cuente con la cobertura bancaria necesaria para la entrega de los apoyos, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas sujetos a reglas de operación deberán observar las siguientes disposiciones para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos:

I. Publicar en sus páginas de Internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban, las preguntas frecuentes del trámite, así como los principales motivos de rechazo. Los rechazos deberán estar fundados y motivados;

II. Tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente y las entidades federativas decidan suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación, éstos deberán celebrarse en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán como mínimo: los programas a que se refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa a que se destinarán los recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización.

El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los Comités de Planeación para el Desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del Convenio de Coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo a impacto social de los mismos, y

III. Brindar asesoría a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la integración de los expedientes técnicos que, en su caso, requiera el programa, especialmente a los que se encuentran en condiciones de muy alta y alta marginación.

Artículo 29. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas presupuestarios considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como programas o acciones federales de desarrollo social deberán enviar a la Secretaría, en los términos y plazos que esta disponga, información sobre su población potencial, población objetivo y población atendida, misma que hará pública en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria.

CAPÍTULO II

De los criterios específicos para la operación de los programas

Artículo 30. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios que define el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 Bienestar considera los programas establecidos en el Anexo 25 para dicho ramo.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, y los gobiernos de las entidades federativas se impulsará al trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá al desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Estos instrumentos promoverán que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Derivado de estos instrumentos se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y municipios, y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que concurren en sujeción a los programas concertados.

Los convenios a que se refiere este artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el correspondiente medio oficial de difusión de la entidad federativa que corresponda, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que quedan integralmente suscritos.

A efecto de fortalecer la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las Dependencias y Entidades.

Las faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de la información relativa a avances y metas alcanzadas, deberán ser informados a la Función Pública o a la Secretaría de Bienestar en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta última dependencia, después de escuchar la opinión del gobierno de la entidad federativa, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.



Para el control de los recursos que se asignen a las entidades federativas, el Ejecutivo Federal convendrá con los gobiernos respectivos, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Bienestar los avances de ejecución físicos y financieros.

Artículo 31. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se sujetará a los siguientes lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este Presupuesto de Egresos:

I. Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El presupuesto dirigido al campo deberá tener las siguientes características:

- a) Mejorar e incrementar la productividad, cerrando las brechas existentes;
- b) Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar de las personas que los habitan;
- c) Mejorar la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio climático, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la utilización y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad;
- d) Incrementar la contribución de la agricultura nacional a la seguridad alimentaria de todas las personas;
- e) Que permita la complementariedad de acciones con las demás Dependencias y Entidades;
- f) Que permita el desarrollo de proyectos productivos por etapas;
- g) Que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- h) Una agricultura más incluyente, pero con políticas diferenciadas para cada una de las regiones del país, al tiempo que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- i) Que procuren la progresividad en el otorgamiento de los incentivos;

II. Los remos administrativos que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable continuarán con el sistema de rendición de cuentas sobre el destino de los recursos fiscales de los programas concurrentes, el cual incorpora los siguientes elementos: región geográfica, entidad federativa, municipio y localidad, actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo, monto fiscal y fecha de otorgamiento, y la estratificación correspondiente;

III. Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:

a) Incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales, en un marco de sustentabilidad, generación de oportunidades y que contribuya a la seguridad alimentaria;

b) Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se orienten principalmente a las pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos.

Dichos recursos se direccionarán una vez que se cuente con la estratificación de zonas y regiones productivas del país dando prioridad a las pequeñas unidades de producción;

c) Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad;

d) Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;

e) Contribuir a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático, así como la oportuna prevención, administración y atención a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, considerando los potenciales productivos de cada región;

f) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, y

g) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente a los recursos genéticos;

IV. Promover la competitividad de las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como estrategias especiales para otros sistemas productivos de alto impacto social;

V. Coadyuvar al impulso de la producción primaria, de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otros, para el aprovisionamiento de insumos básicos y apoyo a paquetes tecnológicos;

VI. Impulsar la producción y productividad en el sector mediante el fomento de proyectos integrales que consideren la tecnificación del riego y el uso de insumos (semillas, fertilizantes, biofertilizantes y prácticas agrícolas sustentables, entre otros);

VII. Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;

VIII. Se fortalecerán las obras de tecnificación de riego para aumentar la producción y productividad, dando prioridad a las pequeñas unidades de producción, y

IX. Las autoridades fiscales pondrán a disposición de las Dependencias y Entidades encargadas del otorgamiento de subsidios y estímulos, herramientas tecnológicas que permitan la consulta sobre el cumplimiento de la obligación contenida dentro del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En las reglas de operación de los Programas Federales del Ramo 08 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se deberá establecer que la consulta referida la hará directamente ésta última dependencia y no el beneficiario.

Artículo 32. La ejecución y operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o, en su caso, las Entidades de su sector coordinado.

Artículo 33. La Secretaría de Educación Pública será responsable de emitir las reglas de operación de sus programas sujetos a las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales contendrán, entre otras reglas, las siguientes:

i. Los recursos destinados a programas educativos deberán ser ejercidos exclusivamente por las autoridades educativas, tanto federales como estatales;

ii. Las instituciones educativas contarán con un listado exhaustivo que contenga el personal comisionado a actividades sindicales. La Secretaría de Educación Pública enviará dichos listados a la Cámara de Diputados, y

iii. En ningún caso podrán existir nóminas o partidas confidenciales. Los recursos públicos otorgados a las instituciones educativas que sean usados para el pago de nóminas deberán ejercerse en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que los beneficiarios de dichos programas deberán reportar a la Secretaría de Educación Pública los montos pagados a cada trabajador.

La Secretaría de Educación Pública, antes del 31 de enero, emitirá las convocatorias para el concurso de los diversos fondos aprobados, respecto de los programas a que se refiere este artículo, con la excepción de los que estén sujetos a los calendarios escolares específicos.

Artículo 34. Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones:

i. La Secretaría de Educación Pública al diseñar los programas deberá enviar a la Cámara de Diputados un informe sobre cómo dichos programas disminuirán los rezagos de cobertura y absorción en educación media superior y superior en las diversas regiones del país;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
15 DE FEBRERO DE 2021

II. Las entidades federativas deberán enviar, de manera trimestral, informes tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública, sobre la aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media superior y superior;

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, y

IV. Las instituciones públicas federales y estatales de educación media superior y superior pondrán a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través de este Presupuesto de Egresos. En el marco de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en su caso, la ley local respectiva, las instituciones incorporarán en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos autorizados. En particular, el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos, o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral.

La información a que se refiere este artículo deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá enviar dicha información a la Secretaría de manera trimestral.

De conformidad con los Lineamientos Operativos que sean emitidos por la Secretaría de Educación Pública, el otorgamiento de subsidios para organismos descentralizados estatales, conforme al programa presupuestario correspondiente, estará condicionado a que las entidades federativas aporten la parte que les corresponda con cargo a sus presupuestos autorizados.

TÍTULO QUINTO

OTRAS DISPOSICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 35. Con el objeto de impulsar la cultura del pago por suministro de agua en bloque en los Distritos de Riego y mejorar la infraestructura de riego, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, devolverá a los Distritos de Riego que estén al corriente en sus pagos, un importe de recursos equivalente a las cuotas que se generen en el presente ejercicio fiscal, los cuales se destinarán en un 65 por ciento a la conservación y mantenimiento de los canales y drenes menores; 25 por ciento a la conservación de la red mayor, canales y drenes principales; 8 por ciento al mantenimiento de las obras de cabeza, y 2 por ciento a la supervisión y gasto de operación.

Artículo 36. Los programas de la Secretaría de Educación Pública, destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa Primaria, Media Superior y Superior, establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.

La Secretaría de Educación Pública deberá informar a la Cámara de Diputados, sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa a los que hace referencia el párrafo anterior, su distribución y metas de mediano y largo plazo, a más tardar el 31 de marzo.

Los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información siguiente:

- I. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes;
- II. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación;
- III. Desglose del gasto corriente destinado a su operación;
- IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y
- V. La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como con los lineamientos que emita en la materia el Consejo Nacional de Armonización Contable, las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior llevarán el registro y la vigilancia de los activos, pasivos corrientes y contingentes, ingresos, gastos y patrimonio.

Las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior a que se refiere este artículo entregarán a la Secretaría de Educación Pública la información señalada en el mismo, e más tardar a los 15 días naturales posteriores a la conclusión del trimestre que corresponda. Dicha Secretaría entregará esta información a la Cámara de Diputados y la publicará en su página de internet, a más tardar e los 30 días naturales posteriores al periodo correspondiente.

Las autoridades correspondientes para aplicar dichos recursos verificarán que el personal de cada una de las universidades e instituciones de educación media superior y superior públicas, cumplan con sus obligaciones en términos de los contratos laborales correspondientes realizándose, en su caso, la compuisa entre las nóminas y los registros de asistencia.

La Secretaría de Educación Pública enviará la información a que se refiere este artículo a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles posteriores a que aquélla la reciba.

Artículo 37. Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2021, serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y su ejercicio y destino deberá reportarse en los Informes Trimestrales.

Artículo 38. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en este Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro del primer trimestre del año.

El Consejo Nacional de Armonización Contable, a más tardar el último día hábil de diciembre, deberá publicar en su página de internet un reporte especial sobre la aplicación de los recursos del fondo a que hace referencia el presente artículo, así como:

- I. El monto de los subsidios otorgados a cada una de las entidades federativas y municipios;
- II. El tipo y alcances de los subsidios federales otorgados, y
- III. Los avances y resultados reportados por las entidades federativas y municipios.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2021, salvo lo dispuesto en el Transitorio Décimo Sexto, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones administrativas emitidas con base en lo dispuesto en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a ésta, hasta en tanto, no se emitan nuevas disposiciones administrativas que las reformen o abroguen.

Tercero. Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para que emita las autorizaciones que correspondan, a efecto de que los ejecutores de gasto realicen las adecuaciones o los trasposos de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios como consecuencia de reformas jurídicas que tengan por objeto la creación o modificación de la estructura administrativa de cualquier dependencia, entidad o ente autónomo, o cambio de sector en los casos que corresponda, reportando las mismas en los Informes Trimestrales.

Con la finalidad de garantizar y dar continuidad a las acciones de gobierno, las Dependencias, Entidades y unidades administrativas que se encuentren en proceso de readscripción o modificación de sus programas, podrán continuar su operación en la estructura organizacional y presupuestaria en la que se encuentren a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto no se realice la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales o se modifiquen sus programas.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNSECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE CALIFORNIA

Los ejecutores de gasto deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas y ocupacionales respecto de las unidades responsables que cambiaron de adscripción o se encuentren en proceso de readscripción como consecuencia de reformas jurídicas.

Cuarto. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos correspondientes a las entidades federativas que no hayan suscrito los convenios a los que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal deberán ser transferidos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios al Ramo 11 Educación, a fin de que a través de ésta se transfieran para esos mismos fines a dichas entidades federativas. Lo anterior, hasta en tanto sean suscritos los convenios de coordinación respectivos.

Quinto. Las entidades federativas deberán notificar y realizar la entrega de los recursos federales que correspondan a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los plazos y términos que establecen las leyes federales aplicables, el Presupuesto de Egresos, y en el caso de programas de subsidios o gasto reasignado, conforme a lo previsto en los convenios que celebran con las Dependencias y Entidades que les transfieran recursos federales.

Las entidades federativas no podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las entidades federativas, por conducto de sus secretarías de finanzas o sus equivalentes, deberán hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de recursos federales que deriven de los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, realizadas a sus municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de sus respectivas páginas oficiales de internet, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que los recursos correspondientes hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias específicas de los municipios o demarcaciones, incluyendo el número de identificación de la transferencia.

El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades competentes en los términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que, en su caso, se determinen.

Los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la correcta integración de la información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los recursos que les transfieran las entidades federativas respectivas, conforme a lo señalado en este artículo.

Sexto. Para el ejercicio 2021, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2021, los cuales podrán determinar qué hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos.

Séptimo. Los ejecutores de gasto deberán cubrir con cargo a sus presupuestos autorizados los compromisos u obligaciones que deriven de las determinaciones o las resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional competente. Para efectos de lo anterior, los ejecutores de gasto deberán ajustar sus presupuestos para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique ampliaciones a los mismos.

Octavo. El presupuesto aprobado del Ramo 12 Salud incluye hasta los treinta y tres mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación con cargo al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, en términos de lo señalado en el transitorio Décimo Quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021; los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en salud previstas en este Presupuesto.

Del presupuesto al que se refiere el párrafo anterior, se destinan los recursos necesarios para la detección oportuna y atención del cáncer infantil.

Noveno. Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las acciones que correspondan para que la entrega de los subsidios y apoyos a los beneficiarios de los programas se realice de manera directa a través de la Tesorería de la Federación, en forma electrónica mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los mismos, salvo que se esté en alguno de los supuestos de excepción regulados en la Ley de Tesorería de la Federación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, o bien, que la Secretaría autorice que se efectúe de manera distinta.

Décimo. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, continuará durante el ejercicio fiscal 2021 con el análisis y revisión del anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Primero. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en su carácter de instancia técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, dará seguimiento a la implementación del Anexo Transversal Anticorrupción para el presente ejercicio fiscal; para lo cual deberá elaborar un informe anual de ejecución y seguimiento del mismo con base en la metodología presentada para el ejercicio fiscal 2021. Dicho informe deberá presentarse a la Cámara de Diputados.

Décimo Segundo. La Secretaría realizará durante el ejercicio fiscal 2021 el análisis y revisión de la metodología utilizada para la conformación del anexo transversal referente a los recursos para las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Tercero. Los proyectos que reciban recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberán contar con la participación de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de considerar su opinión en cuanto a su factibilidad.

Décimo Cuarto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá reportar en su página de Internet, las acciones que está implementando el Gobierno Federal para la mitigación y adaptación al cambio climático. La información deberá ser reportada en formato de datos abiertos y actualizada de manera trimestral.

Décimo Quinto. Los aprovechamientos que se obtengan del entero de recursos a la Tesorería de la Federación que realicen las universidades e instituciones públicas de educación superior respecto de recursos federales no ejercidos en ejercicios fiscales anteriores al 2021, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a proyectos de inversión en infraestructura educativa a cargo de universidades e instituciones públicas de educación superior.

Décimo Sexto. Las dependencias y entidades, respecto de los fideicomisos que se extinguirán, o bien, de los mandatos y análogos públicos que se daren por terminados, en términos de lo señalado en el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos, sin perjuicio de que, con cargo a su presupuesto autorizado, puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos, cuando así corresponda, en tanto emiten las referidas disposiciones.

Décimo Séptimo. Las dependencias y entidades, así como entidades federativas, que reciben recursos para la atención de los desastres naturales, continuarán siendo las responsables de la aplicación de los mismos para los fines para los cuales fueron otorgados, mediante el seguimiento que le den a la ejecución de las obras y acciones que estas contraten y al cumplimiento del calendario de ejecución en los términos y plazos establecidos. Asimismo, en la contratación de las obras de reconstrucción, los ejecutores deberán prever el establecimiento de medidas de mitigación que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas.

Décimo Octavo. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNLA OFICINA
DE ASesorIA

Décimo Noveno. La Secretaría, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, podrá asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante ésta durante el ejercicio fiscal 2020, así como durante el presente ejercicio, con el propósito de impulsar la inversión pública en el país. Lo anterior sujeto a las disposiciones específicas que, en su caso, emita la Secretaría.

Vigésimo. Se eliminará la etiqueta realizada en el Ramo 12 "Salud" del Programa P020, Acción 44B "Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia" con un presupuesto de \$330,641-100, en virtud de que en el Ramo 20 "Bienestar" se encuentra etiquetado presupuesto bajo el Programa U012 "Programa de apoyo para refugios especializados para las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos".

El presupuesto de la acción 44B del Programa P020 del Ramo 12, deberá ser asignado a las acciones propias contenidas en el Programa P020, "Programa de salud materna, sexual y reproductiva", contenidas en el Anexo Transversal 13, en los siguientes términos:

ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 141. CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD MATERNA Y NEONATAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DE FORMA INTEGRAL PARA TODAS LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, DURANTE LA ETAPA PREGESTACIONAL, EL CONTROL PRENATAL, EL PARTO, EL PUERPERIO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A PERSONAS RECIEN NACIDAS Y LA PREVENCIÓN DE DÉFECTOS EN EL NACIMIENTO	555,693.293
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 144. DISMINUIR EL RITMO DEL CRECIMIENTO DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS PARA LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	330,077.904
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 146. DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	343,943.590
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS ADOLESCENTES DISFRUTEN DE UNA VIDA SEXUAL SATISFACTORIA, SALUDABLE Y SIN RIESGOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN MATERIA DE ANTICONCEPCIÓN Y DE SALUD SEXUAL	126,323.890
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 287. CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA EJERZA SU DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, EL NÚMERO Y EL ESPARCIMIENTO DE SUS HIJOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	125,483.809
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 312. ATENCIÓN A CÁNCER PULMONAR EN MUJERES	3,565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 313. ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES CON ASMA	3,565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 405. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN TODO EL PAÍS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	281,168.510
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13, ACCIÓN 338. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO Y METASTÁSICO	39,125.930

Vigésimo Primero. Los ejecutores de gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.

No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación Individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

A: RAMOS AUTÓNOMOS		134,904,757,546
Gasto Programable		
01	Poder Legislativo	14,816,605,390
	Cámara de Senadores	4,080,778,000
	Cámara de Diputados	8,282,000,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390
03	Poder Judicial	71,299,339,460
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,090,436,565
	Consejo de la Judicatura Federal	63,178,622,695
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,030,288,000
22	Instituto Nacional Electoral	28,819,801,594
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,879,905,810
41	Comisión Federal de Competencia Económica	598,670,029
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,519,000,000
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	905,335,847
48	Fiscalía General de la República	17,275,099,818
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA		7,748,108,081
	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,748,100,001
RAMO: 32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		2,863,618,680
	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,863,618,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS		1,246,242,755,522
Gasto Programable		
02	Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292
04	Gobernación	5,853,226,781
05	Relaciones Exteriores	8,121,231,865
06	Hacienda y Crédito Público	20,228,538,183
07	Defensa Nacional	112,557,168,856
08	Agricultura y Desarrollo Rural	49,291,453,404
09	Comunicaciones y Transportes	55,818,591,344
10	Economía	6,538,472,433
11	Educación Pública	337,851,440,847
12	Salud	145,414,570,947
13	Marina	35,478,715,511
14	Trabajo y Previsión Social	23,799,853,830
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	18,620,344,244
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	31,348,192,349
18	Energía	47,060,243,165
20	Bienestar	191,724,099,417
21	Turismo	38,813,394,061
27	Función Pública	1,389,004,830
31	Tribunales Agrarios	800,879,640
36	Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,689,472
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,986
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,673,104,028
45	Comisión Reguladora de Energía	253,346,972
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,797,597
47	Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953
48	Cultura	13,985,117,395

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNARCHIVO GENERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C: RAMOS GENERALES		3,430,649,796,272
Gasto Programable		
19	Aportaciones a Seguridad Social ²²	981,026,461,285
23	Provisiones Salariales y Económicas /	127,486,744,341
25	Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,454,347,981
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,642,680,397
Gasto No Programable		
24	Deuda Pública	541,094,614,451
28	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	921,402,640,617
29	Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	6
30	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,098,200,000
34	Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,000,900
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO		1,275,212,396,684
Gasto Programable		
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,525,266,432
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	901,687,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		1,133,301,449,666
Gasto Programable		
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,568,071,168
TVW	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	417,145,392,655
Gasto No Programable		
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:		171,557,985,836
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,316,671
TVW	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	29,799,669,165
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.		635,184,669,265
GASTO NETO TOTAL		6,295,730,200,000

1/ Incluye recursos dentro del programa presupuestario 0012.- "Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud", para cubrir el pago de las provisiones que permitan mantener la homologación salarial del personal que fue regularizado y formalizado, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33.

2/ Los recursos relativos a los Laudos y Prestaciones que no estén directamente vinculadas a obligaciones decretadas en materia de seguridad social no serán cubiertas con cargo a los recursos del Ramo 16 "Aportaciones a Seguridad Social".

3/ Incluye 12'163,204.00 que serán transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020, por el que se emitió el "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2006 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado el 20 de julio de 2010.

ANEXO 2. GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL (pesos) ^{1/}

Gasto Corriente Estructural	2,490,976,855,284
-----------------------------	-------------------

^{1/} La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 3. GASTOS OBLIGATORIOS (millones de pesos) ^{1/}

Provisiones para Gastos Obligatorios	4,203,006.3
Provisiones para Gastos Obligatorios con Pensiones y Jubilaciones	5,267,094.6

^{1/} La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 4. EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (millones de pesos)

En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	6.6
---	-----

ANEXO 5. COMPROMISOS PLURIANUALES (millones de pesos)

	MONTO
Dependencias y Entidades (Recursos Fiscales)	43,514.81
Entidades de Control Directo	42,306.75
Empresas Productivas del Estado	307,193.81
Poder Judicial	2,304.81
Instituto Nacional Electoral	1,434.87
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	104.75

ANEXO 5.A. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (millones de pesos)

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3o. del Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de asociación público-privada, asciende a la cantidad de \$42,735.6 millones, de los cuales para el periodo 2021 se tiene estimado un monto de \$10,761.9 millones.

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	ENTIDAD FEDERATIVA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN ¹	MONTO DE INVERSIÓN 2021 ²	PAGO ANUAL ESTIMADO 2021 ³
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		43,838.9	345.9	10,761.9
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		3,807.5	266.1	8.9
Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Armado del Complejo Penitenciario Federal Papantla	Veracruz	3,807.5	266.1	0.0
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		22,717.3	0.0	7,961.6
Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlán	Puebla	1,054.7	0.0	110.8
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí)	Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí	1,976.1	0.0	745.3
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coahuila de Zaragoza - Villahermosa)	Tabasco y Veracruz	2,246.3	0.0	724.6
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Matamoros - Saltillo) para el periodo 2017-2027	Nuevo León	1,710.8	0.0	692.3
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Pirámides-Tulancingo-Pachuca) para el periodo 2017-2027	Estado de México e Hidalgo	2,172.3	0.0	604.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo) para el periodo 2017-2027	Coahuila y Nuevo León	2,337.0	0.0	410.0
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Texcoco-Zacatepec) para el periodo 2017-2027	Estado de México, Tlaxcala y Puebla	1,470.1	0.0	682.1
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga-Tepachula)	Chiapas	3,881.8	0.0	994.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche-Mérida)	Campeche y Yucatán	1,684.6	0.0	636.9
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí-Matamoros)	San Luis Potosí	1,888.4	0.0	788.5
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico-Ciudad Victoria)	Tamaulipas	2,095.7	0.0	681.0
SECRETARÍA DE TURISMO		1,168.7	76.6	0.0
Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa	Sinaloa	1,168.7	79.8	0.0
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		7,799.9	0.0	1,147.1
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit	Nayarit	1,654.3	0.0	536.5

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas	Chiapas	1,874.5	0.0	610.6
Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León**	Nuevo León	2,101.5	0.0	0.0
Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepetzotlán, Estado de México**	Estado de México	2,189.8	0.8	0.0
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO		8,325.6	0.0	2,553.0
Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México***	Ciudad de México	1,753.6	0.0	0.0
Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán	Yucatán	1,149.8	0.0	293.4
Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco	Tabasco	1,361.2	6.0	413.7
Sustitución del actual Hospital General "Águiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit	Nayarit	1,388.5	6.0	635.5
Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México	Ciudad de México	2,672.2	0.0	1,210.4
TOTAL		43,836.9	345.9	10,761.9

Cifras con IVA a pesos de 2021.

** Este Proyecto se encuentra rescindido y en proceso de impugnación por parte del Desarrollador.

*** El Contrato del proyecto se rescindió, sin embargo, el proyecto se incluyó en el Documento de Planeación 2021.

Montos de inversión contratados.

1/ Monto total estimado en gasto de inversión del sector privado en infraestructura. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tiene una inversión de SECTUR por 400.1 mdp y de FONADIN por 185 mdp.

2/ Inversión estimada prevista por el sector privado para el 2021. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tienen prevista una inversión de SECTUR y de FONADIN.

3/ Pagos anuales estimados por el Sector Público. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios, por lo anterior no hay pagos programados por parte del Sector Público.

Para los proyectos de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se consideran pagos anuales desde el inicio del proyecto, toda vez que la ejecución y operación comienzan simultáneamente.

ANEXO 6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (pesos)

6.A. Monto autorizado para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	9,360,367,214	0	9,360,367,214

6.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	717,727,705,720	346,293,563,364	1,067,021,269,084

6.C. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	727,088,072,034	346,293,563,364	1,076,381,636,298

6.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	610,670,114,789	510,766,695,147	223,196,769,093

6.E. Monto máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	285,502,038,896	189,702,388,302	133,651,928,141

6.F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa

	Inversión Física (Amortizaciones)	Costo Financiero	Suma
Comisión Federal de Electricidad	16,482,003,489	10,314,662,039	29,796,665,528

Nota: Para estos anexos los totales pueden no sumar respecto al total debido al redondeo.

ANEXO 7. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

		Incremento a las percepciones	Creación de plazas	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
		I	II	III	
Ramos Administrativos					
82	Oficina de la Presidencia de la República	14,803,293	0	2,701,829	17,304,322
94	Gobernación	94,585,585	0	25,503,808	120,089,483
05	Relaciones Exteriores	35,176,099	8	8,871,236	45,147,335
06	Hacienda y Crédito Público	393,743,111	0	106,975,788	500,718,800
07	Defensa Nacional	1,389,372,904	1,040,255,517	642,985,200	3,052,613,621
08	Agricultura y Desarrollo Rural	194,941,397	8	62,773,328	258,614,725
09	Comunicaciones y Transportes	171,575,625	8	73,378,312	244,953,837
10	Economía	51,272,292	0	22,833,389	73,905,681
11	Educación Pública	2,268,451,389	9	2,311,331,432	4,579,782,821
12	Salud	746,877,534	6,566,139,280	162,782,320	7,475,009,134
13	Marina	375,828,453	8	300,256,215	676,084,668
14	Trabajo y Previsión Social	48,414,158	0	18,108,630	64,522,788
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44,948,181	0	18,838,414	63,785,575
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	160,495,565	9	92,252,904	252,747,568
18	Energía	39,099,597	8	3,268,975	42,368,572
20	Bienestar	42,338,121	8	18,893,883	62,831,814
21	Turismo	20,033,228	8	7,030,151	27,063,378
27	Función Pública	38,064,810	8	4,817,834	48,882,444
31	Tribunales Agrarios	15,201,248	8	5,322,424	20,523,664
36	Seguridad y Protección Ciudadana	743,377,887	9	217,887,765	961,265,432
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3,468,870	8	292,838	3,761,908
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	142,235,908	0	81,878,052	224,105,858
45	Comisión Reguladora de Energía	4,212,438	8	336,445	4,548,883
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	4,310,700	0	183,200	4,509,908
47	Entidades no Sectorizadas	48,746,808	0	14,898,133	64,638,738
48	Cultura	134,844,753	8	14,405,596	149,850,349
Ramos Generales					
23	Provisiones Salariales y Económicas ^{1/}	18,136,054,548	1,562,968,822	3,943,181,090	14,742,203,658

^{1/} Para efectos de control presupuestario y eficiencia del gasto, la administración de estos recursos se considera en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	MONTD
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	541,094,814,451
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	171,557,985,838
Erogaciones incluidas en el Ramo General 20 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	9
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,908,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,908,000
Total	723,898,601,198



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUJARAT

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	215	737
15,000	30,000	245	1,061
30,000	50,000	278	1,382
50,000	100,000	308	1,705
100,000	150,000	337	2,033
150,000	250,000	383	2,454
250,000	350,000	414	2,764
350,000	450,000	448	2,934
450,000	600,000	475	3,253
600,000	750,000	491	3,423
750,000	1,000,000	538	3,745
1,000,000		567	3,913

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	342	189	3,050	2,388
15,000	30,000	424	215	3,384	2,538
30,000	50,000	509	254	3,895	3,050
50,000	100,000	590	293	4,741	3,551
100,000	150,000	679	342	5,588	4,231
150,000	250,000	765	382	6,434	5,079
250,000	350,000	831	484	7,454	5,588
350,000	450,000	1,013	509	8,128	6,077
450,000	600,000	1,189	590	9,859	7,279
600,000	750,000	1,356	678	10,997	8,298
750,000	1,000,000	1,518	785	12,355	9,307
1,000,000		1,811	847	13,889	10,487

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		111,474,967,485
04 Gobernación		14,942,762
	Conducción de la política interior	14,942,762
88 Agricultura y Desarrollo Rural		5,182,753,182
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	248,150,202
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,245,338,332
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	218,235,137
	Producción para el Bienestar	3,374,999,998
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	85,028,514
09 Comunicaciones y Transportes		2,282,482,083
	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	975,800,000
	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,228,892,083
	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	80,000,000
10 Economía		144,000,000
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	144,000,000
11 Educación Pública		15,308,819,121
	Educación para Adultos (INEA)	90,108,482
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	766,050,381
	Normar los servicios educativos	101,550,645
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	8,942,351,566
	Programa de Becas Elisa Acuña	200,572,989
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	1,017,835,340
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	3,317,158,000
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	296,223,958
	La Escuela es Nuestra	577,171,750
12 Salud		8,015,244,696
	Rectoría en Salud	8,800,000
	Prevención y control de enfermedades	41,497,782
	Salud materna, sexual y reproductiva	18,716,608
	Fortalecimiento a la atención médica	295,544,083
	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	7,651,086,242
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		488,781,835
	Procuración de justicia agraria	235,894,303
	Programa de Atención de Conflictos Agrarios	32,937,531
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,350,000
	Programa Nacional de Reconstrucción	217,600,000
18 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,234,159,785
	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	40,850,000
	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	406,035,510
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	285,836
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	42,666,318
	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	209,217,957
	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	204,011,989
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	328,982,374
19 Aportaciones a Seguridad Social		4,913,719,671
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,913,719,671
20 Bienestar		60,918,144,730
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	116,092,765
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	35,357,069,374
	Sembrando Vida	24,538,982,591

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	19,139,458,958
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,516,598,075
FAM Asistencia Social	2,613,881,983
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	18,174,449
Proteger, promover y difundir los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y atender asuntos de personas indígenas privadas de su libertad.	18,174,449
35 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	35,243,171
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	35,243,171
47 Entidades no Sectorizadas	3,633,887,169
Actividades de apoyo Administrativo	159,617,980
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,931,158
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	928,919,198
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,718,081
48 Cultura	60,146,784
Educación y cultura indígena	60,146,784

ANEXO 11. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (millones de pesos)

Vertiente	Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva	MONTO
	Total	335,227.6
Competitividad		31,025.4
	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	31,025.4
	Agricultura y Desarrollo Rural	31,025.4
	Fertilizantes	1,912.0
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	10,981.6
	Producción para el Bienestar	13,500.0
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,428.5
	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	3,223.1
Medio Ambiente		2,036.9
	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	2,036.8
	Agricultura y Desarrollo Rural	119.5
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	119.5
	Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,916.2
	Forestal	1,515.3
	Protección al medio ambiente en el medio rural	400.9
	Desarrollo Regional Sustentable	142.2
	PROFEPA	208.3
	Vida Silvestre	52.4
Educativa		52,907.2
	Programa de Educación e Investigación	52,907.2
	Agricultura y Desarrollo Rural	6,416.8
	Colegio de Postgraduados	1,478.0
	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO)	110.6
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)	1,302.9
	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	455.5
	Universidad Autónoma Chapingo	3,068.9
	Educación Pública	46,496.4
	Desarrollo de Capacidades Educación	15,277.0
	Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	20,126.3
	Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	10,055.1
	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	1,038.0
Social		117,959.7
	Programa de atención a la pobreza en el medio rural	112,645.7
	Relaciones Exteriores	75.9
	Atención a migrantes	75.9

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Bienestar	108,936.8
Atención a la población agraria	108,936.8
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	80,218.4
Sembrando Vida	28,718.4
Entidades no Sectorizadas	3,633.9
Atención a la población indígena y atomédecana (INPI)	3,633.9
Programa de Derecho a la Alimentación	3,387.8
Agricultura y Desarrollo Rural	3,387.9
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,240.8
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.	2,147.1
Programa de apoyo a la adquisición de leche	1,768.9
Agricultura y Desarrollo Rural	1,768.9
Adquisición de leche nacional	1,768.9
Programa de atención a las mujeres en situación de violencia	157.2
Bienestar	157.2
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF	157.2
Infraestructura	66,496.4
Programa de Infraestructura en el medio rural	66,496.4
Comunicaciones y Transportes	4,593.0
Infraestructura	4,593.0
Mantenimiento de Caminos Rurales	4,593.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,183.0
IMTA	201.2
Infraestructura Hidroagrícola	470.8
Programas Hidráulicos	1,510.9
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Salud	55,232.5
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	55,232.5
Salud	41,335.9
Salud en población rural	41,335.9
Desarrollo de Capacidades Salud	536.1
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)	40,799.7
Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	40,799.7
Aportaciones a Seguridad Social	13,896.6
IMSS-BIENESTAR	13,807.6
Seguridad Social Cafeteros	289.0
Agraria	154.3
Programa para la atención de aspectos agrarios	154.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	154.3
Atención de aspectos agrarios	154.3
Archivo General Agrario	154.3
Administrativa	9,416.3
Gasto Administrativo	9,416.3
Agricultura y Desarrollo Rural	8,573.9
ASERCA	153.6
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	15.9
CONAPESCA	584.3
CONAZA	59.0
Dependencia SADER	3,692.6
FEESA	5.7
FIRCO	255.1
INCA RURAL	32.1
SENASICA	1,628.0
SIAP	91.6
SNICS	55.1
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,042.5
Dependencia SEDATU	2,042.5
Tribunales Agrarios	800.9
Tribunales Agrarios	800.9



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

ANEXO 11.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

Entidad	Salud e Inocuidad Agroalimentaria
Aguascalientes	22.3
Baja California	30.3
Baja California Sur	27.9
Campeche	53.4
Coahuila	49.5
Colima	25.2
Chiapas	107.0
Chihuahua	73.1
Ciudad de México	3.7
Durango	55.8
Guanajuato	66.4
Guerrero	86.2
Hidalgo	50.7
Jalisco	106.7
Estado de México	45.8
Michoacán	117.1
Morelos	34.8
Nayarit	64.0
Nuevo León	49.7
Oaxaca	47.3
Puebla	66.8
Querétaro	28.3
Quintana Roo	27.0
San Luis Potosí	55.8
Sinaloa	227.1
Sonora	81.4
Tabasco	57.2
Tamaulipas	81.8
Tlaxcala	13.2
Veracruz	105.4
Yucatán	49.5
Zacatecas	44.0
Total	1,939.8

ANEXO 12. PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (pesos)

Ramo	Unidad Responsable	Recursos Fiscales	Recursos Propios	MONTO
Total		86,746,888,615	15,973,906,444	102,720,795,059
05	Relaciones Exteriores	2,300,000	0	2,300,000
K00	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo	2,300,000		2,300,000
08	Agricultura y Desarrollo Rural	4,948,320,562	247,600,000	5,195,920,562
A11	Universidad Autónoma Chapingo	2,320,298,466	3,600,000	2,323,898,466
D00	Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	418,098		418,098



ADICIONALES
ACORDADA



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

AZC	Colegio de Posgraduados	1,404,763,650	24,000,000	1,428,763,650
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	1,222,840,348	220,000,000	1,442,840,348
09	Comunicaciones y Transportes	200,088,188	8	200,088,188
A00	Instituto Mexicano del Transporte	136,447,482		136,447,482
JZN	Agencia Espacial Mexicana	83,840,828		83,840,828
18	Economía	381,480,297	1,078,824,378	1,439,504,667
K2H	Centro Nacional de Metrología	150,424,811	74,952,874	225,377,285
K8V	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial		199,418,815	199,418,815
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor		4,230,920	4,230,928
LAU	Servicio Geológico Mexicano	211,055,688	799,422,161	1,018,477,847
11	Educación Pública	42,853,858,696	1,922,944,874	44,776,803,578
511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	8,509,002,547		8,509,002,547
514	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	850,593,845		850,593,845
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	1,485,532		1,485,532
611	Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios	1,098,175		1,098,175
A00	Universidad Pedagógica Nacional	187,303,477		187,303,477
A2M	Universidad Autónoma Metropolitana	3,897,704,258	45,343,181	3,743,847,419
A30	Universidad Nacional Autónoma de México	14,874,159,889	961,899,255	15,836,859,144
B00	Instituto Politécnico Nacional	4,728,719,242		4,728,719,242
K00	Universidad Abierta y a Distancia de México	28,368,047		28,368,047
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	21,701,730	199,437	21,901,187
L4J	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	2,479,220,067	687,822,212	3,147,842,279
L8H	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	91,085,910	105,153,170	196,239,080
L8K	El Colegio de México, A.C.	598,560,445	138,933,165	737,493,610
M08	Tecnológica Nacional de México	5,983,126,402		5,983,126,402
MEY	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	98,741,318		98,741,318
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	983,877,809	3,504,474	686,672,283
12	Salud	7,828,713,821	278,355,646	7,908,068,667
160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	28,595,178		28,595,178
618	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	3,927,389,987		3,927,389,987
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	8,275,448	598,540	6,873,988
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	158,144,968	4,712,249	162,857,206
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	28,358,762	723,710	27,080,472
N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	354,978		354,978
NAW	Hospital Juárez de México	230,392,370	100,000	230,492,370
NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	105,428,703		105,428,703
NBD	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"	249,877,047	17,938,660	267,815,727
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	223,958,343	12,580,795	238,539,138

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

NBO	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	11,733,372	3,030,382	14,763,734
NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	7,062,036	570,000	7,632,036
NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán	133,536,660	5,300,000	138,836,660
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	1,481,879	384,302	1,866,181
NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	6,739,887	1,727,024	8,466,911
NBV	Instituto Nacional de Cancerología	124,959,178		124,959,178
NCA	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	188,974,103	30,525,966	218,500,069
NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Israel Cosío Villegas	232,800,029		232,800,029
NCE	Instituto Nacional de Geriátrica	48,079,813	6,020,000	57,099,813
NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	382,184,036	10,960,084	393,144,120
NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	165,538,532	29,855,941	224,394,473
NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	111,318,955	5,878,746	117,197,701
NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	291,010,132	21,107,381	302,117,513
NDE	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	229,451,791	23,664,767	253,116,578
NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Iberri Iberri	162,181,654	2,233,969	164,425,643
NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	493,775,445	70,622,115	564,397,560
NEF	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.		29,600,984	29,600,984
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	58,921,356		58,921,356
13	Marina	14,700,000	0	14,700,000
100	Secretaría	14,700,800		14,700,800
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	368,905,935	200,000,000	568,905,935
RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	291,234,605	200,800,000	491,234,605
RJJ	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	167,871,330		167,871,330
18	Energía	1,128,732,954	6,130,544,053	7,259,277,007
211	Dirección General de Energías Limpias	248,185,071		248,185,071
TOK	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	381,687,391	771,022,662	1,072,710,053
T00	Instituto Mexicano del Petróleo		5,014,598,154	5,014,598,154
T00	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	577,650,482	344,923,237	922,573,729
21	Turismo	17,082,719	8	17,082,718
A60	Instituto de Competitividad Turística	17,082,718		17,082,718
23	Provisiones Salariales y Económicas	2,229,800,800	0	2,229,800,800
411	Unidad de Política y Control Presupuestario	2,229,800,800		2,229,800,800
36	Seguridad y Protección Ciudadana	66,492,806	9	66,492,806
E00	Centro Nacional de Prevención de Desastres	66,492,800		66,492,806
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,184,828	3,718,075,366	30,291,180,394
90A	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	62,320,527	9,460,621	71,721,348
90C	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	181,490,360	21,467,290	212,977,650
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	195,200,817	29,831,754	225,132,571

90G	CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	102,893,046	96,103,088	288,996,134
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	188,395,792	52,896,859	251,292,451
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	119,801,999	45,484,480	182,386,379
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	392,591,713	15,517,291	408,109,004
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	485,583,721	34,119,823	519,883,544
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	278,897,778	38,568,975	318,466,754
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	188,037,078	7,040,114	195,077,182
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	196,829,334	35,277,477	232,106,811
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	318,841,054	6,036,338	324,877,382
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	20,187,829,1e2	2,000,000	20,189,829,182
90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	284,040,298	308,255,078	592,295,366
81A	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.		1,114,168,783	1,114,168,783
81C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	323,594,235	35,821,797	359,216,022
81E	El Colegio de la Frontera Sur	371,064,604	42,343,189	413,407,783
91I	El Colegio de Michoacán, A.C.	151,704,429	3,420,230	155,124,659
81K	El Colegio de San Luis, A.C.	118,855,205	12,000,000	131,855,205
91M	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación	0	884,118,213	884,118,213
81O	Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos	86,785,415	224,544,221	311,339,836
81Q	Instituto de Ecología, A.C.	282,788,573	63,822,150	348,819,723
81S	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	180,521,680	4,826,708	185,348,388
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	349,538,826	35,200,000	383,739,826
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	144,375,184	103,254,541	247,929,735
92U	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	314,678,482	371,929,319	686,796,7e1
92W	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	562,052,466	72,987,672	635,040,158
92Y	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	388,108,329	47,731,365	433,834,884
48	Cultura	129,993,938	0	129,993,939
D00	Instituto Nacional de Antropología e Historia	129,993,938		129,993,939
49	Fiscalía General de la República	116,163,434	45,000,000	161,163,434
SKC	Instituto Nacional de Ciencias Penales	116,163,434	45,000,000	161,163,434
	Instituto Mexicano del Seguro Social	8	757,692,384	757,692,384
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		757,692,384	757,692,384
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,650,417	40,499,969	147,549,386
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,650,417	40,499,969	147,549,386
	Comisión Federal de Electricidad	0	1,554,169,802	1,554,169,802
TVV	Comisión Federal de Electricidad		1,554,169,802	1,554,169,802

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		128,353,630,307
01 Poder Legislativo		6,000,000
	Actividades derivadas del trabajo legislativo	6,000,000
	H. Cámara de Senadores	6,000,000
04 Gobernación		324,906,141
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,104,184
	Planeación demográfica del país	7,452,000
	Protección y defensa de los derechos humanos	7,289,977
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	10,000,000
05 Relaciones Exteriores		17,000,000
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	12,000,000
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
	Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,000,000
06 Hacienda y Crédito Público		4,000,009
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
07 Defensa Nacional		128,629,277
	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,629,277
08 Agricultura y Desarrollo Rural		7,832,883,219
	Programa de Abast. Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,288,291,033
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	2,162,351,374
	Fertilizantes	669,199,999
	Producción para el Bienestar	3,374,999,999
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	308,050,808
09 Comunicaciones y Transportes		5,098,686
	Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	5,098,686
10 Economía		2,688,209,243
	Actividades de apoyo administrativo	209,243
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	1,152,000,009
	Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares	1,536,000,000
11 Educación Pública		29,936,860,464
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	761,087,588
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	33,294,276
	Políticas de igualdad de género en el sector educativo	2,000,774
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	7,984,242,470
	Programa de Becas Elisa Acuña	1,311,180,059
	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8,066,947
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,544,068,350
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	8,292,890,000
12 Salud		5,026,554,886
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	21,025,858
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	187,809,176
	Atención a la Salud	1,500,060,964
	Prevención y atención contra las adicciones	51,848,013
	Programa de vacunación	449,308,724
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	404,229,242
	Prevención y control de enfermedades	4,835,857
	Salud materna, sexual y reproductiva	2,028,629,871
	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	400,519,282

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ASesoríaDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

13 Marina		8,860,000
	Sistema Educativo naval y programa de becas	8,860,000
14 Trabajo y Previsión Social		10,007,612,280
	Procuración de justicia laboral	49,000,000
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,959,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	9,942,652,330
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,678,843,392
	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2,454,868
	Programa de Vivienda Social	1,873,123,488
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	58,265,236
	Programa Nacional de Reconstrucción	544,000,001
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		137,244,658
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	335,852
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	71,118,531
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	65,798,475
18 Energía		3,367,864
	Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	99,760
	Actividades de apoyo administrativo	3,118,104
	Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	150,000
19 Aportaciones a Seguridad Social		328,650
	Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	328,650
20 Bienestar		72,040,443,179
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	278,535,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,684,509,023
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	59,460,978,826
	Sembrando Vida	9,189,861,120
	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos	405,003,761
21 Turismo		6,098,235
	Planeación y conducción de la política de turismo	6,098,235
22 Instituto Nacional Electoral		79,818,217
	Gestión Administrativa	1,100,000
	Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	28,828,923
	Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	3,902,800
	Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	28,098,828
	Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	7,951,861
	Vinculación con la sociedad	666,002
	Tecnologías de Información y comunicaciones	478,982
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		42,581,639
	Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres	28,920,571
	Actividades de apoyo administrativo	13,661,068
36 Seguridad y Protección Ciudadana		3,516,236
	Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	3,516,236
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		5,162,370,696
	Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	113,583,708
	Becas de posgrado y apoyos a la calidad	5,048,786,988

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

40 Información Nacional Estadística y Geográfica	204,429,778
Producción y difusión de información estadística y geográfica	204,429,778
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	9,262,907
Actividades de apoyo administrativo	9,262,907
45 Comisión Reguladora de Energía	220,000
Regulación y permisos de electricidad	60,000
Regulación y permisos de Hidrocarburos	60,000
Actividades de apoyo administrativo	190,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,010,029,931
Atención a Víctimas	7,772,233
Actividades de apoyo administrativo	12,788,871
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,248,938
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	444,583,330
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	365,349,561
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	171,286,998
48 Cultura	22,872,092
Desarrollo Cultural	18,453,477
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	3,018,615
49 Fiscalía General de la República	77,386,646
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	99,282,154
Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales	492,099
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	2,952,657
Promover la formación profesional y capacitación del capital humano	1,344,384
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
18 Energía *	219,362
Distribución de petróleo, gas, petroíferos y petroquímicos	11,779
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	195,362
Actividades de apoyo administrativo	2,684
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	537
Instituto Mexicano del Seguro Social *	22,677,265,518
Prevención y control de enfermedades	2,390,434,065
Servicios de guardería	13,090,398,979
Atención a la Salud	7,196,452,474
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado *	800,719,214
Equidad de Género	52,973,440
Prevención y control de enfermedades	547,842,774
Petróleos Mexicanos *	11,720,000
Actividades de apoyo administrativo	11,720,000
Comisión Federal de Electricidad *	4,407,000
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	467,000
Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión	129,000
Operación y mantenimiento de la Infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica	2,130,000
Comercialización de energía eléctrica y productos asociados	500,000
Prestación de servicios corporativos	415,000
Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios	91,000
Actividades de apoyo administrativo	494,000
Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	190,000

*/ El presupuesto no suma en el total, por ser recursos propios.



ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		203,837,853,713
04 Gobernación		138,282,478
	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	138,282,478
05 Relaciones Exteriores		129,029,846
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	129,029,846
11 Educación Pública		16,145,980,752
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	6,634,312,000
	Educación para Adultos (INEA)	285,337,225
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	55,381,099
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,035,270,680
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	6,387,393,976
	Programa de Becas Elisa Acuña	501,432,473
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	246,653,299
12 Salud		11,699,743,467
	Asistencia social y protección del paciente	510,876,623
	Atención a la Salud	6,105,994,083
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	101,325,826
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	120,767,284
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	454,004,404
	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	25,767,976
	Programa Nacional de Reconstrucción	333,333,333
	Salud materna, sexual y reproductiva	893,714,498
	Servicios de asistencia social integral	1,053,939,358
14 Trabajo y Previsión Social		13,265,630,814
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,959,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	13,240,570,864
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,296,714,743
	Programa de Vivienda Social	1,183,674,083
	Programa Nacional de Reconstrucción	1,112,840,650
19 Aportaciones e Seguridad Social		4,994,004,761
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,994,004,761
20 Bienestar		151,290,834,280
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,635,306
	Desarrollo integral de las personas con discapacidad	31,048,573
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	128,587,525,190
	Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	15,883,785,797
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	276,535,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,638,471,926
	Sembrando Vida	3,775,873,435
	Servicios a grupos con necesidades especiales	294,059,087
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		32,167,591
	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos	18,285,242
	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	13,022,349
47 Entidades no Sectorizadas		3,633,887,159
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,031,158
	Actividades de apoyo administrativo	158,017,980
	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	828,916,198
	Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,710,081
	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
48 Cultura		60,146,784
	Educación y cultura indígena	60,146,784
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		51,711,239
	Atención a Personas con Discapacidad	51,711,239

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 15. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		8,972,803,511
04 Gobernación		873,784
12 Salud		8,417,827
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,784,728
	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	1,784,728
18 Energía		325,689,974
	Secretaría de Energía	248,185,071
	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	78,094,903
	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	400,000
Petróleos Mexicanos		189,502,478
	Pemex Exploración y Producción	134,502,478
	Pemex Transformación Industrial	35,000,000
Comisión Federal de Electricidad		8,468,234,742
	CFE Consolidado*	8,468,234,742

* Incluye la inversión financiada de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

ANEXO 16. RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		79,274,272,931
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,452,373
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,452,373
09 Comunicaciones y Transportes		153,980,808
	Reconstrucción y Conservación de Carreteras	153,980,808
11 Educación Pública		86,748,781
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	80,517,812
	Programa de Becas Elisa Acuña	5,814,985
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	19,358,407
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	1,057,897
12 Salud		344,189,989
	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12,083,009
	Vigilancia epidemiológica	332,198,920
13 Marina		13,005,275
	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	13,005,275
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		606,804,849
	Programa de Vivienda Social	197,312,349
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	409,492,500
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		5,635,519,362
	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	3,435,358
	Investigación científica y tecnológica	186,074,487
	Protección Forestal	1,307,090,815
	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	153,103,383
	Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas	98,598,123
	Regulación Ambiental	81,713,829
	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,198,558
	Gestión integral y sustentable del agua	771,770,475
	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable	18,938,215
	Actividades de apoyo administrativo	11,544,780
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3,419,886



UNIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	41,174,485
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	142,221,062
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	356,383,479
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	1,569,322,223
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	825,598,409
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias	34,943,175
18 Energía	368,209,397
Actividades de apoyo administrativo	1,648,311
Conducción de la política energética	49,549,797
Coordinación de la política energética en electricidad	4,125,684
Coordinación de la política energética en hidrocarburos	7,431,802
Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	59,260,742
Fondos de Diversificación Energética	249,185,071
21 Turismo	658,000
Planeación y conducción de la política de turismo	658,000
23 Provisiones Salariales y Económicas	9,927,348,913
Fondo de Desastres Naturales (FONON)	8,727,349,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
36 Seguridad y Protección Ciudadana	141,077,927
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	141,077,927
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	259,103,342
Investigación científica, desarrollo e innovación	127,914,952
Becas de posgrado y apoyos a la calidad	131,188,390
47 Entidades no Sectorizadas	38,000,000
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	30,000,000
Petróleos Mexicanos	207,912,580
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	196,912,580
Mantenimiento de infraestructura	11,000,000
Comisión Federal de Electricidad	63,486,278,538
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	4,158,500
Servicio de transporte de gas natural	52,931,800,000
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	3,979,382
Proyectos de infraestructura económica de electricidad	99,621,858
Mantenimiento de infraestructura	458,713,786

ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		448,175,824,339
07 Defensa Nacional		1,357,089,768
	Sistema educativo militar	1,957,889,768
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,798,851,473
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	1,393,851,472
	Producción para el Bienestar	405,000,001
10 Economía		288,000,800
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	288,000,000
11 Educación Pública		263,433,686,218
	Educación Básica	16,949,471,719
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	857,564,471
	Producción y transmisión de materiales educativos	34,519,273
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	1,148,075,571
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	11,177,939,458

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Programa de Becas Elisa Acuña	48,918,294
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,380,022
La Escuela es Nuestra	3,315,667,500
Educación para Adultos (INEA)	345,408,220
Educación Media Superior	109,655,637,948
Servicios de Educación Media Superior	45,872,572,182
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,593,707
Normalización y certificación en competencias laborales	922,038,869
Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	36,538,126
Programa de Becas Elisa Acuña	141,248,913
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,649,539
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)	26,019,817
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	33,171,560,000
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,702,332
Apoyos a centros y organizaciones de educación	91,070,031
Educación Física de Excelencia	198,947,730
Educación Superior	135,452,362,453
Servicios de Educación Superior y Posgrado	51,211,093,645
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5,453,147,671
Proyectos de infraestructura social del sector educativo	180,000,000
Programa de Becas Elisa Acuña	3,723,701,405
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	131,979,497
Jóvenes Escribiendo el Futuro	6,949,000,390
Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,808
Subsidios para organismos descentralizados estatales	62,590,423,529
Apoyos a centros y organizaciones de educación	444,729,114
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	987,413,194
Posgrado	1,376,214,101
Programa de Becas Elisa Acuña	131,514,853
Subsidios para organismos descentralizados estatales	1,244,899,448
12 Salud	1,132,993,114
Prevención y atención contra las adicciones	931,115,672
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	301,677,242
13 Marina	639,541,505
Sistema Educativo naval y programa de becas	639,541,505
14 Trabajo y Previsión Social	20,370,109,022
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,370,109,022
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	250,672
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	250,672
19 Aportaciones a Seguridad Social	5,619,268,050
Seguro de Enfermedad y Maternidad	5,619,268,050
20 Bienestar	111,155,257
Instituto Mexicano de la Juventud	111,155,257
28 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	1,123,959,556
Servicios de educación normal en la Ciudad de México	1,123,959,556
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	198,548,093,782
Educación Básica	98,335,294,863
FAM Infraestructura Educativa Básica	80,147,492
FONE Servicios Personales	80,192,745,415
FONE Otros de Gasto Corriente	2,579,905,776
FONE Gasto de Operación	3,583,057,808
FONE Fondo de Compensación	2,579,034,394
FAETA Educación de Adultos	321,403,977



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



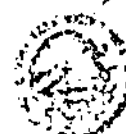
DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Educación Media Superior	1,604,318,105
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	695,387,361
FAETA Educación Tecnológica	908,920,744
Educación Superior	4,608,480,814
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	4,608,490,814
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	40,681,358
Investigación científica, desarrollo e innovación	40,681,358
47 Entidades no Sectorizadas	203,901,542
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	203,901,542
48 Cultura	12,174,892
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	12,174,892
Instituto Mexicano del Seguro Social	44,307,844,167
Prevención y control de enfermedades	359,209,583
Atención a la Salud	43,948,634,584
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	2,387,423,962
Prevención y Control de Enfermedades	384,543,494
Atención a la Salud	2,002,880,468

1/ Programa operado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		791,684,563,878
04 Gobernación		115,917,218
	Atención a refugiados en el país	4,057,050
	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	88,684,901
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	586,400
	Registro e Identificación de Población	42,609,785
05 Relaciones Exteriores		4,000,908
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	4,000,000
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,652,358,947
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	676,888,818
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	781,673,138
11 Educación Pública		160,323,938,090
	Apoyos a centros y organizaciones de educación	3,381,414,844
	Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)	26,616,617
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	26,537,248,000
	Educación Física de Excelencia	79,459,092
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	3,830,251,903
	Educación para Adultos (INEA)	105,185,236
	Expansión de la Educación Inicial	625,000,000
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	55,381,099
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,593,767
	La Escuela es Nuestra	12,280,250,000
	Normalización y certificación en competencias laborales	622,038,969
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	3,178,184,708
	Producción y transmisión de materiales educativos	127,945,454
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,969,678
	Programa de Becas Elisa Acuña	141,608,316
	Programa de Cultura Física y Deporte	1,301,983,761
	Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	185,124,205

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNA-000-SAG
00A-00344-30

Programa Nacional de Inglés	392,465,853
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	81,651,951
Servicios de Educación Media Superior	45,672,572,182
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,762,332
12 Salud	51,482,218,455
Atención a la Salud	17,354,238,499
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	30,252,036,165
Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	134,433,268
Investigación y desarrollo tecnológico en salud	89,525,675
Prevención y atención contra las adicciones	200,905,916
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,566,941
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	29,455,528
Programa de Atención a Personas con Discapacidad	16,552,944
Programa de vacunación	2,042,312,382
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	85,184,153
Salud materna, sexual y reproductiva	535,188,244
Servicios de asistencia social integral	758,636,338
14 Trabajo y Previsión Social	4,482,768
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	4,482,768
19 Aportaciones a Seguridad Social	6,279,382,662
Programa IMSS-BIENESTAR	6,279,382,662
20 Bienestar	2,588,623,674
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	12,921,194
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,585,702,490
22 Instituto Nacional Electoral	6,619,294
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	6,375,294
Tecnologías de Información y comunicaciones	144,000
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	41,022,701,446
Becas para la población atendida por el sector educativo	174,297,208
Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	200,000,000
Servicios de educación básica en la Ciudad de México	40,048,494,232
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	456,679,760,522
FAETA Educación de Adultos	210,765,776
FAETA Educación Tecnológica	4,044,346,765
FAM Asistencia Social	8,113,711,331
FAM Infraestructura Educativa Básica	9,429,116,762
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	895,387,361
FASSA	27,120,158,388
FONE Fondo de Compensación	16,741,808,978
FONE Gasto de Operación	14,920,407,533
FONE Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402
FONE Servicios Personales	371,636,439,228
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	5,902,735
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes	5,902,735
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	8,050,800
Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión	8,050,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,359,854,300
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,359,854,300

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

48 Cultura	45,209,771
Desarrollo Cultural	22,314,300
Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales	1,837,970
Servicios Cinematográficos	815,254
Servicios educativos culturales y artísticos	20,242,348
49 Fiscalía General de la República	71,629,568
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	67,144,798
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	1,159,420
Instituto Mexicano del Seguro Social	52,303,800,273
Atención a la Salud	34,813,389,750
Prestaciones sociales	227,875,101
Prevención y control de enfermedades	4,372,158,443
Servicios de guardería	13,090,398,979
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	18,720,223,144
Atención a la Salud	11,326,977,795
Prevención y control de enfermedades	1,785,380,503
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	2,607,884,849

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		209,372,405,069
4 Gobernación		595,932,505
	Conducción de la política interior	33,851,388
	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	57,749,001
	Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México	38,709,581
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,184,184
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	137,021,715
	Protección y defensa de los derechos humanos	30,439,656
8 Hacienda y Crédito Público		170,010,527
	Detección y prevención de ilícitos financieros	170,010,527
7 Defensa Nacional		8,289,181,859
	Derechos humanos	58,548,410
	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,829,277
	Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública	4,103,913,604
	Sistema educativo militar	1,957,089,768
11 Educación Pública		104,735,218,129
	Atención al deporte	575,314,715
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	24,878,670,000
	Desarrollo Cultural	3,682,051,212
	Educación Física de Excelencia	284,883,840
	Educación para Adultos (INEA)	30,035,497
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	7,225,210,914
	La Escuela es Nuestra	8,841,780,000
	Producción y distribución de libros y materiales culturales	114,276,625
	Producción y transmisión de materiales educativos	824,079,723
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,989,879
	Programa de Becas Elisa Acuña	3,589,718,382
	Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,808
	Programa de mantenimiento a infraestructura física educativa	210,700,873
	Servicios de Educación Media Superior	4,906,500,823
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	8,628,352,813
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	8,475,012,228
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	493,706,597

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

12 Salud	2,374,882,950
Prevencción y atención contra las adicciones	1,413,830,829
Prevencción y control de enfermedades	32,451,661
Salud materna, sexual y reproductiva	828,709,460
13 Marina	6,451,720,602
Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	5,503,731,387
Sistema Educativo naval y programa de becas	947,989,215
14 Trabajo y Previsión Social	20,603,109,022
Capacitación para Incrementar la Productividad	1,000,000
Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales	1,000,000
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	1,000,000
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,600,109,022
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	6,551,880,000
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	6,551,880,000
20 Bienestar	9,221,811,959
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,711,456
Actividades de apoyo administrativo	19,215,700
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	211,077,754
Sembrando Vida	9,986,271,742
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12,762,432,999
FAETA Educación Tecnológica	772,709,731
FASP	7,695,818,328
FORTAMUN	4,294,106,940
36 Seguridad y Protección Ciudadana	37,789,711,013
Actividades de apoyo administrativo	7,777,556,414
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	239,228,409
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	27,961,271,330
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1,811,854,860
48 Cultura	1,866,414,306
Desarrollo Cultural	1,765,511,331
Educación y cultura indígena	60,146,784
Programa de Apoyos a la Cultura	20,756,190

ANEXO 20. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

	MONTO
Provisiones Salariales	13,766,309,730
Situaciones laborales supervenientes	13,790,309,730
Provisiones Económicas	9,013,396,953
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	8,727,349,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
Comisiones y pago a CECOBAN	86,041,140
Provisiones Salariales y Económicas	14,742,203,958
Desarrollo Regional	56,000,000
Provisión para la Armonización Contable	50,000,000
Otras Provisiones Económicas	71,000,000,000
Programa de Separación Laboral	1,000,000,000
Subsidios a las Tarifas Eléctricas	70,000,000,000
Gastos asociados a ingresos patroleros	16,990,840,090
TOTAL	127,486,744,341

ANEXO 21. RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

	MONTO
Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	16,262,547,484
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,497

ANEXO 22. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)

	MONTO
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE):	408,057,254,139
Servicios Personales	371,638,439,226
Otros de Gasto Corriente ^{1/}	10,749,607,402
Gasto de Operación	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,809,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	109,501,268,964
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,409,852
Entidades	10,276,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ^{2/}	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ^{3/}	85,882,136,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,283,323,958
Asistencia Social	12,550,329,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,837
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,719,222,563
Educación Tecnológica	4,953,267,509
Educación de Adultos	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal ^{3/}	7,695,916,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	46,924,635,800
TOTAL *	777,842,880,397

1/ Incluye recursos para las plazas subsidiadas a las entidades federativas incluidas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conforme a los registros que se tienen en las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público.

2/ La Ley de Coordinación Fiscal considera en la denominación de estos Fondos al Distrito Federal.

3/ Considera los recursos para dar cumplimiento al artículo 40, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir el 0.1 por ciento, con excepción del componente de servicios personales previsto en el FONE.

Con respecto a lo previsto en el artículo 40, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a la Evaluación del Desempeño, no se considera transferencia de recursos al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), toda vez que la Unidad de Evaluación del Desempeño, en su carácter de unidad responsable del FIDEFAF, consideró que el patrimonio contable con que cuenta el mismo, resulta suficiente para efectuar la contratación de las evaluaciones externas de los Fondos de Aportaciones Federales, mandatadas en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ANEXO 23.1.1. LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (pesos)

Grupo	Tipo de Personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total 2/	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando 1/							
O	Secretario de Estado		111,785		28,408		140,181
H ₁	Subsecretario		110,957		28,191		139,858
J	Jefe de Unidad	101,789	108,455	25,572	26,785	127,341	135,239
K	Director General	86,003	96,758	21,355	23,577	107,358	120,336
L	Director General Adjunto	69,184	82,553	17,747	20,534	86,831	103,087
M	Director	42,829	78,398	11,046	18,969	53,875	97,368
N	Subdirector	28,476	41,742	6,142	16,632	34,618	52,574
O	Jefe de Departamento	17,896	28,122	6,447	7,987	24,243	34,109
P	Personal de Enlace	9,373	17,058	4,911	6,254	14,284	23,311
Personal Operativo		7,229	18,582	6,271	16,207	13,500	20,789
Personal de Categorías:							
	Del Servicio Exterior Mexicano	11,072	90,075	5,150	22,092	16,222	112,187
	De Educación	316	70,176	12,142	52,723	12,459	122,899
	De las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines	9,936	52,879	14,873	26,984	24,809	79,862
	De Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	8,250	30,810	16,003	65,899	27,253	96,506
	De Seguridad Pública	11,585	38,246	10,178	52,534	21,763	96,798
	De Gobernación	14,229	21,814	12,826	14,875	27,057	38,498
	De las Fuerzas Armadas	6,871	114,228	7,870	27,352	14,641	141,581

1/ Las denominaciones de Secretario de Estado, Subsecretario y Jefe de Unidad son exclusivas de las Dependencias del Ejecutivo Federal. Los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades adoptan como denominación el de Director General, Vocal, Comisionado, etc., independientemente de que el rango tabular pudiera ser coincidente con el de las Dependencias para las denominaciones de uso exclusivo.

2/ La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos por sueldos y salarios, y por prestaciones ordinarias, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas. Los montos netos mensuales corresponden a la cantidad que perciben los servidores públicos, una vez aplicadas las disposiciones fiscales. Los montos indicados no incluyen las prestaciones extraordinarias. Los rangos de las remuneraciones del personal operativo y de categorías, varían conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos Colectivos de Trabajo.

ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida*
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	112,122
Impuesto sobre la renta retenido (34%) * y deducciones de seguridad social	50,190
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	162,311
a) Sueldos y salarios:	181,056
i) Sueldo base	44,897
ii) Compensación garantizada	116,159
b) Prestaciones:	1,255
i) Prima quinquenal (antigüedad)	235
ii) Ayuda para despensa	985
iii) Seguro colectivo de retiro	35

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1/ Corresponde a la remuneración en numerario sin considerar las prestaciones en especie.



ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,719,581
Impuesto sobre la renta retenido (34%) *	684,072
Percepción ordinaria bruta anual	2,403,653
a) Sueldos y salarios:	1,932,872
i) Sueldo base	538,764
ii) Compensación garantizada	1,393,908
b) Prestaciones:	470,981
i) Aportaciones a seguridad social	89,322
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	14,966
iv) Aguinaldo (sueldo base)	88,358
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	234,883
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	2,820
vii) Ayuda para despensa	11,820
viii) Seguro de vida institucional	27,057
ix) Seguro colectivo de retiro	425

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1/ Conforme a la Ley del ISSSTE se incluye esta prestación a partir de 2010.

ANEXO 23.2. CÁMARA DE SENADORES

ANEXO 23.2.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios ¹⁾		Prestaciones ²⁾		Percepción ordinaria total ³⁾	
			(Efectivo y Especie)			
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		104,873		25,322		129,995
Coordinador / Contralor / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	100,171	103,261	23,911	24,475	124,082	127,736
Director General	83,490	99,833	20,584	23,556	104,054	123,489
Jefe de Unidad	89,439	81,763	17,585	18,788	87,004	101,551
Director de Área	48,802	71,454	13,848	17,484	59,848	88,938
Subdirector de Área	33,283	45,869	10,179	12,355	43,462	58,224
Jefe de Departamento	22,876	32,128	9,589	11,083	32,477	43,211
Personal de Servicio Técnico de Cárcera	12,239	45,960	7,022	11,257	19,261	57,217
Personal operativo de confianza	27,776	29,497	12,432	12,849	40,210	42,346
Personal operativo de base	8,328	17,478	33,943	38,656	40,271	56,137

1) La remuneración neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Cámara de Senadores, una vez aplicadas las disposiciones fiscales y deducciones de seguridad social.

2) En la Percepción Ordinaria Total se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de: aguinaldo y prima vacacional.

3) Los importes de las percepciones mensuales plasmadas en este documento, corresponden a los tabuladores vigentes para el ejercicio fiscal 2019, no contemplan ajustes por incrementos en la unidad de medida y actualización (UMA), ni efectos inflacionarios.



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.2.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida ^{1/}
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,175,479
Impuesto sobre la renta retenido ^{2/}	460,760
Percepción bruta anual	1,636,239
I. Percepciones ordinarias:	1,636,239
a) Sueldos y salarios:	1,338,292
i) Sueldo base ^{3/}	1,338,292
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	297,947
i) Aportaciones a seguridad social	4,378
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	
iii) Prima vacacional ^{4/}	
iv) Aguinaldo (sueldo base)	216,745
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida institucional	76,823
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de separación individualizado	
xii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	

^{1/} Cálculo obtenido conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.^{2/} Corresponde a las percepciones para 2016.^{3/} Dieta.

ANEXO 23.2.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	79,273
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	32,252
Percepción ordinaria bruta mensual	111,524
I. Percepciones ordinarias:	111,524
a) Sueldos y salarios:	111,524
i) Sueldo base	111,524
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	
i) Prima quinquenal	
ii) Ayuda para despensa	
iii) Seguro colectivo de retiro	

Vigencia a partir de enero de 2020



ANEXO 23.2.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,559,943
Impuesto sobre la renta retenido (*)	673,029
Percepción bruta anual	2,232,972
I. Percepciones ordinarias:	2,232,972
a) Sueldos y salarios:	1,812,396
i) Sueldo base	306,000
ii) Compensación garantizada	1,506,396
b) Prestaciones:	420,576
i) Aportaciones a seguridad social	61,644
ii) Ahorro solidario	19,896
iii) Prima vacacional	12,756
iv) Aguinaldo (sueldo base)	49,552
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	243,944
vi) Seguro de vida institucional	32,628
vii) Seguro colectivo de retiro	156

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.2.5. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA	194,673
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	46,368
Percepción bruta mensual	151,033
a) Sueldos y salarios:	151,033
i) Sueldo base	25,500
ii) Compensación garantizada	125,533

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.3. CÁMARA DE DIPUTADOS

ANEXO 23.3.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
CÁMARA DE DIPUTADOS						
Personal de base:						
2		8,785		14,829		23,624
3		8,863		15,052		23,815
4		8,992		15,152		24,144
5		9,219		15,325		24,534
6		9,396		15,434		24,830
7		10,121		15,818		25,731
8		10,825		15,873		26,298
9		11,165		15,813		26,978
10		11,601		16,278		26,079
11		13,881		16,641		30,521
12		15,114		18,790		31,893
13		17,246		16,818		34,164



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



LA OFICINA
DE LA FEDERACIÓN

Personal de base sindicalizado:					
2		8,795	23,724	32,518	
3		8,863	24,833	32,697	
4		8,982	24,165	33,157	
5		8,218	24,391	33,601	
6		8,398	24,530	33,928	
7		10,121	24,723	34,844	
8		10,825	24,775	35,400	
9		11,165	24,821	36,086	
10		11,801	25,510	37,311	
11		13,881	25,823	38,703	
12		15,114	26,815	41,128	
13		17,248	26,302	43,547	
14		17,754	26,427	44,181	
15		17,846	26,446	44,293	
16		19,261	26,827	45,888	
17		20,113	26,738	46,852	
18		21,988	27,027	48,016	
Personal de confianza:					
8		3,609	8,354	13,223	
00		5,483	8,485	14,946	
2		8,785	13,828	22,423	
3		8,863	13,796	22,859	
4		8,992	13,873	22,865	
5		8,218	14,008	23,218	
6		8,398	14,095	23,491	
7		10,121	14,248	24,367	
8		10,825	14,307	24,932	
9		11,185	14,431	25,586	
10		11,801	14,804	26,806	
11		13,881	15,157	29,037	
12		15,114	15,369	30,483	
13		17,248	15,546	32,794	
14		17,754	15,808	33,362	

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
CÁMARA DE DIPUTADOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		105,785		18,963		124,758
Secretario de Servicios/Contrator Interno/Coordinador de Comunicación Social		104,846		18,749		123,397
Director General	98,369	104,007	17,577	18,829	115,946	122,836
Secretario de Enlace		98,237		17,739		115,976
Homólogo a Director General		88,389		17,577		115,946
Director de Área y Homólogos	62,915	90,133	11,270	16,039	74,184	106,172
Subdirector de Área y Homólogos	42,489	57,214	7,820	16,277	50,309	67,491
Jefe de Departamento y Homólogos	28,202	35,232	5,522	8,465	34,724	41,697

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.



ANEXO 23.3.2.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,500		10,200		20,700
9		11,833		10,384		22,227
10		14,153		10,751		24,904
12		19,039		11,504		30,543
13		19,341		11,550		30,891
14		21,986		11,759		33,745
15		30,641		12,504		43,145

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.2.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Jefe de la Unidad		104,649		18,749		123,397
Director de Área		98,389		17,577		115,966
Secretario Técnico		65,249		11,624		76,873
Subdirector de Área		59,968		10,700		70,668
Coordinador		52,527		9,498		62,025
Especialista		38,231		7,025		45,256

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.

ANEXO 23.3.3.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,925		14,307		25,232
9		11,165		14,431		25,596
10		11,801		14,604		26,405
11		13,861		15,157		29,018
12		15,114		15,389		30,503
13		17,246		15,546		32,792
14		17,754		15,608		33,362

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.3.3.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Director General		104,067		18,829		122,836
Director de Área y Homólogos		90,133		18,039		108,172
Jefe de Departamento y Homólogos		35,232		8,465		41,897

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APUCAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE

ANEXO 23.3.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN DIPUTADO FEDERAL (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) (1)	1,150,738
Impuesto sobre la renta retenido (2)	408,677
Percepción Bruta Anual	1,559,415
I. Percepciones Ordinarias:	1,559,415
a) Sueldos y salarios:	1,264,536
i) Sueldo Base (3)	1,264,536
ii) Compensación Garantizada	
b) Prestaciones:	294,879
i) Aportaciones a seguridad social	63,067
ii) Ahorro solidario (art. 180 ISSSTE)	29,330
iii) Prima vacacional	
iv) Aguinaldo	
v) Gratificación de fin de año	140,504
vi) Prima quinquenal	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida Institucional	
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de Separación Individualizado	
xii) Apoyo económico para la adquisición de vehículo	
xiii) Otras prestaciones (4)	71,838
II. Percepciones extraordinarias:	
e) Pago por riesgo y potencialización de seguro de vida	

(1) Corresponde a las percepciones 2020

(2) Conforme lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

(3) Dieta.

(4) Prestación I.S.R. de gratificación de fin de año.

ANEXO 23.4. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.4.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO	821,218	1,383,310	212,804	739,588	634,123	2,102,898
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		112,482		28,333		138,815
AUDITOR ESPECIAL		111,448		28,055		137,503
TITULAR DE UNIDAD		110,415		25,823		136,238
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	108,087	109,381	25,353	25,582	133,340	134,973
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	95,867	99,048	23,085	23,650	119,052	122,698
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	90,845	92,511	21,823	22,229	112,758	114,746
SECRETARIO TÉCNICO		81,800		20,738		101,838
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	57,422	61,518	15,520	18,255	72,942	77,773
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	41,887	44,515	12,387	12,848	54,271	57,363
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA						
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	28,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	28,451	27,519	11,249	11,219	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	28,451	27,519	11,249	11,218	37,700	38,735
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR JURÍDICO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR JURÍDICO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"		20,521		10,340		30,861
SECRETARÍA PARTICULAR "A"		20,931		12,288		33,217
OPERADOR SUPERVISOR "A"	21,016	23,078	14,382	14,261	35,392	37,238
SECRETARÍA PARTICULAR "B"		21,561		12,512		34,063
OPERADOR SUPERVISOR "B"		19,107		14,490		33,597
OPERADOR SUPERVISOR "C"		17,158		14,671		32,329
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA		18,628		14,649		31,277
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA		18,628		14,648		31,277
OPERADOR SUPERVISOR "D"		18,628		14,649		31,277
VIGILANTE DE LA ASF		18,628		14,649		31,277
SECRETARÍA DE DIRECTOR DE ÁREA		14,541		14,195		28,735
PERSONAL OPERATIVO DE BASE						
TÉCNICO SUPERIOR		11,418		24,708		35,052
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES		11,085		24,688		35,703
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS		10,712		24,533		35,245
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS		10,048		24,398		34,444
ESPECIALISTA TÉCNICO		9,683		24,290		33,973
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS		9,312		24,190		33,502
ESPECIALISTA HACENDARIO		8,962		24,101		33,063
TÉCNICO MEDIO I		8,591		23,998		32,587
ANALISTA CONTABLE		8,210		23,883		32,103
TÉCNICO CONTABLE		7,823		23,779		31,602
TÉCNICO MEDIO CONTABLE		7,418		23,620		31,039
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE I		7,020		23,465		30,485

1.- Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

3.- No se considera el incremento en la medida de fin de año para el personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

4.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de base, en términos del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, para el presente ejercicio fiscal.

5.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de confianza, en términos del Lineamientos para Otorgar Estímulos y Gratificación a los Servidores Públicos Operativos de Base y de Confianza de la ASF, para el presente ejercicio fiscal.

6.- En el ejercicio de los importes aquí señalados, se estará a lo dispuesto en las disposiciones aplicables, incluida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNAUDITORÍA
FISCAL
DE LA
FEDERACIÓN

ANEXO 23.4.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL (pesos)

TIPOS DE PERSONAL	Plazas	Pago extraordinario anual unitario
		Hasta
PERSONAL DE MANDO		
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1	
AUDITOR ESPECIAL	4	
TITULAR DE UNIDAD	5	
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	38	
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	2	
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	137	
SECRETARIO TÉCNICO	3	
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	307	
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	478	
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA		
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	183	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	19	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	77	68,535
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	245	82,088
AUDITOR JURÍDICO "A"	92	82,088
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	90	82,088
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	153	57,147
AUDITOR JURÍDICO "B"	3	57,147
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	48	57,147
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"	1	54,769
SECRETARIA PARTICULAR "A"	15	67,328
OPERADOR SUPERVISOR "A"	21	38,597
SECRETARIA PARTICULAR "B"	38	58,815
OPERADOR SUPERVISOR "B"	10	34,878
OPERADOR SUPERVISOR "C"	25	33,814
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA	83	32,589
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA	13	32,589
OPERADOR SUPERVISOR "D"	10	32,589
VIGILANTE DE LA ASF	18	32,589
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	1	30,857
PERSONAL OPERATIVO DE BASE		
TÉCNICO SUPERIOR	37	45,750
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES	7	45,591
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS	7	45,138
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS	8	44,098
ESPECIALISTA TÉCNICO	7	43,549
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS	7	42,983
ESPECIALISTA HACENDARIO	4	42,485
TÉCNICO MEDIO	12	41,899
ANALISTA CONTABLE	28	41,338
TÉCNICO CONTABLE	38	40,732
TÉCNICO MEDIO CONTABLE	41	40,070
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE	51	39,410

1.- Los límites de percepción extraordinaria neta anual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

ANEXO 23.4.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (pesos)

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) *	1,665,785
Impuesto sobre la renta retenido **	685,536
Percepción bruta anual	2,351,321
I. Percepciones ordinarias:	2,351,321
a) Sueldos y salarios:	1,965,272
i) Sueldo base	450,663
ii) Compensación garantizada	1,454,609
b) Prestaciones:	446,049
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Prima vacacional	12,518
iii) Aguinaldo (sueldo base)	77,036
iv) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	247,248
v) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vi) Ayuda para despensa	18,620
vii) Seguro de vida institucional	32,199
viii) Seguro de gastos médicos mayores	
ix) Seguro de separación individualizado	
x) Revisión Médica	
xi) Vales de Despensa	
II. Percepciones extraordinarias:	0
e) Estímulo por Resultado de la Evaluación del Desempeño	

1/ Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ANEXO 23.5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ANEXO 23.5.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	Sueldos y salarios	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 127 CONSTITUCIONAL).	1		204,683,000
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		100,993,062
COORDINADOR	3		100,267
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		89,583
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL., SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		98,839
SRIO. DE ACUERDO DE SALA	6		99,412
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	88,663	98,736
SRIO. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	88,579	98,411
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	8	87,749	97,499
SUBDIRECTOR GRAL.	18	88,214	98,019
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	88,711	98,918
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	96,214	98,819
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	87,759	97,519



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



ADICIONADO
AL PAGO DE SALARIO

SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE SALA	14		84,926
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	58,547	78,685
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	42,935	78,685
ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	42,935	64,609
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	18	42,935	64,569
ACTUARIO	18	38,702	47,443
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	32,620	47,003
SUBDIRECTOR DE AREA	21	42,935	47,003
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	38,358	37,775
JEFE DE DPTO., AYUDANTE DE COMEDOR	23		38,702
TAC. JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	28,919	37,751
PROF. OPERATIVO	25	25,114	37,751
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	26	30,741	33,822
SECRETARIA	27	18,218	30,859
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	18,218	30,857
TÉCNICO OPERATIVO	29	18,218	30,857
GHOFRER	30	15,205	30,857
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	15,205	30,857
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	18,218	28,916
OFICIAL DE SERVICIOS	33	13,843	18,219

ANEXO 23.5.2. LÍMITES DE LAS PERCEPCIONES (NETA TOTAL ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL)	1		444,413	415,946	9
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		214,217	9	280,771
COORDINADOR	3		213,082	0	278,918
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		211,483	0	278,819
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL. SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS, CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		210,319	0	274,456
SRIID. DE ACUERDO DE SALA	6		287,818	0	279,087
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,398	205,096	8	274,005
SRIID. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	184,470	204,986	0	272,927
SRIID. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	9	177,231	198,924	0	267,873
SUBDIRECTOR GRAL.	10	178,942	199,936	0	278,881
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	184,478	199,936	0	270,681
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	178,842	199,936	0	270,681
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	177,847	198,718	0	297,647
SUBSECRETARIA DE ACUERDOS DE SALA	14		172,280		228,890
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	114,208	158,418		211,323
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	79,483	158,418		211,323

ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	79,483	159,419	211,323
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	19	79,483	127,228	170,710
ACTUARIO	19	70,059	89,537	123,929
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	56,447	88,779	122,856
SUBDIRECTOR DE AREA	21	79,483	88,779	122,856
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	84,548	97,451	97,030
JEFE DE DPTO., AYUDANTE DE COMEDOR	23		70,059	198,501
TAC. JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	49,629	67,965	96,936
PRDF. OPERATIVO	25	41,848	97,965	96,936
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	28	53,084	58,735	95,273
SECRETARIA	27	24,798	54,032	78,751
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	26,793	54,014	78,745
TÉCNICO OPERATIVO	29	24,798	54,014	78,745
CHOFER	30	22,344	54,014	79,745
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	22,344	54,014	76,745
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	24,798	49,829	73,192
OFICIAL DE SERVICIOS	33	10,667	24,796	42,348

ANEXO 23.5.3. REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (3RD TRANSITORIO) (pesos)

REMUNERACIÓN, NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3º TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15, 115, 116, 122, 123 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	MINISTRO (De conformidad con el artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional)
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,396,341
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,604,327
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,009,668
A) SUELDO Y SALARIOS	3,583,845
I) SUELDO BASE	651,241
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,795,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	131,759
B) PRESTACIONES	791,906
I) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 LEY DEL ISSSTE)	0
III) PRIMA VACACIONAL	85,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE). COMPENSACIÓN GARANTIZADA	588,114
V) GRATIFICACIÓN DEL FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	0
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	0
VII) AYUDA PARA DESPENSA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,246
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	36,908
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	0
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	43,165
XIV) AYUDA DE ANTEOJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	639,917

N/A: No Aplicable.



ANEXO 23.8. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ANEXO 23.6.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
CONSEJERO	2		204,683
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		100,162
VISITADOR JUDICIAL A	5		99,814
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		150,083
TITULAR DE UNIDAD	6A		100,213
VOCAL, SRIO. EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	6B		100,547
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		100,554
JUEZ DE DISTRITO	7		136,762
SRIO. TÉCNICO, COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO	8A		100,562
DIRECTOR GRAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GRAL.	8		100,754
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	8		99,799
SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO	8B	80,205	100,228
SRIO. TÉCNICO AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	69,635	69,594
VISITADOR JUDICIAL B	10		99,065
SRIO. TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DE STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA	11	88,911	98,790
COORDINADOR DE ÁREAS/ ADMINISTRADOR REGIONAL	12	78,886	81,344
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		78,018
DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISIÓN, SRIO. DE APOYO B	13		68,313
DELEGADO, SRIO. TRIBUNAL, ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		76,731
EVALUADOR	13B		74,352
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO, SRIO. DE JUZGADO	13C		70,920
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		68,313
SRIO. DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, ASESOR ESPECIALIZADO, SPS	15		65,592
SRIO. PARTICULAR DE SPS.	16		65,126
DEFENSOR PÚBLICO, ASESOR JURÍDICO	18A		62,575
ASESOR SPS, LÍDER DE PROYECTO, COORDINADOR TÉCNICO DE SPS	20	47,817	55,468
DELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		47,817
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDADO DE ARCHIVOS JUDICIALES	21B		47,323
SUBDIRECTOR DE ÁREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, COORDINADOR TÉCNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	37,728	45,658
SRIO. PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SRIO. PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		36,283
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y COORDINADOR DE MTTO. DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL	21C	30,806	35,920



LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS MENSUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, AUDITOR, DICTAMINADOR, COORDINADOR TÉCNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	30,689	32,414
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		31,718
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	25,106	29,003
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		28,608
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2		25,634
SECRETARIA	25B	22,491	
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAQUIGRAFÍA JUDICIAL PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	25		27,584
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		26,212
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		25,106
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		24,642
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	18,212	22,448
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARIA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	29		22,063
TÉCNICO OPERATIVO	29B	16,219	20,338
ANALISTA A	29A		18,199
SECRETARIA A, ANALISTA	30		17,840
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO	30		17,294
ANALISTA ADMINISTRATIVO	31		18,798
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		15,978
CHOFER	33A		15,205
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		14,792
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		14,229

ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETO ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CONSEJERO	2		444,413	415,949	0
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		214,178	0	280,784
VISITADOR JUDICIAL A	5		213,351	0	289,771
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		261,290	472,043	8
TITULAR DE UNIDAD	6A		209,407	8	288,935
VOCAL, SECRETARIO EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	8B		205,723	8	288,605
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		201,184	0	287,850
JUEZ DE DISTRITO	7		261,563	422,006	8
SECRETARIO TÉCNICO COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO	6A		195,862	0	286,027
DIRECTOR GENERAL, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GENERAL	8		189,472	0	284,347
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	9		185,472	0	287,789
SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO	8B	185,858	184,064	8	290,052
SECRETARIO TÉCNICO DE AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	168,803	167,559	0	288,154
VISITADOR JUDICIAL B	10		186,126	0	271,919
SECRETARIO TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DEL STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA	11	173,345	192,805	0	268,713
COORDINADOR DE ÁREAS, ADMINISTRADOR REGIONAL A	12	156,531	180,502		248,297
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		159,417		211,323

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNL. A. D. F. O. F. I. A. D.
10/11/2020 10:33:39 AM

DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISOR, SECRETARIO DE APOYO B	13		130,778		180,288
BELEGADO, SECRETARIO DE TRIBUNAL, AGENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		150,175		204,459
EVALUADOR	13B		145,568		197,336
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO	13C		137,925		182,670
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		130,778		180,288
SECRETARIO DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA P.J.F. ASESOR ESPECIALIZADO SPS	15		124,831		172,604
SECRETARIO PARTICULAR DE SPS	16		123,912		171,288
DEFENSOR PÚBLICO, ASESOR JURÍDICO	16A		113,209		164,085
ASESOR SPS, LÍDER DE PROYECTO, COORDINADOR TÉCNICO DE SPS	20	87,174	103,451		144,424
BELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		87,174		124,097
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDO Y ARCHIVOS JUDICIALES	21B		88,800		122,782
SUBDIRECTOR DE ÁREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, COORDINADOR TÉCNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	65,257	82,437		118,362
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SECRETARIO PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		82,031		92,610
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL	21C	54,244	83,682		91,825
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, AUDITOR, DICTAMINADOR, COORDINADOR TÉCNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	51,995	54,998		82,463

LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		53,631		80,830
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	41,848	52,188		78,382
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		49,620		73,155
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2	41,978			65,745
SECRETARIA	25B	38,931			73,155
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAQUÍGRAFA JUDICIAL, PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	25		48,700		70,805
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		40,803		67,184
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		41,848		64,428
OFICIAL ADMIN., ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		40,803		63,274
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	28,792	38,665		57,882
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARIA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	28		35,638		56,982
TÉCNICO OPERATIVO	28B	24,748	32,737		52,943
ANALISTA A	28A		28,873		47,937
SECRETARIA A, ANALISTA	28		27,716		47,072
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMIN.	30		28,628		45,528
ANALISTA ADMIN.	31		25,484		43,862
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		23,517		40,619
CHOFER	33A		22,252		38,068
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		20,879		37,654
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		18,985		36,087

ANEXO 23.6.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (pesos)

	CONSEJERO
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA 2021	3,417,171
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,583,587
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA 2020	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS:	3,525,393
i) SUELDO BASE	820,230
ii) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,818,858
iii) PRESTACIONES NOMINALES	88,307
B) PRESTACIONES	835,428
i) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	63,008
ii) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 DE LEY DEL ISSSTE)	20,330
iii) PRIMA VACACIONAL	95,475
iv) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	588,115
v) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	N/A
vi) PRIMA QUINQUENAL	18,360
vii) AYUDA PARA GESPENSA	N/A
viii) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,248
ix) SEGURO DE VIDA COLECTIVO	148
x) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	13,821
xi) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
xii) AYUDA ECONÓMICA PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES	N/A
xiii) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	7,828
xiv) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE / PADRE	N/A
C) PAGO POR RIESGO	839,917

ANEXO 23.7. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.7.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		202,885
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3		153,154
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN., COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		100,702
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		100,019
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F. Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	6		99,329
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	89,432	99,369
SECRETARIO DE TESIS	8		98,949
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	89,054	98,949
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		98,385
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	80,347	89,908
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	71,720	91,765
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	55,858	75,073
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		81,703
SRIO. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TICS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SRIO. TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SRIO. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SRIO. AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	41,138	59,823

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SRIO. AUXILIAR	19		48,037
ACTUARIO	17		45,390
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	18	37,100	44,915
ACTUARIO REGIONAL Y SRIO. DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19		40,995
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DPTO., SRIO. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	29,805	35,700
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	29,605	32,545
PROFESIONAL OPERATIVO	22	24,812	32,499
SRIA. DE MAGISTRADO REGIONAL Y SRIA. DE PONENCIA	23	27,442	31,749
SECRETARÍA	24	19,619	27,729
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	17,405	27,715
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	14,400	24,016
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	15,009	21,502
OFICIAL DE APOYO	28	14,400	21,502
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	13,380	15,391

ANEXO 23.7.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETOS ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		444,413	379,894	8
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3		313,860	426,409	6
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN., COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		220,669	0	277,619
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		219,960	8	275,735
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	9		217,257	0	273,658
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,180	205,755	0	272,658
SECRETARIO DE TESIS	9		201,852	0	269,586
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	181,666	201,852	0	269,586
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		198,569	0	267,618
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	191,761	184,467		241,332
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	142,586	184,851		246,962
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	107,545	150,132		196,929
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		120,051		158,963

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
SRIO. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TICS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SRIO, TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SRIO. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SRIO. AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	75,000	113,905		151,398
SRIO. AUXILIAR.	18		85,968		119,706
ACTUARIO	17		84,534		114,987
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	19	85,982	83,458		113,726
ACTUARIO REGIONAL Y SRIO. DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19		74,884		103,309
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DPTO., SRIO. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	51,358	63,592		88,061
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	51,358	56,918		88,267
PROFESIONAL OPERATIVO	22	41,859	56,866		88,159
SRIO. DE MAGISTRADO REGIONAL Y SRIO DE PONENCIA	23	47,811	55,489		78,408
SECRETARIA	24	29,563	48,132		68,620
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	27,452	48,181		68,583
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	21,355	48,429		58,367
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	24,359	35,361		53,321
OFICIAL DE APOYO	28	21,355	35,361		53,321
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	19,474	23,384		38,288

ANEXO 23.7.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS MAGISTRADOS DE SALA SUPERIOR (pesos)

	MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR 2021
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,421,002
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,579,736
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS	3,532,889
I) SUELDO BASE	651,242
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,785,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	95,802
B) PRESTACIONES	839,447
I) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	63,000
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 DE ISSSTE)	20,330
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	588,115
V) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	NA
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	19,360
VII) AYUDA PARA DESPESA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,248
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	146
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	25,768
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	8
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	NA
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	8
XIV) AYUDA DE ANTEOJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	826,402



ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANEXO 23.8.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO						
CONSEJERO PRESIDENTE/CONSEJEROS ELECTORALES	92,427	102,897	38,492	40,547	128,918	143,244
SECRETARIO EJECUTIVO	91,502	101,668	38,516	40,573	128,018	142,242

1/ Miembros permanentes del Consejo General del Instituto de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

ANEXO 23.8.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
1 Consejero Presidente, Consejeros Electorales	92,427	102,897	38,492	40,547	128,918	143,244
Secretario Ejecutivo	91,502	101,668	38,516	40,573	128,018	142,242
2 Titular del Órgano Interno de Control, Directores Ejecutivos, Titulares de Unidad Técnica, Titulares de Unidad (OIC) y puestos homólogos	91,477	101,642	38,540	40,601	128,018	142,242
3 Coordinadores del Registro Federal de Elecciones, Titulares de Unidad Técnica, Vocales Ejecutivos Locales, Directores de Área y puestos homólogos	90,427	100,475	38,688	40,766	127,116	141,248
4 Directores de Área, Coordinadores y puestos homólogos	89,757	99,730	37,359	41,510	127,116	141,240
5 Vocales Secretarios en JL, Vocales Locales, Vocales Ejecutivos y Secretarios Distritales, Subdirectores de Área y puestos homólogos	45,858	66,571	13,952	29,855	59,809	99,528
8 Vocales Distritales, Jefes de Departamento y puestos homólogos	28,432	44,764	8,889	20,092	38,321	64,876
Personal operativo:						
7 Técnico Operativo	10,238	28,289	4,649	14,424	14,888	42,714

ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos	7,142		
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL GA1 AL LA2	7,142		13,300

Corresponde a la prestación de vales de fin de año del ejercicio 2020 para el personal técnico operativo, en razón de que es la única que se tiene la absoluta certeza de que lo recibirá.

El resto de las prestaciones que se otorgan, es para el personal que se hace acreedor a las mismas o bien, que pueden ejercer el derecho a su obtención. Por ejemplo, el apoyo que da para la adquisición de lentes, que se otorga cada tres años o el apoyo (becas) para estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Acumular todos los posibles conceptos puede generar una lectura equivocada, ya que se podría interpretar que son percepciones extraordinarias que efectivamente recibe el personal, cuando no es así.

Derivado del punto anterior, la H. Cámara de Diputados, la sociedad en general y los propios funcionarios del Instituto, podrían tener una percepción que no corresponde con la realidad.

ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)

CONSEJERO PRESIDENTE / CONSEJEROS ELECTORALES

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL META (RTA)	1,718,926
- Impuesto sobre la renta retenido *	758,409
Percepción bruta anual	2,477,335
a) Sueldos y salarios:	2,008,448
i) Sueldo base	374,979
ii) Compensación garantizada	1,633,467
b) Prestaciones:	468,889
i) Aportaciones a seguridad social	40,153
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	12,956
iii) Prima vacacional	10,416
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	342,455
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,529
vi) Ayuda para despensa	6
vii) Seguro de vida institucional	37,959
viii) Seguro colectivo de retiro	101
ix) Seguro de gastos médicos mayores	23,319
x) Seguro de separación individualizado	0

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de Enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	131,537
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	45,862
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	177,039
a) Sueldos y salarios:	167,371
i) Sueldo base	31,248
ii) Compensación garantizada	136,122
b) Prestaciones:	9,668
i) Aportaciones a seguridad social	3,346
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,080
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	127
iv) Ayuda para despensa	0
v) Seguro de vida institucional	3,163
vi) Seguro colectivo de retiro	8
vii) Seguro de gastos médicos mayores	1,843
viii) Seguro de separación individualizado	5

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNDIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.8.3.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)

SECRETARIO EJECUTIVO.

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,706,905
Impuesto sobre la renta retenido *	742,754
Percepción bruta anual	2,449,659
a) Sueldos y salarios:	1,981,159
i) Sueldo base	334,476
ii) Compensación garantizada	1,646,683
b) Prestaciones:	468,500
i) Aportaciones a seguridad social	42,298
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	13,847
iii) Prima vacacional	6,291
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	338,721
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,611
vi) Ayuda para despesa	2,819
vii) Seguro de vida institucional	37,444
viii) Seguro colectivo de retiro	107
ix) Seguro de gastos médicos mayores	24,584
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.D REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LIQUIDA MENSUAL NETA	138,659
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	44,644
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	175,304
a) Sueldos y salarios:	165,087
i) Sueldo base	27,873
ii) Compensación garantizada	137,224
b) Prestaciones:	10,207
i) Aportaciones a seguridad social	3,525
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,137
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	134
iv) Ayuda para despesa	235
v) Seguro de vida institucional	3,120
vi) Seguro colectivo de retiro	9
vii) Seguro de gastos médicos mayores	2,047
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

ANEXO 23.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANEXO 23.9.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
PRESIDENTE DE LA CNDH		108,999		30,158		140,157
VISITADOR/A GENERAL, VISITADOR/A GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADOR/A GENERAL DE SRAJ, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARÍA EJECUTIVA		108,811		29,900		138,711
OFICIAL MAYOR		108,075		29,740		137,815
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		106,979		29,502		136,480
DIRECTOR/A GENERAL Y HOMÓLOGOS/AS	104,281	106,278	27,225	29,350	131,519	135,628
DIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	82,929	92,429	13,717	22,390	86,937	104,919
VISITADOR/A ADJUNTO/A	26,179	51,162	6,058	14,338	36,234	65,500
SUBDIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	28,178	51,162	9,058	14,338	36,234	65,500
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS/AS	27,130	35,243	7,872	10,802	34,802	45,745
Personal de Enlace y Operativo						
OPERATIVO/A	12,663	27,090	4,071	10,023	18,734	37,113

Este anexo refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales aplicables a las personas servidoras públicas durante 2021, en función del puesto que ocupen. Contemplan las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador/a.

A fin de cumplir con el desglose de remuneraciones que establece el artículo 75 Constitucional, se presentan los límites mínimos y máximos en términos netos por concepto de sueldos y salarios y de prestaciones, diferenciados por el tipo de servidores/as públicos/as a los que aplican los límites correspondientes.

ANEXO 23.9.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario Máximo
Total Puestos	1,779	
Personal de mando:	1,058	
PRESIDENTE DE LA CNDH	1	
VISITADOR/A GENERAL, VISITADOR/A GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADOR/A GENERAL DE SRAJ, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARÍA EJECUTIVA	11	
OFICIAL MAYOR	1	
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	
DIRECTOR/A GENERAL Y HOMÓLOGOS/AS	28	
DIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	129	19,895
VISITADOR/A ADJUNTO/A	523	15,163
SUBDIRECTOR/A DE ÁREA Y HOMÓLOGOS/AS	189	15,163
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS/AS	173	13,049
Personal Operativo	723	
OPERATIVO/A	723	25,490



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.9.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,716,463
Impuesto sobre la renta retenido	685,713
Percepción bruta anual	2,402,176
I. Percepciones ordinarias:	2,402,176
a) Sueldos y salarios:	1,910,735
Sueldo base	380,308
Compensación Garantizada	1,550,426
b) Prestaciones:	491,442
i) Aportaciones a seguridad social	83,326
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	53,076
iv) Gratificación de fin de año	321,547
v) Prima quinquenal	3,420
vi) Ayuda para despensa	3,600
vii) Seguro de vida	26,143
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago extraordinario	

ANEXO 23.10. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

ANEXO 23.10.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Comisionada Presidenta de la Comisión		115,149		28,096		143,244
Comisionado		114,312		27,930		142,242
Jefe de Unidad		113,402		20,637		140,236
Director General/ Titular del Órgano Interno de Control		111,153		27,062		138,235
Director Ejecutivo	74,962	109,514	20,806	27,584	65,768	137,098
Coordinador General	46,620	76,760	14,174	21,246	61,093	100,006
Subcoordinador General	32,990	44,306	11,235	13,315	44,226	57,701
Coordinador de Áreas		29,551		10,630		40,161
Jefe de Áreas	21,447	28,475	6,091	10,286	30,508	38,761
Personal de Entace	12,757	19,034	7,385	9,505	20,142	27,539
Personal Operativo	9,005	9,700	6,361	9,702	17,466	16,408

ANEXO 23.10.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA COMISIONADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (pesos)

	Remuneración Comisionada Presidenta COFECE
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido	714,582
Percepción bruta anual	2,433,508
I. Percepciones ordinarias:	2,433,508
a) Sueldos y salarios:	1,981,600
i) Sueldo base	234,158
ii) Compensación garantizada	1,747,442
b) Prestaciones:	451,908
i) Aportaciones a seguridad social	47,171
ii) Ahorro solidario	15,221
iii) Prima vacacional	6,505
iv) Aguinaldo (sueldo base)	38,166
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	283,474
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	1,535
vii) Ayuda para despesa	7,533
viii) Vales de despesa	23,031
ix) Seguro de vida institucional	28,931
x) Seguro colectivo de retiro	340

ANEXO 23.10.3. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos			
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP1D-OP1A ¹	17	-	229,500
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP1D-OP1A ²	17		62,815

1/ Corresponde a la prestación denominada medidas de fin de año (vales de despesa).

2/ Corresponde a la prestación denominada ayuda para útiles escolares (efectivo).

ANEXO 23.11. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ANEXO 23.11.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Banda Salarial (Nivel)	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidente	27		164,780		38,484		143,244
Comisionado	28		103,970		38,272		142,242
Coordinador Ejecutivo	25		103,499		37,742		141,240
Titular de Unidad	25		102,747		37,491		140,239
Secretario Técnico del Pleno	25		102,747		37,491		140,238
Coordinador General	25		102,553		38,684		139,237
Director General	23 23	91,269	101,410	33,143	36,625	124,412	138,235
Director General Adjunto	21 22	85,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Investigador	21 22	85,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Director de Área	19 21	34,607	71,909	15,158	27,135	49,764	99,045
Subdirector de Área	18 18	21,605	42,643	10,588	18,649	32,192	59,293
Jefe de Departamento	14 16	14,975	29,644	8,576	12,505	23,551	42,229
Técnico	10 17	8,358	33,836	8,237	17,625	12,585	51,261
Enlace	11 13	8,121	18,162	6,371	6,618	14,492	24,780

- La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones por Sueldos y Salarios, y por Prestaciones, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas.

- No se incluyen prestaciones en las que el personal puede o no ser acreedor a éstas y ejercer su derecho, tales como: ayuda para anteojos, apoyo de guardería o preescolar y apoyos institucionales para que realicen estudios que les permitan incrementar o concluir su formación académica, o especializarse en temas relacionados con sus funciones.

- La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNRECEPCIONADO
17/11/2020 14:30

ANEXO 23.11.2. LÍMITES DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS NETAS TOTALES (pesos)

Nivel	Banda Salarial		Pago Extraordinario Anual Unitario*	
	Nivel		Mínimo	Máximo
	Mínimo	Máximo		
Presidente		27		
Comisionado		26		
Coordinador Ejecutivo		25		82,356
Titular de Unidad		25		75,847
Secretario Técnico del Pleno		25		75,847
Coordinador General		25		75,089
Director General	23	23	59,800	68,872
Director General Adjunto	21	22	39,045	50,540
Investigador	21	22	39,045	50,540
Director de Área	19	21	20,784	43,148
Subdirector de Área	18	19	90,748	179,103
Jefe de Departamento	14	16	82,994	124,504
Técnico	10	17	28,705	141,273
Ente	11	13	34,107	67,882

*El pago de la percepción extraordinaria incluye:

- El importe correspondiente al estímulo al desempeño sobresaliente, contenida en el artículo 34, inciso c), de las Disposiciones por las que se establece el Sistema de Servicio Profesional del Instituto Federal de Telecomunicaciones y;

- El importe correspondiente al pago extraordinario por riesgo, que el Instituto podrá otorgar al personal con nivel de ente; técnico; jefe de departamento y subdirector, que realice labores en campo, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad.

Podrá autorizarse y realizarse el pago de la percepción extraordinaria únicamente en un monto que, sumado a la percepción ordinaria, no supere el monto de la remuneración del Presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 127, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 23.11.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (pesos)

Nivel Jerárquico: Comisionado (Grado 27)	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ANUAL TOTAL NETA (RTA)	1,719,926
Impuesto sobre la renta retenido *	725,297
Percepción bruta anual	2,444,213
I. Percepciones ordinarias:	2,444,213
a) Sueldos y salarios:	1,984,099
i) Sueldo base	247,744
ii) Compensación garantizada	1,718,356
b) Prestaciones:	480,114
i) Aportaciones de seguridad social	49,908
ii) Ahorro Solidario	16,184
iii) Prima Vacacional	27,279
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,786
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	180,708
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	0
vii) Ayuda para despensa	5,379
viii) Vales de despensa	14,276
ix) Seguro de vida institucional	27,488
x) Seguro Colectivo de Retiro	337
xi) Seguro de Gastos Médicos Mayores	20,030
xii) Seguro de Separación Individualizado	0
xiii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	92,809
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Componente salarial variable asociado a la gestión del desempeño	

*/ El cálculo es efectuado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 23.12. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ANEXO 23.12.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Nivel		Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando y Enlace / Homólogos								
Comisionado Presidente/Comisionados		HB1		107,708		28,290		133,999
Secretario		KB2		98,273		22,834		121,108
Director General/Jefe de Potencia/Contralor		KA4		92,125		21,501		113,625
Secretario de Potencia	MD1	MD5	78,589	88,874	18,658	20,457	87,248	107,132
Director de Área	MC2	MC5	59,336	74,709	14,007	17,534	73,343	92,243
Subdirector de Área	NC2	MB2	37,672	53,281	9,388	12,520	47,260	65,782
Jefe de Departamento/ Consultor/Auditor	OC3	NB2	23,975	32,784	8,961	8,418	30,935	41,203
Enlace/Proyectista/Asesor	PC1	OB8	14,758	21,857	5,269	8,820	20,025	28,477
Secretaria	PC3	OD3	18,824	24,338	5,838	7,102	22,460	31,438
Chofer	OB1	OB5	13,378	20,896	5,158	8,391	18,536	27,287
Auxiliar Administrativo	PA1	PA5	11,774	18,377	4,597	5,431	16,370	21,808

1/ La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020.

ANEXO 23.12.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE / COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA	1,614,506
Impuesto sobre la renta retenido*	640,925
Percepción ordinaria bruta anual	2,255,431
a) Sueldos y salarios:	1,818,477
i) Sueldo base	284,006
ii) Compensación garantizada	1,534,471
b) Prestaciones:	436,954
i) Aportaciones a seguridad social	82,053
ii) Ahorro solidario	18,480
iii) Prima vacacional	101,027
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,501
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	191,809
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vii) Ayuda para despensa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	13,638
ix) Seguro colectivo de retiro	425.4

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.12.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE / COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	105,952
Impuesto sobre la renta retenido* y deducciones de seguridad social	48,793
Percepción ordinaria bruta mensual	152,745
a) Sueldos y salarios:	151,540
i) Sueldo base	23,067
ii) Compensación garantizada	127,873
b) Prestaciones:	1,205
i) Prima quinquenal (antigüedad)	285
ii) Ayuda para despensa	885
iii) Seguro colectivo de retiro	35

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 23.13. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 23.13.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Fiscales	33,703	110,788	7,490	28,214	41,183	139,000
Policía de Investigación	27,835	48,678	5,589	18,664	32,624	56,343
Analistas	11,738	45,733	3,453	10,197	15,191	55,930
Auxiliares	13,203	25,821	3,913	8,868	16,816	32,489
Peritos	28,227	47,777	6,128	11,990	35,355	59,767
Personal Profesional						
Mando Sustantivo	17,822	109,850	5,185	27,740	23,108	137,698
Pilotos	28,911	37,492	9,302	9,478	35,213	48,969
Apoyo Aéreo	13,499	31,173	3,867	7,592	17,366	38,765
Protección a Personas	33,728	53,225	6,608	10,799	48,336	64,024
Apoyo a la Investigación	47,592	54,501	8,694	13,942	57,286	68,442
Personal Técnico						
De Protección a Instalaciones Estratégicas	13,281	28,859	3,612	7,603	18,893	36,462
Personal Administrativo						
Mando Administrativo	17,822	109,850	5,185	27,740	23,108	137,698
Administradores	17,267	86,185	4,377	14,675	21,664	60,860
Técnicos Especializados	9,604	17,161	3,742	6,147	13,348	23,338
Operativo Confianza	11,728	13,827	9,212	11,002	20,948	24,829
Operativo Base	11,806	13,034	9,181	10,816	20,997	23,852

ANEXO 23.13.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA ANUAL NETA	1,673,281
Impuesto sobre la renta retenido	678,234
Percepción ordinaria mensual	2,351,495
a) Sueldos y salarios:	1,814,432
i) Sueldo base	433,656
ii) Compensación garantizada	1,480,776
b) Prestaciones:	437,063
i) Aportaciones a seguridad social	83,807
ii) Ahorro Solidario	
iii) Prima vacacional	12,048
iv) Aguinaldo (sueldo base)	73,372
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	250,548
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despensa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	27,045
ix) Seguro colectivo de retiro	425

ANEXO 23.13.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	110,786
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social*	48,851
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	160,421
a) Sueldos y salarios:	158,538
i) Sueldo base	38,138
ii) Compensaciones adicionales por servicios especiales	123,398
b) Prestaciones:	885
i) Prima quinquenal (antigüedad)	
ii) Ayuda para despensa	885
iii) Seguro colectivo de retiro	
*Deducciones personales de seguridad social y seguros	2,784

ANEXO 23.14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

ANEXO 23.14.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidencia del Instituto		109,457		13,003		122,460
Vicepresidencia		109,457		13,003		122,460
Dirección General		106,757		12,585		119,352
Coordinación General / Dirección General Adjunta	86,044	104,147	10,240	12,201	96,284	116,348
Dirección de Área	48,824	85,409	6,206	10,129	55,138	95,538
Subdirección de Área	30,100	45,820	4,197	5,770	34,297	51,590
Jefatura de Departamento	20,047	29,898	3,403	4,182	24,350	34,080
Personal de Enlace	14,297	18,872	2,780	3,174	17,077	21,846
Personal Operativo	8,354	11,478	5,095	5,183	13,449	18,661

Las percepciones ordinarias netas incluyen los ingresos que reciben los servidores públicos independientemente de su periodicidad o fecha de pago. Asimismo, contempla la aplicación de las disposiciones fiscales y de seguridad social.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.14.2 LÍMITES DE PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

Tipo de personal	Pago Extraordinario Anual Unitario Máximo
Presidencia del Instituto	
Vicepresidencia	
Dirección General	31,535
Coordinación General / Dirección General Adjunta	32,133
Dirección de Área	33,985
Subdirección de Área	64,502
Jefatura de Departamento	66,263
Personal de Enlace	100,527
Personal Operativo	211,584

Las percepciones extraordinarias se otorgan al personal que se hace acreedor a las mismas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable.

Las percepciones extraordinarias netas incluyen la aplicación de las disposiciones fiscales.

ANEXO 23.14.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HC3 \	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,617,806
Impuesto sobre la renta	633,088
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,250,894
a) Sueldos y salarios:	1,699,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	351,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,620
II) Ahorro solidario	20,330
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,691
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,336
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despensa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,589
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de separación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 23.14.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HA1	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,617,806
Impuesto sobre la renta	633,088
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,250,894
a) Sueldos y salarios:	1,699,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	351,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,620
II) Ahorro solidario	20,330
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,691
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,336
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despensa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,588
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de separación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 24. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DE LOS RAMOS 25 Y 33 (pesos)

	Incremento a las percepciones	Creación de plazas *	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total	
Ramos Generales					
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	8,664,222,852	850,000,000	6,748,324,832	18,262,547,484
	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México	878,106,603	0	2,827,202,129	3,603,310,732
	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,581,188,257	050,000,000	4,067,841,027	12,499,029,284
	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	106,625,992	0	53,281,476	160,207,468
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,636,307,341	0	427,625,920	2,266,933,261
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,839,307,341	0	427,625,920	2,266,933,291

1/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓNSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

08 Agricultura y Desarrollo Rural
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
10 Economía
Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Programa de Becas Elisa Acuña
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa Nacional de Inglés
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
12 Salud
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Fortalecimiento a la atención médica
Calidad en la Atención Médica
14 Trabajo y Previsión Social
Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Vivienda Social
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Programa Nacional de Reconstrucción
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
18 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-BIENESTAR
20 Bienestar
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Seguro de vida para jefas de familia
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
47 Entidades no Sectorizadas
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa para el Bienestar Integral de las Poblaciones Indígenas
48 Cultura
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa de Apoyo a la Cultura
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales



ANEXO 28. PRINCIPALES PROGRAMAS

04 Gobernación
Política y servicios migratorios
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Registro e Identificación de Población
Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas
08 Agricultura y Desarrollo Rural
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Adquisición de leche nacional
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
09 Comunicaciones y Transportes
Proyectos de construcción de carreteras
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales
10 Economía
Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
Servicios de Educación Media Superior
Servicios de Educación Superior y Posgrado
Desarrollo Cultural
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Educación Inicial y Básica Comunitaria
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Subsidios para organismos descentralizados estatales
Programa de Cultura Física y Deporte
La Escuela es Nuestra
12 Salud
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
Atención a la Salud
Prevención y atención contra las adicciones
Salud materna, sexual y reproductiva
Fortalecimiento a la atención médica
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Programa de vacunación
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
14 Trabajo y Previsión Social
Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa Nacional de Reconstrucción
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Programa de Vivienda Social

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Protección Forestal
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
20 Bienestar
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
21 Turismo
Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros
36 Seguridad y Protección Ciudadana
Administración del sistema federal penitenciario
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado
47 Entidades no Sectorizadas
Proyectos de construcción de puertos
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
48 Cultura
Desarrollo Cultural
Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Servicios educativos culturales y artísticos

ANEXO 27. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (millones de pesos)

Educación ^{1/}	4.5
Salud	333.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,126.8
Cultura	333.3
TOTAL	1,800.0

^{1/} Lo que equivale a la cantidad de 4,512,907

ANEXO 28. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERO (pesos)

ESTADO	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS
No Distribuido Geográficamente	8,231,338,063	1,504,834,523
Oaxaca	0	2,500,000,000
TOTAL	8,231,338,063	4,004,834,523

ANEXO 29. SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (pesos)

	MONTO
U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales (UR 511). ^v	65,033,628,328
Aguascalientes	904,024,288
Baja California	1,781,554,054
Baja California Sur	510,108,405
Campeche	1,008,802,837
Chiapas	1,451,057,061
Chihuahua	2,122,981,492
Coahuila	1,508,719,580
Colima	1,843,277,530
Durango	1,448,422,243
Estado de México	2,300,988,424
Guanajuato	1,925,612,078
Guerrero	2,084,821,759
Hidalgo	1,474,738,548
Jalisco	8,375,107,035
Michoacán	2,109,421,784
Morélos	1,321,861,587
Nayarit	1,528,563,824
Nuevo León	5,778,348,318
Oaxaca	1,272,519,453
Puebla	4,577,424,284
Querétaro	1,508,414,840
Quintana Roo	321,104,838
San Luis Potosí	2,125,656,394
Sinaloa	4,824,979,265
Sonora	2,212,474,568
Tabasco	1,328,220,743
Tamaulipas	2,388,097,324
Tlaxcala	684,101,387
Veracruz	2,746,583,989
Yucatán	2,111,337,324
Zacatecas	1,832,304,473

1/ Los recursos previstos para las Entidades Federativas de Baja California Sur y Campeche se indican en el presente anexo.

ANEXO 29.1 CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES (pesos)

	MONTO
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Universidades interculturales)	87,395,905
Universidad Intercultural de Chiapas	11,024,449
Universidad Intercultural del Estado de México	14,581,044
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	13,319,638
Universidad Intercultural del Estado de Puebla	9,247,692
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	8,409,635
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero	3,604,134
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	12,238,277
Universidad Intercultural Veracruzana	1,800,293
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	11,192,785
Universidad Autónoma Intercultural del Estado de Hidalgo	1,008,008
Universidad Autónoma Intercultural de San Luis Potosí	1,000,000



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 30. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ACCIONES EN MATERIA DE AGUA (pesos)

Estado	Subsidios Administración del Agua y Agua Potable	Subsidios Hidroagrícolas
Aguascalientes	18,145,952	8,707,050
Baja California	52,173,387	32,407,850
Baja California Sur	32,873,778	10,348,259
Campeche	41,315,599	26,348,421
Coahuila	32,788,098	18,805,891
Colima	14,587,386	19,138,817
Chiapas	92,938,869	137,393,077
Chihuahua	60,850,648	44,350,085
Ciudad de México	71,831,283	10,884,486
Durango	58,447,450	18,843,578
Guanajuato	90,284,847	93,098,027
Guerrero	115,986,720	105,086,267
Hidalgo	57,635,270	48,125,098
Jalisco	78,179,791	35,838,931
Estado de México	172,720,537	33,944,134
Michoacán	78,591,884	70,547,850
Morelos	57,223,105	30,191,413
Nayarit	39,448,895	13,248,217
Nuevo León	91,835,066	18,363,969
Oaxaca	83,684,948	56,153,052
Puebla	93,814,181	74,847,539
Querétaro	48,141,093	13,048,725
Quintana Roo	37,811,073	48,003,797
San Luis Potosí	70,858,033	50,883,078
Sinaloa	56,080,183	149,347,857
Sonora	63,963,658	81,112,726
Tabasco	57,580,159	34,238,511
Tamaulipas	68,418,502	100,033,121
Tlaxcala	17,539,849	5,325,424
Veracruz	112,915,238	97,903,190
Yucatán	49,029,889	75,305,797
Zacatecas	43,838,796	11,893,826
No Distribuible Geográficamente	90,876,352	0
TOTAL	2,092,169,336	1,569,322,223

ANEXO 31: ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN (pesos)

Ramo / Denominación Unidad Responsable	Ejes				MONTO
	1. Combatir la corrupción y la impunidad	2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder	3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad	4. Involucrar a la sociedad y el sector privado	
Total	2,483,899,792	653,494,939	-66,670,775	61,875,557	3,315,741,103
03 Poder Judicial	575,702,108	489,435,347		35,608,090	1,504,745,545
Consejo de la Judicatura Federal	975,702,106	488,435,347		39,608,090	1,504,745,545
06 Hacienda y Crédito Público	334,836,368				334,836,368
Unidad de Inteligencia Financiera	170,010,527				170,010,527
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	89,626,079				89,626,079
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	8,162,139				8,162,139
Servicio de Administración Tributaria	67,037,623				67,037,623
27 Función Pública	856,387,150	187,728,315	37,977,210	35,234,146	1,116,326,820
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	67,254,610				67,254,610
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	7,022,657	13,471,771	16,123,568	7,033,361	45,651,355
47 Entidades no Sectorizadas	119,965,598	2,858,506	570,000		123,395,104
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	119,965,506	2,858,506	570,000		123,395,104
49 Fiscalía General de la República	123,531,300				123,531,300
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	123,531,300				123,531,300

ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)

	PROYECTO PEF	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REASIGNACIONES	PEF APROBADO
A: RAMOS AUTÓNOMOS	137,089,187,548	2,184,400,000	8	-2,184,400,000	134,904,787,548
Gasto Programable					
01 Poder Legislativo	14,918,805,390	100,000,000	0	-100,000,000	14,818,805,390
Cámara de Senadores	4,085,778,000	5,000,000	0	-5,000,000	4,080,778,000
Cámara de Diputados	8,377,000,000	95,000,000	0	-95,000,000	8,282,000,000
Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390	0	0	0	2,453,827,390
03 Poder Judicial	72,429,339,460	1,130,000,000	0	-1,130,000,000	71,299,339,460
Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,159,436,565	00,000,000	0	-00,000,000	5,080,436,565
Consejo de la Judicatura Federal	64,044,822,866	866,000,000	0	-866,000,000	63,178,822,865
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,225,280,000	195,000,000	0	-195,000,000	3,030,280,000
27 Instituto Nacional Electoral	27,689,801,594	670,000,000	0	-670,000,000	26,019,801,594
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,678,906,610	0	0	0	1,678,906,610
41 Comisión Federal de Competencia Económica	588,670,029	0	0	0	588,670,029
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000	0	0	0	1,510,000,000
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	918,735,647	13,400,000	0	-13,400,000	905,335,647
49 Fiscalía General de la República	17,346,009,610	71,000,000	0	-71,000,000	17,275,009,610
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL, ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	7,744,100,001	0	0	0	7,744,100,001
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,744,100,001	0	0	0	7,744,100,001

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,888,618,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,888,618,680
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,888,618,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,888,618,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS	1,244,235,385,522	152,914,970	2,381,314,970	2,087,400,000	1,248,242,788,522
Gasto Programable					
02 Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292	0	0	0	805,024,292
04 Gobernación	5,800,177,912	0	53,048,789	53,048,789	5,853,226,701
05 Relaciones Exteriores	8,121,231,865	0	0	0	8,121,231,865
06 Hacienda y Crédito Público	20,228,538,183	0	0	0	20,228,538,183
07 Defensa Nacional	112,557,168,656	0	0	0	112,557,168,656
08 Agricultura y Desarrollo Rural	49,291,453,404	0	0	0	49,291,453,404
09 Comunicaciones y Transportes	55,919,581,344	0	0	0	55,919,581,344
10 Economía	8,538,472,433	0	0	0	8,538,472,433
11 Educación Pública	338,046,527,940	349,402,053	153,914,970	-195,487,063	337,851,440,047
12 Salud	145,414,570,947	0	0	0	145,414,570,947
13 Marina	35,476,715,511	0	0	0	35,476,715,511
14 Trabajo y Previsión Social	23,799,853,830	0	0	0	23,799,853,830
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	18,624,657,151	4,512,907	0	-4,512,907	18,620,344,244
19 Medio Ambiente y Recursos Naturales	30,948,102,349	0	400,000,000	400,000,000	31,348,102,349
18 Energía	47,080,243,165	0	0	0	47,080,243,165
39 Bienestar	189,970,648,205	0	1,754,231,211	1,754,351,211	191,724,999,417
21 Turismo	38,613,394,051	0	0	0	38,613,394,051
27 Función Pública	1,388,004,830	0	0	0	1,388,004,830
31 Tribunales Agrarios	600,870,640	0	0	0	600,870,640
38 Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,688,472	0	0	0	63,441,688,472
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,688	6	0	0	141,450,688
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028	0	0	0	26,573,104,028
45 Comisión Reguladora de Energía	253,348,972	9	0	0	253,348,972
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,787,587	0	0	0	219,787,587
47 Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953	0	0	0	12,213,921,953
48/ Cultura	13,985,117,395	0	0	0	13,985,117,395
C: RAMOS GENERALES	3,430,448,780,272	9	200,000,060	200,000,000	3,430,648,780,272
Gasto Programable					
19 Aportaciones a Seguridad Social	961,026,461,285	0	0	0	961,026,461,285
23 Provisiones Salariales y Económicas	127,486,744,341	0	0	0	127,486,744,341
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,254,347,961	0	200,000,000	200,000,000	58,454,347,961
Provisiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	18,262,547,484	0	200,000,000	200,000,000	18,262,547,484
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,487	0	0	0	42,191,800,487
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,842,680,387	0	0	0	777,842,680,387
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	488,057,264,138	0	0	0	488,057,264,138
Servicios Personales	371,838,439,228	9	0	0	371,838,439,228
Otros de Gasto Corriente	10,749,807,402	0	0	0	10,749,807,402
Gasto de Operación	14,929,407,533	0	0	0	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,999,976	9	0	0	10,741,999,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	189,501,268,984	0	0	0	189,501,268,984

ACORDA
30443639 AL 20DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,408,852	0	0	0	84,779,408,852
Entidades	10,278,495,240	0	0	0	10,278,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,502,914,612	0	0	0	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,882,138,793	0	0	0	85,882,138,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,283,323,958	0	0	0	27,283,323,958
Asistencia Social	12,550,323,021	0	0	0	12,550,323,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,937	0	0	0	14,732,994,937
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,718,222,563	0	0	0	7,718,222,563
Educación Tecnológica	4,953,287,509	0	0	0	4,953,287,509
Educación de Adultos	2,765,955,054	0	0	0	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	7,885,818,328	0	0	0	7,885,818,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	46,924,635,800	0	0	0	46,924,635,800
Gasto No Programable					
24 Deuda Pública	541,084,614,451	0	0	0	541,084,614,451
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	921,402,640,917	0	0	0	921,402,640,917
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Sanamiento Financiero	0	0	0	0	0
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,098,200,000	0	0	0	32,098,200,000
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900	0	0	0	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	800	0	0	0	800
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,900	0	0	0	11,245,900,900
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO	1,276,212,398,584	0	0	0	1,276,212,398,584
Gasto Programable					
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,525,286,432	0	0	0	373,525,286,432
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	901,687,110,152	0	0	0	901,687,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	1,133,381,449,680	0	0	0	1,133,381,449,680
Gasto Programable					
TYT Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,598,071,186	0	0	0	544,598,071,186
TVV Comisión Federal de Electricidad	417,145,382,955	0	0	0	417,145,382,955
Gasto No Programable					
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:	171,657,985,839	0	0	0	171,657,985,839
TYT Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,319,871	0	0	0	141,758,319,871
TVV Comisión Federal de Electricidad	29,799,665,968	0	0	0	29,799,665,968
Nota: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	935,184,669,265	0	0	0	935,184,669,265
GASTO NETO TOTAL	6,296,736,200,900	2,561,314,970	2,561,314,970	0	6,296,736,200,900

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 33. AMPLIACIONES AL RAMO 04 GOBERNACIÓN (pesos)

	MONTO
Ramo 04 Gobernación	53,048,789
E066 Atención a refugiados en el país *	3,857,050
N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	3,857,050
P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes *	10,938,000
P00 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	10,938,000
E012 Registro e Identificación de Población *	38,253,739
941 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad	38,253,739

*/ Monto incluido en el Anexo 19 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes.

ANEXO 34. AMPLIACIONES AL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (pesos)

	MONTO
RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	400,000,000
B00 Comisión Nacional del Agua	400,000,000
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	200,000,000
K129 Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas	200,000,000

ANEXO 35. AMPLIACIONES AL RAMO 20 BIENESTAR (pesos)

	MONTO
RAMO: 20 Bienestar	1,754,351,211
S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	596,351,211
S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	1,158,000,000

ANEXO 36. AMPLIACIONES AL RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

	MONTO
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	
I002 Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) -V	200,000,000
700 Unidad de Administración y Finanzas	200,000,000

*/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.

ANEXO 37. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)

	MONTO
Ramo 11 Educación Pública	163,914,970
U281 Programa Nacional de Reconstrucción	4,512,907
515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación -V	149,402,063

*/ Los recursos proceden del programa presupuestario U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación del Ramo 11 Educación Pública.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.-Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaría de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el "Día Nacional de la Filosofía". 2

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. 2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Lley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 4

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 2020, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2020 y las participaciones del fondo de fiscalización y recaudación del tercer trimestre de 2020. 7

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1722 a la ciudadana Lydía Georgina Méndez Arellano, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Guanajuato como aduana de adscripción. 53

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1825 a favor de la ciudadana Yvette Bazán Muzquiz, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como aduana de adscripción. 54

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 55

Oficio mediante el cual se autoriza a Avia Seguros, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros. 57

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Circular por la que se comunica a los Oficiales Mayores y equivalentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las empresas productivas del Estado y alcaldías de la Ciudad de México, así como a los municipios y las entidades federativas, cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa EMAJA PERFORACIONES, S.A. de C.V. 61

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández. 62

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. 63



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



401 300010
400413331 11/30

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chihuahua.	64
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Colima.	74
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Durango.	83
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de México.	92

SECRETARÍA DE SALUD

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.	102
Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.	169
Programa institucional del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 2020-2024.	191

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se reciben electrónicamente las solicitudes de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor.	221
--	-----

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Acuerdo por el que se prorroga el Diverso por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.	223
---	-----

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Acuerdo General 29/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el Circuito indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	227
Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	230



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo General 31/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 233

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 236

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. 236

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo e un día hábil bancario. 236

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nota aclaratoria al Acuerdo SS/23/2020, relativo a la designación de la Directora General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 237

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Manual de Organización General del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 237

AVISOS

Judiciales y generales. 304

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Acuerdo que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, compuesta por las redes de radiocomunicación de Seguridad Pública, similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 1

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial los días 5 y 6 de noviembre de 2020, para 2 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 5

SECRETARIA DE BIENESTAR

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. 97

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director General Adjunto*

Rio Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios

Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

Esta edición consta de dos secciones, con un total de 682 páginas

CERTIFICACIÓN: LA SUSCRITA LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA TURCOTT GONZÁLEZ, DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 5o. DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES; 10 FRACCIÓN XIII, 11 FRACCIÓN I, 12 FRACCIONES XXVII Y XXVIII Y 14 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. -----

-----CERTIFICA-----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96 QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN Y CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA DE LA EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, No. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021. CONSTE. -----


LIC. MARÍA ALEJANDRA TURCOTT-GONZÁLEZ

DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

REVISÓ:

LIC. RENÉ SERRANO ESTRADA

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL

ELABORÓ:

LIC. SERGIO BARRÓN FERNÁNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

4ca3adb00bd91ebc95eaa941955360f0098fc561eede9a915d58019d5c24632b

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

4ca3adb00bd91ebc95eaa941955360f0098fc561eede9a915d58019d5c24632b



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

"2021, Año de la Independencia y la Grandeza de México"

"LXIV Legislatura de la Paridad de Género"

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2021 FEB 17 PM 4:23

SECRETARÍA
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Y DE RESPONDERÍA

ACTOR: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
DEMANDADOS: H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y OTRA AUTORIDAD
EXPEDIENTE: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 211/2020
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

Señor Ministro,
JAVIER LAYNEZ POTISEK
INSTRUCTOR DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
P R E S E N T E

DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO, Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso I) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, personalidad que acredito con la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 2 de septiembre de 2020, la cual se agrega al presente como **anexo uno**; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, citaciones y documentos, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ésta Cámara de Diputados, ubicada en el edificio "E", cuarto nivel, de la Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15960, Ciudad de México; con el debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 4º, último párrafo y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autorizo como delegados de la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que conjunta o separadamente realicen todo tipo de promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas o formulen alegatos, promuevan o manifiesten incidentes y recursos que conforme a derecho procedan; así como, tengan acceso al expediente electrónico y puedan recibir notificaciones electrónicas a los Licenciados en Derecho, quienes se identifican con Clave Única de Registro de Población; Luis Genaro Vásquez Rodríguez [REDACTED] Eduardo López Falcón [REDACTED] Sergio Ruíz Arias [REDACTED] David Maldonado Ortega [REDACTED] Brenda Guadalupe Padilla Ramos [REDACTED] Juan Carlos Enrique Gutiérrez José [REDACTED] Jonathan Jiménez Cabrera [REDACTED] y Joaquín Uriel Zavala Nava [REDACTED]

De conformidad con los artículos 23 y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha 17 de diciembre de 2020, vengo a dar contestación a la demanda de Controversia Constitucional que al rubro se indica, en los siguientes términos:



I. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

La presente contestación de demanda se rinde en el plazo señalado por el artículo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se expone a continuación:

***"ARTICULO 26.** Admitida la demanda, el ministro instructor ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del término de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga."*

(Lo resaltado es propio).

En relación con dicho plazo, los artículos 2° y 3° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:

***"Artículo 2.-** Para los efectos de esta Ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.*

***Artículo 3.-** Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:*

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II. Se contarán solo los días hábiles, y

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Es de apuntarse que este Órgano Legislativo fue notificado de la admisión de la demanda, mediante oficio **7996/2020**, el 28 de diciembre de 2020, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 3° y 6° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha notificación surtió efectos a partir del día hábil siguiente en que fue realizada; esto es, el día 4 de enero de 2021, por lo que el plazo de treinta días, comenzó a correr a partir del 5 siguiente, debiendo descontarse a efecto del cómputo del plazo, los sábados y domingos, en términos de lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia, así como el periodo comprendido del 16 al 31 de diciembre de 2020, en atención al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el 1° de enero, 1° y 5 de febrero de 2021, en atención al Acuerdo General número 18/2013, incisos c) d) y e), emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, por lo que el plazo para presentar la contestación de demanda correspondiente, fenece el **17 de febrero de 2021**, como se advierte a continuación:



DICIEMBRE 2020						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	28	29	30	31		

ENERO 2021						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
					1	2
3	4	5 ¹	6 ²	7 ³	8 ⁴	9
10	11 ⁵	12 ⁶	13 ⁷	14 ⁸	15 ⁹	16
17	18 ¹⁰	19 ¹¹	20 ¹²	21 ¹³	22 ¹⁴	23
24	25 ¹⁵	26 ¹⁶	27 ¹⁷	28 ¹⁸	29 ¹⁹	30
31						

FEBRERO 2021						
Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	1	2 ²⁰	3 ²¹	4 ²²	5	6
7	8 ²³	9 ²⁴	10 ²⁵	11 ²⁶	12 ²⁷	13
14	15 ²⁸	16 ²⁹	17 ³⁰			

Por tanto, es claro que, al momento de presentarse la contestación de la demanda, nos encontramos dentro del plazo señalado por el artículo 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en términos del proveído de 17 de diciembre de 2020.

II. CONTESTACIÓN A LAS PRETENSIONES DEL INSTITUTO PROMOVENTE EN LA DEMANDA.

El Instituto promovente señala en los apartados de su demanda bajo títulos, *iv. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado* y *v. Los preceptos constitucionales que en su caso se estén violados*, lo siguiente:

“iv. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. El decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (Presupuesto de Egresos de 2021), expedido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 27 de noviembre de 2020 y publicado en el Diario Oficial de la Federación



el 30 siguiente: así como su refrendo y promulgación, específicamente por lo que hace a:

- a) *EL ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos), en lo relativo al gasto neto total del ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por el monto que se fija para el Instituto Nacional Electoral por \$26,819,801,594 (Veintiséis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)*
- b) *El ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos) y ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos).*
- c) *El ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos), en lo relativo a la reducción que consigna para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, por un monto de \$870,000,000 (ochocientos setenta millones de pesos 00/100 M.N).*
- d) *El ANEXO 23.8 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y sus correlativos: ANEXO 23.8.1.A LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos) y ANEXO 23.8.1.B LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUAL) (pesos), ANEXO 23.8.3.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021, ANEXO 23.8.3 C. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos) y ANEXO 23.8.3 D. REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021.*

(...)

v. Los preceptos constitucionales que en su caso se estimen violados. *El Instituto Nacional Electoral, estima violados los artículos 1°, 5°, 35; 41, base V, apartado A; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."*

Del texto trasunto, se advierte que la pretensión del Instituto promovente, es que se declare la invalidez del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, en específico los Anexos 1, 23.1.2, 23.1.3, 32, 23.8, 23.8.1.A, 23.8.3.B, 23.8.3 C y 23.8.3 D, relativos a la remuneración del Instituto Nacional Electoral, al advertir que los mismos transgreden los artículos 1°, 5°, 35; 41, base V, apartado A; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Federal; sin embargo, resulta importante mencionar que de los argumentos que a guisa de conceptos de invalidez expone el Instituto Nacional Electoral en su escrito inicial, devienen claramente infundados como se detalla en párrafos ulteriores.



Lo anterior es así, toda vez que el decreto impugnado es formal y materialmente constitucional, en virtud de que el procedimiento legislativo llevado a cabo por las Cámaras del H. Congreso de la Unión, y por el cual fue emitido el citado decreto, cumple con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ajustarse al texto de la Ley Fundamental, sin que con ello se vulneren los artículos 1°, 5°, 35; 41, base V, apartado A; 49, 74, 75, 123, apartado B, fracción XIV; 126, 127, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. CONTESTACIÓN A LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.

En relación con los hechos narrados por el Instituto promovente en su capítulo denominado **"II. HECHOS O ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL ACTOR Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE"**, se precisa por parte de ésta H. Cámara de Diputados, lo siguiente:

- a) Respecto de los hechos referidos por el Instituto promovente con los **números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 y 17**; se contesta, que los mismos **no se afirman ni se niegan** por ser manifestaciones particulares del Instituto Nacional Electoral, que no revisten la calidad de antecedentes de los actos o hechos impugnados.
- b) En atención al hecho señalado con el **número 10**, se contesta que es **cierto**, en virtud de que el 11 de noviembre de 2020, fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de ésta Cámara de Diputados, el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.
- c) Derivado de lo expuesto por el Instituto promovente en los hechos marcados con los **números 11 y 12**, se contestan que son **parcialmente ciertos**; en tanto se precisa que el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 10 de noviembre de 2020, estableció en relación al Instituto Nacional Electoral, lo siguiente:

"Instituto Nacional Electoral (INE)

Mencionan es una institución atípica porque su presupuesto es variable y es importante señalar la dimensión de las elecciones de 2021, ya que será la elección más grande de la historia, mayor que la de 2018, se tendrá mayor lista nominal, mayores supervisores electorales, capacitadores asistentes, casillas a instalar, etc. Todo esto ya que se tendrá mayor número de cargos a elegir y habrá elecciones locales en los 32 estados de la República

El presupuesto del Instituto consiste en Presupuesto Base de 10,992.9 millones de pesos, Cartera Institucional de Proyectos por



9,470.9 millones de pesos dentro de estos está el proceso electoral que es 8,202.5 millones de pesos y otros proyectos 1,268.4 millones de pesos. Además, el presupuesto del INF de una elección a otra aumenta en menor proporción que el listado nominal, cae en 3.5% el costo operativo por elector.

Por otra parte, habrá atención a la contingencia sanitaria en la organización electoral, para la operación de las casillas el día de la jornada electoral. Además de los costos sanitarios adicionales en la integración de mesas directivas de casillas, por lo cual se requerirá presupuesto adicional

Para la renovación tecnológica del sistema integral de verificación y monitoreo (SIVeM) se necesita un presupuesto de 343.6 millones de pesos, el cual se debería haber actualizado durante 2020 sin embargo, debido a los recortes de la Cámara de Diputados se postergó la ejecución del proyecto, enfatizan se debe actualizar pronto.

Para la realización de la consulta popular, el Instituto reutilizará materiales y servicios en las elecciones de 2021 para optimizar recursos. Se calcula un gasto total de 1,499 millones de pesos para la consulta popular, cifra menor a los 8 mil millones de pesos que cuesta un Proceso Electoral Federal.

El costo real por elector se reduce, a pesar de que en 2021 se realizará la elección más grande de la historia de México En el INE se buscó un presupuesto responsable, racional y respetuoso."

De igual forma, en el anexo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se estableció:

"ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)

	PROYECTO PEF	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REASIGNACIONES	PEF APROBADA
A: RAMOS AUTÓNOMOS	137,089,157,546	2,184,400,000	0	-2,184,400,000	134,904,757,546
Gasto Programable					
(...)					
22 Instituto Nacional Electoral	27,689,801,594	870,000,000	0	-870,000,000	26,819,801,594

(...)"

Como se advierte, tomando en cuenta que el costo real por elector se reduce, se realizó una resignación presupuestal de \$ 870, 000,000 (Ochocientos setenta millones de pesos), con el objeto de establecer un presupuesto responsable, racional y respetuoso.

- d) Por último, del hecho narrado por el Instituto promovente con el número 13, se contesta que es **cierto únicamente**; toda vez que en fecha 30 de noviembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021".



IV. CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

El Instituto Nacional Electoral, a través del C. Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio Instituto, hizo valer en su escrito inicial de demanda dos conceptos de invalidez, a través de los cuales cuestiona la validez constitucional del decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, en específico lo referente a los Anexos 1, 23.1.2, 23.1.3, 32, 23.8, 23.8.1.A, 23.8.3.B, 23.8.3 C y 23.8.3 D; **sin embargo, dichas manifestaciones resultan claramente infundadas, en virtud de que el decreto impugnado es materialmente constitucional, al no vulnerar ninguno de los artículos de la Constitución Federal señalados por el Instituto promovente,** como se demostrará a continuación:

PRIMERO. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NO VULNERA LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

De lo expuesto por el Instituto Nacional Electoral en su primer concepto de invalidez, manifiesta que con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, le fue transgredida su autonomía, prevista en el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Federal, al advertir que el mismo precepto, constituye un límite para la Cámara de Diputados en relación a su autonomía presupuestaria, de lo cual afirma, le fue vulnerada en tres principales vertientes:

- Considera que este Órgano Legislativo realizó una reducción injustificada, unilateral y arbitraria al gasto neto total del Instituto, las cual se refleja en los Anexos 1 y 32 del Presupuesto aprobado para este año fiscal, en lo relativo al Ramo 22.
- Advierte que el artículo vigésimo primero transitorio del Presupuesto aprobado para el año 2021, dispone que el Instituto promovente deberá realizar acciones conducentes para que sus percepciones y prestaciones se sujeten a los límites máximos previstos en el Anexo 23 del Decreto, lo cual refiere vulnera su autonomía presupuestaria.
- Y por último, manifiesta que al modificar o eliminar las cifras contenidas en el Anexo 23.8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, relativo a los límites de la percepción ordinaria neta y total del propio Instituto, también vulnera su autonomía presupuestaria.

Así mismo, refiere el Instituto promovente, que esta H. Cámara de Diputados, debería aprobar lo que le es enviado, sin que realice ninguna modificación, a menos que esta sea fundada, justificada y motivada.

Las citadas consideraciones que a manera de conceptos de invalidez expone el promovente devienen claramente infundadas, toda vez que parten de una errónea interpretación de lo que debe entenderse por la garantía de autonomía institucional, y sus límites en relación al Instituto Nacional Electoral.



Con el fin de demostrar lo anterior, es relevante mencionar que nuestra Constitución Federal articula al poder público a través de diversos principios organizativos, entre los cuales encuentran el democrático, el representativo, el federal, y el principio de división de poderes; este último, **el cual aplicado a los órganos constitucionales se traduce en la garantía institucional de autonomía.**

En efecto, el artículo 49 de la Constitución Federal, que establece:

“Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades extraordinarias para legislar.”

Como se observa, la norma constitucional establece que el Supremo Poder de la Federación, se divide en tres departamentos: el legislativo, ejecutivo y judicial; a su vez como técnica de garantía de dicho principio se establece una prohibición: **no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.**

Las implicaciones normativas del principio de división de poderes no se logran mediante la modalidad de interpretación literal del texto del artículo 49 constitucional, por resultar insuficiente para capturar la integridad del parámetro de control de la validez a que da lugar, a otros principios aplicados a diversos entes de la Federación.

Por tanto, a fin de desentrañar la naturaleza de dicho elemento articulador del Estado, es necesario acudir a los fines del principio de división de poderes como un instrumento de limitación y de ordenación (tanto negativa, en cuanto lo limita, como positiva, en cuanto genera posibilidades creativas de actuación) del poder público a efecto de apreciar sus consecuencias normativas.

Al respecto, la Segunda Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión **49/2001**, determinó la finalidad del principio de división de poderes, derivado de **la interpretación sistemática, causal, teleológica e histórica del artículo 49 constitucional, máxime que el referido principio constituye una institución jurídica que se ha desarrollado desde tiempos remotos y ha adquirido matices diferentes según la época y el lugar.**

“Época: Novena Época

Registro: 189106

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XIV, Agosto de 2001

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a. CXXVII/2001



Página: 231

DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL. Conforme al texto vigente del citado precepto constitucional 'El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.-En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.'. De la interpretación literal de este precepto se advierte que en el mismo se prohibió que las facultades del Poder Legislativo sean ejercidas por el titular del Ejecutivo de la Unión, salvo el caso en que éste sea dotado de facultades extraordinarias para legislar, ya sea con motivo de la suspensión de garantías, en términos de lo previsto en el citado artículo 29 o en virtud de la autorización que le dé el Congreso de la Unión para regular el comercio exterior, al tenor de lo dispuesto en el diverso 131, párrafo segundo, de la propia Norma Fundamental, sin que de su lectura sea factible concluir si con el término 'Poder Legislativo' se hace referencia a las facultades que constitucionalmente se encomiendan al órgano respectivo o bien a la función consistente en emitir cualquier disposición de observancia general. En ese tenor resulta insuficiente para desentrañar el alcance de la prohibición en comento acudir a la interpretación literal del citado artículo 49, por lo que para ello resulta conveniente precisar cuál es la finalidad del principio de división de poderes así como acudir a la interpretación sistemática, causal, teleológica e histórica del dispositivo antes transcrito, máxime que el referido principio constituye una institución jurídica que se ha desarrollado desde tiempos remotos y ha adquirido matices diferentes según la época y el lugar."

En este orden de ideas, se reconoce que **el principio de división de poderes, es un principio evolutivo, con un contenido flexible**, que debe adaptarse a cada momento histórico, para proyectar su ideal regulativo de "pesos y contrapesos" a cada arreglo institucional constitucional, toda vez que la arquitectura del poder público no es estático, sino dinámico.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el esquema de división de poderes no supone un fin en sí mismo, sino una técnica que exige un equilibrio entre los distintos poderes de la Federación y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías.

Tal criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto, es el siguiente:



"Época: Novena Época
Registro: 177980
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Julio de 2005
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 52/2005
Página: 954

DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, con el rubro: 'DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.', no puede interpretarse en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, pues su rigidez se desprende del procedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de supremacía constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente de las normas secundarias del sistema - origen de la existencia, competencia y atribuciones de los poderes constituidos-, y continente, de los derechos fundamentales que resultan indisponibles para aquéllos, funcionando, por ende, como mecanismo de control de poder. En consecuencia, el principio de división de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías."

De igual forma, al resolver la Controversia Constitucional 32/2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que con motivo de la evolución de la **distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, los órganos autónomos distintos a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial).**

Ello no altera o destruye la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que **los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado Mexicano**, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.

El citado criterio se encuentra en la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo rubro y texto siguiente:

"Época: Novena Época
Registro: 170238
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia



Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
Tomo XXVII, Febrero de 2008
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 12/2008
Página: 1871

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: **a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.**"

(Lo resaltado es propio).

En relación a la aplicación de dicho principio de división de poderes, respecto de los Órganos Constitucionales Autónomos, es dable señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el citado principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que los órganos constitucionales autónomos, únicamente cuentan con facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.

Sirve de sustento, la tesis de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, bajo rubro y texto siguiente:

"Época: Décima Época
Registro: 2015478
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.)
Página: 603



GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; **de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.** Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, **las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.**

En estos términos, el principio de división de poderes descansa así en el sistema de distribución de atribuciones de los poderes constituidos que realiza nuestra Ley Fundamental, tanto de facultades en las que participan diversos poderes, como en facultades exclusivas cuyo ejercicio soberano corresponde a uno de ellos.

Como se ha advertido, dicho principio en conjunción con la introducción constitucional de los órganos constitucionales autónomos, dio como resultado la **garantía de autonomía institucional, propias de dicho ente y la cual tiende a garantizar el ejercicio de facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.**

Así bien, en relación a la naturaleza y los límites de la pretendida garantía de autonomía institucional del Instituto Nacional Electoral, se advierte que el artículo 41, fracción V, Apartado A, primer y segundo párrafo, dispone lo siguiente:

"Artículo 41. ...

(...)

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.



Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos."

Del artículo en cita, se desprende lo siguiente:

- Quedará a cargo del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales la organización de los comicios.
- Dota al Instituto Nacional Electoral como un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.
- Define que en la integración del Órgano Electoral participaran el Poder Legislativo, Partidos Políticos y Ciudadanos.
- Establece los principios que deberán regir al Instituto Nacional Electoral (*certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad*).
- La conformación de su estructura con base en órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
- Establece cual será la máxima autoridad representativa de dicho Órgano Electoral (*Consejo General*).



- Define que quedara a cargo de su Órgano Interno de Control, con plena autonomía y de gestión la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto.

Como puede advertirse, el Instituto Nacional Electoral al ser un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio en el ejercicio de sus funciones, deberá hacerlo con apego a la legalidad, eficiencia y eficiente manejo de los recursos públicos, a efecto de dotar de mayor transparencia y democracia el resultado de las elecciones.

De esta manera, se desprende que la autonomía del Instituto Nacional Electoral se define como aquella en la cual, ejerce sus facultades como ente organizador de los Comicios a nivel Federal y como coordinador a nivel Local, en un marco de disciplina democrática, cuya obligación rectora por mandato constitucional es vigilar el uso de los recursos que se destinan a los partidos políticos durante las campañas, a efecto de lograr mayor transparencia y equidad en las contiendas.

En este sentido dicho órgano, como los entes de esta naturaleza, cuentan con una garantía de autonomía institucional respecto del ejercicio de sus funciones constitucionalmente atribuidas, siendo estas el límite de dicha autonomía; **pues no tienen la capacidad de invadir competencias que corresponden a otros órganos del Estado, con el pretexto de considerarse constitucionalmente "autónomo."**

En relación a lo anterior, es dable señalar que la autonomía del Instituto Nacional Electoral no es absoluta, pues dicho órgano está sujeto al control de fiscalización y rendición de cuentas que le requieren tanto el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión a través de cualquiera de sus dos Cámaras de Diputados y Senadores, así como la Auditoría Superior de la Federación.

Atendiendo a lo anterior, se manifiesta lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo de la Constitución Federal que a la letra señala lo siguiente:

"Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas."

Del texto citado se advierte, que cualquiera de las dos Cámaras de Diputados o Senadores del Congreso de la Unión, tienen la facultad constitucional de solicitar a los titulares de los órganos autónomos, entre ellos para el caso que nos ocupa el Instituto Nacional Electoral, para que rinda informes respecto de sus actividades o su ramo.



De la misma forma, de conformidad con lo establecido por el artículo 44, numeral 1, inciso z), de la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, corresponde al Consejo General como máxima autoridad del Instituto Nacional Electoral, aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de dicho Órgano Autónomo y remitirlo una vez que sea aprobado al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que sea incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este sentido, el proyecto de egresos correspondiente que formule en su caso el Órgano Electoral, deberá atender y aplicar los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género, los cuales se establecen en el artículo 5, numeral 2 del Reglamento Interior de Instituto Nacional Electoral.

Por su parte, cabe señalar que los artículos 5 y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen una serie de facultades de los ejecutores del gasto público (Poder Legislativo y Judicial y Entes Autónomos), respecto a la formulación y aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos, cuya única restricción, tiene por objeto asegurar que sus propuestas de egresos guarden **compatibilidad con los Criterios Generales de Política Económica establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales sirven de base para crear el Presupuesto de Egresos de la Federación.**

Por lo tanto, es claro que el Instituto Nacional Electoral, **no es un órgano que pueda sustraerse del orden jurídico nacional, al tener que someterse al control, fiscalización, revisión, rendición de cuentas del Poder Ejecutivo Federal, de cualquiera de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión y de la propia Auditoría Superior de la Federación; pues como se ha advertido su garantía de autonomía institucional únicamente se refiera a su objeto primordial o función de Estado.**

Ejemplo de lo anterior, se encuentra el control que sobre dicho órgano puede ejercer la Auditoría Superior de la Federación, pues en términos del artículo 79, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal, la misma cual tiene como principal función, fiscalizar los recursos federales que ejerzan entre otras, las entidades federativas, tal como se cita a continuación.

"Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

(...)

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

1. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos en los programas



federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. (...)

(Lo resaltado es propio).

Del precepto citado, es menester advertir que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos que otorgue el Gobierno Federal, así como aquellos recursos de los Poderes de la Unión y cualquier ente Público Federal, a través de los informes que por ley tengan que rendir estos; entre ellos, **debe atenderse a los recursos otorgados al Instituto Nacional Electoral.**

De lo expuesto en párrafos precedentes, se demuestra que el Instituto Nacional Electoral no es órgano con plena y absoluta autonomía, pues esta únicamente se refiere a su función como autoridad electoral.

Una vez asentadas las bases y limitaciones de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, respecto de la violación a su garantía de autonomía institucional, derivado de la limitación de remuneraciones de los servidores públicos adscritos a la misma, es claro que las consideraciones expuestas en relación a la pretendida invalidez constitucional del artículo 16, así como de los anexos relativos del Presupuesto de Egresos de la Federación, es claro que dichas consideraciones resultan palmariamente infundadas, **pues por medio de dichas disposiciones de orden reglamentario, así como aplicativo; no se vulnera la función del Instituto Nacional Electoral como órgano encargado de la función electoral del Estado en el orden federal.**

A mayor abundamiento, **el artículo 41 de la Constitución Federal, fuente de creación y autonomía del Instituto Nacional Electoral, no establece excepción alguna en relación al imperativo constitucional establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal, el relativo a que ningún servidor público de dicho Órgano Constitucional Autónomo podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.**

De igual forma, no se desprende una excepción a la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos del artículo 74, fracción IV constitucional.

Al respecto, se advierte que la única disposición constitucional que hace alguna referencia a la "elaboración" de su propio presupuesto; se encuentra referida al Poder Judicial de la Federación; en el artículo 100 de la Constitución Federal, mismo que establece:

"Artículo 100. (...)

(...)

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin



perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente."

De dicho precepto se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación **elaborará su propio Presupuesto de Egresos y el Consejo de la Judicatura Federal lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación**; al respecto una vez elaborados serán remitidos por el Presidente del Alto Tribunal, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es de hacer notar que el Poder Judicial de la Federación, es el único poder del Estado, respecto del cual se encuentra una disposición relativa en el texto constitucional; esto es, **respecto de los otros Poderes de la Unión, u órganos constitucionales autónomos, pues no existe disposición expresa a su autodeterminación presupuestal.**

En este sentido, cobra aplicación el principio de vinculación positiva, según el cual **las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes**; al respecto, sirve de sustento la tesis de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal bajo rubro y texto siguiente:

*"Época: Quinta Época
Registro: 326411
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo LXXIII
Materia(s): Común
Tesis:
Página: 6957*

AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS. *Las autoridades sólo pueden realizar aquello para lo que están expresamente autorizadas por las leyes, como consecuencia primordial del principio de legalidad que informa nuestro régimen constitucional, por virtud del cual, toda decisión de carácter particular, debe estar basada en una disposición general, dictada con anterioridad. Por tanto, en todos aquellos casos en que las autoridades no justifiquen haber fundado sus actos en algún precepto de derechos positivos, tales actos deben reputarse anticonstitucionales."*

(Lo resaltado es propio).

Por su parte, es menester precisar que aún en este caso, dicha facultad únicamente se ve limitada a la "elaboración" del proyecto del presupuesto que debe incluirse en la propuesta relativa por el Poder Ejecutivo Federal; esto es, **la determinación de su presupuesto de egresos realizada no es absoluta, y está sujeta a la discusión, modificación y aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.**



Al respecto y en relación al Presupuesto de Egresos de la Federación es dable referirnos al artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Federal, que establece:

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

(...)

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.”

En el precepto constitucional trasunto, se encuentra la facultad de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. Está facultada soberana únicamente se encuentra limitada al cumplimiento de las normas de naturaleza constitucional, como son: los artículos 74, 75 y 127 de la Constitución Federal; y de naturaleza legal: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y la Ley Federal de Austeridad Republicana.

En este sentido, resulta claro que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, **la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de que lo realice sin injerencia de poder u órgano constitucional autónomo alguno, en estricto apego al Principio de División de Poderes.**

Al mayor abundamiento, al resolver el Amparo en Revisión 1237/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó:

“Del contenido del segundo párrafo del artículo constitucional transcrito, se desprende que las remuneraciones para los servidores públicos será fijada en los presupuestos; siendo ésta una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el aprobar el citado presupuesto en términos del diverso artículo 74, fracción IV, constitucional, motivo por el cual no puede arribarse a la conclusión que pretende la parte quejosa en el sentido de que las normas impugnadas permiten a la dependencias que sean ellas las que fijen las remuneraciones de los servidores públicos bien sea en su incremento o disminución, toda vez que las normas contenidas en el Presupuesto de Egresos combatido, se limitan autorizar la expedición de los manuales de percepciones para instrumentar y planificar como ha de distribuirse la integración salarial en términos del proceso presupuestario.”

De lo anterior, es claro que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, al regular aspectos específicos de lo establecido por los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal, **no afectan de forma alguna el principio de división de poderes o la autonomía presupuestal tanto de los órganos constitucionales autónomos, como de los Poderes de la Unión.**



A mayor abundamiento, las remuneraciones de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral deben fijarse en términos del imperativo establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal; esto es, el relativo a que ningún servidor público de los tres Poderes de la Unión, ni cualquier órgano autónomo podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República; aunado a que la facultad para fijar las mismas, es exclusiva de la Cámara de Diputados.

Efectivamente, la Norma Fundamental establece las atribuciones que corresponden a cada poder para el ejercicio de sus funciones, estableciendo disposiciones que regulan ya sea en general o específico; **determinando así facultades propias y exclusivas de cada órgano.**

En relación a esta facultad, es procedente invocar la tesis del Poder Judicial de la Federación, la cual ha determinado el carácter de soberano y exclusivo de la atribución constitucional de aprobar el presupuesto:

“Época: Décima Época
Registro: 2015444
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV
Materia(s): Común
Tesis: I.8o.A.4 CS (10a.)
Página: 2516

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, **en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados**, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva.”

(Lo relatado es propio).



A mayor abundamiento, al resolver el Amparo en Revisión **736/2017**, el Ministro José Fernando Franco González Salas, señaló:

“Además, el que tales tribunales sólo puedan aprobar un anteproyecto de presupuesto (y no un proyecto de presupuesto) y que aparezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del ‘Ramo administrativo’ con el número 31, no los priva de su autonomía constitucional en su calidad jurisdiccional, ni los diferencia, en cuanto a su autonomía presupuestaria, de otros organismos autónomos o incluso del Poder Judicial de la Federación, pues tanto unos como otros están obligados a presentar sus proyectos y anteproyectos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es la encargada de integrarlos al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y de remitirlo a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

(....)

Son ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias (Secretarías de Estado, Consejería Jurídica, Tribunales administrativos y Procuraduría General de la República) y entidades que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos.

(...)

Quien decide finalmente en qué términos se aprobará el presupuesto de egresos y qué montos corresponderán a cada ramo, ya sea que se trate de ramos autónomos, administrativos, generales o algún otro, es la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que será ella, y no la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien en última instancia defina qué monto autorizar a los Tribunales Agrarios (ramo 31), al Poder Judicial (ramo 03), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (32), etcétera.

En este sentido, basta con que los Tribunales Agrarios cuenten con un ramo específico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, como sucede en la especie, para considerar que tienen cierta autonomía presupuestal en términos de lo que establece la ley antes citada.”

Como se advierte de dicho criterio quien decide finalmente en qué términos se aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación, es la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que ello le reste autonomía presupuestal al Poder Judicial Federal y a los órganos constitucionales autónomos; como es, el Instituto Nacional Electoral.

Sirve de sustento a lo anterior la tesis, bajo rubro y texto siguiente:

*“Época: Décima Época
Registro: 2007344*



*Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 94/2014 (10a.)
Página: 668*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO VIOLAN EL NUMERAL 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado establece que la remuneración de los servidores públicos de las dependencias y entidades que ahí se precisan será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las bases señaladas en el propio artículo. Ahora, si se toma en cuenta que **conforme al numeral 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación del Presupuesto de Egresos en el ámbito federal corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados**, resulta claro que los artículos 20 y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no violan el artículo 127 de la propia Norma Suprema, pues en ellos **no se prevé que las dependencias y entidades citadas sean las que fijen las remuneraciones de los servidores públicos, bien sea en su incremento o disminución**, ya que sólo se limitan a autorizar la expedición de los manuales de percepciones para instrumentar y planificar cómo ha de distribuirse la integración salarial en términos del proceso presupuestario."

(Lo resaltado es propio).

Por otra parte, y en relación con el concepto de **autonomía presupuestaria**, resulta menester remitirnos a las siguientes definiciones:

Para Ugalde Calderón¹, es el **medio para garantizar de manera adecuada su autonomía presupuestaria y financiera**, definida como la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos económicos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines, es dotarlos de la facultad de plantear los fondos que requieren para su correcta operación y mantenimiento.

De la misma forma señala la autora María del Pilar Hernández², que la autonomía presupuestaria implica que desde el nivel constitucional se establezcan las bases en las cuales se garantice que los órganos autónomos cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones, **atendiendo en todo momento, para la determinación de su presupuesto, las particularidades de cada uno de ellos.**

¹Ugalde Calderón Filiberto Valentín, *Órganos Constitucionales Autónomos*, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 29, pág. 258.

² Hernández, María del Pilar, *Autonomía de los órganos electorales. Reforma Judicial*. Revista Mexicana de Justicia, 2013.



Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México³; la autonomía presupuestaria implica la capacidad del órgano constitucional para determinar por si mismos **los montos económicos necesarios para cumplir con las atribuciones que tienen constitucionalmente conferidas, para gestionarlos de manera independiente de conformidad con su objeto, y para fiscalizarlos a través de órganos y procedimientos propios.**

En consecuencia, es dable señalar, que de los tres conceptos desarrollados por distintos autores, todos coinciden en que la autonomía presupuestaria, consiste en la facultad constitucional que tiene cada órgano para determinar y utilizar su presupuesto, con la única finalidad de garantizar que cumplan con sus funciones.

Sirva a lo anterior, por analogía de criterio la tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente:

"Época: Décima Época

Registro: 2015447

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.7o.A.156 A (10a.)

Página: 2518

PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INAPLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN SEGUIDOS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL OTRORA INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. De conformidad con sus artículos 1, 2, fracciones XII y XV, 3, 4, fracción III y 5, fracción I, inciso b), dicho ordenamiento es reglamentario de las disposiciones constitucionales en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, por lo que resulta aplicable a todos los entes públicos que ejerzan recursos públicos federales; su interpretación, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, mientras que, por lo que hace a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes. Asimismo, de esos preceptos se advierte que los ejecutores de gasto, entre los que se encuentra el otrora Instituto Federal Electoral, cuentan con autonomía presupuestaria, sin que deban sujetarse a las disposiciones generales emitidas por las dependencias señaladas, ya que se encuentran sujetos a la normativa, evaluación y control de sus propios órganos. Por tanto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es inaplicable a los procedimientos de fiscalización seguidos ante la Contraloría General del órgano mencionado, pues lo son las

³ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, *Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Aproximación al concepto de autonomía técnica y de gestión*, México, UNAM, 2008, pp. 101 y ss. Disponible en www.asf.gob.mx en "publicaciones técnicas".



disposiciones emitidas por ésta, por ser la autoridad facultada para fijar criterios en la realización de auditorías, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la fiscalización y revisión de los recursos a cargo de las diversas áreas y órganos del instituto, en términos del artículo 391, numeral 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el 23 de mayo de 2014. Lo anterior, pues es la propia Constitución la que otorga independencia al Instituto Federal Electoral en el ejercicio de las funciones que le corresponden, lo que implica también que goza de plena autonomía en el ámbito de su fiscalización, al establecerse desde la Ley Fundamental la existencia de su Contraloría General, la cual cuenta con atribuciones para fiscalizar, con autonomía técnica y de gestión, todos sus ingresos y egresos, lo que conlleva también la facultad de expedir sus propias disposiciones en lo que concierne a sus funciones de fiscalización.”

Al respecto, y contrario a lo aducido por el Instituto Nacional Electoral, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, tampoco vulnera su autonomía presupuestal, pues no se desprende una invasión a la capacidad para disponer de los recursos económicos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines.

En consecuencia, al haberse demostrado la falta de sustento de las consideraciones vertidas por el Instituto Nacional Electoral, así como la constitucionalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; resulta procedente que este Alto Tribunal, considere infundada la presente Controversia Constitucional, y declare la validez constitucional del ordenamiento impugnado.

SEGUNDO. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NO VULNERA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

En atención a lo expuesto por el Instituto Nacional Electoral en su segundo y último concepto de invalidez, refiere que este Órgano Legislativo al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, transgredió su autonomía constitucional y presupuestaria, al considerar que fue subordinado respecto de la suficiencia presupuestaria, para realizar la consulta popular y a su vez imposibilitarlo para cumplir con su función constitucional.

Lo anterior, toda vez que manifiesta que esta Cámara de Diputados fue omisa en establecer la suficiencia presupuestaria para que el propio Instituto promovente pudiera organizar la consulta popular, convocada mediante “**DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR**”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de octubre de 2020; argumentando que fue el propio Constituyente quien le confirió esa atribución.

En conclusión advierte el Instituto promovente, que este Órgano Legislativo, no le permitió contar con la suficiencia presupuestaria necesaria, para llevar a cabo la consulta popular; función electoral que, a su consideración debe contar con los recursos necesarios y suficientes, así mandatados por la Constitución, argumentando a su vez, que le fue recortado su presupuesto por la cantidad de ochocientos setenta millones de pesos (\$870, 000,000 00/100 M.N.), con lo cual



limita su autonomía presupuestaria en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

Al respecto, se advierte que las consideraciones que a manera de segundo concepto de invalidez aduce el Instituto Nacional Electoral resultan claramente infundadas al derivar de una incorrecta interpretación de su función electoral, la naturaleza del mecanismo de Consulta Popular, y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.

Con el fin de demostrar lo anterior, cabe mencionar que como ha sido analizado anteriormente, en términos de artículo 41, base V de la Constitución Federal, el Instituto Nacional Electoral es un órgano dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que será la autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

Una vez expuesto lo anterior, es dable mencionar que la organización, difusión, desarrollo, cómputo y aclaración de resultados en las Consultas Populares, son atribuciones a cargo del Instituto Nacional Electoral, establecidas tanto en la Constitución Federal, como en la Ley Federal de Consulta Popular, y constituyen deberes constitucionales claramente previsibles y cuya naturaleza no corresponde a una función extraordinaria.

Con el fin de acreditar lo anterior, debemos remitirnos al artículo 35, fracción VIII de la Constitución Federal, que establece lo siguiente:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

(...)

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

- a) El Presidente de la República;***
- b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o***
- c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.***

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.



Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción."



Como se advierte, la Consulta Popular se encuentra establecida en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un mecanismo de participación política; mediante el cual, los ciudadanos mexicanos pueden ejercer su derecho de expresión, emitiendo mediante el voto, su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional⁴, para lo cual se prevé lo siguiente:

- a) Los temas respecto de los cuales versarán las consultas populares serán de trascendencia nacional y regional.
- b) Solo podrán ser solicitados por:
 - **Presidente de la República.**
 - **El equivalente al 33 % por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión.**
 - **Los ciudadanos, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.**
- c) **El Instituto Nacional Electoral será quien, en forma directa, verificará el porcentaje de ciudadanos que solicitaron la consulta popular -si fuera el caso del supuesto contenido en el inciso c) del apartado primero, de la fracción VIII, del artículo 35 Constitucional- así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y aclaración de resultados.**

Como se desprende de lo antes analizado, la Consulta Popular es un mecanismo de participación política; mediante el cual, los ciudadanos mexicanos pueden ejercer su derecho de expresión, emitiendo mediante el voto, su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional; en cuyo procedimiento participan diversos entes gubernativos, **sin embargo la Constitución Federal establece que será el Instituto Nacional Electoral quien tendrá a su cargo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y aclaración de resultados.**

Dicha facultad es una obligación claramente previsible para el Instituto Nacional Electoral, al revestir la naturaleza de una atribución constitucional, relacionada con su función como autoridad electoral.

Al respecto, cabe mencionar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, asignó la cantidad de \$26,819,801,594 (veintiséis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos) dentro del gasto programable para el Instituto Nacional Electoral, como se aprecia del anexo 1 del mismo, que estableció lo siguiente:

⁴ De conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población.



"ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos) ,

A: RAMOS AUTÓNOMOS		134,904,757,546
Gasto Programable		
01	Poder Legislativo	14,816,605,390
	Cámara de Senadores	4,080,778,000
	Cámara de Diputados	8,282,000,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390
03	Poder Judicial	71,299,339,460
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,090,436,565
	Consejo de la Judicatura Federal	63,178,622,895
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,030,280,000
22	Instituto Nacional Electoral	26,819,801,594
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,679,905,810
41	Comisión Federal de Competencia Económica	598,670,029
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	905,335,647
49	Fiscalía General de la República	17,275,099,616

(...)"

Dicha asignación presupuestal debe ser utilizada por el instituto Nacional Electoral para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, incluyendo la relativa a la organización, difusión, desarrollo, cómputo y aclaración de resultados de las Consultas Populares en términos del artículo 35, fracción VIII de la Constitución Federal y la Ley Federal de Consulta Popular.

En este sentido, se advierte que la manifestación relativa a que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, ha dejado en insuficiencia presupuestaria al Instituto Nacional Electoral, respecto de sus funciones para llevar a cabo el mecanismo de Consulta Popular, deviene claramente infundada, en virtud de que como se ha advertido, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y aclaración de resultados en las Consultas Populares, son atribuciones establecidas tanto en la Constitución Federal, como en la Ley Federal de Consulta Popular, y constituyen deberes constitucionales claramente previsibles y cuya naturaleza no corresponde a una función extraordinaria, aunado a que se la ha asignado a dicho Instituto la cantidad de \$26,819,801,594 (veintiséis mil ochocientos diecinueve millones ochocientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos) dentro del gasto programable.

En consecuencia, al haberse demostrado la falta de sustento de las consideraciones vertidas por el Instituto Nacional Electoral, así como la constitucionalidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; resulta procedente que este Alto Tribunal, considere infundada la presente Controversia Constitucional, y declare la validez constitucional del ordenamiento impugnado.



IV. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad constitucional de suplir la deficiencia de la contestación de la demanda, tal y como puede verse en la cita textual de dichos preceptos que se hace:

"Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

Artículo 40. En todos los casos esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia que se cita a continuación.

"Novena Época

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Noviembre de 1996

Tesis: P. /J. 68/96

Página: 325

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURIDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. De acuerdo con lo establecido por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **tratándose de controversias constitucionales la Suprema Corte corregirá los errores en la cita de los preceptos invocados, examinará en su conjunto los razonamientos de las partes para resolver la cuestión efectivamente planteada y deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos y agravios.** De ello se sigue, necesariamente, que no es posible jurídicamente que se establezca que los argumentos hechos valer por el promovente de la controversia o conceptos de invalidez puedan considerarse deficientes, pues ello en nada afectará el estudio que deba realizarse conforme a las reglas establecidas en los preceptos mencionados."

(Lo resaltado es propio).

Por lo anterior, se solicita a este Máximo Tribunal corrija los errores en cita de los preceptos que se invocan, examine en su conjunto los razonamientos que se citan en el texto del presente recurso; así como, supla la deficiencia de la contestación de demanda que hace valer este Órgano Legislativo.



V. P R U E B A S

Con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ofrezco las siguientes:

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA**, consistente en copia certificada de la versión estenográfica de la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de fecha 2 de septiembre de 2020; documental que se acompaña al presente como **anexo uno**.
2. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES**, consistente en el expediente formado con motivo de la presente Controversia Constitucional.
3. **PRESUNCIONAL**, en su doble aspecto, tanto legal como humana; prueba que se ofrece en todo lo que favorezca a los intereses de mi representada.

VI.- DESAHOGO DE REQUERIMIENTO.

Por medio del presente ocurso, en cumplimiento a lo ordenado por los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil veinte, en el auto dictado en la Controversia Constitucional al rubro indicada, vengo a desahogar el requerimiento formulado a la suscrita Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que adjunto al presente las copias certificadas de los antecedentes legislativos que dieron origen al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, el cual se adjunta como **Anexo dos**.

Por lo anterior, solicitó tenerme por desahogado dicho requerimiento y dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Por lo expuesto y fundado,

A USTED C. MINISTRO INSTRUCTOR, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentada con la personalidad que ostento, dando contestación a la demanda en representación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

SEGUNDO. Tener por ofrecidas las documentales que se adjuntan al presente libelo.

TERCERO. En el momento procesal oportuno dictar resolución definitiva en la que se declare el sobreseimiento de la presente Controversia Constitucional, de conformidad con las causales de improcedencia que se hacen valer.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

SEPTIEMBRE

30

NOVIEMBRE 30 DE 2020

CUARTO. En atención a las consideraciones expuestas en el presente ocurso, estimar infundados los conceptos de invalidez expuestos por el Instituto Nacional Electoral, declarando la validez constitucional del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de noviembre de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2021

DIPUTADA FEDERAL DULCE MARÍA SAURI RIANCHO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

001732

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2021 FEB 18 AM 9 54

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido de buzón judicial el 17 de febrero del año
en curso, en (30) fojas con:

- (19) Anexos, en (4), (70), (86), (33), (4), (1), (87), (34), (6),
(36), (4), (66), (44), (4), (172), (306), (193), (132) y (131) fojas,
respectivamente, según sus certificaciones.
- Un anexo, en (52) fojas según su certificación

✓

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados
Miércoles 2 de septiembre de 2020
Turno 31, hoja 1, mmp

....abierto el sistema.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: ¿Falta algún diputado o diputada por votar?

Ciérrese el sistema de votación electrónica. El resultado final es el siguiente: a favor, 313; en contra, 123; abstención, 21. Es mayoría calificada.

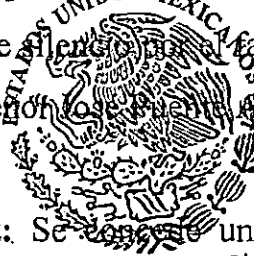
La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado el acuerdo por 313 votos. Es mayoría calificada.

El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Delgado? Compañeros, compañeras, les pido silencio para poder escucharnos. ¿Con qué objeto, diputado Delgado?

El diputado Mario Delgado Carrillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Antes de que siga con los siguientes asuntos, pedirle respetuosamente un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de nuestra compañera Ximena Puente de la Mora, el señor José Puente Arellano.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se concede un minuto de silencio y desde la Mesa Directiva expresamos nuestras más sentidas condolencias a nuestra compañera diputada Ximena Puente y a su familia.



ASAMBLA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados
Miércoles 2 de septiembre de 2020
Turno 31, hoja 2, mmp

(Minuto de silencio)

(Sigue turno 32)



CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio A, Basamento, Edificio E, Nivel 4, Ala Sur; Tels. 5628-1300 exts. 2002 y 1404; 5036-0000 ext. 54038

9d16d2f8b1fe10abca32a6a4c39626af68e6836931c77386db724eed52bad894

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Turno 32, hoja 1, azzo

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Gerardo Fernández Noroña?

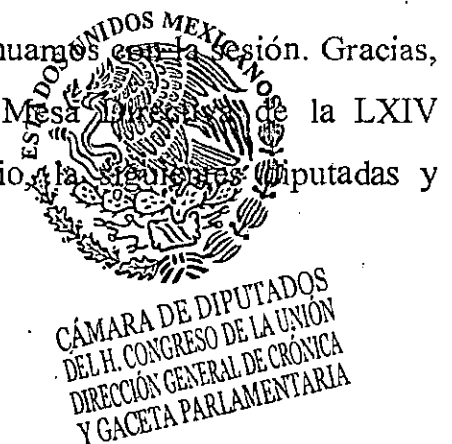
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Pedirle un minuto de silencio, diputada presidenta, porque hoy -siendo una minoría ínfima- la derecha se apodera de la Mesa Directiva.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Margarita?

La diputada Margarita García García: Diputada presidenta, decirles que como oaxaqueña y mexicana hoy el pueblo de México se siente dolido y traicionado, pero la bancada del Partido del Trabajo y compañeros y compañeras de Morena con dignidad no le fallaremos al presidente de la República y no le fallaremos al pueblo de México, porque el pueblo de México votó por una cuarta transformación y hoy queda escrito en la historia de México que traicionaron a México y a sus ideales. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continuamos con la Sesión. Gracias, diputada. Se declara que han sido electos para integrar la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, que funcionará durante el tercer año de ejercicio, la señoras diputadas y diputados.

Presidencia. Diputada Dulce María Sauri Riancho.



Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Turno 32, hoja 2, azzo

Vicepresidentes. Diputada Dolores Padierna Luna, diputado Xavier Azuara Zúñiga, diputada Ma. Sara Rocha Medina.

Secretarios. Diputada María Guadalupe Díaz Avilez, diputada Karen Michel González Márquez, diputada Martha Hortencia Garay Cadena, diputada Julieta Macías Rábago, diputado Héctor René Cruz Aparicio, diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, diputada Mónica Bautista Rodríguez.

Se invita a las y los diputados electos para integrar la Mesa Directiva pasen a ocupar su lugar en el presidio. Se pide a los presentes ponerse de pie...

(Sigue turno 33)



CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA

Av. Congreso de la Unión, 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza; C.P. 15960 Ciudad de México;
Edificio A, Basamento, Edificio E, Nivel 4, Ala Sur; Tels. 5628-1300 exts. 2002 y 1404; 5036-0000 ext. 54038

Cámara de Diputados

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Turno 33, hoja 1, arm

... Ciudadana Dulce María Sauri Riancho, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Sí, protesto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Si así no lo hace, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se procederá a tomar la protesta a los vicepresidentes y vicepresidentas y secretarios de la Mesa Directiva. Ponerse de pie, por favor. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de vicepresidentas y vicepresidentes, y secretarias y secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las diputadas y los diputados María de los Dolores Padierna Luna, Javier Azuara Zúñiga, Ma. Sara Rocha Medina, María Guadalupe Díaz Avilés, Karen Michel González Márquez, Martha Hortencia Garay Cadena, Julieta María Rabago, Héctor René Cruz Aparicio, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Mónica Bautista Rodríguez: Sí, protesto.

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados
Miércoles 2 de septiembre de 2020
Turno 33, hoja 2, arm

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.

Comuníquese por escrito la integración de la Mesa Directiva al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Congresos de los estados...

(Sigue turno 34)



Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria
Subdirección del Servicio de Estenografía

Cámara de Diputados
Miércoles 2 de septiembre de 2020
Turno 34, hoja 1, cpl

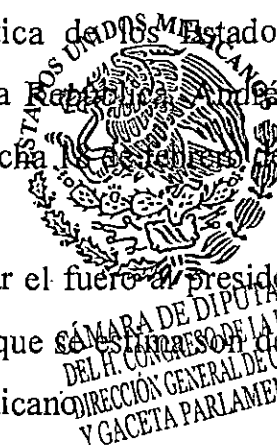
... de Justicia de la Nación y a los congresos de los estados y al Congreso de la Ciudad de México.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero. De conformidad con el acuerdo aprobado, la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se hará en lo general y en lo particular en un solo acto.

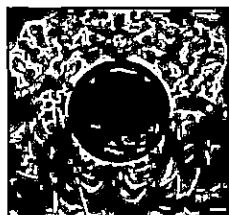
Tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por quince minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, con la venia de la Presidencia. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, suscrita por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, de la que se dio cuenta en sesión celebrada en fecha 18 de septiembre de 2020.

En esta iniciativa, el titular del Ejecutivo federal propone retirar el fuero al presidente de la República cuando se le acusara de cometer una serie de delitos que se estimen de extrema gravedad y que causan un severo daño al Estado y al pueblo mexicano.



9d16d2f8b1fe10abca32a6a4c39626af68e6836931c77386db724eed52bad894



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

Dirección General de Crónica y Gaceta Parlamentaria

GILBERTO BECERRIL OLIVARES, DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA Y GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y CON FUNDAMENTO EN EL APARTADO 2.1.3, INCISO H) DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES COPIAS QUE CONSTA DE CUATRO HOJAS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON EL EJEMPLAR QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, DOY FE EN EL SALÓN DE ACTOS LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020.



**CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÓNICA
Y GACETA PARLAMENTARIA**

DIRECTOR GENERAL DE CRÓNICA Y GACETA PARLAMENTARIA.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Controversia
Constitucional 211/2020

NOMBRE DEL PROMOVENTE: Cámara de Diputados

NÚMERO DE COPIAS: 30 Fojas

NÚMERO DE ANEXOS: 2 anexos

FOLIO: 6792

9d16d2f8b1fe10abca32a6a4c39626af68e6836931c77386db724eed52bad894

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Evidencia criptográfica.



SECRETARIA DE GOBERNACION

COPIA CERTIFICADA DE LA EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, No. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITA POR LA LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA TURCOTT GONZÁLEZ, DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96 QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN Y CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.-----



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

No. de edición del mes: 21

Ciudad de México, lunes 30 de noviembre de 2020

CONTENIDO

Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Bienestar
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría de Cultura
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Consejo de la Judicatura Federal
Banco de México
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Avisos
Índice en página 346 de la Segunda Sección

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**TÍTULO PRIMERO****DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN****CAPÍTULO I****Disposiciones Generales**

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2021, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La información que, en términos del presente Decreto, deba remitirse a la Cámara de Diputados será enviada a la Mesa Directiva de la misma, la cual turnará dicha información a las comisiones competentes, en forma impresa y en formato electrónico de texto modificable o de base de datos según corresponda, con el nivel de desagregación que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, y será publicada en las páginas de Internet que correspondan.

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea un día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

En el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría presentará información presupuestaria comparable respecto del ejercicio fiscal anterior y de los diversos documentos presupuestarios.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales la evolución de las erogaciones correspondientes a los anexos transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t), u) y v), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y las correspondientes al Anexo Transversal Anticorrupción; así como las principales causas de variación del gasto neto total al trimestre que corresponda, respecto del presupuesto aprobado, por ramo y entidad.

CAPÍTULO II**De las erogaciones**

Artículo 2. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$6,295,736,200,000, y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit presupuestario de \$718,193,400,000.



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido en los Anexos de este Decreto y Tomos de este Presupuesto de Egresos, de acuerdo con lo siguiente:

I. Las erogaciones de los ramos autónomos, administrativos y generales, así como los capítulos específicos que incorporan los flujos de efectivo de las Entidades, se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 1 del presente Decreto y los Tomos II a IX, de este Presupuesto de Egresos. En el Tomo I se incluye la información establecida en el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

II. El gasto corriente estructural se incluye en el Anexo 2 de este Decreto;

III. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los gastos obligatorios, se incluye en el Anexo 3 de este Decreto;

IV. El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales en términos del artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluye en el Anexo 4 de este Decreto, en términos de lo que se señala en el artículo 25 del mismo;

V. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el Anexo 5 de este Decreto;

VI. El capítulo específico que incorpora el monto máximo anual de gasto programable para atender los compromisos de pago requeridos para los nuevos proyectos de asociación público-privada y para aquellos autorizados en ejercicios fiscales anteriores, así como la información de cada uno de ellos, en términos del artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se incluye en el Anexo 5.A de este Decreto y en el Tomo VIII de este Presupuesto de Egresos;

VII. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el Anexo 6 de este Decreto y en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos;

VIII. El capítulo específico que incorpora las previsiones salariales y económicas, se incluye en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y en los Tomos III a VI de este Presupuesto de Egresos.

Los montos y términos aprobados en este capítulo específico en dichos Anexos y Tomos del Presupuesto de Egresos, incluyendo las previsiones para contingencias y sus ampliaciones derivadas de adecuaciones presupuestarias y ahorros necesarios durante el ejercicio fiscal para cumplir, en su caso, con las disposiciones laborales aplicables, forman parte de la asignación global a que se refiere el artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

IX. La suma de recursos destinados a cubrir el costo financiero de la deuda pública del Gobierno Federal; aquél correspondiente a la deuda de las empresas productivas del Estado incluidas en el Anexo 1, Apartado E, de este Decreto; las erogaciones derivadas de operaciones y programas de saneamiento financiero, así como aquellas para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 8 de este Decreto;

X. Para los efectos de los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas, serán los señalados en el Anexo 9 de este Decreto. Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al Valor Agregado;

XI. Los recursos para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas se señalan en el Anexo 10 de este Decreto, en los términos del artículo 26, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al artículo 41, fracción II, inciso j), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se presentan desglosados por ramo y programa presupuestario;

XII. Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se señalan en el Anexo 11 de este Decreto, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

XIII. El monto total de los recursos previstos para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se señala en el Anexo 12 de este Decreto;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

XIV. Las erogaciones de los programas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se señalan en el Anexo 13 de este Decreto;

XV. El presupuesto consolidado de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, conforme al artículo 24 de la Ley de Transición Energética, se señala en el Anexo 15 de este Decreto;

XVI. Las erogaciones para el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 20 de este Decreto;

XVII. Las erogaciones para el Ramo General 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 21 de este Decreto.

Las provisiones para servicios personales del Ramo General referidos en el párrafo anterior, que se destinen para sufragar las medidas salariales y económicas, deberán ser ejercidas conforme a lo que establece el segundo párrafo de la fracción VIII anterior y el artículo 13 de este Decreto y serán entregadas a las entidades federativas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y, solo en el caso de la Ciudad de México se ejercerán por medio del Ramo General 25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos;

XVIII. Las erogaciones para el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 22 de este Decreto.

En términos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esa Ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por lo anterior, para el cálculo de la distribución deberá considerarse la información del Censo de Población y Vivienda 2020. En caso de que dicha información no esté publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa dada a conocer por el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En términos de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría continuará distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a las entidades federativas, con base en la fórmula señalada en ese artículo, sujetándose a lo siguiente:

a) Para determinar la variable PIB_{pci} , definida como la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i , en caso de no estar disponible esa información, se deberá tomar en cuenta la última información del Producto Interno Bruto por entidad federativa anual que dé a conocer el Instituto referido, misma que se dividirá entre la información de la última publicación de proyección de la población a mitad de año con información anual, que dé a conocer el Consejo Nacional de Población. Cabe señalar, que ambas variables deberán corresponder al mismo año para cada entidad federativa, y

b) Con respecto a la variable n_i , definida como la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i , se deberá considerar la información del Censo de Población y Vivienda 2020, y de no estar publicada en la página institucional de dicho Instituto, se deberá tomar en cuenta la última información trimestral de población por entidad federativa, que dé a conocer el Instituto referido, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

La Secretaría, en relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, continuará transfiriendo a las entidades federativas que así lo soliciten a la Federación hasta el 100 por ciento de las aportaciones con cargo a cada Fondo, en el fideicomiso o vehículo financiero que determinen precedentemente, siempre y cuando se encuentre previsto en su legislación local; y cuya administración y ejercicio de dichos recursos serán responsabilidad de los gobiernos de las entidades federativas, los cuales deberán destinarse exclusivamente para los objetivos y fines expresamente previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y cumplir íntegramente con lo establecido en la misma y demás disposiciones aplicables.

Asimismo, las entidades federativas en el fideicomiso o vehículo financiero que instrumenten conforme a su legislación local, podrán continuar afectando las aportaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en garantía o fuente de pago hasta por el 25 por ciento de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de dichos Fondos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal;



XIX. Los límites de las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación se señalan en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos;

XX. Las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas para los Ramos Generales 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se distribuyen conforme a lo establecido en el Anexo 24 de este Decreto;

XXI. Los programas sujetos a reglas de operación se señalan en el Anexo 25 de este Decreto;

XXII. Los principales programas previstos en este Presupuesto de Egresos se detallan en el Anexo 26 de este Decreto, y

XXIII. Los recursos para el Anexo Transversal Anticorrupción se señalan en el Anexo 31 de este Decreto.

Los Anexos 14, 18 al 19 y 28 al 30 de este Decreto, comprenden los recursos para la atención de grupos vulnerables; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; el desarrollo de los jóvenes; la atención de niñas, niños y adolescentes; la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; la conservación y mantenimiento carretero; subsidios para organismos descentralizados estatales, y la distribución del programa hidráulico: subsidios para acciones en materia de agua.

Asimismo, en el Anexo 27 de este Decreto se consideran los recursos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que tendrá por objeto atender a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, con un enfoque de derechos humanos, de conformidad con las declaratorias correspondientes conforme a lo previsto en la Ley General de Protección Civil. La aplicación y erogación de los recursos que se otorgarán a través de este Programa, así como su seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia, se sujetarán a las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Artículo 4. Para el presente ejercicio fiscal no se incluyen recursos para el Programa Erogaciones Contingentes, correspondiente a la partida secreta a que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Para el ejercicio fiscal 2021 se aprueba para Petróleos Mexicanos una meta de balance financiero de -\$92,687,000,000 y un techo de gasto de servicios personales de \$93,632,929,374. Asimismo, se aprueba para la Comisión Federal de Electricidad una meta de balance financiero de \$28,500,000,000, y un techo de gasto de servicios personales de \$62,460,041,455.

Artículo 6. Conforme al artículo 272 de la Ley del Seguro Social, el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de \$901,687,110,152. El Gobierno Federal aportará al Instituto la cantidad de \$110,952,564,617, como aportaciones para los seguros; dispondrá de la cantidad de \$409,179,302,312, para cubrir las pensiones en curso de pago derivadas del artículo Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995; aportará la cantidad de \$5,429,653,204, para atender lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley, y aportará la cantidad de \$21,678,502; para atender lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2019.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá destinar a las Reservas Financieras y Actuariales de los seguros y a la Reserva General Financiera y Actuarial, así como al Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, a que se refieren los artículos 280, fracciones III y IV, y 286 K, respectivamente, de la Ley del Seguro Social, la cantidad de \$31,857,124,231, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a los seguros que se establecen en dicha Ley; así como para hacer frente a las obligaciones laborales que contraiga, ya sea por disposición legal o contractual con sus trabajadores.

Para los efectos del artículo 277 G de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá sujetarse a las normas de austeridad y disciplina presupuestaria contenidas en este Decreto, en los términos propuestos por el Consejo Técnico de dicho Instituto las cuales se aplicarán sin afectar el servicio público que está obligado a prestar a sus derechohabientes; asimismo, conforme al mismo artículo 277 G, dichas normas no deberán afectar las metas de constitución o incremento de reservas establecidas en este Decreto.



El uso de reservas de cualquier naturaleza y tipo deberá ser registrado invariablemente como gasto programable. Asimismo, las reservas del Seguro de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo, únicamente podrán destinarse para las prestaciones monetarias de esos seguros; y no para financiar gasto corriente del Instituto, salvo en los casos que así lo prevea la Ley del Seguro Social.

El titular y los servidores públicos competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social serán responsables de que el ejercicio del gasto de dicho Instituto se sujete a los montos autorizados para cubrir su gasto programable, para las reservas y el fondo a que se refiere este artículo.

TÍTULO SEGUNDO

DEL FEDERALISMO

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
a los municipios y a las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México

Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente:

1. El resultado de la distribución entre las entidades federativas de los recursos que integran los fondos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se presenta en el Tomo IV de este Presupuesto de Egresos, con excepción del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuya distribución se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Los recursos federales a que se refiere este artículo, distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, serán ministrados siempre y cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cumplan con lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, los convenios correspondientes;

III. Los proyectos de infraestructura que realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los recursos de los fondos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, deberán incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales", sin perjuicio de las demás que establezca el presente Decreto.

La Secretaría deberá publicar de forma trimestral, en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria, la información relativa a los proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, incluyendo el monto aprobado y pagado, su ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos recursos. Asimismo, deberá informar en dicho medio el avance financiero de los proyectos con base en los reportes que, de conformidad con la normatividad aplicable, realicen las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La información anterior, deberá estar disponible, a su vez, en formato de datos abiertos;

IV. Los programas que prevean la aportación de recursos por parte de las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para ser ejercidos de manera concurrente con recursos federales, se sujetarán a lo siguiente:

a) El porcentaje o monto que corresponda aportar a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será establecido por las Dependencias a cargo de los respectivos programas;

b) Dichos órdenes de gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que les correspondan en las cuentas bancarias productivas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo con el calendario establecido en los convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de marzo.

Antes del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, las entidades federativas y, en su caso, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga para realizar la aportación correspondiente de recursos locales, hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.



c) La entidad federativa, municipio o demarcación territorial que se vea afectado por situaciones que obliguen al Ejecutivo Federal a emitir declaratorias de emergencia o de desastre natural, en los términos de la Ley General de Protección Civil, contará con una prórroga de 20 días hábiles adicionales para efectuar el depósito de las aportaciones que le correspondan, una vez publicada la declaratoria;

d) Las entidades federativas podrán cubrir hasta en dos exhibiciones durante el ejercicio fiscal su aportación a los programas concurrentes en materia educativa para todos los niveles, y

e) Las ministraciones de recursos federales podrán ser suspendidas cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México no aporten en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas;

V. La Secretaría de Educación Pública comunicará a las entidades federativas a más tardar el último día hábil del mes de marzo, el presupuesto para el subsidio para organismos descentralizados estatales que la Federación otorga, así como para los programas financiados con fondos concurrentes;

VI. En caso de que, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deban realizarse ajustes o adecuaciones al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal, una vez que se realicen las compensaciones previstas en la misma y, en su caso, una vez utilizados los recursos de las reservas que correspondan en términos de dicha ley, los ajustes que fuera necesario realizar a los recursos federales distintos a los contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal destinados a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán efectuarse de manera proporcional a los demás ajustes al Presupuesto de Egresos, informando de tales ajustes o adecuaciones a la Cámara de Diputados;

VII. Los recursos federales vinculados con ingresos excedentes que, en los términos de los artículos 19, fracción IV, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 12, sexto párrafo, de su Reglamento, tengan como destino la realización de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, se sujetarán a las disposiciones aplicables del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIEE). Dichos recursos se considerarán devengados al momento de su aportación al patrimonio de este Fideicomiso, y el ejercicio de los mismos por parte de las entidades federativas se realizará conforme a los calendarios de ejecución registrados por éstas ante la Secretaría para los proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento. En el caso de los subsidios que tengan el mismo destino, la Secretaría deberá entregar los recursos a las entidades federativas de acuerdo con un calendario establecido y podrá emitir las disposiciones correspondientes para comprobación de los mismos en términos de los artículos 34 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

VIII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán enviar a la Secretaría, a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la información de las evaluaciones que lleven a cabo sobre recursos federales transferidos, en los términos de las disposiciones aplicables. La Secretaría deberá reportar dicha información en los informes Trimestrales;

IX. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobará a más tardar en el mes de enero, los criterios de distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para efectos del párrafo anterior, se promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos previstos en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se destinen a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, al aprobar los criterios para la distribución de los recursos de los fondos de ayuda federal que se otorguen a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la seguridad pública, promoverá y vigilará que su aplicación se oriente al cumplimiento de los ejes estratégicos y programas con prioridad nacional definidos por dicho Consejo, así como que su erogación se realice en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Para tales efectos, los convenios relativos a estos fondos establecerán mecanismos que contribuyan a agilizar la recepción y el ejercicio de los recursos que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Dicho Consejo promoverá que, por lo menos, el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se distribuya entre los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos para seguridad pública, a través del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios deberán alinear, en su caso, la aplicación de los recursos para implementar y operar el modelo de desarrollo y operación policial previsto en la ley de la materia, conforme a los ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y

X. Durante los primeros 10 días naturales del mes de febrero, las entidades federativas deberán enviar a la Secretaría, en forma impresa y en formato electrónico de base de datos, el calendario de distribución y montos que de los fondos a los que se refieren los artículos 35 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan para el ejercicio fiscal 2021 a sus municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

Artículo 8. Las entidades federativas y, en su caso, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que realicen proyectos de infraestructura con recursos del Ramo General 23 deberán reportar a la Secretaría, en los términos que ésta determine y a través del sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del contrato bajo el cual se realicen dichos proyectos, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Las entidades federativas serán responsables de la veracidad de la información reportada.

TÍTULO TERCERO

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 9. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas aplicables, según corresponda. Al efecto, la Secretaría informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, a partir del 1o. de abril, sobre dichos subejercicios. En el caso de las economías generadas durante el ejercicio fiscal, éstas deberán canalizarse a los programas y Tomos aprobados en este Presupuesto de Egresos.

La determinación de los subejercicios se realizará conforme a los calendarios autorizados, en los términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CAPÍTULO II

De las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria

Artículo 10. Las Dependencias y Entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley Federal de Austeridad Republicana y en las disposiciones de austeridad republicana emitidas por el Ejecutivo Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias y Entidades observarán las disposiciones siguientes:

I. No crear plazas, salvo que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en este Presupuesto de Egresos, o que sean resultado de reformas jurídicas; así como por determinación de la Secretaría en los supuestos en que las mismas generen los ingresos para cubrir su gasto respectivo, o bien, que tengan como finalidad atender situaciones de carácter emergente o contingente;

II. Los incrementos que, en su caso, se otorguen a los servidores públicos, se sujetarán a los recursos aprobados en los Anexos 7 y 24 de este Decreto y tendrán como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto del año 2020;

III. Las Dependencias y Entidades no podrán crear estructuras orgánicas y ocupacionales excesivas, y se sujetarán a lo que establezca la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;

IV. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales continuará las acciones para el mejor uso y aprovechamiento inmobiliario que considere, entre otras, la puesta a disposición de inmuebles desaprovechados, mismos que podrán ser utilizados para resolver necesidades de otras instituciones públicas o, en su defecto, para su desincorporación y enajenación. Para tal efecto, dicho Instituto actualizará el programa de aprovechamiento inmobiliario federal mismo que deberá publicarse en su portal de Internet, así como podrá realizar verificaciones a los inmuebles que así considere, previo aviso a la institución pública de que se trata. Las acciones derivadas del programa deberán sujetarse al presupuesto aprobado para las Dependencias y Entidades;



V. Las contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, siempre y cuando se asegure la obtención de ahorros y de las mejores condiciones para el Estado en cuanto a calidad, precio y oportunidad disponibles; para tal efecto, las Dependencias y Entidades podrán realizar las transferencias de recursos conforme a las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, se utilizará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos en las licitaciones públicas que se realicen cuando los bienes a adquirir o servicios por contratar satisfagan los requisitos y condiciones que establece la normatividad en la materia y se asegure con ello la obtención de las mejores condiciones para el Estado;

VI. Las Dependencias y Entidades que tengan contratadas pólizas de seguros sobre personas y bienes deberán llevar a cabo las acciones necesarias para incorporarse a las pólizas institucionales coordinadas por la Secretaría, siempre y cuando dicha incorporación represente una reducción en el gasto global y que se mantengan o mejoren las condiciones contratadas en la póliza, y

VII. La Secretaría podrá establecer mecanismos financieros de cobertura de riesgos para atender obligaciones contingentes relacionadas con bienes culturales de las Dependencias y Entidades, considerando las asignaciones con las que cuenten para tal fin, así como de aquellas obras de arte que ingresen al territorio nacional para su exhibición al público en general.

Las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos. Para ello, se integrará la información que al respecto contenga el sistema CompraNet o, en su caso, el que determine la Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La Secretaría, desde el ámbito del control presupuestario, podrá autorizar en casos excepcionales modalidades específicas de aplicación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria referidas en las fracciones anteriores, o bien en los supuestos que las Dependencias y Entidades, que sean objeto de reformas jurídicas, de nueva creación o cuando se realicen modificaciones a su estructura programática.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos, deberán implantar medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, respecto de la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en sus respectivas páginas de Internet, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro. Asimismo, reportarán en los informes Trimestrales las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos. Dichos reportes serán considerados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.

La Secretaría reportará en los informes trimestrales las variaciones en el gasto corriente estructural.

Artículo 11. En materia de comunicación social, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se sujetarán a la Ley General de Comunicación Social y a las demás disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de las Dependencias y Entidades, adicionalmente, se sujetarán a la política de comunicación social del Gobierno Federal que formule la Oficina de la Presidencia de la República, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación. Asimismo, los ejecutores de gasto deberán observar lo siguiente:

I. Podrán destinar recursos presupuestarios para la difusión de campañas de comunicación social, a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado los tiempos oficiales, y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.

No podrán realizarse erogaciones en comunicación social en las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Solo podrán realizarse erogaciones en los tiempos a que se refiere el párrafo anterior, en los casos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación en la materia;

II. Las Dependencias y Entidades registrarán la información a la que se refiere el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social, en el sistema respectivo, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique la Secretaría de Gobernación, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Ley señalada;

III. Las erogaciones que conforme a este artículo realicen las Entidades deberán ser autorizadas por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

IV. Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones y/o traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto, al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo que dichos recursos se destinen a mensajes para atender situaciones de carácter preventivo o contingente; que tengan como propósito mantener la prestación de servicios a la población que no se puedan atender de manera presencial derivado de situaciones emergentes; que se requieran para la promoción comercial de las Entidades para que generen mayores ingresos; que tengan como propósito promover a México como destino turístico en el extranjero, o que se realicen con cargo a los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos, los ejecutores de gasto deberán obtener de la Secretaría de Gobernación la autorización del programa de comunicación social o bien de la modificación respectiva, para lo cual señalarán el costo y su fuente de financiamiento y, posteriormente, deberán realizar el trámite de adecuación presupuestaria ante la Secretaría.

V. Una vez que las Dependencias y Entidades cuenten con los recursos autorizados conforme a la fracción anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, presentará a la Cámara de Diputados a través de la Comisión competente, un informe con las razones que justifican la ampliación o traspaso correspondiente, así como su cuantía y modalidades de ejercicio.

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que, conforme a la Ley General de Comunicación Social, deban cumplir las Dependencias y Entidades;

VI. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán únicamente con órdenes de transmisión para medios electrónicos, con órdenes de inserción para medios impresos y con órdenes de servicio para medios complementarios. En todos los casos se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura geográfica, circulación certificada y pautas de difusión en relación con el medio de comunicación que corresponda;

VII. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las Dependencias y Entidades;

VIII. La Función Pública, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Comunicación Social, a través del sistema respectivo dará seguimiento al registro que realicen las Dependencias y Entidades sobre las erogaciones en materia de Comunicación Social;

IX. El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto de Egresos deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables, y

X. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las Dependencias y Entidades, que cuenten con recursos en este Presupuesto de Egresos para Comunicación Social, deben elaborar sus respectivos Programas Anuales de Comunicación Social, de conformidad y en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 12. Para lograr una mayor transparencia en materia de contrataciones públicas, promover la reactivación económica y fortalecer las cadenas productivas, las Dependencias y Entidades que realicen adquisiciones de bienes y contratación de servicios o de obra pública, se sujetarán al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., a fin de dar de alta en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa, las cuales serán emitidas por la Secretaría e interpretadas por la unidad administrativa de la misma que ejerza las facultades de coordinación con las instituciones de banca de desarrollo.

Con el propósito de fomentar la transparencia, frotándose de las empresas productivas del Estado, éstas podrán incorporarse al Programa de Cadenas Productivas, con el objeto de que sus proveedores y contratistas sean beneficiados con este programa.

El registro de las cuentas por pagar deberá realizarse de acuerdo con los plazos definidos en dichas disposiciones, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con el apoyo de dichas Dependencias y Entidades y, en su caso, las empresas productivas del Estado, promoverá la utilización del Programa de Cadenas Productivas con los proveedores y contratistas del sector público y reportará los avances que se presenten en los Informes Trimestrales.



CAPÍTULO III

De los servicios personales

Artículo 13. Los recursos previstos en los presupuestos de las Dependencias y Entidades en materia de servicios personales y, en su caso, en los ramos generales, incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas, y se sujetarán a lo siguiente:

I. Los incrementos a las percepciones se determinarán, conforme a:

a) La estructura ocupacional autorizada;

b) Las plazas registradas en el sistema de administración de nómina y demás elementos previstos en el caso del artículo 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para el caso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

c) La plantilla de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y

d) Las plantillas de personal, tratándose del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); y, en el caso de los servicios de educación para adultos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las previsiones para el incremento a las percepciones, a que se refieren los Anexos 7 y 24 de este Decreto, incluyen la totalidad de los recursos para categorías y personal de confianza y sindicalizado, por lo que no deberá utilizarse la asignación prevista a un grupo para favorecer a otro;

II. En el presente ejercicio fiscal en las Dependencias y Entidades no se crearán plazas en nivel alguno, con excepción de los casos previstos en el artículo 10, fracción I, de este Decreto;

III. Las previsiones a que se refiere el Anexo 24 de este Decreto incluyen los recursos para la educación tecnológica y de adultos correspondientes a aquellas entidades federativas que no han celebrado los convenios establecidos en el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal. Una vez que dichas entidades celebren los convenios respectivos, dichos recursos serán entregados a éstas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

IV. Los recursos del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, incluyen las previsiones para cubrir:

a) Las medidas salariales y económicas correspondientes al fondo previsto en los artículos 26, 26-A, 27 y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal y al Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), que serán cubiertas a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

b) Las medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Asimismo, las previsiones para incrementos a las percepciones incluyen las correspondientes a los sistemas de desarrollo profesional que, en su caso, correspondan en los términos de la ley de la materia; y

c) Las plazas que sean creadas con cargo a los recursos establecidos en el rubro de previsiones salariales y económicas del Ramo General 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, para su aplicación a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, de acuerdo con la normatividad aplicable; y

V. Las previsiones incluidas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), incluyen los recursos para cubrir aquellas medidas económicas que se requieran para la cobertura y el mejoramiento de la calidad del sistema de salud.

Las Dependencias y Entidades reportarán en los informes trimestrales el impacto de los incrementos salariales en el presupuesto regularizable.

Artículo 14. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto, en su Anexo 23 y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la Federación.

Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias considerarán los elementos variables de dicha remuneración, la cual solo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

En aquellos puestos de personal militar y, en su caso, en los que se establezcan en las disposiciones específicas que emita la Secretaría y la Función Pública, respecto de las Dependencias cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de sueldos y salarios. Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este párrafo, incluyendo los conceptos extraordinarios señalados, deberán sujetarse en todo momento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Función Pública evaluará la gravedad del riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario.

La Secretaría podrá autorizar, en términos de las disposiciones específicas que emita, el otorgamiento de compensaciones económicas para el personal que integra la Guardia Nacional como parte de su sistema de remuneraciones, así como de los sistemas complementarios de seguridad social, sin que lo anterior comprometa recursos de largo plazo mayores a los autorizados en los términos de este Decreto.

Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causen por las percepciones señaladas en la presente fracción, forman parte de su remuneración;

II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la República y los límites de remuneración mensual para la Administración Pública Federal se integran en términos de las percepciones previstas en el presente Decreto y, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el Anexo 23.1.1. de este Decreto y comprenden los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de impuestos correspondiente:

- I. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y
- II. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos de las percepciones ordinarias presentadas en el Anexo 23.1. no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente ejercicio fiscal, las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, ni las adecuaciones a la curva salarial del tabulador.

b) La remuneración ordinaria total líquida mensual neta autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.2. de este Decreto, y

c) La remuneración total anual de percepciones ordinarias autorizada al Presidente de la República para el ejercicio fiscal de 2021 se incluye en el Anexo 23.1.3. de este Decreto;

III. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores de gasto que a continuación se indican y los límites correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I, primer párrafo, de este artículo, se presentan en los Anexos siguientes de este Decreto:

- a) Anexo 23.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;
- b) Anexo 23.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;
- c) Anexo 23.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;
- d) Anexo 23.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- e) Anexo 23.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;
- f) Anexo 23.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- g) Anexo 23.8. Ramo 22: Instituto Nacional Electoral;
- h) Anexo 23.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
- i) Anexo 23.10. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia Económica;
- j) Anexo 23.11. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;



k) Anexo 23.12. Ramo 44: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

l) Anexo 23.13. Ramo 49: Fiscalía General de la República, y

m) Anexo 23.14. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se presenta en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos.

Las Dependencias y Entidades podrán modificar las percepciones ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 23.1. del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de servicios personales.

Las Entidades que cuenten con planes de compensación acordes con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan de compensación con la política de planeación y administración de personal de la Administración Pública Federal.

Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las Dependencias y Entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a éstos.

Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren a los servidores públicos a su cargo y, en los casos correspondientes, al personal militar, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Las Dependencias y Entidades deberán reportar a la Secretaría, a través del sistema que para tales efectos esta determine, la información relativa a las plazas ocupadas de su plantilla autorizada, para efectos del control presupuestario de los servicios personales, en términos de las disposiciones específicas que emita la Secretaría.

Los Poderes Legislativo y Judicial, las Dependencias y Entidades, así como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien por el término de la administración correspondiente.

Artículo 15. Los servidores públicos de mando y personal de enlace de las Dependencias y Entidades solo podrán percibir las prestaciones establecidas en el manual a que se refiere el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, las Dependencias y Entidades no podrán destinar recursos para cubrir prestaciones en adición a aquéllas previstos en el gasto de servicios personales aprobado en este Presupuesto de Egresos.

En los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo y de los contratos colectivos de trabajo que realicen las Dependencias y Entidades se deberán sujetar a su presupuesto autorizado.

Los titulares de las Entidades informarán a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría y a la Función Pública, sobre los resultados obtenidos en los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y de las revisiones de salario que, en su caso, realicen en el presente ejercicio fiscal. Dichos informes, incluyendo el reporte sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65, fracción XII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, serán presentados, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de dichas negociaciones.

Las Dependencias y Entidades enviarán informes a la Secretaría con el detalle de todas las prestaciones que perciben los servidores públicos a su cargo, así como el gasto total destinado al pago de las mismas en el periodo correspondiente, a fin de que se incluyan en los informes Trimestrales.

Artículo 16. Las Dependencias y Entidades observarán las siguientes disposiciones en materia de servicios personales:

I. Solicitarán autorización presupuestaria de la Secretaría, respecto de sus tabuladores, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Base V del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

II. Los pagos retroactivos por ocupación de plazas, cuando procedan, solo podrán comprender hasta 45 días naturales anteriores a la fecha en que el servidor público correspondiente reciba su nombramiento. Lo anterior, siempre y cuando se acredite fehacientemente la asistencia y desempeño del servicio durante dicho periodo en la plaza respectiva, y

III. Podrán traspasarse las plazas necesarias de las Dependencias y Entidades, que con motivo de una reestructura en la Administración Pública Federal, derivada de una reforma legal o a ordenamientos de carácter administrativo, asuman funciones de aquéllas que se transformen, compacten, eliminen o sean creadas, para lo cual se deberá contar con la autorización presupuestaria de la Secretaría, conforme al mecanismo presupuestario que establezca para dichos fines.

Artículo 17. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuraciones a la Administración Pública Federal; la desincorporación de Entidades; la cancelación de plazas, o la eliminación de unidades administrativas de las Dependencias o Entidades, en los términos de las disposiciones específicas que, al efecto, emita la propia Secretaría.

Dichas disposiciones específicas establecerán, entre otros aspectos, los montos de la compensación económica, los cuales se podrán cubrir con recursos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas o conforme al mecanismo presupuestario y de pago que se determine; los tipos de personal que podrán acogerse al mismo, considerando no afectar la prestación de servicios públicos; así como el procedimiento que deberán seguir las Dependencias y Entidades correspondientes para su aplicación.

Artículo 18. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberán remitir a la Secretaría los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a su presupuesto de servicios personales aprobado.

Artículo 19. Las instituciones de banca de desarrollo deberán remitir a la Secretaría para el registro correspondiente los tabuladores y la estructura ocupacional autorizados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, el manual que regule las remuneraciones para los servidores públicos a su servicio, incluyendo a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Magistrados y Jueces del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura Federal; Presidentes y miembros de los órganos de gobierno de los entes autónomos; así como a los demás servidores públicos, en el que se proporcione la información completa y detallada relativa a las remuneraciones que se cubran para cada uno de los niveles jerárquicos que los conforman.

Adicionalmente, deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha antes señalada, la estructura ocupacional que contenga la integración de los recursos aprobados en el capítulo de servicios personales, con la desagregación de su plantilla total, incluidas las plazas a que se refiere el párrafo anterior, junto con las del personal operativo, eventual y el contratado bajo el régimen de honorarios, en el que se identifiquen todos los conceptos de pago y aportaciones de seguridad social que se otorguen con base en disposiciones emitidas por sus órganos competentes, así como la totalidad de las plazas vacantes con que cuenten a dicha fecha.

En tanto no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y la estructura ocupacional a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, no procederá el pago de estímulos, incentivos, reconocimientos o gastos equivalentes a los mismos.

CAPÍTULO IV

De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 21. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ejecutivo Federal impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán considerar lo siguiente:

I. Incorporar los principios de igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en el instrumento de seguimiento del desempeño de los programas bajo su responsabilidad;



II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad, en su caso, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, y población indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan;

III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres;

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su responsabilidad, las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género, y

V. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Las acciones contenidas en las fracciones anteriores serán obligatorias en lo relativo a los programas y acciones incorporadas en el Anexo 13 del presente Decreto y para los demás programas federales que correspondan.

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas dirigidos a mujeres y atribuciones para lograr la igualdad de género entre mujeres y hombres, así como las entidades federativas y municipios que reciban recursos etiquetados incluidos en el Anexo 13 de este Decreto, deberán suscribir los convenios respectivos durante el primer trimestre, así como informar sobre los resultados de los mismos, los publicarán y difundirán para darlos a conocer a la población e informarla, en las lenguas nacionales reconocidas por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas existentes en la entidad federativa, sobre los beneficios y requisitos para acceder a ellos, en los términos de la normativa aplicable.

Para el seguimiento de los recursos destinados a la igualdad de género entre mujeres y hombres, todo programa federal que contenga padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en su instrumento de seguimiento del desempeño, generará, cuando ello sea factible y sujetándose a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales, información de manera desagregada, al menos por edad, sexo, entidad federativa, municipio o demarcación territorial, grado máximo de estudios y pertenencia étnica. Los padrones deberán tener una versión pública, la cual estará disponible para su consulta. Las Dependencias y Entidades con presupuesto asignado dentro del Anexo 13, que realicen estudios y generen bases de datos o levantamientos de encuestas, deberán hacer públicos sus resultados en sus portales institucionales con el propósito de poder realizar evaluaciones y análisis posteriores. Las Dependencias y Entidades responsables de la coordinación de los programas contenidos en el Anexo 13 del presente Decreto informarán trimestralmente a través del sistema de información desarrollado por la Secretaría, y en el Sistema de Evaluación de Desempeño en los términos y plazos establecidos en las disposiciones respectivas, sobre los aspectos presupuestarios de los programas y los resultados alcanzados en materia de mujeres e igualdad de género, medidos a través de los indicadores y sus metas contenidos en el instrumento de seguimiento respectivo. Asimismo, se detallarán los aspectos por cada programa presupuestario, contenido en el Anexo mencionado, la población objetivo y atendida, los indicadores utilizados, la programación y el avance en el ejercicio de los recursos.

La Secretaría presentará en los Informes Trimestrales los avances financieros y programáticos que le envíe el Instituto Nacional de las Mujeres con base en la información que a éste le proporcionen las Dependencias y Entidades responsables de los programas a través del sistema indicado en el párrafo anterior.

El Instituto Nacional de las Mujeres remitirá el informe mencionado anteriormente a la Cámara de Diputados, a más tardar a los 30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. Asimismo, deberá poner dicho informe a disposición del público en general a través de su página de Internet, en la misma fecha en que se publiquen los Informes Trimestrales.

La información que se publique trimestralmente servirá para las evaluaciones que se realicen en el marco de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores del gasto público federal promoverán programas y acciones para cumplir con el Programa y las acciones derivadas del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, respectivamente.



Los resultados de los montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el Anexo 13 de este Decreto se detallarán en un anexo específico dentro de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres revisará las reglas de operación de los programas del Anexo 13 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las menciones realizadas en el presente Decreto con respecto a beneficiarios, así como a titulares y servidores públicos de los ejecutores de gasto, se entenderán referidas a las mujeres y los hombres que integren el grupo de personas correspondiente.

CAPÍTULO V

De la inclusión de las personas con discapacidad

Artículo 22. Las Dependencias y Entidades, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

A más tardar el último día hábil de octubre, las Dependencias y Entidades entregarán un reporte a la Secretaría de Bienestar, en relación con las acciones señaladas en este artículo.

El reporte al que se refiere el párrafo anterior, deberá ser enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión para su turno a las Comisiones competentes.

CAPÍTULO VI

Del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas

Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a IX, y Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Dependencias y Entidades, al ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:

VI. Las disposiciones para la operación de los programas que la Administración Pública Federal desarrolle en la materia considerarán la participación que, en su caso, tenga el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, contando con la intervención que corresponda al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, para facilitar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a sus beneficios;

II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;

III. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus Dependencias y Entidades, podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados, exclusivamente para que los recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, sean registrados por la entidad federativa en su Cuenta Pública.

IV. Las reglas de operación de los programas operados por las Dependencias y Entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y requisitos existentes. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados podrán integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto comprendido en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas del presente Decreto.

V. Se dará preferencia en los programas de infraestructura a la conclusión de obras iniciadas en ejercicios anteriores, así como a las obras de mantenimiento y reconstrucción.



VI. Se buscará la inclusión financiera de las comunidades indígenas mediante programas de la banca de desarrollo y, en su caso, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y

VII. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas podrá emitir opinión sobre los Programas previstos en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que la ejecución de los recursos sea debidamente focalizada, cuente con perspectiva de derechos indígenas y pertinencia cultural.

CAPÍTULO VII

De la inversión pública

Artículo 24. En el presente ejercicio fiscal se podrán comprometer nuevos proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y de inversión condicionada, a que se refieren los artículos 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley Federal de Deuda Pública, por la cantidad señalada en el Anexo 6.A, de este Decreto, correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad.

El monto autorizado a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa y condicionada, aprobados en ejercicios fiscales anteriores, asciende a la cantidad señalada en el Anexo 6.B, de este Decreto. Las variaciones en los compromisos de cada uno de dichos proyectos se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

La suma de los montos autorizados de proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y los montos para nuevos proyectos se presentan en el Anexo 6.C, de este Decreto.

Los compromisos correspondientes a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores, se detallan en el Anexo 6.D, de este Decreto y comprenden exclusivamente los costos asociados a la adquisición de los activos, excluyendo los relativos al financiamiento en el periodo de operación de dichos proyectos.

Por lo que se refiere a los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión condicionada, en caso de que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presente ejercicio fiscal surja la obligación de adquirir los bienes en los términos del contrato respectivo, el monto máximo de compromiso de inversión será aquel establecido en el Anexo 6.E, de este Decreto.

Las previsiones necesarias para cubrir las obligaciones de inversión física por concepto de amortizaciones y costo financiero de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión directa, que tienen efectos en el gasto del presente ejercicio en los términos de las disposiciones aplicables, se incluyen en el Anexo 6.F, de este Decreto. Dichas previsiones se especifican a nivel de flujo en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos y reflejan los montos presupuestarios autorizados, así como un desglose por proyecto.

Los montos de cada uno de los proyectos a que se refiere este artículo se detallan en el Tomo VII de este Presupuesto de Egresos.

En el último Informe Trimestral del ejercicio, adicionalmente se deberá incluir la información sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operación; los proyectos que están en construcción, su monto ejercido y comprometido; el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos, y la fecha de entrega y de entrada en operación de los proyectos. Esta información se deberá publicar en la página de Internet de la Comisión Federal de Electricidad.

Artículo 25. En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán nuevos proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se observa en el Anexo 4 de este Decreto.

CAPÍTULO VIII

De la evaluación del desempeño

Artículo 26. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, derivados del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, se sujetará a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los lineamientos emitidos por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones.

Las Dependencias y Entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:

I. Actualizar los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas presupuestarios.

Todos los programas deberán contar con un instrumento de seguimiento del desempeño en el que se deberá priorizar la inclusión de indicadores estratégicos.

Los programas que determine la Secretaría tendrán instrumentos de seguimiento del desempeño, en los cuales estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos. Para la actualización de los instrumentos de seguimiento del desempeño, se deberá considerar, al menos lo siguiente:

- a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios;
- b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis realizados conforme al programa anual de evaluación;
- c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los programas presupuestarios sujetos a las mismas;
- d) Los criterios y recomendaciones que, en su caso, emitan la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los términos de las disposiciones aplicables, y
- e) Los elementos contenidos en el diagnóstico a que refiere el numeral Vigésimo Primero de los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal.

Los instrumentos de seguimiento del desempeño deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran y sea factible, los enfoques transversales con perspectiva de género, juventud, discapacidad, y etnicidad y de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las Dependencias y Entidades deberán hacer públicos sus instrumentos de seguimiento al desempeño en su página de Internet.

La Secretaría reportará en los Informes Trimestrales el avance en las metas de los indicadores registrados de los programas presupuestarios que conforman el gasto programable previsto en los ramos administrativos y generales y en las Entidades sujetas a control presupuestario directo, considerando la periodicidad de medición de dichos indicadores;

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la Secretaría, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen;

III. La evaluación se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos en dicho programa, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán entregar los resultados de las evaluaciones de tipo complementarias a las que haga referencia el programa anual de evaluación y los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal, a más tardar 30 días posteriores a su realización, a la Cámara de Diputados, a la Auditoría, a la Secretaría y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores, así como ejecutar lo relacionado con las evaluaciones para 2021;

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales hallazgos y resultados de las evaluaciones conforme al Mecanismo para el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora vigente, definido por la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Los compromisos se formalizarán mediante instrumentos específicos, se reportarán los avances y resultados que se alcancen mediante el sistema de evaluación del desempeño y se publicarán en los términos de las disposiciones aplicables.

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y, en su caso, a ejercicios fiscales anteriores, se tomará en cuenta como parte de un proceso gradual y progresivo, durante 2021 y para los procesos presupuestarios subsecuentes;



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



V. Efectuar las evaluaciones de los programas presupuestarios en los siguientes términos:

a) Por sí mismas, o

b) A través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, instituciones académicas y de investigación, u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas. Asimismo, la contratación o ejecución, así como la supervisión de la evaluación se deberá realizar por una unidad administrativa ajena a la operación del programa a evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en los términos de las disposiciones aplicables.

En el supuesto a que se refiere el inciso b) de la presente fracción, las Dependencias y Entidades cubrirán el costo de las evaluaciones con cargo a su presupuesto y conforme al mecanismo de pago que se determine. Asimismo, podrán realizar contrataciones para que las evaluaciones a que se refiere este párrafo abarquen varios ejercicios fiscales, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El total de las erogaciones que, en su caso, se efectúen para realizar las diferentes etapas de las evaluaciones se deberá registrar de manera específica para su plena transparencia y rindición de cuentas;

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables.

Las Dependencias y Entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas, los resultados de las evaluaciones y el grado de cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora derivados de las mismas, en los Informes Trimestrales que corresponda, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Dicha información será publicada en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

Por su parte, la Secretaría integrará la información relativa al avance de cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean susceptibles de mejora. Asimismo, las Dependencias y Entidades publicarán dicha información en su página de Internet y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá publicar trimestralmente en su página de Internet los avances en el cumplimiento de los aspectos que sean susceptibles de mejora que se deriven de las evaluaciones contempladas en los programas anuales de evaluación.

Para tal efecto, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social remitirá a la Secretaría la información derivada de las evaluaciones que haya coordinado, dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del trimestre que se informa, en la forma que para tal efecto determine la Secretaría.

La Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, establecerán los modelos de términos de referencia y demás elementos particulares que se requieran para las evaluaciones y coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas;

VII. La Cámara de Diputados, a través de las comisiones, la Auditoría y los centros de estudios correspondientes que lo soliciten, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, tendrán acceso a la información relativa a los instrumentos de seguimiento del desempeño de los programas, al seguimiento del avance de cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, y a las evaluaciones realizadas, misma que será pública y estará disponible en las respectivas páginas de Internet de las Dependencias o Entidades correspondientes.

La Secretaría definirá los criterios específicos a seguir al respecto y proporcionará capacitación y asistencia técnica para que las instancias de la Cámara de Diputados que lo soliciten puedan llevar a cabo directamente las consultas y la generación de los reportes que requieran, con base en la información disponible en el sistema correspondiente;

VIII. La Secretaría podrá apoyar a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de planeación, programación, presupuesto, contabilidad y sistemas, así como para instrumentar la evaluación del desempeño, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

IX. Implantar mecanismos para innovar y modernizar el funcionamiento organizacional y el proceso de presupuesto y gasto público, con el objeto de que la información obtenida del seguimiento del cumplimiento de las metas de los indicadores de los programas, de las evaluaciones realizadas a los programas, y del seguimiento a los resultados de éstas, se utilice gradualmente en las decisiones presupuestarias y en la gestión de los programas. Lo anterior será coordinado por la Secretaría;



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

X. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del desempeño;

XI. Publicar en los portales de Internet de cada dependencia o entidad, para dar transparencia, todas las evaluaciones, estudios y encuestas, que con cargo a recursos fiscales hagan las Dependencias y Entidades, aun cuando no sean parte del Programa Anual de Evaluación, y

XII. Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a más tardar a los 20 días naturales posteriores al término del segundo trimestre de 2021, deberán enviar, en los términos que establezca la Secretaría y mediante el sistema al que hace referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, informes definitivos sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros, de los recursos federales que les fueron transferidos durante 2020. Lo anterior, sin perjuicio de la información que deben reportar al finalizar cada trimestre de 2021.

La Secretaría deberá incluir en el segundo Informe Trimestral la información definitiva anual a que hace referencia el párrafo anterior.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la información de su competencia que se entregue a la Secretaría, incluyendo su veracidad y calidad.

TÍTULO CUARTO DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 27. Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos señalados en el Anexo 25 de este Decreto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a reglas de operación. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:

- a) Deberán ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios;
- b) Se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes a los programas federales que por su naturaleza así lo permitan, sea desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo indispensable los gastos administrativos y de operación del programa respectivo; los gobiernos municipales deberán llevar un registro de beneficiarios y realizar el seguimiento, para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones;
- c) Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones socioeconómicas del país;
- d) Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales de la población objetivo;
- e) Preverán que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato;
- f) Se promoverá una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos;
- g) Se asegurará la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de recursos;
- h) Se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez, integridad, integración familiar, igualdad de género, inclusión social de las personas con discapacidad, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, incluyendo el fomento a las condiciones necesarias para que la libertad e igualdad de las personas sean reales y efectivas, según corresponda;
- i) Darán prioridad en la asignación presupuestaria a las acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad permanente y a los pueblos indígenas;
- j) Se promoverán mecanismos para facilitar a los mexicanos repatriados, el acceso a los beneficios de los programas y garantizar su atención y protección de manera prioritaria;
- k) Deberán promover la eliminación de aquellos obstáculos que limiten el ejercicio de los derechos e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos;



l) En ningún caso se podrá etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencias o ventajas sobre el resto de la población objetivo;

m) Se promoverá la transparencia y acceso a la información pública, así como la eficiencia y eficacia de los recursos públicos, y

n) Se promoverá el establecimiento de una estructura informática que permita homologar la información proveniente de los datos de los beneficiarios de los Programas;

II. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo dichos programas deberán observar las siguientes disposiciones para fomentar la transparencia de los mismos:

a) La papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para estos programas, por parte de las Dependencias y Entidades, así como, aquel relacionado con los recursos presupuestarios federales que se transfieran a las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que se aplique a través de anuncios en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos y restringirse a lo establecido en el artículo 11 de este Decreto;

b) Publicar en sus respectivas páginas de Internet el padrón de beneficiarios para los programas sujetos a reglas de operación, que deberá incluir nombre o razón social del beneficiario, municipio, entidad federativa y monto del apoyo otorgado o bien entregado;

c) Poner a disposición del público en general un medio de contacto directo, en el cual se proporcione asesoría sobre el llenado de los formatos y sobre el cumplimiento de los requisitos, y trámite que deben observarse para obtener los recursos o los beneficios de los programas, y

d) Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan para obtener los recursos o los beneficios de los programas; los indicadores de desempeño de los programas, y los medios de contacto de las unidades responsables de los mismos deberán estar disponibles en las páginas de Internet de las Dependencias y Entidades.

La Secretaría publicará en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria la información que permita identificar las características de cada programa federal con base en sus reglas de operación. Para efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades remitirán a la Secretaría la información relacionada con las reglas de operación de los programas federales a su cargo, así como las modificaciones a las mismas, en los términos que la Secretaría determine.

Queda estrictamente prohibida la utilización de los programas de apoyo para promover o inducir la afiliación de la población objetivo a determinadas asociaciones o personas morales.

Para la entrega de los apoyos a la población objetivo de los programas de subsidios en numerario, las Dependencias y Entidades deberán promover la inclusión financiera mediante el uso de cuentas bancarias personales, preferentemente a través del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cuando este cuente con la cobertura bancaria necesaria para la entrega de los apoyos, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas sujetos a reglas de operación deberán observar las siguientes disposiciones para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos:

I. Publicar en sus páginas de Internet los plazos de respuesta a las solicitudes que reciban, las preguntas frecuentes del trámite, así como los principales motivos de rechazo. Los rechazos deberán estar fundados y motivados;

II. Tratándose de facultades concurrentes, cuando el Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia competente y las entidades federativas decidan suscribir convenios de coordinación en términos de la Ley de Planeación, éstos deberán celebrarse en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de la población objetivo. Dichos convenios especificarán como mínimo: los programas a que se refieren, las zonas dentro de la respectiva entidad federativa a que se destinarán los recursos, las aportaciones monetarias de cada parte y su calendarización.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

El Gobierno Federal y los gobiernos estatales, previa opinión de los Comités de Planeación para el Desarrollo o su equivalente, y dentro del marco del Convenio de Coordinación respectivo, decidirán a qué orden de gobierno corresponde la ejecución de los programas de acuerdo con la naturaleza de cada uno de ellos y a las características de las zonas donde se van a aplicar los programas, para lograr el mejor desarrollo e impacto social de los mismos, y

III. Brindar asesoría a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la integración de los expedientes técnicos que, en su caso, requiera el programa, especialmente a los que se encuentran en condiciones de muy alta y alta marginación.

Artículo 29. Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas presupuestarios considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como programas o acciones federales de desarrollo social deberán enviar a la Secretaría, en los términos y plazos que esta disponga, información sobre su población potencial, población objetivo y población atendida, misma que hará pública en el portal electrónico de transparencia en materia presupuestaria.

CAPÍTULO II

De los criterios específicos para la operación de los programas

Artículo 30. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 Bienestar considera los programas establecidos en el Anexo 25 para dicho ramo.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, y los gobiernos de las entidades federativas se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Estos instrumentos promoverán que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Derivado de estos instrumentos se suscribirán acuerdos y convenios específicos y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa o región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la Federación, las entidades federativas y municipios, y las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno en que concurren en sujeción a los programas concertados.

Los convenios a que se refiere este artículo, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el correspondiente medio oficial de difusión de la entidad federativa que corresponda, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que queden íntegramente suscritos.

A efecto de fortalecer la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las Dependencias y Entidades.

Las faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de la información relativa a avances y metas alcanzadas, deberán ser informadas a la Función Pública o a la Secretaría de Bienestar en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta última dependencia, después de escuchar la opinión del gobierno de la entidad federativa, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.



Para el control de los recursos que se asignen a las entidades federativas, el Ejecutivo Federal convendrá con los gobiernos respectivos, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Bienestar los avances de ejecución físicos y financieros.

Artículo 31. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable se sujetará a los siguientes lineamientos para la distribución del gasto aprobado en este Presupuesto de Egresos:

I. Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a poblaciones indígenas.

El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional, a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El presupuesto dirigido al campo deberá tener las siguientes características:

- a) Mejorar e incrementar la productividad, cerrando las brechas existentes;
- b) Potenciar la contribución de la agricultura al desarrollo de los territorios rurales y al bienestar de las personas que los habitan;
- c) Mejorar la capacidad de la agricultura para adaptarse al cambio climático, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la utilización y preservación de los recursos naturales y la biodiversidad;
- d) Incrementar la contribución de la agricultura nacional a la seguridad alimentaria de todas las personas;
- e) Que permita la complementariedad de acciones con las demás Dependencias y Entidades;
- f) Que permita el desarrollo de proyectos productivos por etapas;
- g) Que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- h) Una agricultura más incluyente, pero con políticas diferenciadas para cada una de las regiones del país, al tiempo que se oriente prioritariamente hacia las pequeñas unidades de producción y al apoyo de los pequeños productores;
- i) Que procuren la progresividad en el otorgamiento de los incentivos;

II. Los ramos administrativos que participan en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable continuarán con el sistema de rendición de cuentas sobre el destino de los recursos fiscales de los programas concurrentes, el cual incorpora los siguientes elementos: región geográfica, entidad federativa, municipio y localidad, actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo, monto fiscal y fecha de otorgamiento, y la estratificación correspondiente;

III. Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:

a) Incrementar la productividad, la inclusión y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales, en un marco de sustentabilidad, generación de oportunidades y que contribuya a la seguridad alimentaria;

b) Se procurará que los recursos destinados a competitividad, se orienten principalmente a las pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros productos básicos y estratégicos.

Dichos recursos se direccionarán una vez que se cuente con la estratificación de zonas y regiones productivas del país dando prioridad a las pequeñas unidades de producción;

c) Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del país, mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad;

d) Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;



**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

e) Contribuir a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático, así como la oportuna prevención, administración y atención a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, considerando los potenciales productivos de cada región;

h) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra, y

g) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente a los recursos genéticos;

IV. Promover la competitividad de las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como estrategias especiales para otros sistemas productivos de alto impacto social;

V. Coadyuvar al impulso de la producción primaria, de los productos básicos y estratégicos señalados en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otros, para el aprovisionamiento de insumos básicos y apoyo a paquetes tecnológicos;

VI. Impulsar la producción y productividad en el sector mediante el fomento de proyectos integrales que consideren la tecnificación del riego y el uso de insumos (semillas, fertilizantes, biofertilizantes y prácticas agrícolas sustentables, entre otros);

VII. Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;

VIII. Se fortalecerán las obras de tecnificación de riego para aumentar la producción y productividad, dando prioridad a las pequeñas unidades de producción, y

IX. Las autoridades fiscales pondrán a disposición de las Dependencias y Entidades encargadas del otorgamiento de subsidios y estímulos, herramientas tecnológicas que permitan la consulta sobre el cumplimiento de la obligación contenida dentro del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En las reglas de operación de los Programas Federales del Ramo 05 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se deberá establecer que la consulta referida la hará directamente ésta última dependencia y no el beneficiario.

Artículo 32. La ejecución y operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General de Salud, a las disposiciones reglamentarias de dicha Ley, así como a las disposiciones de carácter general o lineamientos que emitan la Secretaría de Salud o, en su caso, las Entidades de su sector coordinado.

Artículo 33. La Secretaría de Educación Pública será responsable de emitir las reglas de operación de sus programas sujetos a las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales contendrán, entre otras reglas, las siguientes:

I. Los recursos destinados a programas educativos deberán ser ejercidos exclusivamente por las autoridades educativas, tanto federales como estatales;

II. Las instituciones educativas contarán con un listado exhaustivo que contenga al personal comisionado a actividades sindicales. La Secretaría de Educación Pública enviará dichos listados a la Cámara de Diputados, y

III. En ningún caso podrán existir nóminas o partidas confidenciales. Los recursos públicos otorgados a las instituciones educativas que sean usados para el pago de nóminas deberán ejercerse en el marco de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que los beneficiarios de dichos programas deberán reportar a la Secretaría de Educación Pública los montos pagados a cada trabajador.

La Secretaría de Educación Pública, antes del 31 de enero, emitirá las convocatorias para el concurso de los diversos fondos aprobados, respecto de los programas a que se refiere este artículo, con la excepción de los que estén sujetos a los calendarios escolares específicos.

Artículo 34. Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones:

1. La Secretaría de Educación Pública al diseñar los programas deberá enviar a la Cámara de Diputados un informe sobre cómo dichos programas disminuirán los rezagos de cobertura y absorción en educación media superior y superior en las diversas regiones del país;



II. Las entidades federativas deberán enviar, de manera trimestral, informes tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública, sobre la aplicación de fondos para la operación de los subsistemas de educación media superior y superior.

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, y

IV. Las instituciones públicas federales y estatales de educación media superior y superior pondrán a disposición de la sociedad la información sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos a través de este Presupuesto de Egresos. En el marco de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y, en su caso, la ley local respectiva, las instituciones incorporarán en su página de Internet la información relacionada con los proyectos y los montos autorizados. En particular, el registro, la asignación, los avances técnicos, académicos o ambos, y el seguimiento del ejercicio de recursos, manteniendo la información actualizada con periodicidad trimestral.

La información a que se refiere este artículo deberá estar disponible de manera permanente y actualizada en la página de Internet de la Secretaría de Educación Pública, la cual deberá enviar dicha información a la Secretaría de manera trimestral.

De conformidad con los Lineamientos Operativos que sean emitidos por la Secretaría de Educación Pública, el otorgamiento de subsidios para organismos descentralizados estatales, conforme al programa presupuestario correspondiente, estará condicionado a que las entidades federativas aporten la parte que les corresponda con cargo a sus presupuestos autorizados.

TÍTULO QUINTO

OTRAS DISPOSICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 35. Con el objeto de impulsar la cultura del pago por suministro de agua en bloque en los Distritos de Riego y mejorar la infraestructura de riego, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, devolverá a los Distritos de Riego que estén al corriente en sus pagos, un importe de recursos equivalente a las cuotas que se generen en el presente ejercicio fiscal, los cuales se destinarán en un 65 por ciento a la conservación y mantenimiento de los canales y drenes menores; 25 por ciento a la conservación de la red mayor, canales y drenes principales; 8 por ciento al mantenimiento de las obras de cabeza, y 2 por ciento a la supervisión y gasto de operación.

Artículo 36. Los programas de la Secretaría de Educación Pública, destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa Primera Infancia, Media Superior y Superior, establecerán mecanismos que permitan disminuir el rezago en el índice de cobertura en aquellas entidades federativas que estén por debajo del promedio nacional.

La Secretaría de Educación Pública deberá informar a la Cámara de Diputados, sobre la estructura de los programas destinados a fomentar la expansión de la oferta educativa a los que hace referencia el párrafo anterior, su distribución y metas de mediano y largo plazo, a más tardar el 31 de marzo.

Los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables, detallando la información siguiente:

- I. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes;
- II. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación;
- III. Desglose del gasto corriente destinado a su operación;
- IV. Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales, y
- V. La información sobre matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como con los lineamientos que emita en la materia el Consejo Nacional de Armonización Contable, las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior llevarán el registro y la vigilancia de los activos, pasivos corrientes y contingentes, ingresos, gastos y patrimonio.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior a que se refiere este artículo entregarán a la Secretaría de Educación Pública la información señalada en el mismo, a más tardar a los 15 días naturales posteriores a la conclusión del trimestre que corresponda. Dicha Secretaría entregará esta información a la Cámara de Diputados y la publicará en su página de Internet, a más tardar a los 30 días naturales posteriores al período correspondiente.

Las autoridades correspondientes para aplicar dichos recursos verificarán que el personal de cada una de las universidades e instituciones de educación media superior y superior públicas, cumplan con sus obligaciones en términos de los contratos laborales correspondientes realizándose, en su caso, la compulsa entre las nóminas y los registros de asistencia.

La Secretaría de Educación Pública enviará la información a que se refiere este artículo a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles posteriores a que aquélla la reciba.

Artículo 37. Las sanciones económicas que, en su caso, aplique el Instituto Nacional Electoral derivado del régimen disciplinario de los partidos políticos durante 2021, serán concentradas a la Tesorería de la Federación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento. Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados en los términos de las disposiciones aplicables al Ramo 38 para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y deberán destinarse a actividades sustantivas; dichos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y su ejercicio y destino deberá reportarse en los Informes Trimestrales.

Artículo 38. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Armonización Contable, establecerá los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en este Presupuesto de Egresos, para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a los municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro del primer trimestre del año.

El Consejo Nacional de Armonización Contable, a más tardar el último día hábil de diciembre, deberá publicar en su página de Internet un reporte especial sobre la aplicación de los recursos del fondo a que hace referencia el presente artículo, así como:

- I. El monto de los subsidios otorgados a cada una de las entidades federativas y municipios;
- II. El tipo y alcances de los subsidios federales otorgados, y
- III. Los avances y resultados reportados por las entidades federativas y municipios.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2021, salvo lo dispuesto en el Transitorio Décimo Sexto, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones administrativas emitidas con base en lo dispuesto en los Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación de ejercicios fiscales anteriores, que se encuentren vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán aplicándose en lo que no se opongan a éste, hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones administrativas que las reformen o abroguen.

Tercero. Se faculta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, para que emita las autorizaciones que correspondan, a efecto de que los ejecutores de gasto realicen las adecuaciones o los trasposos de recursos humanos, financieros y materiales, incluyendo bienes muebles e inmuebles, que sean necesarios como consecuencia de reformas jurídicas que tengan por objeto la creación o modificación de la estructura administrativa de cualquier dependencia, entidad o ente autónomo, o cambio de sector en los casos que corresponda, reportando las mismas en los Informes Trimestrales.

Con la finalidad de garantizar y dar continuidad a las acciones de gobierno, las Dependencias, Entidades y unidades administrativas que se encuentren en proceso de readscripción o modificación de sus programas, podrán continuar su operación en la estructura organizacional y presupuestaria en la que se encuentren a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto no se realice la transferencia de recursos humanos, financieros y materiales o se modifiquen sus programas.



Los ejecutores de gasto deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas y ocupacionales respecto de las unidades responsables que cambian de adscripción o se encuentren en proceso de readscripción como consecuencia de reformas jurídicas.

Cuarto. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos correspondientes a las entidades federativas que no hayan suscrito los convenios a los que hace referencia el artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal deberán ser transferidos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios al Ramo 11 Educación, a fin de que a través de éste se transfieran para esos mismos fines a dichas entidades federativas. Lo anterior, hasta en tanto sean suscritos los convenios de coordinación respectivos.

Quinto. Las entidades federativas deberán notificar y realizar la entrega de los recursos federales que correspondan a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los plazos y términos que establecen las leyes federales aplicables, el Presupuesto de Egresos, y en el caso de programas de subsidios o gasto reasignado, conforme a lo previsto en los convenios que celebren con las Dependencias y Entidades que les transfieran recursos federales.

Las entidades federativas no podrán establecer requisitos adicionales ni realizar acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos públicos que por su conducto se transfieran a los municipios y, en su caso, a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Las entidades federativas, por conducto de sus secretarías de finanzas o sus equivalentes, deberán hacer pública la información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de recursos federales que deriven de los proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos, realizadas a sus municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de sus respectivas páginas oficiales de Internet, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que los recursos correspondientes hayan sido efectivamente depositados en las cuentas bancarias específicas de los municipios o demarcaciones, incluyendo el número de identificación de la transferencia.

El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes, será sancionado por las autoridades competentes en los términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que, en su caso, se determinen.

Los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán responsables de la correcta integración de la información técnica, así como del destino, ejercicio, registro y comprobación de los recursos que les transfieran las entidades federativas respectivas, conforme a lo señalado en este artículo.

Sexto. Para el ejercicio 2021, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, la Secretaría de Bienestar publicará los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a más tardar el último día del mes de febrero de 2021, los cuales podrán determinar que hasta un setenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos.

Séptimo. Los ejecutores de gasto deberán cubrir con cargo a sus presupuestos autorizados los compromisos u obligaciones que deriven de las determinaciones o las resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional competente. Para efectos de lo anterior, los ejecutores de gasto deberán ajustar sus presupuestos para el cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello implique ampliaciones a los mismos.

Octavo. El presupuesto aprobado del Ramo 12 Salud incluye hasta los treinta y tres mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación con cargo al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, en términos de lo señalado en el transitorio Décimo Quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021; los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en salud previstas en este Presupuesto.

Del presupuesto al que se refiere el párrafo anterior, se destinan los recursos necesarios para la detección oportuna y atención del cáncer infantil.

Noveno. Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las acciones que correspondan para que la entrega de los subsidios y apoyos a los beneficiarios de los programas se realice de manera directa a través de la Tesorería de la Federación, en forma electrónica mediante transferencia de recursos para su depósito en las cuentas bancarias de los mismos, salvo que se esté en alguno de los supuestos de excepción regulados en la Ley de Tesorería de la Federación, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, o bien, que la Secretaría autorice que se efectúe de manera distinta.

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Décimo. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, continuará durante el ejercicio fiscal 2021 con el análisis y revisión del anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Primero. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en su carácter de instancia técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, dará seguimiento a la implementación del Anexo Transversal Anticorrupción para el presente ejercicio fiscal, para lo cual deberá elaborar un informe anual de ejecución y seguimiento del mismo con base en la metodología presentada para el ejercicio fiscal 2021. Dicho informe deberá presentarse a la Cámara de Diputados.

Décimo Segundo. La Secretaría realizará durante el ejercicio fiscal 2021 el análisis y revisión de la metodología utilizada para la conformación del anexo transversal referente a los recursos para las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres para que, en caso de considerarse procedente, se incorporen elementos que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones que se vinculan a dicho anexo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal siguiente.

Décimo Tercero. Los proyectos que reciban recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal deberán contar con la participación de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de considerar su opinión en cuanto a su factibilidad.

Décimo Cuarto. El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá reportar en su página de Internet, las acciones que está implementando el Gobierno Federal para la mitigación y adaptación al cambio climático. La información deberá ser reportada en formato de datos abiertos y actualizada de manera trimestral.

Décimo Quinto. Los aprovechamientos que se obtengan del entero de recursos a la Tesorería de la Federación que realicen las universidades e instituciones públicas de educación superior respecto de recursos federales no ejercidos en ejercicios fiscales anteriores al 2021, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a proyectos de inversión en infraestructura educativa a cargo de universidades e instituciones públicas de educación superior.

Décimo Sexto. Las dependencias y entidades, respecto de los fideicomisos que se extinguirían, o bien, de los mandatos y análogos públicos que se darían por terminados, en términos de lo señalado en el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, contarán con un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto, para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos, sin perjuicio de que, con cargo a su presupuesto autorizado, puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos, cuando así corresponda, en tanto emiten las referidas disposiciones.

Décimo Séptimo. Las dependencias y entidades, así como entidades federativas, que reciben recursos para la atención de los desastres naturales, continuarán siendo las responsables de la aplicación de los mismos para los fines para los cuales fueron otorgados, mediante el seguimiento que le den a la ejecución de las obras y acciones que estas contratan y al cumplimiento del calendario de ejecución en los términos y plazos establecidos. Asimismo, en la continuación de las obras de reconstrucción, los ejecutores deberán prever el establecimiento de medidas de mitigación que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas.

Décimo Octavo. El programa denominado La Escuela es Nuestra incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos de las y los docentes que imparten actividades académicas de este programa, en términos de las disposiciones que al efecto se emitan por parte de la Secretaría de Educación Pública.



Décimo Noveno. La Secretaría, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, podrá asignar recursos para apoyar paulatinamente programas y proyectos de inversión tramitados ante ésta durante el ejercicio fiscal 2020, así como durante el presente ejercicio, con el propósito de impulsar la inversión pública en el país. Lo anterior sujeto a las disposiciones específicas que, en su caso, emita la Secretaría.

Vigésimo. Se eliminará la etiqueta realizada en el Ramo 12 "Salud" del Programa P020. Acción 448 "Subsidio para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia" con un presupuesto de \$330,641,100, en virtud de que en el Ramo 20 "Bienestar" se encuentra etiquetado presupuesto bajo el Programa U012 "Programa de apoyo para refugios especializados para las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos".

El presupuesto de la acción 448 del Programa P020 del Ramo 12, deberá ser asignado a las acciones propias contenidas en el Programa P020, "Programa de salud materna, sexual y reproductiva", contenidas en el Anexo Transversal 13, en los siguientes términos:

ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 141. CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD MATERNA Y NEONATAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A LA SALUD DE FORMA INTEGRAL PARA TODAS LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, DURANTE LA ETAPA PREGESTACIONAL, EL CONTROL PRENATAL, EL PARTO, EL PUERPERIO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN A PERSONAS RECIENTE NACIDAS Y LA PREVENCIÓN DE DÉFECTOS EN EL NACIMIENTO	555,693.293
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 144. DISMINUIR EL RÍTMO DEL CRECIMIENTO DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS PARA LA DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	330,077.904
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 146. DISMINUIR LAS TASAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR CÁNCER CERVICO UTERINO, A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ÓPTIMOS EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL PADECIMIENTO	343,943.590
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS ADOLESCENTES DISFRUTEN DE UNA VIDA SEXUAL SATISFACTORIA, SALUDABLE Y SIN RIESGOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD EN MATERIA DE ANTICONCEPCIÓN Y DE SALUD SEXUAL	126,323.890
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 287. CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN MEXICANA EJERZA SU DERECHO A DECIDIR DE MANERA LIBRE, RESPONSABLE E INFORMADA, EL NÚMERO Y EL ESPARCIMIENTO DE SUS HIJOS, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE CALIDAD DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	125,483.809
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 312. ATENCIÓN A CÁNCER PULMONAR EN MUJERES	3,565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 313. ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJERES CON ASMA	3,565.991
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 405. IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL EN TODO EL PAÍS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	281,188.510
ANEXO TRANSVERSAL NÚMERO 13. ACCIÓN 338. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER CERVICO UTERINO LOCALMENTE AVANZADO Y METASTÁSICO	39,125.930

Vigésimo Primeró. Los ejecutores de gasto, en los casos que corresponda, deberán realizar las acciones conducentes y, en su caso, emitir las disposiciones específicas conducentes para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a los límites máximos de percepciones y de prestaciones previstos en el Anexo 23 del presente Decreto.

No se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas en la fracción IV del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)

A: RAMOS AUTÓNOMOS		134,904,757,546
Gasto Programable		
01	Poder Legislativo	14,818,605,390
	Cámara de Senadores	4,060,778,000
X	Cámara de Diputados	8,282,008,000
	Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390
03	Poder Judicial	71,289,338,480
	Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,080,488,586
	Consejo de la Judicatura Federal	63,178,622,895
	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,030,280,000
22	Instituto Nacional Electoral	26,919,801,594
35	Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,878,905,810
41	Comisión Federal de Competencia Económica	588,870,029
43	Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000
44	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	905,335,647
49	Fiscalía General de la República	17,275,099,816
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA		7,746,100,001
	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,746,100,001
RAMO: 32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		2,863,619,680
	Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,863,619,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS		1,246,242,755,522
Gasto Programable		
02	Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292
04	Gobernación	5,853,228,701
05	Relaciones Exteriores	8,121,231,886
06	Hacienda y Crédito Público	20,228,539,183
07	Defensa Nacional	112,557,168,656
08	Agricultura y Desarrollo Rural	48,291,453,404
09	Comunicaciones y Transportes	55,919,591,344
10	Economía	8,538,472,483
11	Educación Pública	337,651,440,847
12	Salud	145,414,570,947
13	Marina	95,476,715,511
14	Trabajo y Previsión Social	28,798,858,830
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16,820,344,244
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	31,348,192,349
18	Energía	47,060,243,185
20	Bienestar	191,924,999,417
21	Turismo	38,513,384,661
27	Función Pública	1,389,004,630
31	Tribunales Agrarios	800,879,840
36	Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,669,472
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,886
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028
45	Comisión Reguladora de Energía	253,348,972
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,797,597
47	Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953
48	Cultura	13,985,117,385



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



C: RAMOS GENERALES		3,430,648,790,272
Gasto Programable		
19	Aportaciones a Seguridad Social ^{1/2/3/}	961,026,461,285
23	Provisiones Salariales y Económicas	127,466,744,341
25	Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,454,347,981
33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,842,860,397
Gasto No Programable		
24	Deuda Pública	541,094,614,451
28	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	821,402,840,917
29	Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
30	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,096,200,000
34	Erogaciones para los Programas de Apoyo a Afiliados y Deudores de la Banca	11,245,900,900
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO		1,275,212,386,584
Gasto Programable		
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,526,288,432
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	901,667,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		1,438,301,449,660
Gasto Programable		
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,598,071,166
TVV	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	417,145,392,655
Gasto No Programable		
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:		171,557,985,839
TYT	Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,319,871
TVV	Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)	29,799,665,968
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.		935,184,669,265
GASTO NETO TOTAL		6,295,736,200,000

1/ Incluye recursos dentro del programa presupuestario 0012.- "Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud", para cubrir el pago de las provisiones que permitan mantener la homologación salarial del personal que fue regularizado y formalizado, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33.

2/ Los recursos relativos a los Laudos y Prestaciones que no estén directamente vinculadas a obligaciones decretadas en materia de seguridad social no serán cubiertas con cargo a los recursos del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social".

3/ Incluye 12'163,204.00 que serán transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar cumplimiento a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2020, por el que se emitió el "Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del diverso por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2008 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado el 20 de julio de 2010.

ANEXO 2. GASTO CORRIENTE ESTRUCTURAL (pesos) ^{1/}

Gasto Corriente Estructural	2,490,876,855,284
-----------------------------	-------------------

^{1/} La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 3. GASTOS OBLIGATORIOS (millones de pesos) ^{1/}

Provisiones para Gastos Obligatorios	4,203,005.3
Provisiones para Gastos Obligatorios con Pensiones y Jubilaciones	5,267,094.8

^{1/} La asignación corresponde a montos estimados con base en las reasignaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados.

ANEXO 4. EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (millones de pesos)

En el presente ejercicio fiscal no se comprometerán proyectos de inversión en infraestructura a los que se refiere el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	0.0
---	-----

ANEXO 5. COMPROMISOS PLURIANUALES (millones de pesos)

	MONTO
Dependencias y Entidades (Recursos Fiscales)	43,514.81
Entidades de Control Directo	42,306.75
Empresas Productivas del Estado	307,193.61
Poder Judicial	2,304.91
Instituto Nacional Electoral	1,434.87
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	104.75

ANEXO 5.A. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (millones de pesos)

Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3o. del Presupuesto de Egresos de la Federación, el monto máximo anual de gasto programable para los proyectos de asociación público-privada, asciende a la cantidad de \$42,785.6 millones, de los cuales para el periodo 2021 se tiene estimado un monto de \$10,761.9 millones.

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	ENTIDAD FEDERATIVA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN ¹	MONTO DE INVERSIÓN 2021 ²	PAGO ANUAL ESTIMADO 2021 ³
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		43,838.9	345.9	10,761.9
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA		3,807.5	266.1	0.0
Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla	Veracruz	3,807.5	266.1	0.0
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		22,717.3	0.0	7,061.8
Libramiento de la Carretera La Galarza-Amatitlanes	Puebla	1,054.7	0.0	116.8
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luis Potosí)	Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí	1,976.1	0.0	745.3
Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coahuila de Zaragoza - Villahermosa)	Tabasco y Veracruz	2,248.3	0.0	724.9
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Matamoros - Saltillo) para el periodo 2017-2027	Nuevo León	1,710.0	0.0	692.3
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Pirámides-Tulancingo-Pachuca) para el periodo 2017-2027	Estado de México e Hidalgo	2,172.3	0.0	604.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo) para el periodo 2017-2027	Coahuila y Nuevo León	2,337.0	0.0	416.0
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (Texcoco-Zacatepec) para el periodo 2017-2027	Estado de México, Tlaxcala y Puebla	1,470.1	0.0	662.1
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga-Tapachula)	Chiapas	3,881.8	0.0	894.2
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche-Mérida)	Campeche y Yucatán	1,884.9	0.0	636.6
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí-Matamoros)	San Luis Potosí	1,888.4	0.0	788.3
Programa APP de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico-Ciudad Victoria)	Tamaulipas	2,095.7	0.0	891.0
SECRETARÍA DE TURISMO		1,188.7	79.8	0.0
Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa ^{17/20}	Sinaloa	1,188.7	79.8	0.0
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		7,799.9	0.0	1,147.1
Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit	Nayarit	1,654.3	0.0	536.6



Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas	Chiapas	1,874.5	0.0	810.6
Construcción del Hospital Regional (HGR) de 260 Camas en el Municipio de García, Nuevo León	Nuevo León	2,101.9	0.0	0.0
Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepotzotlán, Estado de México**	Estado de México	2,168.6	0.0	0.0
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO		8,325.5	0.0	2,553.0
Construcción y operación del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, Ciudad de México***	Ciudad de México	1,253.9	0.0	0.0
Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán	Yucatán	1,149.8	0.0	293.4
Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco	Tabasco	1,951.2	0.0	413.7
Sustitución del actual Hospital General "Águiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit	Nayarit	1,388.5	0.0	835.5
Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México	Ciudad de México	2,572.2	0.0	1,230.4
TOTAL		43,838.9	345.9	10,761.9

Cifras con IVA a pesos de 2021.

** Este Proyecto se encuentra rescindido y en proceso de impugnación por parte del Desarrollador.

*** El Contrato del proyecto se rescindió, sin embargo, el proyecto se incluyó en el Documento de Planeación 2021.

Montos de inversión contratados.

1/ Monto total estimado en gasto de inversión del sector privado en infraestructura. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tiene una inversión de SECTUR por 400.1 mdp y de FONADIN por 165 mdp.

2/ Inversión estimada prevista por el sector privado para el 2021. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, se tienen prevista una inversión de SECTUR y de FONADIN.

3/ Pagos anuales estimados por el Sector Público. En el caso del proyecto del Nuevo Acuario de Mazatlán, Sinaloa, no contempla pagos al Desarrollador, quien obtendrá ingresos por el cobro de las tarifas a los usuarios, por lo anterior no hay pagos programados por parte del Sector Público.

Para los proyectos de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se consideran pagos anuales desde el inicio del proyecto, toda vez que la ejecución y operación comienzan simultáneamente.

ANEXO 6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (pesos)

6.A. Monto autorizado para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	9,360,367,214	0	9,360,367,214

6.B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	717,727,705,720	349,293,563,384	1,067,021,269,084

6.C. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos

	Inversión Directa	Inversión Condicionada	Suma
Comisión Federal de Electricidad	727,088,072,934	349,293,563,384	1,076,381,636,298

6.D. Monto comprometido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	610,870,114,789	510,799,895,147	223,196,769,093

6.E. Monto máximo de compromiso de proyectos de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores

	Monto Autorizado	Monto Contratado	Monto Comprometido
Comisión Federal de Electricidad	285,502,038,896	199,702,368,302	133,651,928,141

6.F. Previsiones para pago de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa

	Inversión Física (Amortizaciones)	Costo Financiero	Suma
Comisión Federal de Electricidad	15,482,063,489	10,814,662,039	26,296,665,528

Nota: Para estos anexos los totales pueden no sumar respecto al total debido al redondeo.

ANEXO 7. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)



		Incremento a las percepciones	Creación de plazas	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
		I	II	III	
Ramos Administrativos					
02	Oficina de la Presidencia de la República	14,603,293	0	2,701,029	17,304,322
04	Gobernación	94,685,585	0	25,503,898	120,069,483
05	Relaciones Exteriores	35,176,988	0	9,971,236	45,147,335
06	Hacienda y Crédito Público	393,743,111	0	109,975,789	500,718,900
07	Defensa Nacional	1,389,372,904	1,040,255,517	642,985,200	3,052,613,621
08	Agricultura y Desarrollo Rural	194,041,397	0	82,773,328	256,814,725
09	Comunicaciones y Transportes	171,575,525	0	73,378,312	244,953,937
10	Economía	51,272,292	0	22,533,369	73,805,661
11	Educación Pública	2,268,451,389	0	2,311,331,432	4,579,782,821
12	Salud	746,077,534	6,566,139,280	182,792,320	7,475,009,134
13	Marina	375,826,453	0	300,256,215	676,082,668
14	Trabajo y Previsión Social	45,414,158	0	18,108,630	64,522,788
15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	44,946,161	0	18,839,414	63,785,576
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	160,495,565	0	92,252,004	252,747,569
18	Energía	39,099,597	0	3,269,975	42,369,572
20	Bienestar	42,338,121	0	19,693,693	62,031,814
21	Turismo	99,033,228	0	7,930,151	106,963,379
27	Función Pública	38,064,610	0	4,917,834	42,982,444
31	Tribunales Agrarios	15,291,240	0	5,322,424	20,613,664
36	Seguridad y Protección Ciudadana	743,377,667	0	217,887,765	961,265,432
37	Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	3,469,070	0	292,838	3,761,908
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	142,225,908	0	81,870,052	224,105,960
45	Comisión Reguladora de Energía	4,212,438	0	336,445	4,548,883
46	Comisión Nacional de Hidrocarburos	4,316,705	0	183,200	4,509,905
47	Entidades no Sectorizadas	79,740,608	0	14,898,133	94,638,741
48	Cultura	134,644,753	0	14,405,596	149,050,349
Ramos Generales					
23	Provisiones Salariales y Económicas *	10,136,054,546	1,562,968,022	3,043,181,090	14,742,203,658

* Para efectos de control presupuestario y eficiencia del gasto, la administración de estos recursos se considera en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas

ANEXO 8. COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA Y OTRAS EROGACIONES (pesos)

	MONTO
Costo financiero de la deuda del Gobierno Federal incluido en el Ramo General 24 Deuda Pública	581,094,614,451
Costo financiero de la deuda de las empresas incluidas en el Anexo 1.E de este Decreto	171,557,985,889
Erogaciones incluidas en el Ramo General 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0
Erogaciones incluidas en el Ramo General 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,000
Total	723,898,501,190



ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	215	737
15,000	30,000	245	1,061
30,000	50,000	276	1,382
50,000	100,000	308	1,705
100,000	150,000	337	2,033
150,000	250,000	363	2,454
250,000	350,000	414	2,764
350,000	450,000	446	2,934
450,000	600,000	475	3,253
600,000	750,000	491	3,423
750,000	1,000,000	538	3,745
1,000,000		557	3,913

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	342	169	3,050	2,358
15,000	30,000	424	215	3,384	2,538
30,000	50,000	509	254	3,895	3,050
50,000	100,000	590	293	4,741	3,551
100,000	150,000	678	342	5,596	4,231
150,000	250,000	765	382	6,434	5,076
250,000	350,000	831	484	7,454	5,868
350,000	450,000	1,013	509	8,126	6,977
450,000	600,000	1,189	590	9,659	7,278
600,000	750,000	1,356	678	10,997	8,288
750,000	1,000,000	1,513	765	12,355	9,307
1,000,000		1,611	847	13,869	10,487

Nota.- Los anteriores montos se establecen sin perjuicio de los umbrales derivados de los tratados de libre comercio suscritos por México, para la determinación del carácter de los procedimientos de contratación.

ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		111,474,967,485
04 Gobernación		14,942,762
	Conducción de la política interior	14,942,762
08 Agricultura y Desarrollo Rural		5,182,753,182
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	248,150,202
	Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	1,245,336,332
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	219,235,137
	Producción para el Bienestar	3,874,999,996
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	95,029,514
09 Comunicaciones y Transportes		2,282,492,083
	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	975,800,000
	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1,226,692,083
	Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras	80,000,000
10 Economía		144,000,000
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	144,000,000
11 Educación Pública		16,308,819,121
	Educación para Adultos (INEA)	90,108,482
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	786,050,381
	Normar los servicios educativos	101,650,645
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	8,942,351,568
	Programa de Becas Elisa Acuña	200,572,989
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	1,017,635,340
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	3,317,156,000
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	296,223,958
	La Escuela es Nuestra	577,171,758
12 Salud		8,015,244,696
	Rectoría en Salud	9,800,000
	Prevención y control de enfermedades	41,487,762
	Salud materna, sexual y reproductiva	18,716,608
	Fortalecimiento a la atención médica	295,544,083
	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	7,651,686,242
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		490,781,835
	Procuración de justicia agraria	235,894,303
	Programa de Atención de Conflictos Agrarios	32,937,531
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,050,000
	Programa Nacional de Reconstrucción	217,600,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,234,159,786
	Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza	40,950,000
	Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado	408,035,510
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	285,836
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	42,666,319
	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	208,217,857
	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	204,011,889
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	328,992,374
19 Aportaciones a Seguridad Social		4,913,719,671
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,913,719,671
20 Bienestar		69,910,144,730
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	116,092,765
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	35,357,059,574
	Sembrando Vida	24,538,982,591



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	10,130,458,058
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,518,596,075
FAM Asistencia Social	2,613,861,983
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	18,174,449
Proteger, promover y difundir los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y atender asuntos de personas indígenas privadas de su libertad.	18,174,449
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	35,243,171
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	35,243,171
47 Entidades no Sectorizadas	3,533,887,159
Actividades de apoyo Administrativo	159,617,880
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,931,158
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	926,916,198
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,716,081
48 Cultura	60,146,784
Educación y cultura indígena	60,146,784

ANEXO 11. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (millones de pesos)

Vertiente	Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva	MÓNTO
	Total	336,227.6
Competitividad		31,025.4
	Programa de Fomento a la Inversión y Productividad	31,025.4
	Agricultura y Desarrollo Rural	31,025.4
	Fertilizantes	1,912.0
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	10,961.8
	Producción para el Bienestar	13,600.0
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,428.6
	Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	3,223.1
Medio Ambiente		2,035.8
	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	2,035.8
	Agricultura y Desarrollo Rural	119.5
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	119.5
	Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,916.2
	Forestal	1,515.3
	Protección al medio ambiente en el medio rural	400.9
	Desarrollo Regional Sustentable	142.2
	PROFEPA	206.3
	Vida Silvestre	52.4
Educativa		52,907.2
	Programa de Educación e Investigación	52,907.2
	Agricultura y Desarrollo Rural	6,416.8
	Colegio de Postgraduados	1,479.0
	Colegio Superior Agropecuário del Estado de Guerrero (CSAEGRO)	110.6
	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)	1,302.9
	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA)	455.5
	Universidad Autónoma Chapingo	3,068.9
	Educación Pública	46,490.4
	Desarrollo de Capacidades Educación	15,277.0
	Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	20,120.3
	Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar	10,055.1
	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	1,038.0
Social		117,959.7
	Programa de atención a la pobreza en el medio rural	112,645.7
	Relaciones Exteriores	75.0
	Atención a migrantes	75.0



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Bienestar	108,936.8
Atención a la población agraria	108,936.8
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	80,218.4
Sembrando Vida	28,718.4
Entidades no Sectorizadas	3,633.9
Atención a la población indígena y afromexicana (INPI)	3,633.9
Programa de Derecho a la Alimentación	3,387.9
Agricultura y Desarrollo Rural	3,387.9
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	1,240.8
Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V.	2,147.1
Programa de apoyo a la adquisición de leche	1,768.9
Agricultura y Desarrollo Rural	1,768.9
Adquisición de leche nacional	1,768.9
Programa de atención a las mujeres en situación de violencia	157.2
Bienestar	157.2
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF	157.2
Infraestructura	66,498.4
Programa de infraestructura en el medio rural	66,498.4
Comunicaciones y Transportes	4,593.0
Infraestructura	4,593.0
Mantenimiento de Caminos Rurales	4,593.0
Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,183.0
IMTA	201.2
Infraestructura Hidroagrícola	470.8
Programas Hidráulicos	1,510.9
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	59,720.5
Salud	56,232.5
Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural	56,232.5
Salud	41,335.9
Salud en población rural	41,335.9
Desarrollo de Capacidades Salud	536.1
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)	40,799.7
Programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral	40,799.7
Aportaciones a Seguridad Social	13,896.6
IMSS-BIENESTAR	13,807.6
Seguridad Social Cafeteros	289.0
Agraria	154.3
Programa para la atención de aspectos agrarios	154.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	154.3
Atención de aspectos agrarios	154.3
Archivo General Agrario	154.3
Administrativa	9,416.3
Gasto Administrativo	9,416.3
Agricultura y Desarrollo Rural	6,573.0
ASERCA	153.6
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar	15.9
CONAPESCA	584.3
CONAZA	59.0
Dependencia SADER	3,692.6
FEESA	5.7
FIRCO	255.1
INCA RURAL	32.1
SENASICA	1,528.0
SIAP	91.6
SNICS	55.1
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	2,042.5
Dependencia SEDATU	2,042.5
Tribunales Agrarios	800.9
Tribunales Agrarios	800.9



ANEXO 11.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

Entidad	Salud e Inocuidad Agroalimentaria
Aguascalientes	22.3
Baja California	30.3
Baja California Sur	27.8
Campeche	53.4
Coahuila	49.5
Colima	25.2
Chiapas	107.0
Chihuahua	73.1
Ciudad de México	3.7
Durango	55.8
Guanajuato	86.4
Guerrero	65.2
Hidalgo	50.7
Jalisco	108.7
Estado de México	46.6
Michoacán	117.1
Morelos	34.8
Nayarit	64.0
Nuevo León	49.7
Oaxaca	47.3
Puebla	66.6
Queretaro	28.3
Quintana Roo	27.0
San Luis Potosí	55.8
Sinaloa	227.1
Sonora	91.4
Tabasco	57.2
Tamaulipas	61.6
Tlaxcala	13.2
Veracruz	106.4
Yucatán	46.5
Zacatecas	44.0
Total	1,939.8

ANEXO 12. PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (pesos)

Ramo	Unidad Responsable	Recursos Fiscales	Recursos Propios	MONTO
Total		86,748,886,815	15,973,906,444	102,720,793,059
05	Relaciones Exteriores	2,300,000	0	2,300,000
K00	Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo	2,300,000		2,300,000
08	Agricultura y Desarrollo Rural	4,948,320,562	247,600,000	5,195,920,562
A11	Universidad Autónoma Chapingo	2,320,298,466	3,600,000	2,323,898,466
000	Cofegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero	418,098		418,098



**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

4ZG	Colegio de Postgraduados	1,404,763,650	24,000,000	1,428,763,650
JAG	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	1,222,840,348	220,000,000	1,442,840,348
05	Comunicaciones y Transportes	200,088,108	0	200,088,108
A00	Instituto Mexicano del Transporte	136,447,482		136,447,482
J2N	Agencia Espacial Mexicana	63,640,626		63,640,626
10	Economía	361,480,297	1,078,024,370	1,439,504,667
K2H	Centro Nacional de Metrología	150,424,611	74,952,674	225,377,285
K6V	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial		199,418,615	199,418,615
LAT	Procuraduría Federal del Consumidor		4,230,920	4,230,920
LAU	Servicio Geológico Mexicano	211,055,686	799,422,161	1,010,477,847
11	Educación Pública	42,853,958,886	1,822,944,874	44,776,803,670
511	Dirección General de Educación Superior Universitaria	8,509,002,547		8,509,002,547
514	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	650,593,845		650,593,845
600	Subsecretaría de Educación Media Superior	1,495,532		1,495,532
611	Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios	1,098,175		1,098,175
A00	Universidad Pedagógica Nacional	107,303,477		107,303,477
A2M	Universidad Autónoma Metropolitana	3,697,704,259	45,343,161	3,743,047,419
A3Q	Universidad Nacional Autónoma de México	14,874,159,889	981,898,255	15,856,058,144
B00	Instituto Politécnico Nacional	4,728,719,242		4,728,719,242
K00	Universidad Abierta y a Distancia de México	28,368,047		28,368,047
L3P	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	21,701,730	189,437	21,901,167
L4J	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	2,479,220,067	667,822,312	3,147,042,279
L6H	Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional	81,085,910	106,153,170	186,239,080
L8K	El Colegio de México, A.C.	588,560,445	138,833,165	727,393,610
M00	Tecnológico Nacional de México	5,983,126,402		5,983,126,402
MEY	Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	98,741,319		98,741,319
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	983,077,809	3,594,474	986,672,283
12	Salud	7,628,713,021	279,355,546	7,908,068,667
160	Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	29,595,178		29,595,178
610	Dirección General de Calidad y Educación en Salud	3,927,369,067		3,927,369,067
M7A	Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	6,275,448	598,540	6,873,988
M7F	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz	158,144,966	4,712,240	162,857,206
M7K	Centros de Integración Juvenil, A.C.	26,366,762	723,710	27,090,472
N00	Servicios de Atención Psiquiátrica	354,878		354,878
NAW	Hospital Juárez de México	230,352,370	100,000	230,452,370
NBB	Hospital General "Dr. Manuel Gasa González"	105,426,703		105,426,703
NBD	Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"	249,877,047	17,938,680	267,815,727
NBG	Hospital Infantil de México Federico Gómez	223,958,343	12,580,795	236,539,138


**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

NBQ	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	11,733,372	3,030,382	14,763,734
NBR	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca	7,052,036	570,000	7,632,036
NBS	Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán	133,536,660	5,300,000	138,836,660
NBT	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"	1,491,879	384,302	1,866,181
NBU	Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca	6,739,987	1,727,024	8,466,911
NEV	Instituto Nacional de Cancerología	124,959,179		124,959,179
NCA	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	188,974,103	30,525,958	219,500,069
NCD	Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas	232,000,029		232,000,029
NCE	Instituto Nacional de Geriátrica	49,079,913	8,020,000	57,099,913
NCG	Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán	382,184,039	10,960,084	393,144,120
NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	195,538,532	28,858,941	224,394,473
NCK	Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez	111,319,955	5,878,746	117,198,701
NCZ	Instituto Nacional de Pediatría	281,010,132	21,107,381	302,117,513
NDE	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes	229,451,791	23,684,787	253,136,578
NDF	Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra	152,191,854	2,233,988	154,425,843
NDY	Instituto Nacional de Salud Pública	493,775,445	70,822,115	564,597,560
NEF	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.		29,600,984	29,600,984
NHK	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	59,921,358		59,921,358
13	Marina	14,700,000	0	14,700,000
100	Secretaría	14,700,000		14,700,000
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	368,905,935	200,000,000	568,905,935
RJE	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	201,234,605	200,000,000	401,234,605
RJI	Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático	167,671,330		167,671,330
18	Energía	1,128,732,954	6,130,544,053	7,259,277,007
214	Dirección General de Energías Limpias	249,195,071		249,195,071
TOK	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	301,887,391	771,022,662	1,072,910,053
TOO	Instituto Mexicano del Petróleo		5,014,598,154	5,014,598,154
TOQ	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	577,650,492	344,923,237	922,573,729
21	Turismo	17,082,719	0	17,082,719
A00	Instituto de Competitividad Turística	17,082,719		17,082,719
23	Provisiones Salariales y Económicas	2,229,800,000	0	2,229,800,000
411	Unidad de Política y Control Presupuestario	2,229,800,000		2,229,800,000
36	Seguridad y Protección Ciudadana	66,492,606	0	66,492,606
E00	Centro Nacional de Prevención de Desastres	66,492,606		66,492,606
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,573,104,028	3,718,076,366	30,291,180,394
90A	Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.	62,320,527	9,400,821	71,721,348
90C	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	191,490,360	21,487,290	212,977,650
90E	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	195,200,817	29,931,754	225,132,571



90G	CIATEQ, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"	192,893,046	96,103,088	288,996,134
90I	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.	198,395,782	52,898,858	251,294,641
90K	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.	116,901,899	45,484,480	162,386,379
90M	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	392,591,713	15,517,291	408,109,004
90O	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	485,553,721	34,118,823	519,672,544
90Q	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	279,897,779	38,588,978	318,486,757
90S	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.	188,037,078	7,040,114	195,077,192
90U	Centro de Investigación en Química Aplicada	198,828,334	35,277,477	234,105,811
90W	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social	318,841,054	6,038,338	324,879,392
90X	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	20,187,829,182	2,000,060	20,189,829,182
90Y	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	284,040,283	308,265,078	592,295,366
91A	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.		1,114,168,783	1,114,168,783
91C	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	323,584,235	35,621,787	359,206,022
91E	El Colegio de la Frontera Sur	371,064,604	42,343,189	413,407,793
91I	El Colegio de Michoacán, A.C.	151,704,429	3,420,288	155,124,717
91K	El Colegio de San Luis, A.C.	119,855,205	12,000,000	131,855,205
91M	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación	0	894,116,213	894,116,213
91O	Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos	88,795,415	224,544,221	313,339,636
91Q	Instituto de Ecología, A.C.	282,788,578	63,822,150	346,610,728
91S	Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"	180,521,880	4,828,708	185,350,588
91U	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	348,539,826	35,200,000	383,739,826
91W	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.	144,875,194	103,254,541	248,129,735
92U	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	314,878,462	371,928,319	686,806,781
92W	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California	562,052,486	72,887,672	634,940,158
92Y	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	386,103,329	47,731,365	433,834,694
48	Cultura	129,993,838	0	129,993,838
DOO	Instituto Nacional de Antropología e Historia	129,993,838		129,993,838
49	Fiscalía General de la República	116,163,434	45,000,000	161,163,434
SKC	Instituto Nacional de Ciencias Penales	116,163,434	45,000,000	161,163,434
	Instituto Mexicano del Seguro Social	0	757,892,364	757,892,364
BYR	Instituto Mexicano del Seguro Social		757,892,364	757,892,364
	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,050,417	40,438,969	147,489,386
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	107,050,417	40,438,969	147,489,386
	Comisión Federal de Electricidad	0	1,554,169,802	1,554,169,802
TVV	Comisión Federal de Electricidad		1,554,169,802	1,554,169,802



ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRÉS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		128,363,630,307
01 Poder Legislativo		6,000,000
	Actividades derivadas del trabajo legislativo	6,000,000
	H. Cámara de Senadores	6,000,000
04 Gobernación		324,908,141
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,164,164
	Planeación demográfica del país	7,452,000
	Protección y defensa de los derechos humanos	7,289,977
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	10,000,000
05 Relaciones Exteriores		17,000,000
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	12,000,000
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
	Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral	1,000,000
06 Hacienda y Crédito Público		4,000,000
	Actividades de apoyo administrativo	4,000,000
07 Defensa Nacional		128,829,277
	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,829,277
08 Agricultura y Desarrollo Rural		7,832,883,210
	Programa de Abasto Rural a cargo de Olconsa, S.A. de C.V. (OLCONSA)	1,288,281,033
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	2,192,351,374
	Fertilizantes	669,169,999
	Producción para el Bienestar	3,374,959,998
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	308,050,808
09 Comunicaciones y Transportes		5,098,886
	Definición, conducción y supervisión de la política de comunicaciones y transportes	5,098,886
10 Economía		2,688,209,243
	Actividades de apoyo administrativo	209,243
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	1,152,000,000
	Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares	1,536,000,000
11 Educación Pública		20,936,850,454
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	761,087,588
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	35,294,276
	Políticas de igualdad de género en el sector educativo	2,000,774
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	7,984,242,470
	Programa de Becas Elisa Acuña	1,311,168,059
	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	8,096,947
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,544,088,350
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	8,282,890,000
12 Salud		5,026,554,886
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	21,025,858
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	167,899,176
	Atención a la Salud	1,500,080,864
	Prevención y atención contra las adicciones	51,846,013
	Programa de vacunación	449,308,724
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	404,229,242
	Prevención y control de enfermedades	4,835,657
	Salud materna, sexual y reproductiva	2,026,829,971
	Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	400,518,282



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

13 Marina		6,860,000
	Sistema Educativo naval y programa de becas	6,860,000
14 Trabajo y Previsión Social		10,007,612,280
	Procuración de justicia laboral	40,000,000
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,959,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	9,942,652,330
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,578,843,392
	Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio	2,454,868
	Programa de Vivienda Social	1,973,129,488
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	59,265,236
	Programa Nacional de Reconstrucción	544,000,001
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		137,244,658
	Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	235,552
	Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	71,110,531
	Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	65,798,475
18 Energía		3,367,884
	Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas	99,780
	Actividades de apoyo administrativo	3,118,104
	Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	150,090
19 Aportaciones a Seguridad Social		328,650
	Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana	328,650
20 Bienestar		72,040,443,179
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	278,585,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,684,509,023
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	59,480,976,926
	Sembrando Vida	9,189,861,120
	Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos	405,003,761
21 Turismo		8,098,235
	Planeación y conducción de la política de turismo	8,098,235
22 Instituto Nacional Electoral		70,818,217
	Gestión Administrativa	1,100,000
	Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	26,626,923
	Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar	3,802,800
	Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico	28,090,829
	Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión	7,951,681
	Vinculación con la sociedad	666,002
	Tecnologías de información y comunicaciones	479,982
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		42,581,639
	Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres	28,920,571
	Actividades de apoyo administrativo	13,661,068
36 Seguridad y Protección Ciudadana		3,518,286
	Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes	3,518,286
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		5,182,370,886
	Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado	113,583,708
	Becas de posgrado y apoyos a la calidad	5,048,786,988



40 Información Nacional Estadística y Geográfica	204,429,778
Producción y difusión de información estadística y geográfica	204,429,778
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	9,262,907
Actividades de apoyo administrativo	9,262,907
45 Comisión Reguladora de Energía	220,000
Regulación y permisos de electricidad	60,000
Regulación y permisos de Hidrocarburos	60,000
Actividades de apoyo administrativo	100,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,010,029,931
Atención a Víctimas	7,772,233
Actividades de apoyo administrativo	12,788,871
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	8,248,938
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres	444,583,330
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	365,349,561
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	171,286,996
48 Cultura	22,072,092
Desarrollo Cultural	18,433,477
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	3,618,615
49 Fiscalía General de la República	77,386,646
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	69,282,154
Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales	482,089
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	2,952,657
Promover la formación profesional y capacitación del capital humano	1,344,384
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
18 Energía *	210,362
Distribución de petróleo, gas, petroíferos y petroquímicos	11,775
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional	195,362
Actividades de apoyo administrativo	2,684
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	537
Instituto Mexicano del Seguro Social *	22,577,285,518
Prevención y control de enfermedades	2,390,434,065
Servicios de guardería	13,080,398,979
Atención a la Salud	7,196,452,474
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado **	500,716,214
Equidad de Género	52,873,440
Prevención y control de enfermedades	547,842,774
Petróleos Mexicanos **	11,720,000
Actividades de apoyo administrativo	11,720,000
Comisión Federal de Electricidad **	4,487,000
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	467,000
Operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión	120,000
Operación y mantenimiento de la infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica	2,130,000
Comercialización de energía eléctrica y productos asociados	500,000
Prestación de servicios corporativos	415,000
Funciones en relación con Estrategias de Negocios Comerciales, así como potenciales nuevos negocios	91,000
Actividades de apoyo administrativo	484,000
Coordinación de las funciones y recursos para la infraestructura eléctrica	190,000

*/ El presupuesto no suma en el total, por ser recursos propios.

ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		203,637,953,713
04 Gobernación		138,262,478
	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	138,262,478
05 Relaciones Exteriores		129,029,646
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	129,029,646
11 Educación Pública		16,145,980,752
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	6,834,312,000
	Educación para Adultos (INEA)	265,337,225
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	55,381,089
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	2,035,270,680
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	6,387,393,976
	Programa de Becas Elisa Acuña	601,432,473
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	248,853,298
12 Salud		11,599,743,487
	Asistencia social y protección al paciente	510,376,823
	Atención a la Salud	8,105,894,863
	Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	101,325,926
	Investigación y desarrollo tecnológico en salud	120,787,284
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	454,004,404
	Programa de Atención a Personas con Discapacidad	25,767,978
	Programa Nacional de Reconstrucción	333,333,333
	Salud materna, sexual y reproductiva	893,714,498
	Servicios de asistencia social integral	1,053,939,358
14 Trabajo y Previsión Social		13,265,530,814
	Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	24,959,950
	Jóvenes Construyendo el Futuro	13,240,570,864
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		2,295,714,743
	Programa de Vivienda Social	1,183,874,093
	Programa Nacional de Reconstrucción	1,112,840,650
19 Aportaciones a Seguridad Social		4,994,004,761
	Programa IMSS-BIENESTAR	4,994,004,761
20 Bienestar		151,230,834,280
	Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
	Desarrollo integral de las personas con discapacidad	31,048,573
	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	128,567,525,190
	Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	15,683,785,707
	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)	278,535,043
	Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,638,471,929
	Sembrando Vida	3,775,873,435
	Servicios a grupos con necesidades especiales	294,059,097
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos		32,107,591
	Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos	18,285,242
	Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	13,822,349
47 Entidades no Sectorizadas		3,633,887,159
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	10,931,158
	Actividades de apoyo administrativo	158,617,980
	Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas	928,618,198
	Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	937,716,081
	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,598,705,742
48 Cultura		60,146,784
	Educación y cultura indígena	60,146,784
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		51,711,239
	Atención a Personas con Discapacidad	51,711,239



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN


ANEXO 15. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN PARA PROMOVER EL USO DE TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS (pesos)

Ramo	Denominación	MONTO
Total		8,972,603,511
04 Gobernación		973,764
12 Salud		6,417,827
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		1,784,728
	Procuraduría Federal de Protección al Ambiente	1,784,728
18 Energía		325,689,974
	Secretaría de Energía	249,195,071
	Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía	76,094,903
	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	400,000
Petróleos Mexicanos		169,502,476
	Pemex Exploración y Producción	134,502,476
	Pemex Transformación Industrial	35,000,000
Comisión Federal de Electricidad		8,468,234,742
	CFE Consolidado*	8,468,234,742

* Incluye la inversión financiada de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

ANEXO 16. RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
TOTAL		70,274,272,931
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,452,373
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura	1,452,373
09 Comunicaciones y Transportes		153,980,808
	Reconstrucción y Conservación de Carreteras	153,980,808
11 Educación Pública		86,746,701
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	80,517,612
	Programa de Becas Elisa Acuña	5,814,985
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	19,356,407
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	1,057,897
12 Salud		344,189,989
	Protección Contra Riesgos Sanitarios	12,083,069
	Vigilancia epidemiológica	332,106,920
13 Marina		13,005,275
	Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	13,005,275
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		606,804,849
	Programa de Vivienda Social	197,312,349
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	409,492,500
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		5,636,519,362
	Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable	3,435,359
	Investigación científica y tecnológica	189,074,497
	Protección Forestal	1,307,090,815
	Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde	153,103,383
	Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas	98,590,123
	Regulación Ambiental	61,713,629
	Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales	52,198,556
	Gestión integral y sustentable del agua	771,770,475
	Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable	16,930,215
	Actividades de apoyo administrativo	11,544,780
	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	3,419,698



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	41,174,465
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible	142,221,082
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	356,388,479
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	1,569,322,223
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	826,598,409
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias	34,943,175
18 Energía	368,208,397
Actividades de apoyo administrativo	1,846,811
Conducción de la política energética	48,549,787
Coordinación de la política energética en electricidad	4,125,684
Coordinación de la política energética en hidrocarburos	7,431,802
Gestión, promoción, supervisión y evaluación del aprovechamiento sustentable de la energía	59,280,742
Fondos de Diversificación Energética	249,199,071
21 Turismo	650,000
Planeación y conducción de la política de turismo	650,000
23 Provisiones Salariales y Económicas	8,327,349,813
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	8,327,349,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
36 Seguridad y Protección Ciudadana	141,077,927
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil	141,077,927
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	259,103,342
Investigación científica, desarrollo e innovación	127,914,952
Becas de posgrado y apoyos a la calidad	131,188,390
47 Entidades no Sectorizadas	30,000,000
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	30,000,000
Petróleos Mexicanos	207,912,580
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	186,912,580
Mantenimiento de infraestructura	11,000,000
Comisión Federal de Electricidad	53,498,270,536
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	4,158,500
Servicio de transporte de gas natural	52,831,808,000
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica	3,976,392
Proyectos de infraestructura económica de electricidad	89,821,858
Mantenimiento de infraestructura	456,713,788

ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		448,175,824,339
07 Defensa Nacional		1,957,089,768
	Sistema educativo militar	1,957,089,768
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,798,851,473
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	1,393,851,472
	Producción para el Bienestar	405,000,001
10 Economía		288,000,000
	Programa de Microcréditos para el Bienestar	288,000,000
11 Educación Pública		263,433,586,218
	Educación Básica	16,943,471,719
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	857,564,471
	Producción y transmisión de materiales educativos	34,518,273
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	1,448,075,571
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	11,177,939,456



Programa de Becas Elisa Acuña	48,918,204
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,380,022
La Escuela es Nuestra	3,375,867,500
Educación para Adultos (INEA)	345,408,220
Educación Media Superior	109,655,637,946
Servicios de Educación Media Superior	45,672,672,182
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,693,707
Normalización y certificación en competencias laborales	922,038,859
Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	36,538,126
Programa de Becas Elisa Acuña	141,248,613
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	20,649,539
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS)	26,016,817
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	33,171,560,000
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,702,382
Apoyos a centros y organizaciones de educación	61,070,031
Educación Física de Excelencia	198,947,780
Educación Superior	135,452,362,453
Servicios de Educación Superior y Posgrado	61,211,093,845
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	5,453,147,871
Proyectos de infraestructura social del sector educativo	160,000,000
Programa de Becas Elisa Acuña	3,723,701,405
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	131,979,497
Jóvenes Escribiendo el Futuro	8,649,800,390
Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,806
Subsidios para organismos descentralizados estatales	62,590,423,529
Apoyos a centros y organizaciones de educación	444,729,114
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	987,413,194
Posgrado	1,376,214,101
Programa de Becas Elisa Acuña	131,514,853
Subsidios para organismos descentralizados estatales	1,244,699,448
12 Salud	1,132,993,114
Prevención y atención contra las adicciones	831,115,872
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	301,877,242
13 Marina	639,541,505
Sistema Educativo naval y programa de becas	639,541,505
14 Trabajo y Previsión Social	20,370,109,022
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,370,109,022
15 Medio Ambiente y Recursos Naturales	250,672
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental	250,672
19 Aportaciones a Seguridad Social	5,819,268,050
Seguro de Enfermedad y Maternidad	5,819,268,050
20 Bienestar	111,155,257
Instituto Mexicano de la Juventud	111,155,257
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	1,123,959,558
Servicios de educación normal en la Ciudad de México	1,123,959,558
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	104,548,093,782
Educación Básica	98,335,294,863
FAM Infraestructura Educativa Básica	80,147,492
FONE Servicios Personales	89,182,745,415
FONE Otros de Gasto Corriente	2,579,905,778
FONE Gasto de Operación	3,583,057,606
FONE Fondo de Compensación	2,578,034,394
FAETA Educación de Adultos	321,403,977



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Educación Media Superior	1,604,318,105
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	886,397,361
FAETA Educación Tecnológica	908,920,744
Educación Superior	4,608,480,814
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	4,608,480,814
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	40,681,358
Investigación científica, desarrollo e innovación	40,681,358
47 Entidades no Sectorizadas	203,901,542
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	203,901,542
48 Cultura	12,174,892
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales	12,174,892
Instituto Mexicano del Seguro Social	44,307,844,167
Prevención y control de enfermedades	359,209,583
Atención a la Salud	43,948,634,584
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	2,387,423,962
Prevención y Control de Enfermedades	384,543,494
Atención a la Salud	2,002,880,468

1/_ Programa operado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		791,684,563,878
04 Gobernación		115,817,218
	Atención a refugiados en el país	4,057,050
	- Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	68,884,001
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	596,400
	Registro e Identificación de Población	42,609,765
05 Relaciones Exteriores		4,000,000
	Atención, protección, servicios y asistencia consulares	4,000,000
08 Agricultura y Desarrollo Rural		1,652,359,947
	Desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria	870,886,810
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	781,873,138
11 Educación Pública		160,323,930,090
	Apoyos a centros y organizaciones de educación	3,381,414,844
	Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPEMS)	26,016,817
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	26,537,248,000
	Educación Física de Excelencia	79,459,092
	Educación Inicial y Básica Comunitaria	3,839,251,903
	- Educación para Adultos (INEA)	165,156,288
	Expansión de la Educación Inicial	625,000,000
	Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEB)	55,381,099
	Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	2,693,707
	La Escuela es Nuestra	12,280,250,000
	Normalización y certificación en competencias laborales	922,038,889
	Producción y distribución de libros y materiales educativos	9,176,164,708
	Producción y transmisión de materiales educativos	127,845,454
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,965,879
	Programa de Becas Elisa Acuña	141,600,318
	Programa de Cultura Física y Deporte	1,301,983,761
	Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	185,124,285



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Programa Nacional de Inglés	382,465,853
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	81,651,931
Servicios de Educación Media Superior	45,872,572,182
Subsidios para organismos descentralizados estatales	29,402,702,332
12 Salud	51,482,216,455
Atención a la Salud	17,354,238,499
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	30,252,036,165
Formación y capacitación de recursos humanos para la salud	134,433,268
Investigación y desarrollo tecnológico en salud	89,525,075
Prevención y atención contra las adicciones	200,905,718
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	1,569,341
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes	29,455,628
Programa de Atención a Personas con Discapacidad	18,552,944
Programa de vacunación	2,042,312,382
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	65,184,153
Salud materna, sexual y reproductiva	535,168,244
Servicios de asistencia social integral	758,836,338
14 Trabajo y Previsión Social	4,482,788
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	4,482,788
18 Aportaciones a Seguridad Social	6,279,382,662
Programa IMSS-BIENESTAR	6,279,382,662
20 Bienestar	2,698,623,674
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	12,921,184
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	2,585,702,480
22 Instituto Nacional Electoral	6,519,294
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía	6,375,294
Tecnologías de información y comunicaciones	144,000
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	41,022,701,440
Becas para la población atendida por el sector educativo	174,297,208
Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	200,000,000
Servicios de educación básica en la Ciudad de México	40,648,404,232
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	456,679,760,522
FAETA Educación de Adultos	210,785,775
FAETA Educación Tecnológica	4,044,345,765
FAM Asistencia Social	9,113,711,331
FAM Infraestructura Educativa Básica	9,429,116,762
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	698,397,361
FASSA	27,129,158,388
FONE Fondo de Compensación	10,741,809,976
FONE Gasto de Operación	14,929,407,533
FONE Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402
FONE Servicios Personales	371,836,439,228
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	5,902,735
Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes	5,902,735
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	8,050,000
Regulación y Supervisión de los sectores Telecomunicaciones y Radiodifusión	8,050,000
47 Entidades no Sectorizadas	1,359,854,300
Programa de Apoyo a la Educación Indígena	1,359,854,300



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

48 Cultura	45,209,771
Desarrollo Cultural	22,314,300
Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales	1,837,870
Servicios Cinematográficos	815,254
Servicios educativos culturales y artísticos	20,242,346
49 Fiscalía General de la República	71,629,568
Actividades de apoyo administrativo	3,325,352
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos	67,144,798
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral	1,159,420
Instituto Mexicano del Seguro Social	52,303,800,278
Atención a la Salud	34,513,389,750
Prestaciones sociales	227,875,101
Prevención y control de enfermedades	4,372,168,448
Servicios de guardería	13,080,388,979
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	15,720,223,144
Atención a la Salud	11,326,977,795
Prevención y control de enfermedades	1,785,380,503
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	2,607,864,846

ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (pesos)

Ramo	Denominación	Monto
Total		209,372,405,069
4 Gobernación		595,932,505
	Conducción de la política interior	33,851,388
	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	57,745,001
	Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México	38,709,581
	Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	300,164,164
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación	137,021,715
	Protección y defensa de los derechos humanos	30,439,658
6 Hacienda y Crédito Público		170,010,527
	Detección y prevención de ilícitos financieros	170,010,527
7 Defensa Nacional		6,248,181,058
	Derechos humanos	59,548,410
	Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN	128,629,277
	Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública	4,103,913,604
	Sistema educativo militar	1,957,089,768
11 Educación Pública		104,735,218,129
	Atención al deporte	575,314,715
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez	24,878,670,000
	Desarrollo Cultural	3,882,051,212
	Educación Física de Excelencia	254,863,640
	Educación para Adultos (INEA)	30,035,497
	Jóvenes Escribiendo el Futuro	7,225,210,914
	La Escuela es Nuestra	8,841,780,000
	Producción y distribución de libros y materiales culturales	114,276,825
	Producción y transmisión de materiales educativos	824,079,723
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez	31,936,669,879
	Programa de Becas Elisa Acuña	3,589,718,582
	Programa de Cultura Física y Deporte	2,099,973,808
	Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa	210,700,973
	Servicios de Educación Media Superior	4,908,500,923
	Servicios de Educación Superior y Posgrado	5,626,352,813
	Subsidios para organismos descentralizados estatales	8,475,012,228
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García	493,706,597

12 Salud	2,374,982,950
Prevención y atención contra las adicciones	1,413,630,829
Prevención y control de enfermedades	32,451,691
Salud materna, sexual y reproductiva	928,700,460
13 Marina	6,451,720,602
Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas	5,503,731,387
Sistema Educativo naval y programa de becas	947,989,215
14 Trabajo y Previsión Social	20,603,109,022
Capacitación para Incrementar la Productividad	1,000,000
Ejecución a nivel nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales	1,000,000
Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral	1,000,000
Jóvenes Construyendo el Futuro	20,603,109,022
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	8,551,880,000
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,551,880,000
20 Bienestar	9,221,811,959
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	1,711,458
Actividades de apoyo administrativo	19,215,700
Articulación de Políticas Integrales de Juventud	21,535,306
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras	211,077,754
Sembrando Vida	8,968,271,742
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12,762,432,999
FAETA Educación Tecnológica	772,709,731
FASP	7,695,616,328
FORTAMUN	4,294,106,940
36 Seguridad y Protección Ciudadana	27,789,711,013
Actividades de apoyo administrativo	7,777,556,414
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública	239,228,409
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos	27,961,271,330
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones	1,811,654,860
48 Cultura	1,865,414,306
Desarrollo Cultural	1,785,511,331
Educación y cultura indígena	69,146,784
Programa de Apoyos a la Cultura	20,756,190

ANEXO 20. RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (pesos)

	MONTO
Provisiones Salariales	13,790,309,730
Situaciones laborales supervenientes	13,790,309,730
Provisiones Económicas	8,013,390,953
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	8,727,349,813
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)	200,000,000
Comisiones y pago a GECOBAN	88,041,140
Provisiones Salariales y Económicas	14,742,203,653
Desarrollo Regional	50,000,000
Provisión para la Armonización Contable	50,000,000
Otras Provisiones Económicas	71,000,000,000
Programa de Separación Laboral	1,000,000,000
Subsidios a las Tarifas Eléctricas	70,000,000,000
Gastos asociados a ingresos petroleros	13,890,848,000
TOTAL	127,486,744,341

ANEXO 21. RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

	MONTO
Previsiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	18,282,547,484
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,497

ANEXO 22. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)

	MONTO
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE):	808,057,264,139
Servicios Personales	371,636,439,228
Otros de Gasto Corriente ¹⁷	10,749,807,402
Gasto de Operación	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,809,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	109,501,268,964
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,409,852
Entidades	10,276,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ²¹	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ²²	85,882,138,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,289,923,958
Asistencia Social	12,550,329,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,937
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,719,222,553
Educación Tecnológica	4,953,267,509
Educación de Adultos	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal ²³	7,695,818,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	46,924,635,800
TOTAL ²⁴	777,842,880,397

¹⁷ Incluye recursos para las plazas subsidiadas a las entidades federativas incluidas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, conforme a los registros que se tienen en las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público.

²¹ La Ley de Coordinación Fiscal considera en la denominación de estos Fondos al Distrito Federal.

²² Considera los recursos para dar cumplimiento al artículo 49, fracción IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir al 0.1 por ciento, con excepción del componente de servicios personales previsto en el FONE.

Con respecto a lo previsto en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a la Evaluación del Desempeño, no se considera transferencia de recursos al Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAP), toda vez que la Unidad de Evaluación del Desempeño, en su carácter de unidad responsable del FIDEFAP, consideró que el patrimonio contable con que cuenta el mismo, resulta suficiente para efectuar la contratación de las evaluaciones externas de los Fondos de Aportaciones Federales, mandatadas en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

ANEXO 22. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ANEXO 23.1.1. LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (pesos)

Grupo	Tipo de Personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total ^{1/}	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando ^{1/}							
G	Secretario de Estado		111,785		28,406		140,191
HA	Subsecretario		110,957		28,191		139,058
J	Jefe de Unidad	101,769	108,455	25,572	26,785	127,341	135,239
K	Director General	88,003	95,758	21,355	23,577	109,358	120,335
L	Director General Adjunto	68,184	82,553	17,747	20,534	85,931	103,087
M	Director	42,829	78,396	11,046	18,969	53,875	97,365
N	Subdirector	26,476	41,742	8,142	10,832	34,618	52,574
O	Jefe de Departamento	17,800	26,122	6,447	7,987	24,246	34,109
P	Personal de Enlace	9,373	17,058	4,911	6,254	14,284	23,311
Personal Operativo		7,229	10,582	9,271	10,207	16,500	20,789
Personal de Categorías:							
	Del Servicio Exterior Mexicano	11,072	90,075	5,150	22,092	16,222	112,167
	De Educación	3,318	70,176	12,142	52,723	12,459	122,899
	De las Ramas Médica, Paramédica y Grupos Afines	9,936	52,579	14,873	26,984	24,809	79,962
	De Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico	8,250	30,610	19,003	65,899	27,253	96,509
	De Seguridad Pública	11,585	36,246	10,178	52,534	21,763	90,780
	De Gobernación	14,229	21,814	12,828	14,875	27,057	36,689
	De las Fuerzas Armadas	6,571	114,229	7,670	27,352	14,841	141,581

1/ Las denominaciones de Secretario de Estado, Subsecretario y Jefe de Unidad son exclusivas de las Dependencias del Ejecutivo Federal. Los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades adoptan como denominación el de Director General, Vocal, Comisionado, etc., independientemente de que el rango tabular pudiera ser coincidente con el de las Dependencias para las denominaciones de uso exclusivo.

2/ La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos por sueldos y salarios, y por prestaciones ordinarias, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas. Los montos netos mensuales corresponden a la cantidad que perciben los servidores públicos, una vez aplicadas las disposiciones fiscales. Los montos indicados no incluyen las prestaciones extraordinarias. Los rangos de las remuneraciones del personal operativo y de categorías, varían conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y los Contratos Colectivos de Trabajo.

ANEXO 23.1.2. REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida ^{1/}
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	112,122
Impuesto sobre la renta retenido (34%) * y deducciones de seguridad social	50,190
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	162,311
a) Sueldos y salarios:	161,058
i) Sueldo base	44,897
ii) Compensación garantizada	116,159
b) Prestaciones:	1,255
i) Prima quinquenal (antigüedad)	235
ii) Ayuda para despensa	985
iii) Seguro colectivo de retiro	35

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1/ Corresponde a la remuneración en numerario sin considerar las prestaciones en especie.

ANEXO 23.1.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE PERCEPCIONES ORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,719,581
Impuesto sobre la renta retenido (34%) *	684,072
Percepción ordinaria bruta anual	2,403,653
a) Sueldos y salarios:	1,932,572
i) Sueldo base	538,764
ii) Compensación garantizada	1,393,808
b) Prestaciones:	470,981
i) Aportaciones a seguridad social	68,322
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	14,965
iv) Aguinaldo (sueldo base)	68,358
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	234,883
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	2,820
vii) Ayuda para despensa	11,820
viii) Seguro de vida institucional	27,057
ix) Seguro colectivo de retiro	425

* Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

1/ Conforme a la Ley del ISSSTE se incluye esta prestación a partir de 2010.

ANEXO 23.2. CÁMARA DE SENADORES

ANEXO 23.2.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios ⁽¹⁾		Prestaciones ⁽¹⁾ (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total ⁽¹⁾⁽²⁾	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		104,673		25,322		129,995
Coordinador / Contador / Tesorero / Secretario Técnico Órgano de Gobierno	100,171	103,261	123,911	24,475	124,082	127,736
Director General	83,490	89,933	20,564	23,556	104,054	123,489
Jefe de Unidad	69,439	81,763	17,585	19,788	87,004	101,551
Director de Área	46,802	71,454	13,046	17,484	60,848	88,938
Subdirector de Área	33,283	45,869	10,179	12,355	43,462	58,224
Jefe de Departamento	22,878	32,128	9,599	11,083	32,477	43,211
Personal de Servicio Técnico de Cámara	12,239	45,980	7,022	11,257	19,261	57,237
Personal operativo de confianza	27,778	29,497	12,432	12,849	40,210	42,346
Personal operativo de base	6,328	17,479	33,943	38,658	40,271	56,137

1) La remuneración neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos de la Cámara de Senadores, una vez aplicadas las disposiciones fiscales y deducciones de seguridad social.

2) En la Percepción Ordinaria Total se incluyen los importes que se cubren una o dos veces al año, divididos entre doce, por concepto de aguinaldo y prima vacacional.

3) Los importes de las percepciones mensuales plasmadas en este documento, corresponden a los tabuladores vigentes para el ejercicio fiscal 2019, no contemplan ajustes por incrementos en la unidad de medida y actualización (UMA), ni efectos inflacionarios.



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



ANEXO 23.2.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida ^{1/}
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,175,478
Impuesto sobre la renta retenido ^{2/}	460,760
Percepción bruta anual	1,636,239
I. Percepciones ordinarias:	1,636,239
a) Sueldos y salarios:	1,338,292
i) Sueldo base ^{3/}	1,338,292
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	297,947
i) Aportaciones a seguridad social	4,378
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	
iii) Prima vacacional	
iv) Aguinaldo (sueldo base)	216,745
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida institucional	76,823
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de separación individualizado	
xii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago por riesgo y potenciación de seguro de vida	

^{1/} Cálculo obtenido conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.^{2/} Corresponde a las percepciones para 2019.^{3/} Dieta.

ANEXO 23.2.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN SENADOR DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	79,273
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	32,262
Percepción ordinaria bruta mensual	111,524
I. Percepciones ordinarias:	111,524
a) Sueldos y salarios:	111,524
i) Sueldo base	111,524
ii) Compensación garantizada	
b) Prestaciones:	
i) Prima quinquenal	
ii) Ayuda para despensa	
iii) Seguro colectivo de retiro	

Vigencia a partir de enero de 2020

ANEXO 23.2.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,559,843
Impuesto sobre la renta retenido *	873,029
Percepción bruta anual	2,232,972
I. Percepciones ordinarias:	2,232,972
a) Sueldos y salarios:	1,812,486
i) Sueldo base	308,000
ii) Compensación garantizada	1,503,396
b) Prestaciones:	420,578
i) Aportaciones a seguridad social	61,644
ii) Ahorro solidario	19,896
iii) Prima vacacional	12,758
iv) Aguinaldo (sueldo base)	49,552
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	243,944
vi) Seguro de vida institucional	32,628
vii) Seguro colectivo de retiro	158

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.2.5. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL DEL PUESTO DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SECRETARIO GENERAL (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA	104,673
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social	45,360
Percepción bruta mensual	151,033
a) Sueldos y salarios:	151,033
i) Sueldo base	25,500
ii) Compensación garantizada	125,533

(*) El importe neto puede variar en función de las modificaciones de la tabla de impuestos.

ANEXO 23.3. CÁMARA DE DIPUTADOS

ANEXO 23.3.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
CÁMARA DE DIPUTADOS						
Personal de base:						
2		8,796		14,828		23,624
3		8,863		15,052		23,915
4		8,992		15,162		24,144
5		9,210		15,326		24,534
6		9,396		15,434		24,830
7		10,121		15,610		25,731
8		10,625		15,673		26,298
9		11,165		15,813		26,978
10		11,601		16,278		27,879
11		13,881		16,541		30,421
12		15,114		16,780		31,893
13		17,245		16,918		34,164



Personal de base sindicalizado:					
2		8,795	23,724		32,519
3		8,863	24,033		32,897
4		8,932	24,165		33,157
5		9,210	24,391		33,601
6		9,396	24,530		33,926
7		10,121	24,723		34,844
8		10,625	24,775		35,400
9		11,185	24,821		36,086
10		11,801	25,510		37,311
11		13,881	25,823		39,703
12		15,114	26,015		41,128
13		17,246	26,302		43,547
14		17,754	26,427		44,181
15		17,848	26,446		44,293
16		19,261	26,627		45,888
17		20,113	26,739		46,852
18		21,988	27,027		49,016
Personal de confianza:					
0		3,869	9,354		13,223
00		5,483	9,465		14,948
2		8,795	13,628		22,423
3		8,863	13,796		22,659
4		8,992	13,873		22,865
5		9,210	14,008		23,218
6		9,396	14,095		23,491
7		10,121	14,248		24,367
8		10,625	14,307		24,932
9		11,185	14,431		25,616
10		11,801	14,804		26,605
11		13,881	15,157		29,037
12		15,114	15,369		30,483
13		17,246	15,548		32,794
14		17,754	15,608		33,362

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (págs)

CÁMARA DE DIPUTADOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Secretario General		105,795		18,963		124,758
Secretario de Servicios/Contralor Interno/Coordinador de Comunicación Social		104,648		18,749		123,397
Director General	98,369	104,097	17,577	18,829	115,946	122,636
Secretario de Enlace		99,287		17,738		116,976
Homólogo a Director General		98,369		17,577		115,946
Director de Área y Homólogos	62,915	90,133	11,270	16,039	74,184	106,172
Subdirector de Área y Homólogos	42,489	57,214	7,820	10,277	50,309	67,491
Jefe de Departamento y Homólogos	29,202	35,232	5,522	6,485	34,724	41,687

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.

ANEXO 23.3.2.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,500		10,200		20,700
9		11,833		10,384		22,227
10		14,153		10,751		24,904
12		19,039		11,504		30,543
13		19,341		11,550		30,891
14		21,986		11,759		33,745
15		30,541		12,504		43,145

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.2.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Jefe de la Unidad		104,548		18,749		123,397
Director de Área		98,368		17,577		115,946
Secretario Técnico		65,249		11,624		76,873
Subdirector de Área		59,966		10,730		70,757
Coordinador		52,527		9,495		62,023
Especialista		38,231		7,025		45,257

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.

LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE.

ANEXO 23.3.3.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)
CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de confianza:						
8		10,825		14,307		24,932
9		11,165		14,431		25,596
10		11,601		14,804		26,606
11		13,881		15,157		29,037
12		15,114		15,369		30,483
13		17,245		15,548		32,794
14		17,754		15,608		33,362

Este ANEXO refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales para el ejercicio 2020 y pueden variar en función de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno competentes.

La percepción neta es el resultado de aplicar a los importes brutos mensuales el impuesto correspondiente.

ANEXO 23.3.3.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
Director General		104,007		18,529		122,536
Director de Área y Homólogos		90,133		18,039		108,172
Jefe de Departamento y Homólogos		35,232		5,455		41,697

ESTE ANEXO REFLEJA LOS LÍMITES DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS MENSUALES PARA EL EJERCICIO 2020 Y PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DE LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO COMPETENTES.
LA PERCEPCIÓN NETA ES EL RESULTADO DE APLICAR A LOS IMPORTES BRUTOS MENSUALES EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE

ANEXO 23.3.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PUESTO DE ELECCIÓN DIPUTADO FEDERAL (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) (1)	1,156,738
Impuesto sobre la renta retenido (2)	408,677
Percepción Bruta Anual	1,559,415
I. Percepciones Ordinarias:	1,559,415
a) Sueldos y salarios:	1,264,536
i) Sueldo Base (3)	1,264,536
ii) Compensación Garantizada	
b) Prestaciones:	294,879
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Ahorro solidario (art. 100 ISSSTE)	20,330
iii) Prima vacacional	
iv) Aguinaldo	
v) Gratificación de fin de año	140,504
vi) Prima quinquenal	
vii) Ayuda para despensa	
viii) Seguro de vida institucional	
ix) Seguro colectivo de retiro	
x) Seguro de gastos médicos mayores	
xi) Seguro de Separación Individualizado	
xii) Apoyo económico para la adquisición de vehículo	
xiii) Otras prestaciones (4)	71,038
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago por riesgo y potencialización de seguro de vida	

(1) Corresponde a las percepciones 2020

(2) Conforme lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

(3) Dieta.

(4) Prestación I.S.R. de gratificación de fin de año.

ANEXO 23.4. AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.4.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO	621,219	1,363,310	212,904	739,566	834,123	2,102,896
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		112,482		26,333		138,815
AUDITOR ESPECIAL		111,448		26,055		137,503
TITULAR DE UNIDAD		110,415		25,823		136,238
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	108,087	109,381	25,353	25,592	133,340	134,973
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	95,967	99,046	23,085	23,650	119,052	122,696
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	90,845	92,517	21,923	22,229	112,768	114,746
SECRETARIO TÉCNICO		87,600		20,238		107,838
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	57,422	61,518	15,520	16,255	72,942	77,773
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	41,887	44,515	12,397	12,848	54,271	57,363
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA						
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	26,451	27,519	11,249	11,216	37,700	38,735
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR JURÍDICO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	23,309	24,240	11,113	11,077	34,422	35,317
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR JURÍDICO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	18,907	21,717	11,057	10,932	29,964	32,649
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"		20,521		10,340		30,861
SECRETARÍA PARTICULAR "A"		26,981		12,285		39,217
OPERADOR SUPERVISOR "A"	21,010	23,078	14,382	14,281	35,392	37,359
SECRETARÍA PARTICULAR "B"		21,551		12,512		34,063
OPERADOR SUPERVISOR "B"		19,107		14,490		33,597
OPERADOR SUPERVISOR "C"		17,758		14,571		32,329
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA		16,628		14,649		31,277
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA		16,628		14,649		31,277
OPERADOR SUPERVISOR "D"		16,628		14,649		31,277
VIGILANTE DE LA ASF		16,628		14,649		31,277
SECRETARÍA DE DIRECTOR DE ÁREA		14,541		14,195		28,736
PERSONAL OPERATIVO DE BASE						
TÉCNICO SUPERIOR		11,416		24,705		36,121
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES		11,025		24,668		35,703
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS		10,712		24,533		35,245
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS		10,048		24,399		34,444
ESPECIALISTA TÉCNICO		9,683		24,290		33,973
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS		9,312		24,190		33,502
ESPECIALISTA HACENDARIO		8,962		24,101		33,063
TÉCNICO MEDIO		8,591		23,999		32,590
ANALISTA CONTABLE		8,210		23,893		32,103
TÉCNICO CONTABLE		7,829		23,779		31,602
TÉCNICO MEDIO CONTABLE		7,419		23,620		31,039
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE		7,020		23,465		30,485

1.- Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

3.- No se considera el incremento en la medida de fin de año para el personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

4.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de base, en términos del Reglamento Interior de las Condiciones Generales de Trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, para el presente ejercicio fiscal.

5.- Los montos presentados en este anexo, no consideran los premios de antigüedad autorizados al personal operativo de confianza, en términos del Lineamientos para Otorgar Estímulos y Gratificación a los Servidores Públicos Operativos de Base y de Confianza de la ASF, para el presente ejercicio fiscal.

6.- En el ejercicio de los importes aquí señalados, se estará a lo dispuesto en las disposiciones aplicables, incluida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 23.4.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL (pesos)

TIPOS DE PERSONAL	Plazas	Pago extraordinario anual unitario
		Hasta
PERSONAL DE MANDO		
AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1	
AUDITOR ESPECIAL	4	
TITULAR DE UNIDAD	5	
DIRECTOR GENERAL Y HOMÓLOGOS	35	
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO	2	
DIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	137	
SECRETARIO TÉCNICO	3	
SUBDIRECTOR DE ÁREA Y HOMÓLOGOS	307	
JEFE DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGOS	476	
PERSONAL OPERATIVO DE CONFIANZA		
COORDINADOR DE AUDITORES DE FISCALIZACIÓN	188	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES JURÍDICOS	19	68,535
COORDINADOR DE AUDITORES ADMINISTRATIVOS	77	68,535
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "A"	245	62,086
AUDITOR JURÍDICO "A"	92	62,086
AUDITOR ADMINISTRATIVO "A"	90	62,086
AUDITOR DE FISCALIZACIÓN "B"	153	57,147
AUDITOR JURÍDICO "B"	3	57,147
AUDITOR ADMINISTRATIVO "B"	48	57,147
COORDINADOR DE ANALISTAS "A"	1	54,769
SECRETARIA PARTICULAR "A"	15	67,328
OPERADOR SUPERVISOR "A"	2	36,597
SECRETARIA PARTICULAR "B"	36	56,815
OPERADOR SUPERVISOR "B"	10	34,976
OPERADOR SUPERVISOR "C"	25	33,614
SUPERVISOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA	83	32,569
SUPERVISOR DE ÁREA TÉCNICA	13	32,569
OPERADOR SUPERVISOR "D"	10	32,569
VIGILANTE DE LA ASF	16	32,569
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	1	30,857
PERSONAL OPERATIVO DE BASE		
TÉCNICO SUPERIOR	37	45,750
COORDINADOR DE PROYECTOS ESPECIALES	7	45,691
JEFE DE SECCIÓN DE ESPECIALISTAS HACENDARIOS	7	45,136
ANALISTA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS	8	44,096
ESPECIALISTA TÉCNICO	7	43,546
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS	7	42,993
ESPECIALISTA HACENDARIO	4	42,465
TÉCNICO MEDIO	12	41,899
ANALISTA CONTABLE	26	41,338
TÉCNICO CONTABLE	36	40,732
TÉCNICO MEDIO CONTABLE	41	40,070
AUXILIAR TÉCNICO CONTABLE	51	39,410

1.- Los límites de percepción extraordinaria neta anual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2.- No se considera el incremento salarial anual al personal operativo de confianza y base, el cual será dado a conocer por la SHCP.

ANEXO 23.4.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (pesos)

AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA) ^{1/}	1,665,785
Impuesto sobre la renta retenido ^{2/}	885,636
Percepción bruta anual	2,351,321
I. Percepciones ordinarias:	2,351,321
a) Sueldos y salarios:	1,805,272
i) Sueldo base	450,563
ii) Compensación garantizada	1,454,609
b) Prestaciones:	446,049
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Prima vacacional	12,518
iii) Aguinaldo (sueldo base)	77,035
iv) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	247,249
v) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vi) Ayuda para despensa	10,620
vii) Seguro de vida institucional	32,199
viii) Seguro de gastos médicos mayores	
ix) Seguro de separación individualizado	
x) Revisión Médica	
xi) Vales de Despensa	
II. Percepciones extraordinarias:	0
a) Estímulo por Resultado de la Evaluación del Desempeño	

1/ Los límites de percepción ordinaria neta mensual, no consideran efectos inflacionarios, ni la aplicación de disposiciones de carácter fiscal y de seguridad social.

2/ Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

ANEXO 23.5. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ANEXO 23.5.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	Sueldos y salarios	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL).	1		204,883.000
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		100,993.062
COORDINADOR	3		100,287
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		99,563
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL., SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE FRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		98,889
SRIO. DE ACUERDO DE SALA	6		99,412
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	88,863	98,736
SRIO. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	88,570	98,411
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	9	87,749	97,499
SUBDIRECTOR GRAL.	10	88,214	98,016
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	88,711	98,016
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	88,214	98,016
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	87,759	97,510



SUBSECRETARÍA DE ACUERDOS DE SALA	14		84,626
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	58,547	78,665
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	42,935	78,665
ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	42,935	64,609
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	18	42,935	64,569
ACTUARIO	19	38,762	47,443
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	32,620	47,003
SUBDIRECTOR DE ÁREA	21	42,935	47,003
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	36,359	37,775
JEFE DE DPTO., AYUDANTE DE COMEDOR	23		36,702
TAC JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	28,618	37,751
PROF. OPERATIVO	25	25,114	37,751
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	26	30,741	33,622
SECRETARÍA	27	15,218	30,857
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	18,219	30,857
TÉCNICO OPERATIVO	29	18,218	30,857
CHOFER	30	15,205	30,857
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	15,205	30,857
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	15,218	28,616
OFICIAL DE SERVICIOS	33	13,843	18,218

ANEXO 23.5.2. LÍMITES DE LAS PERCEPCIONES (NETA TOTAL ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MINISTRO (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3RO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL)	1		444,413	416,948	0
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA, COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTROLADOR	2		214,217	0	280,771
COORDINADOR	3		213,052	0	278,618
SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS	4		211,493	0	276,619
DIR. GRAL., TITULAR DE UNIDAD GRAL. SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR	5		210,318	0	274,456
SRIO. DE ACUERDO DE SALA	6		207,818	0	276,087
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA), SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,396	205,998	0	274,005
SRIO. PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR	8	184,470	204,865	0	272,927
SRIO. DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO	9	177,231	196,924	0	267,873
SUBDIRECTOR GRAL.	10	179,942	199,936	0	270,681
ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR 1, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1, DICTAMINADOR 1 Y SRIO. AUXILIAR 1	11	184,470	199,936	0	270,581
SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	12	179,942	199,936	0	270,681
INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL	13	177,047	196,719	0	267,947
SUBSECRETARÍA DE ACUERDOS DE SALA	14		172,260		228,690
SRIO. AUXILIAR DE PONENCIA	15	114,208	159,418		211,323
DIRECTOR DE ÁREA, SRIO. AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITÉS	16	79,483	159,418		211,323



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ASESOR, ASESOR 2, COORDINADOR ADMINISTRATIVO 2, DICTAMINADOR 2, SRIO. AUXILIAR 2	17	79,483	158,418	211,323
SRIO. AUXILIAR DE ACUERDOS	18	79,483	127,228	170,710
ACTUARIO	19	70,059	89,537	123,829
SRIO. DE DIRECCIÓN GENERAL	20	58,447	80,779	122,656
SUBDIRECTOR DE AREA	21	79,483	88,779	122,696
ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR	22	64,548	67,451	97,030
JEFE DE DPTO., AYUDANTE DE COMEDOR	23		70,059	100,501
TAC. JUDICIAL PARLAMENTARIA	24	48,629	57,965	96,936
PROF. OPERATIVO	25	41,848	57,965	95,926
AUXILIAR DE MANDO MEDIOS	26	53,084	58,735	95,273
SECRETARIA	27	24,798	54,032	78,751
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28	28,798	54,014	78,745
TÉCNICO OPERATIVO	29	24,798	54,014	78,745
CHOFER	30	22,344	54,014	78,745
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL, TÉCNICO EN ALIMENTOS	31	22,344	54,014	78,745
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	32	24,798	48,629	73,162
OFICIAL DE SERVICIOS	33	19,867	24,796	42,348

ANEXO 23.5.3. REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (3RO TRANSITORIO) (pesos)

REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3º TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	MINISTRO (De conformidad con el artículo 3 transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional)
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,395,341
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,604,327
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,000,668
A) SUELDOS Y SALARIOS	3,568,845
I) SUELDO BASE	851,241
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,755,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	131,759
B) PRESTACIONES	791,908
I) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 LEY DEL ISSSTE)	0
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE), COMPENSACIÓN GARANTIZADA	585,114
V) GRATIFICACIÓN DEL FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	0
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	0
VII) AYUDA PARA DESPENSA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,245
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	35,906
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	0
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	43,165
XIV) AYUDA DE ANTEOJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	639,917

N/A: No Aplicable.



ANEXO 23.6. CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ANEXO 23.6.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
CONSEJERO	2		204,683
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		100,162
VISITADOR JUDICIAL A	5		99,814
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		150,083
TITULAR DE UNIDAD	8A		100,218
VOCAL, SRIO. EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SRIO. GRAL. DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	6B		100,547
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		100,554
JUEZ DE DISTRITO	7		136,782
SRIO. TÉCNICO, COORDINADOR DE PONENCIA DE CONSEJERO	8A		100,562
DIRECTOR GRAL. COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GRAL.	8		100,754
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	9		99,799
SECRETARIO TÉCNICO DE PONENCIA DE CONSEJERO	9B	90,205	100,226
SRIO. TÉCNICO AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	89,635	99,594
VISITADOR JUDICIAL B	10		99,065
SRIO. TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DE STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA	11	88,911	98,790
COORDINADOR DE ÁREAS/ ADMINISTRADOR REGIONAL	12	79,665	91,344
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		79,019
DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISIÓN, SRIO. DE APOYO B	13		68,313
DELEGADO, SRIO. TRIBUNAL, ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		76,731
EVALUADOR	13B		74,352
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO, SRIO. DE JUZGADO	13C		70,929
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		68,313
SRIO. DE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA ÚNICA PJF, ASESOR ESPECIALIZADO, SPS	15		65,582
SRIO. PARTICULAR DE SPS.	16		65,128
DEFENSOR PÚBLICO, ASESOR JURÍDICO	18A		62,575
ASESOR SPS, LÍDER DE PROYECTO, COORDINADOR TÉCNICO DE SPS	20	47,817	55,468
DELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		47,917
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y RESGUARDADO DE ARCHIVOS JUDICIALES	21B		47,323
SUBDIRECTOR DE ÁREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A, COORDINADOR TÉCNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	37,728	45,659
SRIO. PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SRIO. PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		36,283
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y COORDINADOR DE MITO. DEL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL	21C	30,806	35,928



**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS MENSUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN B, AUDITOR, DICTAMINADOR, COORDINADOR TÉCNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	30,689	32,414
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		31,718
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	26,108	29,903
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		28,608
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2		26,634
SECRETARIA	25B	22,491	
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAQUIGRAFÍA JUDICIAL PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCO, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	26		27,584
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		26,212
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		25,106
OFICIAL ADMINISTRATIVO, ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		24,642
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	18,212	22,448
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARIA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	28		22,083
TÉCNICO OPERATIVO	28B	16,218	20,338
ANALISTA A	29A		18,199
SECRETARIA A, ANALISTA	29		17,840
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO	30		17,294
ANALISTA ADMINISTRATIVO	31		16,708
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		15,878
CHOFER	33A		15,205
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		14,792
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		14,223

ANEXO 23.6.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETO ANUAL) (pesos)
SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

DESCRIPCIÓN	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
	NIVEL	MÍNIMO	MÁXIMO		
CONSEJERO	2		444,413	415,948	0
TITULAR DE ÓRGANO AUXILIAR	3		214,178	0	260,784
VISITADOR JUDICIAL A	5		213,351	0	269,771
MAGISTRADO DE CIRCUITO	6		291,290	472,043	0
TITULAR DE UNIDAD	6A		209,407	0	288,935
VOCAL, SECRETARIO EJECUTIVO, COORDINADOR DE ASESORES, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL CJF	6B		209,723	0	288,605
COORDINADOR ACADÉMICO, COORDINADOR DE SEGURIDAD	7A		201,184	0	287,050
JUEZ DE DISTRITO	7		261,563	422,006	0
SECRETARIO TÉCNICO COORDINADOR DE POENCIA DE CONSEJERO	8A		185,962	0	286,027
DIRECTOR GENERAL, COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL, COORDINADOR GENERAL	8		189,472	0	284,347
TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	9		185,472	0	287,788
SECRETARIO TÉCNICO DE POENCIA DE CONSEJERO	9B	165,958	184,064	0	290,052
SECRETARIO TÉCNICO DE AA DE COMISIÓN PERMANENTE	9C	168,803	187,559	0	288,154
VISITADOR JUDICIAL B	10		198,129	0	271,919
SECRETARIO TÉCNICO A, REPRESENTANTE DEL CJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA, REPRESENTANTE DEL STPJF ANTE LA COMISIÓN SUBSTANCIADORA,	11	173,345	192,605	0	268,713
COORDINADOR DE ÁREAS, ADMINISTRADOR REGIONAL A	12	156,531	190,602		248,297
RESPONSABLE DE ARCHIVOS JUDICIALES	12A		159,417		211,323



DIRECTOR DE ÁREA, SUPERVISOR, SECRETARIO DE APOYO B	13		130,778	180,288
DELEGADO, SECRETARIO DE TRIBUNAL, AGENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE TRIBUNAL DE ALZADA	13A		150,175	204,459
EVALUADOR	13B		145,589	197,336
ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE JUEZ DE CONTROL O JUEZ DE ENJUICIAMIENTO	13C		137,525	182,870
ADMINISTRADOR REGIONAL	14		130,778	180,288
SECRETARIO DE LA COMISION SUBSTANCIADORA UNICA P.J.F. ASESOR ESPECIALIZADO SPS	15		124,831	172,604
SECRETARIO PARTICULAR DE SPS	16		123,812	171,268
DEFENSOR PUBLICO, ASESOR JURIDICO	16A		113,209	164,085
ASESOR SPS, LIDER DE PROYECTO, COORDINADOR TECNICO DE SPS	20	87,174	103,451	144,424
DELEGADO ADMINISTRATIVO	20A		87,174	124,097
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y RESGUARDO Y ARCHIVOS JUDICIALES	21B		88,800	122,782
SUBDIRECTOR DE AREA, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN A, COORDINADOR TECNICO A, ACTUARIO JUDICIAL	21	55,257	82,437	118,352
SECRETARIO PARTICULAR DE MAGISTRADO DE CIRCUITO, SECRETARIO PARTICULAR DE JUEZ DE DISTRITO	21A		62,031	92,810
COORDINADOR DE ORGANIZACION DE ARCHIVOS JUDICIALES, COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ARCHIVISTICO JUDICIAL	21C	54,244	63,862	91,825
JEFE DE DEPARTAMENTO, JEFE DE SEGURIDAD REGIONAL, JEFE DE OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN B, AUDITOR, DICTAMINADOR, COORDINADOR TECNICO B, COORDINADOR DE AYUDA Y SEGURIDAD	24	51,995	54,998	82,463

LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA NETOS ANUALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (pesos)

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	24A		53,631		80,838
PROFESIONAL OPERATIVO	25A	41,348	52,189		76,382
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M1		48,825		73,155
PROFESIONAL OPERATIVO	25A M2	41,978			65,745
SECRETARIA	25B	35,931			73,155
ANALISTA JURÍDICO SISE, AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL, TAQUIGRAFA JUDICIAL, PARLAMENTARIA, TÉCNICO DE ENLACE ADMINISTRATIVO OCC, SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS, TÉCNICO DE ENLACE, JEFE DE GRUPO DE SEGURIDAD	26		46,700		70,505
AUXILIAR DE ACTUARIO, AUXILIAR DE SALA	26		40,803		67,184
TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	27A		41,848		64,428
OFICIAL ADMIN., ENFERMERA ESPECIALIZADA, EDUCADORA, OFICIAL DE PARTES, ANALISTA ESPECIALIZADO, TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN	27		40,603		63,274
TÉCNICO EN SEGURIDAD	28A	28,792	36,685		57,882
NIÑERA, COCINERA CENDI, SECRETARIA EJECUTIVA A, CHOFER DE FUNCIONARIO, OFICIAL DE SEGURIDAD	28		35,639		56,882
TÉCNICO OPERATIVO	28B	24,748	32,737		52,943
ANALISTA A	28A		28,673		47,937
SECRETARIA A, ANALISTA	29		27,710		47,072
TÉCNICO ESPECIALIZADO, TÉCNICO ADMIN.	30		26,629		45,526
ANALISTA ADMIN.	31		25,464		43,862
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, COCINERA	32		23,517		40,919
CHOFER	33A		22,262		39,068
OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	33		20,979		37,654
OFICIAL DE SERVICIOS	33B		19,985		36,087



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.6.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS CONSEJEROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (pesos)

	CONSEJERO
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA 2021	3,417,171
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,583,567
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA 2020	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS:	3,525,393
I) SUELDO BASE	620,236
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,816,856
III) PRESTACIONES NOMINALES	88,307
B) PRESTACIONES	835,428
I) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	63,005
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 DE LEY DEL ISSSTE)	20,330
III) PRIMA VACACIONAL	95,475
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	536,115
V) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMP. GARANTIZADA)	N/A
VI) PRIMA QUINQUENAL	13,860
VII) AYUDA PARA DESPESA	N/A
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	30,246
IX) SEGURO DE VIDA COLECTIVO	148
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	13,821
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) AYUDA ECONÓMICA PARA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE TITULARES DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES	N/A
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	7,929
XIV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE / PADRE	N/A
C) PAGO POR RIESGO	539,917

ANEXO 23.7. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ANEXO 23.7.1. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	SUELDOS Y SALARIOS	
		MÍNIMO	MÁXIMO
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		202,885
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	3		153,154
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN., COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		100,702
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		100,016
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL T.E.P.J.F. Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	6		99,329
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	89,432	99,369
SECRETARIO DE TESIS	8		88,849
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	89,054	98,549
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		98,335
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	80,347	89,908
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE AGTUAARIOS	12	71,720	91,785
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	55,856	75,073
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		61,703
SRIO. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TIC, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL SRIO. TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, SRIO. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, SRIO. AUXILIAR DE PLEN DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	41,136	59,023



SRIO. AUXILIAR	18		46,037
ACTUARIO	17		45,390
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	18	37,100	44,915
ACTUARIO REGIONAL Y SRIO. DE APOYO JURÍDICO REGIONAL	19		40,985
AUXILIAR JURÍDICO, JEFE DE DPTO., SRIO. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	29,605	35,700
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	29,605	32,545
PROFESIONAL OPERATIVO	22	24,612	32,498
SRIO. DE MAGISTRADO REGIONAL Y SRIO. DE PONENCIA	23	27,442	31,748
SECRETARÍA	24	18,518	27,729
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	17,405	27,715
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	14,400	24,016
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	15,958	21,502
OFICIAL DE APOYO	28	14,400	21,502
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	13,380	15,381

ANEXO 23.7.2. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN TOTAL (NETOS ANUAL) (pesos)

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	1		444,413	378,894	0
MAGISTRADO DE SALA REGIONAL	2		313,560	429,409	0
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS, SRIO. ADMIN. COORDINADOR GRAL. DE ASESORES DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	4		220,568	0	277,818
SRIO. INSTRUCTOR, SUBSECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS Y COORDINADOR DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS ELECTORALES	5		218,960	0	275,735
SECRETARIO TÉCNICO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE, DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, VISITADOR, CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF Y DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL ELECTORAL	6		217,257	0	273,658
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	7	185,180	205,755	0	272,658
SECRETARIO DE TESIS	8		201,852	0	269,586
JEFE DE UNIDAD, SECRETARIO TÉCNICO DE COMISIONADO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL SECRETARIO ADMIN.	9	181,685	201,852	0	269,586
SECRETARIO TÉCNICO DE MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR	10		188,588	0	267,618
SECRETARIO TÉCNICO DE MANDO SUPERIOR Y PROFESOR INVESTIGADOR I	11	181,781	184,487		241,332
SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA REGIONAL, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, COORDINADOR, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA REGIONAL, TITULAR DE ARCHIVO JURISDICCIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS	12	142,588	184,851		246,962
SECRETARIO EJECUTIVO REGIONAL, DIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEFENSOR	13	107,545	150,132		189,828
PROFESOR INVESTIGADOR II Y DELEGADO ADMIN. REGIONAL	14		120,051		158,963

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN	NIVEL	AGUINALDO - PRIMA VACACIONAL		PAGO POR RIESGO	ASIGNACIONES ADICIONALES
		MÍNIMO	MÁXIMO		
S.RIO. DE APOYO, CAPACITADOR, PEDAGOGO, ESPECIALISTA TICS, COMUNICÓLOGO, TITULAR DEL S.RIO. TÉCNICO, TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO REGIONAL, S.RIO. TÉCNICO DE MAGISTRADO REGIONAL, S.RIO. AUXILIAR DE PLENO DE LA SALA REGIONAL, INVESTIGADOR, AUDITOR ESPECIALIZADO, COORDINADOR ADMIN. I	15	75,000	113,905		151,399
S.RIO. AUXILIAR	16		85,968		116,706
ACTUARIO	17		84,534		114,987
SUBDIRECTOR DE ÁREA, TITULAR DE ARCHIVO, JURISDICCIONAL REGIONAL, TITULAR DE OFICINA DE PARTES REGIONAL Y TITULAR DE OFICINA DE ACTUARIOS REGIONAL, COORDINADOR ADMIN. II	18	65,982	83,458		113,726
ACTUARIO REGIONAL Y S.RIO. DE APOYO JURIDICO REGIONAL	19		74,684		103,309
AUXILIAR JURIDICO, JEFE DE DPTO., S.RIO. DE OFICINA DE MAGISTRADO, AUDITOR ADMIN., COORDINADOR ADMIN. III	20	51,358	63,592		88,661
AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS, DISEÑADOR WEB Y AUXILIAR DE MANDO SUPERIOR	21	51,358	56,919		80,267
PROFESIONAL OPERATIVO	22	41,859	56,866		80,159
S.RIO. DE MAGISTRADO REGIONAL Y S.RIO. DE PONENCIA	23	47,011	55,489		78,408
SECRETARIA	24	29,563	48,132		68,620
TÉCNICO OPERATIVO, AUXILIAR DE AUDITOR Y OFICIAL DE PARTES REGIONAL	25	27,452	48,101		68,583
TÉCNICO EN ALIMENTOS	26	21,355	40,420		59,367
TÉCNICO EN PREVISIÓN SOCIAL	27	24,359	35,361		53,321
OFICIAL DE APOYO	28	21,355	35,361		53,321
OFICIAL DE SERVICIOS Y OFICIAL	29	19,474	23,364		38,288

ANEXO 23.7.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LOS MAGISTRADOS DE SALA SUPERIOR (pesos)

	MAGISTRADO DE SALA SUPERIOR 2021
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL NETA	3,421,002
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	1,579,736
REMUNERACIÓN NOMINAL ANUAL BRUTA	5,000,738
A) SUELDOS Y SALARIOS:	3,532,889
I) SUELDO BASE	651,242
II) COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,785,845
III) PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL E INHERENTES AL CARGO	85,802
B) PRESTACIONES	838,447
I) APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	83,096
II) AHORRO SOLIDARIO (ART. 100 DE ISSSTE)	20,330
III) PRIMA VACACIONAL	95,473
IV) AGUINALDO (SUELDO BASE Y COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	586,115
V) GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (COMPENSACIÓN GARANTIZADA)	NA
VI) PRIMA QUINQUENAL (ANTIGÜEDAD)	16,360
VII) AYUDA PARA DESPENSA	0
VIII) SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	36,246
IX) SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	146
X) SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES	25,769
XI) SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	0
XII) APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	NA
XIII) ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0
XIV) AYUDA DE ANTEOJOS	0
XV) ESTÍMULO DEL DÍA DE LA MADRE/PADRE	0
C) PAGO POR RIESGO	828,402

ANEXO 23.8. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANEXO 23.8.1.A. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
PERSONAL DE MANDO						
CONSEJERO PRESIDENTE/CONSEJEROS ELECTORALES ^{1/}	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
SECRETARIO EJECUTIVO	91,502	101,669	35,516	40,573	128,018	142,242

1/ Miembros permanentes del Consejo General del Instituto de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE).

ANEXO 23.8.1.B. LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
1. Consejero Presidente, Consejeros Electorales	92,427	102,697	36,492	40,547	128,919	143,244
Secretario Ejecutivo	91,502	101,669	35,516	40,573	128,018	142,242
2. Titular del Órgano Interno de Control, Directores Ejecutivos, Titulares de Unidad Técnica, Titulares de Unidad (OIC) y puestos homólogos	91,477	101,642	36,540	40,601	128,018	142,242
3. Coordinadores del Registro Federal de Electores, Titulares de Unidad Técnica, Vocales Ejecutivos Locales, Directores de Área y puestos homólogos	90,427	100,475	35,889	40,766	127,116	141,240
4. Directores de Área, Coordinadores y puestos homólogos	89,757	99,730	37,359	41,510	127,116	141,240
5. Vocales Secretarios en Jt., Vocales Locales, Vocales Ejecutivos y Secretarios Distritales, Subdirectores de Área y puestos homólogos	45,656	69,571	13,952	29,955	59,509	99,526
6. Vocales Distritales, Jefes de Departamento y puestos homólogos	28,432	44,784	9,889	20,092	38,321	64,876
Personal operativo:						
7. Técnico Operativo	10,238	28,289	4,549	14,424	14,888	42,714

ANEXO 23.8.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos	7,142		
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL GA1 AL GA2	7,142		13,300

Corresponde a la prestación de vales de fin de año del ejercicio 2020 para el personal técnico operativo, en razón de que es la única que se tiene la absoluta certeza de que lo recibirá.

El resto de las prestaciones que se otorgan, es para el personal que se hace acreedor a las mismas o bien, que pueden ejercer el derecho a su obtención. Por ejemplo, el apoyo que da para la adquisición de lentes, que se otorga cada tres años o el apoyo (becas) para estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Acumular todos los posibles conceptos puede generar una lectura equivocada, ya que se podría interpretar que son percepciones extraordinarias que efectivamente recibe el personal, cuando no es así.

Derivado del punto anterior, la H. Cámara de Diputados, la sociedad en general y los propios funcionarios del Instituto, podrían tener una percepción que no corresponde con la realidad.

ANEXO 23.8.1.A REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)

CONSEJERO PRESIDENTE / CONSEJEROS ELECTORALES

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido *	758,409
Percepción bruta anual	2,477,335
a) Sueldos y salarios:	2,008,446
i) Sueldo base	374,979
ii) Compensación garantizada	1,633,467
b) Prestaciones:	468,889
i) Aportaciones a seguridad social	40,153
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	12,956
iii) Prima vacacional	10,416
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	342,455
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,528
vi) Ayuda para despensa	0
vii) Seguro de vida institucional	57,858
viii) Seguro colectivo de retiro	101
ix) Seguro de gastos médicos mayores	23,319
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de Enero del 2014.

ANEXO 23.8.3.B REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL CONSEJERO PRESIDENTE 2021

(Remuneraciones Tabulador 2020)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	131,537
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	45,602
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	177,038
a) Sueldos y salarios:	167,371
i) Sueldo base	31,248
ii) Compensación garantizada	136,122
b) Prestaciones:	9,668
i) Aportaciones a seguridad social	3,346
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,080
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	127
iv) Ayuda para despensa	0
v) Seguro de vida institucional	3,163
vi) Seguro colectivo de retiro	8
vii) Seguro de gastos médicos mayores	1,943
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN


ANEXO 23.8.1.C REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (pesos)
SECRETARIO EJECUTIVO

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA DE PERCEPCIONES ORDINARIAS	1,706,905
Impuesto sobre la renta retenido *	742,754
Percepción bruta anual	2,449,659
a) Sueldos y salarios:	1,981,159
i) Sueldo base	334,476
ii) Compensación garantizada	1,646,683
b) Prestaciones:	468,500
i) Aportaciones a seguridad social	42,296
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	13,847
iii) Prima vacacional	9,291
iv) Aguinaldo o Gratificación de fin de año	335,721
v) Prima quinquenal (antigüedad)	1,611
vi) Ayuda para despensa	2,819
vii) Seguro de vida institucional	37,444
viii) Seguro colectivo de retiro	107
ix) Seguro de gastos médicos mayores	24,564
x) Seguro de separación individualizado	0

* / Cálculo obtenido conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero del 2014.

**ANEXO 23.8.3.D REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO 2021
(Remuneraciones Tabulador 2020)**

	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LIQUIDA MENSUAL NETA	130,659
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones personales *	44,644
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	175,304
a) Sueldos y salarios:	165,097
i) Sueldo base	27,873
ii) Compensación garantizada	137,224
b) Prestaciones:	10,207
i) Aportaciones a seguridad social	3,525
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	1,137
iii) Prima quinquenal (antigüedad)	134
iv) Ayuda para despensa	235
v) Seguro de vida institucional	3,120
vi) Seguro colectivo de retiro	9
vii) Seguro de gastos médicos mayores	2,047
viii) Seguro de separación individualizado	0

* Deducciones personales de seguridad social y seguros

ANEXO 23.9. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANEXO 23.9.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipos de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (Efectivo y Especie)		Percepción ordinaria total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de mando:						
PRESIDENTE DE LA CNDH		108,998		39,158		148,157
VISITADORA GENERAL, VISITADORA GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADORA GENERAL DE SRAJ, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARÍA EJECUTIVA		108,811		29,900		138,711
OFICIAL MAYOR		108,075		29,740		137,815
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		106,978		29,502		136,480
DIRECTORA GENERAL Y HOMÓLOGAS	104,291	106,276	27,225	29,350	131,516	135,626
DIRECTORA DE ÁREA Y HOMÓLOGAS	62,920	82,429	13,717	22,390	66,637	104,819
VISITADORA ADJUNTA	28,176	51,162	8,058	14,338	36,234	65,500
SUBDIRECTORA DE ÁREA Y HOMÓLOGAS	28,176	51,162	8,058	14,338	36,234	65,500
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGAS	27,130	35,243	7,872	10,502	34,002	45,745
Personal de Enlace u Operativo						
OPERATIVA	12,663	27,090	4,071	10,929	16,734	37,113

Este anexo refleja los límites de percepciones ordinarias netas mensuales aplicables a las personas servidoras públicas durante 2021, en función del puesto que ocupen. Contemplan las cuotas de seguridad social a cargo del trabajador/a.

A fin de cumplir con el desglose de remuneraciones que establece el artículo 75 Constitucional, se presentan los límites mínimos y máximos en términos netos por concepto de sueldos y salarios y de prestaciones, diferenciados por el tipo de servidores/as públicos/as a los que aplican los límites correspondientes.

ANEXO 23.9.2. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario Máximo
Total Puestos	1,778	
Personal de mando:	1,056	
PRESIDENTE DE LA CNDH	1	
VISITADORA GENERAL, VISITADORA GENERAL ESPECIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MNPT, COORDINADORA GENERAL DE SRAJ, SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SECRETARÍA EJECUTIVA	11	
OFICIAL MAYOR	1	
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1	
DIRECTORA GENERAL Y HOMÓLOGAS	28	
DIRECTORA DE ÁREA Y HOMÓLOGAS	128	19,695
VISITADORA ADJUNTA	623	15,163
SUBDIRECTORA DE ÁREA Y HOMÓLOGAS	189	15,163
JEFE/A DE DEPARTAMENTO Y HOMÓLOGAS	173	13,049
Personal Operativo	723	
OPERATIVA	723	25,490



ANEXO 23.9.1. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (pesos)

	Remuneración recibida
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,716,463
Impuesto sobre la renta retenido	685,713
Percepción bruta anual	2,402,176
I. Percepciones ordinarias:	2,402,176
a) Sueldos y salarios:	1,910,735
Sueldo Base	360,308
Compensación Garantizada	1,550,426
b) Prestaciones:	491,442
i) Aportaciones a seguridad social	63,326
ii) Ahorro solidario (Artículo 100 de la Ley del ISSSTE)	20,330
iii) Prima Vacacional	53,076
iv) Gratificación de fin de año	321,647
v) Prima quinquenal	3,420
vi) Ayuda para despensa	3,600
vii) Seguro de vida	28,143
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Pago extraordinario	

ANEXO 23.10. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

ANEXO 23.10.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Comisionada Presidenta de la Comisión		115,148		28,096		143,244
Comisionado		114,312		27,930		142,242
Jefe de Unidad		113,402		26,837		140,239
Director General/ Titular del Órgano Interno de Control		111,153		27,082		138,235
Director Ejecutivo	74,962	109,514	20,805	27,584	95,768	137,098
Coordinador General	46,920	78,760	14,174	21,246	61,093	100,006
Subcoordinador General	32,990	44,388	11,238	13,315	44,228	57,701
Coordinador de Área		29,551		10,630		40,181
Jefe de Área	21,447	28,475	9,061	10,286	30,508	38,761
Personal de Enlace	12,757	19,034	7,385	8,505	20,142	27,539
Personal Operativo	8,095	9,706	9,391	9,702	17,486	19,408

ANEXO 23.10.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA COMISIONADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (pesos)

	Remuneración Comisionada Presidenta COFECE
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido	714,582
Percepción bruta anual	2,433,508
I Percepciones ordinarias:	2,433,508
a) Sueldos y salarios:	1,981,800
i) Sueldo base	234,158
ii) Compensación garantizada	1,747,442
b) Prestaciones:	451,908
i) Aportaciones a seguridad social	47,171
ii) Ahorro solidario	15,221
iii) Prima vacacional	6,505
iv) Aguinaldo (sueldo base)	38,188
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	283,474
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	1,535
vii) Ayuda para despesa	7,533
viii) Vales de despesa	23,031
ix) Seguro de vida institucional	28,931
x) Seguro colectivo de retiro	340

ANEXO 23.10.3. LÍMITES DE PAGOS EXTRAORDINARIOS ANUALES NETOS (pesos)

Denominación	Plazas	Pago extraordinario anual unitario	
		Mínimo	Máximo
Total Puestos			
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP1D-OP1A 1	17		229,500
PLAZAS TÉCNICO OPERATIVO NIVEL OP1D-OP1A 2	17		62,815

1/ Corresponde a la prestación denominada medidas de fin de año (vales de despesa).

2/ Corresponde a la prestación denominada ayuda para útiles escolares (efectivo).

ANEXO 23.11. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

ANEXO 23.11.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Banda Salarial (Nivel)	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidente	27		104,780		38,464		143,244
Comisionado	26		103,970		38,272		142,242
Coordinador Ejecutivo	25		103,499		37,742		141,240
Titular de Unidad	25		102,747		37,491		140,239
Secretario Técnico del Pleno	25		102,747		37,491		140,239
Coordinador General	25		102,553		36,884		139,237
Director General	23 23	91,268	101,410	33,143	36,825	124,412	138,285
Director General Adjunto	21 22	65,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Investigador	21 22	65,075	84,234	25,546	31,507	90,621	115,740
Director de Área	18 21	34,607	71,909	15,156	27,135	49,764	99,045
Subdirector de Área	18 18	21,605	42,843	10,588	16,649	32,192	59,293
Jefe de Departamento	14 16	14,975	23,644	8,576	12,585	23,551	42,229
Técnico	10 17	6,358	33,636	5,237	17,825	12,595	51,261
Enlace	11 13	8,121	16,162	6,371	8,818	14,492	24,780

- La percepción ordinaria incluye todos los ingresos que reciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones por Sueldos y Salarios, y por Prestaciones, independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas.

- No se incluyen prestaciones en las que el personal puede o no ser acreedor a éstas y ejercer su derecho, tales como: ayuda para anteojos, apoyo de guardería o preescolar y apoyos institucionales para que realicen estudios que les permitan incrementar o conducir su formación académica, o especializarse en temas relacionados con sus funciones.

- La remuneración neta corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020.



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



ANEXO 23.11.2. LÍMITES DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS NETAS TOTALES (pesos)

Nivel	Banda Salarial		Pago Extraordinario Anual Unitario*	
	Nivel			
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidente		27		
Comisionado		26		
Coordinador Ejecutivo		25		82,358
Titular de Unidad		25		75,847
Secretario Técnico del Plano		25		75,847
Coordinador General		25		75,089
Director General	23	23	59,600	68,872
Director General Adjunto	21	22	39,045	50,540
Investigador	21	22	39,045	50,540
Director de Área	18	21	20,764	43,146
Subdirector de Área	16	18	60,740	179,103
Jefe de Departamento	14	16	62,894	124,504
Técnico	10	17	26,705	141,273
Enlace	11	13	34,107	67,882

*El pago de la percepción extraordinaria incluye:

- El importe correspondiente al estímulo al desempeño sobresaliente, contenida en el artículo 34, inciso c), de las Disposiciones por las que se establece el Sistema de Servicio Profesional del Instituto Federal de Telecomunicaciones y;
- El importe correspondiente al pago extraordinario por riesgo, que el Instituto podrá otorgar al personal con nivel de enlace, técnico, jefe de departamento y subdirector, que realice labores en campo, cuyo desempeño ponga en riesgo su seguridad.

Podrá autorizarse y realizarse el pago de la percepción extraordinaria únicamente en un monto que, sumado a la percepción ordinaria, no supere el monto de la remuneración del Presidente de la República, conforme lo dispone el artículo 127, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANEXO 23.11.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (pesos)

Nivel Jerárquico: Comisionado (Grado 27)	Remuneración Total
REMUNERACIÓN ANUAL TOTAL NETA (RTA)	1,718,926
Impuesto sobre la renta retenido ^{1/}	725,287
Percepción bruta anual	2,444,213
I. Percepciones ordinarias:	2,444,213
a) Sueldos y salarios:	1,964,099
i) Sueldo base	247,744
ii) Compensación garantizada	1,716,356
b) Prestaciones:	480,114
i) Aportaciones de seguridad social	49,808
ii) Ahorro Solidario	16,104
iii) Prima Vacacional	27,279
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,786
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	190,706
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	0
vii) Ayuda para despesa	5,378
viii) Vales de despesa	14,278
ix) Seguro de vida institucional	27,498
x) Seguro Colectivo de Retiro	337
xi) Seguro de Gastos Médicos Mayores	20,030
xii) Seguro de Separación Individualizado	0
xiii) Apoyo económico para adquisición de vehículo	92,809
II. Percepciones extraordinarias:	
a) Componente salarial variable asociado a la gestión del desempeño	

1/ El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 23.12. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**ANEXO 23.12.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (NETOS MENSUALES) (pesos)**

Tipo de personal	Nivel		Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Personal de Mando y Enlace / Homólogos								
Comisionado Presidente/Comisionados		HB1		107,708		26,290		133,998
Secretario		KB2		98,273		22,834		121,108
Director General/Jefe de Ponencia/Contralor		KA4		92,126		21,601		113,625
Secretario de Ponencia	MD1	MD5	70,589	86,674	16,656	20,487	87,245	107,132
Director de Área	MC2	MC5	59,336	74,709	14,007	17,534	73,343	92,243
Subdirector de Área	NC2	MB2	37,872	53,261	9,388	12,520	47,260	65,782
Jefe de Departamento/ Consultor/Auditor	OC3	NB2	23,975	32,784	6,961	8,418	30,935	41,203
Enlace/Proyectista/Asesor	PC1	OB6	14,756	21,657	5,269	6,620	20,025	28,477
Secretaria	PC3	OD3	16,824	24,338	5,836	7,102	22,460	31,439
Chofer	QB1	OB5	13,978	20,896	5,158	6,391	18,536	27,287
Auxiliar Administrativo	PA1	PA5	11,774	16,377	4,587	5,431	16,370	21,808

1/ La percepción ordinaria neta mensual corresponde a la cantidad que perciben los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, una vez aplicadas las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio 2020.

ANEXO 23.12.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE / COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA	1,614,506
Impuesto sobre la renta retenido*	640,525
Percepción ordinaria bruta anual	2,255,431
a) Sueldos y salarios:	1,818,477
i) Sueldo base	264,006
ii) Compensación garantizada	1,584,471
b) Prestaciones:	436,954
i) Aportaciones a seguridad social	62,063
ii) Ahorro solidario	18,480
iii) Prima vacacional	101,027
iv) Aguinaldo (sueldo base)	35,501
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	191,809
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
vii) Ayuda para despensa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	13,639
ix) Seguro colectivo de retiro	425.4

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.



ANEXO 23.12.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DE LA MÁXIMA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS COMISIONADO PRESIDENTE / COMISIONADOS (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL NETA	105,952
Impuesto sobre la renta retenido* y deducciones de seguridad social	46,793
Percepción ordinaria bruta mensual	152,745
a) Sueldos y salarios:	151,540
i) Sueldo base	23,667
ii) Compensación garantizada	127,873
b) Prestaciones:	1,205
i) Prima quinquenal (antigüedad)	285
ii) Ayuda para despensa	685
iii) Seguro colectivo de retiro	35

Vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

*El cálculo se efectuó de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes para el ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 23.13. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ANEXO 23.13.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Fiscales	33,703	110,788	7,490	28,214	41,193	139,000
Policía de Investigación	27,035	48,678	5,689	10,664	32,624	59,343
Analistas	11,738	45,733	3,453	10,197	15,191	55,930
Auxiliares	13,203	25,621	3,613	6,868	16,816	32,489
Peritos	29,227	47,777	6,128	11,990	35,355	59,767
Personal Profesional						
Mando Sustantivo	17,922	109,950	5,185	27,740	23,108	137,690
Pilotos	28,911	37,492	6,302	9,476	35,213	46,969
Apoyo Aéreo	13,489	31,173	3,857	7,692	17,358	38,765
Protección a Personas	33,728	53,225	6,608	10,799	40,336	64,024
Apoyo a la Investigación	47,592	54,501	9,694	13,942	57,286	68,442
Personal Técnico						
De Protección a Instalaciones Estratégicas	13,281	28,859	3,612	7,603	16,893	36,462
Personal Administrativo						
Mando Administrativo	17,922	109,950	5,185	27,740	23,108	137,690
Administradores	17,287	66,185	4,377	14,675	21,664	80,860
Técnicos Especializados	9,604	17,191	3,742	6,147	13,345	23,338
Operativo Confianza	11,728	13,827	9,212	11,002	20,940	24,829
Operativo Base	11,806	13,034	9,191	10,818	20,987	23,852

ANEXO 23.13.2. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA ANUAL NETA	1,673,261
Impuesto sobre la renta retenido	678,234
Percepción ordinaria mensual	2,351,495
a) Sueldos y salarios:	1,914,432
i) Sueldo base	433,658
ii) Compensación garantizada	1,480,776
b) Prestaciones:	437,063
i) Aportaciones a seguridad social	63,007
ii) Ahorro Solidario	
iii) Prima vacacional	12,046
iv) Aguinaldo (sueldo base)	73,872
v) Gratificación de fin de año (compensación garantizada)	250,548
vi) Prima quinquenal (antigüedad)	
vii) Ayuda para despensa	10,620
viii) Seguro de vida institucional	27,045
ix) Seguro colectivo de retiro	425

ANEXO 23.13.3. REMUNERACIÓN ORDINARIA LÍQUIDA MENSUAL NETA DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA (pesos)

	Remuneración total
REMUNERACIÓN ORDINARIA TOTAL LÍQUIDA MENSUAL NETA	110,786
Impuesto sobre la renta retenido y deducciones de seguridad social*	46,851
Percepción ordinaria bruta líquida mensual	160,421
a) Sueldos y salarios:	159,538
i) Sueldo base	36,138
ii) Compensaciones adicionales por servicios especiales	123,398
b) Prestaciones:	885
i) Prima quinquenal (antigüedad)	
ii) Ayuda para despensa	686
iii) Seguro colectivo de retiro	
*Deducciones personales de seguridad social y seguros	2,364

ANEXO 23.14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

ANEXO 23.14.1. LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (NETOS MENSUALES) (pesos)

Tipo de personal	Sueldos y salarios		Prestaciones (En efectivo y en especie)		Percepción Ordinaria Total	
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Presidencia del Instituto		109,457		13,003		122,460
Vicepresidencia		109,457		13,003		122,460
Dirección General		106,757		12,595		119,352
Coordinación General / Dirección General Adjunta	86,044	104,147	10,240	12,201	96,284	116,348
Dirección de Área	48,924	85,408	6,206	10,129	55,130	95,536
Subdirección de Área	30,108	45,820	4,197	5,770	34,297	51,590
Jefatura de Departamento	20,947	29,660	3,403	4,162	24,350	34,050
Personal de Enlace	14,297	18,672	2,790	3,174	17,077	21,846
Personal Operativo	8,354	11,478	5,095	5,183	13,449	16,661

Las percepciones ordinarias netas incluyen los ingresos que reciben los servidores públicos independientemente de su periodicidad o fecha de pago. Asimismo, contempla la aplicación de las disposiciones fiscales y de seguridad social.


ANEXO 23.14.2 LÍMITES DE PERCEPCIÓN EXTRAORDINARIA NETA TOTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

Tipo de personal	Pago Extraordinario Anual Unitario Máximo
Presidencia del Instituto	
Vicepresidencia	
Dirección General	31,535
Coordinación General / Dirección General Adjunta	32,133
Dirección de Área	33,989
Subdirección de Área	64,502
Jefatura de Departamento	66,263
Personal de Enlace	100,627
Personal Operativo	211,584

Las percepciones extraordinarias se otorgan al personal que se hace acreedor a las mismas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el marco normativo aplicable.

Las percepciones extraordinarias netas incluyen la aplicación de las disposiciones fiscales.

ANEXO 23.14.3. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HC3	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,517,806
Impuesto sobre la renta	633,069
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,250,894
a) Sueldos y salarios:	1,899,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	351,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,520
II) Ahorro solidario	20,330
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,691
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,336
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despensa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,589
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de reparación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 23.14.4. REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL DEL VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (pesos)

NIVEL JERÁRQUICO: HA1	Remuneración Total
REMUNERACIÓN TOTAL ANUAL NETA (RTA)	1,517,806
Impuesto sobre la renta	633,088
Percepción bruta anual	2,250,894
I. Percepciones ordinarias:	2,260,894
a) Sueldos y salarios:	1,899,240
I) Sueldo base	339,216
II) Compensación garantizada	1,560,024
b) Prestaciones:	361,654
I) Aportaciones de seguridad social	68,620
II) Ahorro solidario	20,830
III) Prima vacacional	9,423
IV) Aguinaldo (sueldo base)	37,591
V) Gratificación de fin de año (Compensación garantizada)	173,336
VI) Prima quinquenal (antigüedad)	3,420
VII) Ayuda para despensa	11,820
VIII) Seguro de vida institucional	26,589
IX) Seguro colectivo de retiro	425
X) Seguro de gastos médicos mayores	
XI) Seguro de separación individualizado	
XII) Apoyo económico para adquisición de vehículo	
II. Percepciones extraordinarias	
a) Potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo	

El impuesto se determinó conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Se consideró la estimación de 5 quinquenios.

ANEXO 24. PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DE LOS RAMOS 25 Y 33 (pesos)

	Incremento a las percepciones	Creación de plazas ^{1/}	Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente	Total
Ramos Generales				
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	8,864,222,852	850,000,000	8,748,324,832	18,262,547,484
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México	976,108,603	0	2,627,262,129	3,603,310,732
Fondo de Aportaciones para la Educación y Gasto Operativo	7,581,188,257	850,000,000	4,067,841,027	12,499,029,284
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	108,925,962	0	53,281,475	160,207,468
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1,839,807,341	0	427,625,920	2,266,933,261
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,839,307,341	0	427,625,920	2,266,933,261

1/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.



ANEXO 25. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

08 Agricultura y Desarrollo Rural
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
Fertilizantes
Producción para el Bienestar
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
10 Economía
Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
Programa de Becas Elisa Acuña
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Programa de Cultura Física y Deporte
Programa Nacional de Inglés
Jóvenes Escribiendo el Futuro
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
Atención de Plantales Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPEMS)
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
12 Salud
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Fortalecimiento a la atención médica
Calidad en la Atención Médica
14 Trabajo y Previsión Social
Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Vivienda Social
Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
Programa Nacional de Reconstrucción
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-BIENESTAR
20 Bienestar
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMER)
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Seguro de vida para jefes de familia
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
47 Entidades no Sectorizadas
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas
48 Cultura
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Programa de Apoyos a la Cultura
Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales

ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS



**DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN**

04 Gobernación	Política y servicios migratorios
	Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
	Registro e Identificación de Población
	Determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas
08 Agricultura y Desarrollo Rural	
	Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos
	Fertilizantes
	Producción para el Bienestar
	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
	Programa de Abasto Rural a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
	Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
	Adquisición de leche nacional
	Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura
09 Comunicaciones y Transportes	
	Proyectos de construcción de carreteras
	Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
	Reconstrucción y Conservación de Carreteras
	Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras alimentadoras
	Proyectos de construcción de cameteras alimentadoras y caminos rurales
10 Economía	
	Programa de Microcréditos para el Bienestar
11 Educación Pública	
	Jóvenes Escribiendo el Futuro
	Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
	Universidades para el Bienestar Benito Juárez García
	Servicios de Educación Media Superior
	Servicios de Educación Superior y Posgrado
	Desarrollo Cultural
	Investigación científica y desarrollo tecnológico
	Educación Inicial y Básica Comunitaria
	Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez
	Subsidios para organismos descentralizados estatales
	Programa de Cultura Física y Deporte
	La Escuela es Nuestra
12 Salud	
	Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
	Atención a la Salud
	Prevención y atención contra las adicciones
	Salud materna, sexual y reproductiva
	Fortalecimiento a la atención médica
	Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
	Programa de vacunación
	Programa de Atención a Personas con Discapacidad
14 Trabajo y Previsión Social	
	Jóvenes Construyendo el Futuro
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	
	Programa Nacional de Reconstrucción
	Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
	Programa de Vivienda Social



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Protección Forestal
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado
Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica
20 Bienestar
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente
Sembrando Vida
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
21 Turismo
Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros
36 Seguridad y Protección Ciudadana
Administración del sistema federal penitenciario
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado
47 Entidades no Sectorizadas
Proyectos de construcción de puertos
Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros
Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
48 Cultura
Desarrollo Cultural
Protección y conservación del Patrimonio Cultural
Servicios educativos culturales y artísticos

ANEXO 27. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (millones de pesos)

Educación	4.5
Salud	333.3
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	1,128.8
Cultura	333.3
TOTAL	1,800.0

1/ Lo que equivale a la cantidad de 4,612,907

ANEXO 28. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CARRETERO (pesos)

ESTADO	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	CONSERVACIÓN Y ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS
No Distribuible Geográficamente	8,231,338,063	1,504,834,523
Oaxaca	0	2,500,000,000
TOTAL	8,231,338,063	4,004,834,523

ANEXO 29. SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (pesos)

	MONTO
Montos Subsidios para organismos descentralizados estatales (UR 511)-*	66,033,628,328
Aguascalientes	904,024,288
Baja California	1,791,554,054
Baja California Sur	510,108,405
Campeche	1,008,802,837
Chiapas	1,451,057,081
Chihuahua	2,122,931,492
Coahuila	1,506,719,580
Colima	1,643,277,530
Durango	1,446,422,243
Estado de México	2,300,586,424
Guanajuato	1,925,612,076
Guerrero	2,094,221,759
Hidalgo	1,474,738,549
Jalisco	6,375,187,035
Michoacán	2,109,421,784
Morélos	1,321,861,587
Nayarit	1,528,563,624
Nuevo León	5,778,349,318
Oaxaca	1,272,519,453
Puêbla	4,577,424,284
Querétaro	1,508,414,640
Quintana Roo	321,104,838
San Luis Potosí	2,125,656,394
Sinaloa	4,824,979,255
Sonora	2,212,474,568
Tabasco	1,328,220,743
Tamaulipas	2,385,097,324
Tlaxcala	594,101,387
Veracruz	2,746,593,969
Yucatán	2,111,597,324
Zacatecas	1,632,304,473

*/ Los recursos previstos para las Entidades Federativas de Baja California Sur y Campeche se indican en el presente anexo.

ANEXO 29.1 CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES (pesos)

	MONTO
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Universidades Interculturales)	87,395,885
Universidad Intercultural de Chiapas	11,024,449
Universidad Intercultural del Estado de México	14,561,044
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco	13,319,636
Universidad Intercultural del Estado de Puebla	9,247,892
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán	8,409,635
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero	3,804,134
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	12,236,277
Universidad Intercultural Veracruzana	1,800,283
Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa	11,182,745
Universidad Autónoma Intercultural del Estado de Hidalgo	1,000,000
Universidad Autónoma Intercultural de San Luis Potosí	1,000,000



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN



ANEXO 30. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ACCIONES EN MATERIA DE AGUA (pesos)

Estado	Subsidios Administración del Agua y Agua Potable	Subsidios Hidroagrícolas
Aguascalientes	18,145,952	8,707,050
Baja California	57,173,387	32,407,850
Baja California Sur	32,573,779	10,346,259
Campeche	41,315,599	26,346,421
Coahuila	32,789,098	16,805,851
Colima	14,567,388	10,130,617
Chiapas	82,938,869	137,393,077
Chihuahua	60,650,646	44,390,665
Ciudad de México	71,891,283	10,884,466
Durango	58,447,450	19,643,576
Guanajuato	90,284,847	93,096,827
Guerrero	115,886,720	105,086,287
Hidalgo	57,535,270	48,125,098
Jalisco	78,179,761	35,838,931
Estado de México	172,720,537	33,944,134
Michoacán	76,591,864	70,547,850
Morelos	57,223,195	30,181,413
Nayarit	39,448,895	13,248,217
Nuevo León	61,835,086	16,363,989
Oaxaca	83,684,948	56,153,052
Puebla	93,514,181	74,847,539
Querétaro	48,141,093	13,046,725
Quintana Roo	37,811,073	46,003,797
San Luis Potosí	70,658,033	50,853,078
Sinaloa	56,080,193	148,347,887
Sonora	63,983,858	91,112,726
Tabasco	57,580,159	34,238,511
Tamaulipas	68,416,502	100,033,121
Tlaxcala	17,539,648	5,325,424
Veracruz	112,815,238	97,903,190
Yucatán	49,028,869	75,305,797
Zacatecas	43,838,795	11,693,828
No Distribuible Geográficamente	60,876,352	0
TOTAL	2,082,169,335	1,569,322,223

ANEXO 31. ANEXO TRANSVERSAL ANTICORRUPCIÓN (pesos)

Ramo / Denominación Unidad Responsable	Ejes				MONTO
	1. Combatir la corrupción y la impunidad	2. Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder	3. Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad	4. Involucrar a la sociedad y el sector privado	
Total	2,483,699,792	693,494,939	-56,676,775	81,875,597	3,315,741,103
03 Poder Judicial	975,702,108	489,435,347		39,608,090	1,504,745,545
Consejo de la Judicatura Federal	975,702,108	489,435,347		39,608,090	1,504,745,545
06 Hacienda y Crédito Público	334,836,368				334,836,368
Unidad de Inteligencia Financiera	170,010,527				170,010,527
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	69,626,079				69,626,079
Comisión Nacional Bancaria y de Valores	8,162,139				8,162,139
Servicio de Administración Tributaria	87,037,623				87,037,623
27 Función Pública	865,387,150	187,728,315	27,977,210	35,234,146	1,116,326,820
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	67,254,610				67,254,610
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	7,022,657	13,471,771	18,123,568	7,033,361	45,651,355
47 Entidades no Sectorizadas	119,965,598	2,859,506	570,000		123,395,104
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	119,965,598	2,859,506	570,000		123,395,104
49 Fiscalía General de la República	123,531,300				123,531,300
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción	123,531,300				123,531,300

ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)

	PROYECTO PEF	REDUCCIONES	AMPLIACIONES	REASIGNACIONES	PEF APROBADO
A- RAMOS AUTÓNOMOS	137,089,157,546	2,184,400,000	0	-2,184,400,000	134,904,757,546
Gasto Programable					
01 Poder Legislativo	14,816,605,390	100,000,000	0	-100,000,000	14,816,605,390
Cámara de Senadores	4,085,778,000	5,000,000	0	-5,000,000	4,080,778,000
Cámara de Diputados	8,377,000,000	95,000,000	0	-95,000,000	8,282,000,000
Auditoría Superior de la Federación	2,453,827,390	0	0	0	2,453,827,390
03 Poder Judicial	72,429,338,460	1,130,000,000	0	-1,130,000,000	71,299,338,460
Suprema Corte de Justicia de la Nación	5,159,436,565	69,000,000	0	-69,000,000	5,090,436,565
Consejo de la Judicatura Federal	64,044,622,895	866,000,000	0	-866,000,000	63,178,622,895
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	3,225,280,000	195,000,000	0	-195,000,000	3,030,280,000
22 Instituto Nacional Electoral	27,689,601,594	870,000,000	0	-870,000,000	26,819,601,594
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos	1,679,905,810	0	0	0	1,679,905,810
41 Comisión Federal de Competencia Económica	598,670,029	0	0	0	598,670,029
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones	1,510,000,000	0	0	0	1,510,000,000
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	918,735,647	13,400,000	0	-13,400,000	905,335,647
49 Fiscalía General de la República	17,348,099,616	71,000,000	0	-71,000,000	17,275,099,616
RAMO: 40 INFORMACIÓN NACIONAL, ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	7,746,100,001	0	0	0	7,746,100,001
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	7,746,100,001	0	0	0	7,746,100,001



RAMO: 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,865,619,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,865,619,680
Tribunal Federal de Justicia Administrativa	2,865,619,680	23,000,000	0	-23,000,000	2,865,619,680
B: RAMOS ADMINISTRATIVOS	1,244,235,355,522	353,914,970	2,361,314,970	2,007,400,000	1,246,242,755,522
Gasto Programable					
02 Oficina de la Presidencia de la República	805,024,292	0	0	0	805,024,292
04 Gobernación	5,800,177,912	0	53,048,789	53,048,789	5,853,226,701
05 Relaciones Exteriores	8,121,231,865	0	0	0	8,121,231,865
06 Hacienda y Crédito Público	20,228,539,183	0	0	0	20,228,539,183
07 Defensa Nacional	112,557,168,656	0	0	0	112,557,168,656
08 Agricultura y Desarrollo Rural	49,291,453,404	0	0	0	49,291,453,404
09 Comunicaciones y Transportes	55,919,591,344	0	0	0	55,919,591,344
10 Economía	5,538,472,433	0	0	0	5,538,472,433
11 Educación Pública	338,048,927,840	349,402,063	153,914,970	-195,467,093	337,651,440,847
12 Salud	145,414,570,947	0	0	0	145,414,570,947
13 Marina	35,476,715,511	0	0	0	35,476,715,511
14 Trabajo y Previsión Social	23,799,853,830	0	0	0	23,799,853,830
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16,624,957,151	4,512,907	0	-4,512,907	16,620,344,244
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	30,948,192,349	0	400,000,000	400,000,000	31,348,192,349
18 Energía	47,060,243,165	0	0	0	47,060,243,165
20 Bienestar	189,970,648,206	0	1,754,351,211	1,754,351,211	191,724,999,417
21 Turismo	38,613,894,661	0	0	0	38,613,894,661
27 Función Pública	1,388,004,630	0	0	0	1,388,004,630
31 Tribunales Agrarios	800,879,640	0	0	0	800,879,640
35 Seguridad y Protección Ciudadana	63,441,669,472	0	0	0	63,441,669,472
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	141,450,966	0	0	0	141,450,966
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	26,578,104,028	0	0	0	26,578,104,028
45 Comisión Reguladora de Energía	253,346,972	0	0	0	253,346,972
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos	219,797,597	0	0	0	219,797,597
47 Entidades no Sectorizadas	12,213,921,953	0	0	0	12,213,921,953
48 Cultura	13,995,117,395	0	0	0	13,995,117,395
C: RAMOS GENERALES	3,430,448,790,272	0	200,000,000	200,000,000	3,430,648,790,272
Gasto Programable					
19 Aportaciones a Seguridad Social	961,026,461,285	0	0	0	961,026,461,285
23 Provisiones Salariales y Económicas	127,486,744,341	0	0	0	127,486,744,341
25 Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	58,254,347,981	0	200,000,000	200,000,000	58,454,347,981
Provisiones para servicios personales para los servicios de educación básica en el Distrito Federal, para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	16,062,547,464	0	200,000,000	200,000,000	16,262,547,464
Aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal	42,191,800,497	0	0	0	42,191,800,497
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	777,842,680,397	0	0	0	777,842,680,397
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	408,057,264,139	0	0	0	408,057,264,139
Servicios Personales	871,636,439,228	0	0	0	871,636,439,228
Otros de Gasto Corriente	10,749,607,402	0	0	0	10,749,607,402
Gasto de Operación	14,929,407,533	0	0	0	14,929,407,533
Fondo de Compensación	10,741,809,976	0	0	0	10,741,809,976
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	109,501,268,954	0	0	0	109,501,268,954



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:	84,779,409,852	0	0	0	84,779,409,852
Entidades	10,276,495,240	0	0	0	10,276,495,240
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	74,502,914,612	0	0	0	74,502,914,612
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85,882,138,793	0	0	0	85,882,138,793
Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:	27,283,323,958	0	0	0	27,283,323,958
Asistencia Social	12,650,329,021	0	0	0	12,650,329,021
Infraestructura Educativa	14,732,994,937	0	0	0	14,732,994,937
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de:	7,719,222,563	0	0	0	7,719,222,563
Educación Tecnológica	4,953,267,508	0	0	0	4,953,267,508
Educación de Adultos	2,765,955,054	0	0	0	2,765,955,054
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	7,695,616,328	0	0	0	7,695,616,328
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	46,924,635,800	0	0	0	46,924,635,800
Gasto No Programable					
24 Deuda Pública	541,094,814,481	0	0	0	541,094,814,481
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	921,402,640,817	0	0	0	921,402,640,817
29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero	0	0	0	0	0
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	32,899,200,000	0	0	0	32,899,200,000
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	11,245,900,900	0	0	0	11,245,900,900
Obligaciones incurridas a través de los programas de apoyo a deudores	900	0	0	0	900
Obligaciones surgidas de los programas de apoyo a ahorradores	11,245,900,000	0	0	0	11,245,900,000
D: ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO	1,275,212,396,584	0	0	0	1,275,212,396,584
Gasto Programable					
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	373,525,286,432	0	0	0	373,525,286,432
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	901,687,110,152	0	0	0	901,687,110,152
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	1,133,301,449,660	0	0	0	1,133,301,449,660
Gasto Programable					
TYF Petróleos Mexicanos (Consolidado)	544,598,071,166	0	0	0	544,598,071,166
TVF Comisión Federal de Electricidad	417,149,392,655	0	0	0	417,149,392,655
Gasto No Programable					
Costo Financiero, que se distribuye para erogaciones de:	171,557,985,839	0	0	0	171,557,985,839
TYF Petróleos Mexicanos (Consolidado)	141,758,319,871	0	0	0	141,758,319,871
TVF Comisión Federal de Electricidad	29,799,665,968	0	0	0	29,799,665,968
Netos: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.	935,184,669,265	0	0	0	935,184,669,265
GASTO MEJOR TOTAL	6,285,736,200,000	2,561,314,970	2,561,314,970	0	6,285,736,200,000



ANEXO 33. AMPLIACIONES AL RAMO 04 GOBERNACIÓN (pesos)

		MONTO
Ramo 04 Gobernación		53,048,789
E006	Atención a refugiados en el país ^{1/}	3,857,050
	N00 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados	3,857,050
P025-	Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes ^{1/}	10,938,000
	P00 Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	10,938,000
E012	Registro e Identificación de Población ^{1/}	38,253,739
	941 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad	38,253,739

1/ Monto incluido en el Anexo 18 Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes.

ANEXO 34. AMPLIACIONES AL RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (pesos)

		MONTO
RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales		400,000,000
B00	Comisión Nacional del Agua	400,000,000
K007	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	200,000,000
K129	Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas	200,000,000

ANEXO 35. AMPLIACIONES AL RAMO 20 BIENESTAR (pesos)

		MONTO
RAMO: 20 Bienestar		1,754,351,211
S176	Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores	526,351,211
S285	Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente	1,158,000,000

ANEXO 36. AMPLIACIONES AL RAMO 25 PREVISIONES Y APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL, TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (pesos)

		MONTO
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos		
1002	Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) ^{1/}	200,000,000
	700 Unidad de Administración y Finanzas	200,000,000

1/ Se dará prioridad para destinar 200 millones de pesos en la creación de plazas para la atención de la primera infancia.

ANEXO 37. AMPLIACIONES AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA (pesos)

		MONTO
Ramo 11 Educación Pública		153,914,970
U281	Programa Nacional de Reconstrucción	4,512,907
	515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación ^{1/}	149,402,063

1/ Los recursos proceden del programa presupuestario U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación del Ramo 11 Educación Pública.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Dip. Julieta Macías Rábago, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y obsecprancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaría de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Gordero Dávila.- Rúbrica.

INDICE
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Decreto por el que se declara el tercer jueves de noviembre de cada año, como el "Día Nacional de la Filosofía". 2

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio y horario de atención de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Jalisco. 2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 4

Acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de octubre de 2020, por el ajuste de participaciones del segundo cuatrimestre de 2020 y las participaciones del fondo de fiscalización y recaudación del tercer trimestre de 2020. 7

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1722 a la ciudadana Lydia Georgina Méndez Arellano, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Guanajuato como aduana de adscripción. 53

Acuerdo mediante el cual se otorga la patente de Agente Aduanal número 1825 a favor de la ciudadana Yvette Bazán Muzquiz, para ejercer funciones con tal carácter ante la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como aduana de adscripción. 54

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. 55

Oficio mediante el cual se autoriza a Avia Seguros, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros. 57

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Circular por la que se comunica a los Oficiales Mayores y equivalentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la Fiscalía General de la República, las empresas productivas del Estado y alcaldías de la Ciudad de México, así como a los municipios y las entidades federativas, cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal sobre la materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que podrán aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa EMAJA PERFORACIONES, S.A. de C.V. 61

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona física C. Lizbeth Adriana Delgado Fernández. 62

Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa MEDICAL CENTER DISTRIBUCIÓN, S.A. DE C.V. 63



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chihuahua.	64
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Colima.	74
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Durango.	83
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de México.	92

SECRETARÍA DE SALUD

Convenio Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica S200, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua.	102
Programa Institucional 2020-2024 del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.	169
Programa Institucional del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 2020-2024.	191

SECRETARÍA DE CULTURA

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se reciben electrónicamente las solicitudes de renovación de reservas de derechos al uso exclusivo, por causa de fuerza mayor, de manera especial y temporal, ante la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional del Derecho de Autor.	221
--	-----

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Acuerdo por el que se prorroga el diverso por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suspende los términos y plazos a que se refiere el artículo 191, párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Crédito durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.	223
---	-----

PODER JUDICIAL**CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**

Acuerdo General 29/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en el Circuito indicado; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	227
Acuerdo General 30/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	230



DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Acuerdo General 31/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en el Estado y residencia indicados; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 233

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. 236

Tasas de interés interbancarias de equilibrio. 236

Tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario. 236

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Nota aclaratoria al Acuerdo SS/23/2020, relativo a la designación de la Directora General del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 237

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES

Manual de Organización General del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 237

AVISOS

Judiciales y generales. 304

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Acuerdo que tiene por objeto la conformación, desarrollo, modernización y actualización de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, compuesta por las redes de radiocomunicación de Seguridad Pública, similares y/o compatibles, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 1

Aviso de Término de la Emergencia por la presencia de inundación fluvial los días 5 y 6 de noviembre de 2020, para 2 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 4

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 5

SECRETARIA DE BIENESTAR

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2021. 87

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director General Adjunto*

Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Secretaría de Gobernación

Tel. 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de servicios

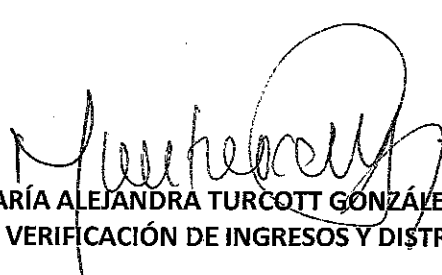
Dirección electrónica: www.dof.gob.mx

Esta edición consta de dos secciones, con un total de 682 páginas

CERTIFICACIÓN: LA SUSCRITA LICENCIADA MARÍA ALEJANDRA TURCOTT GONZÁLEZ, DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 5o. DE LA LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES; 10 FRACCIÓN XIII, 11 FRACCIÓN I, 12 FRACCIONES XXVII Y XXVIII Y 14 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. -----

-----**CERTIFICA**-----

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTANTE EN LOS FOLIOS CONSECUTIVOS DEL 1 AL 96 QUE CORRESPONDEN A LAS PÁGINAS 1 DE LA PRIMERA SECCIÓN Y CONSECUTIVAS DE LA 5 A LA 96, 346, 347 Y 348 DE LA SEGUNDA SECCIÓN, LA CUAL ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA Y ES FIEL REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA DE LA **EDICIÓN MATUTINA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, No. DE EDICIÓN DEL MES: 21, DE FECHA LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**, Y QUE SE ENCUENTRA EN LA HEMEROTECA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021. CONSTE. -----


LIC. MARÍA ALEJANDRA TURCOTT GONZÁLEZ
DIRECTORA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN



REVISÓ:


LIC. RENÉ SERRANO ESTRADA
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL

ELABORÓ:


LIC. SERGIO BARRÓN FERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN

SYN TEXTIO

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion8162_3.pdf
Secuencia: 3542525

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a una copia certificada.

AUTORIDAD CERTIFICADORA

Firmante	Nombre:	JULIO SCHERER IBARRA	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SEIJ591218HDFCBL00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	303030303130303030303030353034353735363536	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/02/2021T02:17:41Z / 17/02/2021T20:17:41-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	13 6a f3 3a 43 3c a7 21 94 07 56 44 db 9c 6b 5f f0 78 18 b7 b4 d3 86 0e b5 a2 26 68 24 47 a9 2b 3d a8 ee 8a cd f1 e3 a8 75 44 f2 50 40 69 26 3c 80 c2 d8 9c f3 30 92 86 3b 24 5b 5e 02 8f c4 71 a4 f0 67 db 0d c3 55 02 d4 22 7a 52 2b 55 d8 66 7a 84 43 85 c5 77 30 49 9b 3e 40 bc d9 7b df 8e f0 9d 17 57 d2 21 47 bc b2 01 1c a3 e4 3e 58 b5 75 16 04 8b 2c 76 8d 14 7b 8c 28 9e a3 e9 56 91 34 27 4d 16 81 93 09 bf d7 7b 32 ae 43 9f de 73 ea de 74 96 8e c3 ce 54 52 c2 f6 25 46 7f 2b e9 c0 d5 25 da ad 74 52 5a 91 eb ae ca fe 79 45 f0 08 75 3f 0e 49 f1 8b bb 5c 76 60 e9 69 8b ac 8e 51 e2 72 48 5d 25 bc d4 4d cf f0 a3 e1 92 83 45 32 26 d8 c8 ee 2a cf 79 eb c6 67 30 bc 10 e7 c7 71 1b 49 16 8c bd d5 7e c1 ca ed 28 81 1b ea 09 dc 15 a4 5c bd 0d 70 35 da 5b b2 14 f3 3d c2 f5			
Validación OSCP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/02/2021T02:18:00Z / 17/02/2021T20:18:00-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OSCP:	Servicio OSCP SAT			
	Emisor del certificado de OSCP:	AUTORIDAD CERTIFICADORA			
	Número de serie del certificado OSCP:	303030303130303030303030353034353735363536			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	18/02/2021T02:17:41Z / 17/02/2021T20:17:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3616692			
	Datos estampillados:	38A2DC61BC9DD35A85095660AC366758F407816F9585A57D54CE491E517384FA			